Índice

colección
biblioteca básica de historia

Dirigida por Luis Alberto Romero

María Dolores Béjar

HISTORIA DEL SIGLO XX

Europa, América, Asia, África y Oceanía





Béjar, María Dolores
Historia del siglo XX: Europa, América, Asia, África y Oceanía.1ª ed.Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015. (Biblioteca básica de historia // Dirigida por Luis Alberto Romero)

Libro digital, EPUB

ISBN 978-987-629-596-3

1. Historia Universal. I. Título

CDD 909

Edición al cuidado de Yamila Sevilla y Teresa Arijón

Realización de mapas: Gonzalo Pires

Diseño de portada: Peter Tjebbes

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: agosto de 2015

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-629-596-3

A Juan Carlos Grosso y Hugo del Campo, dos amigos entrañables cuya compañía sigo extrañando.

Introducción

Los hilos centrales que recorren este libro remiten al afán de ofrecer un panorama básico de los cambios y continuidades que forman el suelo sobre el que se apoya el presente. Esta búsqueda se vio guiada por tres ideas principales. En primer lugar, el reconocimiento de la necesidad de avanzar hacia una historia mundial y, al mismo tiempo, la certidumbre de que sólo ha sido posible delinear algunos trazos centrales en este sentido. En segundo lugar, la convicción de que las dimensiones que conforman la realidad social son muchas (política, económica, social, ideológica, los espacios privados...) y se combinan de modos diversos; este texto se concentra, principalmente, en los aspectos económicos, políticos y las relaciones internacionales. En tercer lugar, la certidumbre de que la historia se procesa a través de la articulación entre lo que nos viene dado, lo que decidimos y hacemos y las irrupciones del azar; debido a su carácter general, aunque no se dejen de lado las acciones de los sujetos, en este trabajo predomina el peso de las estructuras.

Al modo de un mapa que sólo registra las principales rutas, pero no consigna las calles de los distintos barrios, este texto no incluye relatos específicos sobre las diversas experiencias vividas por los seres humanos en el "mundo contemporáneo". El desafío ha sido inmenso, y si lo llevé a cabo es porque mi vocación docente acabó imponiéndose a mis limitaciones para concretar esta tarea.

En la base de este trabajo se entretejen las reiteradas y por momentos angustiosas ocasiones en que me sentí "obligada" a reformular los programas de Historia del Siglo XX, materia de la que soy profesora desde el retorno de la democracia en 1983. Qué texto tan diferente habría escrito en los años ochenta, cuando comencé a dar clases en la Universidad de Tandil. E incluso en la década de 1990, después de la caída del Muro, cuántas cuestiones que hoy pueden ser aprehendidas habrían sido soslayadas.

La realización del proyecto significó tomar algunas decisiones que me gustaría explicitar. La primera y nada sencilla fue la de responder al interrogante: ¿cuándo comienza la historia del mundo actual? En el momento en que nació este proyecto, ya existía una definición con amplio consenso: la Primera Guerra Mundial inauguraba el *siglo XX corto*, según la propuesta del historiador Eric Hobsbawm. Sin embargo, en las aulas siempre había recurrido a la era del imperialismo para explicar el mundo contemporáneo, y con mayor convencimiento a medida que se desplegaba la globalización. Y esto en virtud de que, aunque reconozco el profundo quiebre que significó "la guerra total" en la historia de Occidente, considero que la expansión de las metrópolis capitalistas, con su impacto simultáneamente destructivo y creativo sobre el resto del mundo, ofrece claves insoslayables para una historia mundial.

La segunda decisión remite a la organización del espacio. Al respecto, acabé adoptando agrupamientos "didácticos" sin perder de vista que los grupos de países y regiones propuestos no pueden reconocerse en todos los momentos de la historia contemporánea debido a las hondas transformaciones del mundo actual. Desde el inicio de esta historia hasta su conclusión existen, aunque no con las mismas denominaciones ni los mismos integrantes, dos grandes conjuntos: el de los países capitalistas más o menos estables y desarrollados y el de las sociedades que –ya sea como colonias o como naciones subdesarrolladas, dependientes o del sur– no integran el grupo anterior. Un tercer conjunto, los estados comunistas, tuvo una presencia significativa entre 1917 y 1991, mientras que hoy sólo existen experiencias aisladas, como la de Corea del Norte, o muy ambiguas, como la de China. Como un ejemplo de la dificultad de establecer recortes taxativos, el lector encontrará que, a lo largo de este texto, China recorre las tres categorías mencionadas.

Por otra parte, el análisis de estos tres espacios ha sido organizado en

cinco grandes períodos: la era del imperio y su derrumbe (18731914/1918), la crisis del liberalismo y del capitalismo y la consolidación del régimen soviético (1918-1939/1945), los años dorados en el marco de la Guerra Fría (1945-1968/1973), la crisis del capitalismo y la disolución del bloque soviético en el mundo bipolar (1973/1979-1989), y, entre lo que se derrumba y lo que emerge, la globalización neoliberal (1989/1991-2010).

En cada uno de estos momentos se ha intentado caracterizar los diferentes grupos de países y regiones así como describir sus relaciones. El pasaje de un período a otro se basa en la identificación de una serie de cambios significativos en diferentes dimensiones (principalmente en el plano político, económico, ideológico y en el de las relaciones internacionales). Cabe aclarar que la trayectoria de los países capitalistas desarrollados ha sido tomada como referente principal de esta organización temporal, de ahí que la periodización se vea afectada por cierto grado de ambigüedad y tensiones cuando se incluye el resto del mundo.

En los capítulos 1 y 2 se aborda el primer período; el capítulo 3 recorre el segundo momento; el capítulo 4, dedicado a las relaciones internacionales, atraviesa todos los períodos a partir de 1945; los capítulos 5 y 6 analizan los años dorados, en el primer caso, enfocando el relato en las sociedades capitalistas centrales y en el espacio comunista, y en el segundo, en el Tercer Mundo. Los dos últimos capítulos caracterizan la crisis que se desencadena a partir de la década de 1970: el capítulo 7 se concentra en el mundo capitalista metropolitano y en el bloque soviético; el capítulo 8, en el ex Tercer Mundo. El epílogo, y en parte también los dos capítulos finales, plantean consideraciones básicas sobre el tiempo presente, el de la globalización neoliberal.

Al final del texto se incluyen cuadros y mapas que ayudan a visualizar el reparto de África, Asia y Oceanía en la época del imperialismo y la posterior emergencia de los estados nacionales en virtud de las independencias concretadas a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En mi historia profesional siempre se combinaron mis propios deseos y esfuerzos con el apoyo, la mano tendida, la escucha atenta, la pregunta oportuna de los otros: los colegas y muy principalmente los alumnos, algunos de ellos hoy compañeros de trabajo con quienes comparto proyectos de largo alcance, como el de las Carpetas Docentes de Historia. En el caso de este libro, quiero agradecer muy especialmente a Yamila Sevilla, encargada de la mayor parte de la edición, quien con su dulzura y sabia atención realmente hizo posible que no abandonara el barco en medio del río. A Luis Alberto Romero, mi agradecimiento porque leyó este escrito dedicándole muy generosamente un tiempo difícil.

Este trabajo es resultado de una combinación de factores a los que tengo necesidad de poner palabras. Básicamente se conecta con mi pasión por la docencia, en la que pasé por todas sus instancias: maestra primaria, profesora del nivel medio y de la universidad en cursos de grado y posgrado. Todas me enseñaron, y en todas me cargué de interrogantes que me condujeron a la investigación. Este recorrido me llevó muchísimo tiempo, quizás porque nací mujer en un medio y una época en que se educaba a las mujeres para que fueran expertas amas de casa. Si llegué hasta el doctorado fue centralmente con la ilusión de elaborar contenidos claros, consistentes, que permitieran “armar” las mentes (incidir en los sentimientos también) para avanzar en la formulación de juicios propios y contribuir a una ética que conjugara la creatividad personal con el reconocimiento de que vivimos como seres humanos porque hemos abordado la construcción de sociedades.

Quizás llegué a escribir este libro porque siempre sentí con más fuerza el impulso de comprender la vida social que de intervenir activamente en su trayectoria (una limitación más que una virtud), también porque muy tempranamente me envolvieron tanto el placer del texto (todas las tardes, después de fregar como buena española, mi madre se sentaba a leer novelas) como la vivencia de que la sed de saber y la dicha de compartir preguntas y explicaciones se anudaron

en mí en forma indisociable. Con seguridad disfruté su escritura, porque pude precisar las innumerables preguntas para las que aún no tengo respuesta y, básicamente, porque perdí el temor a compartir por escrito lo que ronda mi cabeza.

Sigo caminando, como docente y ciudadana, con más ilusiones que desencantos, acaso porque no puedo ni quiero olvidar, y he decidido recordar lo que me calienta el alma.

1. La era del imperialismo

Un amplio consenso reconoce que la Primera Guerra Mundial fue el hito que marcó el fin del largo siglo XIX –el del avance y la consolidación de la sociedad burguesa y el capitalismo liberal en Occidente– y dio comienzo al siglo XX: un período signado por la guerra total, las crisis capitalistas, el nazifascismo, el surgimiento y el derrumbe del socialismo real, los estados terroristas y la creciente ingobernabilidad del capital asociada a la exclusión social. Dado que los grandes cambios históricos se articulan con continuidades significativas, resulta imprescindible revisar algunos procesos centrales del último cuarto del siglo XIX para comprender mejor el siglo XX. En primer lugar, la transformación del capitalismo en el marco de los desafíos planteados por la crisis de las décadas de 1870 y 1880 y el avance del capitalismo global con la expansión imperialista. En segundo lugar, la configuración de un mundo en el que las distintas regiones fueron más interdependientes entre sí, pero donde se recortaron cuatro grandes espacios: los centros capitalistas centrales; los imperios multinacionales del este europeo y parte de Asia; el mundo colonial junto con el políticamente soberano pero económicamente dependiente integrado por la mayor parte de América Central, el Caribe y América del Sur; y los antiguos imperios en crisis –persa, chino y otomano–. Y, en tercer lugar, la extendida aspiración hacia la democracia, asociada al desigual avance de la democratización en el marco del desgaste del liberalismo, socavado por tres fuerzas divergentes: la de quienes abandonaron los principios pacifistas liberales para apoyar la expansión imperialista; la del movimiento obrero que, al resistirse al desempleo, cuestionó el libre movimiento de los capitales; y la de una nueva derecha radical antiliberal y nacionalista, que politizó las diferencias étnicas y religiosas y fue capaz de movilizar a diversas capas sociales.

Hacia una economía global

Hacia fines del siglo XIX, Alemania, Francia, los Estados Unidos, Bélgica, Escandinavia, Holanda, el norte de Italia, Rusia y Japón ya se habían incorporado a la primera ola de industrialización iniciada en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Esta nueva situación produjo cambios importantes: la base geográfica del sector industrial se amplió, su organización sufrió modificaciones claves, tanto en el tipo y la modalidad de las inversiones de capital como en el uso de la fuerza de trabajo, y se alteraron las relaciones de fuerza entre los principales estados. Gran Bretaña perdió protagonismo y Alemania y los Estados Unidos se convirtieron en los principales centros industriales del mundo. En 1870, la producción de acero de Gran Bretaña era mayor que la de los Estados Unidos y Alemania en conjunto; en 1913, estos dos países producían seis veces más acero que el Reino Unido.

El crecimiento económico de Rusia y Japón fue espectacular. Ambos países iniciaron su proceso de rápida industrialización partiendo de economías agrarias atrasadas, casi feudales, y sus gobiernos desempeñaron un papel decisivo promoviendo inversiones. En el caso del imperio zarista, las industrias más modernas coexistieron con una agricultura premoderna. En Japón, en cambio, el nuevo rumbo fue más equilibrado.

Los países de rápida industrialización tuvieron la ventaja de llegar más tarde y así saltear etapas que había recorrido Gran Bretaña. Alemania, los Estados Unidos y otros países de desarrollo tardío pudieron arrancar con enormes fábricas que elaboraban los productos más recientemente inventados con las tecnologías de avanzada. En el sur de Europa el proceso de industrialización fue menos integral y modificó más fragmentariamente las tramas sociales.

Así, a pesar de que la industrialización se propagó a ritmos diferentes, entre 1880 y 1914 las economías nacionales fueron insertándose poco a poco en la economía mundial y el mercado global comenzó a influir sobre el rumbo económico de las naciones en un grado desconocido hasta entonces: el sistema de comercio multilateral estimuló un notable aumento de la productividad y, al mismo tiempo, profundizó la brecha entre los países industrializados y el resto de las vastas regiones del mundo que se incorporaban al mercado mundial.

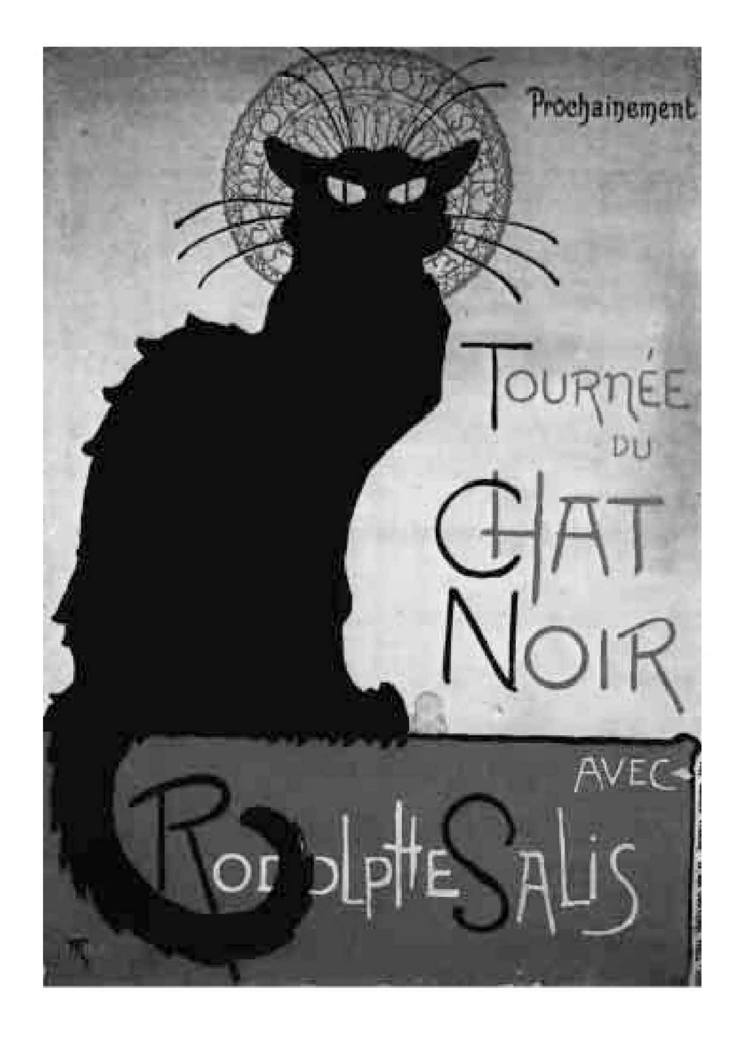
En la era del imperialismo, la economía atravesó dos períodos: la Larga Depresión (1873-1895) y, a partir de la recuperación hasta la Gran Guerra, los años dorados, la llamada *belle époque*. La crisis que inició la Larga Depresión había derivado, en gran medida, de los éxitos del capitalismo liberal. Desde mediados del siglo XIX, la expansión industrial había dado lugar a la intensificación de la competencia, tanto entre las industrias cuya producción crecía más rápidamente que el mercado de consumo, como entre los estados cuyo prestigio y poder habían quedado fuertemente asociados a la suerte de su desarrollo. El crecimiento económico iba cada vez más de la mano de la lucha económica que separaba a los fuertes de los débiles, y favorecía a los nuevos centros capitalistas a expensas de los viejos. El optimismo sobre el progreso indefinido dio paso a la incertidumbre derivada de los contundentes cambios, que evidenciaban que ya nadie tenía una posición asegurada en el mundo.

La Larga Depresión no consistió en un colapso económico sino en un declive continuo y gradual de los precios mundiales. La competencia inducía a bajarlos, lo que provocaba una merma en las ganancias. Para contrarrestar este obstáculo a la rentabilidad, se desarrollaron varias estrategias: barreras aduaneras para frenar las importaciones, concentración de capitales para eliminar a los productores más débiles, e incremento de la productividad de la fuerza laboral. En los Estados Unidos, por ejemplo, la gestión científica del trabajo, el taylorismo, no sólo permitió producir más en la misma cantidad de tiempo sino que debilitó la capacidad negociadora de los sindicatos y posibilitó el uso de una fuerza laboral no calificada y no sindicalizada. Otra respuesta a la crisis fue ocupar territorios extraeuropeos en busca de mercados, materias primas y fuentes de inversión; en otras palabras, el imperialismo.

Desde mediados de la década de 1890 comenzaron a subir los precios –y con ellos, los beneficios– gracias al mercado de consumo en

expansión formado por las poblaciones urbanas de las principales potencias industriales y las regiones en vías de industrialización. La belle époque fue una etapa de crecimiento económico e integración; fueron los años dorados de un capitalismo cada vez más global que se derrumbó en el período de entreguerras para resurgir a fines del siglo XX.

Entre 1896 y 1914, las economías nacionales se integraron al mercado mundial a través del libre comercio, la circulación de los capitales y la movilidad de la fuerza laboral en virtud de las migraciones, principalmente desde Europa hacia América. El comercio mundial prácticamente se duplicó entre 1896 y 1913, correspondiéndole al imperio británico casi una tercera parte. Hubo protección a la industria incipiente, pero en general el mercado de productos agrícolas e insumos intermedios siguió siendo libre y fluido.



Primer cabaret artístico de Montmartre fundado por Rodolphe Salis en noviembre de 1881. Su éxito se debió en parte a la inclusión innovadora de un teatro de sombras que proyectaba siluetas de cinc iluminadas por luces de colores sobre una pequeña pantalla, acompañadas por la música del piano instalado en el café.

Las inversiones internacionales aumentaron rápidamente con los capitales británicos a la cabeza y su afán de tender líneas férreas para abaratar el traslado de alimentos y materias primas requeridas por el

"taller del mundo". Las ganancias provenientes de inversiones, comercio y fletes permitieron saldar el déficit comercial británico, expresión de su declive industrial. Los principales receptores fueron los países de rápido desarrollo industrial, los de reciente colonización europea y algunas colonias claves: los Estados Unidos, Australia, la Argentina, Sudáfrica y la India.

Acompañando esta vasta circulación de bienes y capitales, millones de personas se trasladaron a las regiones más pujantes de América desde las zonas más pobres de Europa y Asia. Así, en la primera década del siglo XX los inmigrantes representaban significativos porcentajes de las poblaciones de Canadá, los Estados Unidos y la Argentina.

Gran Bretaña fue el centro organizador de esta economía cada vez más global. Aunque su supremacía industrial había menguado, sus servicios como transportista, agente de seguros e intermediario financiero se volvieron indispensables. Principal potencia colonial, su papel hegemónico estaba basado en la influencia dominante de sus instituciones comerciales y financieras y en la concordancia entre su desenvolvimiento económico interno y la expansión del mercado mundial.

Los avances en el transporte y las comunicaciones –el ferrocarril, las turbinas de vapor, la telegrafía a escala mundial y el teléfono– posibilitaron la consolidación del mercado mundial, que se concretó a través de la especialización. Europa inundó el mundo con sus manufacturas y fue a su vez receptora de productos agrícolas y materias primas provenientes de sus colonias o de los estados soberanos no industrializados, como los de América Latina.

El comercio internacional se rigió principalmente por el patrón oro, es decir, la libre conversión de las monedas locales al oro. Este patrón aseguró que los intercambios comerciales y los movimientos de capital tuvieran un referente monetario seguro y estable. Su adopción facilitaba el acceso de los gobiernos nacionales al capital y a los mercados exteriores, pero al mismo tiempo les impidió intervenir en la regulación del ciclo económico. Ya no podía devaluarse la moneda para mejorar la competitividad de los productos nacionales, ni tampoco imprimir dinero o reducir los tipos de interés para estimular la inversión. La economía nacional quedaba así atada a la preservación de una moneda confiable.

En Gran Bretaña, los grupos financieros y comerciales impusieron su visión liberal del comercio a costa de los intereses proteccionistas de los industriales. La mayoría de los países exportadores de productos agrícolas y mineros oscilaron entre la aceptación y el abandono de este orden monetario y, cuando los precios de sus productos bajaban en el mercado mundial, dejaba a un lado el patrón oro para poder devaluar la moneda. Esta decisión tenía sus costos, básicamente la reticencia de los grandes capitales a seguir invirtiendo allí o a conceder préstamos. En los Estados Unidos, país que se mantuvo fiel al patrón sostenido por los grandes banqueros, esta opción fue resistida por los agricultores, ganaderos y mineros sujetos a la competencia desigual de los países con monedas devaluadas.

En este capitalismo *laissez-faire* –positivo para el crecimiento económico global– hubo algunos ganadores y muchos perdedores. Se vieron beneficiados, por ejemplo, los banqueros londinenses, los fabricantes alemanes, los ganaderos argentinos y los productores de arroz indochinos, unidos por el hecho de haberse dedicado a una actividad altamente competitiva en el mercado mundial y abiertamente opuestos a la intervención del estado. Pero fueron sacrificados los que no podían competir en el mercado internacional, quienes a su vez comenzaron a presionar a los gobiernos para que aliviasen su situación. Los agricultores de los países industriales y los industriales de los países agrícolas querían protección. En cada país, unos y otros llegaron a distintas formas de transacción.

El movimiento obrero se mostró ambiguo en ese debate. El librecambio significaba el abaratamiento de los alimentos, pero también, eventualmente, el desempleo y la caída salarial. En este sentido, el patrón oro era un duro corsé para los trabajadores, puesto que sujetaba la producción nacional a las oscilaciones del mercado mundial sin que los gobiernos pudieran intervenir en la reactivación industrial devaluando la moneda o manipulando el gasto público.

Los escenarios políticos

En el último cuarto del siglo XIX los estados europeos presentaban fuertes contrastes. Las diferencias se encontraban, en parte, en la sociedad, en la economía, en la industrialización y su impacto sobre el orden agrario tradicional. Pero también se debían al tipo de regímenes políticos y a las tensiones surgidas entre la identidad nacional asumida por los estados y la presencia de otras identidades que aspiraban a ese estatus nacional y estatal.

Sobre la base de estos criterios, es posible distinguir dos grandes espacios: el Este europeo y Europa Occidental. En el primero se recortaban y entrelazaban tres unidades. Una incluía los grandes imperios multinacionales: el de los Habsburgo en Austria-Hungría y el de los Romanov en Rusia. La segunda era el ex reino de Polonia, que desde el siglo XVIII había quedado repartido entre Austria, Prusia y Rusia. Por último, la convulsionada zona de los Balcanes. En el norte de Europa Occidental se encontraban los principales centros industriales y los estados nacionales más asentados: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Escandinavia y Alemania. En el sur, España y Portugal y el reciente estado griego tenían un desarrollo industrial muy fragmentario y una fuerte persistencia del antiguo régimen, mientras que Italia ocupaba una posición intermedia en virtud de la honda fractura entre un norte industrial con rasgos similares a los de las principales potencias y un sur agrario semejante al de la Península Ibérica.

En la era del imperialismo, los cambios económicos se entrelazaron con las transformaciones sociales y la reorganización de la política. La segunda oleada de industrialización hizo más complejo el escenario social y dio paso a nuevas batallas en el campo de las ideas. El avance del capitalismo fortaleció el movimiento obrero, pero también estimuló el crecimiento y la diversificación de los sectores medios: los asalariados del sector servicios, la burocracia estatal y el personal directivo de las grandes empresas. También modificó la fisonomía de la burguesía: el burgués ahorrativo e inversor que dirigía su propia empresa perdió terreno frente a una alta burguesía que en su estilo de vida buscaba acercarse a la aristocracia.

En política, hasta el último cuarto del siglo XIX los conservadores fueron los principales rivales de los liberales. En los países industrializados, la burguesía ascendente enfrentó con distinta fuerza y convicción al orden monárquico y la aristocracia. El proyecto liberal incluía la defensa de los derechos humanos y civiles, la creación de un sistema constitucional que regulara las funciones del gobierno y las instituciones, que garantizara la libertad individual y redujera al mínimo la intervención del estado en la economía. Los liberales condicionaron el avance hacia la democracia: aquellos que no tenían educación y carecían de bienes que defender debían ser guiados por los ilustrados y los promotores del crecimiento económico, ya que sólo ellos estaban capacitados para adecuar las políticas del estado a las leyes naturales del mercado. Mientras socavaban los principios y prácticas del antiguo régimen, los liberales levantaron una serie de barreras económicas y culturales para impedir el voto de las mayorías y asegurar que los asuntos públicos quedasen en manos de los notables.

La democracia de masas

Las masas tienen opiniones que les han sido impuestas, pero nunca profieren opiniones razonadas. [...] La opinión y los votos de los electores se hallan en las manos de los comités electorales, cuyos espíritus conductores son, por regla, los dueños de tabernas, teniendo estas personas gran influencia sobre los obreros a quienes les otorgan créditos. [...] Ejercer una influencia sobre estos comités no es difícil, siempre y cuando el candidato sea, en sí, aceptable y posea adecuados recursos financieros. [...] Sin

duda alguna, la debilidad del sufragio universal es demasiado obvia como para pasarla por alto. No puede negarse que la civilización ha sido la obra de una pequeña minoría de inteligencias superiores constituyendo la cúspide de una pirámide cuyas gradas, ensanchándose en la misma proporción en que merma el poder mental, representan a las masas de una nación. La grandeza de una nación seguramente no puede depender de los votos emitidos por elementos inferiores que detentan solamente la fuerza del número. Indudable es, también, que los votos emitidos por las masas con frecuencia son muy peligrosos [...].

Sin embargo, por más excelentes que sean estas objeciones en teoría, en la práctica pierden toda fuerza, como se admitirá si se recuerda la invencible fuerza que tienen las ideas convertidas en dogmas. El dogma de la soberanía de las masas es tan poco defendible desde el punto de vista filosófico como los dogmas religiosos de la Edad Media, pero en la actualidad goza del mismo poder absoluto que aquellos gozaron en el pasado. [...] En consecuencia, se debe adoptar para con él la misma posición que la pertinente frente a todos los dogmas religiosos. Sólo el tiempo puede actuar sobre ellos.

Gustave Le Bon, “Las masas electorales”, *Psicología de las masas*, tercera parte, capítulo 4. Primera edición francesa, 1895; versión disponible en: www.antorcha.net, octubre de 2006.

No obstante, el avance de la industrialización asociado con la decadencia de la economía agraria tradicional modificó profundamente la trama de las relaciones sociales: el debilitamiento de las aristocracias terratenientes, el fortalecimiento de la burguesía y la creciente gravitación de los sectores medios y la clase obrera gestaron el terreno propicio para el avance de la democracia. En este proceso se combinaron las reformas electorales que incrementaron significativamente el número de votantes, la aparición de nuevos actores, los partidos políticos y la introducción de reformas sociales desde el estado.

Con la ampliación del cuerpo electoral, los acuerdos entre notables cedieron paso a las intervenciones de los partidos políticos, que a su vez se hicieron cargo de una variada gama de tareas. La obtención de resultados electorales que legitimasen el ingreso al gobierno de los dirigentes partidarios requería organizaciones estables y consistentes, capaces tanto de representar los intereses de los electores como de construir nuevas identidades políticas. Los partidos de alcance nacional no sólo organizaban campañas electorales y defendían determinados intereses, sino que también intervenían en la construcción de cosmovisiones que competían a la hora de determinar cómo satisfacer el bien común. La política de la democracia estaba asociada a la creciente gravitación de los elementos –lengua, raza, religión, tierra, pasado común� que se proponían como propios de cada nacionalidad. La adhesión que despertaban contribuía a la cohesión entre los distintos grupos sociales de una misma nacionalidad y, simultáneamente, los distinguía de los otros, los que no compartían dichos valores y atributos.

Ante la creciente movilización de los sectores populares y el temor a la revolución social, los gobiernos promovieron reformas sociales para forjar un vínculo de tipo paternalista con los sectores más débiles del nuevo electorado. En la década de 1880, el conservador canciller de Prusia, Otto Bismarck, fue el primero en poner en marcha un programa que incluía seguros por enfermedad, vejez y accidentes de trabajo.

Pero antes de poder completar la transformación del orden conservador, el proyecto liberal y el orden burgués sufrieron los

embates de dos nuevos contendientes: la clase obrera y la nueva derecha radical. La primera no sólo creció numéricamente. Las experiencias compartidas en el lugar de trabajo, en los barrios obreros, en los espacios de recreación o públicos, así como el desarrollo de la organización sindical o la interpelación política de los socialistas impulsaron la construcción de un nosotros, una identidad como clase obrera. En la década de 1890, con el avance de los partidos socialistas, que confluyeron en la Segunda Internacional a partir de 1889, el movimiento obrero se afianzó y generalizó. Sin embargo, hubo marcadas diferencias nacionales, tanto en el peso y el grado de cohesión de las organizaciones sindicales como en el vínculo entre los sindicatos y los partidos políticos. Estas divergencias –si bien remiten a las batallas de ideas entre socialistas, marxistas, anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios– básicamente fueron producto de las diferentes experiencias laborales y políticas.

El cuestionamiento de la nueva derecha al liberalismo fue más contundente que el del socialismo: mientras este rechazaba el capitalismo adhiriendo a los principios básicos de la revolución burguesa –la fe en la razón y el progreso de la humanidad–, la derecha radical desarrolló una política novedosa que desechaba la lógica de la argumentación y apelaba a la emocionalidad de las masas, recogiendo las quejas e incertidumbres suscitadas por los cambios sociales y el impacto de la crisis económica. Los nuevos movimientos nacionalistas tuvieron especial acogida entre los sectores medios, pero también ganaron apoyo entre los intelectuales, los jóvenes y algunos sectores de la clase obrera. En la era de la política de masas, la crisis económica dio cabida a la demagogia y la acción directa para presionar a los gobiernos y al mismo tiempo impugnar a los políticos y los procedimientos parlamentarios. Desde la perspectiva de la derecha radical, la democracia liberal era incapaz de defender las glorias de la nación y era la responsable de las injusticias económicas y sociales que producía el capitalismo.

En Francia, en el imperio de los Habsburgo y en Alemania, la nueva derecha radical combinó la exaltación del nacionalismo con un exacerbado antisemitismo. En Italia, en cambio, los nacionalistas defendieron la necesidad de apropiarse de nuevos territorios para dejar de ser una “nación proletaria”.

En la década de 1890, cuando Francia quedó partida en dos en torno al caso Dreyfus, fue evidente el fuerte arraigo de un nacionalismo y un antisemitismo extremos en el seno de su sociedad. En 1894, la condena por el delito de traición del capitán francés de origen judío Alfred Dreyfus conmocionó a la opinión pública, desató una serie de crisis políticas y marcó un hito en la historia del antisemitismo.

El caso Dreyfus y el origen del sionismo



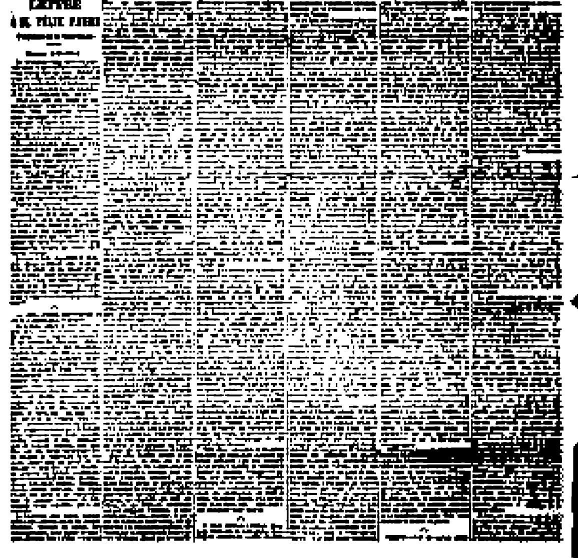
L'AURORE

Littéraire, Artistique, Sociale

J'Accuse...!

LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Par ÉMILE ZOLA



En octubre de 1894, el servicio de contraespionaje francés encontró un texto manuscrito en el que se proponía la venta de información estratégica al agregado militar de la embajada alemana. Un alto oficial reconoció la letra del capitán Dreyfus, quien fue condenado a cadena perpetua en la remota Isla del Diablo en la Guayana francesa.
En virtud de las irregularidades del juicio y la aparición de nuevas pruebas, en 1898 el caso Dreyfus volvió a ser objeto de debate público. El 13 enero de ese año, el periódico *L'Aurore*, dirigido por el republicano George Clemenceau, publicó el *Yo acuso*, la carta abierta al presidente de Francia, Félix Faure, firmada por el prestigioso novelista francés Emile Zola con el *solo deseo de que la luz se haga*.
A Theodor Herzl, judío nacido en Budapest y hombre de letras de formación liberal, la contundencia del antisemitismo en el país que promoviera la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano lo llevó a promover la constitución de un estado que acogiera a los judíos dispersos por el mundo para garantizar su libertad y seguridad. En 1896 publicó *El Estado de los judíos* y, al año siguiente, el Primer Congreso Sionista reunido en Basilea aprobó el proyecto para la creación del futuro estado de Israel en Palestina.

Charles Maurras, al frente de Acción Francesa, se presentó como un rabioso antiparlamentario, antirrepublicano y, por sobre todo, antisemita. No dudó en privilegiar la defensa de la nación, aun cuando implicara adulterar el juicio al oficial francés-judío. Los maurrasianos reivindicaban la monarquía y el respeto de las jerarquías sociales. Otros grupos, menos atados al tradicionalismo, se atrevieron en cambio a cuestionar el orden social. La Liga de los Patriotas prometió la regulación económica para ayudar a los pequeños comerciantes y artesanos y apoyó la organización sindical de los obreros. Durante este período comenzó a circular en Francia el concepto de nacionalsocialismo.

En Austria, el aristócrata George von Schönerer combinó la exigencia de que su país fuera parte de Alemania con declaraciones brutalmente antisemitas. El más pragmático socialcristiano Karl Lueger, quien también apelaba al nacionalismo, la justicia social y el antisemitismo, fue elegido alcalde de Viena en 1897.

Las ligas nacionalistas surgieron en Alemania en la década de 1880 como instrumento de presión a favor de una política imperialista que,

a diferencia de Bismarck, el emperador Guillermo II propició ampliamente. En el plano interno fueron decididamente antisocialistas y antisemitas y fomentaron la eliminación de las culturas minoritarias con la nada secreta ambición de que "la superioridad racial de los alemanes" quedara consagrada mediante su dominación sobre Europa. La Liga Panalemana contó con la presencia del entonces joven Alfred Hugenberg, y la más significativa Liga de la Marina recibió el aporte económico del fabricante de armas Gustav Krupp. Ambos se vincularon con Hitler después de la guerra.

Excepto el Partido Socialcristiano vienés, ninguno de estos grupos llegó al gobierno; se movieron en los márgenes combinando política popular, antiliberalismo, antisocialismo y antisemitismo. Si bien el fascismo no fue la proyección lineal de ninguna de estas fuerzas, la rebelión intelectual y política de fines del siglo XIX contra la Ilustración abonó el terreno donde arraigó el fascismo después del trauma de la Primera Guerra Mundial.

La iglesia católica, por su parte, rechazó de plano el liberalismo y el "mundo moderno" en la encíclica *Quanta Cura* (1864) del papa Pío IV. En la década de 1890, ante el avance de los cambios sociales y políticos, el papado decidió intervenir en el curso del nuevo orden. La encíclica *Rerum Novarum* de León XIII, sobre la condición de los obreros (1891), alentó la gestación del *catolicismo social*. La propuesta de atender los justos reclamos de los trabajadores tuvo como corolario la creación de partidos políticos y sindicatos católicos, organizados con carácter laico.

La iglesia propuso una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Los capitalistas debían entender que la familia obrera tenía que desarrollarse en condiciones dignas. Los obreros no debían seguir a quienes conducían al caos social con la consigna de la abolición de la propiedad privada. Los sindicatos católicos lograron mayor arraigo en las ciudades pequeñas y en el campo que en los grandes enclaves industriales urbanos, donde tuvieron dificultades para competir con los socialistas.

En la era del imperialismo, Europa dejó de ser el centro privilegiado del desarrollo económico y dos nuevas potencias –los Estados Unidos y Japón– emergieron como competidoras.

En 1880 los Estados Unidos todavía eran un país mayoritariamente agrario, pero en 1914 ya se habían convertido en el primer centro industrial del mundo. El país ofrecía condiciones geográficas y sociales óptimas para el desarrollo capitalista: un territorio de escala continental con variedad de recursos y un vasto mercado, protegidos por dos océanos. La frontera abierta hacia el oeste favoreció el crecimiento del mercado interno y el surgimiento de propietarios rurales que afianzaron una economía agraria vinculada al mercado.

Al mismo tiempo, la sociedad de inmigrantes-colonos depositó su confianza en los principios de la democracia y el ascenso social. Salvo en la región del sur, esclavista, la ausencia de un antiguo régimen posibilitó el temprano arraigo de los ideales democráticos. Las tensiones entre el sur y el norte desembocaron en una sangrienta guerra civil: la Guerra de Secesión (1861-1865). El triunfo del norte y su avance hacia el oeste permitieron triplicar la superficie cultivada y afianzar un ámbito agrario muy mecanizado y de alta productividad. El desarrollo de los transportes –canales fluviales y ferrocarriles– redujo sus costos y amplió el mercado interno. En la década de 1880, los Estados Unidos eran el primer productor agrícola del mundo. Además, se colocaron a la cabeza de la segunda oleada industrializadora. En 1913, la producción manufacturera estadounidense equivalía a la de Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. En el terreno industrial se impuso la gran unidad productiva integrada verticalmente: la U. S. Steel Corporation, creada en 1901 por la fusión de las fábricas de Carnegie con otras siderurgias, fue la primera compañía mundial del sector; la Standard Oil Co., fundada en 1879 por John Rockefeller, controlaba la casi totalidad del petróleo producido en los Estados Unidos; en 1882, Thomas Alva Edison construyó la primera central eléctrica en Nueva York; y en 1903 Henry Ford creó la Ford Motor Company, la empresa automovilística líder diez años después, gracias al éxito del Ford T.

El avance de la producción industrial debió afrontar el problema de

la escasez de mano de obra, especialmente la calificada. Por otra parte, contaba a su favor con la demanda de productos estandarizados por parte de los propietarios rurales. En este marco, Frederick Taylor desarrolló la gestión científica del trabajo. El taylorismo permitía incrementar la productividad sustituyendo al obrero calificado por un trabajador semicalificado, que sólo tenía que repetir algunas tareas rutinarias, impuestas por la máquina. En este contexto, la producción en serie se impuso tempranamente en los Estados Unidos.

A diferencia de lo ocurrido en Europa, la intensa combatividad de los trabajadores estadounidenses no condujo a la consolidación de partidos obreros, en parte por la heterogeneidad cultural de los trabajadores, que dificultaba la formación de una identidad obrera, en parte por el impacto de las sucesivas reorganizaciones del sistema productivo, y también por el espectacular crecimiento económico y las sólidas convicciones forjadas en torno a la democracia liberal.



Henry Ford (1863-1947), hijo de granjeros irlandeses emigrados en 1847, abandonó muy joven su casa y se dirigió a Detroit con intención de trabajar como mecánico. En los años noventa ingresó en la Sociedad de Electricidad Edison, donde construyó sus dos primeros automóviles. En 1903 fundó su propia compañía, la Ford Motor Company, y cinco años después lanzó la primera serie del Ford-T a un precio bastante bajo. El éxito fue fulminante: en 1916 se vendieron quinientas mil unidades, dos millones en 1923 y, hacia 1927, momento en que dejó de producirse, se había alcanzado la cantidad de quince millones.

En el escenario político, las diferencias entre los dos grandes partidos nacionales, el Demócrata y el Republicano, eran principalmente de carácter étnico y religioso o bien derivadas de la guerra civil. Los republicanos prevalecieron entre los protestantes del norte, mientras que los demócratas se afianzaron en el sur y entre la población inmigrante de las grandes ciudades norteñas. El predominio de estos

partidos sólo fue cuestionado en 1890. El Partido Populista recogió las reivindicaciones de los granjeros afectados por el patrón oro, que les impedía competir en el mercado internacional. La consigna de los populistas contra el patrón oro perdió fuerza al calor de la recuperación de los precios agrícolas en la primera década del nuevo siglo.

En la era del imperialismo, los Estados Unidos no se lanzaron a fundar colonias como Europa y Japón. Prácticamente no tuvieron presencia en África, y en Asia eligieron propiciar una política de puertas abiertas que favorecía el libre movimiento de capitales y mercaderías. Su principal preocupación frente al expansionismo japonés fue preservar la integridad territorial de China para mantener una relación equilibrada entre ambas potencias. Pero se preocuparon por los océanos, que eran sus fronteras. En el Pacífico ocuparon las islas Hawái, donde instalaron la estación carbonífera y base naval de Pearl Harbor, y arrebataron el archipiélago de Filipinas a España. En el Caribe, terminaron ocupando Cuba y anexándose Puerto Rico, que arrebataron a España.

El imperio nipón permaneció aislado hasta mediados del siglo XIX. Bajo el régimen Tokugawa (1603-1867) prevaleció un feudalismo basado en un rígido sistema de castas y en la concentración del poder en un jefe militar llamado sogún. Cuando en 1853 las fuerzas navales estadounidenses obligaron a Japón a permitir el libre comercio, la elite aprovechó las tensiones reinantes en el seno de la sociedad y puso fin al sogunato para iniciar una profunda transformación.

La revolución Meiji se presentó como la restauración del antiguo poder imperial. Pero, pese a las apariencias formales de legitimidad, fue un golpe de estado organizado por grupos periféricos de la elite descontentos, que utilizaron la antigua institución del trono como pantalla para aplastar el sistema feudal y modernizar el estado. Durante su dominio –aproximadamente desde 1868 hasta principios de la década de 1920–, los dirigentes Meiji buscaron situarse ventajosamente en el orden global financiero, por entonces centrado en la City londinense, colocando en el Banco de Inglaterra el oro acumulado, en su mayor parte extraído a China en carácter de reparación después de la guerra de 1895. Esta decisión propició la firma de la alianza anglojaponesa en 1902, que selló la admisión de Japón en el club de naciones que defendían el orden global existente.

En poco más de treinta años, Japón logró convertirse en un importante pilar de la hegemonía británica en Asia oriental y en una potencia imperialista por derecho propio. A la victoria sobre China se sumó el triunfo en la guerra contra Rusia, en 1904-1905. Sin embargo, al margen de las instituciones parlamentarias copiadas y de la ficción de la legitimación imperial, los hombres que tomaron el poder en 1868 siguieron dirigiendo el país como una oligarquía colectiva que controlaba las grandes burocracias al servicio del estado nacional.

La crisis de los antiguos imperios

La expansión de Occidente trastocó radicalmente el escenario mundial, no sólo en virtud del reparto colonial de la mayor parte de Asia y África, sino también a través de su impacto sobre tres antiguos imperios. Uno fue el safaví en Persia. El segundo, el otomano, cuya base estaba en Asia Menor, y que en su período de máxima expansión abarcó Oriente Medio, el norte de África y la zona de los Balcanes. Finalmente, el chino, gobernado por la dinastía manchú de los Qing. Los dos primeros formaban parte del mundo islámico, pero mientras los turcos otomanos fueron fieles a la doctrina sunita, los soberanos safavíes impusieron el chiismo como la religión del estado.

Hasta que en el siglo XIX Occidente introdujo formas económicas capitalistas, estos imperios dependían económicamente de la producción agraria, cuyos rendimientos decrecientes imponían un límite a su capacidad de expansión. En los tres prevalecía el espíritu conservador que caracterizó a todas las sociedades premodernas de la época, incluida la europea.

Chiitas y sunitas

Los chiitas son una de las corrientes internas del islam. Heterodoxa y minoritaria, ha sido marginada y goza de especial influencia entre las clases populares. El chiismo apareció en el año 656, sostenido por Alí, primo y yerno del profeta Mahoma, que se opuso a la línea sucesoria sostenida en La Meca. Posteriormente, el chiismo se identificó con los súbditos no árabes del Califato, contra el ascendiente árabe. La más importante de esas comunidades fue la de los iraníes en las provincias orientales del imperio árabe. Los chiitas constituyen la mayoría musulmana en Irán, Irak, Yemen, Bahréin y Omán, y existen comunidades chiitas de peso en la India, Pakistán, Afganistán, Líbano y Kuwait.

Las diferencias entre chiitas y sunitas residen en los procedimientos de interpretación de los textos sagrados y en los vínculos entre los eruditos y la comunidad musulmana. El islam sunita se rige por las interpretaciones que los ulemas (teólogos y eruditos) hacen de las fuentes sagradas (el Corán y la Suna), a partir de su estudio y del conocimiento del *hadit* (costumbre). El chiismo otorga mucha importancia a los conocimientos transmitidos oralmente por los imanes, autoridad religiosa mediadora entre la persona y Dios. Entre los imanes, los denominados ayatolás (signo de Dios) detentan una autoridad especial para la interpretación de la Sharia. La opresión y los ataques a que quedaron sujetos como minoría religiosa constituyen, para algunos analistas, un factor de peso para explicar el papel destacado de la idea de *martirio* que prevaleció en este grupo.

Ninguno de los imperios perdió su independencia política, pero su desventaja económica, militar y tecnológica los colocó en una posición dependiente de Occidente. Esto agravó su crisis interna, derivada en parte del escaso rendimiento del sector agrario, la base impositiva que hubiera permitido un crecimiento y renovación, y en parte a la resistencia de los sectores tradicionales, reacios a los cambios que afectaran sus privilegios.

Persia asumió una nueva importancia estratégica en la primera mitad del siglo XIX al calor de los juegos de poder entre Rusia y el Reino Unido. Mientras Londres pretendía controlar el golfo Pérsico y las regiones del sudeste persa para proteger la India colonial, Moscú trataba de establecer una base en el norte para resguardar su expansión en Asia Central. En el marco de esta competencia, ninguna intentó hacer de Persia una colonia, pero ambas procuraron obtener privilegios que colocaron a los persas bajo su dependencia. Rusia y el Reino Unido impusieron las "capitulaciones": privilegios especiales, rebajas de aranceles e inmunidad frente a las leyes locales para los comerciantes rusos y británicos. Esto afectó a los locales, quienes encontraron en los ulemas, los sabios religiosos chiitas, un aliado de peso, al que el gobierno imperial no podía someter.

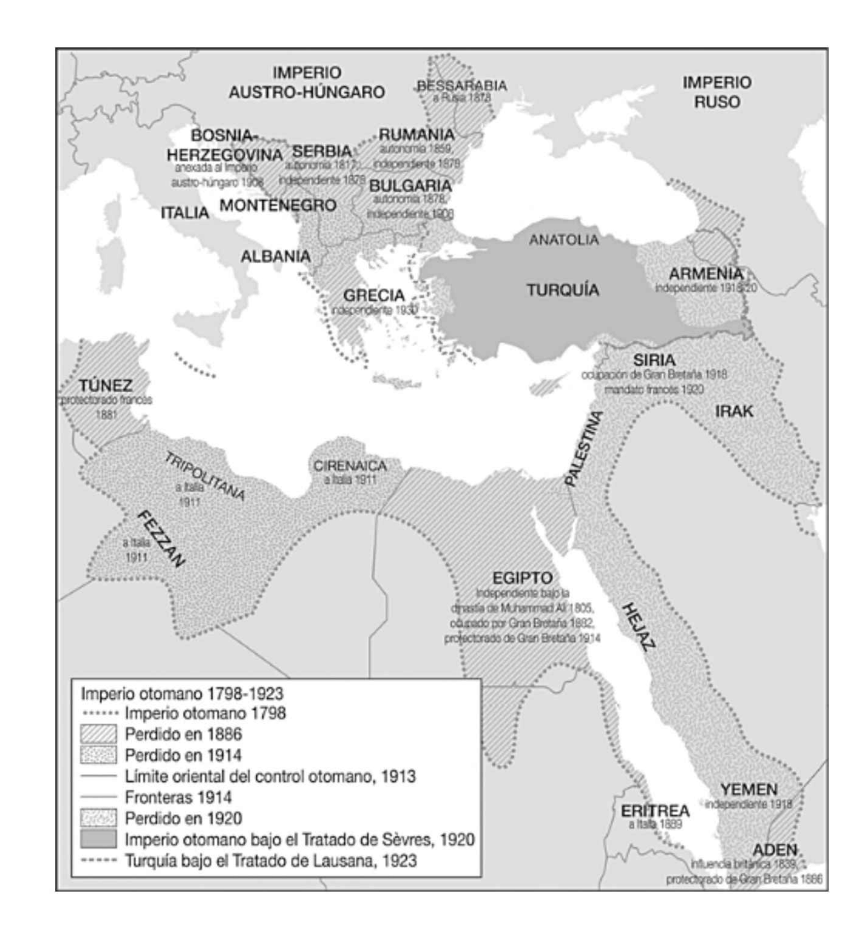
Hasta los primeros años del siglo XIX el clero se mantuvo apartado de la política. Pero los cambios introducidos por la relación con Occidente lo llevaron a participar en una oposición más consistente y, al mismo tiempo, más dispuesta a la renovación del orden imperial. Así ocurrió en la "protesta del tabaco" (1891-1892), que fue un boicot a la concesión hecha por el sah a una compañía inglesa del monopolio y venta del tabaco; las huelgas lo obligaron a revocar su decisión. A medida que crecía la injerencia económica de los europeos, los comerciantes y artesanos del bazar recurrieron al consejo de los ulemas, quienes legitimaron sus reivindicaciones declarando que si

Persia seguía concediendo privilegios a los infieles dejaría de ser una nación musulmana.

Algo parecido ocurrió luego con la revolución constitucional (19051911). La idea –convalidada por el ejemplo de Japón� de adoptar una constitución como recurso para la seguridad y la prosperidad de la nación concitó importantes adhesiones, aun entre algunos clérigos. En 1906 el sah fue obligado a aceptar una asamblea constituyente, que aprobó un régimen de corte parlamentario inspirado en el de Bélgica. El monarca no lo aceptó y finalmente, en 1911, confirmó su autoridad con el apoyo de tropas zaristas.

El debilitamiento del imperio otomano se hizo evidente, en primer lugar, en el norte de África, luego de la campaña de Napoleón a Egipto en 1798, que impulsó la emancipación del bajá de Egipto, apoyado por Francia y Gran Bretaña.

El imperio otomano también retrocedió en los Balcanes, donde confluyeron la expansión de los imperios austro-húngaro y zarista y la emergencia de los grupos nacionalistas, cuyo propósito era crear estados independientes. El primero fue Grecia, que se independizó apoyado por Gran Bretaña en 1830. En la segunda mitad de 1870, con ayuda de los rusos, los eslavos desalojaron a los otomanos de la mayor parte de los Balcanes. Pero las demás potencias europeas no aceptaron los resultados y el Congreso de Berlín de 1878 revisó la situación de los distintos territorios, con vistas a contener la expansión rusa y salvaguardar el "equilibrio" europeo. Los turcos continuaron instalados en Tracia y Macedonia, los Habsburgo se apoderaron de Bosnia y Herzegovina y Gran Bretaña ocupó Chipre.



Imperio otomano.

Ante el resquebrajamiento del imperio, varios sectores de la corte otomana respaldaron un amplio plan de reformas inspiradas en las experiencias occidentales. En 1876 se aprobó una constitución de sesgo liberal, pero las fuerzas tradicionales se resistieron al cambio y el sultán revocó el texto constitucional.

En 1908, los Jóvenes Turcos –grupo de oficiales de carrera interesados en la reorganización de las fuerzas militares y la incorporación de la tecnología occidental– dieron un golpe de estado y obligaron al sultán a reconocer la Constitución de 1876. Pero la revolución no pudo resolver los problemas de unidad y organización política del imperio. Las tensiones entre las reivindicaciones de las nacionalidades no turcas y el proyecto nacionalista de los militares turcos se hicieron evidentes desde la reunión del Parlamento a fines de 1908. Los Jóvenes Turcos, divididos en grupos facciosos e impotentes para impedir la desintegración del imperio, abandonaron los ideales de 1908 y adoptaron políticas xenófobas y autoritarias, asociando la salvación del imperio otomano con la imposición de la identidad turca al conjunto de comunidades que lo habitaban.

La expansión europea no sólo resquebrajó la unidad del imperio otomano, sino que cuestionó la identidad cultural y religiosa islámica, y puso en evidencia las debilidades de la civilización musulmana para competir con los europeos. En este contexto, los intelectuales del mundo islámico reflexionaron sobre las posibilidades y las desventajas del modelo occidental y la decadencia de su propia cultura. Un sector se inclinó a favor de la modernización, pero alertando contra la mera imitación: los logros de Occidente debían reelaborarse teniendo en cuenta la identidad islámica. En este grupo se destacó Yamnal Al-Afgani (18381897), nacido en Irán en el seno de una familia relacionada con el clero chiita persa. Viajó por el mundo musulmán desde Egipto hasta la India. El estado de descomposición social que percibió en todas las regiones lo condujo a proponer un programa cuyo punto de partida era la reforma interna. Los males del mundo musulmán eran causados por el expansionismo europeo, pero también por los gobernantes autocráticos y los ulemas aferrados a una interpretación retrógrada de la doctrina.

Yamnal Al-Afgani: la debilidad del islam

[...] ¡Qué desastre! ¡Qué desgracia! Y ¿eso por qué? ¿Por qué tal miseria? Inglaterra ha tomado posesión de Egipto, del Sudán y de la península de la India, apoderándose así de una parte importante del territorio musulmán. Holanda se ha convertido en propietaria omnipotente de Java y las islas del océano Pacífico. Francia posee Argelia, Túnez y Marruecos. Rusia tomó bajo su dominio el Turquestán occidental, el Cáucaso, la Trans-Oxiana y el Daguestán. China ha ocupado el Turquestán oriental. Sólo un pequeño número de países musulmanes han quedado independientes, pero en el miedo y el peligro [...]. En su propia casa son dominados y sometidos por los extranjeros que los atormentan a todas horas mediante nuevas artimañas y oscurecen sus días a cada instante con nuevas perfidias. Los musulmanes no encuentran ni un camino para huir ni un medio para combatir [...].
¿Qué hacer, pues? ¿Dónde encontrar las causas de tal situación? ¿Dónde buscar los móviles y a quién preguntar? [...] [Quizás cabe] afirmar: “Dios no cambiará la condición de un pueblo mientras este no cambie lo que en sí tiene”.



Yamnal Al-Afgani.

Incluido en el material de la cátedra de Historia de Asia y África II, Facultad de Humanidades y Artes-UNR. Disponible en: www.scribd.com.

Este modernismo islámico fue un movimiento intelectual y no dio lugar a organizaciones duraderas, pero perduró como una corriente de pensamiento preocupada por compatibilizar la revitalización del islam con la reforma sociopolítica del mundo musulmán.

En China, los europeos introdujeron el opio cultivado en la India como parte de su sistema comercial: las ventas de opio en Cantón pagaban los envíos de té chino a Londres en un próspero comercio triangular entre la India, China y Gran Bretaña. El emperador trató de impedir el comercio de opio, pero la corona británica respondió con la guerra: las sucesivas derrotas en las llamadas "guerras del opio" de 1839-1842 y 1856-1860 marcaron el principio del fin del imperio manchú.

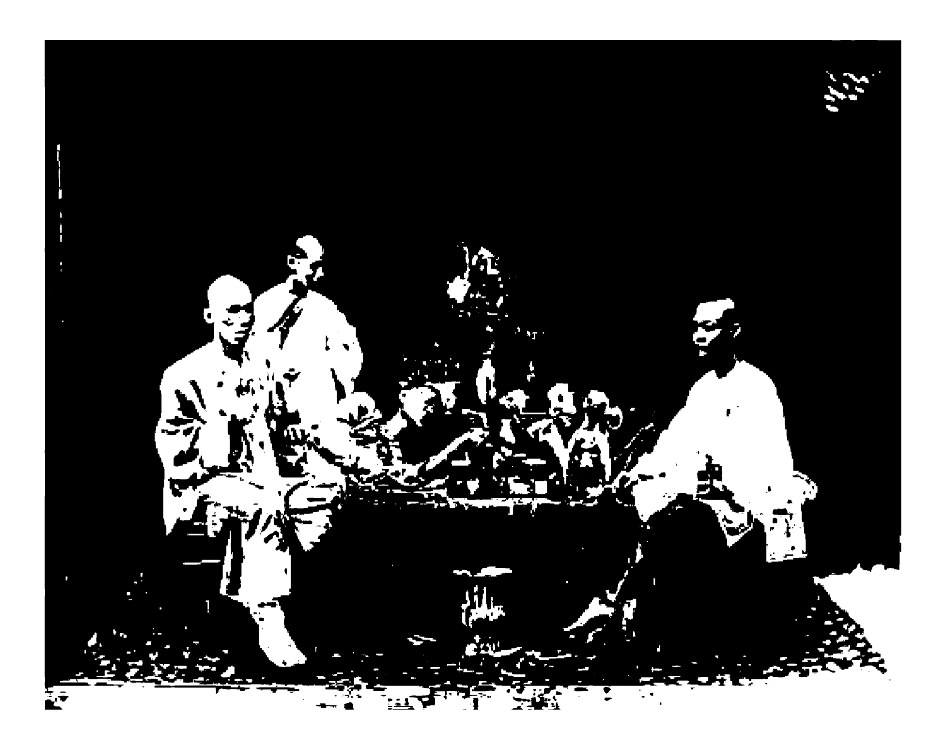
Las guerras del opio

James Bruce, octavo conde de Elgin y Kincardine, fue destinado a China a finales de la década de 1850, en calidad de plenipotenciario británico a la cabeza del cuerpo expedicionario anglofrancés que sometería a la dinastía Qing en las guerras contra China de 1857-1858 y de 1860. "Una línea de hombres-de-guerra ingleses está ahora allí anclada, frente a la ciudad", escribía Elgin el 22 de diciembre de 1857 ante la ciudad de Cantón. "No me había sentido tan avergonzado de mí mismo en toda mi vida y Elliot [el capitán del barco] comentó que el viaje parecía haberme puesto triste. Allí estábamos nosotros, ¡acumulando los medios de destrucción ante los propios ojos y al lado de una población de cerca de un millón de habitantes, contra los que estos medios de destrucción iban a ser empleados!"

El bombardeo desmoralizó completamente a los defensores de la ciudad y, según el secretario de Elgin, Laurence Oliphant, mató a unos doscientos civiles y tuvo un efecto terrible "sobre determinadas partes de la ciudad". Cuando las tropas anglofrancesas asaltaron los muros el 29 de diciembre, no encontraron más que una resistencia inútil y tan sólo sufrieron "pérdidas sin importancia": los británicos tuvieron ocho muertos y setenta y un heridos; los franceses, dos muertos y treinta

heridos. Oliphant siguió el asalto desde el montículo del polvorín. Lo que le resultó más impactante fue aquel imponente silencio, la ausencia de todo movimiento por parte de una población de un millón y medio de habitantes que permanecía como sepultada dentro de los muros de la ciudad, cuyas mismas pulsaciones parecían detenidas por los horrores de la noche anterior y cuyo único deseo, si es que podían llegar a pensar, parecía ser que sus conquistadores olvidaran el simple hecho de su existencia.

Las citas están tomadas de John Newsinger, "Elgin en China", *New Left Review*, nº 15, julio-agosto de 2002.



Fumaderos públicos en China imperial.

En el tratado de Nankin, de 1842, China aceptó casi todas las exigencias de Gran Bretaña: apertura de nuevos puertos, rebaja de derechos aduaneros, competencia de los tribunales consulares para juzgar a los ingleses residentes en China, y cesión de la isla de Hong Kong durante ciento cincuenta años. Estas medidas alentaron el ingreso de otras potencias: en 1860 los Estados Unidos, Francia y Rusia forzaron a la dinastía manchú a firmar los "Tratados Desiguales".

Simultáneamente, la corona estuvo a punto de ser derribada por la insurrección Taiping (1851-1864). Los rebeldes establecieron una dinastía rival y se adueñaron de buena parte de China central y meridional. La protesta combinó la denuncia de los males con algunas propuestas no muy claras y, sobre todo, una esperanza escatológica que generó heroísmo y fanatismo despiadado. Ante la amenaza, el gobierno encaró una serie de reformas que incluían tanto la revitalización de los valores tradicionales y la ideología confuciana –que era cuestionada por Occidente y rechazada por los revolucionarios– como la adopción de elementos occidentales en los campos tecnológico, militar y educativo. Una vez reprimida la insurrección, la vida del imperio se mantuvo en relativa calma.

La derrota en la guerra con Japón (1894-1895) imprimió un nuevo giro a la historia de China al provocar una gravísima crisis nacional. En los años siguientes al tratado de paz con Tokio, el loteo de China entre las potencias avanzó rápidamente. Las concesiones obtenidas en algunas metrópolis –Shangai y Cantón, entre otras– las convirtieron en ciudades-estado independientes donde las autoridades chinas carecían de potestad y donde no se aplicaba la legislación imperial.

Frente al trauma ocasionado por la derrota ante Japón, en 1898 un grupo minoritario de letrados intentó concretar una reforma radical. Dispuso la abolición del sistema tradicional de exámenes para funcionarios imperiales, la adopción de instituciones y métodos occidentales de educación, la creación de una administración financiera moderna, la autorización para la fundación de periódicos y

asociaciones culturales y políticas, la formación de un ejército nacional e incluso la concesión al pueblo del derecho de peticionar ante el gobierno. Un golpe de estado puso fin a la experiencia de los Cien Días. La *revolución desde arriba* no prosperó en China porque no contó ni con las condiciones sociales ni con la convicción de la elite dirigente para prosperar.

Al fracaso de la reforma le sucedió el levantamiento de los bóxers, caracterizado por una violenta xenofobia: centenares de misioneros y chinos cristianos fueron asesinados, y hubo numerosas iglesias quemadas y líneas ferroviarias y telefónicas destruidas. En su gran mayoría, los bóxers pertenecían al campesinado pobre obligado a emigrar a las ciudades y a los sectores populares pauperizados por la crisis de las actividades tradicionales. Los letrados y funcionarios más conservadores apoyaron la insurrección, que a mediados de 1900 desembocó en el sitio a las delegaciones extranjeras en Pekín y el asesinato del embajador alemán. Frente a los reclamos de las potencias extranjeras, la corte aceptó reprimir a los sublevados y una fuerza militar compuesta por tropas de varios países puso fin al conflicto. Pekín fue ocupada militarmente y saqueada por las tropas expedicionarias. El imperio subsistió hasta 1911, cuando una revolución proclamó la República.

La expansión imperialista

En las últimas décadas del siglo XIX, se desató una intensa competencia por la apropiación de nuevos espacios geográficos y la subordinación de sus poblaciones. La expansión colonialista de un pequeño número de estados desembocó en el reparto de África y del Pacífico y en la consolidación del control sobre buena parte de Asia. América Latina no fue incluida en el reparto colonial, pero su dependencia económica se acentuó.

Entre 1876 y 1914 una cuarta parte del planeta quedó distribuida en forma de colonias entre media docena de estados europeos –Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica–, en tanto que los viejos imperios –España y Portugal– tuvieron una participación secundaria. Los países extraeuropeos recientemente industrializados e interesados en la zona del Pacífico –los Estados Unidos y Japón– fueron los últimos en entrar en escena. En el caso de Gran Bretaña, la expansión de fines del siglo XIX presenta líneas de continuidad con las anexiones previas, dado que era el único país que ya tenía un imperio colonial en la primera mitad del siglo XIX.

El proceso de la conquista y el reparto coloniales de la década de 1880 fue novedoso por su amplitud, por su velocidad y porque estuvo asociado con la nueva fase del capitalismo, que alentaba la rivalidad entre las principales potencias y entrelazaba las economías de distintas partes del mundo. Los principales estadistas de la época pregonaban la necesidad de abrir nuevos mercados y campos de inversión para evitar el estancamiento de las economías nacionales, y afirmaban que la misión de las culturas superiores era civilizar a las razas inferiores. En el marco de la Depresión, numerosos dirigentes liberales –Joseph Chamberlain y Jules Ferry entre ellos– dieron un giro hacia el imperialismo para sostener la política expansionista apoyada por el estado. Cabe recordar que la expansión colonial tampoco disgustaba a todos los socialistas: algunos dirigentes de la Segunda Internacional adjudicaron a la expansión europea un significado civilizador.

Así fue como las nuevas industrias y mercados de masas de los países industrializados absorbieron materias primas y alimentos de casi todo el mundo: trigo y carnes de la Argentina, Uruguay, Canadá, Australia y Nueza Zelanda; arroz de Birmania, Indochina y Tailandia; aceite de palma de Nigeria; cacao de la Costa de Oro; café de Brasil y Colombia; té de Ceilán; azúcar de Cuba y Brasil; caucho del Congo, la Amazonia y Malasia; plata de México; cobre de Chile y México, y oro de Sudáfrica.

Las colonias, sin embargo, no fueron decisivas para asegurar el crecimiento de las economías metropolitanas. El grueso de las

exportaciones e importaciones europeas en el siglo XIX se llevó a cabo con otros países desarrollados.

El debate de los socialistas sobre el imperialismo

En el Congreso reunido en Stuttgart en 1907, los delegados de los partidos socialistas que integraban la Segunda Internacional expusieron balances encontrados sobre los beneficios y perjuicios del régimen colonial.

"Eduard David (Alemania): Les ruego que acepten la resolución de la mayoría [...]. Cuando la minoría afirma que no es posible mejorar la política colonial actual, que esta es una desgracia para los nativos en toda circunstancia, entonces la minoría, si quiere ser consecuente, debe exigir la supresión de las colonias. Si los representantes de esta concepción tuvieran el poder, deberían devolver las colonias a los nativos. ¿Qué sucedería entonces en las colonias? No serían precisamente los sentimientos humanitarios los que triunfarían, sino la barbarie. (Se oyen exclamaciones de aprobación desde ciertos sectores.) [...] Las colonias también deben atravesar el estadio del capitalismo, y no es posible saltar de la barbarie al socialismo. (Más exclamaciones.)

Julius Karski (Alemania): [...] Creo que para un socialista existen también otras civilizaciones, además de la civilización capitalista o europea. No tenemos ningún derecho a vanagloriarnos tanto de nuestra civilización y a imponerla a los pueblos asiáticos, poseedores de una cultura mucho más antigua y quizás más desarrollada. (Se oyen exclamaciones de aprobación.) David también ha afirmado que las colonias retornarán a la barbarie si se las abandona a su suerte. Esta afirmación me parece relativa, sobre todo en lo que atañe a la India. Allí me represento la evolución de otra manera. Es perfectamente posible mantener la cultura europea en ese país sin que por ello los europeos dominen con la fuerza de sus bayonetas. De ese modo, ese pueblo podría desarrollarse libremente. Por lo tanto, les propongo votar la resolución de la minoría."

Las citas están tomadas de Hélène Carrére D'Encausse y Stuart Schram, *El marxismo y Asia*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.

En principio, tanto las colonias formales como las informales se incorporaron al mercado mundial en carácter de economías dependientes, pero esta subordinación tuvo impactos sociales y económicos disímiles en las periferias. En primer lugar, porque el rumbo de las colonias quedó sujeto a los objetivos de las grandes metrópolis. En cambio, los grupos dominantes de los países semisoberanos pudieron instrumentar medidas que respondían a sus propios intereses y a los de otras fuerzas internas con capacidad de presión. Además, tanto en la esfera colonial como en las colonias informales coexistieron desarrollos económicos desiguales en virtud de los distintos tipos de organizaciones productivas. Los enclaves cerrados –las grandes plantaciones agrícolas tropicales de caña de azúcar, tabaco y algodón– y las explotaciones mineras generaron sociedades fracturadas: por un lado, un reducido número de grandes propietarios de extrema riqueza y, por el otro, una masa de trabajadores con bajísimos salarios y en muchos casos sometidos a condiciones serviles. Tanto en América Latina como en las Indias

Orientales Holandesas, el cultivo del azúcar estuvo asociado a la presencia de oligarquías tradicionales y masas empobrecidas. En cambio, los cultivos basados en la labor de pequeños y medianos agricultores y en los que el trabajo forzado era improductivo –trigo, café, arroz y cacao– propiciaron la constitución de sociedades más equilibradas, con un crecimiento económico de base más amplia.

Gran parte de las áreas dependientes no se beneficiaron con el crecimiento de la economía global y en la mayoría de las colonias se acentuó la pobreza. Portugal en África, Holanda en Asia y el rey belga Leopoldo II en el Congo fueron los explotadores más decididos. En aquellas colonias donde la minoría europea impuso su dominación sobre grandes poblaciones autóctonas –Kenia, Argelia, Rodesia, África del Sur–, los colonos acapararon la mayor parte de las tierras productivas, impusieron el trabajo forzado y marginaron a los nativos sobre la base de la discriminación racial.

Las experiencias en las que la incorporación al mercado mundial produjo una importante renovación y modernización de la economía se localizaron en las áreas de colonización reciente que contaban con la ventaja de climas templados y tierras fértiles para la agricultura y la ganadería. En Canadá, Uruguay, la Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Chile y el sur de Brasil, las lucrativas exportaciones de granos, carnes y café alentaron la afluencia de inmigrantes y la expansión de grandes ciudades que estimularon la producción de bienes de consumo para la población local, creando incentivos para una incipiente industrialización.

Las colonias con cultivos de pequeña explotación alcanzaron cierto grado de crecimiento económico gracias al auge de las exportaciones: Nigeria con el aceite de palma y cacahuete; Costa de Oro con el cacao; Costa de Marfil con la madera y el café; Birmania, Siam e Indochina con la multiplicación de la producción arrocera. Pero en estos casos no hubo aliciente para la producción industrial, debido a las limitaciones impuestas por el colonialismo y el bajo nivel de la vida local.

Colonias e imperios en Asia

Las principales metrópolis asiáticas ya habían delimitado sus posiciones antes del reparto colonial del último cuarto del siglo XIX. Los hechos más novedosos de este período en el continente fueron la anexión de Indochina al imperio francés, el surgimiento de Japón como potencia colonial y la presencia de los Estados Unidos en el Pacífico tras la anexión de Hawái y la apropiación de Filipinas.

En Asia, los países occidentales encontraron grandes imperios tradicionales con culturas arraigadas y fuerzas decididas a resistir la dominación europea. El avance de las grandes metrópolis produjo tres situaciones diferentes: la de los imperios y reinos derrotados militarmente y convertidos en colonias –Indochina, el subcontinente indio e Indonesia–; la de los imperios persa y chino, que mantuvieron su independencia formal pero fueron obligados a reconocer zonas de influencia y a entregar parte de sus territorios al gobierno directo de las potencias, y la experiencia de Japón, que frente al desafío de Occidente llevó a cabo la revolución Meiji.

La instalación europea en la India data del siglo XVI. Por entonces los portugueses, franceses, holandeses e ingleses se limitaron a crear establecimientos comerciales en las costas para obtener las preciadas especias. A mediados del siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales inglesa ya se había convertido en la principal fuente de poder del subcontinente. Su victoria fue posibilitada por la decadencia del imperio mongol y las rivalidades entre los príncipes indios. En la década de 1870, la administración de esta Compañía fue sustituida por el gobierno directo de la corona británica y la reina Victoria fue proclamada emperatriz de las Indias.

Aproximadamente la mitad del continente indio quedó bajo el control directo de Londres; el resto continuó gobernado por alrededor de quinientos príncipes indios asesorados por consejeros británicos. La presencia inglesa les garantizaba a estos soberanos, fabulosamente ricos y muchos de ellos musulmanes, la seguridad de sus posesiones, además de eximirlos de toda preocupación por la política exterior y la

defensa del país. El subcontinente indostánico estaba demasiado dividido y era demasiado heterogéneo para unificarse bajo las directivas de una aristocracia disidente.

La India se transformó así en la pieza central del imperio británico y la economía de la región fue completamente trastocada. La ruina de las artesanías textiles conllevó el empobrecimiento generalizado de los campesinos, quienes además se vieron severamente perjudicados por la reorganización de la agricultura hacia los cultivos de exportación. La administración colonial, por su parte, utilizó los ingresos de la colonia para el financiamiento de sus gastos militares: las campañas de Afganistán, Birmania y Malasia fueron pagadas por el Tesoro indio.

La estrategia británica en la región se basó en su interés por preservar la dominación de la India. Sus decisiones en África y Oriente Medio estuvieron en gran medida guiadas por el afán de controlar las rutas que conducían hacia el sur de Asia. Desde su base en la India, Gran Bretaña pudo forzar las puertas de China reduciendo el poder de los grandes manchúes y convertir el resto de Asia en una dependencia europea, al mismo tiempo que establecía su supremacía en la costa arábiga y controlaba el canal de Suez.

A fines del siglo XIX, contrarrestando la expansión de Rusia sobre Asia Central, Gran Bretaña rodeó a la India con una serie de "estados tapones": los protectorados de Cachemira (actualmente dividido entre India y Pakistán), Beluchistán (hoy parte de Pakistán) y Birmania (hoy Myanmar). En el Sudeste asiático, Londres se instaló en Ceilán (actual Sri Lanka), la península malaya, la isla de Singapur y el norte de Borneo (hoy parte de Malasia y del sultanato de Brunéi).

Por su parte, el imperio zarista venía avanzando sobre Asia Central desde mediados del siglo XIX y en 1867 fundó el gobierno general del Turkestán bajo administración militar. Persia y Afganistán quedaron encajonados entre los imperios ruso y británico. A mediados de la década de 1870 Londres pretendió hacer de Afganistán un estado tributario, pero la violenta resistencia de los afganos, apoyada por Rusia, lo hizo imposible. La rivalidad entre las dos potencias permitió que Afganistán preservara su independencia como estado amortiguador.

La dominación francesa en Indochina fue similar a la de los británicos en la India. Ambos estados europeos se establecieron en el seno de antiguas y sofisticadas culturas, y además las divisiones políticas locales facilitaron la empresa colonizadora. Vietnam, Laos y Camboya, aunque eran independientes, pagaban tributo a China y le reconocían cierta forma de señorío feudal. Francia ingresó en Saigón en 1859 aduciendo la necesidad de resguardar a los misioneros católicos. En la década siguiente firmó un tratado con el rey de Camboya, que reducía el reino a la condición de protectorado y obtuvo del emperador anamita (vietnamita) parte de la Cochinchina en condición de colonia. Finalmente creó el protectorado de Laos cuando el reino de Siam "cedió" la provincia en 1893. Indochina quedó bajo la autoridad de un gobernador general dependiente de París.

El otro imperio del Sudeste asiático fue el de los Países Bajos, que a fines del siglo XIX convirtió en colonia estatal a las Indias Orientales, Indonesia. Las numerosísimas islas –con cientos de lenguas y diferentes religiones, aunque la musulmana fuera la predominante– proveían a la metrópoli de valiosas materias primas: clavo de olor, café, caucho, palma oleaginosa y estaño. Los holandeses redujeron a la población a la condición de fuerza de trabajo de las plantaciones, sin reconocerles ningún derecho. El islam adquirió creciente gravitación como refugio y vía de afianzamiento de la identidad del pueblo sometido. La educación llegaba a las masas a través de las mezquitas, a las que arribaron maestros musulmanes procedentes de La Meca y la India. Por último, los antiguos imperios ibéricos sólo retuvieron porciones menores del territorio asiático: España conservó las Filipinas hasta 1898 y Portugal, Timor Occidental hasta 1975.

Hasta el primer cuarto del siglo XIX, la posición de los europeos en China fue similar a la que tuvieron en la India hasta el siglo XVIII: dominaban algunos puestos comerciales sobre la costa, pero carecían de influencia política o poder militar. Sin embargo, existían diferencias importantes entre ambos imperios. En la India, el comercio

desempeñó un destacado papel económico; por eso mismo, muchos gobernantes de las regiones costeras no pusieron objeciones a la penetración comercial extranjera y colaboraron para su afianzamiento. China, en cambio, se consideraba autosuficiente y rechazaba el intercambio con países extranjeros, considerándolo perjudicial para el prestigio nacional. Debido a ese apego a los valores de la propia civilización y al desprecio hacia los "bárbaros", se dieron muy pocos casos de "colaboracionismos". La segunda diferencia fue que China contaba con una unidad política más consistente: si bien la dinastía manchú carecía de los recursos y la cohesión que distinguieron a los promotores de la modernización japonesa, no llegó a hundirse como ocurrió con el imperio mongol. No obstante, si bien alrededor de 1900 parecía posible que China cayera en manos de las grandes potencias, las rivalidades entre estas impidieron el reparto colonial del imperio manchú. A pesar de ello, las principales potencias obtuvieron amplias concesiones comerciales, militares y judiciales en las mayores zonas portuarias.

El agotamiento del imperio manchú y la exitosa revolución Meiji hicieron posible la creciente gravitación de Japón, desplazando la secular primacía de Pekín sobre Asia Oriental. Las exitosas guerras, primero contra China (1894-1895) y después contra el imperio zarista (1904-1905), abrieron las puertas a la expansión del imperio nipón en esta área.

Oriente Medio formó parte del imperio otomano hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. No obstante, desde mediados del siglo XIX los europeos habían avanzado sobre la región: Francia sobre el Líbano actual, y Alemania e Inglaterra sobre Irak. La intervención francesa en el Líbano fue impulsada por los conflictos religiosos y sociales entre la comunidad cristiana de los maronitas y los drusos musulmanes. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX se produjeron violentos enfrentamientos entre ellos, las tropas francesas desembarcaron en Beirut para defender a los maronitas. El sultán aceptó entonces la creación de la provincia de Monte Líbano bajo la administración de un oficial otomano cristiano y la abolición de los derechos feudales por ellos reclamada.

Gran Bretaña tenía interés en Irak debido a su ubicación estratégica en la ruta a la India. Alemania, por su parte, había obtenido los derechos de construcción y explotación del ferrocarril Berlín-Bagdad. A principios del siglo XX estas dos potencias se abocaron –junto con Holanda– a la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos de la zona.

El reparto de África

Antes de la llegada de los europeos, el continente africano se caracterizaba por la ausencia de fronteras definidas, el nomadismo, los intensos movimientos de población y la consiguiente mezcla étnica. La penetración del islam, a partir del año 1000 aproximadamente, tuvo fuerte arraigo en la zona oriental y occidental de África. La trama de relaciones sociopolíticas era muy diversa: desde monarquías centralizadas altamente desarrolladas hasta bandas simples con instituciones económicas rudimentarias. Las sociedades de la mayoría de los pueblos africanos ocupaban algún punto en el *continuum* entre esos dos extremos, compartían formas organizativas basadas en los vínculos de linaje patrilineales o matrilineales y dependían de la agricultura y los intercambios en un marco de urbanización limitada.

La incorporación de África al mercado mundial y su dominación por las potencias europeas atravesó dos grandes momentos: en primer lugar, desde el siglo XV hasta comienzos del XIX prevaleció el comercio de esclavos y, a partir de su prohibición, Francia y Gran Bretaña iniciaron la penetración económica y territorial en la primera mitad del siglo XIX; en segundo lugar, el período de acelerada colonización a partir de la conferencia de Berlín en 1885.

Si bien los europeos llegaron a las costas africanas en el siglo XV buscando la ruta de las especias, poco después encontraron un negocio

rentable: el comercio de oro, marfil y seres humanos. Debido a la casi extinción de las poblaciones indígenas americanas –total en las Antillas y parcial en el resto del continente–, trasladaron a los esclavos africanos al Nuevo Mundo. En África la esclavitud no era desconocida: antes de los europeos, era practicada por la población local y había aumentado notablemente con la llegada de los comerciantes árabes a la costa oriental. El tráfico de hombres y mujeres fue acompañado por una ideología racista que negó a los negros su condición de seres humanos.

En aquel momento no se avanzó sobre el interior del continente, con la sola excepción de África del Sur, donde la Compañía Holandesa de las Indias Orientales decidió fundar una colonia. Los primeros colonos holandeses llegaron a Ciudad del Cabo en 1652 y rápidamente se lanzaron a la conquista de nuevas tierras, expulsando a la población autóctona. Estos inmigrantes forjaron una sociedad de granjeros y ganaderos de carácter autónomo, los bóeres o afrikáneres, que expulsaron de sus tierras o bien esclavizaron a los pueblos locales.

En el Congreso de Viena de 1815 la colonia pasó a manos de Gran Bretaña, que abolió la esclavitud. Los afrikáneres emigraron hacia el norte para fundar las repúblicas autónomas de Orange y Transvaal, y Gran Bretaña mantuvo el control de las colonias de Natal y El Cabo. Los descubrimientos de yacimientos de diamantes y oro en la segunda mitad del siglo XIX condujeron al enfrentamiento entre ingleses y bóeres. Desde la década de 1870, el inglés Cecil Rhodes tuvo un papel decisivo en la explotación económica de la zona y la expansión de los dominios británicos hacia el norte, combinando la creación de compañías mineras exitosas con la actividad política y el uso de la fuerza contra los bóeres. La guerra anglobóer estalló en 1899 y, aunque transcurrido un año los británicos ya habían demostrado su superioridad militar, la resistencia continuó a través de la guerra de guerrillas. Tras la brutal represión de sus poblaciones, los bóeres se rindieron en 1903.

En 1910 se formó la Unión de Sudáfrica –integrada por las dos repúblicas autónomas, Transvaal y Orange, y las dos colonias británicas, El Cabo y Natal– como dominio independiente dentro del imperio británico. Las reservas bantúes –Bechuanalandia, Basutolandia y Suazilandia– quedaron fuera de la confederación bajo el control de la corona británica. La nueva entidad nació cargada de tensiones debido a las divergencias entre bóeres e ingleses y el sometimiento de la mayoría africana. Al norte, en las tierras sobre las que había avanzado Rhodes, se crearon tres colonias: Rodesia del Sur, Rodesia del Norte y Niasalandia. Estos tres territorios, con diferente influencia de los colonos blancos y distintos recursos, fueron económicamente complementarios.

En los territorios al sur del Sahara, a raíz de la supresión del tráfico humano en la primera mitad del siglo XIX, los holandeses, daneses, suecos y prusianos se retiraron. Los franceses y los ingleses no sólo retuvieron sus posesiones en África Occidental –Senegal y Costa de Marfil los primeros; Nigeria y Costa de Oro los segundos– sino que iniciaron la explotación de los recursos locales y, especialmente Francia, avanzaron hacia el interior. Tras numerosas expediciones, los franceses finalmente lograron controlar África Occidental y Ecuatorial, territorio al que añadieron las islas de Madagascar, Comores y Mayotte.

El principal interés de Gran Bretaña y Francia se concentró en los territorios del norte de África. Si bien desde Egipto hasta Túnez eran provincias del imperio otomano, la debilidad de Estambul posibilitó a los gobernantes locales ganar una creciente autonomía. Los grupos económicos y los gobiernos europeos vieron en esta zona amplias oportunidades para encarar actividades lucrativas: préstamos a los gobiernos, construcción de ferrocarriles e inversión para la explotación de productos locales. Egipto, por ejemplo, se convirtió en el principal abastecedor de algodón para la industria textil inglesa. Además, los capitales extranjeros encontraron en los gobiernos de estos países actores interesados en atraerlos para llevar a cabo la modernización que les posibilitaría cortar sus lazos con el imperio otomano.

Francia fue pionera de la penetración europea al desembarcar en la

costa argelina en 1830. Su influencia se extendió a Egipto, donde apoyó la construcción del canal de Suez, inaugurado en 1869. Inmediatamente, Gran Bretaña decidió controlar esta vía de comunicación –clave para sus intereses imperiales en la India– comprando acciones de la compañía del canal y ocupando militarmente el país en 1881.

Francia avanzó sobre Túnez y también sobre Marruecos, donde enfrentó la oposición de Alemania en 1905 y 1911. Al mismo tiempo, intentó llegar a las fuentes del Nilo avanzando desde Senegal. En Fashoda (1898), las fuerzas francesas fueron detenidas por los británicos que bajaban desde Egipto hacia Sudán para controlar el movimiento musulmán dirigido por el Mahdi. Finalmente, Gran Bretaña y Francia pusieron fin a su rivalidad en África cuando la primera reconoció el predominio francés en la costa del Mediterráneo, excepto Egipto, y la segunda aceptó que el valle del Nilo quedara en manos de los ingleses. La delimitación de las soberanías en el ámbito colonial propició la alianza entre Londres y París, que posteriormente desembocaría en la Triple Entente.

La subordinación de Túnez y Marruecos siguió el mismo camino que la de Egipto. Cuando el elevado monto de la deuda exterior colocó a estos países al borde de la quiebra, los estados europeos aprobaron el envío de comisiones para el control de las finanzas. En un segundo momento, frente a las resistencias internas gestadas al calor de la modernización dependiente, la metrópoli con mayor fuerza –Francia en estos dos casos– recurrió a la fórmula del protectorado.

Entre 1881 y 1912 todos los territorios de la costa mediterránea de África quedaron ocupados por un país europeo. La última anexión fue la de las provincias otomanas de Cirenaica y Tripolitania (hoy Libia), concretada por Italia en 1912 con la anuencia de Francia, que así se aseguró el control de Marruecos. En la cruenta y costosa guerra con el sultán, los italianos fueron favorecidos por un levantamiento en los Balcanes que obligó a las tropas otomanas a dispersarse.

En un segundo plano, Portugal y España retuvieron las posesiones del período anterior. Portugal se mantuvo en las islas de Cabo Verde y Príncipe y las costas de Angola y Mozambique, y en 1879 incorporó la colonia de Guinea-Bisseau. Madrid mantuvo la Guinea Española y, después de la conferencia de Berlín, incorporó el Sahara Español. Conservó Ceuta y Melilla –enclaves conquistados en las guerras de Reconquista libradas contra los árabes–, y en 1912 recibió de Francia la región del Rif, al norte de Marruecos, y la de Ifni al sur. La ciudad de Tánger fue declarada puerto libre internacional.

En el vertiginoso reparto de África a partir de la década de 1880, se conjugaron la decisiva importancia del canal de Suez, la resignificación del papel de África del Sur en virtud de su condición de productora de diamantes y oro, y las presiones de los nuevos actores: Italia, Alemania y el rey belga Leopoldo II. Si bien entre los objetivos y las formas de penetración del poder europeo en el área arábiga musulmana del norte y en África negra hubo destacados contrastes, los intereses cada vez más amplios de las metrópolis condujeron al entrecruzamiento de las acciones desplegadas sobre los distintos territorios.

Las pretensiones de Leopoldo II sobre el Congo y el ingreso tardío de Alemania al reparto colonial desembocaron en la conferencia de Berlín, que aprobó los criterios que "legitimaron" la apropiación del territorio africano. En 1884, el canciller alemán Otto von Bismarck invitó a catorce potencias a reunirse para discutir sus reclamos en torno al continente africano. Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal optaron por evitar la existencia de fronteras comunes entre sus nuevos dominios y reconocieron la potestad de Leopoldo II sobre vastos territorios de África Central.

Ansioso por ingresar al reparto colonial, el rey belga prometió que su tutela sobre el Congo pondría fin a la explotación de seres humanos "brutalmente reducidos a la esclavitud". Pero luego, en connivencia con las empresas instaladas en la región, recurrió al soborno, el secuestro y el asesinato masivo para someter a la población local a la inhumana tarea de recoger el caucho. El Parlamento belga retiró sus derechos al rey en 1908 y la colonia quedó bajo su control, manteniendo el régimen de concesiones a las compañías privadas.

Un año después de la cumbre de Berlín, Alemania y Gran Bretaña acordaron que los territorios del sur –Tanganica (parte de la actual Tanzania), Ruanda y Burundi– constituirían el África Oriental alemana, y que los territorios del norte –Zanzíbar (parte de la actual Tanzania), Kenia y Uganda– se sumarían al imperio británico. En la parte occidental, Alemania incorporó Togo, Camerún y África del Sudoeste.

El canal de Suez dio nuevo valor estratégico al cuerno de África. En 1862 los franceses compraron el puerto de Obock, origen del actual Yibuti, y en 1885 los ingleses ocuparon el norte de Somalía. Italia fracasó en el intento de dominar Etiopía, y se convirtió en el único país europeo derrotado militarmente por la resistencia local. El emperador etíope, embarcado en la unificación del reino, logró que el resto de las potencias europeas le aseguraran su independencia a cambio de ventajas económicas. A manera de compensación, Italia recibió el sur de Somalía y Eritrea.

En 1875, con excepción de África del Sur, la presencia europea seguía siendo periférica: las naciones occidentales controlaban únicamente el 10% del continente. En 1914 sólo quedaban dos estados independientes –Liberia y Etiopía–, en tanto que Francia y Gran Bretaña habían sido las principales beneficiarias del reparto africano.

El imperialismo destruyó numerosas economías autosuficientes. Los intercambios internos –el comercio transahariano y el de la zona interlacustre de África Oriental y Central– fueron desmantelados o subordinados, y los vínculos entre África y el resto del mundo –en especial la relación con la India y Arabia– resultaron perjudicados. A medida que la economía colonial maduraba, ningún sector de la sociedad africana pudo quedar al margen de los parámetros impuestos por las grandes metrópolis europeas. Los estados colonialistas se aliaron con los capitales privados para coaccionar a las poblaciones autóctonas y explotar los recursos. Los objetivos de la colonización eran mantener el orden, evitar grandes gastos y organizar una mano de obra productiva a través del trabajo forzado o de la esclavitud encubierta. Este sojuzgamiento desató numerosos movimientos de resistencia. La guerra del impuesto a las cabañas en Sierra Leona, la revuelta bailundu en Angola, las guerras Maji Maji en el África Oriental alemana, la rebelión bambata en Sudáfrica, entre otros, testimonian con sus miles de víctimas el rechazo de los pueblos africanos, que en todos los casos fracasaron ante la superioridad económica y militar europea.

Oceanía fue la última porción del planeta en entrar en contacto con Europa. Australia y Nueva Zelanda, que llegaron a ser los principales países de la región, fueron ocupadas por los británicos. El resto de los archipiélagos distribuidos por el océano Pacífico, Micronesia, Melanesia y Polinesia, quedaron repartidos entre Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Las fronteras políticas no siguieron las divisiones culturales, de por sí poco precisas.

La población originaria de Nueva Zelanda eran los maoríes, de raíz polinesia; en Australia había dos grupos étnica, racial y culturalmente diferentes: los aborígenes australianos y los isleños del estrecho de Torres. En la década de 1780 Gran Bretaña ocupó el territorio australiano mediante el establecimiento de una colonia penal en la costa oriental. En el siglo XIX la población europea se fue asentando en diversos núcleos del litoral, y se dedicó a la ganadería. El asentamiento europeo se consolidó a mediados de siglo tras el descubrimiento de oro. La reforma agraria de 1861 impulsó la agricultura, y la demanda mundial, unida al bajo costo de la tierra, alentaron el masivo arribo de inmigrantes, principalmente británicos. La urbanización de la isla acompañó el desarrollo industrial. Sidney y Melbourne devinieron grandes centros urbanos. La Constitución redactada en 1898 por el Parlamento británico estableció una confederación de colonias australianas autónomas, que en 1901 conformaron la Mancomunidad de Australia, regida por un Parlamento federal.

En Nueva Zelanda, colonia británica desde 1840, el poblamiento fue más lento, y también se consolidó gracias a la extracción de oro. El ingreso de los inmigrantes fue acompañado de la violenta expropiación de las tierras a los maoríes. En 1907, el país se transformó en un dominio independiente.

América Latina

A partir de su independencia, a principios del siglo XIX, los países de América Latina atravesaron un período de guerras civiles, en las que se dirimieron las fronteras, las formas de organización institucional y los predominios en los estados en proceso de formación. Con la sola excepción de Brasil, se impuso la forma republicana. A mediados del siglo XIX, estas tensiones perdieron intensidad, y hacia 1880, en la mayoría de los países, los estados se habían asentado, a veces por acuerdos entre los grupos dominantes y otras por medio de dictaduras, pero en todos los casos predominó el objetivo de orden y progreso.

Desde 1810, Gran Bretaña adquirió una posición preponderante en el comercio latinoamericano, desplazando a España y a Portugal. Desde mediados del siglo XIX, el gran crecimiento del capitalismo en los países centrales y la revolución en los medios de comunicación posibilitaron una incorporación más intensa en el mercado mundial. El proceso se aceleró a fines del siglo: las economías latinoamericanas se especializaron en la exportación de materias primas y alimentos, y recibieron inversiones de capital y, en muchos casos, contingentes densos de inmigrantes.

Cada país y cada región se especializó en determinados productos. En las pampas de clima templado de la Argentina y Uruguay prosperó la producción de lana, cereales y carne. La agricultura tropical se extendió por una vasta región: el café desde Brasil hasta Colombia, Venezuela y América Central; el banano en la costa atlántica de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela; el azúcar en Cuba, Puerto Rico y Perú. En minería, se destacaron el cobre en Perú y Chile, el estaño de Bolivia y el petróleo de México y Venezuela. Gran Bretaña tuvo un papel clave en esta transformación productiva, por las inversiones en ferrocarriles y puertos, indispensables para acercar la producción al mercado, por el desarrollo de mecanismos financieros y crediticios y, finalmente, como proveedor de productos manufacturados y mercado consumidor de los bienes producidos en la región.

En la organización de la producción exportable fue decisivo el modo como se resolvió el problema de la mano de obra. En el caso del café, los terratenientes brasileños recurrieron a la mano de obra inmigrante, combinando el régimen salarial con el de aparecería, por el cual el cultivador de tierra ajena recibía una parte de lo que producía. En Colombia y El Salvador, en cambio, las explotaciones de menor extensión cubrían la demanda de fuerza de trabajo con la mano de obra mestiza, de alto crecimiento vegetativo, mientras que en Guatemala se utilizó mano de obra proveniente de comunidades indígenas, hasta entonces aisladas de la economía mercantil. En la Argentina y Uruguay, la clave de la explotación ganadera estuvo en la alta calidad de la tierra y en su combinación con la agricultura, donde trabajaban los inmigrantes europeos. Allí y en Brasil, el enriquecimiento de los grandes terratenientes estuvo acompañado por la conformación de un denso sector de productores agrarios medios, generalmente arrendatarios, que conformaron un tejido social más heterogéneo.

En ese proceso de expansión crecieron notablemente las ciudades, especialmente las capitales y los puertos, como Buenos Aires, Río de Janeiro, Guayaquil, Valparaíso, La Habana o Montevideo. Confluyeron aquí el crecimiento de la economía exportadora, la consolidación de los estados, el papel dinámico de las oligarquías, la incorporación de trabajadores provenientes del mundo rural o de las migraciones, atraídos por la oferta de trabajo. También crecieron algunas ciudades interiores, vinculadas con una región productiva dinámica, como Medellín o San Pablo.

La fisonomía social de las ciudades fue más heterogénea y las clases populares adquirieron una creciente significación con la aparición de nuevas fuentes de trabajo: el comercio local, el servicio doméstico, las pequeñas actividades productivas y de servicios tradicionales y algunas nuevas industrias que atendían el creciente consumo local, como el tabaco o las bebidas. La construcción de obras públicas o de

viviendas privadas, el desarrollo del transporte urbano y los ferrocarriles y el de la burocracia estatal completan este panorama de expansión y diversificación. En este amplio y variado mundo del trabajo, fue perfilándose un mundo obrero. Lo nutrió la inmigración europea en unos casos y la proletarización campesina en otros. Surgieron nuevas organizaciones destinadas a los trabajadores, como sociedades de ayuda mutua y sindicatos, y comenzaron a predominar las corrientes de izquierda: el anarquismo, el anarcosindicalismo y el socialismo, que protagonizaron importantes acciones reivindicativas a principios del siglo XX. Durante esta transformación, una buena parte de los grandes propietarios rurales modificó sus comportamientos y expectativas. Plantadores de café brasileños, estancieros argentinos o dueños de plantaciones en Cuba y México buscaron la eficiencia y el éxito comercial y se convirtieron en empresarios.

Otra dimensión de esta transformación provino de la consolidación de los estados, su capacidad de imponer la ley y el orden en sus territorios y, sobre todo, de montar sistemas educativos capaces no sólo de capacitar a los jóvenes contingentes sino de integrarlos como ciudadanos a la sociedad nacional. En este aspecto, las diferencias fueron muy grandes: la Argentina, por ejemplo, fue notablemente más exitosa que Colombia. Pero en todas partes apareció esta nueva ciudadanía, con su carga de demandas y reivindicaciones.

Las nuevas tensiones generadas por estos cambios y las nuevas formas de canalizar las demandas impulsaron, a principios del siglo XX, cambios políticos que cuestionaron el orden oligárquico o los regímenes dictatoriales, consolidados durante la segunda mitad del siglo XIX. La crisis de los regímenes oligárquicos conllevó la configuración de estados con mayor autonomía respecto de las clases propietarias y con más capacidad para desarrollar políticas universales.

En muchos casos, estas reformas políticas se asociaron con el avance de la democracia, en gran medida gracias a la movilización y organización de los sectores medios, cuyos logros más consistentes se concretaron en el Cono Sur. En la Argentina, a través de la Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen, quien llegó a la presidencia en 1916. En Uruguay, con la renovación del Partido Colorado impulsada por José Batlle y Ordóñez, quien asumió el gobierno en 1903. En Chile, fue la Unión Liberal encabezada por Arturo Alessandri, quien puso en marcha su programa de reformas sociales en la década de 1920. En todos los casos, la democracia política fue acompañada de medidas estatales en beneficio de los sectores populares.

En México se desarrolló una revolución entre 1910 y 1917, que combinó la movilización de los sectores medios y populares contra la dictadura de Porfirio Díaz con la resistencia de las comunidades indígenas a la expropiación de sus tierras. Al concluir la lucha armada, el ejército campesino liderado por Emiliano Zapata fue derrotado y se impuso la fuerza, encabezada por Venustiano Carranza, más afín a los intereses de la burguesía. No obstante, la Constitución de 1917 incluyó parte de los reclamos zapatistas respecto a la preservación de las comunidades agrarias.



Pancho Villa, jefe de las fuerzas revolucionarias en el norte de México, sentado en el sillón presidencial, y Emiliano Zapata a su izquierda.

En Brasil, en 1899 hubo una revolución militar, el imperio cayó, se abolió la esclavitud y se proclamó la República. Aunque los sectores medios ganaron algún terreno, los avances de la ciudadanía fueron reducidos y la vida política quedó bajo el control de los sectores dominantes de los distintos estados, que establecieron acuerdos para gobernar. En el resto de los países, las oligarquías y los dictadores continuaron imponiendo su sello.

En el marco del imperialismo se produjo una primera reorganización en las hegemonías. Gran Bretaña y otros países europeos mantuvieron su predominio, pero los Estados Unidos comenzaron a avanzar decididamente. A diferencia de los inversores británicos, los norteamericanos realizaron inversiones directas en actividades como el petróleo, el cobre y el estaño, que les resultaban vitales. También intervinieron de manera directa en algunos países.

El Caribe y América Central sufrieron la tutela directa de los Estados Unidos, especialmente a partir de la guerra entre ese país y España. La guerra por la independencia cubana estalló en 1895. Tres años después, los Estados Unidos derrotaron de manera contundente a España en el Caribe y en el Pacífico. Además de adueñarse de las Filipinas, ocuparon Puerto Rico y establecieron un protectorado en Cuba, islas donde los empresarios norteamericanos tomaron el control de la producción azucarera.

Las intervenciones militares estadounidenses se correspondieron con sus objetivos de gran potencia: el control del canal de Panamá y del Caribe y la custodia de sus inversiones en la región. Contaron con la colaboración de sectores de la clase política local, que así lograron mantenerse en el gobierno. Los Estados Unidos arrendaron a perpetuidad a Cuba la base naval de Guantánamo y alentaron la independencia de Panamá, que era una provincia de Colombia, para luego hacerse cargo y apropiarse del canal de Panamá. Los marines ocuparon la República Dominicana entre 1904 y 1924, intervinieron repetidamente en Nicaragua y ocuparon Haití entre 1915 y 1934. En el resto de Centroamérica, la presencia norteamericana fue más velada y consistió en el apoyo a los regímenes autoritarios.

2. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa

El 28 de junio de 1914, en el "volcán de los Balcanes", se produjo el atentado que desencadenaría la Primera Guerra Mundial. Un joven estudiante serbio vinculado a una organización nacionalista clandestina asesinó al heredero del trono austro-húngaro. Un mes después, el imperio de los Habsburgo presentó un durísimo ultimátum a Serbia y, al recibir una respuesta que consideró "insuficiente", le declaró la guerra. Inmediatamente se puso en marcha el sistema de alianzas, y el feroz enfrentamiento europeo devino una guerra total. En buena medida, esta se precipitó por gravísimos errores de cálculo cometidos por los responsables de tomar decisiones en los distintos países. Pero, sin duda, hubo causas y fuerzas históricas profundas que posibilitaron que un grave incidente local derivase en la mayor conflagración bélica conocida hasta entonces.

En el marco de esta carnicería, el régimen zarista cayó y dio paso a la gran revolución del siglo XX. En un principio se creyó que sería una revolución burguesa, equivalente a la francesa de fines del siglo XVIII. Pocos meses después, sin embargo, los bolcheviques tomaron el poder anunciando que pretendían avanzar hacia el comunismo. Las esperanzas y los miedos que la revolución de Octubre suscitó marcaron en gran medida el curso del siglo. Hoy, a la luz del derrumbe del bloque soviético, la experiencia revolucionaria rusa puede leerse como el enorme y trágico esfuerzo de una sociedad atrasada y largamente expoliada que, bajo el férreo control del estado, en poco tiempo y en condiciones adversas, pasó del arado de madera a ser la segunda potencia mundial.

Del concierto europeo al sistema de alianzas

A lo largo de un proceso que arranca en el siglo XVII y se afianza con la derrota de Napoleón, cada uno de los principales estados europeos reconoció la autonomía jurídica y la integridad territorial de los otros. Las potencias centrales apostaron a la constitución de un orden internacional basado en el reconocimiento de la soberanía estatal y en la preservación del equilibrio de poder entre ellas. Mediante el sistema de congresos, Gran Bretaña, Francia, Prusia, Austria y Rusia buscaron mantener el mapa europeo diseñado en el Congreso de Viena en 1815. Este mecanismo –conocido como "el concierto europeo"– se basaba en el respeto del statu quo y el reconocimiento de que el poder de cada estado no debía avasallar el de las otras potencias. La idea se aplicó únicamente a Europa, que se convirtió en zona de "amistad" y comportamiento "civilizado" incluso en épocas de guerra. Si bien el concierto europeo coincidió con un largo período de paz en el continente, no supuso el fin de las guerras destinadas a imponer la dominación europea sobre "los otros, los no civilizados", a través de la expansión imperialista.

En el último cuarto del siglo XIX, junto con la extensión y profundización de esa expansión en el mundo de ultramar, el concierto europeo se resquebrajó, en parte porque cambió la relación de fuerza entre los estados debido al ascenso político y económico de Alemania y el declive industrial de Gran Bretaña, y en parte porque, en el marco del imperialismo, Europa pasó a ser una pieza más de un sistema mundial que se había complejizado desde la entrada en escena de Japón y los Estados Unidos como grandes potencias. Pero también porque entraron en crisis el régimen zarista y dos de los imperios más antiguos, el chino y el otomano.

En dos guerras con profundas repercusiones internas, los manchúes y los Romanov fueron derrotados por Japón, que logró así incorporar nuevos territorios, entre ellos Corea, anexada en 1910.

En el último cuarto del siglo XIX el imperio otomano retrocedió en el norte de África y en los Balcanes, exacerbando las rivalidades entre el imperio zarista y el de los Habsburgo, mientras se intensificaban los

choques entre los proyectos nacionalistas de los distintos pueblos balcánicos.

Al calor de estos cambios, las principales potencias construyeron dos grandes alianzas: Gran Bretaña, Francia y Rusia, por un lado, y Alemania y Austria-Hungría, por el otro. La república francesa y el imperio zarista compartían su enemistad hacia los imperios centrales. En el caso de París, esta actitud obedecía al espíritu de revancha por la derrota de 1870 frente a Alemania, que había logrado apropiarse de Alsacia y Lorena. Para San Petersburgo, el encono surgía del afán expansionista de los Habsburgo sobre los Balcanes. Gran Bretaña fue la última en sumarse. En un principio, su expansión colonial la había conducido a chocar con Francia en África y con Rusia en el norte de la India. Pero cuando el acelerado desarrollo de Alemania convirtió a ese país en un potencial rival, Londres se unió a París y ambas metrópolis delimitaron sus áreas de influencia en el norte de África. Después de la derrota sufrida a manos de Tokio, el imperio de los Romanov perdió entidad ante los ojos de Londres como potencia antagónica en Asia. En 1907, la Triple Entente ya estaba en pie.

Antes del atentado de Sarajevo, las sucesivas crisis en el norte de África y los Balcanes alentaron la carrera armamentista y confirmaron el nuevo sistema de alianzas. En dos ocasiones, 1905 y 1911, Alemania cuestionó el avance de Francia sobre Marruecos; sin embargo, la solidez de los lazos forjados entre París y Londres frenó la revisión del statu quo impulsada por Berlín.

El escenario balcánico era extremadamente complejo. El debilitamiento de Estambul, si bien alimentaba la creciente rivalidad entre los Habsburgo y los Romanov, también daba paso a los objetivos encontrados de las diferentes comunidades y los nuevos países emergentes en la región. La gran mayoría de los grupos que habitaban los Balcanes eran eslavos instalados allí desde el siglo VI, pero los albanos reivindicaban, asimismo, su condición de pueblo originario. Las distintas trayectorias históricas de los pueblos de esta zona dejaron marcas propias que contribuyeron a la configuración de espacios sociales y culturales contrastantes. Los eslavos del norte –croatas, eslovenos y eslovacos– quedaron incluidos en el imperio de los Habsburgo, mientras que los del sur –serbios, macedonios y montenegrinos– fueron sometidos por los otomanos. El catolicismo romano se consolidó en el noroeste de la región bajo el control de Viena y la religión griega ortodoxa prevaleció en el sudeste. Cabe señalar que muchos se convirtieron a la religión musulmana, dado que les permitía aspirar a mejores condiciones políticas y sociales en el seno del imperio. Este fue el camino que siguieron los albanos y gran parte de los eslavos (el caso de los bosnios). Si bien la religión fue una de las grandes líneas divisorias, no basta para explicar por sí sola los conflictos entre los nacionalistas que aspiraban a la independencia en esta región.

La explosiva fragilidad de la situación balcánica pasó a ocupar el centro de la escena a principios del siglo XX. Viena, que ejercía un protectorado sobre Bosnia-Herzegovina, decidió anexar estos territorios en 1908 para consolidar su posición en los Balcanes. Esta acción exacerbó el malestar en Serbia, donde ganaban terreno los sectores nacionalistas más duros y partidarios de un acercamiento a Rusia, ya que sus pobladores no tenían dudas de que Bosnia era parte de su territorio histórico.

En 1912 estalló la primera guerra balcánica, que expulsó por completo a los otomanos de la región, y Macedonia fue repartida entre Serbia, Bulgaria y Grecia. A partir del retiro de Estambul, la crisis en los Balcanes se concentró en la persistencia de la dominación de los Habsburgo y en la delimitación de las fronteras entre los estados emergentes en la región. Los países europeos intervinieron activamente en este último aspecto. Ni Italia ni Austria aceptaban una Serbia con salida al mar, y en consecuencia, después de la primera guerra balcánica, apoyaron la creación de Albania. El nuevo país reclamó la anexión de Kosovo, poblada mayoritariamente por albaneses, pero los serbios –que acababan de expulsar a los otomanos– se negaron rotundamente. Los albaneses y los serbios de Kosovo formaron guerrillas para expulsarse mutuamente.

Al año siguiente de la derrota de los turcos estalló otra guerra, esta

vez por diferencias entre los países balcánicos sobre el reparto de Macedonia, recientemente recuperada. Bulgaria fue la gran derrotada, ya que perdió casi todas las tierras ganadas en la primera guerra. Serbia y Grecia, en cambio, salieron beneficiadas.

Los resultados de las guerras balcánicas (1912 y 1913) endurecieron la posición de Viena frente a los serbios. El creciente poder de estos ponía en peligro el control de los Habsburgo sobre los territorios y las poblaciones eslavas del norte de los Balcanes. Cuando un nacionalista serbio asesinó en Sarajevo a Francisco Fernando, futuro emperador de Austria, y a su esposa, que estaban de visita en Bosnia, la corona austríaca asumió una postura intransigente.

Respondiendo al ultimátum de Austria a Serbia, Rusia movilizó sus ejércitos y Alemania le declaró la guerra al imperio zarista. Entre el 3 y el 4 de agosto de 1914, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. El ciclo se cerró entre el 6 y el 12 de agosto, cuando AustriaHungría le declaró la guerra a Rusia, y Gran Bretaña y Francia aprobaron el enfrentamiento con el imperio Habsburgo.

La acelerada generalización del conflicto fue el corolario del sistema de alianzas creado por las potencias en el marco de la competencia por la supremacía mundial. En el transcurso de la guerra, Japón, Italia, Portugal, Rumania, los Estados Unidos y Grecia ingresaron como aliados de la Triple Entente, mientras que Bulgaria y Estambul se unieron a las potencias centrales. España, Suiza, Holanda, la península escandinava y Albania fueron los únicos países neutrales en Europa.

La Primera Guerra Mundial

Mientras los gobiernos llamaban a las armas, las multitudes patrióticas se reunían en Berlín, Viena, París y San Petersburgo para manifestar su voluntad de defender a la nación.

El fervor patriótico

En aquellas primeras semanas de 1914 se hacía cada vez más difícil mantener una conversación sensata con alguien. Los más pacíficos, los más benévolos, estaban como ebrios por los vapores de la sangre. Amigos que había conocido desde siempre como individualistas empedernidos, e incluso como anarquistas intelectuales, se habían convertido de la noche a la mañana en patriotas fanáticos y, de patriotas, en anexionistas insaciables.
Todas las conversaciones acababan en frases estúpidas como "Quien no es capaz de odiar, tampoco lo es de amar de veras", o en rudas sospechas. Camaradas con los que no había discutido en años me acusaban groseramente diciéndome que yo ya no era austríaco, que me fuera a Francia o a Bélgica. Más aún: insinuaban con cautela que se debía informar a las autoridades de opiniones como la de que aquella guerra era un crimen, porque los *défaitistes* (esta bella palabra acababa de ser inventada en Francia) eran los peores criminales contra la patria.
Sólo había una salida: recogerse en sí mismo y callar mientras los demás delirasen y vociferasen. No era fácil, porque ni siquiera vivir en el exilio –y yo lo he conocido hasta la saciedad– es tan malo como vivir *solo* en la patria.

Stefan Zweig, *El mundo de ayer. Memorias de un europeo*, Barcelona, Acantilado, 2001.

La nacionalización de las masas, asociada a fines del siglo XIX con el avance de la democracia, favoreció un exaltado patriotismo, que al

estallar la guerra contribuyó a su prolongación, y dio lugar a hondos resentimientos cuando se acordó la paz. Sin embargo, estas concentraciones belicistas no expresaban al conjunto de las sociedades; también hubo pronunciamientos y marchas contra la guerra. Pero cabe señalar que entre los intelectuales la exaltación patriótica encontró una amplia acogida y los casos de abierto rechazo a las armas, como el de Romain Rolland en Francia o el de Bernard Shaw en Inglaterra, fueron aislados.

En cada país, las distintas fuerzas políticas proclamaron la "unión sagrada", que postergaba los conflictos internos. En cada país los dirigentes justificaron su adhesión aludiendo a la defensa de altos valores: los socialistas alemanes bregaban por la preservación de la cultura europea y la liberación de los pueblos oprimidos por la tiranía zarista; los ingleses y franceses defendían a rajatabla la democracia contra el yugo prusiano.

Entre los socialistas, a pesar de que en 1907 la Segunda Internacional había votado el llamado a la huelga general en caso de que estallara la guerra, se impusieron la defensa de la nación y el consenso patriótico. Las únicas excepciones fueron los socialistas serbios, rusos, búlgaros e italianos.

La incorporación a la unión sagrada no significó una traición de los dirigentes de la Segunda Internacional. Entre los trabajadores, que conformaban la principal base social de los partidos socialistas, prevalecía el patriotismo sobre el internacionalismo. Pero, desde 1916, las uniones sagradas comenzaron a resquebrajarse. En el terreno político se alzaron las voces de los dirigentes socialistas que, o bien dejaron de apoyar el esfuerzo bélico no votando los presupuestos de guerra en los parlamentos, o bien, como Lenin, propusieron la ruptura con la Segunda Internacional. Pero la mayoría de los participantes eran centristas que, incluso estando distanciados de las posiciones más patriotas, no estaban dispuestos –como el ala de izquierda– a romper con la Internacional.

En Alemania, la socialdemocracia se dividió. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron los primeros en alejarse del Partido Socialdemócrata aduciendo que había traicionado al internacionalismo proletario. La decidida prédica de ambos contra la guerra, a través del periódico *Espartaco*, creado en 1916, los llevó a la cárcel, de la que sólo salieron al derrumbarse la monarquía. En 1917, el grupo encabezado por Hugo Haase y Karl Kautsky fue expulsado del Partido por haberse negado a votar los créditos de guerra, por lo que fundó el Partido Socialdemócrata Independiente.

Los espartaquistas se les unieron como fracción, con su propio programa y prensa.

La unión sagrada también fue cuestionada por los trabajadores. El abismo entre las invocaciones de los gobiernos al sacrificio común y la desigualdad vivida por la mayoría de la población exacerbó el descontento. En el frente, muchos sólo deseaban regresar a sus hogares.

Cartas desde el frente de batalla

5 de febrero de 1918, Francia, por la noche.

Cariño mío,

Quizás te gustaría saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que (y como te dije antes, me fusilarán si alguien de importancia ve esta misiva) todo el mundo está totalmente harto y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a casa. Esta es honestamente la verdad, y cualquiera que haya estado en los últimos meses te dirá lo mismo.

De hecho, y esto no es una exageración, la mayor esperanza de la gran mayoría de los hombres es que los disturbios y las protestas en casa obliguen al gobierno a acabar como sea. Ahora ya sabes el estado real de la situación.
Yo también puedo añadir que he perdido prácticamente todo el patriotismo que me quedaba, sólo me queda pensar en todos los que estáis allí, todos a los que amo y que confían en mí para que contribuya al esfuerzo necesario para vuestra seguridad y libertad. Esto es lo único que me mantiene y me da fuerzas para aguantarlo. En cuanto a la religión, que Dios me perdone, no es algo que ocupe ni uno entre un millón de todos los pensamientos que ocupan las mentes de los hombres aquí.

Tu querido, Laurie

Carta a su esposa del soldado inglés Laurie Rowlands. Disponible en: news.bbc.co.uk. Véase también el interesante archivo de la BBC, *The great war: 80 years on*, disponible en: news.bbc.co.uk.

Entre 1917 y 1918, la ola de movilizaciones de obreros y soldados provocó la caída de los tres imperios europeos: los Romanov en Rusia, los Hohenzollern en Alemania y los Habsburgo en Austria-Hungría abandonaron el trono sin haber alcanzado la paz.

En la Primera Guerra Mundial murieron veinte millones de personas. La prolongación del conflicto acentuó los efectos mortíferos de los nuevos armamentos: las ametralladoras, con las que se enfrentaba la tradicional carga de la infantería, los poderosos cañones, las granadas, los torpedos, que echaron a pique los barcos mercantes en el Atlántico, y los gases tóxicos, producidos por las grandes empresas farmacéuticas, que se usaron por primera vez en la contienda.

En el frente occidental, los alemanes invadieron Bélgica y penetraron en Francia, pero fueron detenidos en la sangrienta batalla de Ypres, entre octubre de 1914 y mayo de 1915. Desde entonces, el frente se estabilizó y la guerra de movimiento se convirtió en guerra de desgaste.



Los ejércitos de ambos bandos construyeron una red de trincheras

defendidas por alambradas; allí, millones de hombres quedaron atrapados en el barro e inmersos en una horrenda carnicería.

La ofensiva alemana, detenida en Verdún en 1916, costó un tercio de millón de hombres, y la contraofensiva británica en el Somme se llevó un millón de soldados, sin que en definitiva las posiciones se modificaran. En el este, en cambio, las potencias centrales obtuvieron resonantes triunfos. La victoria germana en Tannenberg (1914) marcó la tónica general de la guerra en el frente oriental, caracterizada por el avance alemán y la desorganización rusa.

En 1917 se produjeron dos hechos claves: la Revolución rusa y el ingreso de los Estados Unidos al campo de batalla. La caída de la autocracia zarista desembocó en la toma del poder por los bolcheviques en octubre de ese año. Lenin pidió la paz inmediata para salvar la integridad de Rusia ante el avance alemán. El gobierno soviético abandonó la lucha y finalmente, en marzo de 1918, firmó la paz de Brest-Litovsk con Alemania.

Tratado de Brest-Litovsk

Con la ansiada paz, Rusia perdió el 34% de la población, el 32% de la tierra de cultivo, el 54% de las empresas industriales y el 89% de las minas de carbón. Cedió a Alemania su parte de Polonia, el sector occidental de Bielorrusia y Lituania, se retiró de Ucrania y dejó en manos de Turquía dos provincias georgianas y un distrito armenio. La derrota alemana en noviembre anuló este tratado, que no fue reconocido por los aliados, y se creó una situación de vacío en toda la antigua franja occidental del imperio zarista. Ucrania fue nuevamente anexada por los bolcheviques cuando terminó la guerra civil.

Apenas estalló el conflicto, el presidente estadounidense, el demócrata Woodrow Wilson, proclamó la neutralidad de su país. Pero, dado el peso internacional de los Estados Unidos, esa postura se volvió insostenible. La economía norteamericana estaba fuertemente vinculada a la de los aliados occidentales y el conflicto reforzó esos vínculos: se multiplicaron los intercambios comerciales, y los empréstitos de los bancos americanos a los gobiernos de Europa Occidental llegaron en 1917 a varios billones de dólares. Además, la guerra submarina puesta en marcha por los alemanes provocó el hundimiento de barcos estadounidenses y la muerte de numerosos ciudadanos. Estos ataques conmocionaron a la opinión pública y predispusieron al país contra Alemania.

Si bien después de Brest-Litovsk Berlín concentró todas sus fuerzas en el frente occidental, el agotamiento de soldados y recursos y la llegada de las tropas norteamericanas resolvieron la guerra a favor de la Entente. Tras el desmoronamiento de los imperios centrales, los gobiernos provisionales pidieron el armisticio en 1918. Al año siguiente, los vencedores se reunieron en Versalles para imponer sus tratados de paz a los países derrotados.

La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento de carácter global que afectó al conjunto social de los países involucrados. La población fue movilizada y la economía puesta al servicio de la guerra. La organización de la empresa bélica confirió un papel protagónico al estado. Los gobiernos no dudaron en abandonar los principios básicos de la ortodoxia económica liberal, limitando la hasta entonces amplia libertad de los empresarios. En Gran Bretaña, el primer ministro Lloyd George creó un gabinete de guerra, nacionalizó temporalmente los ferrocarriles, las minas de carbón y la marina mercante, e impuso el racionamiento del consumo de carne, azúcar, manteca y huevos. En Alemania, la economía de guerra planificada fue aún más drástica. En

1914 se creó el Departamento de Materias Primas, que integró todas las minas y fábricas, y se decretó el racionamiento de los alimentos.

La dura experiencia en el campo de batalla alimentó dos actitudes contrapuestas: la de aquellos que ansiaban fervorosamente la paz y la de quienes no encontraban sentido en volver a una vida normal. *Las tormentas de acero* siguieron ejerciendo una atracción especial para estos últimos, quienes optarían por "vivir peligrosamente", como propondría el fascismo en la inmediata posguerra.

Tormentas de acero

El joven alemán –y luego reconocido escritor– Ernst Jünger se presentó como voluntario para acudir al frente el mismo día en que estalló la guerra. Llevó consigo al campo de batalla una libreta de apuntes, en la que recogió los acontecimientos y sus vivencias personales. En 1920, este registro fue publicado bajo el título *Tormentas de acero*: "Instantes como estos en una patrulla nocturna son inolvidables. Ojos y oídos se tensan al máximo; el cada vez más cercano crujido de unos pies extraños que caminan sobre la alta hierba adquiere una intensidad amenazadora y fatídica; la respiración se hace entrecortada y uno ha de esforzarse en reprimir las dolorosas contracciones del jadeo; el seguro de la pistola salta hacia atrás con un leve chasquido y ese sonido atraviesa los nervios como un cuchillo; los dientes rechinan al morder la mecha de la granada de mano. Breve y mortífero será el choque. Uno tiembla entre dos sensaciones dolorosas: la acrecentada excitación del cazador y la angustia de la pieza de caza. Uno es un mundo para sí, empapado de la atmósfera oscura y terrible que sobre el yermo terreno gravita [...]. Aquellas figuras dieron todavía unos pasos más hacia nosotros, pero luego se pusieron a trabajar en la alambrada; no habían notado nuestra presencia. Muy lentamente comenzamos a arrastrarnos hacia atrás, sin perderlas de vista un solo momento. La Muerte, que se había alzado, expectante al máximo, entre los dos bandos, se alejó de allí malhumorada".

Las paces

El Comité de los Cuatro, que decidió la suerte del mundo de posguerra, se reunió en el imponente palacio de Versalles, en Francia. Los estadistas que habrían de rediseñar el orden europeo tenían significativas diferencias en cuanto a la apreciación de la situación y los fines propuestos. El presidente estadounidense Wilson ya había presentado ante el Congreso de su país una serie de puntos para alcanzar la paz a través de la restauración de un orden económico liberal y la reformulación del mapa europeo teniendo en cuenta la autodeterminación de los pueblos. El jefe de gobierno francés, Georges Clemenceau, ansiaba, en cambio, que la economía alemana contribuyera a la recuperación de su país, desangrado por el conflicto, y que se le impusiera a Alemania un sólido control militar para impedir nuevas invasiones. El primer ministro británico, Frank Lloyd George, tenía una posición más conciliadora con los vencidos, pues no creía que la ruina de Alemania fuera conveniente para la recuperación de Europa. El jefe de la delegación italiana, Vittorio Orlando, estaba básicamente preocupado por la anexión por parte de Roma de territorios que hasta el momento habían pertenecido al imperio

austríaco. El gobierno revolucionario de Rusia quedó excluido, y aunque los vencedores anularon el tratado de Brest-Litovsk, los territorios que los bolcheviques habían perdido frente a Alemania no les fueron restituidos.



El Palacio de Versalles fue construido en el siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV. En 1871, después de la victoria alemana sobre los franceses, se proclamó el nuevo imperio alemán en el Salón de los Espejos, uno de los recintos del palacio. Al terminar la Gran Guerra, la monarquía alemana se derrumbó, pero en Francia prevalecía el afán de revancha.

Italia no vio satisfechos todos sus reclamos en la mesa de negociaciones. En cuanto a la suerte de Alemania, acabó imponiéndose la línea dura de Clemenceau. Frente a este resultado, el economista Keynes, miembro de la delegación británica, abandonó "esa escena de pesadilla", desilusionado porque Lloyd George no había encontrado una "forma de hacer del Tratado un documento justo y prudente".

No hubo paces negociadas. Los vencidos, declarados culpables del conflicto bélico, debieron someterse a las condiciones impuestas por los vencedores: pérdida de territorios, restricciones a las fuerzas armadas y pago de indemnizaciones de guerra.

Las resoluciones aprobadas en Versalles afectaron a Europa y a vastas zonas de la periferia colonial. El trazado de las fronteras de Europa Oriental conjugó distintos objetivos. En primer lugar, asegurar el debilitamiento de Alemania. Para esto, se prohibió que el nuevo y pequeño estado nacional austríaco, mayoritariamente habitado por alemanes, fuese parte de Alemania; Berlín fue despojada de sus colonias; se redujo su territorio y los aliados asumieron el control de algunas zonas, como el Sarre y Renania. En segundo lugar, crear un cordón sanitario en torno a Rusia, integrado por los países que habían sido sojuzgados por el imperio zarista. En relación con estos fines y en virtud de la desintegración del imperio austro-húngaro y del vacío dejado por la crisis del imperio zarista, en París se dibujó un nuevo mapa europeo.

Del Báltico a los Balcanes fueron reconocidos como nuevos estados: Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia –antes parte del imperio zarista–; Austria, Checoslovaquia y Hungría –habían integrado el imperio de los Habsburgo–; Polonia –hasta entonces dividida entre Prusia, Austria y Rusia– recuperó su unidad, y además se fundó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (Yugoslavia a partir de 1929) con zonas y poblaciones que habían estado bajo la dominación de los turcos (Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Macedonia) y los Habsburgo (Croacia, Eslovenia, Eslavonia, parte de Dalmacia y Voivodina).

Sólo Turquía, después del triunfo de Mustafá Kemal en la guerra contra los griegos que ocupaban Anatolia, logró que el duro tratado de Sèvres firmado por el sultán fuera reemplazado por el de Lausana en 1923. De acuerdo con este último, Turquía no debió pagar indemnizaciones de guerra y la soberanía del nuevo estado nacional se extendió sobre Anatolia, Armenia, Kurdistán y Tracia Oriental. Mientras el tratado de Sèvres contemplaba la posibilidad de reconocer un estado nacional para el pueblo kurdo, el de Lausana dispuso que el

territorio de Kurdistán fuese dividido entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Los kurdos, al igual que los palestinos, atravesaron el siglo XX sin que la comunidad internacional atendiera sus reclamos de un estado nacional propio.

El genocidio armenio

A lo largo del siglo XIX, Armenia quedó dividida entre los otomanos y el imperio zarista. Ante la aplastante derrota que en 1915 infligió Moscú al ejército otomano, el gobierno culpó a los armenios de haber colaborado con los rusos. La represión se extendió sobre vastos sectores de la sociedad: ejecuciones, arrestos, y el desplazamiento obligado hacia los desiertos de Siria en condiciones que condujeron a la muerte de la mayoría. Gran parte de los historiadores occidentales coincide en calificar como genocidio la violencia ejercida sobre los armenios. Turquía no acepta que hubiera un plan organizado por el estado para eliminar a la población armenia; las muertes habrían resultado de la decisión del gobierno otomano de reprimir una sublevación. Este es uno de los debates que afecta el ingreso de Turquía a la Unión Europea.

Durante la Gran Guerra, ninguno de los pueblos sometidos creó dificultades serias a su metrópoli: la dominación de setecientos millones de personas por doscientos millones de europeos parecía indiscutible. En Versalles, las metrópolis europeas siguieron decidiendo el destino de los pueblos colonizados.

Cuando estalló el conflicto, Gran Bretaña promovió la liquidación del imperio otomano. En el caso de Egipto, se ignoraron sus vínculos con Estambul y se lo convirtió en protectorado inglés. Respecto de Oriente Medio, Londres aprobó tres iniciativas que tendrían consecuencias de largo alcance. En primer lugar, alentó a los árabes de la península arábiga a combatir contra los turcos; prometió al jefe de la dinastía hachemita que custodiaba la ciudad santa de La Meca la creación de un reino árabe independiente, y además envió al oficial Thomas Edward Lawrence para que organizara la Revuelta del Desierto. Simultáneamente, firmó el tratado Sykes-Picot con Francia, por el cual, al concluir el conflicto, ese país ocuparía Siria y el Líbano y Gran Bretaña se haría cargo de la Mesopotamia y Palestina (que en ese momento incluía los actuales territorios de Israel, Jordania y los asignados a la Autoridad Palestina). Por último, en noviembre de 1917, el ministro británico de Asuntos Exteriores Arthur Balfour, en una carta enviada al banquero judío Lord Rotschild, declaró que su país veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un Hogar Nacional para el pueblo judío. Con esta declaración, Londres reconocía la instalación de los judíos en el territorio palestino que el movimiento sionista ya venía concretando.



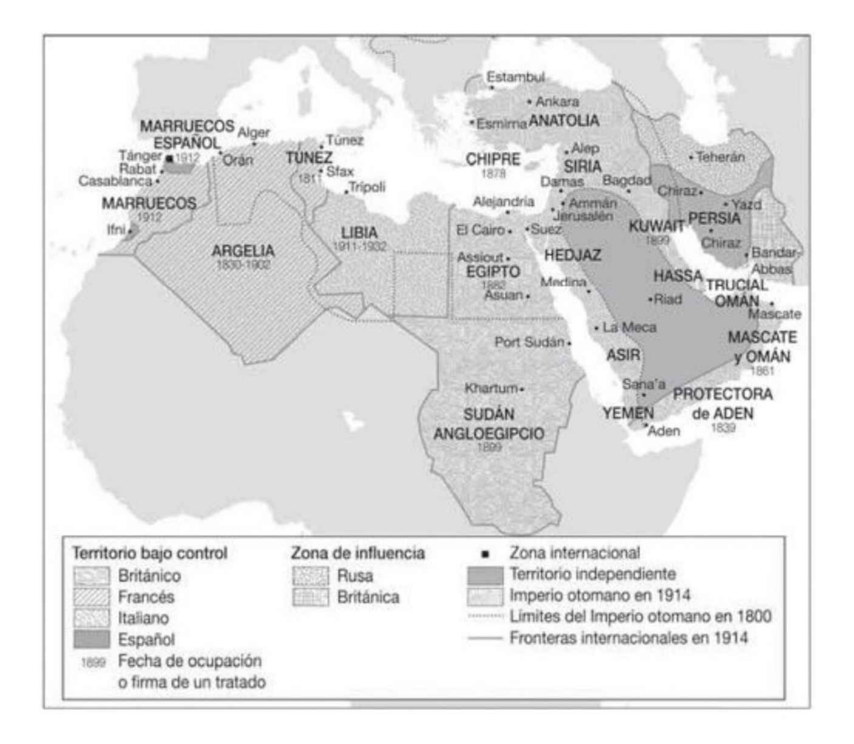
Europa antes de la Primera Guerra Mundial.



Europa después de la Primera Guerra Mundial.

En la inmediata posguerra, todos estos territorios de Oriente Medio fueron repartidos bajo la figura de mandato según lo estipulado en el pacto Sykes-Picot. Si bien los árabes no pudieron establecer el reino que se les había prometido, Gran Bretaña les concedió a los jefes hachemitas el gobierno, bajo su supervisión, del reino de Irak (en Mesopotamia) y del emirato de Transjordania (parte del territorio palestino). Londres se reservó el control directo sobre el mandato de Palestina.

La península arábiga fue el único territorio árabe al margen de la dominación europea; tampoco la dominación turca había logrado imponerse del todo. Mientras los lugares santos estuvieron bajo la autoridad de los hachemitas, el centro de la península quedó sujeto a las guerras entre tribus beduinas por el control de los escasos recursos. En esta zona ganó terreno el wahabismo, una versión ortodoxa del credo musulmán: sólo la aplicación estricta de la Sharia –ley islámica– y la yihad –guerra santa– purgarían los elementos dañinos que socavaban la pureza y la fortaleza del islam. Desde principios del siglo XX hasta los años treinta, Abd al-Aziz Ibn Saud, fundador de la actual dinastía gobernante en Arabia Saudita, encabezó con el apoyo del clero wahabita la yihad que culminaría con la creación del reino saudita.



Oriente Próximo en 1914.

Las colonias alemanas también fueron distribuidas en mandatos. En África, Gran Bretaña se quedó con Tanganica, parte de Camerún y Togo; Francia obtuvo parte de Togo y de Camerún; Bélgica, los sultanatos de Ruanda y Burundi, y la Unión Sudafricana ganó África Sudoccidental, la actual Namibia. En el Pacífico, los archipiélagos situados al norte del Ecuador pasaron a manos de Japón; una parte de Nueva Guinea y algunas islas del sur fueron entregadas a Australia, y Nueva Zelanda recibió Samoa Occidental.

En el caso de la República China, se resolvió que las posesiones alemanas pasaran a Japón, desconociendo la integridad territorial de la república. Aunque sin presionar a fondo sobre Japón, los Estados Unidos fueron el país más interesado en preservar la integridad territorial de China.

La Revolución rusa

La Revolución rusa fue la gran revolución del siglo XX y, mientras perduró el régimen soviético, alentó en gran parte de aquellos que rechazaban el orden burgués la convicción de que era factible oponer una alternativa a las crisis y la explotación del capitalismo. Simultáneamente, cuando los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno, el campo socialista se fracturó entre quienes disciplinadamente asumieron esta acción como el ejemplo a seguir y quienes la consideraron un nefasto salto al vacío.

Las esperanzas alentadas y los temores suscitados por la Revolución rusa tiñeron las explicaciones sobre sus causas y su rumbo. Las pasiones ideológicas dejaron sus huellas, quizás inevitablemente, en todas las lecturas. En el presente, el fin de la Guerra Gría y la apertura de nuevos archivos han aligerado las cargas emocionales y enriquecido la producción historiográfica. No obstante, tanto en el pasado –en su condición de revolución anticapitalista exitosa– como en el presente –a través de la crisis del socialismo real–, la consideración de esta experiencia histórica se entrelaza con la toma de posiciones sobre los posibles diseños de nuestro tiempo y del que vendrá.

La Rusia de los zares

A mediados del siglo XVIII, la economía de la Rusia zarista no presentaba diferencias notables con la de los principales centros europeos. Un siglo después, los contrastes eran evidentes. En el mundo rural prevalecían las técnicas de explotación rudimentarias y las condiciones de vida de las familias campesinas eran muy precarias. El feudalismo seguía vigente: en la cima, una nobleza terrateniente parasitaria que sostenía su alto nivel de consumo a través de la explotación del campesinado, y en la base, los siervos sin libertad de movimiento y sujetos a prestaciones en dinero, especies o servicios laborales a sus señores, que gozaban de poderes de vida o muerte sobre ellos.

Los campesinos, agrupados por familias, integraban la comunidad aldeana que controlaba la distribución y utilización de las tierras. La tierra pertenecía *de iure* a la comunidad y las familias recibían las parcelas –asignadas por el *mir* o consejo de la aldea– para usarlas durante períodos determinados, al cabo de los cuales volvían a ser redistribuidas. El *mir* regulaba la explotación común de la tierra y controlaba que cada integrante cumpliese con sus obligaciones, lo que dejaba escaso margen al individualismo, pero al mismo tiempo era una especie de escudo frente a las exacciones del señor o del estado.

Periódicamente, el campesinado emprendía acciones violentas contra los terratenientes y los agentes estatales. Para resguardar el orden social se dispuso en 1861 la liberación de los siervos: "Es mejor destruir la servidumbre desde arriba –manifestó el zar Alejandro II en un encuentro con nobles– que esperar que empiece a destruirse a sí misma desde abajo". El edicto de emancipación liberó a los campesinos

de su subordinación a la autoridad directa de la nobleza latifundista, pero los mantuvo sujetos a la tierra restándoles toda posibilidad de salir del atraso y la miseria. Los campesinos recibieron para su uso, pero no en propiedad privada, las mismas tierras que labraban antes de la reforma. Además, dado que los antiguos siervos estaban obligados a pagar su libertad, el mir tomó a su cargo los así llamados "pagos de redención". Ningún campesino podía abandonar la aldea sin haber saldado su deuda y el mir se aseguraba de que así fuera para que el resto de los pobladores no viera acrecentado el monto de sus obligaciones.

El nuevo sistema ofrecía escasas posibilidades de concentrar las parcelas en manos de propietarios dispuestos a introducir mejoras para obtener ganancias. La liberación de los siervos no dio lugar al surgimiento de propietarios rurales interesados en el aumento y la comercialización de los productos agrarios. La nobleza terrateniente decayó económicamente con la abolición de la servidumbre, y sólo una minoría de nobles encaró una transición exitosa hacia la agricultura capitalista y orientada al mercado. Los límites impuestos por Francia e Inglaterra al avance del imperio ruso en los Balcanes en la década de 1870 indujeron a la monarquía a promover el desarrollo industrial.

En cierto sentido, la industria rusa era una de las más modernas: estaba muy concentrada y más de la mitad del proletariado trabajaba en emprendimientos que empleaban a más de quinientas personas. Las huelgas a gran escala eran habituales e incluían demandas políticas además de económicas. Pero las grandes fábricas y el movimiento obrero asociado a su existencia se concentraban en islotes aislados –San Petersburgo, Moscú, Kiev, Jarkov y los centros mineros de la cuenca del Don en Ucrania; Rostov y la ciudad petrolera de Bakú en el Cáucaso–, rodeados por un mar de campesinos.

Si bien el estado desempeñó un papel central en el giro hacia la modernización, los zares y la mayor parte de la nobleza rusa se empeñaron en resguardar el orden social y político del antiguo régimen, orden sobre el que reposaba su inmenso poder. En relación con esta contradicción, las actitudes de los tres últimos Romanov fueron diferentes.

El zar Alejandro II (1855-1881) acompañó el edicto de emancipación de los siervos con una serie de medidas destinadas a organizar el sistema judicial, mejorar las condiciones de vida de la población mediante la creación de gobiernos locales –los zemstvos– y posibilitar el ingreso a la universidad de nuevos estratos sociales. El "zar liberador" murió en 1881, víctima de un atentado terrorista. La represión fue brutal y sus sucesores, Alejandro III (1881-1894) y Nicolás II (1894-1917), se atrincheraron para preservar sus extendidos y arbitrarios poderes. El principal empeño de la monarquía en los años previos a la guerra fue resguardar, e incluso restaurar, las tradiciones de la antigua Rusia. La tenacidad y la ceguera con que el último Romanov se comprometió a cumplir este objetivo clausuraron toda posibilidad de reforma y contribuyeron decisivamente al derrumbe del régimen a través de la revolución.

Los intelectuales y la tradición revolucionaria

A mediados de la década de 1870, miles de estudiantes decidieron ir al pueblo. El movimiento no tenía una conducción ni un programa definidos: se trataba de cumplir un deber con los oprimidos. La "ida al pueblo" fue la materialización de ideas y sentimientos que habían fermentado entre los populistas (narodniki). Este sector de la elite educada rusa rechazaba la autocracia zarista y reconocía en las bondades del pueblo explotado la clave para salir del atraso y regenerar las condiciones de vida. Los miembros de la *intelligentsia* se consideraban unidos por algo más que su interés en las ideas: compartían el afán por difundir una nueva actitud ante la vida. Este grupo no tenía equivalente exacto en las sociedades occidentales, aunque era una consecuencia del impacto de Occidente en Rusia. La *intelligentsia* era producto del contacto cultural entre dos civilizaciones

dispares. La conciencia de la distancia con Europa Occidental alimentó la decisión de parte de la minoría educada de llevar a cabo una misión que regeneraría la vida rusa, por entonces atrapada entre el despotismo del gobierno y la ignorancia y la miseria de las masas.

Los populistas no formaron un partido político ni elaboraron un conjunto coherente de doctrina, más bien dieron vida a un movimiento radical cuyos planteos iniciales se formularon en los círculos reunidos en torno a Alejandro Herzen y Visarión Belinsky en las décadas de 1830 y 1840.

El movimiento adquirió consistencia al calor de los disturbios sociales y los debates intelectuales que siguieron a la muerte del zar Nicolás I (1825-1855) y a la derrota en la guerra de Crimea. Se expandió y ganó influencia durante las décadas de 1860 y 1870 y alcanzó su culminación con el asesinato del zar Alejandro II, para declinar después. Su compromiso con el pueblo se nutría en gran medida del sentimiento de culpa: "¿Pero qué derecho tenía yo –se preguntaba el anarquista ruso Pedro Kropotkin– a estos altos goces cuando a mi alrededor sólo había miseria y lucha por un rancio trozo de pan, cuando todo lo que gastase para poder vivir en ese mundo de elevadas emociones necesariamente debía quitarlo de la misma boca de quienes cultivaron el trigo y no tienen pan suficiente para sus hijos?".

La aldea rural según Herzen

La comuna rural rusa subsiste desde tiempo inmemorial y hay formas bastante parecidas en todas las tribus eslavas. Donde no existe realmente, sucumbe bajo la influencia germánica. Entre los serbios, búlgaros y montenegrinos se conserva todavía más pura que en Rusia. La comuna rural representa, por así decirlo, la unidad social; es una instancia moral. El estado no tendría que haber ido nunca más allá, porque la comuna rural es la propietaria, la instancia que impone. Es responsable por todos y cada uno y, por consiguiente, es autónoma en todo lo que concierne a sus asuntos internos.

Su principio económico es la antítesis perfecta de la célebre máxima de Malthus: deja a cada uno, sin excepción, ocupar un lugar en su mesa. El campesino ruso ha soportado muchas cosas, ha sufrido en demasía y sufre aún en este momento, pero se ha mantenido fiel a sí mismo. Aislado en su pequeña comuna, desvinculado de los suyos y dispersos todos en la inmensa extensión del país, encontró en la resistencia pasiva y en la fuerza de su carácter los medios para conservarse. Ha agachado profundamente su cabeza, de tal modo que la desgracia le ha pasado por encima sin tocarlo. He aquí por qué, a pesar de su situación, el campesino ruso posee tanta agilidad, tanta inteligencia y tanta belleza, que han provocado la admiración de Custine y de Haxthausen.

Alejandro Herzen (1850-1851), "Sobre la comuna rural en Rusia", en *El desarrollo de las ideas revolucionarias en Rusia*, Apéndice primero. Disponible en: www.antorcha.net.

El afán de los populistas por superar el atraso ruso no los condujo a proponer el camino de la industrialización; por el contrario, el alto grado de opresión que reconocían en Occidente los llevó a rechazar la vía del capitalismo como antesala del socialismo: para ellos, el progreso social o económico no estaba inexorablemente ligado a la revolución industrial. La clave estaba en la liberación del mir de la opresión ejercida por los terratenientes y la monarquía.

El populismo también descartó las metas del liberalismo occidental. Para los radicales rusos, el gobierno constitucional y las libertades políticas eran promesas vanas destinadas a ocultar la supremacía política de los explotadores del pueblo. La desconfianza hacia los partidos políticos alimentó la atracción del anarquismo, ya fuera en su versión espontaneísta –el levantamiento de los oprimidos– o vanguardista –la insurrección concretada por la elite revolucionaria–.

Cuando los jóvenes se trasladaron a las aldeas, los campesinos escucharon "con sorpresa, estupor y a veces con desconfianza a aquellos extraños peregrinos", y el zarismo los reprimió duramente. En el congreso de 1879, los populistas se dividieron: un grupo abandonó la idea de la revolución campesina para asumir el terrorismo, y el otro rechazó el uso de la violencia. Los primeros asesinaron al zar Alejandro II en 1881 e intentaron sin éxito terminar con la vida de Alejandro III en 1887. Entre los condenados a muerte por esta última acción estuvo Alexander Uliánov, hermano mayor de Lenin.

Las principales figuras del minúsculo grupo que había impugnado el asesinato político –Georgi Plejánov, Vera Zasúlich y Piotr Axelrod– revisaron en el exilio sus ideas sobre el rol revolucionario del campesinado y a principios de la década de 1880 adhirieron al marxismo, fundando el grupo Emancipación del Trabajo con el fin de organizar a la clase obrera.

Los revolucionarios rusos habían seguido con atención la obra de Karl Marx. En 1881, Zasúlich le preguntó si existía una *necesidad histórica* que obligara a todos los países del mundo a atravesar todas las fases de la producción capitalista antes de llegar al socialismo. Marx respondió que el surgimiento del capitalismo no era inevitable fuera de Europa Occidental, pero la cuestión sobre el advenimiento del socialismo quedó flotando. Siete años después, Engels fue más contundente: la estructura social modela la historia al margen de las intenciones de los hombres; si las estructuras son precarias, "la gente que encienda la mecha será barrida por la explosión".

La formación de grupos marxistas en Rusia en la década de 1890 fue producto del rechazo de un sector de los intelectuales radicales a la vía terrorista y de la creciente gravitación de la clase obrera al calor de la rápida industrialización de esos años. Los marxistas, a diferencia de los populistas, no reprobaron la modernización asociada al crecimiento de la industria. En 1898, un congreso clandestino aprobó en Minsk la creación del Partido Socialdemócrata Ruso de los Trabajadores para organizar la lucha sindical y política de la clase obrera.

En el Congreso de 1903 los socialdemócratas se dividieron: por un lado quedaron los mencheviques (minoría), encabezados por Julij Martov, y por el otro los bolcheviques (mayoría), liderados por Lenin. Martov proponía un partido de masas, abierto a la inclusión de los simpatizantes; Lenin abogaba por un pequeño partido de disciplinados revolucionarios profesionales. En este caso, León Trotsky se pronunció a favor de los mencheviques. Este primer choque fue sólo la punta del témpano. Cada una de las tendencias sostenía ideas y sensibilidades signadas por contrastes que se profundizaron a partir de la crisis revolucionaria de 1905. Los mencheviques adherían a los postulados más ortodoxos del marxismo y eran más pesimistas: el socialismo no tendría cabida hasta que la revolución democrática burguesa concretara los cambios económicos, sociales y políticos necesarios para su arraigo. A partir de este diagnóstico, se mostraban dispuestos a colaborar con la burguesía liberal en la lucha contra el antiguo régimen. Entre los bolcheviques prevalecieron el voluntarismo político, la disciplina férrea y la escasa disposición a la concertación con otras fuerzas. En última instancia, los mencheviques coincidían más acabadamente con el ideario de Marx, mientras que los bolcheviques reproducían actitudes semejantes a las de los populistas.

El ciclo revolucionario 1905-1917

La primera conmoción revolucionaria estalló en 1905, en el marco de

la crisis provocada por la derrota en la guerra contra Japón. El 9 de enero de ese año (el "domingo sangriento"), una manifestación que pedía pan fue violentamente reprimida. A mediados de octubre, la huelga general en San Petersburgo condujo a la creación del primer sóviet o consejo integrado por delegados de los trabajadores elegidos en las fábricas. Se sumaron representantes de los partidos revolucionarios y Trotsky, que aún adhería a la tendencia menchevique, fue uno de sus líderes. A la movilización de los obreros se sumaron, desde mediados de 1905, los levantamientos de los campesinos que atacaban las propiedades de los grandes señores. En el marco de la agudización del conflicto social, los liberales presionaron a la autocracia zarista para que propiciara un régimen constitucional. La monarquía logró salvarse porque firmó la paz y contó con el ejército para reprimir, y porque además tuvo la astucia de conceder reformas.

En octubre, Nicolás II anunció la creación de un Parlamento electivo nacional: la Duma. Pero el zar se recuperó pronto del pánico de 1905 y pretendió reafirmarse como autócrata de todas las Rusias. La historia política de la docena de años que separan a 1905 de 1917 se caracteriza por un proceso de progresiva decadencia del cuerpo legislativo. Las sucesivas Dumas fueron simples organismos consultivos sujetos a la voluntad del monarca, quien rápidamente redujo los alcances del derecho a votar. La revolución liberal se agotó antes de ponerse en marcha.

Frente a la extendida insurrección campesina, se dio curso a un proyecto que alentaba la expansión de los kulaks y la liquidación del mir. La estabilidad social, según este diseño, requería una base social interesada en promoverla, de modo que el estado debía contribuir a la formación de una clase media rural propietaria capaz de prosperar. Fueron abolidas las cargas asociadas a la supresión de la servidumbre y se concedieron créditos destinados a la compra de tierras. Los campesinos más exitosos, los kulaks, abandonaron la comunidad para comportarse como propietarios interesados en incrementar el rendimiento de sus tierras y compraron nuevas parcelas a los terratenientes deseosos de vender después de la insurrección campesina. La reforma acentuó y aceleró el proceso de diferenciación social en el medio agrario.

Sin embargo, los acontecimientos de 1905 no modificaron la conducta de Nicolás II. El gobierno continuó envuelto en una atmósfera de creciente corrupción y decadencia, que hizo posible que una oscura figura como Rasputín fuera favorito de la zarina. Después de su asesinato en diciembre de 1916, el zar y la zarina, resentidos por la violenta muerte de su sagrado amigo, se aferraron aún con mayor obstinación a sus métodos tradicionales.

La Primera Guerra Mundial potenció las debilidades del imperio ruso. Como en 1905, ante la ineficiencia del gobierno y los sacrificios impuestos por la contienda, las manifestaciones populares y el distanciamiento de los liberales colocaron al zarismo ante una crisis que, en esta ocasión, desembocó en su caída. En 1917 hubo dos revoluciones, la primera en febrero y la segunda en octubre. La de febrero hizo suponer que Rusia, con retraso, seguiría el camino ya transitado en Europa Occidental: la eliminación del absolutismo para instrumentar un cambio social y político conducido por la burguesía. Pero la acción de los bolcheviques en octubre clausuró esta vía, cuyas bases por otra parte eran muy frágiles debido a las condiciones sociales y económicas y a los rasgos distintivos de la cultura política rusa.

Cuando las masas ocuparon las calles a fines de febrero de 1917, casi nadie visualizó un movimiento revolucionario. La crisis social fue considerada una protesta popular no sólo por el zar, la corte y la oposición liberal, sino por los propios partidos revolucionarios. Pero, a diferencia de 1905, la guerra siguió, la disciplina del ejército se quebró y el zar ya no tuvo nada que ofrecer. Los diputados de la Duma pidieron su renuncia para poder formar un gobierno provisional que habría de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero las masas movilizadas, especialmente los obreros, retuvieron el poder ganado en las calles con la creación, nuevamente, de los sóviets: el organismo más próximo y fiel a sus intereses y necesidades. Mientras los

socialistas quedaban cada vez más escindidos entre su participación en estas asambleas y su creciente compromiso con el gobierno provisional, los bolcheviques apostaron a la caída del gobierno central con la consigna impulsada por Lenin en abril: "Todo el poder a los sóviets".

La dualidad de poderes y la persistencia del agotador esfuerzo bélico desembocaron en un vacío de poder, y Lenin decidió tomar el gobierno. El asalto al Palacio de Invierno fue públicamente rechazado por algunos dirigentes de la cúpula bolchevique y dividió al socialismo. A pesar de ser una acción anunciada, el equipo gobernante fue incapaz de organizar su defensa. Así fue como, en el mismo momento en que los delegados de toda Rusia llegaban a la sede del Congreso soviético, los bolcheviques ingresaron en el Palacio de Invierno y detuvieron a los ministros con el apoyo de los obreros armados. No hubo una jornada revolucionaria: entre el 25 y el 26 de octubre de 1917 los bolcheviques tomaron un poder que nadie detentaba. El glorioso Octubre Rojo fue una construcción posterior, destinada a exaltar la acción mancomunada de los bolcheviques y la clase obrera.



John Silas Reed, periodista y militante socialista estadounidense. Cuando estalló la revolución en México, se trasladó a las zonas de combate, tomó contacto con las tropas de Pancho Villa y dejó un retrato de esta lucha en el libro *México en armas*. En 1917 viajó a Rusia, donde tomó nota de los eventos revolucionarios, entrevistó a los protagonistas y reunió todo este material en el texto *Diez días que conmovieron al mundo*, su obra más difundida. Enfermo de tifus, falleció en Rusia, y allí fue enterrado como héroe de la revolución.

Después de un tenso debate en el que los mencheviques y parte de los social-revolucionarios reprobaron la conducta bolchevique, el Congreso de sóviets aprobó la destitución de los ministros socialistas y el gobierno quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom), exclusivamente integrado por bolcheviques a pesar de las objeciones de sectores del movimiento obrero y de algunos miembros del Comité Central bolchevique. Las posiciones en el campo revolucionario se hicieron cada vez más inconciliables. Los socialistas

revolucionarios de derecha y los mencheviques proponían un orden democrático burgués porque pensaban que Rusia estaba lejos de reunir las condiciones para construir el socialismo. Los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda se suponían embarcados en una oleada revolucionaria impulsada por los horrores de la Gran Guerra, oleada que se extendería a Europa Occidental, en especial a Alemania, y posibilitaría así el avance del comunismo en Rusia.

En lo inmediato, la promulgación de los decretos de paz y el reparto de tierras aseguraron un significativo grado de adhesión al nuevo gobierno. Su apoyo principal provenía de la clase obrera, como quedó reflejado en las elecciones constituyentes de noviembre. Pero el partido gobernante estuvo lejos de ser el más votado, ya que el grueso del campesinado apoyó a los social-revolucionarios. La Asamblea Constituyente reunida en enero de 1918 sesionó unas horas. Lenin la descalificó y reconoció a los sóviets como una "forma de democracia superior". La manifestación en apoyo a la Asamblea fue disuelta a balazos.

La explicación del Octubre Rojo dividió el campo historiográfico. Para unos, no fue sino un golpe de un partido dictatorial que resultó viable debido al profundo quebrantamiento de la ley y el orden. Desde esta perspectiva, sus dirigentes cargarían con la responsabilidad de haber generado un régimen totalitario con rasgos similares al nazifascismo. Para otros, la acción de los bolcheviques contó con el apoyo de los trabajadores y los soldados de los centros urbanos, que, hastiados de la guerra, la falta de trabajo y el hambre, intentaron promover un cambio radical hacia la igualdad social. Los primeros afirman la continuidad entre Lenin y Stalin, y los segundos atribuyen a los desafíos del contexto, en especial a la guerra civil, la transformación de un partido flexible y revolucionario en una organización capaz de crear el Gulag.

Guerra civil y comunismo de guerra

En contraste con las dilaciones del gobierno provisional, los bolcheviques encararon inmediatamente las demandas de paz y tierra. El decreto sobre la tierra, aprobado en noviembre de 1917, abolió la propiedad privada de las grandes unidades y entregó su control a los comités agrarios locales y a los sóviets de distrito. La confiscación fue seguida por la ocupación desordenada de los grandes latifundios por las familias campesinas. El decreto tenía un propósito político: ganar apoyo en el medio rural, donde los bolcheviques no contaban con fuerzas propias. La medida fue bien recibida por el ala izquierda de los social-revolucionarios, que se incorporaron al Consejo de Comisarios del Pueblo.

Los bolcheviques pretendieron frenar la subdivisión de las tierras con la promoción de grandes granjas colectivas (*koljoses*) y la creación de granjas estatales (*sovjoses*). Estas iniciativas tuvieron escasa acogida en las aldeas y, a partir de mediados de 1918, la política agraria se subordinó a la necesidad de ganar la guerra civil.

La paz con Alemania, defendida con ahínco por Lenin para proteger al nuevo régimen, generó resistencias entre los social-revolucionarios aliados y la izquierda del partido, especialmente en Nicolás Bujarin; para estos, la continuación de la guerra contribuiría a expandir la revolución. Más cerca de Bujarin que de Lenin, Trotsky, a cargo de las negociaciones, demoró al límite la firma de la paz. El avance de los alemanes lo llevó a aceptar, en marzo de 1918, el tratado de Brest-Litovsk. Los social-revolucionarios rompieron con los bolcheviques y asesinaron al embajador alemán para impedir el cese de las hostilidades.

Apenas lograda la paz, se desencadenó la guerra civil, promovida por la resistencia militar de los oficiales del antiguo ejército al gobierno bolchevique. Los contrarrevolucionarios o blancos contaron con el respaldo de las principales potencias capitalistas. El conflicto devastó la economía y tuvo profundas secuelas sociales y políticas: debilitó al proletariado industrial, militarizó la vida política y extendió el control del estado a la banca, la industria y el comercio. Algunos bolcheviques –entre ellos Bujarin y Alexander Preobrazhensky, autores del *ABC del*

comunismo (1919)– pensaban que la liquidación del mercado y la distribución de los bienes según las necesidades significaban el advenimiento del comunismo. Sin embargo, la desigualdad social había quedado en un segundo plano debido al avance de la miseria.

Uno de los mayores desafíos fue asegurar la provisión de alimentos. El gobierno recurrió a la organización de comités de campesinos pobres, que debían ayudar a las organizaciones del estado en la requisa de granos a los campesinos acomodados. A estos comités se sumaron obreros industriales, y se les permitió ir armados. Si bien estas iniciativas alentaban la lucha de los campesinos pobres contra los kulaks, la intromisión de las autoridades no quebró los vínculos que ligaban a los distintos grupos en el seno de la aldea; en cambio, intensificaron el rechazo de todos los campesinos hacia las cargas impuestas autoritariamente por los bolcheviques. En un primer momento, la presión gubernamental aumentó el volumen de alimentos destinados a la población urbana, pero el campesinado que había sufrido las exacciones redujo su producción. Las muertes por falta de alimentos entre 1921 y 1922 sobrepasaron las bajas producidas por la Primera Guerra Mundial.



Petrogrado, 1917. Patrulla de la Guardia Roja.

Los dos instrumentos básicos para enfrentar la resistencia e imponer la autoridad del nuevo gobierno fueron el Ejército Rojo y la Comisión Extraordinaria de todas las Rusias para la lucha contra la contrarrevolución, el sabotaje y la especulación –conocida como Cheka–. Trotsky formó el Ejército Rojo con los guardias rojos de las fábricas y las unidades probolcheviques del ejército y la armada, el reclutamiento voluntario y la conscripción selectiva.

Se descartó la creación de milicias basadas en la movilización política e ideológica para dar paso a la construcción de un ejército organizado en torno a estrictas normas disciplinarias y al respeto de las jerarquías. La mayor parte de sus oficiales provino de las filas del ejército zarista. Al concluir la guerra, el Ejército Rojo era una enorme institución que tenía a su cargo gran parte de las tareas propias de la administración civil.

La Cheka fue creada en diciembre de 1917 para controlar los desórdenes y actos delictivos que siguieron a la toma del poder. Ante las protestas frente a la escasez de alimentos y contra la manipulación de los sóviets, los bolcheviques no dudaron en reprimir duramente. El descontento popular llegó a su clímax en junio de 1918 con una rebelión de los obreros de una importante planta de armamento: los reclamos por falta de alimentos se transformaron en un llamamiento a favor del sufragio universal y una nueva convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente. Después del asesinato de su jefe y del atentado contra la vida de Lenin a fines de agosto de 1918, la Cheka de Petrogrado asesinó a ochocientos "enemigos de clase". Durante la guerra civil la Cheka se transformó en una organización al servicio del terror: ejecuciones sin juicio previo, arrestos en masa, secuestros. La policía política permanecería vigente durante todo el régimen soviético bajo distintos nombres –GPU, OGPU, NKDV, KGB– y sucesivas reorganizaciones.

La historiografía del "terror rojo" se polarizó según los mismos términos del debate sobre el significado del Octubre Rojo. Por un lado,

están aquellos historiadores que enfatizan la autonomía de los bolcheviques y argumentan que el terror fue una consecuencia lógica de la naturaleza "totalitaria" de la ideología bolchevique o bien de la determinación de mantenerse en el poder a cualquier precio. Esta línea de análisis es sostenida por historiadores afines a la corriente de la ciencia política que engloba nazismo, fascismo y comunismo bajo el concepto de totalitarismo. Por otro lado, están los que consideran el terror como una respuesta a situaciones extremas, básicamente la guerra civil, con su lógica política de polarización y su cultura embrutecedora. Según estos autores, la contrarrevolución no fue un producto de la imaginación bolchevique ni un mecanismo ideológico diseñado para reafirmar la unidad a través de la figura de un enemigo implacable. Esta versión insiste en que el terror bolchevique fue ejercido sobre enemigos en su mayoría completamente reales.

Resulta insatisfactorio concebir el "terror rojo" como una derivación lineal de los obstáculos que enfrentaron los revolucionarios. Los bolcheviques nunca ocultaron que concebían la violencia como un arma legítima de la dictadura del proletariado. En enero de 1918 Lenin ya advertía que "hasta que no utilicemos el terror contra los especuladores (disparándoles en el acto), nada cambiará". El uso del terror estuvo siempre justificado en términos de principios y de conveniencia. Según Lenin, se trataba de un instrumento para la transformación revolucionaria conducente a la eliminación del enemigo de clase genérico. Esto ayuda a explicar por qué los esfuerzos periódicos de los bolcheviques moderados para someter a la Cheka a una mayor regulación eran rechazados de plano. Y aunque muchos socialistas advirtieron sobre el daño que provocaba el terror en los ideales de la revolución socialista, sus escrúpulos "pequeñoburgueses" fueron olímpicamente descartados.

Pero el terror tampoco puede entenderse como una mera opción de los bolcheviques, ya que su base principal fue el sentimiento de revancha de los agraviados durante cientos de años hacia la autocracia zarista, las clases propietarias y todos aquellos que no habían sufrido vejaciones. Cuando el antiguo régimen se derrumbó, los explotados decidieron vengarse de sus opresores: ahora ellos podían "saquear a los saqueadores", y los bolcheviques alentaron este impulso elemental.

A partir de 1920, la relación de fuerzas en la guerra civil comenzó a ser favorable al gobierno. En su triunfo jugaron un papel destacado la escasa cohesión entre los jefes del campo contrarrevolucionario y, básicamente, el rechazo de los campesinos a la restauración del antiguo orden después que la revolución les diera la oportunidad de tomar las tierras. No obstante, en el transcurso de la guerra, la relación de los aldeanos con los bolcheviques se cargó de tensiones debido a las requisas practicadas por los comunistas para el aprovisionamiento de las tropas.

Los obreros también tenían demandas largamente contenidas y, en marzo de 1921, los radicalizados trabajadores de Kronstadt, uno de los bastiones bolcheviques en octubre de 1917, manifestaron contra el gobierno. La protesta en la base naval del norte fue ahogada en un baño de sangre. Lenin reconoció la necesidad de dar un giro y, sin tener claro el camino a seguir, anunció que el comunismo de guerra daría paso a la Nueva Política Económica.

Del imperio zarista a la URSS

Rusia surgió de la unificación de diversos principados eslavos orientales que se convirtieron al cristianismo en el siglo X y con el tiempo eligieron a Moscú como su capital. En el siglo XIII fue conquistada por los mongoles, que fueron paulatinamente desalojados, y en 1613, el primer Romanov fue coronado en Moscú.

Los Romanov llegaron a reinar sobre una sexta parte del mundo. Se expandieron hacia el sur –sobre los mares Negro, Cáucaso y Caspio–, hacia el este –Siberia, Asia Central e islas del Pacífico–, hacia el norte y hacia el oeste –Finlandia, la zona báltica y Polonia–.

Los mapas anteriores a la Primera Guerra Mundial no precisaban las fronteras de Rusia dentro del imperio. Una vez conquistados, los

países eran borrados como identidades independientes. Los otros imperios distinguían con precisión sus colonias; el ruso, en cambio, quedó dividido en diferentes unidades sin que se deslindaran las regiones conquistadas. En algunos casos, para marcar la diferencia entre Rusia y el imperio se recurría a términos como ducado –el Gran Ducado de Polonia, el Gran Ducado de Finlandia– o región –la Región Turquestana (hoy Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán)–.

Bajo el gobierno bolchevique, en julio de 1918, el Congreso Panruso de los Sóviets sancionó la Constitución que dispuso la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR). Esta englobaba a la mayor parte de los rusos, pero también incluía áreas mayoritariamente ocupadas por otras nacionalidades, entre ellas grandes extensiones de Siberia y Turquestán. La República Socialista Federativa Soviética de Rusia era, en cierto sentido, un estado multinacional. En relación con sus fronteras, la revolución y la guerra civil impidieron una definición precisa y el término "federativa" dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos territorios.

La unidad del imperio fue cuestionada a partir de la Revolución, especialmente en la zona occidental. Las diferentes trayectorias seguidas por los países de esta región –Finlandia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Estonia y Letonia– resultaron de la combinación de tres factores: el principio de autodeterminación propuesto por los bolcheviques tras la revolución de febrero de 1917, las intervenciones de Alemania y las potencias aliadas, y el grado de consistencia de los movimientos nacionalistas en cada uno de ellos. Al concluir el ciclo revolucionario y con el aval de Versalles, todos esos países surgieron como nuevos estados soberanos, excepto Ucrania y Bielorrusia. Los movimientos nacionalistas ucraniano y especialmente el bielorruso fueron más débiles, y los lazos económicos y culturales con Moscú eran muy consistentes. No obstante, hubo que esperar que concluyera la guerra civil para concretar la creación de la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Rusia Blanca en 1920, a las que no se intentó incluir en la Federación Rusa.

La sujeción de la zona del Cáucaso fue más compleja. El territorio de Transcaucasia era patria de unos ocho grupos nacionales. Los más numerosos –georgianos, armenios y azerbaiyanos– tenían fuertes diferencias entre sí en términos económicos, sociales, culturales y políticos. Después de Octubre se estableció el Comisariado Transcaucásico, apoyado principalmente por Georgia. A partir de la disolución de la Asamblea Constituyente en enero de 1918, este Comisariado no reconoció al gobierno bolchevique y proclamó la creación de la República Federal Transcaucasia.

Las divergencias entre los pueblos que la integraban hizo posible, en el verano de 1918, que Armenia y Azerbaiyán fueran ocupadas por Turquía mientras Georgia buscaba la protección de Alemania. Después de la caída de las potencias centrales, los tres gobiernos enviaron delegaciones a la conferencia de Versalles.

Finalmente, los bolcheviques desalojaron a los tres gobiernos nacionalistas para crear en 1922 la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas del Transcáucaso. Esta fue asociada a las repúblicas socialistas soviéticas existentes –Rusia, Ucrania, Bielorrusia– para crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

En 1924 la nueva Constitución consagró la existencia de la URSS, incluyendo dos nuevas repúblicas –Turkmenistán y Uzbekistán– en zonas que hasta ese momento formaban parte de la Federación Rusa. Doce años después, la Federación Rusa volvió a perder territorios para crear otras tres repúblicas: Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. Al mismo tiempo, en el Cáucaso se volvió a la antigua división con el reconocimiento de tres repúblicas: Armenia, Azerbaiyán y Georgia. En virtud del pacto Molotov-Ribbentrop, firmado entre los gobiernos de Stalin y Hitler poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en 1940 fueron incorporadas a la URSS Estonia, Lituania y Letonia –independientes desde 1918– y la zona de Besarabia, en manos de Rumania desde el fin de la Gran Guerra, sobre la que se estableció la República Socialista Soviética Moldavia.



La formación de la URSS (1923-1940).

En teoría, la Unión Soviética se componía de repúblicas federadas que gozaban de una amplia autonomía para su administración interna. Cada una de ellas poseía su propio Partido Comunista, con excepción de Rusia. El poder político residía formalmente en los sóviets: los organismos colegiados de los distintos niveles administrativos conformaban una estructura piramidal que, partiendo de los sóviets locales, pasaba por las repúblicas y llegaba al Sóviet Supremo de Diputados del Pueblo con sede en Moscú. En alguna medida, su posición era equivalente a la de los cuerpos legislativos nacionales de las democracias europeas, pero carecía de poder efectivo. Lo mismo ocurrió con el poder ejecutivo a cargo del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS. El poder real estaba en manos del Partido Comunista, que organizó una estructura paralela a la de la administración estatal. Los organismos del estado recibían órdenes directas del partido y la aprobación de los funcionarios de alto rango quedó a cargo de la cúpula partidaria, con el consiguiente vaciamiento de los organismos de gobierno.

El concepto "república soviética" no se correspondía con la realidad: los sóviets nunca intervenían en la designación de las autoridades porque los miembros de los gobiernos republicanos eran designados por el Comité Central del Partido Comunista. Si bien en los primeros tiempos tuvieron un papel destacado en la organización de la administración local, la educación, las finanzas y la agricultura, los sóviets finalmente quedaron subordinados a los comités del partido, en los que prevalecía la voz del secretario general, sujeto a su vez a la cúpula bolchevique. Así como no era "soviética", la URSS tampoco era "federal": la autonomía de las repúblicas era nominal y sus autoridades dependían de la dirigencia comunista. Según el reglamento del partido redactado en 1919, todas las organizaciones comunistas de las diferentes repúblicas eran consideradas simples unidades regionales del PCUS. Bajo este principio, los órganos centrales de los bolcheviques ucranianos, por ejemplo, quedaban estrictamente subordinados al Comité Central de Moscú. Tampoco se

permitía que las repúblicas tuvieran vínculos entre sí: sólo podían relacionarse con la RSFSR.

Todas las riendas del poder quedaron en manos de la cúpula partidaria. Los comités comunistas respondían disciplinadamente a las directivas de los órganos superiores, y aunque formalmente los secretarios eran elegidos por las bases, los nombramientos y las destituciones quedaban de hecho en manos de la Secretaría del Comité Central.

El PCUS era una organización piramidal que concentraba el poder en un pequeño círculo: los hombres del Politburó y el jefe político máximo de este entramado, el secretario general. Este puesto fue ocupado por Stalin desde la guerra civil hasta su muerte, en 1953; pero fue Lenin, el líder del partido, quien controló con dureza los resortes del poder hasta que cayó enfermo en 1922.

Desde la fractura de los socialdemócratas rusos en 1903, los bolcheviques se inclinaron a favor de una organización militante y disciplinada con Lenin a la cabeza, pero sus integrantes eran pares que podían discrepar abiertamente. Así lo hicieron Lev Kaménev y Grigori Zinoviév antes de la toma del Palacio de Invierno, o Bujarin al rechazar la paz con Alemania. Sin embargo, los márgenes para el disenso fueron suprimidos poco después de la toma del poder. En el momento crucial de la guerra civil se aprobó el centralismo más estricto y la disciplina más severa, y en relación con este objetivo, en marzo de 1919 el Comité Central delegó y dividió sus atribuciones en tres organismos más reducidos: el Politburó, que, a cargo de la conducción política, tomaba las decisiones que el estado ejecutaría; el Orgburó, que dirigía el trabajo administrativo, y el Secretariado, que organizaba y controlaba la vida interna del partido vía nombramientos, traslados y destituciones.

Este partido monolítico era además el único permitido, y si bien hasta 1921 la decisión estuvo justificada como consecuencia de la guerra fratricida, a partir de su triunfo los bolcheviques no sólo negaron la existencia de otras fuerzas políticas sino que también prohibieron el disenso en el seno mismo del partido gobernante.

La oleada revolucionaria

Una vez en el poder, los bolcheviques promovieron la unidad de todas las fuerzas socialistas que reconocían el carácter revolucionario de su accionar, convocándolas a crear la Tercera Internacional. En marzo de 1919, Lenin inauguró en Moscú el congreso que aprobó su constitución invocando a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, líderes del comunismo alemán asesinados ese mismo año.

La mayoría de los dirigentes socialistas tomaron distancia del Octubre bolchevique y permanecieron en las filas de la Segunda Internacional. No obstante, un sector de los militantes de casi todos los partidos socialistas –casi siempre los más jóvenes, los más decididos a entregar su vida a la causa de la revolución– crearon nuevos partidos comunistas. En Alemania, Francia e Italia se constituyeron las organizaciones comunistas más importantes, y en menor medida también prosperaron en Bulgaria y Checoslovaquia. En el resto de Europa los partidos comunistas fueron marginales.



Rosa Luxemburgo, a la derecha, acompañada por su amiga Clara Zetkin, ambas integrantes de la socialdemocracia alemana. Rosa, la hija menor de una familia judía radicada en la zona polaca oriental entonces sometida al imperio zarista, inició su militancia socialista en Polonia junto a quien sería su pareja más importante, León Jogiches, también marxista y judío. En 1898 se radicó en Berlín y se unió al Partido Socialdemócrata alemán dirigido por Karl Kautsky, con quien forjó una estrecha relación que se rompió por diferencias ideológicas en 1910. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Luxemburgo, junto con Liebknecht y Jogiches, entre otros, convocaron a movilizarse contra la guerra y fueron encarcelados. Con la caída del Imperio de los Hohenzollern y al calor de las insurrecciones de fines de 1918, salieron en libertad.

La división del socialismo tuvo un profundo impacto sobre el rumbo político del período de entreguerras y produjo efectos permanentes en el transcurso del siglo XX. La Tercera Internacional se prolongó hasta 1943, cuando fue disuelta por Stalin para afianzar su alianza con las democracias occidentales en la guerra contra el Eje.

Los sacrificios que impuso la Primera Guerra Mundial fueron tan intensos y prolongados que la resistencia de las bases quebró el consenso patriótico antes de que concluyera el conflicto bélico. La esperanza de que el capitalismo finalmente sucumbiría fue alentada por la ola de huelgas e insurrecciones que recorrió el continente europeo entre 1917 y 1923. Esta vasta movilización (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Italia) se desencadenó antes de que los bolcheviques tomaran el gobierno.

Después de la Revolución rusa, en los vastos imperios del centro europeo, un formidable movimiento de masas derribó a las dinastías de los Hohenzollern y los Habsburgo en noviembre de 1918. El período de la revolución mundial parecía estar a punto de inaugurarse. En Italia, entre 1918 y 1920, el movimiento obrero dio muestras de una fuerte combatividad. La ciudad de Turín se destacó como una fuerte plaza revolucionaria: los trabajadores organizados en los consejos de fábrica ocuparon las empresas y dirigieron la producción, pero no lograron avanzar en el terreno político y la huelga se desgastó con el paso del tiempo. En Hungría, Bela Kun proclamó la República Soviética a su regreso de Rusia en marzo de 1919. Sin el apoyo del campesinado –que rechazó las requisas y la nacionalización de las tierras– y tras la derrota frente a los rumanos –que tomaron por la fuerza los territorios cedidos en Versalles–, el régimen se derrumbó en agosto de 1919. La oleada de protestas llegó a los Estados Unidos, y en 1919 los metalúrgicos, mineros y ferroviarios se lanzaron a la huelga.

La atención del mundo, y especialmente de los que anhelaban la revolución, estuvo pendiente del rumbo de Alemania a partir de la caída del imperio. Como ocurriera en 1917 en Rusia, los motines de los

soldados y los marinos y las movilizaciones de los obreros en las ciudades desembocaron en la creación de consejos de obreros y de soldados. En Múnich, la capital del estado de Baviera, se proclamó la república antes que en Berlín. Con la destitución de Luis III, el primer monarca depuesto por la revolución alemana, el gobierno quedó en manos del Consejo de Obreros y Soldados y Campesinos bajo la dirección de Kurt Eisner, presidente del Partido Socialdemócrata Independiente.

El 9 de noviembre la revolución llegó a Berlín. Ante la efervescencia del pueblo en las calles, Guillermo II renunció y el primer ministro dejó su cargo al dirigente socialdemócrata Friedrich Ebert. Se proclamó la república y el gobierno quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, integrado por tres representantes del Partido Socialdemócrata y otros tres del Partido Socialdemócrata Independiente. En pos de la restauración del orden, Ebert pidió ayuda a los ciudadanos: todos debían colaborar con la reactivación de la producción ya que la falta de alimentos representaba "la miseria para todos".

El espartaquista Liebknecht, en cambio, llamó a profundizar la revolución: el poder debía pasar a los consejos de obreros y de soldados para que Alemania, aliada con la Rusia bolchevique, llevase el socialismo al mundo entero. El Primer Congreso de los Consejos de Obreros y Soldados de Alemania, que sesionó en diciembre de 1918, reconoció la autoridad del Consejo de Comisarios y aprobó el llamado a elecciones para formar la Asamblea Constituyente. Después de su fracaso en este ámbito, los espartaquistas crearon el Partido Comunista Alemán encabezado por Luxemburgo y Liebknecht.

En la primera quincena de enero de 1919 los comunistas propiciaron un levantamiento armado en Berlín para tomar el poder y fueron violentamente reprimidos por el gobierno socialdemócrata. El ministro de Defensa Gustav Noske anunció que alguien debía erguirse en el sanguinario y decidió actuar en consecuencia. Entre el 5 y el 13 de enero las calles de Berlín se convirtieron en un campo de batalla. Dos días después, Luxemburgo y Liebknecht fueron detenidos y asesinados por los oficiales del ejército. El cuerpo de Rosa, arrojado a un canal, fue hallado el 31 de mayo.

Si bien la movilización social y política fue intensa en Europa hasta 1921 y la última acción se produjo en Alemania –la fracasada insurrección de los comunistas en 1923–, no hubo una revolución que siguiera los pasos del Octubre Rojo. La crisis de la sociedad burguesa, en lugar de fortalecer a la izquierda, gestó un terreno propicio para el surgimiento del fascismo.

3. El período de entreguerras

A principios del siglo XX, el crecimiento económico era sostenido en las sociedades burguesas asentadas, así como en los países interesados en alcanzar esa posición. Se suponía que la razón, la democracia y el progreso abrirían paso a un futuro más venturoso. Pero, en los años treinta, todas estas creencias se habían derrumbado. Al concluir la Gran Guerra el mundo ya no era capitalista. La crisis del imperio zarista había posibilitado que los bolcheviques tomaran el gobierno de Rusia y se embarcaran en la construcción del socialismo. El espacio capitalista fue hondamente impactado por la crisis económica, y el avance hacia una economía global se truncó. Las razones más profundas de la crisis remiten a las transformaciones del último cuarto del siglo XIX: la nueva oleada de industrialización, el imperialismo y el acceso de las masas a la escena política produjeron contradicciones ante las que el marco político e ideológico del liberalismo burgués se reveló impotente.

Tres momentos se recortan en el espacio capitalista durante el lapso que medió entre las dos guerras mundiales. Los años de la inmediata posguerra (1919-1923), cuando parecía que la revolución victoriosa en Rusia se extendería hacia el resto de Europa y la débil República de Weimar se consideraba el terreno más propicio. A continuación, la breve estabilidad de la segunda mitad de la década de 1920, asentada en la frágil recuperación económica y en un clima de distensión internacional. Por último, a partir de la crisis de 1929, los tiempos oscuros en los que la desesperación, la codicia, el miedo, el pragmatismo oportunista y la presencia de líderes carismáticos ofrecieron el marco en el que se afianzó el nazismo y se desencadenó la Segunda Guerra Mundial.

La economía global se resquebraja

El gran derrumbe económico de los años treinta remite, en gran medida, a los cambios que, gestados en los años dorados del siglo XIX, erosionaron los pilares en que se había asentado la primacía del mercado mundial. En primer lugar, el declive de Gran Bretaña, acompañado por el quiebre del patrón oro y por la creciente fragilidad de los lazos forjados por Londres entre las diferentes economías nacionales. En segundo lugar, el ascenso económico de los Estados Unidos, asociado a nuevos factores que no se adecuaban al funcionamiento del orden global.

Por un lado, el nuevo modo de organización productiva, el fordismo, alentaba un mayor control estatal de la economía nacional para evitar las recesiones al margen de las fluctuaciones del mercado mundial. La gestión científica del trabajo, iniciada con la crisis de 1873, avanzó en los años de entreguerras. Las transformaciones dieron paso a un capitalismo más estructurado, con nuevas industrias de punta, nuevas corporaciones empresariales y una clase obrera más voluminosa y mejor organizada. Las grandes empresas de la posguerra combinaron diferentes actividades, hasta entonces separadas: investigación, producción, distribución, publicidad.

En la fabricación de automóviles, las unidades fabriles, integradas verticalmente y produciendo a través de la cadena de montaje, alcanzaron su más acabado desarrollo. Por ejemplo, el complejo industrial que Ford comenzó a construir a orillas del río Rojo durante la Primera Guerra Mundial llegó a ocupar ciento veinte mil trabajadores y redefinió el proceso de fabricación. Hasta allí llegaban el hierro y el carbón extraídos de sus propias minas y transportados en sus barcos privados. El caucho se importaba de una plantación, también de propiedad de Ford, en Brasil. La madera procedía de árboles cortados en tierras del empresario. La Ford Motor Company se convirtió así en la mayor empresa privada del mundo. En esta gran corporación, el volumen de capital fijo era mucho más alto que el destinado a los salarios de los trabajadores y la tasa de ganancia dependía más de la paz laboral lograda a través de acuerdos a largo plazo que de las reducciones salariales. El fordismo inducía a los

pactos corporativos que obstaculizaban la subordinación de la economía nacional a las oscilaciones del mercado mundial.

Por otro lado, los Estados Unidos, la potencia en ascenso, tenían una abundancia de materias primas y un consistente mercado interno que les permitían un grado de autarquía que Gran Bretaña nunca había conocido. La economía estadounidense, a diferencia de la británica, no dependía de las importaciones ni estaba comprometida en la estabilidad monetaria que posibilitaba el comercio y el flujo de capitales en el mundo. Así, muchos de los países latinoamericanos, por ejemplo, no pudieron colocar en el país del norte los bienes que hasta entonces –a través de las compras británicas– habían conformado el boom exportador de los años ochenta.

A lo largo del esfuerzo bélico, los gobiernos aumentaron sus recursos mediante la reforma impositiva: los gravámenes sobre la renta y sobre el volumen de los negocios fueron creados en esta época. Pero esta redistribución de la riqueza nacional a favor del estado no fue suficiente. Los países más afectados por los combates se vieron obligados a importar mercancías y obtener préstamos de los países más fuertes en el plano industrial, los que estaban alejados del campo de batalla y los ricos en materias primas. La guerra benefició económicamente a los proveedores, sobre todo a los Estados Unidos, que entre 1914 y 1919 se posicionó como el mayor país acreedor.

Los Estados Unidos emergieron en la posguerra como el principal motor de la reconstrucción de la economía europea y la reactivación del comercio mundial, pero sus gobiernos y su sociedad fueron aislacionistas. No obstante, los poderosos grupos que dominaban en Wall Street se involucraron en las negociaciones vinculadas con la recuperación y la estabilidad de la economía internacional: un ejemplo notable es el plan Dawes, destinado a reorganizar la economía alemana quebrada por la crisis de 1923.

El patrón oro se hizo cada vez más inviable en el nuevo escenario social y económico. Antes de la guerra, se había privilegiado la estabilidad exterior aun a costa de sacrificar la interior. Esta estrategia había funcionado porque las demandas sobre los gobiernos no fueron demasiado potentes debido a la escasa movilización política. Después de la guerra el panorama era muy diferente. La reactivación de los trabajadores, las fuertes querellas entre estados derivadas del conflicto mundial, junto con la existencia de una organización industrial más estructurada que requería compromisos a largo plazo entre el capital y el trabajo, obstaculizaron la subordinación de la actividad económica nacional a la estabilidad de la moneda. Sin embargo, los economistas clásicos siguieron afirmando que la primacía de las leyes del mercado, asegurada por el patrón oro, era la única vía para garantizar el crecimiento económico, aunque hubiera que pagar el costo de crisis periódicas. La reducción salarial, el desempleo y la rebaja de los precios recrearían las condiciones para que se incrementase la productividad y se iniciara un nuevo ciclo de expansión en el futuro. Para Keynes, el economista inglés que había abandonado irritado Versalles, la receta clásica pasaba por alto que, a largo plazo, todos los sacrificados en pos de los equilibrios del mercado estarían muertos.

Los ciclos económicos y la Gran Depresión

La primera mitad de los años veinte estuvo signada por fuertes fluctuaciones económicas y marcadas oscilaciones en la conflictividad social. Desde el fin de la guerra hasta 1921, la existencia de una demanda contenida y un gasto público sostenido dieron lugar a la plena ocupación, que llegó acompañada por intensos conflictos sociales. Este breve ciclo de expansión desembocó en la inflación, que fue el resultado de la intensa puja redistributiva, de las severas limitaciones de los nuevos países europeos para equilibrar la producción y la demanda, y del peso de las deudas de guerra, especialmente en el caso de Alemania. En este país, la ocupación del Ruhr en 1923 por franceses y belgas que pretendían cobrarse así las deudas de guerra fue acompañada por una hiperinflación que arrasó

con los ahorros de la clase media, llevó a la quiebra a los propietarios más débiles y disparó la desocupación.

Después de estas fuertes oscilaciones, en la segunda mitad de la década la economía se mantuvo estable. Los acuerdos en torno a la refinanciación de la deuda alemana y el clima de paz contribuyeron a este cambio. La recuperación a partir de 1924 fue tan evidente que se acuñaron nombres específicos para designar el período: "los dorados veinte" en Alemania, "los años felices" en los Estados Unidos y "los años locos" en Francia.

En el ámbito rural, en cambio, la década fue poco propicia para los agricultores. Después de la guerra, la caída en los precios de los alimentos y las materias primas, asociada al incremento de los bienes industriales, colocó al campesinado en una situación precaria y alentó la movilización política, que por lo demás no siguió una orientación predeterminada. En algunos países de Europa Central se afianzaron los partidos agrarios, el campesinado familiar de Italia y Alemania adhirió al fascismo y en Escandinavia los partidos procampesinos firmaron acuerdos con la socialdemocracia. La presencia de estos diferentes alineamientos se vincula con las diferencias entre las distintas estructuras agrarias y con los lazos forjados en cada país por los partidos políticos con los distintos actores del ámbito rural.

El crack en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, en octubre de 1929, cerró un ciclo e inició un período en que la economía capitalista pareció derrumbarse. Después de más de un año de espectaculares aumentos en los precios de las acciones, estos cayeron abruptamente, en gran medida debido a la especulación, pero en última instancia como expresión de las contradicciones del sistema capitalista. Durante los años veinte, el incremento en la productividad no fue acompañado por la creación de un sólido mercado de masas basado en aumentos salariales. La demanda fue alentada mediante la expansión del crédito. La buena marcha de las empresas y el crecimiento de la cadena crediticia en los años locos condujeron a la especulación inmobiliaria y la sobreinversión en el mercado bursátil. No bien se hizo evidente la distancia entre la economía real y el mercado financiero, la burbuja bursátil explotó. Las ventas masivas de acciones en medio del pánico dieron paso a la quiebra en cadena de los bancos y la desvalorización de las monedas. Todas las sociedades sufrieron el derrumbe del capitalismo, menos la soviética, que a su vez fue golpeada por la imposición de la economía planificada.

Con la Gran Depresión, la doctrina liberal perdió consistencia y dejó de orientar las decisiones de gran parte de los gobiernos, que respondieron pragmáticamente a los nuevos desafíos. Aunque Keynes exponía su teoría con mayor coherencia y difundía sus ideas con ahínco, la confirmación de sus principios como referente de las políticas gubernamentales sólo se concretó después de la Segunda Guerra Mundial.

Los escenarios políticos en el mundo capitalista

Frente a los desafíos económicos compartidos, las trayectorias políticas mostraron marcados contrastes. En los países capitalistas centrales hubo tres trayectorias principales: la democracia liberal continuó vigente en Francia, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica y Holanda; el fascismo triunfó en Italia y el nazismo descolló en Alemania; la democracia social avanzó en Escandinavia y, a través del New Deal, en los Estados Unidos. En la periferia europea, en los países del este y del sur, hubo movimientos fascistas que no llegaron al gobierno y se impusieron dictaduras tradicionales, como en el caso de España, después de una feroz guerra civil.

Tanto la socialdemocracia escandinava y el New Deal estadounidense, por un lado, como el nazifascismo, por el otro, cuestionaron los planteos económicos de la ortodoxia liberal. En ambas experiencias, la primacía del mercado fue sustituida por la activa intervención de los gobiernos en el plano social y económico. En el caso de la democracia social, las decisiones de la dirigencia política apuntalaron una nueva forma que anudó los principios del orden

democrático con el reconocimiento de los derechos sociales básicos. En los regímenes fascistas, la subordinación del mercado a los fines políticos e ideológicos del grupo gobernante aniquiló a la democracia para dar paso a un nuevo tipo de estado ferozmente autoritario y a una sociedad disciplinada desde arriba.

Las experiencias liberales

La democracia liberal logró mantenerse en pie en Gran Bretaña y Francia en gran medida porque se había afianzado antes de que la guerra y la crisis agudizaran los conflictos sociales y condujeran al caos económico. Al margen de sus rasgos singulares, en ninguno de estos países se interrumpió la política democrática competitiva. El mercado continuó operando en ambos como el principal mecanismo para disciplinar a la fuerza de trabajo y sus gobiernos recurrieron a los programas económicos ortodoxos frente a los desajustes del ciclo económico. Un factor de peso para esas continuidades fue la falta de un desafío de la clase obrera que pusiera en peligro el orden social.

En el marco de las sociedades civiles densamente organizadas y con expectativas democráticas, las posibilidades para el afianzamiento de la izquierda radical se vieron muy limitadas. En estas democracias estables gobernaron de manera casi continua los partidos de centroderecha.

El régimen parlamentario inglés gozó de un alto grado de estabilidad y las opciones políticas extremistas no encontraron arraigo. El Partido Comunista sólo obtuvo un diputado en todas las elecciones celebradas en los años treinta. La principal agrupación de sesgo fascista fue el Nuevo Partido, creado por el ex diputado laborista Oswald Mosley, rebautizado como Unión Británica de Fascistas en 1932. Mosley abandonó el Partido Laborista ante el rechazo de su programa para combatir la Depresión: levantar los aranceles aduaneros, brindar créditos al consumidor e invertir en obras públicas para crear puestos de trabajo sin que importara el déficit. Los laboristas lo descartaron de plano porque conduciría a la inflación. Hasta 1936 Mosley tuvo un relativo impacto sobre la opinión pública a través de marchas y de actos similares a los de las huestes de Mussolini, con quien mantuvo esporádicos contactos. Ese año, la Ley de Orden Público limitó sus actividades y, junto con la disminución de sus recursos, su figura quedó opacada.

A pesar del marcado declive de la economía británica, asociado a un alto nivel de paro, la principal preocupación de los gobiernos era mantener el valor de la libra. Con este fin aplicaron medidas deflacionistas: reducción del gasto público y altos tipos de interés, que agravaron los problemas de una industria necesitada de capitales para encarar su reconversión. La clase obrera y los industriales fueron sacrificados en el altar de la City.

La caída del primer ministro Lloyd George, en 1922, puso fin a la coalición entre liberales y conservadores, y a raíz de ello estos últimos lograron una posición dominante hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Los liberales, en cambio, fueron desplazados por los laboristas, que se convirtieron en el segundo partido del país. Su líder, Ramsay MacDonald, encabezó el gabinete en 1924 (durante diez meses) y en 1929. El hecho de que el partido de los sindicatos fuera una opción viable contribuyó a que la clase trabajadora tuviera expectativas por las reformas instrumentadas en el Parlamento.

Cuando estalló la crisis en 1929, el gabinete, presidido por MacDonald, no dudó en adoptar medidas de carácter recesivo: presupuesto rígidamente equilibrado, aumento de los impuestos y abandono de los planes de obras públicas prometidos durante la campaña electoral para paliar el desempleo. Sin embargo, el impacto corrosivo de la crisis sobre los pilares del *laissez faire* obligó al gobierno nacional a dejar atrás el patrón oro, aceptar la devaluación de la libra y, en 1932, elevar el arancel de todas las importaciones, excepto las procedentes del imperio. La cuna del librecambio tuvo que plegarse forzosamente al clima imperante en la época: la defensa de la economía nacional a través del proteccionismo.

La coalición entre laboristas y conservadores, acordada en el marco de la crisis, se prolongó hasta 1937. Con su disolución, el conservador Neville Chamberlain dirigió el gobierno hasta 1940. Frente a la conducta agresiva del nazismo, Chamberlain esgrimió la política del apaciguamiento, que, subestimando la imparable radicalización del nazismo, pretendió evitar la guerra aceptando las revisiones al tratado de Versalles impuestas por Hitler.

En cambio, la Tercera República francesa nunca conquistó el grado de legitimidad que logró el régimen parlamentario británico. A diferencia de lo ocurrido en Gran Bretaña, en Francia proliferaron los grupos más o menos afines al fascismo y en los años treinta los comunistas llegaron a ocupar un importante número de bancas en la Cámara de Diputados.

El problema irlandés

La isla de Irlanda, ocupada por los ingleses desde el siglo XII, fue incorporada al Reino Unido en 1801. El movimiento nacionalista tuvo su principal base de sustentación entre los católicos, quienes cuestionaban la explotación económica y el avasallamiento de sus derechos por parte de Inglaterra. La posibilidad de romper el vínculo con Londres fue rechazada por los ingleses protestantes asentados en el noreste de Irlanda.

A principios del siglo XX, el gobierno británico aceptó un proyecto de autonomía (Home Rule) que se pondría en marcha en 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial paralizó la prometida autonomía y el sector más radical de los irlandeses puso en marcha una rebelión armada en la Pascua de 1916. La autoproclamada República de Irlanda, sangrientamente reprimida, duró sólo cinco días.

A fines de 1920, el Parlamento británico dispuso la partición de Irlanda. Los seis condados del norte, con mayoría de ingleses protestantes, mantuvieron su propio cuerpo legislativo y continuaron formando parte del reino de Gran Bretaña. Los veintiséis del sur, mayoritariamente católicos, se convirtieron en el Estado Libre de Irlanda dentro de la Commonwealth. El movimiento nacionalista del sur se fracturó. El grupo disidente, que no aceptó el tratado, exigió la reanudación de la lucha contra Gran Bretaña y comenzó una campaña contra el gobierno provisional que supuso una verdadera guerra civil hasta que abandonaron las armas en 1923.

La inestabilidad ministerial y la ausencia de grandes partidos nacionales fueron los rasgos distintivos de la escena política francesa: en este período se formaron cuarenta y dos gobiernos. Sin embargo, existió una importante continuidad gracias a la rotación de las mismas figuras en cargos públicos claves y al papel de árbitro del Partido Radical, históricamente el gran partido republicano. De su oscilante política de alianzas –que iba de los conservadores a los socialistas y viceversa– dependió el signo de los gobiernos. Si desempeñó este papel fue, en parte, porque los dirigentes concibieron el partido como una organización para ganar elecciones. Pero además porque, dada la extrema fragmentación de las fuerzas políticas, ningún partido podía asegurarse el éxito actuando solo. Era necesario pactar acuerdos para que, en la segunda vuelta electoral, los aliados transfirieran sus votos a la fuerza mejor posicionada.

La inestabilidad institucional se acentuó a partir de la crisis económica. Entre 1929 y 1932, se sucedieron un total de diez gobiernos de centroderecha. Desde fines de 1933, la extrema derecha apuntó a la

caída de la República. La campaña de agitación, basada en la denuncia de los políticos corruptos, tuvo amplia repercusión en la opinión pública. El 6 de febrero de 1934 hubo una revuelta antiparlamentaria en medio del *affaire* Stavisky –masiva venta de bonos sin respaldo–, una estafa que involucró a dirigentes de los partidos tradicionales. Convocados por la derecha radical –la Croix de Feu del coronel La Rocque, los Camelots du Roi, las Jeneusses Patriotiques–, los manifestantes llegaron hasta el Parlamento para repudiar al "abyecto régimen" e impedir la formación del nuevo gabinete. Hubo muertos y un alto número de heridos, especialmente entre las fuerzas de seguridad. El orden se restableció con la formación de un gobierno de derechas moderadas.

La izquierda temió un golpe. Las conversaciones entre los socialistas y los comunistas culminaron en la constitución del Frente Popular, al que se sumaron los radicales. Con la victoria electoral en mayo de 1936, poco después del triunfo del Frente Popular español, el presidente socialista apoyó las demandas del movimiento sindical y los empresarios firmaron un pacto reconociendo los reclamos de los obreros en huelga: aumento salarial, vacaciones pagas, semana laboral de 48 horas, negociación colectiva.

La vía abierta por la centroizquierda francesa era similar a la de los socialistas escandinavos y el New Deal en los Estados Unidos. Pero el Frente era frágil y el empresariado no estaba dispuesto a aceptar un movimiento sindical fuerte. Los círculos financieros y empresariales retrajeron las inversiones y atentaron contra la estabilidad del franco a través de la fuga de capitales. En este contexto, el gobierno fue cediendo terreno a la ortodoxia económica. Al cabo de un año la presidencia pasó a manos de los radicales, que asumieron decididamente el ajuste económico mientras el empresariado arrasaba con el programa social.

La democracia social

En Suecia, Noruega y Dinamarca, países regidos por monarquías constitucionales que se habían mantenido neutrales durante la Primera Guerra, la socialdemocracia llegó al gobierno y mantuvo su predominio durante un largo período. La instauración de la hegemonía socialdemócrata fue producto, en gran medida, de las alianzas políticas forjadas con los partidos agrarios. Los pactos firmados en los tres países por los partidos socialdemócratas, los partidos agrarios y los gobiernos entre 1933 y 1938 articularon los intereses de los obreros industriales con los del campesinado. Estos acuerdos recogieron las demandas de los agricultores en torno a la reducción de los tipos de interés y de los impuestos agrarios y la adopción de aranceles proteccionistas. Al mismo tiempo, los partidos agrarios levantaron su oposición a la expansión de la obra pública, que –afirmaban– reducía el número de asalariados rurales y aumentaba su costo. También aceptaron la ampliación de los servicios sociales a cargo del estado, entre ellos el incremento del subsidio por paro.

En contraste con la experiencia escandinava, la debilidad de los partidos obreros y la frágil cohesión de los movimientos sindicales en las democracias liberales europeas se potenciaron entre sí, impidiéndoles avanzar en la formulación de políticas que cuestionaran el predominio del mercado. En otras palabras, los socialistas buscaron ser confiables y acabaron aplicando los programas liberales.

Al término de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se habían convertido en la primera potencia económica y, aunque siguieron una política aislacionista, tuvieron una influencia decisiva en los asuntos económicos europeos. Las deudas de guerra con Washington eran muy altas y el hecho de que la balanza de pagos fuera favorable a los norteamericanos dificultó enormemente el proceso de recuperación de Europa.

Los estadounidenses no deseaban tener contacto con la política y los problemas de otros países. De hecho, pretendieron reforzar los rasgos que asignaban a su identidad y rechazaron el ingreso de nuevos inmigrantes con diferentes creencias religiosas, distintas costumbres y fidelidad hacia su país de origen. Como resultado de la legislación

restrictiva, el ingreso de inmigrantes entre 1920 y 1924 cayó por debajo de la mitad con respecto al período 1910-1914.

La xenofobia nacionalista se combinó con el rechazo extremo de la protesta social, que, como en Europa, alcanzó su pico más alto en la inmediata posguerra. Las principales huelgas ocurrieron en 1919 y principios de 1920 en las minas de carbón y en la industria siderúrgica, para frenar el deterioro del salario frente a la inflación. La más grave amenaza al orden provino de la protesta de la policía de Boston en 1919, cuyos dirigentes fueron despedidos por pertenecer a un sindicato.

El "miedo a los rojos" de 1919 fue manifiestamente exagerado. El número de afiliados al Partido Comunista era ínfimo y, aunque no había posibilidad alguna de una revuelta revolucionaria, un importante sector de la población sucumbió al rumor y a la histeria. El Ku Kux Klan se puso nuevamente en marcha, sobre todo en el oeste medio, y entre sus víctimas incluyó, además de negros, a comunistas, judíos y católicos. En este clima se realizó el juicio, cargado de irregularidades, contra dos obreros anarquistas de origen italiano, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, quienes, a pesar de las extendidas movilizaciones en su apoyo, fueron ejecutados en agosto de 1927.



Cuadro de la serie Sacco y Vanzetti, plasmada por Ben Shahn a principios de la década de 1930. El pintor había nacido en Lituania en 1889, en el seno de una familia judía que migró a los Estados Unidos. En los años treinta, Shahn coincidió con la corriente realista estadounidense respecto a la idea de que el artista desempeña un papel en la sociedad y puede contribuir al cambio social mediante sus medios expresivos. Participó en los programas encarados por el gobierno de Roosevelt para promover las artes a través de la remodelación de edificios públicos. También trabajó como fotógrafo en el plan gubernamental destinado a registrar la situación social de las familias en el medio rural.

Durante la década de 1920 la economía experimentó un crecimiento casi ininterrumpido, salvo una breve recesión entre 1920 y 1921. Esto fue consecuencia de las inversiones masivas alentadas por la demanda de artículos duraderos –como los automóviles y los aparatos eléctricos– y por la expansión acelerada de los sectores de la construcción y los servicios. Los cambios en la economía tuvieron una fuerte incidencia en las formas de vida. Gracias al automóvil, millones de personas construyeron sus casas en zonas suburbanas, rodeadas de

jardines. La red de energía eléctrica y las carreteras tuvieron que extenderse a las nuevas zonas urbanizadas, que impulsaron a su vez la instalación de centros comerciales.

Fordismo

El objetivo de Henry Ford era "construir un automóvil para las masas; suficientemente grande para una familia, pero suficientemente pequeño como para que una sola persona pueda servirse de él y cuidarlo. Se lo hará con los mejores materiales, los mejores obreros, sobre la base de los diseños más simples que pueda imaginar la ingeniería moderna. Pero tendrá un precio suficientemente modesto como para que cualquier persona que gane un buen salario pueda comprarlo".

Desde el punto de vista estrictamente empresarial, el secreto de Ford fue haber sabido combinar una serie de factores. Por un lado, la normalización y la fabricación masiva de todas las piezas que componían el vehículo. Por otro, la creación a escala nacional de una tupida red de concesionarios, vendedores y agencias de publicidad, junto con la promoción de la compra del coche a plazos.

Los cambios en las costumbres dieron lugar al conflicto entre sistemas de valores diferentes. La población de las pequeñas ciudades y el campo enfatizó su adhesión a los valores puritanos, movilizándose para defender "la verdadera moral americana". Se organizaron campañas en contra de "la maldad del alcohol" o el uso del automóvil cerrado, por considerarlos una "invitación al pecado".

En 1919 el gobierno republicano aprobó la famosa Ley Seca, que prohibía el consumo de alcohol. La medida dio paso al mercado negro y el mundo del hampa, en el que proliferaron grupos decididos a lucrar con la violación de la norma. Uno de los más poderosos fue el dirigido por Al Capone. La violación de la Ley Seca se vio favorecida por la corrupción: muchos policías y políticos colaboraban con las actividades ilegales para obtener beneficios económicos y políticos. En 1933, cuando el Partido Demócrata ganó las elecciones, levantó la prohibición.

La política de los tres presidentes republicanos –Warren Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) y Herbert Hoover (19291933)– estuvo guiada por el mismo objetivo: restringir la acción del gobierno para que los empresarios, en el marco del laissez faire, encontraran las mejores condiciones para sus negocios. En esos años prevaleció un destacado consenso en torno a la idea de que la economía norteamericana era lo suficientemente fuerte como para autorregularse. El gobierno federal tuvo escasa participación directa en la prosperidad de aquellos años. La presión fiscal fue débil, pero, como el volumen de gastos era muy bajo, los presupuestos federales se cerraron con superávit.

El auge económico culminó en una orgía especulativa. Las acciones de las principales compañías –General Motors, Radio Corporation de América y United States Steel– subieron tan rápido de valor que el índice de sus cotizaciones se alejó peligrosamente de los valores de los bienes producidos. A lo largo de los años veinte las emisiones de acciones habían constituido una importante fuente de capital inversor y, en consecuencia, de crecimiento económico, pero las cotizaciones jamás habían subido tanto en un período tan breve ni tampoco se habían lanzado al mercado tantas nuevas acciones. Cuando se hizo evidente que el capital circulante en la Bolsa era en gran medida ficticio, los precios se desplomaron y la depresión subsiguiente fue la peor en la historia de los Estados Unidos.

El 4 de marzo de 1933, cuando el candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia, cerca de la mitad de los estados habían cerrado sus bancos y muchos de los que permanecieron abiertos no disponían de dinero. En su discurso inaugural, Roosevelt convocó a la población a no tener miedo y afirmó estar dispuesto a ponerse en marcha "ya mismo" en pos de su principal objetivo: "poner a la gente a trabajar". A lo largo de los siguientes cien días, como se conoce a este período, el Congreso aprobó una avalancha de leyes sobre fondos asistenciales para los parados, precios de apoyo para los agricultores, servicio de trabajo voluntario, proyectos de obras públicas a gran escala, reorganización de la industria privada, creación de un organismo federal para salvar el valle del Tenessee (la Tenessee Valley Authority), financiación de hipotecas para los compradores de viviendas y los agricultores, seguros para los depósitos bancarios y reglamentación para las transacciones de valores. El grado de compromiso financiero del gobierno federal con la marcha de la economía y los problemas sociales no tenía precedentes.

A pesar de cierta sintonía con las ideas de Keynes, el New Deal no se basó en la doctrina del economista inglés. El presidente Roosevelt y su equipo no aceptaron incrementar los gastos al punto de generar déficit en el presupuesto, y de ese modo oscilaron entre la inyección de la inversión estatal y el retorno a la austeridad. No obstante, el New Deal dio lugar a la aprobación de un conjunto de leyes que crearon organismos destinados a orientar desde el estado las decisiones de los principales agentes económicos y a promover políticas concertadas entre ellos.

La Ley de Ajuste Agrícola se basaba en la idea de que el exceso de producción era el principal problema de la economía. Su objetivo era volver a la relación entre precios agrarios e industriales anterior a la Gran Guerra. Para esto, recurrió al control de la producción y la acumulación de materias primas básicas a través del Departamento de Agricultura, en colaboración con comités de agricultores locales y asociaciones agrarias regionales. Se otorgaron primas a quienes restringiesen voluntariamente la producción; no obstante, aunque disminuyó la superficie cultivada, el incremento de la productividad de la tierra mantuvo el volumen de los productos agrícolas. Cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal el impuesto que gravaba la elaboración de bienes agrícolas para financiar las primas a la reducción de los cultivos, el programa se vino abajo.

La Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA, por sus siglas en inglés) estimuló a las empresas a estabilizar su cuota de mercado y al mismo tiempo buscó aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Se propuso eliminar la competencia "antieconómica" y alentar la creación de monopolios que posibilitaran el incremento de los precios y la inversión. Las empresas fueron invitadas a presentar un código de precios, salarios y leyes justos. La reorganización industrial propiciada por la ley requería que los capitalistas aceptasen acordar con los sindicatos. Con este fin, el gobierno se mostró dispuesto al afianzamiento del movimiento sindical. El nuevo trato, como en la socialdemocracia escandinava, se orientó a favor de la democracia social, pero en los Estados Unidos no existía un sólido Partido Socialista y, en gran medida, la defensa de los intereses obreros dependía del acuerdo más frágil entre los sindicatos y el Partido Demócrata.

Hasta el momento, la principal organización sindical –la Federación Americana del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés)– había dado cabida a los trabajadores calificados y mejor pagados, dejando de lado a los obreros no especializados de las nuevas industrias. A partir de 1933, el dirigente de la Unión de Trabajadores Mineros, John Lewis, logró canalizar una gran ofensiva huelguística impulsada desde las bases. La principal expresión de la nueva militancia obrera fue una serie de ocupaciones de fábricas que comenzó en la industria del caucho y se extendió a las fábricas de automóviles del oeste medio. En primera instancia las empresas resistieron, pero acabaron pactando con los sindicatos. El cambio en la relación obreros-patrones fue marcado, en 1937, por el reconocimiento del sindicato automotriz por parte de la General Motors y del Comité de Trabajadores del Acero por parte de la Steel. Lewis se separó de la AFL y creó el Congreso de

Organizaciones Industriales (CIO, por sus siglas en inglés) con el fin de lograr la sindicalización de los trabajadores de las industrias de producción masiva, cualquiera fuese su categoría y capacitación. Su principal arma fue la huelga de brazos caídos.

La legislación social avanzó durante el segundo mandato de Roosevelt con la Ley Wagner, que amplió la protección de los sindicatos y el deber de negociar colectivamente, y con la Ley de Normas Laborales Justas, que reguló las condiciones de trabajo fijando salarios mínimos e imponiendo el pago de primas por horas extraordinarias. En el marco de la crisis se afianzó un orden corporativo que alcanzaría su máximo esplendor en los años dorados de la segunda posguerra.

El fascismo

A lo largo del siglo XIX, las tres principales familias políticas fueron el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo, pero en las dos últimas décadas surgió una nueva derecha intensamente nacionalista y antisemita que fue capaz de movilizar y ganar la adhesión de diferentes grupos sociales, tanto en Viena como en París y en Berlín. El fascismo se nutrió de las ideas y las actitudes distintivas de la derecha radical de fines del siglo XIX, en el sentido en que ambas recogían sentimientos de frustración diversos y al mismo tiempo asumían, de manera violenta, la negación de la primacía de la razón sostenida hasta entonces por el liberalismo y el socialismo. Si bien existen continuidades entre la derecha radical de preguerra y el fascismo, este no fue el resultado lineal de aquella. La brutal experiencia de la guerra de trincheras y la devastadora miseria social derivada de la crisis económica fueron decisivas en la gestación y consolidación del fascismo.

Para muchos, el retorno a la paz se volvió insoportable: sobrevivir dejó de tener sentido para quien sabía por qué morir. Los que decidieron “vivir peligrosamente”, como proponía el fascismo, encontraron en el culto a la violencia una vía para manifestar sus más hondos y potentes impulsos. No dejaron las armas y pasaron a integrar las formaciones paramilitares que proliferaron en la posguerra, tales como los cuerpos libres (Freikorps) en Alemania, las milicias nacionales (Heimwehr) en Austria o los legionarios en Italia y en Rumania. Muchos gobernantes no fascistas, incluidos los socialdemócratas alemanes, recurrieron a ellos para impedir un nuevo Octubre Rojo, que en realidad era más temido que factible.

Aunque los movimientos de sesgo fascista tuvieron una destacada expansión en el período de entreguerras, muchos de ellos no pasaron de ser grupos efímeros, como el encabezado por Oswald Mosley en Gran Bretaña, los Camisas Negras de Islandia o la Nueva Guardia de Australia. En otros países, si bien lograron cierto grado de arraigo –como fue el caso de Cruz de Flecha en Hungría o Guardia de Hierro en Rumania–, los grupos de poder retuvieron el control del gobierno a través de dictaduras tradicionales.

El fenómeno fascista prosperó allí donde confluyeron una serie de elementos que le ofrecieron un terreno propicio. En este sentido, Italia y Alemania compartían rasgos significativos. En primer lugar, el ingreso tardío pero a ritmo acelerado en la industrialización dio lugar a contradicciones sociales muy profundas y difíciles de manejar. En parte porque la aparición de una clase obrera altamente concentrada en grandes unidades industriales y cohesionada en organizaciones sindicales potentes acentuó la intensidad de los conflictos sociales, y en parte porque la presencia de los sectores preindustriales –artesanos, pequeños comerciantes, terratenientes, rentistas–, junto al avance de los nuevos actores sociales –obreros y empresarios–, configuró una sociedad abruptamente atravesada por diferentes demandas de difícil resolución en el plano político. En segundo lugar, la irrupción del electorado masivo –debido a las reformas electorales de 1911 en Italia y de 1919 en Alemania– socavó la gestión de la política por los notables, pero sin que las elites fueran capaces de organizar partidos de masas en condiciones de competir con la

izquierda. Esto lo harían los fascistas. Por último, tanto Italia como Alemania, aunque estuvieron en bandos opuestos en la Primera Guerra, vivieron los términos de la paz como naciones humilladas, especialmente en Alemania, donde todos compartieron el sentimiento de agravio por el tratado de Versalles.

Además de las condiciones que hicieron posible su arraigo, el éxito de los fascistas se explica por lo que ofrecieron, la forma en que lo hicieron y la respuesta que recibieron. Los fascistas italianos y los nazis alemanes, sobre todo en la etapa inicial, presentaron programas revolucionarios, en parte anticapitalistas, que recogían los reclamos y las ansiedades de diferentes sectores de la sociedad. A través de su oratoria y sus prácticas, el fascismo se definió como antimarxista, antiliberal y antiburgués. En el plano afirmativo se presentó –con sus banderas, cánticos y mítines masivos– como una religión laica que prometía la regeneración y la anulación de las diversidades para convertir a la sociedad civil en una comunidad de fieles dispuestos a dar la vida por la nación.

Programa fascista de 1919

Para el problema social: NOSOTROS QUEREMOS:

1. La promulgación de una ley de estado que dé a todos los trabajadores una jornada legal de ocho horas de trabajo.
2. Salarios mínimos.
3. La participación de los representantes de los trabajadores en el funcionamiento técnico de las empresas.
4. [...].
6. Una necesaria modificación del proyecto de ley de seguridad de invalidez y de jubilación, disminuyendo el límite de edad propuesto, actualmente de 65 años, a los 55 años.

Para el problema financiero: NOSOTROS QUEREMOS:

1. Una fuerte imposición extraordinaria sobre el capital con carácter progresista que tenga la forma de una verdadera expropiación de todas las riquezas.
2. La confiscación de todos los bienes de las congregaciones religiosas y la abolición de todas las bulas episcopales, que constituyen una enorme responsabilidad para la nación y un privilegio para los pocos privilegiados.

Al mismo tiempo, en un contexto signado por la pérdida de sentido y la desorganización social, los partidos brindaron un lugar de encuadramiento seguro y disciplinado y supieron canalizar la energía social a través de las marchas, las concentraciones de masas y la creación de escuadras de acción. El partido, además, ofreció un jefe. La presencia de un líder carismático a quien se le reconocían los atributos necesarios para salir de la crisis fue un rasgo clave del fascismo. Tanto Mussolini como Hitler fueron jefes plebeyos con gran talento para suscitar la emoción y ganar la adhesión de distintos sectores ya movilizados.

Aunque el fascismo recogió especialmente el apoyo de la clase media, de los grupos más inestables y desarraigados, de la juventud y del campesinado, también logró el reconocimiento de sectores de la clase obrera. Los fascistas y los nazis llegaron al gobierno en virtud de su capacidad para recoger demandas y agravios variados, y también porque lograron convencer a los grupos de poder de que podían representar sus intereses y satisfacer sus ambiciones mejor que cualquier partido tradicional.

Los elencos gobernantes decidieron aliarse con los fascistas porque

estaban convencidos de que podrían ponerlos a su servicio para liquidar a la izquierda y preservar el statu quo. Los grandes capitalistas, por su parte, no manifestaron una adhesión ni temprana ni calurosa a los movimientos fascistas. Aunque el tono anticapitalista del fascismo fue selectivo y se moderó rápidamente, el carácter plebeyo de los movimientos generaba reservas entre los grandes propietarios. Hasta el ingreso al gobierno de Hitler, por ejemplo, las contribuciones económicas fueron destinadas en primer lugar a los conservadores, la opción preferida por los capitalistas. Sin embargo, no pusieron objeciones a las designaciones de líderes fascistas como jefes de gobierno. Una vez en el poder, ni Hitler ni Mussolini cuestionaron el capitalismo, pero subordinaron su marcha y fines, especialmente a partir de la guerra, a la realización del glorioso destino de la nación, de la que se consideraban los auténticos intérpretes.

Desde el gobierno, ambos líderes, a diferentes ritmos y con mayor decisión el Führer, revolucionaron el estado y la sociedad mediante las organizaciones paralelas del partido. Estas actuaron como corrosivo de los organismos estatales –magistratura, policía, ejército, autoridades locales– y buscaron remodelar la sociedad. Para ello intervinieron en la educación, organizaron el uso del tiempo libre y, particularmente, se ocuparon del encuadramiento y la movilización de las juventudes, con la idea de crear lo que llamaban “el hombre nuevo”.

La presencia de diferentes camarillas en pugna confirió un carácter caótico a la marcha de los regímenes. Los jefes máximos nunca llegaron a imponer sus directivas en forma acabadamente ordenada, sin que eso afectara la fortaleza del Duce o del Führer.

El terror fue un componente de ambos regímenes, mucho más central en el nazismo. Pero fue sólo uno entre los múltiples instrumentos destinados a lograr la subordinación de la sociedad. También fue importante, por ejemplo, la concesión de beneficios y la integración de la población en nuevas organizaciones.

Si bien los fascistas suprimieron los sindicatos independientes y los partidos socialistas, su política apuntó a la integración material y cultural de la clase obrera. Mientras subordinaba políticamente a los trabajadores y los disciplinaba socialmente, el fascismo promovía la idea de igualdad y la disolución de las jerarquías: el plato único nacional, la fuerza con Alegría, el Volkswagen para todos, el Frente Alemán del trabajo, el Dopolavoro fueron manifestaciones, bastante eficaces, de ese afán por crear una comunidad popular. La contribución más importante del nazismo en el plano social fue el restablecimiento del pleno empleo antes de fines de 1935, mediante la ruptura radical con la ortodoxia económica liberal.

El hecho de identificar el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán como las expresiones más logradas del fenómeno fascista no implica desconocer los importantes contrastes que hubo entre ambos: el peso decisivo del antisemitismo genocida en el régimen nazi, más tardío y menos radical en Italia; la más plena conquista del estado y la sociedad por parte del nazismo; la mayor autonomía de Hitler respecto de los grupos de poder; la política exterior orientada hacia el imperialismo tradicional en el caso de Mussolini, y hacia la imposición del predominio de la raza aria en el de Hitler.

Interpretaciones del nazismo

Tanto en el campo de la historia como en el de las ciencias sociales y políticas, son múltiples las perspectivas desde las que se ha intentado explicar el fenómeno fascista, desde las marxistas de la primera hora, que reconocían una relación directa y lineal entre capitalismo y fascismo, pasando por las que planteaban que la falta de una revolución burguesa en los países de industrialización tardía gestó el terreno propicio para el surgimiento del fascismo, hasta las que recurrieron al concepto de

totalitarismo para acabar proponiendo un listado de rasgos formales comunes entre el nazismo, el fascismo y el comunismo, sin avanzar en el análisis de los diferentes procesos históricos. Y aunque el debate seguirá abierto, los trabajos historiográficos permiten una articulación cada vez mayor de los contextos y las intenciones a través de la reconstrucción de cada experiencia singular, sin perder de vista los rasgos y procesos compartidos que sustentan el concepto de fascismo.
La versión historiográfica liberal alemana, dominante en las décadas de 1950 y 1960, se negó a considerar el nazismo como una expresión del fascismo genérico, especialmente en virtud de la orientación impuesta a la política exterior nazi y de la instrumentación del genocidio judío.
Desde esta perspectiva, las obsesiones ideológicas de Hitler fueron reconocidas como la causa principal de los rasgos básicos del régimen, signado por un alto grado de irracionalidad y un marcado sesgo autodestructivo. La barbarie nazi era considerada un caso único y excepcional. Sin embargo, esta explicación simplificó el problema. El nazismo pasó a ser básicamente hitlerismo y el papel desempeñado por el resto de los actores –los que colaboraron y los que concedieron– quedó en las sombras.

En última instancia, el fascismo fue centralmente una forma de hacer política y acumular poder para llegar al gobierno primero, y para "revolucionar" el estado y la sociedad después. En relación con estos fines, el fascismo se presentó como alternativa al liberalismo burgués "impotente" frente al avance de la izquierda, como decidido competidor y violento contendiente del comunismo, y como eficaz restaurador del orden social. En la ejecución de estas tareas se distinguió de los regímenes autoritarios tradicionales porque no se limitó a ejercer la violencia desde el estado. Los fascistas organizaron la movilización de las masas porque no deseaban contar con súbditos pasivos sino con soldados convencidos. Su contrarrevolución fue en gran medida revolucionaria, aunque en un sentido diferente del de la revolución burguesa y la socialista.

El fascismo italiano

El fascismo nació oficialmente el 23 de marzo de 1919 en el mitin convocado por Benito Mussolini en un local de la plaza San Sepolcro, en la ciudad de Milán, al que asistieron muy pocas personas y donde se crearon los *fascios* de combate. Estos aunaban la retórica del nacionalismo con el discurso del sindicalismo revolucionario y fueron apoyados por los futuristas, una de las expresiones más notables de la vanguardia artística.

Manifiesto futurista

[...] 3. La literatura exaltó, hasta hoy, la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. [...]
9. Queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo–, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio hacia la mujer. [...]
11. Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las

marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean; a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embridados con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos, cuya hélice flamea al viento como una bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta.

Texto publicado en 1909 en el periódico francés *Le Figaro.*



Filippo Tommaso Marinetti, el fundador del movimiento cultural futurista, nació en Alejandría (Egipto) en 1876. En 1919 se sumó al movimiento fascista, al que concibió como la extensión natural del futurismo. Participó en la invasión a Etiopía, y en 1942 peleó en el frente ruso.

El nacionalismo radical ya había ganado terreno desde antes de la Primera Guerra Mundial, en el marco de la pobre expansión imperialista de Roma, pero alcanzó su más plena expresión después de la paz de Versalles con la ocupación de Fiume –ciudad incluida en la recién creada Yugoslavia– por las brigadas de ex combatientes (*arditti*) encabezadas por el poeta Gabriel D'Annunzio (septiembre de 1919-diciembre de 1920). En la crisis de posguerra, esta percepción de "una victoria mutilada" se combinó con la intensa movilización social, la marcha negativa de la economía y la inestabilidad de los gobiernos.

La conflictividad social alcanzó su máxima expresión en el llamado "bienio rosso" (1919-1920). En esos dos años, los campesinos sin tierra ocuparon algunos latifundios, sobre todo en el valle del río Po. En septiembre de 1920, un *lock out* de los empresarios metalúrgicos llevó a la ocupación de algunas grandes fábricas del norte por los obreros. Los numerosos conflictos eran estallidos de protesta espontáneos y sin coordinación, que no respondían a un plan revolucionario. El primer ministro Giovanni Giolitti decidió esperar a que el movimiento se agotara por sí solo sin recurrir a la fuerza. A partir de 1921 hubo un marcado descenso de la agitación social. Sin embargo, la actitud de Giolitti fue vista como una falta de firmeza para enfrentar al radicalismo revolucionario y causó hondo resentimiento en los industriales y en la clase media temerosa del caos social. La propuesta de los fascistas de liquidar el "peligro rojo" mediante el uso de la fuerza fue acogida con manifiesto beneplácito o bien pasivamente por gran parte de la sociedad italiana.

Con la reforma del sistema electoral, aprobada antes de la guerra, crecieron los dos principales partidos de masas, el Socialista y el Popular, este último creado por el sacerdote Luigi Sturzo. En 1919, sobre un total de quinientos escaños, los socialistas obtuvieron ciento

cincuenta y seis y los populares cien. Ni los católicos ni los socialistas eran aliados confiables para la dirigencia liberal, y ellos tampoco estaban dispuestos a colaborar con los liberales, además se hallaban muy divididos internamente. La inestabilidad de los gobiernos se profundizó. Desde el final de la guerra hasta la designación de Mussolini como primer ministro en 1922 hubo cinco jefes de gobierno: Vittorio Orlando, Saverio Nitti, Giovanni Giolitti, Ivanoe Bonomi y Luigi Facta.

Al ascenso del fascismo, evidente a partir de 1920, contribuyeron dos hechos: la intervención violenta en el ámbito rural del norte de los escuadristas dirigidos por los ras locales –Dino Grandi en Bolonia, Roberto Farinacci en Cremona, Italo Balbo en Ferrara–, y el espacio político que el primer ministro Giolitti concedió a Mussolini a través de la alianza electoral de 1921.

Cada domingo los grupos de *Squadristi* (Camisas Negras) se concentraban en algún pueblo, destruían las sedes de las cooperativas y los sindicatos obreros y expulsaban a los alcaldes. La porra y el aceite de ricino eran los recursos dilectos de los fascistas, quienes también solían emplear las armas de fuego. La complicidad del gobierno liberal quedó de manifiesto en la impunidad de estos crímenes. Estas expediciones punitivas ampliaron la base del fascismo al granjearle el apoyo de los propietarios rurales, especialmente del campesinado medio.

Giolitti contribuyó decisivamente al afianzamiento de los fascistas. Para contrarrestar el peso de los legisladores socialistas y populares se alió con Mussolini. En las elecciones de mayo de 1921 el fascismo obtuvo treinta y cinco de las poco más de cien bancas correspondientes a la lista liberal. Los populares obtuvieron ciento siete, los socialistas oficiales ciento veinte y los comunistas quince. Lo más importante fue que el Duce ganó respetabilidad política y los fascistas dejaron de estar en la periferia de la escena política. Como contrapartida, y a pesar del disgusto de sus huestes, Mussolini no se opuso al envío de las tropas que pusieron fin a la ocupación de Fiume. D'Annunzio capituló y se retiró de la vida política: su experimento era excesivamente radical para ganarse el apoyo de los grandes intereses. Con su disposición a negociar, el líder fascista demostró ser más confiable.

Frente a la violencia en las calles –que el propio fascismo fomentaba– y la creciente debilidad del grupo gobernante, los fascistas decidieron organizar la Marcha sobre Roma para ingresar al gobierno. Sus poco organizadas huestes habrían podido ser detenidas por las fuerzas militares de haber existido la voluntad de frenarlas. Los ministros renunciaron y el monarca pidió a Mussolini que formase un nuevo gabinete. El Duce se puso al frente de un gobierno de coalición integrado por algunos fascistas y una mayoría de dirigentes de otras formaciones políticas, excluida la izquierda. No hubo golpe de estado ni éxitos electorales; los fascistas llegaron al gobierno de la mano de los notables, los militares y la monarquía.

Hasta 1925 Mussolini no fue más que el primer ministro de una monarquía semiparlamentaria, y la vida pública –partidos, sindicatos, prensa– siguió funcionando bajo una cierta apariencia de normalidad. La política económica no se apartó de la ortodoxia liberal y favoreció el libre juego de la iniciativa privada a través de las privatizaciones. No obstante, se dio curso a las primeras medidas destinadas a fortalecer al Partido Fascista. Por ejemplo, se creó un Gran Consejo Fascista como órgano consultivo paralelo al Parlamento nacional. A principios de 1923 todas las asociaciones y unidades paramilitares fueron integradas en una milicia voluntaria que quedó a cargo de la seguridad nacional; gracias a ello, los Camisas Negras adquirieron estatus legal.

En 1924, dos hechos posibilitaron el avance de Mussolini sobre las instituciones del estado liberal: una nueva ley electoral y las posteriores elecciones en medio de un ambiente de fraude y coacción. En junio de 1924, cuando el diputado socialista Giacomo Matteotti denunció a Mussolini en el Parlamento, fue secuestrado y asesinado. Las primeras investigaciones revelaron la participación de miembros de las bandas armadas fascistas. El fascismo ocupó entonces el banquillo de los acusados. Los diputados socialistas, populares y parte de los liberales, por primera vez, hicieron frente común contra el

fascismo y abandonaron el Parlamento en señal de protesta. Tras un período de indecisión, el Duce pidió al rey que disolviera la Cámara y en su discurso del 3 de enero de 1925 asumió la responsabilidad de cuanto había sucedido. "Si el fascismo es una asociación de delincuentes... Si toda la violencia ha sido el resultado de un clima histórico, político y moral, pues bien, [que sea] para mí toda la responsabilidad, porque este clima lo he creado yo."

La serie de medidas aprobadas entre 1925 y 1928 condujeron a la dictadura. El jefe de gobierno dejó de ser responsable de su gestión ante el Parlamento, todos los partidos políticos fueron disueltos y quedó suprimida la prensa opositora. Se creó un tribunal especial para juzgar los crímenes contra el estado: sus miembros eran funcionarios sin formación jurídica específica y debían prestar juramento de obediencia a Mussolini. Los acusados no tenían derecho a apelar y los "delincuentes políticos" podían ser deportados. Según la nueva ley electoral, el Gran Consejo Fascista aprobaba la lista de cuatrocientos candidatos para la Cámara de Diputados y los votantes sólo podían ratificarla o rechazarla. Los políticos liberales, que habían permitido la violencia fascista para eliminar el socialismo, fueron excluidos de la vida política.

Tras una primera etapa liberal, desde 1925 la política económica se orientó cada vez más hacia la intervención estatal y el proteccionismo. En 1927 se aprobó la Carta del Trabajo, que instauró un sistema corporativo que propugnaba la armonía entre las clases sociales mediante un esquema jerárquico de corporaciones nacionales formadas por representantes de las empresas y de los sindicatos fascistas, con la idea de pautar la marcha de la economía y regular las relaciones laborales bajo la supervisión del estado, el encargado de asegurar la paz social. Fue suprimido el derecho de huelga, los sindicatos libres fueron sustituidos por corporaciones fascistas obligatorias, se limitó la libertad de movimiento del trabajador (sobre todo para evitar el éxodo rural) y se aprobó una legislación de seguridad social con significativos beneficios para los trabajadores.

Se impulsó la fascistización del conjunto de la sociedad a través del sistema educativo y de la creación de organizaciones fascistas dirigidas a encuadrar tanto la juventud como a las mujeres y a los trabajadores. La innovación más popular fue la Opera Nazionale Dopolavoro, fundada en 1925 con el fin de "favorecer el empleo sano y provechoso de las horas libres de los trabajadores intelectuales y manuales, por medio de instituciones destinadas a desarrollar sus capacidades físicas, intelectuales y morales". En 1939 esta organización creada por el partido pasó a depender de los sindicatos.

En 1929 quedó resuelto el problema con el Vaticano, pendiente desde la unificación del país en 1870. Con la firma de los pactos de Letrán entre la Santa Sede y el reino de Italia, se restablecieron las relaciones diplomáticas y se creó un diminuto estado dentro de Roma cuya máxima autoridad era el Papa. La iglesia fue compensada por los territorios perdidos, las corporaciones eclesiásticas quedaron exentas de impuestos y sus escuelas recibieron un trato preferencial. Gracias a esta estrategia, Mussolini ganó el apoyo de los católicos.

La crisis económica mundial produjo un notable aumento de la desocupación en Italia, aunque no en forma tan dramática como en otros países. Los nuevos desafíos hicieron que el régimen se definiera decididamente a favor de la autarquía. En el ámbito agrario esta tendencia se puso en marcha con la "batalla del trigo", que multiplicó por dos la producción de este cereal mediante el aprovechamiento de zonas pantanosas, pero también dedicando a su cultivo tierras que antes se utilizaban para olivos, ganado o frutales con un rendimiento mucho más elevado.

En 1933 se creó el Instituto para la Reconstrucción Italiana (IRI), que convirtió al estado en el principal inversor industrial. Mediante la compra de acciones, el IRI nacionalizó muchas de las grandes empresas industriales al borde de la quiebra. Debido a la Depresión, los industriales se vieron obligados a aceptar la expansión de una economía combinada que entrelazaba las empresas públicas y las privadas. El IRI podía controlar las empresas de propiedad privada, siempre que lo hiciera en interés de la "defensa nacional, la autarquía

y la expansión del imperio". Así, la dirigencia fascista utilizó su creciente poder económico para concretar sus objetivos políticos.

Finalmente, en 1934 fueron creadas las corporaciones, se desoyeron las propuestas de los fascistas radicales que pretendían abolir la propiedad privada para asignar al nuevo organismo la plena responsabilidad de la producción y liquidar así el histórico conflicto entre el interés público y el privado. En el marco de la crisis, había un aspecto de las corporaciones que atraía a los grandes propietarios: la cooperación entre los diferentes sectores productivos para restringir la competencia y asegurar la posición de quienes ya la tenían. También aceptaron el dirigismo estatal porque necesitaban la ayuda de los fondos públicos para salvar de la bancarrota a las empresas privadas con problemas.

En líneas generales, la masa del pueblo italiano aceptó el nuevo régimen. Para muchos, la paz pública, el relativo bienestar económico y una política exterior que satisfacía el orgullo nacionalista compensaban la pérdida de libertades y las arbitrariedades fascistas.

En el escenario internacional, inicialmente, la Italia fascista se posicionó junto a Gran Bretaña y Francia y desempeñó un papel estabilizador. La ocupación de Etiopía por las tropas italianas en 1935 dio un drástico giro a esta situación. Cuando la Sociedad de Naciones sancionó a Roma, aunque de modo tibio e ineficaz, a raíz de la queja elevada por el emperador etíope, Mussolini estrechó sus lazos con Hitler. Hasta ese momento había frenado la avanzada de los alemanes sobre Austria y manifestado su preocupación por el rearme del Tercer Reich. Ese giro no dejó de generar temores entre los grupos dominantes.

Las medidas más importantes de la política exterior italiana –la guerra contra Etiopía, la constitución del Eje Berlín-Roma, la intervención en la Guerra Civil española y el ingreso en la Segunda Guerra Mundial– fueron aprobadas por Mussolini y sus consejeros más próximos. Aunque los industriales no intervinieron directamente, se beneficiaron con la política de rearme y expansión territorial. No obstante, las repercusiones del nuevo rumbo los preocupaban: la desvinculación comercial de las potencias occidentales, la creciente intervención del gobierno en sus actividades y, sobre todo, el temido poder económico de la industria alemana. Después de la anexión de Austria, aprobada por Hitler en 1938, Alemania se apropió de materias primas que antes eran destinadas a Italia y colocó a los exportadores alemanes en una situación privilegiada. Con el nuevo aliado, Italia podía quedar relegada al papel de productora agrícola.

Mussolini entró tardíamente en la Segunda Guerra, en 1940, impulsado por su afán de gloria y creyendo que el triunfo del Eje posibilitaría la creación de un imperio italiano con base en los Balcanes y en África del norte. Después de tres años de derrotas consecutivas, en julio de 1943 el rey Víctor Manuel III y el Gran Consejo Fascista aprobaron su destitución y encarcelamiento e iniciaron negociaciones con los aliados. Los nazis invadieron Italia, liberaron a Mussolini y lo colocaron a la cabeza de un gobierno títere en Saló, al norte del reino. La República Social Italiana fue la experiencia más sanguinaria del régimen fascista. El Duce acabó sus días a fines de abril de 1945, ejecutado por partisanos italianos. Su cuerpo fue colgado por los pies –junto al de su última amante, Clara Petacci, y al de otros jerarcas fascistas– del techo de un garaje en una plaza de Milán.

Mussolini había llegado al gobierno con el apoyo o la complacencia de distintos sectores que mantenían una relación tensa e inestable. Por una parte, el Partido Fascista, cuyos miembros más radicales exigían su promoción personal y cambios más "revolucionarios" para avanzar hacia el igualitarismo y el fortalecimiento de los sindicatos fascistas frente a la patronal. Por otra, los grupos de poder –los grandes propietarios industriales y agrarios, la iglesia, la elite política–, que, junto con los funcionarios y los organismos estatales, estaban a favor de un autoritarismo tradicional respetuoso de la propiedad privada y la jerarquía social. Las decisiones del caudillo, más allá de su carismática autoridad, estaban condicionadas por las relaciones de fuerza entre estos sectores. El Duce avanzó menos que Hitler en el proceso de fascistización del estado. Como desconfiaba de

los activistas del partido, se esforzó por subordinarlos a un estado poderoso. El Duce tampoco alcanzó el grado de autonomía que lograra Hitler, pues tuvo que compartir la cúspide del poder con el rey y además debió convivir con una iglesia católica fuerte. En el marco de estas restricciones, los niveles más altos de la burocracia y los grandes grupos de interés se reservaron cuotas de poder que, con el correr del tiempo, les posibilitarían destituir a Mussolini.

El nazismo en Alemania

Poco después de finalizada la Gran Guerra, en Alemania se proclamó la República, con la Constitución sancionada en la ciudad de Weimar. Pero el nuevo régimen republicano dejó intactos los pilares de la Alemania imperial: la burocracia, los jefes y oficiales del ejército, la magistratura, el cuerpo policial. El nuevo texto constitucional reconoció el derecho al voto a todos los hombres y mujeres mayores de veinte años, dispuso la elección directa del presidente y adoptó un sistema de representación proporcional que aseguraba la presencia de los partidos minoritarios. Fue apoyado por los partidos conocidos como la "coalición de Weimar" (socialdemócratas, liberales, católicos de centro) y rechazado por las fuerzas extremas de derecha e izquierda.



El gabinete del doctor Caligari, filmada por Robert Wiene en 1920, es considerada una de las películas expresionistas alemanas más logradas. En ella destacan los decorados distorsionados que crean una atmósfera amenazante. El expresionismo contó entre sus representantes a Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau y Georg Wilhelm Pabst.

Si bien los constituyentes se pronunciaron a favor de una república democrática parlamentaria, no le cerraron la puerta al presidencialismo: en situaciones de emergencia se podía gobernar a través de decretos. Esta práctica, en principio excepcional, se hizo habitual cuando los ministros –carentes del aval del Reichstag, dividido en distintas tendencias políticas– recurrieron al presidente. Las medidas de excepción fueron ampliamente usadas, tanto por el socialdemócrata Friedrich Ebert (1918-1925) como por el militar conservador Paul von Hindenburg (1925-1934).

La República adoptó un régimen federal muy laxo: por una parte, el Reich, a cargo de los asuntos exteriores, el ejército, las comunicaciones y la moneda, y por la otra, diecisiete estados o *länder*, con amplias competencias sobre la policía, la justicia y la salud.

Aunque la Socialdemocracia fue el partido más votado en las seis elecciones realizadas entre 1919 y 1930, no contó con el número necesario de diputados para formar gobierno propio en el marco del sistema proporcional. Después de las elecciones de junio de 1920, la coalición formada en 1919 perdió votos y, en consecuencia, la derecha y la izquierda ganaron sufragios. Un socialdemócrata volvió a ocupar el cargo de canciller recién en 1928, con casi el 30% de los votos. La mayoría de la población optó por los partidos burgueses.

En la Alemania de la República de Weimar se distinguen tres períodos: una etapa inicial, que duró hasta 1923, cargada de tensiones; otra de mayor estabilidad, entre 1924 y 1929; y un tercer momento de crisis, que culminó con el ascenso del nazismo.

Los primeros años de la posguerra fueron sombríos. Las potencias victoriosas obligaron al gobierno provisional a firmar una paz que los alemanes vivieron como humillante. Para muchos, la derrota en la guerra fue más una "puñalada por la espalda" de la dirigencia republicana que una consecuencia de la derrota en los campos de batalla. La economía sufrió bruscas oscilaciones debido al pago de las reparaciones de guerra. Además, hubo recurrentes intentos de insurrección desde la izquierda y golpes abortados desde la derecha.

El año 1923 fue especialmente crítico. En los primeros meses, Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr y se hicieron cargo de la explotación de las minas y los ferrocarriles de la región para cobrarse las reparaciones de guerra. El gobierno alemán ordenó la resistencia pasiva y comenzó a emitir moneda para atender las necesidades de la población. La trama social fue desgarrada por la hiperinflación más alta conocida hasta ese momento. Durante la crisis se formó un gobierno de coalición encabezado por Gustav Stresemann, hombre del Partido Popular Alemán ligado a los intereses de la industria. Al frente del área económica, Hjalmar Schacht, con sólidas relaciones en el mundo de las finanzas, tomó medidas drásticas para reducir el gasto público y obtuvo ayuda de los banqueros norteamericanos a través del plan Dawes. La recuperación promovida por este crédito colocó a Alemania en una posición altamente dependiente del flujo de capitales estadounidenses.

En 1919, el frustrado y sangriento intento de crear una república soviética en Baviera dejó profundos temores, y el capitán del Reichswehr (ejército alemán), Ernst Röhm, propuso que se realizaran cursos de adoctrinamiento para asegurar la lealtad de los soldados a los altos mandos. El cabo Adolf Hitler, uno de los asistentes, llamó la atención de sus superiores debido a sus dotes como orador, y a él le encomendaron controlar el Partido Alemán de los Trabajadores. Creado a fines de 1918, el ideario de este pequeño círculo combinaba el nacionalismo, la defensa de los derechos del trabajador y el antisemitismo. Hitler renunció al ejército y se volcó de lleno a la actividad política.

El partido, reorganizado bajo el nombre de Partido Nacionalsocialista de los Obreros Alemanes, presentó su nuevo programa en 1920. A través de sus veinticinco puntos articuló las ideas de los nacionalistas extremos –unión de todos los alemanes en una gran Alemania, anulación de los tratados de paz y negación de la ciudadanía a quienes no tuvieran sangre alemana (los judíos, explícitamente, no podían ser alemanes)– con reformas de sesgo socialista –abolición de la renta que no fuera producto del trabajo, nacionalización de las grandes empresas, reparto de los beneficios de la gran industria, reforma agraria radical–. Los asistentes a los mítines donde Hitler se desempeñaba como orador eran cada vez más numerosos. Para guardar el orden en los actos, se creó una fuerza de choque –la Sección de Asalto (SA)– bajo la conducción de Röhm.

Con la asunción de Stresemann en 1923, la relación entre el gobierno central y las autoridades de Baviera, protectoras de múltiples agrupaciones nacionalistas radicalizadas, derivó rápidamente hacia la ruptura. La derecha extrema deseaba "la marcha sobre Berlín" para instaurar un nuevo gobierno sin influencia socialista. Pero los

gobernantes de Baviera no tenían intención de dejarse arrastrar a un enfrentamiento armado. Hitler y el general Erich Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial, acordaron forzar el golpe encabezando el 9 de noviembre de 1923 una manifestación que no logró ser masiva y fue violentamente reprimida por la policía. Hitler, condenado a cinco años de prisión, sólo estuvo recluido nueve meses. En la cárcel, mientras le dictaba *Mi lucha* a Rudolf Hess, reconoció dos errores en la experiencia de Múnich: haber actuado desde la ilegalidad y haber enfrentado al ejército. No volvería a cometerlos.

Al salir de la cárcel, Hitler reorganizó el partido, para contar con una fuerza cohesionada bajo su conducción indiscutida. Se desmanteló la fracción radical dirigida por los hermanos Otto y Gregor Strasser y fueron creadas las SS (fuerzas de protección) como un cuerpo reducido y selecto a cargo de la custodia de Hitler, en un primer momento bajo la dirección de las SA.

La estabilización de la economía alemana y los logros de Stresemann en política exterior abrieron un paréntesis de relativa calma desde mediados de la década de 1920 hasta la crisis de 1929. El impacto del derrumbe económico contribuyó a que el nazismo pasara a ocupar el centro de la escena política. Pero más importante fue la decidida movilización política de diferentes sectores medios y populares que habían tomado distancia de los partidos tradicionales para reivindicar la acción directa y un nuevo modo de hacer política, de tono populista. El avance electoral de los nazis a partir de 1930 fue posible porque, en el marco del desgaste de los principales partidos y de la intensa activación ciudadana, fueron los que mejor supieron interpretar y representar las demandas de justicia social y rehabilitación del orgullo nacional. Lo distintivo del nazismo mientras estuvo en el llano fue que respondió a un difundido anhelo de renovación nacional y de reforma social que la república de Weimar no había logrado satisfacer.

Entre la renuncia del primer ministro socialdemócrata en 1930 y el nombramiento de Hitler en enero de 1933, se sucedieron gobiernos débiles y antiparlamentarios –Heinrich Brüning, Franz von Papen y el general Kurt von Schleicher– que intentaron avanzar hacia un régimen autoritario mediante la imposición de decretos de emergencia y las reiteradas disoluciones del Reichstag. En ese lapso, el Partido Nacionalsocialista de los Obreros Alemanes se convirtió en un partido de masas. En las elecciones legislativas de septiembre de 1930, obtuvo seis millones más de votos que en las de 1928 y se convirtió así en la segunda fuerza política del país, gracias al traspaso de electores de los partidos de centro y de derecha a los nazis. A fines de julio de 1932 recogió el mayor caudal de votantes (37,3%), sin que este resultado le permitiera contar con mayoría propia. Los comunistas también incrementaron su número de votos. La crisis social y económica abonaba la radicalización de la política.

Finalmente, en los últimos días de enero de 1933 la derecha conservadora entregó el gobierno al jefe del partido, que no había dudado en sembrar la violencia en su marcha hacia el poder. Las condiciones impuestas por la paz de Versalles, la profunda crisis política potenciada por la crisis social de 1930 y las divisiones en el campo de la izquierda conformaron un escenario propicio para el ascenso del Führer. Las decisiones de las elites tradicionales, que le abrieron camino creyendo que podrían usarlo para terminar con la República y aniquilar a la izquierda, tuvieron un peso significativo. Los nazis, por su parte, lograron presentarse como la opción política capaz de satisfacer las aspiraciones nacionales y de igualación social de gran parte del electorado, cuyo voto fue decisivo para que los nazis llegaran al gobierno.

Si bien Hitler ya detentaba el cargo de primer ministro, deseaba contar con mayoría propia en el Reichstag y, confiado en el peso electoral de su partido, convocó a elecciones el 5 de marzo. El incendio del edificio del Reichstag, el 27 de febrero, le posibilitó desatar una brutal ola de violencia contra la izquierda. No obstante, en los comicios de marzo, con el 43,8% de los votos, los nacionalsocialistas no alcanzaron el ansiado quórum propio. Cuando el Reichstag se reunió –ya sin la presencia de los comunistas encarcelados y perseguidos–, todos los partidos, excepto los socialdemócratas, aceptaron votar la ley para la Protección del Pueblo y el Estado, que confería al gobierno

plenos poderes para legislar sin consultar al Parlamento e incluso para modificar la Constitución. La liquidación del orden republicano se había concretado utilizando los mecanismos previstos en la Constitución.

A lo largo de 1933 se consumó el proceso de coordinación (Gleichschaltung) que desembocó en la instauración de la dictadura nazi. La rapidez y la profundidad de los cambios que afectaron al estado y a la sociedad alemana fueron asombrosas. La transformación se concretó mediante una combinación de medidas seudolegales: terror, manipulación y colaboración voluntaria. Mussolini había tardado tres años en llegar a este punto.

Los adversarios políticos más activos fueron detenidos o huyeron del país. El primer campo de concentración se abrió en marzo de 1933 en Dachau, bajo la dirección de las SS, como centro de detención, tortura y exterminio de los militantes de izquierda. En mayo, después de la conmemoración del Día del Trabajo, fueron disueltos los sindicatos. A mediados de ese año, todos los partidos políticos habían sido prohibidos o bien habían decidido disolverse. Entre marzo de 1933 y enero de 1934 se abolió la soberanía de los *länder* y se aprobó la ley que consagraba la unidad entre partido y estado: el partido nazi era portador del concepto del estado e inseparable de este, y su organización era determinada por el Führer. Casi todos los organismos de la sociedad civil fueron nazificados. Esta "coordinación" fue en general voluntaria. Las excepciones a este proceso fueron las iglesias cristianas y el ejército, que mantuvo su cuerpo de oficiales mayoritariamente integrado por hombres consustanciados con las jerarquías del orden imperial.

A mediados de 1934, se eliminó a los sectores menos disciplinados y más radicalizados del nazismo. El 30 de junio, "la noche de los cuchillos largos", las SS, que encabezadas por Heinrich Himmler desde 1929 se habían autonomizado y ganado poder, desplegaron sus fuerzas matando y deteniendo, principalmente, a miembros de las SA. Röhm fue asesinado en su celda. También fueron ejecutados dos generales, algunos dirigentes conservadores, el jefe de la Acción Católica y el dirigente nazi Gregor Strasser, que había competido con Hitler. Las iglesias guardaron silencio. El ejército, que despreciaba a los matones de la SA, salió robustecido sólo en apariencia, dado que había consentido una acción criminal que recayó sobre sus filas. La mayoría del pueblo alemán aprobó las ejecuciones que Hitler presentó como necesarias para restaurar el orden público. El "asunto Röhm" benefició fundamentalmente a las SS confirmando su posición dominante como poder armado del partido y, cada vez, más organismo de seguridad estatal.

Al morir Hindenburg, se descartó el llamado a elecciones y se aprobó la fusión de los cargos de presidente y canciller en la persona de Hitler. Así, el Führer obtuvo el mando supremo de las fuerzas armadas. A partir de ese momento, todo soldado alemán quedó obligado a jurar lealtad y obediencia incondicional a Hitler. El juramento de lealtad marcó simbólicamente la plena aceptación del nuevo orden por parte del ejército, fuerza que, por el momento, conservó su propia conducción. Los oficiales conservadores, muchos de ellos aristócratas que subestimaban al "cabo", aceptaron subordinarse motivados por el plan de rearme y tranquilizados por la eliminación de la amenaza de las SA.

A principios de 1938 Hitler avanzó sobre la cúpula del ejército. El ministro de Guerra y el comandante en jefe del ejército fueron obligados a renunciar por razones relacionadas con su vida privada. Hitler asumió el cargo de comandante general de la Wehrmacht (ex Reichswehr) y en pocos días se procedió a reorganizar la cúpula militar. Simultáneamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores reemplazó al conservador Konstantin von Neurath por el nazi Joachim von Ribbentrop. Estos cambios fortalecieron la posición del bloque nazi en la política exterior y el planeamiento estratégico-militar, y erosionaron la influencia de la Wehrmacht.

Una vez consolidada la posición de Hitler, la dictadura estuvo lejos de asumir una organización jerárquica centralizada: por el contrario, el gobierno personalizado se combinó con la fragmentación de la trama estatal. El estado alemán quedó sin ningún organismo central

coordinador y con un jefe de gobierno poco dispuesto a dirigir el aparato burocrático. La voluntad del Führer deformó la trama de la administración estatal, haciendo surgir una variedad de órganos dependientes de sus directivas que competían entre sí y se superponían. Hitler recurrió a la creación de organismos para responder a la formulación de nuevos fines, la proliferación de metas y de actividades, o para salvar las deficiencias de los que ya existían. Esas agencias –por ejemplo, la Juventud de Hitler y las oficinas del Plan Cuatrienal–, desvinculadas del partido y del estado, sólo respondían al Führer. Esta política restó coherencia al gobierno, incrementó la burocracia y propició la autonomía de Hitler. El personalismo extremo se combinó con una arbitrariedad creciente. Al mismo tiempo, la corrupción se extendió en los organismos del estado debido a que gran parte de las relaciones estaban basadas en la entrega de recompensas a cambio de fidelidad personal.

Los dos principales centros de poder eran el partido y las SS. El partido fue básicamente un vehículo de propaganda y de control social, pero nunca llegó a contar con una conducción unificada y su jefatura quedó en manos de un grupo de individuos sin lazos fuertes entre sí. Estas características le impidieron imponer una orientación sistemática a la administración del estado, sin embargo contó con amplias prerrogativas para incidir sobre los nombramientos de funcionarios y para vetar los proyectos propuestos por los ministros. Una de las áreas en las que se comprometió con más celo fue la política racial. Y, aunque el dualismo partido-estado nunca llegó a superarse, el primero impuso su predominio. Desde 1936, el aparato policía-SS se constituyó en el principal pilar de un nuevo tipo de régimen. En él, el poder policial se hizo poder político y su misión de “defender la nación” careció de trabas y controles legales. El bloque de fuerzas militares y policiales encabezado por las SS ganó terreno frente al ejército.

Desde el desfile a la luz de las antorchas organizado el 30 de enero de 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller, Goebbels había dejado en claro la enorme importancia de las ceremonias y los recursos simbólicos para encuadrar la movilización social y forjar un vínculo indestructible entre el pueblo alemán y el Führer. Al frente del Ministerio de Instrucción Popular y Propaganda, manejó con extraordinaria eficacia los mítines de masas, los desfiles ritualizados y las coreografías colosales. Este ministerio tenía a su cargo “todas las cuestiones de influencia espiritual sobre la nación”. El cine, donde se destacó la producción de la controvertida actriz y directora Leni Riefenstahl, tenía un valor especial para el ministro Goebbels, quien definía a los actores y directores como “soldados de la propaganda”.

La fiesta anual del partido, en el Luitpoldhain de Núremberg, era un espectáculo grandioso al que asistían unos cien mil espectadores y en el que miles de hombres de las SA y de las SS se alineaban ante Hitler entre mares de esvásticas y estandartes nacionales, en una formidable liturgia nacional que consagraba la vinculación orgánica del Führer con su partido y el pueblo. Con el mismo espíritu, Goebbels hizo de los juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936 una verdadera exaltación de la raza aria, de Alemania y de Hitler.

Uno de los temas del debate sobre el nazismo ha girado en torno a su relación con el capitalismo. ¿Hasta dónde las políticas del gobierno nazi fueron determinadas por los objetivos de los grandes intereses económicos? ¿En qué medida Hitler pudo imponer sus aspiraciones ideológicas y políticas sobre los fines de los capitalistas?

Ni los nazis fueron títeres del gran capital ni Hitler plasmó, una vez en el gobierno, las obsesiones ideológicas que anunciara en Mi lucha, al margen de los intereses de los grupos de poder. Desde el inicio hubo coincidencias significativas entre los nazis, el ejército y los grandes intereses económicos en torno al rearme. Una vez que el programa de aceleradas inversiones militares fue puesto en marcha dio paso a tensiones y desafíos que brindaron un terreno fértil para el despliegue de los fines expansionistas y raciales del nazismo. Simultáneamente, a lo largo de este proceso, el complejo aparato de las SS –el más consustanciado en términos ideológicos y organizativos con la creación de un nuevo orden que incluía el exterminio de los judíos– fue ganando creciente poder en el bloque nazi.

En principio, la política económica del gobierno nazi fue eficaz. A fines de 1933, el número de desempleados se había reducido de seis millones a cuatro, y hacia 1936 el desempleo había casi desaparecido. La mejora de las condiciones de trabajo y vivienda hizo que Hitler se ganara el apoyo de muchos obreros. En esta recuperación jugó un papel clave la política de rearme, ya que los gastos militares se multiplicaron por nueve entre 1933 y 1938.

Al llegar al gobierno, Hitler no dejó de afirmar, frente a los militares y los organismos encargados de dar respuesta al problema del desempleo, que el gasto militar era prioritario, y todos los demás gastos debían subordinarse a la tarea del rearme. El programa despegó con fuerza en 1934, pero condujo a graves cuellos de botella: las divisas asignadas a los insumos destinados a la industria armamentista eran retaceadas a las industrias de bienes de consumo, que veían así reducida su capacidad de importar y de satisfacer las demandas del mercado interno. A principios de 1936, el ministro de Economía Schacht, a cargo de la asignación de divisas, pidió que se redujese el ritmo del rearme. Su demanda recogía los reclamos de los industriales vinculados con el mercado interno e interesados en preservar los vínculos comerciales de Alemania con el mercado mundial.

Los desafíos asociados al rearme condujeron a la autarquía y reforzaron el interés de Hitler en acelerar una expansión que permitiese a Alemania obtener "espacio vital". En los primeros meses de 1936 era evidente que ya no resultaba posible armonizar las demandas de un rearme rápido y un consumo interior creciente. En la búsqueda de alternativas, Schacht fue desplazado y Göering pasó a ocupar un papel central en la política económica.

Dotado de poderes especiales, se puso al frente de un equipo que incluía a representantes de la empresa IG Farben, que elaboró el Plan Cuatrienal, se reconoció la necesidad de implantar una economía más dirigida y la posibilidad de satisfacer simultáneamente las distintas demandas mediante la elaboración de materias primas sintéticas que frenaran las importaciones. Se suponía que, con una producción cada vez más independiente del mercado mundial, los movimientos de la economía se sujetarían a las necesidades de la nación. Fue una decisión que conjugó la ideología con los intereses materiales. Se apostó a la combinación de los principios de la economía planificada y de la economía de mercado. Los empresarios conservaron la propiedad, la dirección y los beneficios de sus empresas, mientras el gobierno, por su parte, controlaba los salarios, los precios, la utilización de las materias primas, el mercado de trabajo y el comercio exterior. No obstante, este ritmo sólo podía sostenerse por un tiempo limitado, que Alemania dedicaría a prepararse para lograr su expansión territorial. La obtención del espacio vital era un objetivo central de la ideología nazi, y la crisis económica y las medidas instrumentadas para paliarla ofrecieron condiciones favorables para la puesta en marcha de la maquinaria bélica.

Las dictaduras tradicionales

Los países del este y el centro de Europa habían sido diseñados en la mesa de paz por los vencedores, pero sin tener en cuenta su viabilidad. Los estados salidos del desmembramiento del imperio austrohúngaro sufrieron la desarticulación de un aparato productivo que hasta entonces había funcionado como una unidad: las hilanderías austríacas dejaron de surtir a las fábricas de tejidos checas, los molinos húngaros quedaron sin grano y sin mercado, las industrias eslovacas sin capitales y sin personal húngaro. Los intercambios fueron obstaculizados por las políticas proteccionistas adoptadas por los nuevos gobiernos y por el bloqueo de los medios de transporte, dado que cada país se adueñó de algunos tramos de ferrocarril de la que otrora había sido una gran red única.

En los países preponderantemente rurales, el hambre de tierras dio origen a partidos agrarios: el Partido Campesino de los hermanos Radic en Croacia, la Liga Agraria de Stambolisky en Bulgaria, el de Maniu en Rumania. Sus programas, que proponían el reparto de la

tierra a favor de los pequeños y medianos propietarios, fueron desestimados por los socialistas en virtud de su connotación burguesa. En la mayoría de los casos, las reformas no prosperaron. Por otro lado, las burguesías eran muy débiles. Su fragilidad se debía tanto a razones económicas –escasa disponibilidad de capitales, estrechez de los mercados internos, resistencia al cambio de las economías agrarias– como a causas políticas y culturales: sus integrantes pertenecían a las minorías nacionales –alemanes y judíos en Polonia y Hungría; griegos, judíos y armenios en los Balcanes– y esto les restaba cohesión y capacidad de presionar a los gobiernos.

El atraso económico se combinó con la fragilidad de los nuevos estados nacionales. En Versalles, las poblaciones fueron repartidas sin tener en cuenta el principio de autodeterminación de los pueblos anunciado por el presidente Wilson en su propuesta de paz. Este escenario dio cabida a los movimientos separatistas y los revanchismos interestatales. Yugoslavia, por ejemplo, integró grupos que presentaban fisonomías culturales y religiosas con fuertes contrastes. Los eslovenos y los croatas, que habían formado parte del imperio austro-húngaro, eran católicos y se sentían más próximos a los círculos de la cultura latina. En el centro y sur coexistían distintos grupos. En el campo eslavo, los serbios resguardaron la religión ortodoxa y la memoria de un pasado glorioso como señales de identidad frente a la dominación otomana. Otros eslavos, en cambio, convertidos a la religión musulmana, se insertaron en el nuevo orden otomano, especialmente en Bosnia-Herzegovina. Por último, los albanos, un grupo étnico diferente del eslavo, adoptaron masivamente el islamismo y a partir de 1912 tuvieron como referente al nuevo estado nacional Albania. La fuerte rivalidad entre croatas y serbios marcó al nuevo estado y alcanzó su expresión más sangrienta a partir de la alianza de la derecha croata, representada por el Partido Ustacha, con el nazismo.

También en Checoslovaquia, la democracia más consistente de la región, las reivindicaciones separatistas de los eslovacos y los alemanes del sudeste favorecieron la desintegración del estado nacional al concretarse el avance de los nazis. Hungría, brutalmente reducida, era en cambio muy homogénea; pero la mayoría de los húngaros habían quedado repartidos como minoría nacional en otros estados de la región y ansiaban revisar Versalles.

En el caso de Austria, los contrastes entre el interior rural y la sofisticada Viena marcaron la vida política del pequeño país. La histórica ciudad, que había sido capital de un imperio con cerca de cincuenta y cuatro millones de habitantes, se transformó en la gran urbe cultural de un estado con sólo siete millones. El Partido Socialista mantuvo su sólido arraigo entre los obreros vieneses pero no logró avanzar en el ámbito rural, donde prevalecieron los socialistas cristianos. El decidido antisocialismo de los gobiernos conservadores, que defendían la soberanía nacional de Austria, abrió el camino para el avance de los nazis austríacos sostenidos por Hitler y fomentó la eliminación del estado austríaco, que en 1938 fue anexado al Tercer Reich (Anschluss).

El estado de Albania, creado en el marco de las guerras balcánicas en virtud de las ambiciones contrapuestas de los vecinos geográficos y las grandes potencias, era un complejo conglomerado de tribus y clanes. No pudo evitar convertirse en un protectorado de Roma y en 1939, después de la invasión italiana, la asamblea nacional albanesa aceptó la anexión a Italia y entregó la corona al rey Víctor Manuel III.

Todos los países de la región cayeron bajo gobiernos dictatoriales, excepto Checoslovaquia, donde la república se mantuvo en pie hasta la invasión de los nazis. En muchos casos, los jefes militares se convirtieron en dictadores: el mariscal Józef Pilsudski en Polonia; el almirante Miklos Horthy en Hungría; el general Ioannis Metaxas en Grecia. En otros países –Yugoslavia, Rumania y Bulgaria– los propios monarcas establecieron regímenes dictatoriales. En Austria, el político católico Engelbert Dollfuss estableció en 1933 una dictadura y reprimió violentamente los intentos de resistencia socialista para ser luego asesinado por los nazis.

Los regímenes autoritarios que clausuraron las experiencias constitucionales inauguradas en 1918 fueron dictaduras tradicionales.

No encararon la reorganización del estado en un sentido totalitario, mantuvieron algunas instituciones representativas prometiendo su restauración y permitieron cierto grado de pluralismo político. Sus gobiernos buscaron imponer el orden en sociedades atravesadas por tensiones derivadas del atraso y de la escasa cohesión nacional. Dado el bajo nivel de movilización política, una dictadura tradicional bastaba para proteger los intereses de los grupos dominantes.

En algunos países las fórmulas conservadoras o autoritarias coexistieron con movimientos de sesgo fascista –Guardia de Hierro en Rumania, Cruz de Flechas en Hungría, el Movimiento Nacional Social en Bulgaria– a través de relaciones fluctuantes entre el acuerdo y la competencia, que, en ocasiones, desembocaron en el conflicto abierto. La dictadura de Horthy, por ejemplo, impidió el desarrollo de los primeros grupúsculos profascistas en Budapest o bien terminó por absorberlos. En Rumania, en cambio, las relaciones entre el gobierno y los grupos fascistas estuvieron signadas por bruscas oscilaciones antes de la represión definitiva del grupo Guardia de Hierro, ejecutada por el ejército.

En el escenario internacional, los países de la región se agruparon en dos tendencias. Los que acordaron con los tratados de París se organizaron en la Entente Báltica, dirigida por Polonia, y en la Pequeña Entente –integrada por Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia–, aliada con Francia. Por otro lado, los que pretendían revisar las fronteras pergeñadas en Versalles –Hungría, Bulgaria y Albania– buscaron el apoyo de Italia y, luego, el de Alemania.

En el extremo occidental de Europa también se impusieron regímenes dictatoriales. En Portugal se proclamó la República en 1910 y en 1911 fue aprobada una constitución democrática. Pero la división de los republicanos en facciones rivales y, sobre todo, el atraso estructural del país dificultaron la consolidación de la democracia. Su breve pero turbulenta historia se caracterizó por numerosos golpes de estado. En 1926, un pronunciamiento militar puso fin al régimen parlamentario y el economista católico António de Oliveira Salazar se convirtió en el hombre fuerte del Estado Novo, una dictadura entre militar y corporativa que se derrumbó en 1974 con la "revolución de los claveles", encabezada por militares radicalizados.

España fue arrasada por una cruenta guerra civil de la que emergió la larga y represiva dictadura de Francisco Franco, que duró hasta su muerte, en 1975. En muchos sentidos, España presentaba rasgos similares a las sociedades del este europeo: analfabetismo, burguesía dependiente del estado, regiones de agricultura latifundista y millares de campesinos sin tierras, estructuras estatales centralizadas pero ineficaces. La economía moderna prosperaba en las regiones periféricas, mientras que Castilla concentraba el poder político. Los dos pilares del orden tradicional eran la iglesia católica, propietaria de vastos territorios y con un inmenso poder cultural, y el ejército, a cargo de las tareas represivas, e intensamente afectado por la prolongación de la guerra en Marruecos.

Entre 1923 y 1930, después de un golpe avalado por el rey Alfonso XIII, el general Miguel Primo de Rivera encabezó un gobierno dictatorial clásico. Los sublevados prometieron salvar a España de "los profesionales de la política". La dictadura alentó el desarrollo industrial y buscó instaurar un sistema corporativo para acabar con la lucha de clases. El régimen alcanzó su más alto nivel de popularidad con el fin exitoso de la guerra en Marruecos, en 1925. Sin embargo, Primo de Rivera fracasó en el intento de institucionalizar el régimen y renunció a principios de 1930.

Los gobiernos que lo sucedieron carecieron de apoyos consistentes. La oposición, en cambio, avanzó hacia la unidad y reclamó elecciones locales. En los comicios municipales de abril de 1931, con sufragio universal masculino, los republicanos triunfaron en las capitales de provincia y las fuerzas tradicionales dominaron el ámbito rural. El rey abdicó y se proclamó la República.

La República atravesó dos momentos: el bienio reformista (diciembre de 1931 a noviembre de 1933) y el radical-cedista o bienio conservador (noviembre de 1933 a febrero de 1936). Las principales reformas durante la primera etapa fueron de carácter moderado y básicamente pretendieron afianzar el régimen republicano. No obstante,

intensificaron la resistencia de la derecha, sin conformar a los sectores sociales más postergados, que se radicalizaron. La derecha ganó las elecciones en 1933. El nuevo gobierno se propuso desmantelar las medidas aprobadas en el bienio reformista, pero careció de cohesión y las tensiones sociales se profundizaron. El pueblo volvió a las urnas en febrero de 1936 y el Frente Popular triunfó por un escaso margen de votos. El éxito electoral de la izquierda se repartió entre los obreros urbanos, los regionalistas disidentes y los trabajadores agrarios, especialmente en las provincias latifundistas del sur. Los antirrepublicanos se impusieron en las regiones donde prevalecían los pequeños y medianos propietarios católicos: León, Castilla, gran parte de Aragón y Navarra.

Pero la derecha no aceptó el veredicto de las urnas y recurrió a las armas para acabar con un gobierno que “gobierna contra España�. Los militares y la iglesia presentaron el golpe como un “Alzamiento Nacional” contra una República “marxista y antiespañola�, afirmando que la guerra era una “cruzada” para liberar a España del ateísmo.

La Guerra Civil española fue uno de los conflictos del siglo XX con más profunda repercusión internacional. El enfrentamiento interno entre republicanos y reaccionarios se combinó con los intereses estratégicos de las potencias europeas y con la confrontación ideológica entre fascismo y antifascismo. Las potencias fascistas, especialmente la Italia de Mussolini, decidieron desde un primer momento apoyar a los rebeldes liderados por Franco. La ayuda soviética a los republicanos llegó a tiempo para colaborar en la defensa de Madrid, pero fue más dispersa y de menor calidad que la enviada a los golpistas. La Tercera Internacional promovió la formación de las Brigadas Internacionales integradas por voluntarios, no necesariamente comunistas, dispuestos a luchar contra el fascismo. Los comunistas ocuparon una posición importante en el gobierno republicano. Siguiendo las directivas del gobierno soviético, encabezado por Stalin, desplegaron una feroz represión contra los restantes grupos de izquierda, a los que identificaron como “trotskistas y agentes del imperialismo”, y ordenaron su asesinato. Los gobiernos británico y francés esgrimieron una neutralidad engañosa, que no incluía el control del abastecimiento fascista de armamentos a las tropas de Franco. Los dirigentes conservadores de las democracias occidentales no sólo se dejaban guiar por su afán de apaciguamiento; la mayoría miraba con recelo y hostilidad a la República, en la que veía una amenaza revolucionaria.



Afiche de propaganda firmado por la Junta Delegada de Defensa de Madrid.

El 26 de enero de 1939 Barcelona cayó en poder de los golpistas, quienes entraron en Madrid a fines de marzo. Con su victoria se institucionalizó la dictadura de Franco, que entre 1939 y 1943 ordenó cien mil ejecuciones. La España franquista adoptó el modelo de partido único, pero, a diferencia del fascismo italiano y del nazismo alemán, no pretendió "revolucionar" el orden conservador. El régimen franquista fue, básicamente, una dictadura reaccionaria. El Caudillo quería orden y respeto hacia las jerarquías, y sus principales apoyos fueron el ejército, la iglesia católica y los grandes propietarios.

La experiencia soviética

Desde el final de la guerra civil hasta la consolidación del partido único bajo el poder despótico de su jefe máximo Josef Stalin, en el régimen soviético se distinguen dos momentos: el de la nueva política económica (NEP), entre 1921 y 1928, y el de la colectivización forzosa y la economía central planificada puestas en marcha en 1929 y continuadas por el terror instrumentado desde el estado desde 1936 hasta 1938.

El nuevo rumbo económico y los enfrentamientos en la dirigencia bolchevique

Al terminar la guerra civil Rusia estaba devastada, y aunque los bolcheviques habían triunfado en el campo de batalla, los signos del deterioro de su poder eran preocupantes: las revueltas campesinas en distintas regiones del país, la huelga general en Petrogrado y la significativa sublevación de los marineros de la base naval de Kronstadt (febrero-marzo de 1921). Esta insurrección de los trabajadores que más decididamente habían apoyado e impulsado las acciones de los bolcheviques en 1917 fue sangrientamente reprimida. Al mismo tiempo, Lenin dio un giro de ciento ochenta grados: del comunismo de guerra a la NEP.

En primer lugar, los comunistas pusieron fin a las requisas de granos y autorizaron al campesinado a disponer libremente de sus excedentes de producción, una decisión asociada a la legalización del comercio privado. La NEP fue una forma de economía mixta. Por un lado, una agricultura abrumadoramente privada, un comercio privado legalizado y una pequeña manufactura también privada, en la que los campesinos más fuertes (kulaks) y los comerciantes (*nepmen*) tuvieron la posibilidad de hacer negocios y obtener ganancias a través del mercado. Por otro lado, el Partido Comunista, controlando desde el estado las palancas de mando de la economía: la banca, el comercio exterior, la gran industria. La organización del trabajo industrial fue semejante a la de las fábricas capitalistas: búsqueda de eficiencia y productividad por medio de la adecuación de los obreros a los ritmos impuestos por la cadena de montaje y a través de la división entre trabajo manual e intelectual. Los administradores, profesionales y técnicos ganaron terreno en la fábrica y en el partido: en 1923, sólo el 36% del personal directivo estaba clasificado como obrero, y del 64% no obrero, la mitad se había afiliado al partido. Aunque Lenin se mostró dispuesto a propiciar las inversiones extranjeras en pos de la recuperación económica, los logros en este sentido fueron muy pobres.

Esta iniciativa liberalizadora en lo económico fue acompañada por el reforzamiento del autoritarismo político. La oposición quedó proscripta y se prohibió la libre discusión en el seno del Partido Comunista. Según Lenin, ese era un "lujo" que degeneraría fácilmente en una "enfermedad" y, fuera del partido, el único instrumento eficaz para dirimir las diferencias era el fusil.

Cuando se aprobó la prohibición de fracciones entre los comunistas, el partido estaba inmerso en un álgido debate sobre el papel de los sindicatos. La "oposición obrerista", integrada por un grupo de viejos militantes y con cierto grado de apoyo entre los trabajadores,

censuraba la centralización económica y política y proponía que los obreros controlaran la industria a través de los sindicatos. En el campo opuesto, Trotsky exigía la militarización del trabajo: para avanzar hacia el socialismo era preciso crear un nuevo Ejército Rojo destinado a combatir el atraso; sin disciplina y esfuerzo la clase obrera no alcanzaría su emancipación. Todos buscaban aliados en los comités locales para llevar sus propuestas al X Congreso del partido. Para Lenin el tema era secundario; toda su atención estaba concentrada en preservar la cohesión del partido y, con la ayuda de Stalin, digitó la elección de los delegados al Congreso. En marzo de 1921, la asamblea partidaria votó una fórmula ambigua sobre el papel de los sindicatos y prohibió la existencia de fracciones.

En la segunda mitad de 1921 se llevó a cabo la primera purga destinada a expulsar a los afiliados que no cubrieran satisfactoriamente el perfil del militante. La depuración era considerada un medio para preservar la pureza política e ideológica del partido frente a la acelerada incorporación de nuevos miembros: los veinte mil integrantes de 1917 habían aumentado a más de medio millón cuatro años después. Con seguridad, el 25% de los expulsados incluyó a integrantes de la oposición obrerista, quienes además criticaban el nuevo rumbo económico.

El pueblo soviético alcanzó un momento de tranquilidad y un relativo grado de prosperidad hacia mediados de la década, pero muchos bolcheviques sentían que estaban acompañando la restauración del capitalismo en lugar de hacer la revolución. El curso de la NEP estaba cargado de desafíos e incertidumbres. La lenta recuperación económica aparecía asociada a la agudización de las diferencias entre el campo y la ciudad: los campesinos debían pagar precios muy altos por los insumos industriales y los obreros destinaban gran parte de sus salarios a la compra de alimentos. Los comunistas desconfiaban de los campesinos, de cuya producción dependía el suministro de bienes básicos y la obtención de excedentes para colocar en el mercado mundial. Los bolcheviques necesitaban que la economía agraria prosperase, pero temían que los campesinos pretendieran la restauración del capitalismo.

A partir de la enfermedad de Lenin, las tensiones en torno a la NEP se conjugaron con las luchas abiertas entre los máximos dirigentes por la sucesión del jefe indiscutido. Lenin sufrió un ataque de apoplejía en mayo de 1922, otro en marzo de 1923, y murió el 21 de enero de 1924. Hacia fines de 1922 tres figuras claves del Politburó –Stalin, secretario general del partido; Zinoviev, presidente del sóviet de Petrogrado y de la Internacional Comunista; y Kámenev, presidente del sóviet de Moscú– se aliaron para impedir el ascenso de Trotsky, que por entonces era la figura más prestigiosa de la cúpula bolchevique. Apartado del centro de la vida política pero atento a su desarrollo, Lenin previó la exacerbación de las rivalidades y escribió una carta (que se conocería como su “testamento”) con indicaciones ambiguas en los primeros párrafos y una advertencia final para frenar el afán de poder de Stalin. El texto estaba dirigido al XI Congreso del partido, pero después de la muerte de Lenin, el Comité Central dispuso que no circulara. Según Kámenev, el camarada Stalin ya había corregido sus errores y Trotsky guardó silencio.

La Tercera Internacional

Después de la toma del poder en Rusia, Lenin concretó la creación de una nueva Internacional, un objetivo que había planteado durante la guerra en virtud del compromiso de los partidos socialistas con la defensa de la patria. La Komintern elevó al partido bolchevique a la categoría de modelo a imitar por todos los partidos comunistas del mundo.

Desde 1919 hasta 1935, se llevaron a cabo siete congresos en los que se fijaron los criterios a los que tendrían que

ajustar sus políticas todos los partidos comunistas en sus respectivos países. A través de las líneas de acción aprobadas, que se ajustaron básicamente a las directivas del Partido Comunista soviético, la Tercera Internacional impuso un rumbo zigzagueante a las acciones del movimiento comunista, en el que se reconocen cuatro períodos. Cada uno de estos giros estuvo en gran medida asociado o bien a las pugnas entre los dirigentes bolcheviques o bien a los intereses de la URSS como estado nacional.

En el primer período (los tres primeros congresos, celebrados entre 1919 y 1921), se alentó la posibilidad de la revolución. En el segundo (IV y V congresos, entre 1922 y 1924), se reconoció una etapa de estabilización del capitalismo y se propiciaron políticas de alianza con otras fuerzas políticas. En el tercero (VI Congreso, realizado en 1928), se anunció una severa crisis económica del capitalismo y la consiguiente posibilidad de promover revoluciones. En consecuencia, los partidos comunistas debían denunciar a la socialdemocracia como opción de la burguesía para controlar la energía revolucionaria del proletariado. El fascismo, catalogado como la segunda opción de la burguesía en caso de que el reformismo socialista fuese inviable, fue definido como un fenómeno pasajero. En el mismo momento en que Hitler avanzaba hacia el poder, la Tercera Internacional negaba la posibilidad de la unidad de la izquierda alemana.

El último viraje se produjo en el VII Congreso celebrado en 1935, que impulsó la formación de frentes populares para frenar el avance del fascismo.

Tal como había supuesto Lenin, los dos principales competidores por su sucesión fueron Trotsky y Stalin, pero el enfrentamiento atravesó diferentes fases debido a los cambiantes posicionamientos de las otras figuras del Politburó. Entre 1923 y 1924, la lucha se resolvió a favor del triunvirato. Este digitó la elección de los delegados a la conferencia del partido de 1923, que desautorizó las críticas veladas de Trotsky. El artífice del Ejército Rojo renunció en 1925 a la jefatura del Comisariado de Guerra y se mantuvo al margen de toda discusión. A partir de ese momento, el triunvirato se resquebrajó.

El fortalecimiento de Stalin, apoyado por Bujarin, uno de los teóricos del partido que llegó a encabezar la Tercera Internacional, suscitó cierta aprensión en Kámenev y Zinoviev, quienes formaron una nueva oposición, desautorizada por el XIV Congreso del partido (diciembre de 1925). Los dos ex triunviros se acercaron a Trotsky. La frágil “oposición unificada” fue impugnada por el XV Congreso, que en diciembre de 1927 aprobó la expulsión de sus tres dirigentes por haber violado la regla que prohibía las fracciones.

Trotsky había enrostrado al triunvirato dos críticas básicas: la falta de un programa que favoreciera la industrialización planificada, y una creciente burocratización del partido que anulaba la democracia interna. Aunque al calor de la lucha política Trotsky acusó a sus rivales de ser pro kulaks y fue a su vez señalado como enemigo de los campesinos, tanto Stalin, Kámenev y Zinoviev como el propio Trotsky anhelaban el desarrollo industrial por considerarlo la única vía para la transformación radical de la sociedad rusa. Sólo un pequeño grupo, con Bujarin al frente, era decididamente partidario de la NEP.

En cuanto a la democracia partidaria, la posición de Trotsky estuvo signada por las ambigüedades. Hasta la muerte de Lenin, había sido un apasionado defensor de la supresión de los grupos disidentes y la plena y absoluta subordinación a las directivas de la conducción. Sólo salió en defensa de la democracia cuando fue desplazado al campo de la oposición por quienes controlaban la maquinaria partidaria. Desde su perspectiva, el partido jamás se equivocaba y el éxito de la

revolución exigía la cohesión disciplinada de todos sus miembros. Su denuncia de la burocratización cuestionaba al secretario del Comité Central, pero no ponía en tela de juicio la dictadura de los bolcheviques.

Para el grueso del partido, la construcción final del socialismo era innegociable y para lograrla era imprescindible la transformación de Rusia en una sociedad industrial moderna. Pero el camino hacia ese objetivo último estaba plagado de incertidumbres: cuándo y cómo profundizar el desarrollo de la industria, qué hacer con el campesinado. Estos interrogantes fundamentales se conjugaron confusamente con los alineamientos facciosos.

En los primeros años del gobierno bolchevique Bujarin había sostenido posiciones radicales: la exportación de la revolución en lugar de la paz con Alemania, y la afirmación del comunismo de guerra como vía directa para plasmar la sociedad comunista. En los años veinte, en cambio, era partidario de avanzar lentamente. Dado que no había señales de revolución en el mundo capitalista, el antiguo izquierdista sostenía la necesidad de persuadir al campesinado de comprometerse con el socialismo. En los hechos esto significaba "avanzar a paso de tortuga" y aceptar la prosperidad de los campesinos: si estos se enriquecían, habría más excedentes para comerciar y para acumular. El conflicto faccioso entre los dirigentes que alentaban la industrialización condujo a Stalin a una alianza temporal con la fracción pro NEP de Bujarin, pero el secretario general no asumió en ningún momento sus argumentos extremos para defender los intereses del campesinado.

Cuando Stalin se pronunció abiertamente en favor de la industrialización a mediados de la década de 1920, asoció esa meta con la idea de que era factible la construcción del socialismo en un solo país.

Cuando los bolcheviques tomaron el poder habían descartado esa posibilidad: la Rusia atrasada y campesina no reunía las condiciones requeridas por el marxismo para dar el salto al socialismo; era imprescindible contar con las revoluciones proletarias que se esperaba triunfasen en los países desarrollados, especialmente en Alemania. Ahora Stalin negaba que el débil desarrollo del país "fuese un obstáculo insuperable para la plena edificación de una sociedad socialista" y afirmaba que el éxito de la Revolución rusa no dependía del avance del proletariado en otros países. Su planteo se correspondía con la voluntad de las bases del partido, que deseaban la revolución y estaban dispuestas a profundizar el rumbo emprendido. Si aceptaban que las condiciones dadas eran más fuertes que la voluntad política, octubre de 1917 y la guerra civil (1918-1920) habrían sido sacrificios absurdos, ya que sólo cabía restaurar el capitalismo. En este sentido, la fórmula de Stalin era políticamente muy efectiva: daba sentido a los esfuerzos ya realizados y proponía una meta para canalizar las energías. En cambio, las dudas de Trotsky y Zinoviev sobre la posibilidad de que una sociedad atrasada y campesina construyese el socialismo y sus objeciones ideológicas al socialismo en un solo país estaban teñidas por el pesimismo político.

A mediados de los años veinte, el partido percibió la marcha de la NEP y los cambios en el escenario internacional como indicadores de que ya era hora de que la industrialización planificada fuera su prioridad principal.

Industrialización acelerada y colectivización forzosa

Cuando la NEP se puso en marcha, la industria había alcanzado su nivel más bajo desde la posguerra. La tarea principal fue recuperar y poner en funcionamiento las antiguas fábricas y maquinarias. Hacia fines de 1926, la producción había recobrado en líneas generales los índices anteriores a la Revolución. A partir de ese momento, la tasa de crecimiento dependería de las decisiones políticas sobre los montos a invertir y del destino asignado a dichas inversiones. El XIV Congreso del partido, al mismo tiempo que expulsó a Kámenev, Zinoviev y Trotsky, aprobó la industrialización como principal meta económica y

dio curso a grandes proyectos para la producción de energía y tractores. Pero aun entonces se suponía que la industria avanzaría a un ritmo tal que no exigiría ningún esfuerzo desmedido por parte del campesinado. Sin embargo, la conjunción de dos hechos –una serie de altercados con gobiernos europeos, entre ellos Gran Bretaña, y la caída del ingreso de granos a las ciudades–, cada uno con su impronta particular, desembocó en la industrialización acelerada y la colectivización forzosa en 1929.

Para gran parte del partido, el deterioro de las relaciones internacionales obligaba a revertir urgentemente la debilidad soviética en el campo militar. La URSS no estaba en condiciones de resistir una posible intervención de las potencias capitalistas, y el desarrollo industrial era un factor decisivo para cambiar ese estado de las cosas. Frente al descenso en la provisión de granos y el peligro del hambre en las ciudades, el partido recurrió a las requisas forzosas a fines de 1928 y el vínculo con el campesinado se quebró. En el invierno de 1929-1930 el PCUS entró en las aldeas con la consigna de liquidar a los kulaks, procapitalistas según el discurso bolchevique. En los hechos y cada vez más, se actuaba contra todos los que eran visualizados como enemigos reales o potenciales del cambio de rumbo.

La colectivización forzosa significó el fin de toda propiedad privada en el medio rural. El conjunto del campesinado fue obligado a ingresar en grandes unidades productivas, el koljoz, entregando sus parcelas de tierra, sus animales e instrumentos de trabajo. El objetivo anunciado era organizar una forma de producción más eficiente y racional, y así incrementar los excedentes que habrían de sostener las inversiones industriales. La gran ruptura fue en realidad la puesta en marcha de una brutal explotación del campesinado a través de la violencia. Los campesinos, que perdieron todo, quedaron sujetos a largas jornadas de trabajo, con la sola retribución del escaso alimento para sobrevivir y sin aportes significativos, en los primeros momentos, de tecnología ni de criterios organizativos que hicieran más productiva su labor.

La aldea rural intentó resistir el embate de los bolcheviques. Frente al avance de la colectivización, los campesinos dejaron de sembrar, quemaron las cosechas, mataron los animales. En virtud del ingreso brutal de los comisarios políticos en el campo y de la resistencia del campesinado, la provisión de alimentos cayó en picada. En la hambruna de 1933 se calcula que hubo entre tres y cuatro millones de muertos. El régimen recurrió al arresto y la deportación en masa de los aldeanos, que fueron enviados a los campos de trabajo forzoso, donde se los utilizó como mano de obra barata intensamente explotada al servicio del desarrollo industrial y de las obras de infraestructura más riesgosas. Hacia 1937 el 93% de los hogares había sido colectivizado.

El primer plan quinquenal, en 1929, privilegió el crecimiento de la industria pesada –en especial hierro y acero– y dispuso la estatización total de las fábricas. Las nuevas grandes plantas fueron diseñadas para producir mediante el sistema de línea de montaje, del cual había sido pionera la industria de los Estados Unidos, aunque en esta primera fase se continuó con los métodos tradicionales y las cintas permanecieron ociosas. El XVII Congreso, "de los triunfadores", celebrado a comienzos de 1934, consideró que la revolución ya había alcanzado el socialismo. Ahora quedaba recorrer el tramo que conducía al comunismo, o sea hacia una sociedad capaz de autorregularse con la consiguiente desaparición del estado.

El terror

La gran conmoción de fines de los años veinte fue seguida por un breve período de estabilización. Pero a mediados de la década de 1930 se desencadenó el terror. Desde la llegada de Hitler al gobierno de Alemania, Stalin percibió que la URSS corría peligro de ser atacada. Hasta entonces, todas las guerras habían sido acompañadas por insurrecciones y revoluciones: tanto la guerra con Japón, que dio paso a la revolución de 1905, como la Primera Guerra Mundial, que desembocó en la caída del zar en febrero de 1917. Ante la posibilidad

de un ataque del exterior, en Stalin se afianzó la idea de que era necesaria una cohesión sin fisuras de las fuerzas internas, especialmente en el seno del partido. Además, la cúpula política desconfiaba de aquellos profesionales o altos funcionarios que, por obra de sus saberes técnicos, habían alcanzado, al calor de los cambios revolucionarios, la cima de la pirámide social. El terror combinó los juicios –que eliminaron a la vieja guardia bolchevique que había cuestionado a Stalin y al alto mando del Ejército Rojo– con campañas masivas destinadas a purificar el partido a través de las denuncias de "los de abajo" sobre la conducta de quienes detentaban posiciones de poder.

En diciembre de 1934 fue asesinado Sergey Kirov, secretario del partido en Leningrado. El crimen, según los estalinistas, confirmaba la existencia de una conspiración contra el estado soviético. Para algunos analistas, Stalin fraguó el atentado para contar con un hecho capaz de detonar la represión masiva.

En enero de 1935 Kámenev y Zinoviev fueron acusados de "complicidad moral" con dicho asesinato. Después del juicio, en el que fueron condenados a largos años de prisión, el Politburó alertó a las organizaciones del partido sobre el peligro de los opositores encubiertos y ordenó el "debate" en las bases para detectarlos. La delación se puso en marcha en el seno del partido. En agosto de 1936 Zinoviev, Kámenev y otros catorce dirigentes de la vieja guardia bolchevique fueron juzgados por traición. Todos los acusados, excepto Smirnov, que se retractó, confesaron haber organizado un centro terrorista y planeado asesinar a los miembros del Politburó siguiendo las órdenes de Trotsky. Fueron condenados a muerte, y a lo largo de ese año ciento sesenta personas fueron detenidas y ejecutadas en relación con este juicio. En enero de 1937, el comisario adjunto de la industria pesada Georgi Piatakov y dieciséis dirigentes más fueron acusados de sabotaje y espionaje industrial; según los fiscales, habían sido alentados por Trotsky y el gobierno alemán. Todos confesaron los crímenes que se les imputaban. Unos meses después le llegó el turno al Ejército Rojo. Héroes de la guerra civil, como Mijaíl Tujachevski, fueron acusados de espiar para Alemania. Por primera vez la represión recayó sobre quienes nunca habían sido opositores abiertos de Stalin. Después de las confesiones arrancadas a fuerza de torturas, los acusados fueron fusilados. Cerca del 8% del cuerpo de oficiales fue destituido por motivos políticos.

Las razones de Stalin y sus colaboradores siguen siendo poco claras. Numerosas pruebas inducen a pensar que la conducción del partido realmente creía que había habido un complot militar.

En la segunda mitad de 1937, mientras los juicios continuaban, se desencadenó una ola de terror a escala nacional: la mayoría de los ministros, los primeros secretarios regionales del partido y millares de funcionarios fueron señalados como traidores y, en consecuencia, detenidos. La mayoría fue ejecutada entre 1937 y 1940. Alimentadas por los miedos y las especulaciones de casi todos, las purgas y contrapurgas se sucedieron vertiginosamente en todo el país. En esta vorágine, las detenciones, los traslados al gulag y las ejecuciones desbordaron los límites del partido. En 1937 volvieron a actuar las troikas, tribunales de tres personas creados durante la guerra civil para procesar a los enemigos en forma sumaria sin recurrir a los procedimientos judiciales. También actuaron durante la colectivización forzosa, sancionando a quienes la resistían. En 1937-1938 se erigieron como los principales agentes del terror. Todos eran enemigos potenciales o reales, pero resultaba imposible decir quién era exactamente el enemigo.

El terror fue resultado de decisiones –principalmente de Stalin– y de un movimiento que, una vez desatado, incluyó entre sus víctimas a quienes creían controlarlo. Por ejemplo, en 1937 fue ejecutado Génrij Yagoda, jefe del Comisariado Popular para Asuntos Internos (NKDV), acusado de estar al servicio del imperialismo. Su sucesor, Nicolás Yezhov, también fue juzgado a puerta cerrada en febrero de 1940 como culpable de espionaje a favor de Polonia y el Reino Unido. El último crimen de esta oleada de terror fue el asesinato de Trotsky, asilado en México. El 20 de agosto de 1940, el comunista español

Ramón Mercader ejecutó la orden de Moscú y con una pica dio un golpe mortal en la cabeza al creador del Ejército Rojo.

El mundo colonial y dependiente

Tanto en Asia como en África, la intervención europea dejó marcas significativas: resquebrajó el orden social tradicional, provocó fuertes contrastes entre las actividades económicas ligadas al mercado mundial y las vinculadas con el consumo local, y condujo a la formación de elites cultas occidentalizadas. Una vez concluida la fase de conquista, la dominación europea implantó su administración y se dedicó a la explotación de los recursos coloniales, lo que dio origen a nuevos actores: la burguesía agraria y comercial, el proletariado de las plantaciones y las minas, y los funcionarios que contribuirían al funcionamiento de los distintos niveles del gobierno metropolitano. Muchos de ellos reconocieron en la ciencia y la tecnología europeas, y en su ideario y sus fórmulas políticas, los medios necesarios para superar el estado de atraso en que se encontraban sumidos sus pueblos. En buena medida, involuntariamente, la acción colonizadora favoreció el nacionalismo. El desarrollo de los medios de comunicación, la imposición de una administración centralizada sujeta a normas, el fomento de la educación y la adopción de una lengua común actuaron como corrosivos del viejo orden y propiciaron los contactos, el reconocimiento de afinidades y la ruptura con los particularismos locales.

Los primeros movimientos nacionalistas surgieron en aquellas sociedades que ya poseían culturas propias asentadas y eran conscientes de un pasado al que era factible recurrir para construir una tradición nacional que legitimara sus demandas en el presente. Estas condiciones se dieron de manera más consistente en la principal colonia británica, la India. En África Subsahariana, en cambio, la mayoría de los movimientos nacionalistas recién se afianzaron en la segunda posguerra.

Gran parte del mundo musulmán sufrió profundos cambios tras la caída del imperio otomano y en virtud del nuevo ordenamiento de los territorios impuesto por las potencias europeas vencedoras en la Gran Guerra.

La nueva República China atravesó tiempos tormentosos desde las campañas del incipiente poder central contra los jefes políticos locales, pasando por los sangrientos enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas, hasta la guerra de liberación con todas las fuerzas chinas luchando contra la ocupación de Japón. Fue aquí donde el comunismo prosperó hasta instrumentar una revolución que no llegó a concretarse en Europa, como esperaban los bolcheviques.

Los países americanos al sur de los Estados Unidos fueron severamente afectados por la crisis económica de 1929 y la mayor parte de las nuevas democracias retrocedió debido a una seguidilla de golpes militares.

Hindúes y musulmanes en la India

Una vez concluido el dominio de la Compañía de las Indias Occidentales, la autoridad en la India quedó en manos del Parlamento inglés. Si bien el personal de la administración se reclutaba en Inglaterra mediante exámenes de competencia abiertos, desde fines del siglo XIX algunos indios comenzaron a incorporarse a este servicio. En la práctica, subordinada al elenco mertropolitano, había una burocracia india reclutada en las provincias. La policía respondía al mismo sistema y el ejército estaba formado por tropa de ese origen y oficialidad europea. En virtud de esta necesidad de personal nativo, los británicos promovieron desde un principio la educación a la manera occidental. De este modo, los centros creados en los años veinte se convirtieron en un semillero de futuros nacionalistas. Los indios

occidentalizados encontraron en la historia europea modelos factibles de ser aplicados en su país para alcanzar metas inicialmente muy moderadas: tener una mayor participación en la administración del país sin cuestionar el vínculo con Gran Bretaña. En principio, el Congreso Nacional Indio, creado en 1885 con la aprobación de los ingleses, había servido para que Londres conociera las opiniones de los sectores ilustrados hindúes. La representatividad del Congreso en términos sociales se amplió después de la Primera Guerra Mundial, pero prestó poca o ninguna atención a los parias.

En el primer decenio del siglo XX, varios hechos alentaron las acciones radicales: la victoria de Japón sobre Rusia en 1905, que mostró la posibilidad del triunfo de un pueblo asiático sobre una potencia europea; el giro autoritario del virrey, que interrumpió el diálogo con el Congreso; y el factor desencadenante, la división de la provincia de Bengala. Entre 1905 y 1908 hubo atentados con bombas, boicots contra las mercancías inglesas, rechazo de los centros de enseñanza ingleses y formación de grupos terroristas de carácter religioso-político. Sin embargo, los moderados retuvieron el control del Congreso.

En la sociedad india existían fuertes fracturas, y el Congreso, por lo tanto, no representaba las diferentes aspiraciones políticas y culturales. Los obstáculos para una mayor cohesión interna remitían a las profundas tensiones entre hindúes y musulmanes, asociadas a una larga historia de conquistas y sojuzgamiento. Los musulmanes temían quedar sometidos en un futuro estado indio. Cuando en 1906 la metrópoli concedió la inclusión de los hindúes en cargos consultivos en los gobiernos locales, los musulmanes –que conformaban prácticamente la cuarta parte de la población– se organizaron en la Liga Musulmana Panindia, liderada por Mohammed Alí Jinnah, y solicitaron al virrey la reforma del sistema electoral para contar con una representación propia. Los nacionalistas hindúes adjudicaron a los ingleses el afán de dividir para seguir reinando.

La Primera Guerra Mundial puso fin a una época de las relaciones angloindias. El Congreso se radicalizó en un doble sentido. En el plano político avanzó hacia la reivindicación de la independencia, y en el plano social, especialmente a través de la carismática figura de Mohandas K. Gandhi, se convirtió en un movimiento de masas. Con Gandhi, que obtuvo su título de abogado en Inglaterra y ya se había enfrentado al *apartheid* en Sudáfrica, se pasó de la no cooperación, sostenida por algunos grupos profesionales y funcionarios del gobierno, a la desobediencia pacífica del pueblo (la *satyagraha*) frente a la legislación considerada injusta. Su principal colaborador, Jawaharlal Nehru, de una familia de clase alta, que buscó la modernización de la India, fue mucho más occidentalista que Gandhi. Este último deseaba reafirmar los principios distintivos de la cultura hindú, por lo cual recurrió a símbolos tan característicos como la vestimenta autóctona y la rueca, aunque sin proponer la adhesión incondicional a los valores tradicionales.

Las graves tensiones sociales exasperadas por la crisis económica encontraron expresión en la segunda campaña de no cooperación, iniciada en marzo de 1930 con la “marcha de la sal”, que desataría una oleada de manifestaciones, huelgas y episodios de violencia en los meses siguientes. Gran Bretaña combinó la represión con la convocatoria a negociar. Los logros de las conferencias y de la campaña de desobediencia civil no alcanzaron a satisfacer las expectativas del movimiento nacionalista.

En las elecciones legislativas de 1937 el Congreso fue el único partido que presentó candidatos en todas las provincias y obtuvo un destacado éxito, mientras que los musulmanes triunfaron en Bengala y en Punyab. La desconfianza entre ambas comunidades y la disposición de la metrópoli a negociar por separado generaron condiciones propicias para la creación de un estado musulmán escindido de la India, cuando se declaró su independencia en la segunda posguerra.

Los musulmanes más radicales se agruparon en la Jamaat-i-Islami (Sociedad Islámica), encabezada por Mawlana Mawdudi. Esta organización enfatizaba la autosuficiencia del islam, rechazaba la occidentalización y denunciaba los males del capitalismo, así como el materialismo y el ateísmo del marxismo. Mawdudi se opuso al

nacionalismo de la Liga Musulmana por considerar que la creación de un estado propio era incompatible con el universalismo islámico.

Los musulmanes del ex imperio otomano

Con la desintegración del imperio otomano, todo el territorio que había estado bajo su dominio fue drásticamente reorganizado. Por un lado, se crearon dos nuevos estados: Arabia Saudita y Turquía. Por otro, Oriente Medio quedó repartido entre Francia y Gran Bretaña, las potencias que ya habían impuesto su dominación a fines del siglo XIX sobre los territorios musulmanes del norte de África.

A principios del siglo XX, Ibn Saud, fundador de la actual rama reinante en Arabia Saudita, reinició bajo la bandera del wahabismo la yihad, que habría de cohesionar a sus guerreros y someter al resto de las tribus beduinas. Los predicadores desempeñaron un papel clave en las matanzas de los chiitas de la costa oriental y los habitantes de Hedjaz bajo dominación hachemita. Las campañas de Ibn Saud canalizaron en parte la resistencia de los beduinos a los proyectos de modernización impulsados desde fines del siglo XIX por los jóvenes turcos. La fe wahabita legitimaba el ataque a las modernas urbes otomanas, que eran consideradas centros de corrupción.

En la conquista de La Meca y Medina en 1924-1925, la milicia de Ibn Saud contó con el apoyo inglés, que avalaba la expulsión de la dinastía hachemí que reivindicaba la creación de una única nación árabe desde Siria hasta la península arábiga.

El reino saudita se basó en una alianza no exenta de tensiones entre la dinastía y el clero wahabí. Estos quedaron a cargo de la educación y la preservación del estilo de vida acorde con su rigurosa interpretación de la Sharia, pero subordinados al poder político de la monarquía. Al mismo tiempo, la legitimidad de las decisiones de los Saud dependía del aval de los ulemas en su condición de doctores de la ley. Las relaciones entre la familia real y los predicadores se caracterizaron por la alternancia entre los momentos en que prevalecía la voluntad del monarca y aquellos otros en que se imponía la voz del clero. El puritanismo wahabí transformó el país en una fortaleza islámica casi sin contacto con el mundo occidental. Los wahabíes rechazan esta denominación, que supone la adoración a un hombre, y utilizan el término salafitas, que indica el esfuerzo por imitar a los "piadosos ancestros", compañeros del Profeta.



Sobre la base de los territorios unificados con las armas, en 1932 Abdul Aziz Ibn Saud proclamó el reino de Arabia Saudita, el primer país árabe realmente independiente.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los vencedores intentaron reducir a su mínima expresión el territorio turco, pero el jefe militar

Mustafá Kemal Pachá, próximo a la plataforma ideológica de los Jóvenes Turcos, desconoció el tratado firmado por el sultán y emprendió la guerra contra los griegos instalados en el país. En octubre de 1923 el ejército turco entró en Estambul y se firmó una nueva paz, que reconocía una Turquía independiente más extensa. La ciudad de Ankara, en el corazón del territorio, fue la capital del nuevo estado.

El artífice de la independencia se propuso construir un estado moderno sobre las ruinas del imperio. Mustafá Kemal adoptó el nombre de Atatürk, que significa "padre" o "antepasado", y abolió el sultanato y el califato para instaurar la República, de la que fue primer presidente. Con la supresión del califato se eliminó la dualidad de los poderes: ya no habría legitimidad proveniente de la sucesión del Profeta, y la autoridad residiría en la Asamblea de Ankara, que descansaba en la soberanía nacional.

Atatürk concentró toda su atención en la construcción de un estado laico, similar al de los países occidentales, y en la transformación de un pueblo con fuertes tradiciones nómadas y guerreras en una sociedad más urbana e industrial. La secularización fue impuesta desde arriba y, cuando se creyó necesario, se recurrió a la fuerza.

Gran Bretaña no cumplió con la promesa hecha al jerife hachemita de La Meca de permitir la restauración de un reino árabe unificado, pero estableció el reino de Irak, en la Mesopotamia, y el emirato de Transjordania en una porción del territorio palestino. En ambos casos, los gobernantes hachemitas consolidaron su poder en el plano interno y aceptaron de buen grado subordinarse a los intereses británicos.

En Palestina, el mandato británico posibilitó al movimiento sionista la compra de tierras y la radicación de familias judías organizadas en cooperativas. La población local se manifestó contra la ocupación inglesa, y los choques entre judíos y palestinos alcanzaron un alto grado de violencia en la segunda mitad de los años treinta. En 1937, la comisión encabezada por lord Peel recomendó la división de Palestina en dos estados. La actitud del sionismo fue ambivalente: aunque pretendía imponer su soberanía sobre todo el territorio, algunos dirigentes concibieron esa medida como un paso intermedio positivo. Los árabes rechazaron la propuesta. Las negociaciones quedaron estancadas y en 1939 el gobierno inglés anunció un nuevo rumbo, que marcó el fin de su entendimiento con el sionismo. Gran Bretaña, en el *Libro Blanco*, se comprometió a conceder la independencia a Palestina en el plazo de diez años; redujo o prohibió, según las regiones, las compras de tierras; y limitó el cupo de inmigrantes judíos durante los siguientes cinco años. A partir de ese plazo, la inmigración quedaba prohibida. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el líder sionista Ben Gurión declaró en Palestina: "Combatiremos el *Libro Blanco* como si no hubiera guerra y ayudaremos en la guerra como si no hubiera *Libro Blanco*".

En el norte de África, Londres puso fin al protectorado sobre Egipto en 1922, el jedive tomó el título de rey y se aprobó la constitución de una monarquía parlamentaria, que no llegó a funcionar debido al autoritarismo del monarca. Gran Bretaña mantuvo sus bases militares, el manejo de la política exterior, el control del canal de Suez y la administración de Sudán. El tratado de 1936 redujo en parte las amplias prerrogativas británicas mientras el ejército egipcio ganaba autonomía atrayendo a sus filas a jóvenes de los sectores medios, quienes acabarían politizando a las fuerzas armadas.

El declive del partido nacionalista favoreció, en la década del treinta, la creciente gravitación de otras dos organizaciones: el Partido Comunista y la Hermandad Musulmana, de diferente signo ideológico, pero ambas capaces de convocar a los grupos sociales postergados y a los jóvenes radicalizados.

Los Hermanos Musulmanes aparecieron en Egipto en 1928 con el propósito de crear un movimiento de masas. Denunciaron la injusticia social que permitía que los ingleses tuvieran lujosas mansiones mientras el pueblo egipcio vivía en chozas miserables. Criticaron a los ulemas y a los políticos árabes, que no hacían nada para resolver los problemas de los desposeídos. Para salir de ese estado de cosas, no era necesario copiar la Revolución francesa ni la rusa, ya que mucho antes el profeta Mahoma había proclamado el valor de la libertad, la

igualdad, la fraternidad y la justicia social. La Hermandad desplegó una red de organizaciones de asistencia social: escuelas, clínicas, sindicatos y centros para la formación física de los jóvenes. Los Hermanos criticaban la corriente wahabí imperante en Arabia Saudita debido a su interpretación literal de la ley islámica, pero no se definían acerca del tipo de gobierno apropiado para un estado musulmán. No obstante, insistían en que debía resultar de una decisión propia y no de la imposición occidental.

Los mandatos franceses –Siria y el Líbano– fueron organizados como repúblicas, pero ante la resistencia de los árabes sirios Francia recurrió al gobierno directo y el mandato se convirtió de hecho en un protectorado. Siria nunca aceptó la separación del Líbano y Palestina, a los que consideraba territorios propios.

Como contrapartida, los franceses reforzaron sus buenas relaciones con los cristianos maronitas de Monte Líbano y crearon el Gran Líbano mediante la anexión de una serie de distritos musulmanes de vital importancia, que formaban parte de Siria: Trípoli en el norte y una franja costera que incluía las ciudades de Beirut, Tiro y Sidón. Sin embargo, la autonomía libanesa estuvo muy restringida hasta la Segunda Guerra Mundial.

En las posesiones francesas del norte de África la oposición anticolonial fue débil. Las acciones más consistentes se produjeron en Túnez a través de una amplia oleada de huelgas y movilizaciones impulsadas por el partido Neo-Destour a fines de los años treinta.

Los únicos dos países musulmanes que habían quedado al margen del imperio otomano y logrado preservar su frágil independencia frente a las metrópolis europeas, Persia y Afganistán, recorrieron caminos muy diferentes. En el caso del reino persa, el ascenso de la dinastía Pahlevi en los años veinte dio paso a un programa radical favorable a la occidentalización. El principal objetivo del nuevo sah, Reza Khan Pahlevi, fue modernizar el país mediante la centralización del poder, la profesionalización del ejército, la formación de una burocracia eficaz y la denuncia de todos los tratados que reconocían derechos de extraterritorialidad a los extranjeros. Reza Khan puso en marcha un programa similar al que introdujera Atatürk en Turquía: abolió la obligatoriedad del uso del velo para las mujeres, reformó los sistemas de educación y salud, y subordinó el clero al poder del monarca. A finales de los años treinta, Irán –el nuevo nombre de Persia desde 1935– parecía secularizado por completo. Los Pahlevi controlaron el gobierno hasta la revolución chiita liderada por el ayatolá Jomeini en 1979.

El territorio afgano, ocupado por diferentes etnias y con el poder distribuido entre numerosos clanes y tribus, fue relativamente unificado a fines del siglo XIX y reconocido como reino independiente por Gran Bretaña en 1921. Tres monarcas se sucedieron en el trono hasta 1973, año en que un golpe de estado instauró la República.

La República China

La violenta irrupción de las principales potencias en su territorio a lo largo del siglo XIX y la crisis del gobierno imperial trastocaron la fisonomía de la sociedad china. Aun cuando los sectores tradicionales seguían detentando un poder considerable en el aparato estatal y en la sociedad agraria, desde principios del siglo XX los nuevos actores sociales –capitalistas de los puertos abiertos, estudiantes formados en Japón, comunidades de emigrantes dispersas en las islas del Índico y el Pacífico– presionaron para obtener cambios radicales. En 1905 nació la Liga Juramentada, dirigida por Sun Yat-sen, germen del futuro Partido Nacional, el Kuomintang. Sus objetivos eran esencialmente políticos –la expulsión de los manchúes y el establecimiento de la República– y las cuestiones sociales quedaron relegadas por el momento. Sun era un liberal convencido de que la salvación de China dependía de la creación de una democracia de tipo occidental.

Después de una decena de intentos revolucionarios fallidos, el levantamiento de octubre de 1911 logró extenderse rápidamente y en enero de 1912 Sun Yat-sen asumió como presidente provisional de la

República. La rápida caída del régimen fue posible porque dos voluntades diferentes coincidieron en oponerse a la monarquía: una fracción de la clase dirigente, que pretendía acrecentar la autonomía de las provincias donde residía su poder, y los hombres nuevos que alentaban la modernización del país. El apoyo de la clase dirigente fue clave, pero su presencia pesó negativamente sobre el curso de la República.

Los revolucionarios eran una pequeña minoría y, en consecuencia, Sun Yat-sen renunció a la presidencia, que quedó en manos de un jefe militar, hasta su muerte en 1916. A partir de ese momento se inició un período signado por la desintegración del poder central y la afirmación de los jefes militares de las distintas regiones, "los señores de la guerra". En este caos ocurrieron dos hechos que repercutieron entre quienes pretendían un cambio radical para China: la creación del Movimiento del 4 de Mayo por la Ciencia y la Democracia, y la reorganización del Kuomintang.

El 4 de mayo de 1919, la noticia de que en Versalles se había acordado ceder a Japón las ex colonias alemanas en China impulsó a miles de estudiantes a concentrarse en la plaza de Tiananmen en Pekín e iniciar una protesta que se extendió rápidamente a todos los principales centros del país. El Movimiento proponía básicamente soluciones culturales para la crisis de China: el confucianismo, pilar del orden tradicional jerárquico y de los códigos morales estrictos, debía ser sustituido por una "Nueva Cultura". Para unos, el nuevo comportamiento debía basarse en la ciencia y la democracia occidentales; para otros, había que reformar la cultura china poniendo el acento en la "voluntad del pueblo".

Después de la "traición" de Occidente en Versalles, creció el interés por el socialismo y la vía rusa, y parte de los intelectuales del Movimiento del 4 de Mayo crearon el Partido Comunista a mediados de 1921. Se conocía poco el marxismo, pero las ideas que circulaban eran atractivas en esos tiempos de crisis: el marxismo no rechazaba la violencia y, a diferencia del nacionalismo europeo, señalaba a las rapaces clases superiores como un obstáculo para la renovación de la nación. Los comunistas chinos recurrieron a Moscú y a la Tercera Internacional en busca de apoyo.

La Komintern y el mundo colonial

El primer congreso de la Tercera Internacional, celebrado en marzo de 1919, puso toda su atención y esperanza en la revolución europea. Al año siguiente, estas expectativas se habían desgastado y los bolcheviques prestaron atención a los movimientos nacionalistas, invitando a muchos más delegados no europeos. En septiembre de 1920 se celebró en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán) el I Congreso de los Pueblos de Oriente, dedicado específicamente a la cuestión colonial. En el debate entre Lenin y el comunista indio M. N. Roy, el líder ruso defendió las alianzas interclasistas mientras su par indio alertaba contra los nacionalistas burgueses, demasiado comprometidos con la defensa del statu quo. En opinión de Roy, los comunistas debían privilegiar la organización de la clase obrera que se estaba desarrollando en Asia.

La Komintern propuso una estrategia gradualista: en primer lugar había que unificar China mediante una revolución nacional interclasista y para esto, en 1923, decidió ayudar tanto al Kuomintang como a los comunistas induciéndolos a formar un frente común.

En este contexto, Sun Yat-sen encaró la reforma del Kuomintang mediante la aprobación de un nuevo programa que incluía reformas sociales y antiimperialistas y la formación de un ejército

revolucionario apoyado por los soviéticos y dirigido por Chiang Kai-chek. A la muerte de Sun Yat-sen en 1925 salieron a la superficie las tensiones entre las dos alas del Kuomintang. Por un lado, los sectores que privilegiaban las tareas destinadas a concretar la unidad y la independencia nacional, y por el otro, la izquierda, que coincidía con los comunistas en privilegiar la organización de las luchas sociales. En 1927 Chiang Kai-chek rompió con los comunistas a través de una violenta y sorpresiva represión que dejó decenas de miles de víctimas. El jefe nacionalista decidió cortar de raíz la posibilidad de que la revolución asumiera un carácter socialista. Los dos intentos posteriores de insurrección urbana dirigidos por los comunistas fueron sangrientamente sofocados.

La etapa de la anarquía quedó cerrada a principios de 1929 en virtud de la derrota o bien de la incorporación al nuevo orden de los "señores de la guerra". El gobierno de Chiang Kai-chek mantuvo una relación tensa con los sectores empresariales y mercantiles urbanos y la posición de los terratenientes se deterioró. Sin pretender avanzar hacia una economía planificada, Chiang Kai-chek subordinó los intereses privados a la organización de las campañas destinadas a restaurar la autoridad del estado sobre todo el territorio y a resguardar el orden interno apoyándose en la fuerza militar. En el plano político ideológico fue cada vez más conservador. El gobierno de Nankín no tuvo en cuenta la precaria posición social y económica de los campesinos, y los comunistas dirigieron su atención hacia ellos tras la sangrienta derrota de 1927.

Mientras la conducción del Partido Comunista organizaba las insurrecciones obreras de fines de 1927, Mao ya estaba en su provincia natal, Hunan, intentando levantar a las masas campesinas. La "revuelta de la cosecha de otoño" fracasó y Mao, que había logrado escapar de la cárcel con otros comunistas, se refugió en las montañas del interior de la provincia. Allí ganó la adhesión del campesinado a través de la distribución de tierras e inició la formación de un ejército entrenado en la guerra de guerrillas para enfrentar al gobierno y despojar de sus tierras a los grandes propietarios. A mediados de los años treinta, cercados por las tropas gubernamentales, los comunistas debieron emprender la "larga marcha" hacia el norte hasta establecer su base en la ciudad de Yan'an. Esta arriesgada y costosa empresa –de los ochenta y seis mil que iniciaron la marcha sólo treinta mil llegaron a destino– consolidó el prestigio de Mao y lo posicionó ventajosamente como aspirante a la jefatura del partido.

Chiang adoptó una actitud tibia ante el avance japonés a principios de la década de 1930, dado que antes de enfrentar a los japoneses quería derrotar a los comunistas. Por el momento, según el jefe nacionalista, la superioridad de Japón indicaba que era conveniente evitar la guerra. Los comunistas, en cambio, impulsaron la unidad para combatir al agresor extranjero. Ante las presiones cada vez más extendidas, incluida la de los jefes del ejército anticomunistas, en 1937 Chiang aceptó sustituir la guerra civil por la guerra nacional contra Japón. En el transcurso de esta contienda, los comunistas salieron de su aislamiento y construyeron un poder que les permitió derrotar a los nacionalistas después de la Segunda Guerra Mundial.

Para los aliados anglosajones, esencialmente preocupados por la evolución de Europa y sobre todo de Alemania, China no fue digna de mayor atención en los años treinta. En el caso de los Estados Unidos, el objetivo primordial de su política exterior en Oriente Lejano era el apaciguamiento de Japón. El gobierno de Roosevelt alentaba la vana esperanza de alcanzar alguna especie de "entente" con Tokio en los asuntos asiáticos, aunque ello implicara aceptar el creciente dominio japonés sobre porciones del territorio chino. Washington comenzó a reaccionar recién a principios de la siguiente década, cuando la firma del pacto Tripartito Berlín-Roma-Tokio (septiembre de 1940) mostró claramente los vínculos entre la política de agresión alemana en Europa y su par japonesa en Asia. El Eje fue visualizado como un esfuerzo a escala mundial para cuestionar la posición de los anglosajones y sus aliados en lo más alto de la jerarquía internacional.

América Latina

A partir de la Primera Guerra Mundial, la posición de la economía latinoamericana en el mercado mundial sufrió modificaciones que repercutieron en su desenvolvimiento interno. En primer lugar, la presencia de los Estados Unidos, aunque con intensidad variable, se extendió hacia los países de América del Sur mientras se debilitaba la de los países europeos, especialmente de Alemania. Durante la guerra, la región tuvo un excedente comercial considerable respecto de los Estados Unidos, pero en los años veinte la situación se revirtió, pues el mercado estadounidense quedó vedado para productos que competían con los de los agricultores locales. Las crecientes inversiones norteamericanas propiciaron la expansión del transporte automotor y la creación de industrias dirigidas al consumo local, pero no impulsaron las exportaciones hacia los Estados Unidos. Por otra parte, aquellos países que ya contaban con cierto grado de industrialización ampliaron y diversificaron su producción por las restricciones comerciales durante la guerra. El sector exportador continuó ocupando una posición central, pero el avance de las nuevas actividades y el descenso de los precios de los bienes primarios durante la posguerra pusieron en tela de juicio el modelo vigente de inserción mundial. La Gran Depresión terminó de trastocarlo.

La demanda internacional de café, azúcar, metales y cereales se redujo y cayeron los precios. El valor total de las exportaciones durante los años 1930-1934 fue un 48% más bajo que el de 1925-1929. El deterioro de los términos de intercambio fue acompañado por el derrumbe del mercado financiero mundial, y, en consecuencia, los países latinoamericanos no pudieron obtener nuevos créditos. Frente a estos desafíos, el estado intervino activamente en el control de la producción y de los intercambios comerciales. Los gobiernos abandonaron el patrón oro, gravaron las importaciones y buscaron nuevas fuentes de ingreso internas mediante la reforma fiscal. La crisis de la economía global impulsó la autarquía económica y estimuló la canalización de las inversiones hacia el mercado interno.

Sin embargo, se intentó preservar los intereses más vitales de las clases dominantes locales. Por ejemplo, el gobierno conservador argentino preservó las exportaciones de los ganaderos al mercado británico. En 1933 el pacto Roca-Runciman aseguró el mantenimiento de una cuota aceptable, a cambio de ventajas para el comercio y las inversiones británicas en la Argentina.

A partir de la crisis de 1929, hubo en casi todos los países giros políticos significativos. Inicialmente, hubo golpes militares, y el ejército se erigió como un actor político clave. En Brasil, los militares acabaron con la República oligárquica y terminaron abriendo el camino a Getúlio Vargas, quien luego de triunfar en las elecciones ocupó el cargo hasta 1954. Conocido como el “padre de los pobres”, buscó conciliar a través de una activa intervención estatal los intereses de los exportadores de café con la promoción del desarrollo industrial. Al mismo tiempo, estimuló la agremiación de los nuevos trabajadores industriales, impulsó reformas sociales y organizó un sindicalismo disciplinado y controlado por el estado. En 1937, de acuerdo con las tendencias europeas, reformó la Constitución y proclamó el Estado Novo, de corte autoritario, que perduró hasta su suicidio, en 1954.

En la Argentina, el golpe cívico-militar de 1930 desalojó al presidente radical Hipólito Yrigoyen y restauró el régimen oligárquico, que se mantuvo hasta 1943, combinando la proscripción del radicalismo con el fraude electoral. A la vez, introdujo importantes cambios en la política económica, de acuerdo con la nueva realidad mundial: el estado intervino en la economía, regulando la tasa de interés, el uso de las divisas y las importaciones, e indirectamente estimuló un desarrollo industrial que debía complementar al sector agropecuario. El golpe militar de 1943 abrió el camino al coronel Juan Perón, electo presidente en 1946, con el apoyo de la clase trabajadora. Perón desarrolló una política de fuerte redistribución y mejoras sociales, combinada con la promoción de la industria nacional.

En Chile, el general Carlos Ibáñez, que gobernó entre 1927 y 1931, no logró consolidar una fuerza política propia, y los partidos

tradicionales continuaron dominando la vida política. A mediados de los años treinta, el Partido Radical se unió al Socialista y al Comunista para constituir el Frente Popular, que ganó las elecciones de 1938 con el apoyo de las zonas mineras y de las ciudades, mientras el voto rural continuó bajo el control de los conservadores. Esta coalición también impulsó un programa de industrialización sustitutiva de las importaciones. La oligarquía logró pactar con el presidente radical para que no se afectara la propiedad rural ni se permitiera la sindicalización de los trabajadores del sector.

En Bolivia y Paraguay, la Guerra del Chaco (1932-1935) afectó profundamente la política. La derrota alentó en Bolivia la politización de los militares, que tomaron el gobierno en un clima signado por la profundización de los conflictos sociales. El gobierno militar adoptó medidas que afectaron al capital extranjero, entre ellas la nacionalización de la Standard Oil, y amplió el poder económico del estado con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En la segunda mitad de los años treinta surgieron nuevas fuerzas políticas, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tendría una gravitación decisiva en la segunda mitad del siglo XX. En Paraguay, los militares impugnaron a los políticos liberales por la forma en que habían conducido las negociaciones de paz. Se sucedieron dictaduras militares clásicas, que se prolongaron hasta fines del siglo XX.

En el resto de los países latinoamericanos, la renovación de la escena política fue menos drástica. En Perú y Venezuela, los grupos dominantes, asociados con las fuerzas armadas, resistieron exitosamente el avance de los partidos populares. En Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana –fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre a mediados de los años veinte– combinó una sólida organización partidaria con un programa antiimperialista. Propuso la creación de un Frente Único Indoamericano, la nacionalización progresiva de tierras e industrias, la internacionalización del canal de Panamá y la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. La Alianza tuvo sus principales bases de apoyo en Lima y en la costa, donde ganó la adhesión del movimiento obrero y la clase media. Desde 1931, y hasta la década de 1940, sucesivas dictaduras militares persiguieron al APRA. En Venezuela, los sucesores del dictador Juan Vicente Gómez (1908-1925) permitieron una liberalización moderada que posibilitó el surgimiento en 1941 de la Acción Democrática, encabezada por Rómulo Betancourt. Sin embargo, el ciclo de las dictaduras se extendió hasta los años cincuenta.

Ni en Colombia ni en Ecuador se constituyeron nuevos movimientos políticos. En Colombia la escena continuó dominada por los conservadores y los liberales. Las nuevas demandas sociales fueron canalizadas por distintas facciones en el seno de estos partidos tradicionales. En Ecuador, la combinación de una economía agraria tradicional en la sierra con las plantaciones en la costa redujo las posibilidades de cambios políticos. El mayor cuestionamiento al orden vigente provino de un político popular de fuerte arraigo en Guayaquil: José María Velasco Ibarra.

En Uruguay la crisis acentuó las divergencias entre las tendencias reformistas y conservadoras que coexistían en el seno de los partidos Blanco y Colorado. Dos golpes de estado, en 1933 y en 1942, pusieron en evidencia el deterioro del sistema de partidos vigente. Sin embargo, los gobiernos militares no arraigaron y la política retomó el cauce constitucional.

En México, después de la conmoción de la revolución de 1910, la estabilidad llegó con el predominio indiscutido del Partido de la Revolución mexicana. A partir de 1934 el presidente Lázaro Cárdenas profundizó las reformas sociales en el ámbito agrario e industrial, expropió las compañías petroleras extranjeras y confirió al estado un papel decisivo en la marcha de la economía.



Augusto C. Sandino, al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua y con la consigna "Yo quiero patria libre o morir", combatió entre 1926 y 1933 al gobierno conservador y a las tropas estadounidenses que invadieron su país. Fue asesinado en febrero de 1934.

En América Central se afianzaron las dictaduras: en Santo Domingo, Rafael Trujillo, desde 1930; en Honduras, Tiburcio García, desde 1933; en Nicaragua, la familia Somoza, desde 1937; en Haití, François Duvalier, y en Cuba, Fulgencio Batista se hicieron con el poder en 1940. Sus regímenes se sustentaron en las guardias nacionales, armadas y organizadas por los Estados Unidos. Las dictaduras de los Somoza y los Trujillo introdujeron un elemento novedoso: el control familiar del gobierno les dio un gran poder económico, y pudieron subordinar a las oligarquías tradicionales. Entre las fuerzas opositoras se destacaron el movimiento de Augusto Sandino en Nicaragua y el del Partido Comunista en El Salvador (1932), ambas brutalmente aniquiladas.

En la mayor parte de los países latinoamericanos, repercutieron las experiencias políticas y las confrontaciones ideológicas europeas: la Revolución bolchevique, el ascenso y la consolidación del nazifascismo, y la Guerra Civil española. Esta última tuvo una especial trascendencia debido al fuerte vínculo histórico y cultural de gran parte de los países americanos con España y de la acogida que ellos brindaron a los exiliados políticos españoles a raíz del triunfo franquista.

4. De la Segunda Guerra Mundial a la caída del Muro

En la década de 1930, la fragilidad de la paz se tornó cada vez más evidente en virtud de las acciones de dos países: en primer lugar Japón, con su avance sobre China, y, poco después, Alemania. Sin demasiada convicción, las democracias europeas y el comunismo exploraron la posibilidad de unirse, pero el frente antifascista recién se concretó en 1941, cuando los tres principales regímenes se alinearon definidamente en dos campos: por un lado, el Eje, integrado por Italia, Alemania y Japón, y, por otro, la alianza entre las democracias occidentales y el comunismo. La Segunda Guerra Mundial, de carácter multidimensional, fue una guerra entre dos tipos de estados capitalistas –los democráticos y los nazifascistas– y entre dos regímenes que compartían el antiliberalismo y un decidido autoritarismo, pero eran resultado de dos proyectos contradictorios: el nazi y el comunista. En gran parte de Asia la resistencia a la expansión japonesa tuvo connotaciones anticolonialistas. En Europa, la guerra entre estados incluyó la lucha de movimientos de resistencia nacional contra la ocupación nazi y contra quienes la apoyaron. Desde esta perspectiva, la Segunda Guerra Mundial fue, en gran medida, una guerra civil europea.

La Guerra Fría fue también multidimensional. En esencia, fue expresión de la rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, centrada inicialmente en el territorio europeo, con alcances mundiales después, y basada en la carrera por el control de armas nucleares cada vez más sofisticadas y costosas. Pero también incluyó la lucha anticolonial, signada por la rivalidad entre las dos superpotencias, y además estuvo atravesada por las demandas nacionales de los países europeos que cuestionaban la hegemonía de la potencia dominante: la de Moscú en el bloque soviético y la de Washington en el bloque capitalista.

Hacia la guerra

La confrontación entre los dos bloques condicionó las relaciones internacionales durante casi medio siglo y se libró en los frentes militar, ideológico, político y propagandístico. La carrera armamentista nuclear impidió que la "guerra fría" se convirtiera en "caliente", ya que un enfrentamiento directo entre las dos principales potencias podría haber desembocado en una catástrofe general.

Desde el quiebre de la Gran Alianza en 1947 hasta la disolución del bloque soviético en 1989, la Guerra Fría siguió un curso zigzagueante. Entre 1947 y 1953 la desconfianza y las tensiones entre los dos centros de poder hicieron temer el estallido de una tercera guerra mundial. A partir de 1953 se avanzó hacia la distensión, cuyo punto culminante fue la conferencia de Helsinki en 1975, etapa que coincidió con el boom económico de "los treinta gloriosos" o "los años dorados". A fines de la década de 1970, cuando la crisis económica –evidente en el capitalismo pero soterrada en el régimen soviético– cerraba el ciclo de expansión, comenzó la Segunda Guerra Fría. Con el ingreso de Mijail Gorbachov al gobierno de la Unión Soviética en 1985 se reanudó el diálogo entre las superpotencias. La crisis de los regímenes soviéticos de Europa del Este en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991 clausuraron el orden bipolar de la Guerra Fría.

En relación con su carácter multidimensional, la caracterización de cada una de estas etapas incluye tres cuestiones: el grado de animadversión o de disposición al diálogo entre las dos potencias; las relaciones entre los países integrantes de cada bloque y la potencia dominante y, por último, las luchas anticolonialistas y la emergencia del Tercer Mundo.

En el plano militar, la ocupación de Manchuria por Japón en septiembre de 1931 fue el primer paso en la escalada que conduciría a la guerra. Japón, un país superpoblado y con escasas materias primas, padecía la contracción del comercio mundial y, dadas las circunstancias, su gobierno ultranacionalista aprovechó la debilidad de China para anexar parte de su territorio. En marzo de 1932, Tokio

impuso en Manchuria un gobierno títere encabezado por Pu-Yi, el emperador chino destronado por la República.

La crisis económica también contribuyó a deteriorar las relaciones entre los estados. Los centros imperialistas, Francia e Inglaterra, incrementaron los vínculos con sus colonias. Japón, Italia y Alemania, que carecían de este recurso, se inclinaron hacia la autarquía y la expansión territorial por la fuerza. Aunque los tres coincidían en desmantelar el sistema de Versalles, en un principio cada estado nacional persiguió objetivos propios.

Hasta 1935, Mussolini se inclinó por colaborar con las potencias occidentales. Los grupos de poder italianos querían controlar los Balcanes, y el Duce, en julio de 1934, envió tropas a la frontera ítalo-austríaca para frenar el golpe alentado por los nazis más radicales y en el que fue asesinado el canciller austríaco. Cuando Hitler anunció en marzo de 1935 el restablecimiento del servicio militar obligatorio, Francia, Gran Bretaña e Italia reafirmaron en la conferencia de Stresa su oposición a una revisión unilateral de la paz de Versalles. Pero la invasión de Etiopía por las tropas italianas rompió el frente de Stresa. Criticado y sancionado por las democracias occidentales, Mussolini se acercó a Hitler. El vínculo se consolidó con la intervención conjunta en la Guerra Civil española para apoyar al general Franco y con la creación del Eje RomaBerlín. A fines de 1937 Italia abandonó la Sociedad de Naciones.

Por otro lado, en noviembre de 1936 Alemania firmó con Japón el pacto anti-Komintern, en cuyo protocolo secreto las dos potencias se prometían ayuda mutua en caso de ser atacadas. Italia se sumó al pacto al año siguiente. Sin embargo, Tokio no intervino en la invasión a la URSS puesta en marcha por Hitler en junio de 1941.

Los militares japoneses en el poder, siguiendo los tradicionales intereses expansionistas de su país, concentraron sus esfuerzos en el área del Pacífico y Asia Oriental. Para no dispersar sus fuerzas en dos frentes, en abril de 1941 firmaron un pacto de no agresión con Stalin, que estuvo vigente durante casi todo el conflicto. Recién en Yalta (1945) el dirigente soviético consideró la posibilidad de entrar en guerra con Japón.

Las acciones del Tercer Reich tuvieron un papel central en el desencadenamiento de la guerra. Los historiadores aún discuten las causas de la política exterior del nazismo. ¿Fue la voluntad de Hitler el motor central? ¿O fueron los factores estructurales –la dinámica caótica y radicalizada del régimen nazi, los intereses del gran capital, la necesidad de canalizar el descontento social interno– los que condicionaron las decisiones del Führer?

Hitler tuvo propuestas extremas desde su ingreso a la escena política: el racismo, la búsqueda del espacio vital para Alemania y la liquidación del comunismo. A diferencia de la política exterior revisionista del conservadurismo alemán, el nazismo no aceptaba que la recuperación de las fronteras de 1914 bastara para garantizar la seguridad alemana y asegurar su desarrollo. Sólo la conquista del Este aseguraría el "espacio vital" necesario para imponer la hegemonía de la vigorosa raza aria sobre el continente europeo.

Las primeras crisis provocadas por la violación del statu quo fueron cortas e incruentas.

Principales hitos de la política exterior del Tercer Reich (1933-1939)

- Retiro de las Naciones Unidas, octubre de 1933. Pacto con Polonia, enero de 1934.
- Golpe en Austria, julio de 1934.
- Plebiscito en el Sarre a favor de la reincorporación al Reich, enero de 1935. Reintroducción del servicio militar obligatorio, marzo de 1935.
- Acuerdo naval con Inglaterra, junio de 1935. Reocupación de Renania, marzo de 1936. Proclamación del Eje Berlín-

Roma, octubre de 1936. Pacto Anti-Komintern con Japón, noviembre de 1936. Anexión de Austria (Anschluss), marzo de 1938. Conferencia de Múnich, septiembre de 1938. Ocupación de Praga, marzo de 1939.
- Pacto de no agresión germano-soviético y protocolo secreto, agosto de 1939.
- Invasión a Polonia, septiembre de 1939.

Estos éxitos fortalecieron el mito del Führer. Hasta la anexión de Austria (Anschluss) en 1938, todos los triunfos de la política exterior del nazismo respondieron a los objetivos de los sectores más poderosos del Tercer Reich. Después vino Checoslovaquia. Allí, el Führer utilizó a su favor las reivindicaciones de los alemanes de la región de los Sudetes, que no aceptaban su condición de minoría en el estado creado en Versalles. A fines de 1938, en Múnich, los primeros ministros británico y francés, reunidos con Hitler y Mussolini, aceptaron la anexión de esa zona a Alemania y todos se comprometieron a garantizar la existencia del estado checoslovaco en el resto del territorio. Pero nadie reaccionó cuando las tropas alemanas ocuparon Praga en marzo de 1939. Checoslovaquia desapareció: las fuerzas de Ante Pavelic declararon el nacimiento del nuevo estado de Eslovaquia, el Tercer Reich creó el Protectorado de Bohemia y Moravia, y Rutenia pasó a manos de Hungría.

Las democracias y el comunismo, que serían arrollados por la expansión del nazismo, no llegaron a forjar una política concertada para detenerlo. Las principales democracias europeas, subestimando los objetivos nazis, jugaron la carta del apaciguamiento: si aceptaban que Hitler revisara Versalles, podrían evitar otra guerra. Ni París ni Londres se sentían seguros de tener energías para emprender exitosamente otra empresa bélica, y además los sectores de poder de ambos países rechazaban una alianza con el comunismo. El rearme alemán atemorizó a Stalin, y tanto su gobierno como la Tercera Internacional buscaron sin éxito un acercamiento con las democracias occidentales.

La Tercera Internacional y el antifascismo

En 1928, la consigna de "socialfascismo" esgrimida por la Internacional calificó a la socialdemocracia como un enemigo equiparable al fascismo e impidió a los comunistas concretar alianzas con los partidos burgueses. En su VII Congreso, celebrado en 1935, la Komintern dio un giro rotundo. El fascismo pasó a ser la expresión política del gran capital reaccionario y se llamó a la constitución de frentes populares. Según Jorge Dimitrov, comunista búlgaro al frente de la Internacional, las acciones conjuntas de los comunistas y los socialdemócratas "ejercerían también una influencia poderosa en las filas de los obreros católicos, anarquistas y no organizados, incluso sobre aquellos que momentáneamente son víctimas de la demagogia fascista".
Este viraje acompañó la decisión de Stalin de avanzar hacia un compromiso de cooperación militar con Francia en virtud del sesgo beligerante que imprimía Hitler a la política exterior alemana.

Después de Múnich, el jefe máximo del comunismo consideró que Francia y Gran Bretaña consentían el resurgimiento del militarismo alemán porque esperaban que su fuerza se descargase sobre la Unión

Soviética y tanteó la posibilidad de un acuerdo con la Alemania nazi. En agosto de 1939, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países suscribieron el pacto Molotov-Ribbentrop, por el que los dos gobiernos se comprometieron a mantener una estricta neutralidad mutua si uno de ellos se viese envuelto en una guerra. En el protocolo secreto acordaron una nueva división de Polonia y el reparto de una serie de territorios. Gracias a estas medidas, Hitler pudo dar la orden de avanzar sobre Polonia sin la incertidumbre de que se abriera un frente militar en el este.

Los frentes de lucha

Las tropas alemanas invadieron Polonia el 1º de septiembre de 1939. Dos días después, Londres y París declararon la guerra a Alemania. Mussolini declaró el estado de no beligerancia y los Estados Unidos proclamaron su neutralidad. El gobierno polaco huyó al exilio y, al cabo de una rápida y brutal conquista, el estado polaco fue eliminado. Los territorios del oeste fueron incorporados al Reich, y el resto quedó bajo el Gobierno General, controlado por los nazis. Polonia occidental debía ser germanizada y los nazis dispusieron el traslado de los alemanes étnicos desde la Unión Soviética, los estados del Báltico y otras zonas de Europa Oriental. Las familias polacas desalojadas de sus hogares fueron enviadas al territorio del Gobierno General, donde quedaron abandonadas a su suerte.

Las unidades móviles de exterminio de las SS, los Einsatzgruppen, siguieron a la Wehrmacht en el ataque contra Polonia primero y contra la URSS después. Su tarea principal consistió en aniquilar a los judíos y a los comisarios políticos mientras sembraban el terror mediante el asesinato en masa de civiles. Durante muchos años la Wehrmacht fue considerada un ejército que se limitaba a cumplir con su deber; sin embargo, se ha demostrado que fue cómplice activa de los crímenes aprobados por la cúpula nazi.

Mientras los nazis avanzaban sobre Polonia occidental, los soviéticos ocupaban los territorios polacos lindantes con la URSS, según lo dispuesto en el pacto Molotov-Ribbentrop. Muchos polacos fueron internados en campos de prisioneros y pocos meses después Stalin ordenó ejecutar a los “nacionalistas y contrarrevolucionarios”. El ejército alemán encontró las tumbas masivas en el bosque de Katyn, en 1943. Berlín acusó a los soviéticos y Stalin adjudicó el hecho a una maniobra de los nazis. En 1990, bajo el gobierno de Mijail Gorbachov, la Unión Soviética reconoció su responsabilidad en los crímenes.

Fundamentándose en su pacto con el Tercer Reich, la URSS instaló efectivos militares en el Báltico y Finlandia. Ante la negativa de Helsinski, el Ejército Rojo invadió el país a fines de 1939 y la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones. Después del rápido triunfo de los nazis en Francia, Stalin incorporó las tres repúblicas bálticas a la Unión Soviética y se apropió de Besarabia y Bukovina en Rumania, recuperando los territorios anexados a Rusia por los zares y perdidos por los bolcheviques en el fragor de la Revolución y la guerra civil.

A partir de Polonia, el Tercer Reich avanzó rápidamente sobre Europa Occidental. A mediados de 1940, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia estaban bajo su control. Sólo Gran Bretaña siguió resistiendo. Ante la superioridad naval británica, Hitler inició el bombardeo sistemático de ciudades e industrias de Inglaterra. El nuevo gobierno británico, presidido por el conservador Winston Churchill desde mayo de 1940, respondió con ataques aéreos a las ciudades alemanas.

Al no poder quebrar la resistencia británica, Hitler decidió llevar la guerra al territorio soviético. Pero antes tuvo que ayudar a su aliado Mussolini en el Mediterráneo y el norte de África. En junio de 1941 las tropas alemanas e italianas ocuparon Yugoslavia y Grecia, cuyos monarcas se habían exiliado en Londres. Yugoslavia desapareció literalmente del mapa: parte de su territorio quedó repartido entre Alemania, Italia, Bulgaria y Hungría, mientras que Croacia fue declarada un reino independiente bajo la conducción del cura católico

pronazi Jozef Tiso. Tanto en Yugoslavia como en Grecia, la resistencia armada a los nazis se dividió en dos bandos enfrentados: los comunistas y los promonárquicos. Para revertir el fracaso de los fascistas en Egipto, Hitler envió el Afrika Korps comandado por el general Erwin Rommel, el "Zorro del Desierto", quien logró importantes victorias sobre los británicos. Pero a fines de 1942 los británicos derrotaron a los alemanes en El Alamein y los expulsaron del norte de África.

Consolidado en el continente europeo pero sin haber vencido a Gran Bretaña, en el verano de 1941 Hitler inició la Operación Barbarroja contra la URSS. Tres millones de hombres avanzaron hacia Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Ucrania en el sur. Stalin había desestimado los informes que anunciaban los planes alemanes y no se había preparado para repeler la invasión. Los primeros días fueron de desconcierto total.

El ejército alemán y las SS ingresaron matando sin piedad. En su huida hacia el este, los soviéticos adoptaron la táctica de "tierra quemada": no dejar nada que pudiera ser utilizado por el invasor. Dado que Hitler esperaba aniquilar al régimen soviético en pocos meses, sus tropas no estaban equipadas para enfrentar el duro invierno. Pero los soviéticos resistieron hasta el límite de sus fuerzas y los nazis, aunque conquistaron Ucrania, no lograron ingresar en Leningrado ni tampoco en Moscú. La derrota del ejército alemán a principios de 1943 en la batalla de Stalingrado supuso un cambio decisivo: de allí en adelante el ejército soviético no cesó de avanzar, hasta llegar a Berlín en 1945.

Por entonces, británicos y norteamericanos habían desembarcado en Italia desde el norte de África, avanzado hacia Roma y provocado la caída de Mussolini. Los alemanes se fortificaron en el norte y resistieron unos meses más. En junio de 1944 los aliados desembarcaron en Normandía. Poco después liberaron Francia y avanzaron hacia Alemania desde el sur, en momentos en que los soviéticos lo hacían desde el norte. A principios de 1945 Alemania estaba ocupada, pero Hitler ordenó resistir y, fiel a su consigna de "victoria o muerte", se suicidó el 30 de abril. El 2 de mayo finalizó la batalla de Berlín, y entre el 7 y el 8 las fuerzas armadas alemanas se rindieron ante el alto mando del ejército aliado y ante las fuerzas soviéticas.

En el Pacífico se libró paralelamente otra guerra. Japón invadió el norte de China en 1937, ocupó Pekín y lanzó su ejército sobre Nanquín, sede del gobierno chino, que decidió resistir. La ciudad fue saqueada e incendiada hasta los cimientos. Los japoneses ocuparon las posesiones europeas en Asia: la Indochina francesa, la Indonesia holandesa y las británicas Malasia, Birmania, Hong Kong y Singapur. En diciembre de 1941, el imperio nipón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái y, cuando los Estados Unidos declararon la guerra a Japón, Hitler no dudó en enfrentarse también al coloso norteamericano.

El despliegue de la maquinaria industrial y bélica norteamericana no tardó en desequilibrar el conflicto del Pacífico en favor de los aliados. La batalla de Midway, en junio de 1942, fue la derrota naval más dura de Japón y marcó un punto crítico en la guerra del Pacífico. En adelante, los norteamericanos fueron dominando isla tras isla. La conquista de Filipinas por parte de los Estados Unidos en febrero de 1945 o la reconquista de Birmania por los británicos fueron momentos claves. El 19 de febrero de 1945 los norteamericanos ocuparon por primera vez territorio japonés, la pequeña isla de Iwojima.

A fines de julio de 1945, el presidente estadounidense Harry Truman exigió la rendición incondicional de Japón. El emperador rechazó el ultimátum. El 6 de agosto los Estados Unidos lanzaron una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Dos días después, la URSS declaró la guerra a Japón y ocupó Manchuria y parte de Corea. El 9 de agosto, los Estados Unidos arrojaron una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki.

Muchas personas murieron en el acto, otras tuvieron una larga agonía producida por las quemaduras, y generaciones de japoneses sufrieron malformaciones de nacimiento por la radiactividad. Japón capituló y fue ocupado por los Estados Unidos.

¿Cuál fue la razón de esta masacre? No sólo el gobierno

estadounidense sino también destacados intelectuales, entre ellos el filósofo francés Raymond Aron, justificaron el empleo de la bomba atómica diciendo que, en última instancia, había puesto fin a la guerra y evitado más muertes. Los opositores insistieron en que el sacrificio de cientos de miles de civiles permitió que Washington emergiese como único vencedor del imperio nipón y probara la eficacia de su nueva arma de guerra.

El mapa europeo bajo el nazismo

La contundente victoria del Eje hasta 1943 no supuso la constitución de un nuevo orden europeo. Hitler necesitaba estabilizar los países que ocupaba a fin de extraer recursos para sostener la guerra, y concretar estos fines era más fácil con gobiernos ya instalados, en cierto grado aceptados por la población, que promover a los dirigentes fascistas locales.

Varios territorios europeos ocupados fueron anexados al Reich –Austria, los Sudetes checoslovacos, Eslovenia, Danzing, Alsacia-Lorena, Luxemburgo– y las tareas administrativas quedaron a cargo de alemanes o nazis locales. A las zonas con mayor densidad de población no germana se les asignó una administración separada: el protectorado de BohemiaMoravia y el Gobierno General de Polonia. Los países satélites –Finlandia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Croacia y Eslovaquia– se posicionaron voluntariamente al lado de Alemania: algunos adoptaron los rasgos típicos del fascismo, pero la mayoría tuvo gobiernos nacionalistas, autoritarios y anticomunistas. La alineación con el nazismo sólo se concretó plenamente en los países surgidos del desmantelamiento de los estados creados en Versalles: Eslovaquia –independizada de Checoslovaquia en marzo de 1939, poco antes de que ingresaran las tropas alemanas– y Croacia –separada de Yugoslavia con la llegada de los nazis–.

En Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda los nazis tutelaron una administración que, en diferentes grados, sometió al personal local a las directivas de los alemanes. Hasta 1942 Francia fue un caso singular. La zona norte, ocupada por los alemanes, quedó sometida a la autoridad del estado mayor y las presiones del embajador alemán, es decir, en una situación similar a la de Bélgica o los Países Bajos. En el sur, un gobierno encabezado por el mariscal Philippe Pétain –con sede en Vichy y teóricamente soberano– emprendió la “revolución nacional”, una contrarrevolución conservadora, nacionalista y con muchos elementos propios del nazismo, entre ellos el antisemitismo. Cuando Pétain firmó el armisticio con los alemanes, el general De Gaulle partió hacia Inglaterra para proseguir la lucha. El 18 de junio de 1940, desde la BBC de Londres, incitó a los franceses a resistir la ocupación nazi.

Portugal, España, Suiza, Suecia, Turquía e Irlanda se declararon neutrales en Europa.

La guerra y la Solución Final

En su libro *Mi lucha*, Hitler manifestó abiertamente su odio visceral a los judíos, a quienes responsabilizaba de la derrota alemana de 1918. Pero las obsesiones del Führer y sus fanáticos seguidores no bastan para explicar el genocidio judío. Este no hubiera sido posible sin la colaboración de la Wehrmacht, el apoyo activo de vastos sectores de la burocracia y los profesionales, y el afán de lucro de los grandes empresarios que fabricaron los equipos para matar e instalaron sus fábricas en los campos de concentración. No hubiera sido posible tampoco sin el silencio, la indiferencia y la complicidad pasiva de gran parte de la sociedad alemana. Al concluir la guerra, los vencedores juzgaron a algunos de los culpables de los crímenes, y aún hoy la historia sigue discutiendo el espinoso problema de las responsabilidades.

Los historiadores debaten también otra compleja cuestión: cómo y

cuándo, y a través de quiénes, el odio y la segregación contra los judíos pudieron materializarse en los campos de concentración destinados a matanzas masivas. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el trato discriminatorio hacia los judíos alemanes se combinó con ataques violentos, pero nada indicaba su exterminio total. Las principales acciones antisemitas anteriores a la guerra no respondieron a directivas precisas de Hitler, sino que más bien se debieron a los activistas radicales de las SA, a las rivalidades facciosas e institucionales que corroían el régimen nazi, al afán de los profesionales de eliminar la competencia judía y a los grupos económicos deseosos de apropiarse de los bienes de los judíos. El Führer habilitó las decisiones y generó el clima que hizo posible los pogromos.

Antes de que estallara la guerra, en Alemania hubo tres oleadas antisemitas: el boicot a los comercios judíos instigado por las SA en 1933; la sanción de las leyes de Núremberg en 1935, que segregaron a los judíos del resto de la sociedad alemana; y la "Noche de los Cristales Rotos", el 9 de noviembre de 1938, con asesinatos, quemas de sinagogas, destrucción y apropiación de propiedades. Finalmente, los judíos fueron expulsados de las actividades económicas y profesionales y sus negocios pasaron a engrosar el patrimonio de las empresas alemanas. Este fue el último acto de violencia abierta, y a partir de ese momento se asignó a las SS la coordinación e instrumentación de la política antijudía, a fin de concretarla en forma más "racional" y burocratizada.

Con la incorporación de nuevos territorios a lo largo de la guerra, el Tercer Reich se encontró con un adicional de tres millones de judíos cuya expulsión era reclamada por los dirigentes nazis de las diferentes localidades. La "solución final" –el exterminio– tomó cuerpo a partir de la ocupación de Polonia, y más decididamente tras la invasión de la Unión Soviética. La expulsión de los judíos de los territorios polacos occidentales, donde serían reubicados los alemanes, dio lugar a la instalación de guetos, el primero de ellos en la ciudad de Lodz, en diciembre de 1939. Con los guetos, los campos de trabajo forzado y los fusilamientos en masa, la idea asesina cobró consistencia. El último paso se dio con la campaña a la URSS. La operación Barbarroja fue diseñada como una guerra de aniquilación: todos los comisarios o dirigentes bolcheviques debían ser ejecutados inmediatamente.

Las SS tuvieron así un nuevo terreno donde desplegar su maquinaria de terror para consolidar y extender su dominio en el estado nazi. En principio se suponía que, tras la caída de Moscú, los judíos serían reubicados en las regiones más adversas del territorio soviético y sometidos a trabajos forzados. Pero la resistencia de los pueblos de la URSS impidió la victoria de los alemanes y sus aliados, la campaña militar se prolongó y el plan genocida se puso en marcha. En enero de 1942, la jerarquía nazi reunida en la Conferencia de Wannsee asumió decididamente la "solución final": una organización planificada de recursos, instalaciones, transportes y personas al servicio de la "producción" de la muerte.

Los guetos de Varsovia, Minsk o Budapest, los campos de concentración –Dachau, Mauthausen, Auschwitz y Treblinka, entre otros– y los asesinatos en masa, como el de Babi Yar o el de las Fosas Ardeatinas, desgarraron las convicciones y abrieron angustiosos interrogantes sobre la condición humana.

La Gran Alianza (1941-1945)

Durante el año transcurrido entre la derrota de Francia y la invasión a la Unión Soviética, el Reino Unido fue el único país que enfrentó al nazismo. El primer ministro Churchill buscó el respaldo de los Estados Unidos y, en marzo de 1941, el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo, por la cual el presidente Roosevelt podía vender o alquilar todo tipo de material a cualquier estado considerado clave para la seguridad nacional. En agosto de 1941 Churchill y Roosevelt suscribieron la Carta del Atlántico, declarando que sus países no buscaban ningún engrandecimiento territorial o de otro

tipo, que respetarían las decisiones democráticas de los pueblos y que se esforzarían en extender el libre comercio y asegurar mejoras laborales.

Al ponerse en marcha la operación Barbarroja, Londres manifestó interés en colaborar con los soviéticos. Con el ingreso de los Estados Unidos al campo de batalla, quedó confirmada la Gran Alianza que encabezarían Josef Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt. La expansión arrolladora, sin límites y brutal del Eje hizo posible que los dirigentes de las democracias liberales y del comunismo aunaran sus fuerzas contra el enemigo común.



Los "Tres Grandes" –Churchill, Roosevelt y Stalin–, en la conferencia que celebraron en Yalta (URSS) del 4 al 11 de febrero de 1945, para acordar la organización del mundo en la segunda posguerra.

Desde fines de 1941 hasta la derrota de Alemania en 1945, los máximos dirigentes del bloque aliado se reunieron en Teherán (noviembre de 1943), Yalta (febrero de 1945) y Potsdam (julio-agosto de 1945). En Potsdam, Harry Truman reemplazó a Roosevelt, que había muerto el 12 de abril, y el dirigente laborista Clement Attlee ocupó el lugar de Churchill tras la derrota electoral de los conservadores. Las negociaciones incluyeron medidas sobre la forma de conducir la guerra. Se debatió sobre la apertura del frente occidental y Stalin exigió un inmediato desembarco aliado en Francia, que se concretó en junio de 1944.

Cuando los jefes aliados se reunieron en Yalta, el Ejército Rojo ya había desalojado a los nazis de los países de Europa del Este. Entonces se acordó que Alemania fuera desmilitarizada y dividida en cuatro zonas que serían ocupadas exclusivamente con fines administrativos por la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En aquel momento ninguno de los líderes pensó en una división política de la potencia derrotada: la separación fue concebida en términos puramente administrativos. Se aprobó el pago de altas reparaciones de guerra por parte de los alemanes y se dispuso que los principales criminales de guerra nazis fuesen juzgados por un tribunal internacional: los célebres juicios de Núremberg.

Los juicios de Núremberg

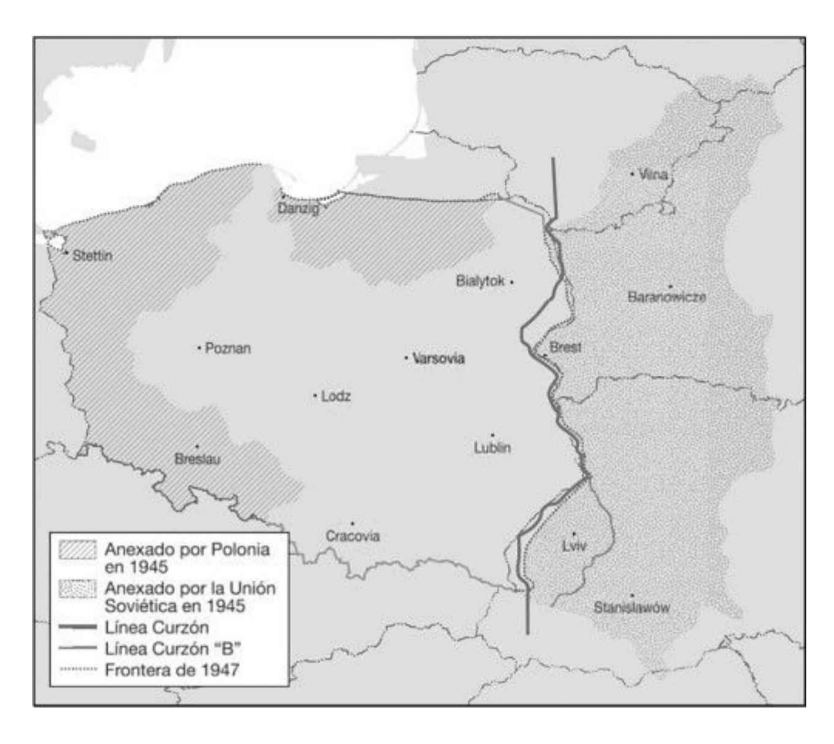
Con esta denominación pasó a la historia la serie de juicios celebrados en Núremberg, Alemania, en 1945-1946, en los que antiguos líderes nazis fueron acusados y juzgados como criminales de guerra por un Tribunal Militar Internacional. La acusación levantó cuatro cargos: 1) crímenes contra la paz (planear, instigar y librar guerras de agresión violando los acuerdos y tratados internacionales); 2) crímenes contra la humanidad

(exterminio, deportaciones y genocidio); 3) crímenes de guerra (violación de las leyes de guerra), y 4) "haber planeado y conspirado para cometer" los actos criminales anteriormente mencionados.

La defensa negó la competencia del Tribunal, subrayó la dificultad de aplicar leyes con carácter retroactivo, e insistió en el principio de obediencia debida y en la supuesta ignorancia de la "solución final" por parte de los implicados en su concreción.

Después de 216 sesiones, el 1º de octubre de 1946 se emitió el veredicto: tres acusados fueron absueltos (Hjalmar Schacht, Franz von Papen y Hans Fritzsche), cuatro fueron condenados a penas de entre diez y viente años de cárcel (Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer y Konstantin von Neurath), tres fueron condenados a cadena perpetua (Rudolf Hess, Walther Funk y Erich Raeder) y, finalmente, doce fueron condenados a muerte. Diez de ellos fueron ahorcados el 16 de octubre de 1946 (Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel y Arthur Seyss-Inquart), Martin Bormann fue condenado "in absentia" y Hermann Göering se suicidó en su celda antes de la ejecución. El industrial Gustav Krupp, incluido en la lista de acusados, no fue juzgado debido a su avanzada edad.

Un protocolo secreto estableció que la Unión Soviética entraría en guerra con Japón después del fin de las hostilidades en Europa. En Potsdam, tras la rendición de los nazis, el diálogo fue menos fluido. El enemigo común había sido derrotado y afloraron las tensiones sobre el nuevo ordenamiento de la Europa devastada, sobre todo respecto a Polonia, a la cual Stalin había decidido mantener bajo su control.



Polonia después de la Segunda Guerra Mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial no hubo un equivalente de Versalles. Las nuevas fronteras surgieron de las posiciones logradas en los campos de batalla. El rápido pasaje de la Gran Alianza a la Guerra Fría impidió que se concretasen los acuerdos de paz. No hubo cambios territoriales significativos con respecto a 1937, excepto las nuevas fronteras entre la URSS y Polonia. A raíz de la decisión de Stalin de anexar el este polaco a su país, la nueva Polonia se desplazó hacia el oeste y el territorio alemán se redujo.

Los Tratados de París (1947) normalizaron la situación de los aliados de la Alemania nazi: Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia. La Guerra Fría impidió la elaboración de un tratado de paz para Alemania. Austria, pese a ser considerada víctima del nazismo, quedó dividida en zonas controladas por la Comisión aliada hasta la firma del Tratado de Viena en 1955. Aunque los cambios de fronteras fueron menores que en la primera posguerra, hubo millones de desplazados: prisioneros de guerra, detenidos de los campos de concentración, trabajadores forzados, refugiados de distinta procedencia –entre ellos, alemanes expulsados de los países que habían colaborado con los nazis– y familias sin vivienda.

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total que propagó la muerte y la destrucción mucho más allá del campo de batalla. Las poblaciones indefensas sufrieron bombardeos sistemáticos, operaciones militares y represiones masivas. Polonia, Rusia Occidental y Asia Oriental padecieron las peores masacres de la historia: asesinatos en masa, campos de concentración nazis, bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.

Los hombres y mujeres que vivieron esta tragedia creyeron necesario y posible que jamás volviera a ocurrir algo semejante. Así, el mundo de posguerra quedó envuelto en un clima de ideas y de sentimientos favorables a la reformulación del contrato social en un sentido más democrático e igualitario, en el que la política asumiría el puesto de mando frente a la imprevisible, y por momentos destructiva, dinámica del mercado.

La Guerra Fría (1947-1953)

Los signos del distanciamiento entre los aliados se hicieron evidentes a partir de 1946. Por una parte, el afianzamiento de los soviéticos en los países de Europa del Este hacía temer la expansión del comunismo. Por otra, las trabas impuestas a la Unión Soviética en cuanto a cobrarse las reparaciones de guerra con bienes alemanes alentaron los temores de Stalin. El ambiente enrarecido que había empezado a respirarse en Potsdam afloró claramente en una serie de declaraciones de tono cada vez más inamistoso. Una de las más resonantes fue el discurso pronunciado en junio de 1946 por el ministro inglés Churchill en los Estados Unidos: entre los países de Europa Occidental y los ocupados por el Ejército Rojo se había levantado un *telón de acero*.

El principal tema que enfrentó a los ex aliados fue Alemania. El gobierno soviético pretendía tomar de este país los recursos que ayudasen a la reconstrucción de la URSS, devastada por la guerra. Los Estados Unidos, en cambio, mostraban un creciente interés por la recuperación alemana, nación a la que consideraban una muralla de contención contra el avance del comunismo. Por otro lado, en las cruentas guerras civiles de Grecia y China, los comunistas locales debieron enfrentar fuerzas apoyadas por las democracias occidentales.

Frente a estos conflictos, Stalin optó por mantenerse al margen; no contaba con recursos y prefería no irritar a las potencias occidentales alentando revoluciones. En China, intentó convencer al líder comunista Mao Tse-tung para que llegara a un acuerdo con el Kuomintang, el partido cuyo triunfo anhelaban los Estados Unidos. La guerrilla comunista que intentaba derrocar en Grecia al gobierno monárquico sostenido por Gran Bretaña sólo fue respaldada por el gobierno yugoslavo de Tito.

La antigua alianza se quebró definitivamente en 1947. Los Estados Unidos se comprometieron con la reconstrucción europea y asumieron el papel de gendarmes del orden capitalista. En Europa Occidental, la escasez de insumos básicos y el invierno de 1946, extremadamente crudo, fomentaron el descontento social. En Francia e Italia, los comunistas captaron un importante caudal de votos en las primeras elecciones de posguerra y se sumaron a los gobiernos de coalición. Los soviéticos, por su parte, controlaban los resortes básicos del poder en los países europeos del este.

La debilidad de Gran Bretaña condujo al gobierno de Truman a ejercer un papel activo sobre el rumbo de Grecia y Turquía, países que integraban la esfera de influencia británica. A mediados de 1947, el secretario de estado George Marshall anunció el Programa de Recuperación Europeo. El Plan Marshall ofrecía ayuda económica a todos los países europeos que aceptaran los mecanismos de control e integración dispuestos por los Estados Unidos. La URSS rechazó el ofrecimiento y obligó a los gobiernos de Europa del Este a sumarse a su decisión, alegando que la ayuda servía a los intereses del imperialismo estadounidense. El programa tenía un triple objetivo: impedir la insolvencia de los países europeos, que hubiera tenido consecuencias negativas para la economía norteamericana; mejorar las condiciones sociales para evitar la expansión del comunismo, y afianzar los regímenes democráticos dispuestos a apoyar la política estadounidense en el escenario internacional.

La liquidación del gobierno de coalición de Praga en febrero de 1948, promovida por los comunistas, precipitó la puesta en marcha del Plan Marshall. Dos meses después Truman firmó el Programa de Recuperación Europea, se creó una Administración de Cooperación Económica para manejar los fondos, y se constituyó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) para coordinar la distribución de la ayuda norteamericana. El ingreso de dólares fue acompañado por una intensa campaña de propaganda, en la que documentales, noticieros y panfletos mostraban el “American way of life” como el destino promisorio de las democracias capitalistas europeas.

Mientras Washington imponía su liderazgo involucrándose en la reconstrucción de Europa, Moscú sometía a los partidos comunistas europeos a un estricto control. En septiembre de 1947 reunió a sus dirigentes en Silesia y anunció la creación de la Oficina de Información

de los Partidos Comunistas y Obreros (Kominform). Andréi Zhdánov, estrecho colaborador de Stalin, reconoció la división del mundo en dos bloques y convocó a las fuerzas del “campo antifascista y democrático� a defender el centro de la revolución comunista victoriosa.

En Alemania Occidental las tres potencias ocupantes –Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos– empezaron a colaborar entre sí: las regiones controladas militarmente fueron unificadas y se concedió una creciente autonomía a las autoridades locales. Stalin cerró las vías de comunicación entre Berlín y el exterior. La capital, en la zona soviética, había quedado dividida en cuatro sectores y las potencias occidentales no estaban dispuestas a abandonar esa posición estratégica. A partir del 25 de junio de 1948 se armó un puente aéreo que garantizó el abastecimiento de la población de Berlín occidental. Moscú levantó el bloqueo sin haber modificado la situación.

Este conflicto debilitó las resistencias a la política de los Estados Unidos: la de los alemanes occidentales, que no deseaban profundizar la separación con la zona bajo control soviético; la de los franceses, que temían la reconstrucción política y económica de Alemania; y las objeciones de los aislacionistas estadounidenses a involucrarse en la política europea. En mayo de 1949 se decretó oficialmente la fundación de la República Federal Alemana, que abarcó todas las zonas ocupadas por las potencias occidentales, incluido Berlín Occidental. En octubre de ese mismo año se anunció la creación de la República Democrática Alemana, integrada por los cinco estados ocupados por las tropas soviéticas. La división perduró hasta 1990, cuando la desintegración del bloque soviético posibilitó el reconocimiento de la plena soberanía de la Alemania reunificada.

El proceso de división en dos bloques se plasmó también en el plano militar. En abril de 1949 fue aprobado el Tratado del Atlántico Norte. En 1955, a manera de réplica de la integración de la República Federal Alemana en la OTAN, los gobiernos de las democracias populares, excepto Yugoslavia, firmaron el Pacto de Varsovia, que establecía la conducción del comando militar soviético sobre todas las fuerzas armadas.

Con la derrota de Japón, Washington asumió un papel dominante en Oriente Lejano. Pero el triunfo de Mao sobre las fuerzas nacionalistas chinas en 1949 y la guerra de Corea alteraron radicalmente el escenario asiático. A principios de 1950 China y la URSS firmaron un tratado de alianza y ayuda mutua por treinta años. Los comunistas coreanos pretendieron restablecer la unidad de la ex colonia japonesa, que, con la derrota de Tokio, había sido ocupada por la URSS al norte y por los Estados Unidos al sur. Los soviéticos dieron paso a un autoritario régimen comunista y los norteamericanos, a una intransigente dictadura militar. Cuando el ejército norcoreano avanzó hacia el sur, Washington –avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU– encabezó la coalición armada que impidió la ocupación de Corea del Sur. Luego de tres años de guerra se firmó un armisticio que obligaba a los contendientes a respetar la frontera existente.

La proximidad geográfica de China, el conflicto de Corea y la presencia de grupos armados comunistas en Vietnam, Laos y Filipinas convirtieron el Sudeste asiático en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría. En consecuencia, la administración Truman extendió a Asia la política de contención definida para Europa. Dio su apoyo militar y económico al gobierno nacionalista chino instalado en Taiwán, a las dictaduras de Corea del Sur y el Sudeste asiático, y favoreció decididamente el crecimiento económico de Japón.

Todos estos estados sufrieron la penetración de las estructuras militares estadounidenses y quedaron incapacitados para instrumentar una política exterior independiente. Washington se especializó en proporcionar protección militar, mientras los gobiernos asiáticos se concentraban en la recuperación de sus economías como valla frente al comunismo y como base de legitimación de los nuevos estados nacionales. En este contexto, los Estados Unidos apoyaron a las fuerzas francesas enfrentadas con los movimientos de liberación nacional en Indochina.

La crisis de los imperios coloniales

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas aún retenían sus inmensos imperios coloniales sin que se previera que esta situación fuese a cambiar. Sin embargo, en pocos años, la mayor parte de las colonias logró su liberación. Desde el retorno a la paz hasta la conferencia de Bandung (1955), la descolonización tuvo su epicentro en Asia y en el mundo árabe, en este último caso entrelazada con el conflicto desatado por la creación del estado de Israel. Desde fines de los años cincuenta hasta 1975 el proceso descolonizador se concentró en África Subsahariana. La última etapa se inició con el derrumbe del imperio portugués en 1975: las guerras de liberación de las colonias portuguesas de Angola y Mozambique se combinaron con las luchas contra el régimen del *apartheid* sudafricano, que llegó a su fin con la elección en 1994 del líder del Congreso Nacional Africano Nelson Mandela como presidente de la República de Sudáfrica.

La descolonización fue, junto con la Revolución rusa, el proceso más significativo del siglo XX y revolucionó el escenario internacional. En 1945 la ONU estaba integrada por cincuenta y un países, y en 1975, por 144. El debilitamiento de los estados europeos y el anticolonialismo de los Estados Unidos y la Unión Soviética favorecieron la caída de los imperios coloniales. Los Estados Unidos se oponían al orden colonial por su historia y por su interés en el comercio libre. No obstante, frente a la posibilidad de que la liberación nacional favoreciese a los comunistas, como en el caso de Indochina, apoyaron los intereses metropolitanos. La Unión Soviética, aunque creía que los movimientos anticolonialistas debilitaban al capitalismo, no contribuyó decididamente a fortalecerlos, y hasta los años setenta su política exterior evitó cualquier clase de acción que cuestionara las áreas de influencia surgidas de la Segunda Guerra Mundial.

Bandung

Mientras los imperios se resquebrajaban, los nuevos países buscaron fortalecer su posición en el escenario internacional a través de la acción mancomunada. El encuentro entre países del Sudeste asiático, celebrado en 1954 en Sri Lanka, apoyó la independencia de Indochina y la incorporación del gobierno chino encabezado por Mao al Consejo de Seguridad de la ONU y avaló la creación del grupo de Colombo –integrado por la India, Indonesia, Pakistán, Birmania y Sri Lanka–, que organizó una conferencia afroasiática. En abril de 1955 se reunieron en Bandung representantes de veintinueve países, en su mayoría asiáticos, seguidos por árabes y una minoría de africanos. Junto al anfitrión indonesio Sukarno estuvieron los presidentes de la India y Egipto, Jawaharlal Nehru y Gamal A. Nasser, y el primer ministro chino Chou en Lai. Este último reconoció que "en los países asiáticos y africanos se siguen ideologías y sistemas sociales diferentes, lo cual, sin embargo, no debe obstaculizar nuestra búsqueda de puntos comunes ni nuestra unidad. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en Asia y África surgieron muchos países independientes, unos comunistas y otros nacionalistas. [...] Tanto los países dirigidos por comunistas como los dirigidos por nacionalistas se establecieron tras liberarse del colonialismo y siguen luchando porque su independencia sea total. ¿Por qué no podemos conocernos mejor, respetarnos más y ofrecernos, unos a otros, solidaridad y apoyo?".

El cónclave reunido en Bandung aprobó los llamados "Diez Principios de Bandung", que servirían de base a la

organización del Movimiento de Países No Alineados.

Los principios de Bandung pueden consultarse en: www.marxists.org.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública se mostró más anticolonial que en la primera posguerra, contribuyendo así al desgaste de los imperios. Pero la acelerada descolonización fue, ante todo, el resultado de las profundas transformaciones que venían alterando la fisonomía de las colonias. Con el surgimiento de nuevos países, otras colonias se sintieron más seguras y respaldadas para liberarse del yugo metropolitano. El movimiento de liberación indonesio, por ejemplo, recibió el apoyo de la India y Australia en los foros internacionales para obtener de Holanda el reconocimiento de su independencia.

Aunque con diferentes modalidades, ritmos e intensidades, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, en las sociedades coloniales fueron creándose condiciones que erosionaron el vínculo de dependencia, a la vez que emergían actores que exigieron su liquidación.

Este proceso incluyó la presencia de nuevas clases y sectores formados al calor de los cambios económicos, pasando por las experiencias de autogobierno local y el desarrollo de la educación, hasta la constitución de movimientos de liberación apoyados por los distintos grupos de la sociedad. Cada trayectoria en pos de la independencia nacional tuvo su fisonomía singular.

Las diferencias remiten a tres factores: las experiencias previas a la imposición del dominio colonial; las conductas de las distintas metrópolis durante su administración y frente a las demandas de independencia, y, por último, la composición, las acciones y las ideas de los movimientos anticolonialistas.

En relación con el primer punto, la mayor parte de las sociedades asiáticas y musulmanas contaba con un pasado político, cultural e institucional que podía reivindicar como propio, y reinventar para forjar la nueva identidad nacional y sostener la construcción del estado nacional. En África esta tarea fue mucho más compleja y difícil de concretar debido a la heterogeneidad de tradiciones de cada colonia.

Respecto al segundo factor, ante el avance de los movimientos independentistas los principales centros imperiales asumieron posiciones disímiles: Francia opuso resistencia y Gran Bretaña –favorecida por la Commonwealth en su relación con las colonias– adoptó una postura más flexible. Las dos guerras más cruentas fueron la de Argelia –que repercutió sobre la política interna francesa provocando la caída de la IV República– y la de Indochina. La guerra de Vietnam acabó convirtiéndose, en los años sesenta, en un conflicto de la Guerra Fría con severas consecuencias negativas para los Estados Unidos, tanto en el orden interno como en su posición internacional.

Por último, los movimientos de liberación surgieron en sociedades que estaban lejos de ser homogéneas. En muchos casos, frente a los reclamos de independencia, ciertos sectores de las elites renegociaron el vínculo con la metrópoli para preservar sus privilegios, por ejemplo, las monarquías árabes del norte de África y Oriente Medio. Los más interesados en la constitución de estados independientes eran quienes contaban con una educación que los habilitaba para reemplazar a los funcionarios metropolitanos en el gobierno, los miembros de una burguesía incipiente deseosos de romper con la subordinación económica, y los trabajadores nativos discriminados por los empresarios europeos. Pero no siempre constituyeron un frente unido. Existieron propuestas y demandas encontradas en torno a cuestiones tales como la organización institucional del nuevo estado, la forma de encarar la fuerte heterogeneidad cultural de las poblaciones, y el rumbo económico que adoptaría el nuevo país.

Los desafíos eran inmensos y gran parte de las ex colonias quedaron atrapadas en el círculo vicioso de unas economías muy dependientes de los avatares del mercado mundial, unos estados frágiles y al mismo

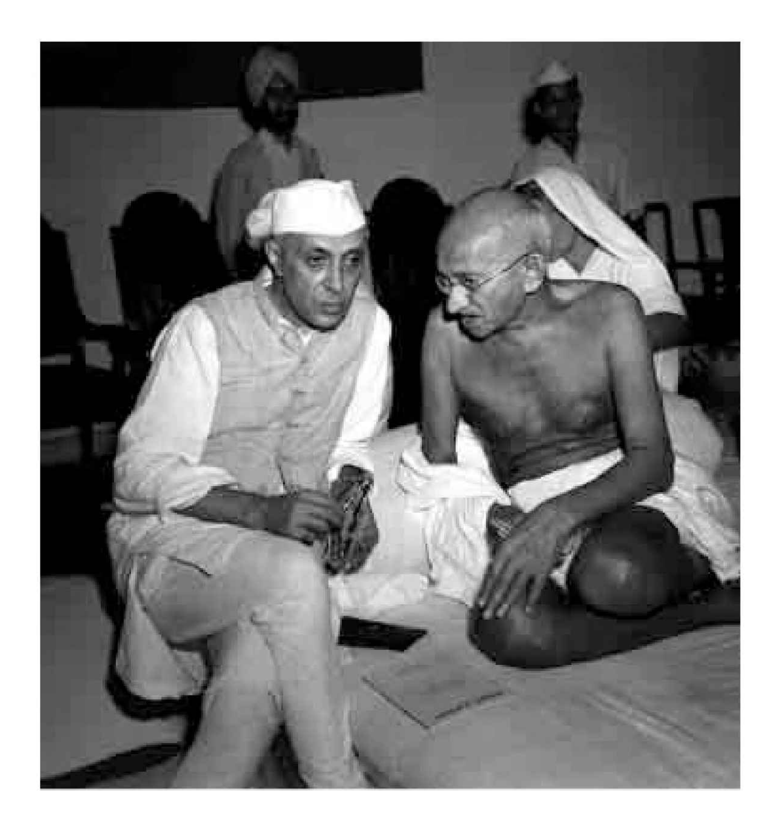
tiempo autoritarios, y la trágica politización de las diferencias culturales y religiosas.

La independencia de Asia

En ese inmenso continente que abarca desde Turquía –aunque la perspectiva contemporánea suele dejar fuera a este país, candidato a la Unión Europea– hasta Japón, suelen distinguirse cuatro regiones que albergan más del 60% de la población mundial: Asia Oriental, Asia Central, Asia Meridional y el Sudeste asiático. Sólo las dos últimas fueron repartidas como colonias entre los europeos a partir de la expansión de España y Portugal a fines del siglo XV. En Asia Oriental, el impacto de Occidente contribuyó a la desintegración del imperio chino, seguida de la creación de la frágil República. En el caso de Japón, lo indujo a promover un crecimiento económico acelerado que contribuiría a su predominio sobre la región. Asia Central fue incorporada por los zares al imperio ruso y formó parte de la URSS hasta 1991. Asia Meridional –integrada por la península indostánica: Ceilán, Maldivas, Nepal y Bután– fue ocupada o controlada por Gran Bretaña, mientras que el Sudeste asiático quedó repartido entre los británicos (Birmania, Brunéi, Malasia y Singapur), Francia (Indochina), Holanda (Indonesia), los Estados Unidos (Filipinas) y Portugal (Timor Oriental). Ni Afganistán ni Siam (Tailandia) fueron reducidas a la condición colonial.

El avanzado desarrollo del movimiento anticolonialista en la India y la expansión de Japón durante la Segunda Guerra Mundial ejercieron una indudable influencia sobre la rápida y extendida caída de estos imperios. A lo largo de este conflicto, el imperio nipón ocupó Birmania, Indonesia y Filipinas, venció a los ingleses en Singapur y forzó al régimen de Vichy a permitirle instalarse en Indochina. Aunque la consigna japonesa de "Asia para los asiáticos" no fue acompañada por la construcción de un nuevo orden, el repliegue de las potencias europeas y el estímulo de Tokio a algunas fuerzas nacionalistas debilitaron el vínculo colonial.

En la India, durante la guerra, el Partido del Congreso exigió en vano la declaración de la independencia. Con la entrada de Japón en la contienda y el temor a un levantamiento, Londres encarceló a sus dirigentes. No obstante, sólo un grupo reducido encabezado por Chandra Bose colaboró con los japoneses para derrotar a los británicos.



Nehru y Gandhi, durante la reunión del partido que en agosto de 1942 resolvió no colaborar con el esfuerzo de guerra británico hasta que fuese abolido el régimen colonial.

Al concluir el conflicto, el gobierno laborista se mostró dispuesto a

retirarse de la península indostánica y las reivindicaciones mutuamente opuestas del Partido del Congreso y la Liga Musulmana pasaron a un primer plano. El Partido del Congreso proponía un estado nacional que integrara las diferentes etnias y grupos religiosos, pero la Liga no aceptaba que los musulmanes quedaran reducidos a una minoría política y religiosa dentro un país unitario, y reivindicaba la creación de Pakistán. Los violentos enfrentamientos entre musulmanes e hindúes condujeron al borde de la guerra civil. Gran Bretaña aceleró su partida y acordó con los dirigentes hindúes las fronteras entre los dos nuevos estados. Pakistán incluyó dos zonas diferentes, separadas por dos mil kilómetros: Pakistán Occidental y Bengala Oriental. En 1971 Bengala Oriental se separó para erigirse como un nuevo estado nacional: Bangladesh.

Con el trazado de las nuevas fronteras, las provincias de Bengala y Punyab quedaron divididas y no se tuvo en cuenta el reclamo de los sijes por un estado independiente. Cuando las tropas británicas se retiraron en 1947 hubo gravísimos estallidos de violencia, sobre todo en las provincias divididas. La ola de matanzas provocó emigraciones masivas de musulmanes hacia Pakistán, y de hindúes y sijes hacia la India. Gandhi marchó a Punyab para detener los enfrentamientos, y allí fue asesinado por un fanático hindú en enero de 1948.

En el caso de los principados –más de quinientos, con el 45% del territorio y el 24% de la población–, que durante la era colonial habían gozado de una semiautonomía, se confirió a sus gobernantes la decisión de incorporarse a la India o a Pakistán antes del 15 de agosto de 1947. Los reclamos encontrados de Islamabad y Nueva Delhi en torno a Cachemira, junto con las ambigüedades del marajá, desembocaron en el conflicto armado entre los dos países. Tras la suspensión de las hostilidades, impuesta por las Naciones Unidas a principios de 1949, Cachemira quedó escindida en dos: Pakistán incorporó Azad Cachemira, y las dos terceras partes restantes –el actual estado de Jammu y Cachemira– quedaron bajo el control de la India. Aún hoy está pendiente la realización de un referéndum bajo supervisión internacional para que los habitantes de la región decidan a qué estado desean pertenecer. Este conflicto alentó una costosa y peligrosa carrera armamentista entre Pakistán y la India, y la "limpieza étnica" fue uno de los recursos utilizados y sufridos por ambas comunidades. Cabe recordar que la zona sigue siendo una de las más militarizadas del mundo.

La independencia de la India repercutió de inmediato sobre el resto del imperio británico. En 1948 Londres se retiró de Ceilán (Sri Lanka) y Birmania (Myanmar). En Myanmar los grupos étnicos de las áreas periféricas se organizaron militarmente para exigir el reconocimiento de sus especificidades culturales y religiosas mediante un sistema federal. La independencia de Sri Lanka trajo aparejado el sometimiento de los tamiles a la mayoría cingalesa, a cargo del gobierno. La independencia de Malaya (Malasia), una colonia con gran importancia económica y estratégica para Gran Bretaña, se concretó en 1957. El archipiélago de Maldivas obtuvo su independencia en 1965 y el pequeño sultanato de Brunéi en 1984. El sultanato de Bután y el reino de Nepal nunca fueron colonias formales, sino zonas "protegidas" por Londres para garantizar su dominación sobre la India.

Los Estados Unidos reconocieron la independencia de Filipinas en 1946. Los comunistas, que tuvieron un papel protagónico en la resistencia contra la ocupación japonesa entre 1942 y 1944, continuaron luchando para derrocar el régimen prooccidental.

La dominación francesa sobre Indochina –Vietnam, Laos y Camboya– quedó muy debilitada tras la ocupación de París por parte de los nazis en 1940, cuando Francia se vio forzada a aceptar que Japón instalara allí sus bases militares. Con la capitulación japonesa, tanto Vietnam como Laos y Camboya declararon su independencia, pero Francia envió sus tropas en 1946 para imponer un régimen más flexible sin perder el control de los recursos básicos de poder. Mientras en Hanói el Frente para la Liberación de Vietnam (Viet Minh) encabezado por Ho Chi Minh iniciaba una guerra anticolonial, el rey de Camboya maniobraba para ganar mayor autonomía de Francia, y en Laos el

Pathet Lao (la Tierra de Laos), de orientación comunista, se unía a la rebelión del Viet Minh.

París enfrentó a la guerrilla comunista como lo habían hecho los británicos en Malasia, con la diferencia de que parte de la población vietnamita apoyaba a los combatientes. Con la victoria de Mao en 1949, el conflicto entró plenamente en el marco de la Guerra Fría. Apoyado por los chinos, el Viet Minh se convirtió en un ejército moderno. Pese a la ayuda financiera norteamericana, las tropas francesas fueron derrotadas en Dien Bien Phu. Forzada a la negociación, en 1954 Francia suscribió los Acuerdos de Ginebra, en los que reconoció la independencia de Laos y Camboya. En cambio, Vietnam quedó partido en dos: el norte bajo el control del Viet Minh y el sur con un gobierno apoyado por los Estados Unidos. En dos años debían celebrarse elecciones libres para reunificar el país, pero nunca fueron convocadas.

En las Indias Orientales holandesas (Java, Sumatra, Celebes, Molucas y parte de Borneo), los nacionalistas ganaron terreno en la década de 1920 mediante las campañas de no cooperación y la movilización de las masas. Cuando los nazis ocuparon Holanda, los japoneses se instalaron en el archipiélago y liberaron a los dirigentes nacionalistas encarcelados, entre ellos a Achmed Sukarno, el primer gobernante de la Indonesia independiente. Con la derrota de Japón, los holandeses intentaron recuperar la colonia pero debieron enfrentar la resistencia interna y la fuerte presión de los países ya descolonizados. En 1949 Holanda reconoció la independencia parcial de Indonesia, que alcanzó la soberanía absoluta en 1954.

Los grupos islámicos se opusieron a la decisión de Sukarno, admirador del líder turco Atartük, de imponer criterios laicos al nuevo estado nacional. Los partidarios más radicales de la creación de un estado islámico organizaron guerrillas en Java a partir de 1949, que no fueron reducidas por el ejército sino hasta 1962.

El mundo árabe islámico

Como religión y sistema de vida, el islam tiene una relación particularmente estrecha con los árabes, pero se difundió por varias zonas geográficas y entre pueblos muy diferentes. El núcleo árabe islámico está integrado por los países del llamado Oriente Medio –Arabia Saudita, Yemen del Norte y del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria, Jordania, Líbano, Kuwait, Omán, Qatar y los territorios palestinos; en esta zona se encuentra también el estado de Israel– y los de África: Egipto, Sudán, Túnez, Argelia, Marruecos y Libia en el norte; Somalia y Yibuti en el este, y Mauritania al oeste.

La mayor parte de los países islámicos no árabes se encuentra en Asia: Irán y Afganistán –como parte o prolongación de Oriente Medio–; Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Malasia y Brunéi –en el sur y el sudeste–; Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán –en Asia Central; estos países formaron parte de la URSS hasta su desintegración en 1991–.

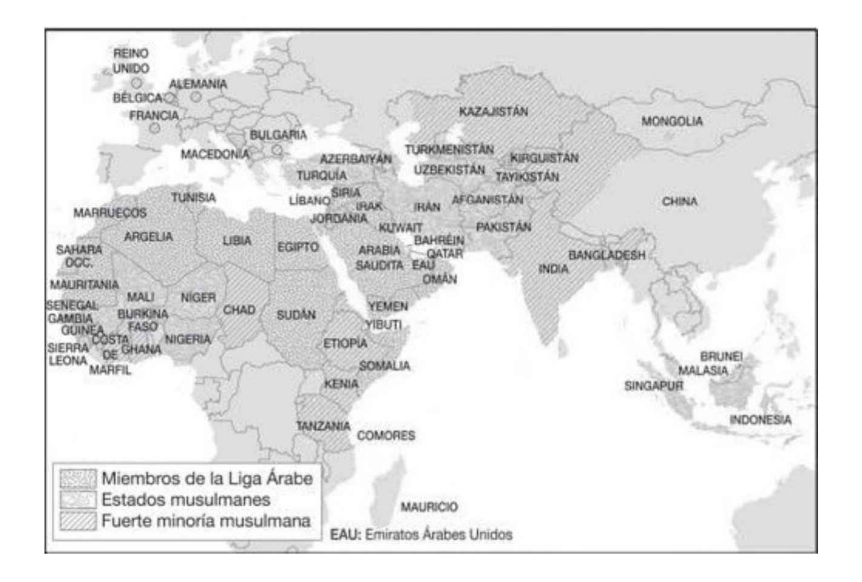
Después de la Primera Guerra Mundial, Oriente Medio –a través del sistema de mandatos– y el norte de África –en forma de colonias o protectorados– quedaron bajo el control de Gran Bretaña y Francia, con la sola excepción de Libia, colonia italiana.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial París intentó mantener su dominación sobre el norte de África, donde existían diferentes situaciones. Túnez y Marruecos tenían en común el estatuto de protectorados, lo que implicaba la existencia de una autoridad nacional propia aunque privada del efectivo ejercicio de la soberanía. En ambos países la política francesa estuvo marcada por avances y retrocesos destinados a retener el control de los resortes de poder básicos y hubo momentos de violencia y crisis institucionales. Finalmente, en 1956, el gobierno francés –debilitado por su fracaso en Indochina y ante el surgimiento de un movimiento nacionalista radical en Argelia– aceptó la independencia. Marruecos mantuvo la monarquía y en Túnez se proclamó la República.

En Argelia, incorporada a Francia como uno de sus departamentos, la

trágica guerra en pos de la independencia fue resultado de la presencia de una fuerte comunidad europea decidida a mantener a este país como parte del territorio francés. Las tímidas demandas iniciales de los argelinos fueron reprimidas y en 1954 el grupo nacionalista encabezado por Ahmed Ben Bella, con la ayuda de Egipto, desencadenó una rebelión poco exitosa. No obstante, tres años después estaba vigente como Frente de Liberación Nacional. En 1957 tuvo lugar la llamada Batalla de Argel: los ataques terroristas del FLN contra objetivos civiles y militares franceses fueron contestados con la tortura generalizada y la ejecución sumaria de centenares de argelinos. Argelia se convirtió cada vez más en un conflicto con repercusión internacional. Muchos países árabes manifestaron su apoyo al FLN, y "los reagrupamientos" de los pueblos rurales por los militares franceses, cuyo objetivo era restar apoyos al movimiento nacionalista, provocaron la huida de masas de argelinos hacia los países vecinos.

El fracaso en arribar a una solución acabó hundiendo a la Cuarta República y el general De Gaulle volvió al gobierno como presidente, dotado de amplias facultades. El héroe de la Segunda Guerra Mundial utilizó su prestigio a favor de la negociación. Parte de los oficiales del ejército francés crearon la Organización del Ejército Secreto (Organization de lArmée Secrète [OAS]) para lanzar una feroz campaña terrorista que impidiera las conversaciones de paz. El gobierno no retrocedió y en marzo de 1962 firmó el acuerdo de Evian con los nacionalistas argelinos, que reconoció la creación del nuevo estado nacional. Su aprobación, sometida a referéndum, salió victoriosa en Francia con más del 90% de los votos y en Argelia consiguió casi el 100%.



El mundo musulmán.

En los mandatos de Oriente Medio, París se retiró de Siria y Líbano en 1946, después de fuertes enfrentamientos en Damasco y presionada por Gran Bretaña. Los sirios consideraban que el Líbano era un "estado artificial" y siempre lo habían reclamado como parte de la Gran Siria. Las diferentes comunidades étnicas y religiosas asentadas allí habían asumido posiciones muy dispares frente a la dominación francesa. Los cristianos maronitas, que tenían un papel destacado en el comercio entre Europa y el Levante, recibieron con beneplácito la protección francesa. La mayor parte de los musulmanes, que componían la clase obrera y el campesinado, se sentían próximos a Siria. Antes de la independencia se concertó "un pacto nacional" que organizó el sistema político sobre la base del peso demográfico de las distintas confesiones. Los cargos gubernativos y administrativos fueron distribuidos de acuerdo con los cómputos del censo de 1932, momento en que predominaban los cristianos (maronitas, griegos ortodoxos, griegos católicos y otras confesiones) sobre los musulmanes (sunitas, chiitas y drusos). A esta lista de identidades se añadieron los contingentes de palestinos que llegaron en sucesivas olas desde la guerra árabe-israelí en 1948, y que fueron instalados en campos de refugiados.

La conducta de Londres hacia sus posesiones fue más flexible: desde el período de entreguerras les reconoció crecientes grados de autonomía, preservando los resortes básicos del poder mediante tratados "amistosos" con las oligarquías gobernantes en Egipto, Irak y Transjordania. En el mandato de Palestina la situación fue muy diferente. El ingreso de nuevos grupos de judíos en la década de 1930 agravó los enfrentamientos entre estos y los palestinos. Ante el deterioro de la situación en la segunda posguerra, que incluyó ataques terroristas de las organizaciones armadas judías contra los británicos, Londres dejó el problema en manos de la ONU y anunció el fin del mandato hacia julio de 1948.

En noviembre de 1947 la ONU aprobó la partición del territorio y la creación de dos estados, uno árabe-palestino y otro judío. Los gobiernos árabes repudiaron la división alegando que avasallaba la opinión de la mayoría de la población local. Cuando los dirigentes judíos aprobaron la creación del estado de Israel en mayo de 1948, la Liga Árabe (Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Yemen, Siria y Libia) atacó militarmente y fue derrotada.

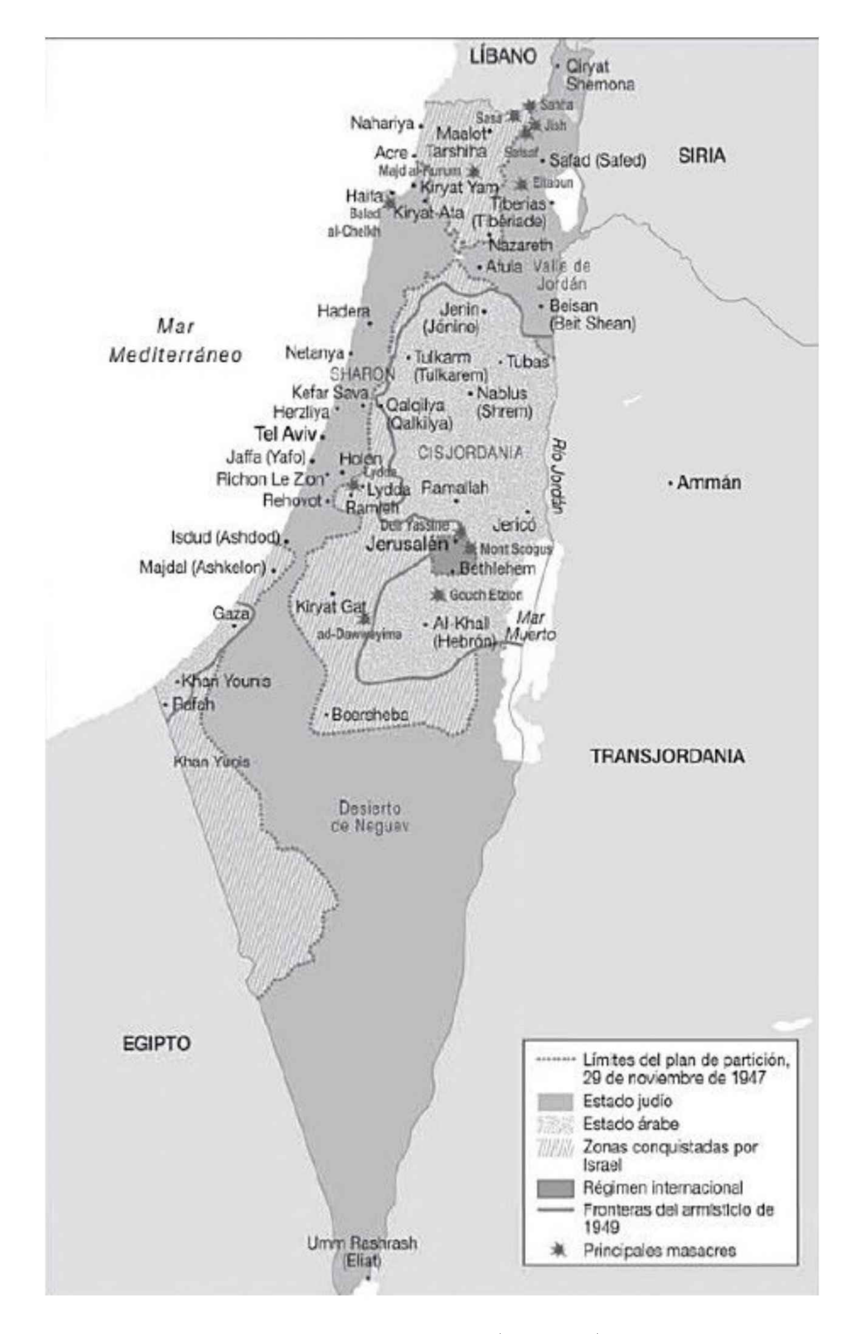
El estado judío no sólo resistió el ataque sino que desalojó violentamente a los palestinos y arrasó sus pueblos, episodio que se conoce como "la gran tragedia" (Nakba) entre los palestinos. En la década de 1980, bajo el impacto de las matanzas en los campos de refugiados palestinos en el Líbano, apoyadas por el ejército israelí, y gracias al acceso de nuevas fuentes militares, historiadores revisionistas israelíes –Ilan Pappé y Benny Morris, entre otros– confirmaron la Nakba.

La Nakba en 1948



En enero de 2004, en una entrevista publicada en el diario israelí *Haaretz*, el historiador Morris afirmó:
“Hay casos como el de la aldea de Dawayima, en la que una columna entró disparando con todas sus armas y mató a todo lo que se movía. [...] No puede ser casualidad. Es un modelo. [...] Es un hecho que nadie fue castigado por estos actos de asesinato. Ben Gurión silenció el asunto. Encubrió a los oficiales que cometieron las masacres. [...]
No hay justificación para actos de masacre. Son crímenes de guerra. Pero bajo ciertas condiciones, la expulsión no es un crimen de guerra. No pienso que las expulsiones de 1948 hayan sido crímenes de guerra. Uno no puede hacer una tortilla sin romper huevos. Hay que ensuciarse las manos”.

Entrevista incluida en *New Left Review*, nº 26, mayo-junio de 2004.



La partición de Palestina (1947-1949).

Casi dos tercios de los palestinos abandonaron sus hogares y se convirtieron en refugiados en Cisjordania, la franja de Gaza y los países árabes vecinos. Los gobiernos británicos, norteamericano e israelí supusieron que serían absorbidos por las sociedades de los respectivos países árabes. La ONU les reconoció en 1948 su derecho al retorno y estableció la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Más de la mitad de los territorios reservados a los árabes fue anexada al estado de Israel. De la proyectada Palestina árabe sólo quedaron Gaza, bajo la administración de Egipto, y la Cisjordania anexada por Transjordania, que pasó a ser el reino de Jordania. La ciudad de Jerusalén –que según la resolución de la ONU quedaría sujeta a un régimen internacional bajo su administración– fue dividida en dos sectores: la ciudad nueva, dependiente de Israel, y la ciudad vieja, bajo la autoridad de Jordania.

Aunque en la opinión pública árabe prevaleció la idea de que los Estados Unidos y Gran Bretaña habían favorecido a los sionistas, los intereses y las posiciones de ambos países en la región no se vieron afectados por el conflicto árabe-israelí. La renegociación de los tratados firmados por Londres en la entreguerra con Irak y Jordania se llevó a cabo sin dificultades. Irak se convirtió en el principal protagonista árabe de la alianza occidental al ingresar en 1955 al pacto de Bagdad. En Arabia Saudita, único país árabe que no cayó bajo la dominación europea, la considerable inversión de capital norteamericano en los campos petrolíferos consolidó la alianza entre la monarquía saudita y los Estados Unidos en detrimento de la influencia británica.

La derrota en Palestina afectó en primera instancia a algunos sectores de la oligarquía árabe gobernante. En Egipto alentó el golpe de los militares contra la monarquía en 1952, y en Jordania el rey fue asesinado por propiciar el diálogo con Israel.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la monarquía egipcia y Gran Bretaña renegociaron el tratado de 1936, debiendo enfrentar dos obstáculos: el futuro de Sudán y la presencia británica en el canal de Suez. Mientras Egipto reclamaba Sudán como territorio propio, Londres propiciaba la creación de un nuevo país. Respecto al canal, los británicos pretendían mantener sus tropas en esa vía clave para el abastecimiento de petróleo. Los hechos de violencia entre los ocupantes y los nacionalistas egipcios impulsaron a los jóvenes oficiales, procedentes de la pequeña burguesía, a tomar el poder en julio de 1952. Finalmente Londres aceptó evacuar la base de Suez y en junio de 1956 se retiraron los últimos soldados británicos. Ese mismo año, Sudán alcanzó su independencia.

En el caso de Libia, la derrota del fascismo posibilitó su temprana independencia. En 1951 el jefe de la orden sanusi asumió como el rey Idris, cuyo régimen se alineó con Occidente permitiendo la instalación de bases militares británicas y estadounidenses.

De la coexistencia a la distensión (1953-1975)

La coexistencia significó cierta disposición hacia el diálogo por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, aunque en los primeros años no se avanzó en el tema del desarme. Esta etapa aparece asociada a las figuras del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy y del primer ministro soviético Nikita Kruschev.

La muerte de Stalin, en marzo de 1953, posibilitó el "deshielo". El título de la novela del escritor ruso Ilya Ehrenburg dio nombre a un período en que proliferaron las decisiones y los gestos conciliadores: el armisticio en la guerra de Corea en 1953, los acuerdos de Ginebra en torno a Indochina al año siguiente, la visita de Kruschev a Tito en 1955 y la evacuación de las tropas de ocupación en Austria. La competencia subsistió en la carrera espacial, la fabricación de armas cada vez más sofisticadas y la preservación del equilibrio entre las fuerzas militares. Cuando en 1954 la República Federal de Alemania ingresó en la OTAN, la Unión Soviética promovió el Pacto de Varsovia.

El avance del deshielo estuvo cargado de ambigüedades y momentos

de tensión. Desde mediados de los años cincuenta hasta comienzos de los sesenta hubo tres crisis cruciales: una en Europa –la construcción del muro de Berlín en 1961– y dos en el Tercer Mundo: la guerra de Suez en 1956 y la instalación de misiles soviéticos en Cuba en 1962.

La partición de Berlín había convertido el sector occidental en zona de avanzada del mundo capitalista en medio de la República Democrática Alemana. El milagro económico de la República Federal provocó desplazamientos de los alemanes orientales. Para impedir la emigración, el gobierno comunista inició en agosto de 1961 la construcción de una valla de cemento de cinco metros de alto que se extendió a lo largo de ciento veinte kilómetros, coronada con alambres de púas y vigilada desde torretas. El muro obstaculizó, pero no impidió, los intentos de los alemanes del este de llegar a Berlín Occidental. Muchos murieron antes de cruzarlo.

La guerra de Suez confirmó el declive de las potencias europeas y favoreció la influencia soviética en Oriente Medio. La instalación de misiles soviéticos en Cuba marcó el punto más alto de la fricción entre Washington y Moscú. No bien fueron detectados, Kennedy ordenó el bloqueo de la isla desplegando unidades navales y aviones de combate sobre sus costas. En las negociaciones secretas, Kruschev dispuso el retiro de los misiles y los Estados Unidos se comprometieron a no invadir la isla y a retirar los envejecidos misiles que tenían apostados en Turquía. La tensión vivida condujo al reconocimiento de la importancia del diálogo directo –el teléfono rojo– entre la Casa Blanca y el Kremlin.

A partir del Tratado de Moscú de 1963, la Unión Soviética y los Estados Unidos se mostraron dispuestos a dialogar sobre el control de los armamentos nucleares. Este acuerdo prohibió las pruebas nucleares atmosféricas, pero ni China ni Francia lo suscribieron. En 1968, las dos superpotencias y otros noventa y cinco países –menos China, Francia y la India– firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que prohibía la fabricación y la compra de armas atómicas por parte de países que carecieran de ellas y proponía un control internacional sobre la carrera armamentista y el uso de energía nuclear. En 1969 se iniciaron las negociaciones para la limitación de las armas estratégicas (SALT: Strategic Arms Limitation Talks), que condujeron a la firma en Moscú del Acuerdo SALT I. Este prohibió la instalación de sistemas de defensa antimisiles, por considerar que la mejor garantía para mantener la paz era que ninguna de las superpotencias se sintiera segura. La "destrucción mutua asegurada" (Mutual Assured Destruction o MAD, sigla que forma la palabra "loco" en inglés) era la mejor forma de impedir el conflicto armado.

El Acta Final de Helsinki, en 1975, fue el punto culminante de la distensión. Los países firmantes reconocieron las fronteras surgidas de la Segunda Guerra Mundial, se reforzó la cooperación económica entre ambos bloques, y todos los gobiernos se comprometieron a respetar los derechos humanos y las libertades de expresión y circulación de sus habitantes.

Al calor de la distensión, el bloque soviético profundizó sus vínculos con el mercado mundial. La URSS necesitaba importar tecnología occidental y comprar cereales norteamericanos para asegurar la alimentación de su población. Cuando el aumento de los precios del petróleo, a partir de 1973, generó grandes masas de capital en busca de inversiones, los países de Europa del Este, especialmente Polonia y Hungría, tomaron créditos baratos en la banca occidental que incrementaron peligrosamente su deuda externa.

Mientras las superpotencias dialogaban, las fisuras en el seno de cada bloque se hacían cada vez más evidentes. La posición dominante de la Unión Soviética fue cuestionada en los países satélites europeos y China criticó abiertamente las directivas de Moscú. Tras la muerte de Stalin hubo protestas obreras en Berlín y Praga, que fueron rápidamente controladas. Las insurrecciones de 1956 en Polonia y Hungría fueron más extendidas y condujeron a la intervención de Moscú, más velada en el primer caso y con envío de tropas en el segundo. El ingreso de los tanques soviéticos en Budapest, en noviembre de 1956, resquebrajó la unidad del campo comunista al

quebrantar la fe de sus militantes. Doce años después, Checoslovaquia sufriría la misma suerte.

En el marco de la desestalinización y el avance de la distensión entre las superpotencias, China fue tomando distancia de la URSS hasta llegar a identificarla como el enemigo principal. Las críticas de Pekín a Moscú se plantearon básicamente en términos ideológicos: la coexistencia pacífica era una mera expresión del chovinismo ruso, que de ese modo abandonaba la revolución mundial emergente en las luchas del Tercer Mundo. No obstante, en el distanciamiento de Mao pesó tanto la rivalidad entre los dos estados nacionales comunistas –China no estaba dispuesta a ser un país de segundo orden sin energía nuclear– como el hecho de que el revisionismo de Kruschev se correspondía con la postura más moderada y economicista de los dirigentes comunistas chinos, que cuestionaban el voluntarismo y el extremismo político del conductor de la Larga Marcha. Finalmente, en 1960, el gobierno soviético suspendió la ayuda económica y retiró sus expertos de Pekín. Albania abandonó el bloque soviético para aliarse con China en 1962.

También Washington descubrió que parte de sus aliados europeos estaban dispuestos a seguir caminos propios. El presidente De Gaulle antepuso los intereses de Francia a las consideraciones ideológicas de la Guerra Fría y los dictados de Washington. Rechazó que su país careciera de fuerza nuclear propia y retiró las tropas francesas de la OTAN. Ante la creciente debilidad del dólar, el gobierno francés convirtió en oro sus reservas en esa moneda, agravando su desvalorización. De Gaulle buscó el diálogo directo con los gobiernos comunistas –reconoció a la China de Mao en 1964 y visitó la URSS en junio de 1966– e impulsó la unidad europea hacia una Europa independiente de los Estados Unidos, pero advirtiendo que la potestad de los estados nacionales no debía ser recortada por los organismos supranacionales. Alemania, a partir del gobierno socialdemócrata de Willy Brandt, avanzó hacia la apertura al Este (Ostpolitik). En 1970, los dirigentes de las dos Alemanias se encontraron por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hecho que propició importantes lazos económicos y posibilitó el reconocimiento de la República Democrática Alemana por numerosos estados occidentales. El acercamiento de la República Federal Alemana a Polonia condujo a la aceptación explícita de la línea Oder-Neisse, que hasta entonces los alemanes occidentales habían desconocido como frontera entre ambos países.

Pero el principal desafío para los Estados Unidos provino del Tercer Mundo: el sorpresivo giro al socialismo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro y la guerra de Vietnam en Asia. Cuba impidió exitosamente que Washington derrocase a su gobierno como lo venía haciendo, por medio de la CIA, con los gobernantes reformistas –por ejemplo, los golpes contra Muhammad Mossadegh en Irán, en 1953, y contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954–. Las tropas cubanas rechazaron en 1961 la invasión de Bahía de Cochinos, puesta en marcha por el presidente Kennedy.

A partir de 1960, la oposición en Vietnam del Sur al corrupto gobierno sostenido por Washington organizó el Frente Nacional de Liberación con el apoyo de los comunistas del norte. Con la extensión de la Guerra Fría más allá de Europa, los Estados Unidos se habían involucrado en países que carecían de la historia y los recursos que habían posibilitado la rápida reconstrucción de los estados europeos y su inserción en el bloque capitalista. Según Kennedy, en las ex colonias no bastaba con el apoyo económico y militar: además era preciso comprometerse con la construcción de naciones democráticas siguiendo el modelo norteamericano. En pos de esta empresa, paradójicamente, Kennedy decidió defender un régimen por completo carente de atributos democráticos y redobló la apuesta militar. Los efectivos militares, que en 1962 llegaban a cuatro mil soldados norteamericanos, aumentaron a casi quinientos mil cinco años después. Lyndon B. Johnson, el sucesor del presidente asesinado, decidió bombardear Vietnam del Norte. Si bien la supremacía en armas de Washington era innegable, su ejército no podía impedir la infiltración comunista del norte ni tampoco neutralizar la resistencia del Frente Nacional de Liberación. Después de la ofensiva vietnamita

del Têt en 1968, Johnson decidió negociar. La situación podría resumirse en una máxima de la estrategia militar: "un ejército regular pierde cuando no gana; una guerrilla gana mientras no pierde".

El gobierno republicano encabezado por Richard Nixon, sucesor de Johnson, ordenó el regreso de la mayor parte de los soldados estadounidenses. Al mismo tiempo, al intensificar los ataques aéreos contra Vietnam del Norte y pretender la destrucción del denominado Sendero Ho Chi Mihn –la ruta de suministro de los comunistas–, extendió la guerra hacia Laos y Camboya. El monarca camboyano, Norodom Sihanouk, que había intentado mantenerse al margen del conflicto, se acercó a China y fue derrocado por un golpe militar apoyado por la CIA. Durante su exilio en Pekín, Sihanouk se unió al Jemer Rojo –el grupo comunista liderado por Pol Pot– y apoyó la creación del Frente Unido Nacional de Kampuchea. Por su parte, el Pathet Lao estrechó filas con los comunistas vietnamitas y redobló sus ataques contra la derecha laosiana.

Los bombardeos masivos, el uso de agentes químicos y la crueldad de la primera guerra transmitida por televisión fueron contraproducentes para la política de los Estados Unidos en el Tercer Mundo y entre amplios sectores de la opinión pública occidental. Al cabo de una compleja fase de negociaciones, durante la cual no cesaron los enfrentamientos militares, en enero de 1973 Hanói y Washington firmaron la paz en París.

El Tercer Mundo: liberación, no alineamiento y crisis

Entre 1957 y 1975, la mayor parte de África Subsahariana alcanzó la independencia. Bajo el liderazgo del presidente egipcio Nasser, el nacionalismo secular, antiimperialista y enfrentado con las monarquías conservadoras ganó terreno en el escenario árabe. En el Sudeste asiático, la lucha anticolonialista vietnamita se transformó en una guerra antiimperialista que socavó la hegemonía de la primera potencia capitalista. América Latina fue sacudida por la Revolución cubana y la "nueva izquierda" reivindicó la lucha armada contra la dependencia y la injusticia social. En el imaginario de gran parte de la izquierda occidental, el Tercer Mundo se erigió como el nuevo sujeto revolucionario. La voluntad política de las víctimas del imperialismo pasó a ser visualizada como condición necesaria y suficiente para que estas se convirtieran en protagonistas de su historia a través de acciones heroicas. Allí estaban para confirmarlo, según los tercermundistas, Argelia, Cuba y Vietnam.

La independencia de África

Cuando estalló la guerra de Argelia en 1954, los únicos estados africanos independientes eran Egipto, Etiopía, Liberia y Sudáfrica. Egipto había dejado de ser protectorado británico en 1936; Etiopía sólo había conocido la dominación del fascismo italiano entre 1936 y 1941; Liberia nunca había sido una colonia formal, y en Sudáfrica, después de la guerra anglobóer, se había creado la Unión Sudafricana en 1910. Al concluir el conflicto argelino, en 1962, casi todas las colonias se habían liberado. El último en caer fue el imperio portugués, a mediados de la década de 1970, y por esos años también España abandonó los territorios del Sahara y Francia se retiró de la Somalia francesa (Yibuti).

Hasta bien entrados los años cincuenta, los poderes imperiales estuvieron convencidos de que iban a permanecer mucho tiempo en África. África Subsahariana, el "África Negra" por excelencia, estaba integrada por un conjunto heterogéneo de culturas y de etnias. Frente a este desafío, sus intelectuales y dirigentes nacionalistas alentaron la aspiración hacia un destino común basado en la valoración de la negritud y la africanidad.

El reconocimiento positivo de las raíces africanas formaba parte del ideario de los grupos afronorteamericanos que desde mediados del

siglo XIX venían encarando acciones contra la discriminación racial en los Estados Unidos. Al terminar la Gran Guerra sus dirigentes se trasladaron a París para presentar, sin éxito, sus demandas ante los estadistas reunidos en Versalles. En el período de entreguerras los encuentros entre los promotores de la africanidad siguieron siendo liderados por los afronorteamericanos, pero la conferencia de 1945 incluyó a líderes nacionalistas africanos como Kwame Nkrumah (de Ghana) y Jomo Kenyatta (de Kenia). La reunión se autodefinió como una organización decidida a enfrentar a las potencias coloniales.

El ideario nacionalista fue inicialmente asumido y reelaborado por los jóvenes africanos que tenían posibilidades de trasladarse a Europa o América para acceder a la educación universitaria. Los contactos en el extranjero favorecieron el afianzamiento de las aspiraciones independentistas. Allí reunidos, los miembros de distintas colonias podían intercambiar impresiones y alentar la idea del panafricanismo.

Los movimientos nacionalistas siguieron una trayectoria similar: en primer lugar, la formación de asociaciones culturales y de organizaciones profesionales por parte de la minoría africana con formación universitaria; en segundo lugar, la creación de movimientos políticos más amplios decididos a romper con el vínculo colonial.

En los casos en que existían arraigadas diferencias por razones étnicas entrelazadas con diferentes estatus sociales y políticos –en parte ya presentes en el período precolonial y en parte utilizadas por los poderes coloniales–, hubo rivalidad entre las distintas agrupaciones nacionalistas. En Nigeria, por ejemplo, ya existían tres partidos a principios de los años cincuenta: el Consejo Nacional para Nigeria y Camerún entre los ibos, el Congreso de los Pueblos del Norte entre los musulmanes, y el Grupo de Acción de los yorubas. En Rodesia del Sur, los nacionalistas negros se dividieron en la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue (ZAPU, por sus siglas en inglés), con peso en la minoría matabele, y la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU), más radical que la anterior y reconocida por la mayoría de habla shona. En el Congo belga, la fragmentación política combinada con las escisiones socioculturales –más de setenta grupos étnicos y alrededor de cuatrocientos dialectos– desencadenó la guerra civil que siguió a la independencia.

En la región central, las principales potencias eran Gran Bretaña y Francia, con posesiones desde el Atlántico hasta el Índico. Bélgica ocupaba el Congo y estaba a cargo de las ex colonias alemanas Burundi y Ruanda. Portugal dominaba Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y Cabo Verde, y España regía Guinea Ecuatorial y el norte del Sahara. En el cuerno de África, Eritrea estaba bajo la dominación de Italia, y los territorios habitados por los somalíes estaban repartidos entre Gran Bretaña, Francia e Italia. En el sur africano se encontraban las dos principales colonias de Portugal –Mozambique y Angola–, la ex colonia alemana África del Sudoeste (Namibia) bajo el control de Sudáfrica desde el fin de la Primera Guerra Mundial, y las colonias británicas Rodesia del Norte (Zambia), Rodesia del Sur (Zimbabue) y Nyasalandia (Malaui).

En los procesos de descolonización de África Subsahariana se destacan dos grandes vías: la negociada –en el imperio francés y la mayoría de las zonas británicas– y la violenta –en las colonias de Portugal, Bélgica y parte de las británicas en África del Sur–.

Gran Bretaña fue la primera en favorecer la independencia basándose en su experiencia asiática y en el reconocimiento de que la formación de gobiernos africanos en manos de los nuevos hombres de clase media era inevitable. El sistema de gobierno indirecto generó tensiones en el seno de los pueblos sometidos a medida que se diversificaba la trama social. Esta fórmula se basaba en la colaboración entre los funcionarios metropolitanos y las autoridades nativas tradicionales. La formación de la clase media africana, cuya posición dependía de la educación y la riqueza, la llevó a rechazar la autoridad tradicional por su subordinación a la metrópoli, por su falta de competencia y porque la excluía del poder. Gran parte de los movimientos nacionalistas se basaron en la coalición entre los grupos de clase media, los jóvenes universitarios y la creciente movilización de los sectores populares urbanos.

La marcha hacia la independencia se inició en Costa de Oro (Ghana)

en 1957 y concluyó en Gambia en 1965. La retirada más conflictiva fue la de Kenia, debido a que los colonos británicos –establecidos como plantadores en tierras valorizadas por la construcción del ferrocarril– pretendían una forma de gobierno similar a Canadá o Australia. La etnia kikuyu fue una de las más afectadas por la apropiación de las tierras por los blancos, y de su seno surgieron el principal líder de la independencia –Jomo Kenyatta– y la organización Mau Mau, que reivindicó su derecho a la tierra a través de acciones terroristas. Los colonos intentaron crear un partido multirracial que salvaguardara sus derechos políticos y económicos, pero fracasaron. En 1963 la Unión Nacional Africana de Kenia, encabezada por Kenyatta, ganó las elecciones y Gran Bretaña reconoció la independencia.

Francia, que ocupaba la tercera parte del continente africano, perdió el control sobre un gran sector de su imperio durante la Segunda Guerra Mundial: el África Ecuatorial francesa pasó a manos de las fuerzas dirigidas por De Gaulle y el norte se convirtió en un campo de batalla, del que los alemanes fueron expulsados por los anglonorteamericanos en 1943. Al quedar en el bando de los vencedores, por la decisión de De Gaulle de sumarse a los Aliados, Francia recuperó todas sus colonias en la posguerra. Mientras que en el norte la independencia llegó después de la lucha armada, en el África Subsahariana la descolonización se concretó sin ninguna crisis grave, excepto en Madagascar. Hasta 1956 los territorios del África francesa se movían hacia la integración con la metrópoli, pero cuatro años más tarde optaron por la creación de estados independientes.

En la colonia belga del Congo, el retiro abrupto de la metrópoli en junio de 1960 dio paso a una sangrienta guerra civil en la que intervinieron las fuerzas armadas belgas y la CIA, mientras la ONU se mostraba impotente para frenar la masacre. A la existencia de rivalidades personales y numerosas organizaciones de distintas etnias se sumó la aspiración autonomista de Katanga, la rica zona productora de cobre. El primer ministro Patrice Lumumba, líder del Movimiento Nacional Congolés, intentó conseguir el apoyo soviético, pero fue detenido por el ejército y asesinado.



Patrice Lumumba en una estampilla conmemorativa soviética, impresa en 1961.

Poco después de finalizada la guerra civil, el comandante Joseph Desiré Mobutu tomó el poder en 1965 e impuso un gobierno dictatorial hasta su violento derrocamiento en 1997. En 1962 Bélgica también reconoció la independencia y partición de Ruanda y Burundi.

En África Austral, la dominación blanca se prolongó en el tiempo. En su persistencia se conjugaron la decisión de Portugal de mantener sus colonias de Angola y Mozambique, y, en Sudáfrica, el interés de la minoría blanca local en preservar sus privilegios y explotar a la población nativa mediante la imposición del apartheid sobre la base del potencial económico y militar. El gobierno racista de este país

ayudó a la comunidad blanca de Rodesia del Sur a retener el control del gobierno y a Portugal a resistir los movimientos independentistas.

Pretoria también mantuvo su dominación sobre la ex colonia alemana África del Sudoeste a pesar de las presiones internacionales para que reconociera su independencia. En el marco de la oleada descolonizadora, sólo las ex colonias británicas de Nyasalandia y Rodesia del Norte pasaron a convertirse, respectivamente, en las repúblicas de Malaui y Zambia.

El tardío imperio italiano en el Cuerno de África fue el primero en desmoronarse a raíz de las derrotas militares del fascismo. El emperador desplazado por Mussolini retomó el gobierno en Etiopía, mientras que Eritrea quedó fusionada en 1952 con el imperio etíope vía un acuerdo federal supervisado por la ONU. Diez años más tarde, los eritreos iniciaron una prolongada lucha para obtener su independencia. En el caso de los somalíes, los territorios bajo dominación italiana fueron administrados por la ONU hasta 1960, cuando se unificaron con los que dependían de Gran Bretaña (Somalilandia) para formar la República Democrática de Somalia. La porción somalí ocupada por Francia se independizó con el nombre de Yibuti en 1977.

En España, Franco tardó más que los ingleses y franceses en transferir responsabilidades a la población de las colonias. Ante las presiones cada vez más fuertes del bloque afroasiático de las Naciones Unidas, la Guinea española obtuvo su independencia en 1968. Cuando España se retiró del Sahara Occidental en 1975, Marruecos y Mauritania reclamaron su soberanía, avanzaron con sus tropas e impidieron la creación de un nuevo estado nacional.

El nacionalismo árabe y las guerras contra Israel

Oriente Medio se presentó rápidamente y durante mucho tiempo como una de las zonas más conflictivas del escenario mundial. Las reivindicaciones nacionales de palestinos y kurdos se combinaron con la importancia clave de Oriente Medio para Occidente en su condición de principal productor de petróleo y con las rivalidades entre los estados árabes, resultantes del afán de predominio sobre la región y de los fuertes contrastes entre los regímenes de cada país. A partir de la Segunda Guerra Mundial, tres hechos contribuyeron al entrecruzamiento de las trayectorias de los países árabes: la creación del estado de Israel y la guerra árabe-israelí en 1948, la revolución que llevó al gobierno a Gamal Abdel Nasser en Egipto (1954-1970), y la guerra de liberación de Argelia, iniciada en 1957.

La toma del gobierno por los militares egipcios a principios de los años cincuenta produjo cambios internos e introdujo nuevos alineamientos y fricciones en el campo árabe, que repercutieron sobre la relación de fuerzas de las dos superpotencias. Nasser había combatido en Palestina en 1948 y cuando regresó a su patria creó el Comité Ejecutivo de los Oficiales Libres para derrocar a la monarquía. Como presidente de la nueva república, impulsó la modernización económica y en esta empresa no dudó en buscar la ayuda soviética, aunque fue decididamente anticomunista. Este giro y su protagonismo en el Movimiento de Países No Alineados lo convirtieron en un enemigo para los países centrales de Occidente.

El 26 de julio de 1956, Nasser anunció que los fondos para financiar la gran presa de Assuán sobre el río Nilo provendrían de la nacionalización del canal de Suez, ya que el Banco Mundial había rechazado el préstamo solicitado. Esta decisión tuvo una inmensa popularidad en Egipto y, para gran parte de los pueblos árabes, Nasser se convirtió en el símbolo del antiimperialismo. Había desafiado a los británicos pero también a los franceses con la ayuda prestada a la insurrección argelina, y a los israelíes amenazando con el cierre del acceso al canal. Consecuentemente, los dirigentes de esos tres países acordaron atacar a Egipto. Los Estados Unidos y la URSS reprobaron la acción militar y la ONU dispuso el inmediato cese de fuego y el retiro de las fuerzas israelíes a las líneas de armisticio. La guerra incrementó

la hostilidad árabe hacia Israel y marcó el ocaso de Gran Bretaña y Francia en la región.



Nasser es aclamado después de anunciar la nacionalización del canal de Suez con "el fin de establecer un Estado independiente, de una independencia verdadera, tanto política como económica. [...] Nosotros volveremos a tomar todos nuestros derechos, porque todos esos fondos son nuestros y este canal es propiedad de Egipto. La Compañía es una Sociedad Anónima egipcia y el canal fue excavado por ciento veinte mil egipcios que murieron durante la ejecución de los trabajos".

La crisis de octubre de 1956 alentó la movilización de las fuerzas árabes enfrentadas con los gobiernos prooccidentales. A principios de 1958 Siria se unió a Egipto para formar la República Árabe Unida, y en julio de ese mismo año un golpe derrocó a la dinastía hachemita en Irak, hasta entonces el principal baluarte de la influencia británica en la región. El gobierno cristiano del Líbano y el rey hachemita de Jordania pidieron ayuda a Occidente para preservar el orden interno e impedir "posibles ataques de fuerzas externas". Los Estados Unidos enviaron tropas al Líbano, e Inglaterra hizo lo propio en Jordania.

Desde principios de 1967 era evidente que se avanzaba hacia una tercera guerra entre árabes e israelíes: Tel Aviv anunció el inicio de cultivos en todas las regiones de la zona desmilitarizada entre Siria e Israel, y el gobierno egipcio cerró el paso del tráfico marítimo israelí por el estrecho de Tirán. El 5 de junio Israel se lanzó a la ofensiva y comenzó la Guerra de los Seis Días. Tras reducir a la aviación egipcia, las fuerzas israelíes se instalaron en sólo tres días a orillas del canal de Suez.

Con ese nuevo triunfo, el problema palestino se agravó. Israel había ocupado nuevos territorios: la península de Sinaí (Egipto), la margen occidental del río Jordán (Jordania), las alturas de Golán (Siria), la franja de Gaza y toda la ciudad de Jerusalén. Esta expansión incrementó el número de refugiados y fue una segunda Nakba para los palestinos. Se calcula que aproximadamente un tercio de la población árabe residente en Cisjordania, Jerusalén oriental y Gaza huyó a Jordania, Siria y Líbano, atestando los campos de refugiados ya existentes. Después de la derrota, Nasser presentó su renuncia, pero grandes manifestaciones a su favor lo llevaron a retirarla.

La ONU aprobó la Resolución 242, que pedía en términos ambiguos la retirada de Israel de los territorios ocupados en 1967 y la finalización de todas las situaciones de beligerancia a través de una paz justa y duradera. Las grandes potencias intervinieron en forma más abierta y a mayor escala. La URSS entregó armas y envió consejeros militares a los países árabes. Los Estados Unidos se alinearon decididamente con el estado de Israel, en parte porque su triunfo había perjudicado a dos aliados de Moscú –Egipto y Siria–. Si bien la decisión de los Estados Unidos respondía a la lógica de los dos bloques, también hubo razones internas. Por un lado, la consolidación de la comunidad judía –manifiestamente anti-Vietnam– en el terreno social, cultural y político

estadounidense. Por otro, la adhesión a la posición judía entre los sectores liberales de la sociedad norteamericana, para quienes la defensa del pequeño país democrático y de la comunidad que había sido víctima del Holocausto, por entonces en lucha contra los autoritarios regímenes árabes, significaba comprometerse con una causa justa. Francia, en cambio, tomó distancia de Israel. Al concluir la Guerra de los Seis Días, De Gaulle declaró que la ocupación de nuevos territorios sólo sería posible mediante la opresión y las expulsiones, que a su vez provocarían una prolongada y cada vez más radicalizada resistencia.

La última guerra de Egipto contra Israel fue encarada por Anuar al-Sadat, el sucesor de Nasser. La guerra de Yom Kippur comenzó en 1973 con una ofensiva árabe, pero los israelíes se impusieron en el campo militar merced al traslado de armamento estadounidense por vía área. Las gestiones de Henry Kissinger, secretario de estado norteamericano, sentaron las bases para el acuerdo de paz firmado entre ambos países en 1979.

Al calor de este conflicto, los gobiernos árabes resolvieron presionar a Occidente aumentando el precio del petróleo. Por un momento pareció factible que impusieran, al menos a Japón y los países europeos industrializados, una actitud afín a sus intereses en Oriente Medio. Pero la consecuencia principal fue de orden económico. Con el aumento de los precios del petróleo en 1973 y nuevamente en 1979, al calor de la revolución iraní, entraron en escena los “petrodólares”. Los dólares de los productores de petróleo ingresaron en el circuito financiero y pasaron rápidamente al Tercer Mundo mediante la proliferación de créditos. En los años ochenta, la mayoría de los países subdesarrollados sufrieron el durísimo impacto de dos crisis conjugadas: el agotamiento del proceso de industrialización vía la sustitución de importaciones y la gravosa deuda externa.

Los No Alineados y las luchas en el Tercer Mundo

El concepto de Tercer Mundo, acuñado en los años cincuenta, englobó a un conjunto heterogéneo de países de Asia, África y América Latina con problemas similares: un orden económico dependiente de la exportación de alimentos y materias primas, altas tasas de analfabetismo, un fuerte crecimiento demográfico y escenarios políticos signados por el autoritarismo, el protagonismo militar y la fragilidad de las instituciones. Después de Bandung, a principios de los años sesenta, estos países formaron un tercer bloque: el Movimiento de Países No Alineados. A la primera conferencia reunida en Belgrado en septiembre de 1961 asistieron veinticinco países; de América Latina, sólo Cuba participó en calidad de miembro. Cuando en 2006 se realizó la decimocuarta cumbre en Cuba, el Movimiento estaba integrado por ciento dieciséis países, que en conjunto conformaban casi dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas y en los cuales vivía más de la mitad de la población del planeta.

El no alineamiento se definió por su adhesión a una serie de principios: preservar las independencias nacionales frente a las dos superpotencias, no pertenecer a ningún bloque militar y promover un desarme completo y general, y defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la independencia, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, el fortalecimiento de las Naciones Unidas, la democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional.

El aumento de países miembros, con diferentes trayectorias, intensificó las divergencias en el campo político e ideológico y en las posiciones adoptadas respecto a las dos superpotencias. Casi todos tenían algún grado de coincidencia, a veces absoluto, con alguno de los dos bloques. La concepción de no alineamiento de los líderes indios o egipcios, por ejemplo, presentaba marcados contrastes con la del líder cubano Fidel Castro. La consistencia del Movimiento se vio afectada por los conflictos, en muchos casos armados, entre los estados miembros.

Un factor unificador fue la enorme diferencia de renta, percibida

como una injusticia, entre las metrópolis capitalistas y los nuevos países. Las conferencias de El Cairo (1964), Lusaka (1970) y Argel (1973) testimoniaron una creciente preocupación por los aspectos económicos en desmedro de los políticos. En Argel nació el concepto de "nuevo orden económico mundial" para poner fin al neocolonialismo: un sistema de explotación que, según los tercermundistas, impedía el crecimiento económico de los países dependientes a través del intercambio desigual. Los países productores de materias primas trataron de agruparse para defender los precios, pero, salvo en el caso del petróleo, no pudieron influir sobre el mercado mundial. Cuando las grandes compañías norteamericanas, británicas y holandesas intentaron reducir en 1960 el precio de este recurso clave para el crecimiento económico metropolitano, se creó la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP), en un principio limitada a Venezuela y el Golfo Pérsico y luego extendida al conjunto de los países productores.

Mientras las relaciones entre las dos superpotencias se distendían, el Tercer Mundo era desgarrado por sangrientas luchas. Las más visibles eran las guerras por la liberación nacional y social, en cuyo desarrollo gravitaba la rivalidad entre las superpotencias: Vietnam y de manera menos evidente África Austral, donde los movimientos africanos luchaban contra las minorías blancas gobernantes. Pero también hubo guerras entre los nuevos países por la delimitación de las fronteras y luchas internas entre los diferentes grupos nacionales que quedaron englobados en un mismo estado.

En Asia del sur, la rivalidad entre la India y Pakistán se hizo más compleja y prolongada. La situación de Cachemira, repartida entre los dos países, desató una nueva guerra en 1965, que no modificó la situación. El conflicto asumió una nueva fisonomía al calor del enfrentamiento interno en Jammu y Cachemira –bajo control de India–, donde distintos movimientos luchaban contra el dominio indio ya fuera para integrarse a Pakistán o para crear un estado independiente. En 1971 Nueva Dehli e Islamabad retomaron las armas por tercera vez a raíz de la decisión del Pakistán oriental de crear un nuevo estado nacional. Las diferencias históricas, culturales y socioeconómicas entre las dos regiones del Pakistán creado en 1947 prevalecieron sobre la compartida adhesión al islam. Las fuertes fricciones entre musulmanes e hindúes no impidieron que el ejército indio interviniese a favor de la creación de la República Popular de Bangladesh. La región indostánica fue una pieza importante en la rivalidad entre las dos superpotencias. La India defendió el no alineamiento y estableció importantes vínculos comerciales con el bloque soviético, del que obtuvo apoyo diplomático en la causa de Cachemira además de ayuda militar. Pakistán, por su parte, fue un decidido aliado de los Estados Unidos.

En este escenario, la India y China, dos protagonistas centrales de Bandung, disputaron militarmente en 1962 la posesión de territorios en las zonas de Tíbet y Cachemira. El ejército chino se impuso al indio sin concretar grandes cambios en las fronteras.

En Oriente Medio, a fines de la década de 1960, se reactivó el conflicto entre Irán e Irak por el canal de Shatt al Arab. Esta zona, donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates, había sido disputada por los imperios persa y otomano. El sah de Irán aprovechó la resistencia de los separatistas kurdos contra el gobierno de Irak para cuestionar las fronteras existentes entre los dos países. En 1975, el sah Reza Pahlevi y el vicepresidente iraquí Saddam Hussein firmaron un acuerdo que dividió el canal por la línea de mayor profundidad. En la década de 1980, la divergencia en torno a este límite fue la chispa que disparó una larga y devastadora guerra entre los dos países musulmanes.

Otra zona de intensa y prolongada conflictividad fue la isla de Chipre, ex colonia británica poblada por griegos y turcos. En 1959, representantes de Grecia, de Turquía, del partido chipriota liderado por el arzobispo Vaneziz Makarios y de la corona británica acordaron crear la República de Chipre, con garantías para la minoría turca y soberanía inglesa sobre las bases militares de la isla. La independencia se proclamó el 16 de agosto de 1960, y Makarios –"el Fidel Castro del Mediterráneo", según los Estados Unidos– asumió la presidencia. La rivalidad entre Grecia y Turquía se conjugó con las tensiones entre las

comunidades griega y turca, y en 1974, tras una serie de violentos enfrentamientos, el país quedó dividido con la proclamación de un estado federal turco-chipriota al norte de la isla, no reconocido internacionalmente.

Los conflictos en África pusieron en evidencia la enorme distancia entre las fronteras de los nuevos estados y los reclamos de los diferentes grupos e intereses. En la zona del Cuerno de África, la ex colonia italiana Eritrea –que ahora formaba parte de Etiopía– reivindicó infructuosamente su condición de estado independiente a través de las armas. También Somalia fracasó en su lucha contra Etiopía por el control de Ogadén. El emperador etíope contó con la ayuda de los Estados Unidos hasta su caída en 1974; a partir de entonces, la dictadura militar que lo derrocó proclamándose marxista recibió el apoyo de la URSS. En el Sahara español, cuando Marruecos ingresó en 1975 al retirarse España, el Frente Polisario se levantó en armas contra las fuerzas marroquíes y desde entonces reclama el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática.

La Segunda Guerra Fría (1975/1979-1985)

Desde mediados de los años setenta, el clima de distensión entre las superpotencias se enrareció, en gran medida debido a la oleada de revoluciones que recorrió el Tercer Mundo desde América Central hasta Irán e Indochina en Asia, pasando por el sur y el este de África. Los principales conflictos en el Tercer Mundo que intensificaron la rivalidad entre las superpotencias fueron los que atravesaron el Cuerno de África, los del sur africano en el marco de la caída del imperio portugués, y, básicamente, las luchas en el área musulmana de Asia Occidental. En esta compleja crisis se entrecruzaron la exitosa revolución del ayatolá Ruholláh Jomeini en Irán y la invasión de Afganistán por la URSS.

La Segunda Guerra Fría no fue el resultado de revoluciones que conducían al Tercer Mundo hacia el socialismo. Por un lado, porque el fin de la distensión no fue sólo consecuencia de lo que ocurría en el Tercer Mundo, sino que tuvieron un peso destacado tanto las obsesiones ideológicas de los neoconservadores –con fuerte protagonismo en el diseño de la política exterior del presidente Reagan– como las ambiciones desmesuradas de la gerontocracia soviética encabezada por Leonid Brézhnev. Por otro lado, porque sólo en Indochina los partidos comunistas desempeñaron el papel dirigente. Con la excepción de Irán, en el resto de los países las organizaciones armadas oponían resistencia al colonialismo, como era el caso de las colonias portuguesas en África, o a las dictaduras, en América Central, que dependían del apoyo estadounidense para mantenerse en pie imponiendo su férreo control sobre sociedades escasamente modernizadas.

En Centroamérica, una región que los Estados Unidos siempre habían considerado bajo su influencia, una serie de procesos resquebrajaron esa convicción e incrementaron los temores de Washington: la creciente fuerza del movimiento guerrillero en El Salvador y Guatemala, la presencia de Omar Torrijos en Panamá y el triunfo de la revolución sandinista en 1979. Con la caída de la dictadura de Somoza, en Nicaragua se formó un gobierno de corte revolucionario apoyado por Moscú y La Habana. "¿Debemos dejar que Granada, Nicaragua, El Salvador, todos se transformen en nuevas Cubas?", preguntaba el candidato presidencial republicano Ronald Reagan en la campaña electoral de 1980. Los jóvenes neoconservadores que lo rodeaban militaron decididamente a favor del aumento del potencial militar y el despliegue de intervenciones indirectas.

Mientras la "ingobernabilidad" del Tercer Mundo cargaba de tensiones el escenario internacional, el mundo capitalista dejaba atrás su período de crecimiento sostenido para ingresar en una etapa de estancamiento y bruscas fluctuaciones del ciclo económico. Los Estados Unidos ya no eran la potencia económica hegemónica indiscutida. Para los neoconservadores, decididos a revertir su declive, el gobierno debía liberar al capital de las trabas impuestas por el

estado de bienestar, aumentar los gastos de defensa, incorporar nuevas tecnologías en el campo militar para aniquilar el comunismo y desplegar una revolución cultural, cuyos principales artífices serían ellos mismos, destinada a desmantelar las perniciosas secuelas morales del movimiento de contracultura de fines de los años sesenta.

En la URSS, la economía central planificada, rígida y burocrática era un obstáculo cada vez mayor para la promoción del desarrollo científico y tecnológico. Moscú se estaba quedando aceleradamente atrás de las potencias capitalistas: si bien era capaz de producir enormes cantidades de acero, carecía de las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo de la informática. En lugar de prestar atención a estos problemas, su dirigencia decidió, sobre la base del creciente ingreso de divisas procedentes de la venta de petróleo, ganar protagonismo en el escenario internacional ampliando su esfera de influencia.

La "ingobernabilidad" del Tercer Mundo tuvo impactos desiguales sobre la relación de fuerzas entre las superpotencias. La experiencia más traumática para los Estados Unidos fue su derrota en Vietnam.



La escalada militar de los Estados Unidos en Vietnam se intensificó en la década de 1960, bajo las presidencias de Kennedy y Johnson. En esos años, los gobernantes comunistas del norte ganaron el apoyo del Frente Nacional de Liberación que reunía, en el sur del país, a diferentes sectores opositores a los gobiernos títeres sostenidos por los Estados Unidos.

El retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam del Sur dio paso a

la instalación de regímenes comunistas en todos los países de Indochina. Dos años después, Saigón cayó en manos de los comunistas y el Pathet Lao fundó la República Popular Democrática de Laos, aboliendo la monarquía. La trayectoria de Camboya fue mucho más compleja y dramática. En 1975, las fuerzas de Pol Pot entraron en Camboya apoyadas por China, proclamaron la República Democrática de Kampuchea e instauraron un régimen basado en el terror: destrucción de ciudades, desplazamientos forzados de la población al campo y ejecuciones en masa, un conjunto de acciones que provocaron hambre, enfermedades y la muerte de un altísimo número de personas. A fines de 1977, las tropas camboyanas, declarando desconocer las fronteras "trazadas por el colonialismo", avanzaron sin éxito sobre Vietnam. Con la caída de Phnom Penh en manos de los vietnamitas en 1979, estos impusieron un gobierno bajo su control. La guerra de resistencia de grupos camboyanos, como los jemeres rojos, a la tutela de Vietnam se prolongó durante la década de 1980.

Las rivalidades entre los países comunistas abrieron nuevas posibilidades a la superpotencia capitalista en Asia. En el marco de la ruptura chino-soviética, la política de Washington hacia China dio un giro rotundo. Hasta ese momento los Estados Unidos habían ubicado al régimen de Mao como un aliado incondicional de la URSS, encargado de promover el avance del comunismo en Asia. A fines de los años sesenta, el presidente republicano Nixon y Kissinger, su asistente especial para asuntos exteriores, vieron la posibilidad de desplegar una diplomacia triangular (Washington-Moscú-Pekín) que fortaleciera su posición frente a la URSS. El acercamiento culminó con el viaje de Nixon a Pekín en febrero de 1972 y el reconocimiento de la República Popular China en 1979.

Uno de los giros más novedosos en las relaciones entre las dos superpotencias se produjo en África, continente que había quedado al margen de la reconocida esfera de influencia soviética. A mediados de los años setenta, Moscú avanzó sobre este terreno interviniendo en la crisis del Cuerno de África y la descolonización del África portuguesa.

En Etiopía, uno de los países más pobres del mundo, con la destitución en 1974 del emperador Haile Selassie –coronado en 1931–, los militares a cargo del gobierno proclamaron la instauración de un régimen marxista aliado del bloque soviético. Tres años después, Moscú abandonó a Somalia, hasta ese momento su único aliado en África Oriental, para ayudar al gobierno etíope que impidió la independencia de Eritrea y derrotó a las fuerzas somalíes que pretendían anexar Ogaden.

Desde los años cincuenta, en el imperio portugués se venían desarrollando movimientos guerrilleros que en algunos casos –el Frente de Liberación de Mozambique, el Movimiento Popular de Liberación de Angola y el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde– recibían ayuda militar de Moscú. La Revolución de los Claveles en Lisboa, ocurrida en 1974, aceleró el proceso de independencia y los grupos apoyados por los soviéticos tomaron el poder. Las fuerzas anticomunistas buscaron ayuda en los Estados Unidos y en el régimen racista de Sudáfrica. La lucha armada siguió asolando ambos países: persistió hasta principios de los años noventa en Mozambique y hasta 2002 en Angola.

En el mundo musulmán hubo cambios drásticos que los contemporáneos visualizaron desde la perspectiva impuesta por el mundo bipolar, pero en realidad eran una expresión de procesos más complejos y con consecuencias de largo alcance.

En Oriente Medio, la guerra de Yom Kippur en 1973 afectó negativamente a ambas superpotencias. En el caso de los Estados Unidos, porque no pudo impedir el aumento de los precios de petróleo, hecho que afectó seriamente la economía de los países centrales. Sin embargo, los lazos de Washington con los principales productores no se deterioraron, y además ganó un aliado en el conflicto árabe-israelí. El gobierno egipcio encabezado por Sadat se desvinculó de la resistencia palestina con la firma de la paz con Israel en Camp David, en 1979. En cambio, para la URSS, la derrota de los árabes en 1973 y el giro de Egipto marcaron el declive de su influencia en esta región.

Las crisis desencadenadas en 1979 en dos países musulmanes de Asia

Occidental, Irán y Afganistán, combinaron factores que afectarían al conjunto del mundo musulmán y cuyas derivaciones excedieron el marco de la Guerra Fría.

En Irán, uno de los principales productores de petróleo, la caída del sah Reza Pahlevi, firme aliado de los Estados Unidos, dio paso a la instauración de una República Islámica encabezada por Jomeini. El régimen chiita impuso una indivisible articulación entre política y religión, puesta al servicio del enfrentamiento con todos los "impíos": los poderes extranjeros y los gobiernos musulmanes conservadores. Declaró enemigos tanto a Occidente como al comunismo y cuestionó el predominio de Arabia Saudita en el mundo musulmán. La monarquía y el clero wahabita, según Jomeini, eran usurpadores ocultos tras la máscara del rigor religioso. La instalación del primer gobierno chiita entre los musulmanes y su afán por expandir la revolución profundizaron las tensiones en el mundo islámico.

A partir de 1979 se desplegaron dos estrategias opuestas: la de Irán, que se esforzó por ganar adhesiones entre los sectores musulmanes radicalizados, y la saudita, que movilizó el apoyo de la Liga Islámica Mundial y la Organización de la Conferencia Islámica, en parte gracias a sus generosas ayudas económicas. El régimen chiita significó un fuerte cuestionamiento al predominio de los Estados Unidos en la región. A fines de 1979, en el marco de enfrentamientos internos, el sector más radicalizado de la coalición revolucionaria iraní ocupó la embajada estadounidense en Teherán y tomó como rehenes a todos sus ocupantes sin que el gobierno del demócrata James Carter pudiese hacer nada.

Once meses después de la revolución en Irán, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán combinó explosivamente las contradicciones reinantes en el campo islámico con el recrudecimiento de la Guerra Fría. Frente a las luchas entre diversas facciones comunistas afganas, enfrentadas a su vez con guerrillas islámicas, Moscú buscó imponer un gobierno que garantizase el orden y mantuviera el país en su esfera de influencia. En la URSS se temía que la revolución islámica iraní contagiara a Afganistán e incluso que pudiera influir sobre la población soviética mayoritariamente musulmana de Asia Central. La reacción occidental fue inmediata. Alegando que la ocupación prolongaba la influencia soviética más allá de su espacio tradicional, los Estados Unidos y sus aliados organizaron inmediatamente la contraofensiva. La ONU y los No Alineados condenaron la invasión soviética. La Casa Blanca, además del embargo comercial, apoyó a la guerrilla islámica que combatía contra las tropas soviéticas. Los muyahidines afganos fueron entrenados en bases paquistaníes gracias a la cooperación entre la CIA, el servicio secreto paquistaní y Arabia Saudita. En esa misma época, un miembro de una poderosa familia saudita vinculada con la monarquía, Osama Bin Laden, coordinaba el reclutamiento de voluntarios islámicos para luchar en Afganistán.

La acción armada contra "los impíos" que habían invadido el territorio del islam fue percibida por un sector de los gobiernos musulmanes conservadores como una vía radicalizada que les posibilitaba competir con el llamado a la revolución desde Irán. La monarquía saudita y el gobierno militar pakistaní llegaron a acuerdos con unos aliados poco previsibles: los muyahidines afganos y los partidarios de la yihad armada. En Peshawar, la capital de la provincia fronteriza del noroeste paquistaní donde estaba la mayor parte de los tres millones de refugiados afganos, se creó un terreno favorable al islamismo internacional. Mientras la lucha contra los soviéticos fue el objetivo central, los yihadistas fueron funcionales a los intereses de los Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero la yihad afgana siguió su propia lógica y, en la década de los noventa, enfrentó a los mismos poderes que habían financiado su desarrollo.

"La crisis de confianza" –término acuñado por el presidente Carter en 1979 para designar el declive de su país al calor del desgaste económico, la "ingobernabilidad" del Tercer Mundo y la presencia soviética en nuevos escenarios– ofreció un terreno fértil para el avance de los neoconservadores. Durante el gobierno de Reagan, el neoliberalismo económico se había combinado con el creciente protagonismo de prestigiosos centros académicos (think tanks) no universitarios en el campo cultural y en el rumbo de la política

exterior. Los neoconservadores que integraban estas instituciones contaban con sólidos contactos en el mundo de los negocios y tenían una destacada presencia en los medios de comunicación. Desde un nacionalismo extremo y un antisovietismo visceral, recurrieron a la amenaza del comunismo para presentar la agresiva política exterior norteamericana como una estrategia defensiva ante los peligros que acechaban al "mundo libre".

El gobierno estadounidense eludió embarcarse en conflictos enviando sus propias tropas, como lo hiciera en Vietnam, y optó por la guerra mediante agentes interpuestos –por ejemplo, el financiamiento de los "contras" en Nicaragua o el de los muyahidines en Afganistán– o bien por ataques de carácter simbólico, como la invasión a Granada en 1983 o los bombardeos aéreos a Libia en 1986, dos casos en los que su maquinaria bélica de alta tecnología contaba con una ventaja absoluta.

Al mismo tiempo, inició una escalada en la carrera de armamentos con la Unión Soviética que iba mucho más allá de lo que esta podía afrontar. El 23 de marzo de 1983, Reagan anunció a millones de televidentes su proyecto de militarización espacial, destinado a cambiar el curso de la historia de la humanidad. La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida como "guerra de las galaxias", consistía en un paraguas defensivo de armas espaciales que destruirían los misiles intercontinentales soviéticos antes de que tocaran suelo americano. Para sus diseñadores, el principio de "destrucción mutua asegurada" (MAD) sería reemplazado por el de "supervivencia mutua asegurada". Dos años después, ya despuntaba el principio del fin de la Guerra Fría cuando Ronald Reagan y Mijail Gorbachov retomaron la senda del diálogo.

La designación de Gorbachov como secretario general del PCUS el 11 de marzo de 1985 concluyó con la primacía de la gerontocracia e inauguró una etapa que nadie alcanzó a prever ni imaginar. Tras largos años de estancamiento, la economía exigía cambios para satisfacer las necesidades de la población y posibilitar que la Unión Soviética retuviera su papel de superpotencia. La sociedad se encontraba inmersa en una crisis moral signada por la falta de compromiso ideológico y el escepticismo generalizado. Era imposible que la URSS mantuviera por más tiempo la ficción de "paridad" con los Estados Unidos.



Cumbre en Ginebra entre Reagan y Gorbachov, en noviembre de 1985. Tras este primer encuentro, se reunieron en Reikiavik en octubre de 1986, y en diciembre de 1987, los dos líderes firmaron el Tratado de Washington, que dispuso la destrucción de las armas nucleares de corto y medio alcance. Por primera vez, las dos superpotencias firmaban un acuerdo que eliminaba armas nucleares de forma supervisada.

La reforma en la política exterior llegó antes que la perestroika (reestructuración) y la glasnot (transparencia) en la política interna. En su primer encuentro con Reagan en Ginebra, en noviembre de 1985, Gorbachov planteó la necesidad de la distensión y la reducción de los armamentos nucleares. Al año siguiente, expuso ante el partido un "nuevo pensamiento político": dado que el mundo actual se caracterizaba por la interdependencia global, en adelante habría que olvidar la lógica de la Guerra Fría y buscar la cooperación y el

consenso en las relaciones internacionales. Se trataba de buscar "una acción recíproca, constructiva y creadora al mismo tiempo [...] para impedir la catástrofe nuclear y para que la civilización pueda sobrevivir".

Al calor de las iniciativas del dirigente soviético, que encontró en Reagan un interlocutor dispuesto a la negociación, se fueron sucediendo los encuentros destinados a reencauzar las relaciones hacia el diálogo. Las revoluciones de 1989 en los países de Europa del Este aceleraron este proceso. En diciembre de 1989, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín, George Bush, sucesor de Reagan, y Gorbachov se reunieron en la costa de Malta y proclamaron oficialmente el inicio de una "nueva era en las relaciones internacionales". El presidente norteamericano afirmó su intención de ayudar a que la URSS se integrara a la comunidad internacional y el jefe comunista aseguró que "el mundo terminaba una época de guerra fría [...] e iniciaba un período de paz prolongada". En julio de 1991 se puso fin al Pacto de Varsovia y la OTAN quedó como la única gran alianza militar en el mundo. A través de los tratados START I y II (1991 y 1992), los gobiernos de ambos estados acordaron importantes reducciones de sus arsenales nucleares. El mundo volvía a ser capitalista, y el capitalismo era cada vez más global.

5. Los años dorados

En contraste con la primera posguerra, a partir de 1945 la reconstrucción fue acelerada y sostenida. A pesar de la amenaza de la carrera armamentista en el orden bipolar, el mundo vivió una expansión económica asociada a la reformulación del contrato social, sobre todo en los países capitalistas desarrollados. Durante los años dorados (1945-1973), existieron tres escenarios diferentes: un primer mundo capitalista con un significativo grado de autonomía para cada economía nacional; un segundo mundo comunista con una economía basada en la planificación centralizada y al margen, aunque cada vez menos, del mercado mundial; y un Tercer Mundo en el que la mayoría de los países tendieron a la industrialización sustitutiva de las importaciones y a una relativa autarquía. Si bien hubo crecimiento económico en los tres, el polo más dinámico fue el de los países capitalistas de industrialización avanzada.

Casi todos los países coloniales que pasaron a ser estados soberanos aprobaron constituciones y recurrieron al sistema electoral para legitimar sus gobiernos. Pero las restricciones a las libertades públicas, el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos y las adversas condiciones sociales, económicas y culturales obstaculizaron la consolidación de esas democracias en la mayoría de los nuevos estados. En el primer mundo, en cambio, se afianzó el estado de bienestar como resultado tanto de las condiciones requeridas para el desenvolvimiento del capitalismo, como de las coaliciones sociales que impulsaron su creación. En el bloque soviético, Moscú puso en marcha la revisión crítica del estalinismo, y este giro provocó la irrupción de protestas en algunos países de Europa del Este, por parte de comunistas disidentes, obreros e intelectuales, que percibieron el fin del terror como la brecha para plantear sus demandas y flexibilizar la relación con Moscú.

Los años dorados en el ámbito capitalista

La expansión fue producto de la exitosa combinación de tres factores: la hegemonía económica, ideológica, política y militar de los Estados Unidos, la extendida industrialización sobre la base del fordismo, y el consenso respecto a la intervención del estado para evitar el impacto de la fase recesiva del ciclo económico y garantizar la provisión de servicios sociales básicos al conjunto de la población.

En 1945 no existían dudas acerca del enorme poder de los Estados Unidos. Su fuerza militar había sido decisiva para poner fin a la guerra. El lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Japón confirmó su superioridad técnica y militar. En la inmediata posguerra, la economía norteamericana representaba el 50% del producto interno bruto del mundo, poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, producía la mitad de las manufacturas mundiales, y su moneda –el dólar– era el pilar central del sistema monetario y comercial internacional.

Un rasgo novedoso del período de posguerra, junto con las altas tasas de crecimiento, fue que sólo hubo recesiones débiles. La consolidación del crecimiento económico en los centros capitalistas trajo aparejado, como en la era del imperialismo, el incremento del comercio mundial y las inversiones en el exterior. Pero ahora los capitales estadounidenses reemplazaron a los británicos y no hubo migraciones internacionales como las del capitalismo global de fines del siglo XIX. Los números no dejan dudas sobre la pertinencia del término "años dorados": entre 1957 y 1973, el poder de compra se duplicó y la tasa de desempleo, hasta 1967, fue inferior al 2%.

La hegemonía de los Estados Unidos

La desconfianza en la capacidad autorreguladora de los mercados y la fuerza de las ideas de planificación e intervención del estado en la economía –legitimadas por la crisis liberal y por el éxito de la experiencia soviética, el New Deal y el esfuerzo bélico– configuraron el ambiente intelectual y político que dio a luz el acuerdo de Bretton Woods.

Entre la rigidez del patrón oro y la inestabilidad de los años de entreguerras, se buscó una fórmula intermedia para que los países signatarios del acuerdo tuvieran derecho a ampliar el margen de fluctuación de sus monedas frente al dólar cuando se produjera algún "desequilibrio fundamental" en las cuentas externas. Esta flexibilidad garantizaría el ajuste del balance de pagos, sin caer en la recesión cuando este fuera deficitario.

Bretton Woods

El nuevo sistema tuvo en cuenta los aportes de John Maynard Keynes, aunque se apartó en varios puntos de sus ideas. El economista inglés, que venía bregando por un nuevo contrato social desde la primera posguerra, intentó reproducir en el plano internacional una arquitectura institucional que permitiera limitar el poder desestabilizador de las finanzas privadas. Su propuesta estaba centrada en la creación de un Banco Central capaz de emitir y gestionar una moneda internacional (bancor). Esta institución cumpliría la función de regular la liquidez internacional, minimizando el riesgo de las devaluaciones o valorizaciones excesivas de las monedas domésticas. La existencia de un "estabilizador automático" ampliaría los grados de libertad de los gobiernos nacionales para implementar las políticas contracíclicas necesarias a fin de mantener el pleno empleo, y, de ese modo, contribuir a la estabilidad social en el marco de las democracias liberales

y las economías de mercado. También propuso la formación de un “fondo para la reconstrucción y el desarrollo”, destinado a la concesión de créditos a los países de bajos ingresos, y, por último, la creación de una organización internacional del comercio que se ocuparía especialmente de la estabilidad de los precios de los bienes de exportación primarios. El Tesoro de los Estados Unidos no estaba dispuesto a limitar su autonomía en nombre de un arreglo burocrático que reconocía la existencia de un prestamista global en última instancia. Harry Dexter White, el representante estadounidense, aceptó parcialmente la propuesta de Keynes y finalmente se aprobó un modelo en el cual el dólar mantenía su posición de divisallave para los intercambios y las inversiones.

El régimen monetario oro-dólar era políticamente atractivo porque estabilizaba las monedas para promover el comercio y la inversión internacionales, pero sin atar excesivamente las manos de los gobiernos como lo hiciera el patrón oro a fines del siglo XIX. Este marco más laxo posibilitó que, frente a la grave escasez de dólares, las principales monedas europeas tuvieran devaluaciones superiores a un 30% en los años de la posguerra. Esta nueva arquitectura monetaria y financiera tuvo en principio un pilar inamovible: que los Estados Unidos mantuvieran su voluntad y capacidad de vender oro a 35 dólares la onza a los bancos centrales extranjeros cuando estos se lo pidieran, lo cual implicaba que Washington emprendiera acciones en los momentos en que el déficit comercial amenazara con provocar una pérdida precipitada de oro en la Reserva Federal.

A diferencia de lo ocurrido en la primera posguerra, se pasó por alto el pago de reparaciones y de créditos de guerra. En su lugar se aplicaron políticas de dinero barato y se propició la liberalización del comercio. Los gobiernos controlaron el movimiento de capitales a fin de evitar la acción desestabilizadora de los flujos volátiles, que tanto había incidido luego de 1918. Pero, básicamente, el impacto de los movimientos bruscos del capital financiero fue débil porque las economías nacionales de los países centrales ofrecían atractivas ganancias a las inversiones productivas.

Después de Bretton Woods se fundaron el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo –o Banco Mundial– y el FMI, pero no se concretó la creación de la Organización Internacional del Comercio. A los intereses proteccionistas les parecía que se avanzaba demasiado hacia el librecambio. No obstante, el comercio internacional se liberalizó a través del Tratado General sobre Aranceles y Comercio (GATT). El GATT era un foro donde los países industrializados consultaban y negociaban su política comercial en un sentido cada vez más aperturista, a través de las sucesivas reducciones de los gravámenes aduaneros y la disminución de los obstáculos no tarifarios del comercio. A principios de 1995, con la fundación de la Organización Mundial de Comercio, el GATT se transformó en un organismo institucional.

Los intercambios internacionales se desarrollaron principalmente entre las economías capitalistas centrales. La diferencia de productividad entre estos países era tan significativa que los bienes de equipo estadounidenses siempre encontraban compradores en Europa y Japón. En consecuencia, la balanza comercial de los Estados Unidos era en aquellos tiempos sistemáticamente excedentaria. El restringido poder de compra de Europa y Japón se resolvía con préstamos del estado norteamericano e inversiones exteriores de las firmas estadounidenses. Washington se comprometió con la reconstrucción de Europa mediante el Plan Marshall y con la de Japón a través de un programa similar desde la guerra de Corea. Con el paso del tiempo, la balanza de pagos estadounidense empezó a ser deficitaria.

Los países europeos y Japón combinaron las tecnologías de alta productividad, promovidas originalmente en los Estados Unidos, con una fuerza laboral más pobremente retribuida que en la

superpotencia, lo cual posibilitaba tasas de ganancia que atraían la inversión de capitales. Durante los primeros años de la década de 1960 este crecimiento no afectó negativamente la producción y los beneficios en los Estados Unidos. Los bancos y las empresas multinacionales estadounidenses necesitaban condiciones rentables para seguir invirtiendo en el exterior. Además, los Estados Unidos modificaron su actitud respecto al ingreso de mercancías extranjeras. Las empresas europeas y japonesas fueron habilitadas a vender sus productos en el enorme mercado norteamericano.

En la segunda posguerra creció la inversión internacional conducida por las corporaciones multinacionales y se relegaron los créditos a largo plazo, modalidad dominante hasta la Primera Guerra Mundial, que prácticamente desapareció con la crisis de 1929. En los años dorados, las corporaciones que construían fábricas en distintos países fueron los principales inversores internacionales. Por otra parte, el grueso de la inversión directa extranjera estuvo en manos de empresas estadounidenses. Y a partir de los años setenta, las grandes empresas europeas occidentales y japonesas se sumaron a esta tendencia.

Otro fenómeno importante para la reorganización del capitalismo fue el crecimiento del comercio entre las compañías multinacionales. En 1970, el 25% del total del comercio mundial se realizaba entre filiales de una misma multinacional. El poder de estas corporaciones quedó registrado en cifras contundentes: el volumen de ventas de la Ford, por ejemplo, sobrepasó el PNB de Noruega.

La política de la potencia hegemónica, volcada hacia la “contención del comunismo” y decidida a mantener un mundo seguro y abierto para la libre empresa, procuraba el éxito económico de sus aliados con el fin de favorecer la consolidación del orden capitalista de posguerra. Esta política no tenía precedentes históricos, ya que las grandes potencias del pasado no habían apoyado el resurgimiento de sus competidores económicos potenciales, como lo hicieron los Estados Unidos en el período de posguerra mediante los préstamos a bajo interés, las subvenciones directas, la asistencia tecnológica, las relaciones comerciales favorables y el establecimiento de un contexto institucional multilateral para la estabilidad internacional.

Las inversiones productivas de las multinacionales estadounidenses incidieron en las tramas sociales e institucionales de los países receptores. La inversión directa aportó las empresas de consultoría y asesoramiento, las escuelas empresariales, las agencias de inversión, los auditores, las reglas jurídicas y las instituciones que enmarcarían el funcionamiento de un capitalismo cada vez más global. Allí donde esto no ocurrió, como en Japón, los vínculos del país receptor con la potencia hegemónica se basaron sobre todo en la subordinación militar y en la dependencia de sus dictámenes a la hora de trazar los lineamientos de su política exterior.

Washington surgió a la cabeza del imperio global como algo más que un mero agente de los intereses particulares del capital estadounidense. También asumió responsabilidades en la construcción y la gestión de un capitalismo global al resolver una contradicción básica del capital: el hecho de que la acumulación económica requiere un orden internacional relativamente estable y predecible, mientras que el poder político se reparte entre estados que compiten entre sí. Esto fue posible porque las instituciones desarrolladas entonces por la superpotencia ofrecieron un marco para que sus aliados euroasiáticos pudieran crecer de forma aceptable y favorecer al mismo tiempo, de buena gana, a su protector. Pero también fue factible en virtud de la legitimidad que la democracia estadounidense otorgaba a Washington en el resto de los países centrales. El peso de las ideas liberaldemocráticas y la consistencia y estabilidad de las normas jurídicas y de la vida política estadounidense dieron un manto de credibilidad a la afirmación de que los Estados Unidos actuaban en nombre de la democracia y la libertad.

Hacia finales de la guerra, el presidente Roosevelt estaba convencido de que el caos de la posguerra sólo podría superarse mediante una reorganización fundamental de la política mundial. La institución clave sería la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su compromiso con el deseo universal de paz y con el afán de las naciones

pobres de independizarse y alcanzar la igualdad con las naciones ricas. En última instancia, Roosevelt pretendía un New Deal a escala mundial, que requeriría generosas donaciones de los Estados Unidos para superar la catástrofe de la guerra. Sin embargo, el Congreso y la comunidad empresarial estadounidenses fueron más pragmáticos en sus cálculos de los costos y los beneficios financieros de la política exterior. No estaban dispuestos a proporcionar los medios necesarios para llevar a la práctica un plan que consideraban poco realista. Aunque la propuesta de Truman fue más modesta que la de Roosevelt, su gobierno tampoco contó con el apoyo político y social necesario para obtener los recursos requeridos por el nuevo papel de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Sin embargo, como diría el secretario de estado Dean Acheson, "sucedió lo de Corea y nos salvó". Frente al avance de los comunistas coreanos ya no hubo dudas respecto a asignar los fondos necesarios para armar a la superpotencia que salvaría a la democracia mundial.

La "amenaza" del enemigo no sólo facilitó la decidida intervención de los Estados Unidos en el escenario mundial, sino que disparó una campaña interna de control y represión que recayó básicamente sobre el mundo de la cultura, con la expulsión de "los rojos". En 1947 inició sus actividades la Comisión de Actividades Antiamericanas presidida por el senador Joseph McCarthy, quien, junto con el director del FBI Edgar Hoover, puso en marcha una operación que estimuló la delación entre vecinos y familiares. Todo ciudadano era un potencial sospechoso. McCarthy veía comunistas infiltrados en el Departamento de Estado, en el Pentágono, en Hollywood, en el teatro de Broadway, en los medios de comunicación y en las universidades. El conservadurismo dominante revisó la legislación laboral aprobada bajo el New Deal y en 1947 fue votada la ley Taft Hartley, que impuso controles a la afiliación política de los dirigentes obreros y restringió el derecho a la huelga.

El giro hacia el centroizquierda de la década de 1960 se puso de manifiesto en el ajustado triunfo electoral de Kennedy sobre Nixon. El nuevo presidente, demócrata y católico, se rodeó de "los mejores y los más brillantes": sus asesores eran principalmente jóvenes académicos vinculados con el mundo de las ideas y no del campo empresario, como había sido el caso del equipo de su antecesor, Dwight Eisenhower.

En el plano internacional, se comprometió con "la defensa del mundo libre" a través de la activa contención del comunismo. A los tres meses de haber asumido la presidencia, Kennedy aprobó la invasión de la Bahía de Cochinos para derrocar al gobierno de Fidel Castro en Cuba. En octubre de 1962 forzó a Kruschev a retirar los misiles que el gobierno soviético comenzaba a instalar en Cuba, imponiendo un bloqueo total a la isla. También involucró decididamente a su país en el conflicto vietnamita.

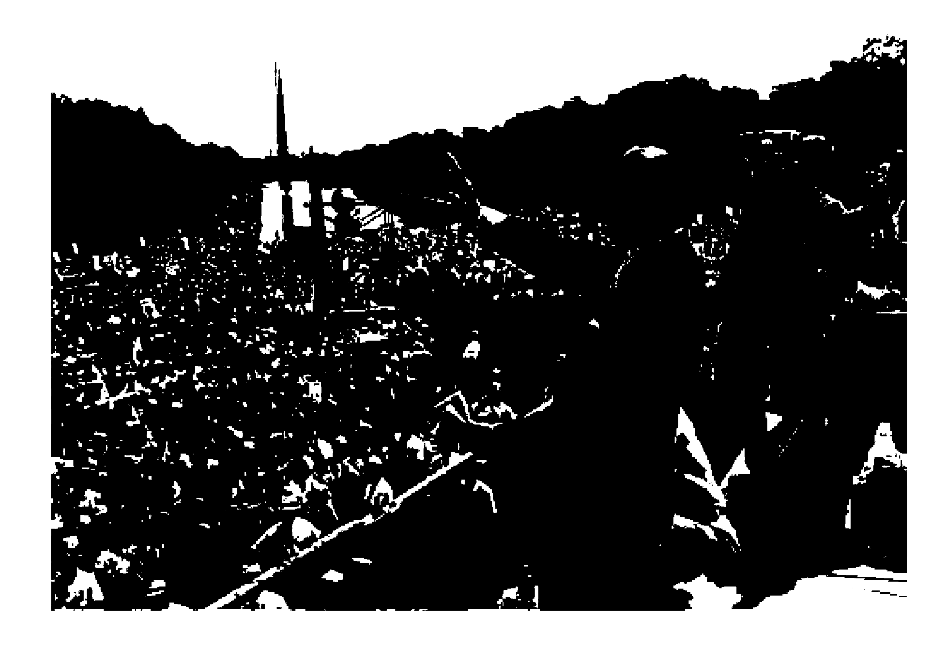
En el plano interno, Kennedy propuso avanzar hacia una "nueva frontera". Si en el pasado los Estados Unidos habían crecido ofreciendo posibilidades de ascenso social a través de la expansión hacia el oeste, en el presente, por medio de los gastos federales, se ampliaría y profundizaría la intervención gubernamental para garantizar la educación y la atención médica, así como para evitar las recesiones. La mayoría de los proyectos de Kennedy no fueron aprobados por el Congreso, que los sancionó después de su muerte bajo la presidencia de Johnson.

La sociedad norteamericana sufrió cambios significativos en la edad dorada. Algunos de ellos vinculados con la política de los gobiernos demócratas, más atenta que la republicana a los programas de bienestar social para disminuir la pobreza; otros derivados del crecimiento económico y la expansión del consumo, y otros producto de la movilización de los jóvenes y de los negros, que cuestionaban la guerra de Vietnam y la discriminación racial.

El 1º de diciembre de 1955, Rose Parks –reconocida como "la madre del Movimiento por los Derechos Civiles"– se rehusó a levantarse de su asiento en un autobús público para dejárselo a un pasajero blanco, tal como estipulaban las reglas de la compañía del estado de Alabama. Rose fue detenida. En la acción de protesta organizada por los activistas afronorteamericanos intervino el joven pastor de una iglesia

bautista local: Martin Luther King. El boicot contra la compañía de autobuses de Montgomery duró un año, hasta que una corte federal ordenó a la empresa levantar la reglamentación discriminatoria. El éxito del reclamo transformó a Luther King en una figura nacional. En 1964 recibió el premio Nobel de la Paz. A comienzos de 1967 se vinculó con dirigentes del movimiento contra la guerra de Vietnam, independientemente de su color.

Yo tengo un sueño



Martin Luther King, en los escalones del monumento a Lincoln, en Washington DC, el 28 de agosto de 1963, pronunciando un discurso que sería emblemático.

Yo tengo un sueño. Sueño que un día, en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño.
Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. ¡Yo tengo un sueño hoy! [...]
Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día cuando todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, sean capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo *spiritual* negro: "¡Por fin somos libres! ¡Por fin somos libres! Gracias a Dios todopoderoso, ¡por fin somos libres!".

BBC MUNDO, jueves 28 de agosto de 2003.

Crecimiento económico y moderación política en Europa

Al concluir las batallas de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba arrasada. Las pérdidas humanas habían sido infinitamente superiores a las de la Primera Guerra. Aunque hubo escasos cambios de fronteras, se produjeron masivos y traumáticos desplazamientos de población, los bombardeos habían destruido ciudades enteras y las vías de comunicación estaban severamente dañadas. La penuria alimentaria y la falta de productos de consumo desembocaron en severos racionamientos, inflación y auge del mercado negro.

En la primera posguerra la democracia había sido violentamente desplazada, en parte por la ineficacia de los gobiernos parlamentarios y en gran medida porque la movilización de los pueblos logró ser canalizada, en una extensa franja del continente, por una derecha radical que despreciaba las incertidumbres y la ausencia de opciones totalizadoras, distintivas del orden democrático. En cambio, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el sistema democrático se expandió en gran parte del mundo y los analistas políticos hablaron de la segunda (1943-1962) y la tercera ola democratizadoras (iniciada en 1974 con la caída de las dictaduras del sur europeo). Detrás de esta fuerza recobrada hubo dos importantes factores: la revalorización de la democracia por aquellas sociedades que habían pasado por la experiencia del fascismo, y el fuerte vínculo entre el desenvolvimiento exitoso del capitalismo y la constitución de estados de bienestar que desalentaban los planteos más radicalizados de transformación social y política en las clases trabajadoras.

Hacia fines de la guerra, el péndulo político de Europa se orientaba hacia la izquierda. Las elites conservadoras estaban desacreditadas por haber colaborado con los fascistas, pero los comunistas, en cambio, habían aumentado su prestigio a partir de su papel protagónico en la Resistencia, cuando su disciplina, su espíritu de sacrificio y su fe en la causa por la que luchaban les permitieron liderar las batallas por la liberación de 1944-1945. En esos años, zonas enteras del sur de Francia y del norte de Italia estuvieron en manos de guerrilleros comunistas; no obstante, los partidos de este signo no se plantearon fomentar la insurrección armada mientras continuase la guerra. No hubo nada parecido al izquierdismo polarizador de 1917-1920; en 1944-1945 los comunistas priorizaron el antifascismo, defendiendo la unidad nacional, la victoria en la guerra y la restauración de la democracia.

En la posguerra, se convirtieron en la fuerza mayoritaria de la izquierda en Italia, Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria y Grecia. Los comunistas participaron en los gobiernos de Francia e Italia hasta 1947, y en la mayor parte de Europa Occidental –excepto en Alemania Occidental– hubo gobiernos reformistas con gravitación de los socialistas. El electorado británico, por ejemplo, sorprendió en 1945 a los máximos dirigentes políticos cuando delegó el ejercicio del gobierno al Partido Laborista, sobre todo teniendo en cuenta que los conservadores habían liderado exitosamente la lucha contra los nazis.

No obstante, la reconstrucción en marcha tuvo un sesgo social y político muy moderado, alejado de la democratización radical esgrimida durante la Resistencia. Las nacionalizaciones no cuestionaron el orden capitalista, y en muchos casos socorrieron a grandes propietarios en problemas, que siempre recibieron importantes compensaciones. En las fábricas, se evitó la autogestión y el control obrero. La descolonización no fue aceptada como un derecho de los pueblos sometidos, incluso en algunos casos fue violentamente reprimida, y sólo fue consentida debido a la debilidad de la metrópoli, o a su inevitabilidad. En la posguerra, la expansión comunista sólo se dio en aquellos países liberados del fascismo por las tropas soviéticas o bien en las colonias –entre ellas Indochina– o en países fragmentados como China, donde los comunistas tuvieron un papel protagónico en las luchas por la liberación y la unidad nacional.

La definida conformación de dos bloques enfrentados a partir de 1947 contribuyó al giro hacia el centroderecha de la mayor parte de los países europeos. En el marco de la Guerra Fría, la política exterior de los gobiernos europeos occidentales fue decididamente anticomunista, aunque sin el grado de histeria estadounidense. Por su parte, los partidos comunistas de esos países, con el beneplácito de Moscú, abandonaron la estrategia colaboracionista y se abocaron a la organización de la protesta contra los programas que privilegiaban la reconstrucción económica en desmedro de la atención a las carencias sociales. Aunque el peso de la izquierda en los gobiernos retrocedió, se mantuvo el consenso respecto a algunas de sus premisas básicas: era incuestionable que los gobiernos debían actuar enérgicamente para sacar a las sociedades de la situación crítica que había legado la guerra.

La reconstrucción de los años cincuenta estuvo dirigida casi en todas

partes por gobiernos de centroderecha moderados. El nuevo consenso anticomunista, asociado al proceso de constitución de los dos bloques, posibilitó la recuperación de sectores de las elites políticas tradicionales e hizo que Europa pasara a ocupar una posición subordinada en el bloque occidental organizado bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Hubo cambios en el sistema de partidos que contribuyeron a la legitimación de la democracia, entendida como un orden estable, competitivo electoralmente y eficaz para promover el crecimiento económico: la desaparición de la extrema derecha se combinó con la consolidación de la democracia cristiana y con una izquierda no revolucionaria. Como la reconstrucción dio paso a un crecimiento económico espectacular y no hubo fuerzas políticas que cuestionaran la supervivencia del capitalismo, las diferencias se plantearon en torno a un mayor o menor dirigismo económico, a la constitución de un sector público más o menos extendido, y al grado de participación de las organizaciones obreras en la gestión de las empresas.

Un dato relativamente novedoso fue la consolidación de la democracia cristiana. Los partidos católicos ya eran conocidos en Europa continental: tenían un fuerte arraigo en Holanda y Bélgica, y en el período de entreguerras tuvieron una presencia significativa en Alemania, Austria e Italia. Lo nuevo fue que, a partir de 1945, comenzaron a ejercer una atracción sostenida y mucho más amplia en la sociedad. En parte se beneficiaron con la ausencia de la derecha tradicional, que no dejó otra opción a los conservadores católicos que votar a los democratacristianos a pesar de su sesgo reformista. Fueron además los mayores beneficiarios del voto femenino. El discurso de la democracia cristiana eludió el conflicto social y recogió las demandas a favor de las reformas sociales dentro de un marco de estabilidad, definiéndose por un estado interventor sin caer en el socialismo. De esta manera, los democratacristianos desempeñaron un papel protagónico en los gobiernos de Alemania Occidental, Italia –en ambos casos con ayuda de los Estados Unidos–, Bélgica, Holanda y Austria.

En la década de 1960, los gobiernos se desplazaron hacia la izquierda. Este ascenso, básicamente de la socialdemocracia, no fue consecuencia del giro del electorado –43,27% de votos a la izquierda en la década de 1950 y 43,87% en la de 1960– sino de su habilidad para formar coaliciones con otros partidos. En la mayoría de los países europeos –excepto Francia e Italia–, los comunistas no lograron captar una adhesión electoral importante.

En los años prósperos hubo un aumento sin precedentes de los ingresos y las ganancias, paralelo al gran incremento de los recursos del estado procedentes de los impuestos. Esto permitió financiar la expansión de las ciudades, los sistemas de transporte y la educación en todos los niveles. Con la consolidación del moderno estado de bienestar, el gasto en programas sociales (pensiones, salud, educación, vivienda y subsidios) representó la mayor parte del gasto público total, y los trabajadores en el área de bienestar social constituyeron el conjunto más nutrido de empleados públicos: 40% en Gran Bretaña y 47% en Suecia, por ejemplo.

Las coberturas brindadas por el estado abrieron nuevas posibilidades para organizar la vida propia con menor dependencia del núcleo familiar y de la condición de asalariado. El ánimo general se volvió cada vez más confiado y optimista y hubo un marcado sesgo hacia el afianzamiento del individualismo.

El avance de la socialdemocracia, que sólo se hizo fuerte en Europa, no se tradujo en reformas radicales. En la segunda posguerra los partidos socialistas dieron un giro significativo. La expresión más evidente de este cambio fue el nuevo programa aprobado en Bad Godesberg en 1959 por el socialismo alemán. En las dos primeras décadas del siglo XX, los socialistas habían aceptado los procedimientos y las instituciones liberal-democráticas en el plano político. Después de 1945 se dio un nuevo paso, con el reconocimiento de la posibilidad de gestionar el capitalismo para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción ya no se consideraba posible, y además resultaba poco deseable debido a la renovada valoración del aporte de los capitalistas para la promoción de una economía exitosa. La

socialdemocracia sueca fue la primera en reconocer, en los años treinta, las bondades de la tríada integrada por los pactos corporativos, el estado social y la propiedad privada de los medios de producción. Esta fórmula fue acogida con beneplácito por la mayoría de los socialdemócratas del norte europeo, sin que pueda hablarse de un modelo único. Los gobiernos socialistas recorrieron distintos caminos en función de los diferentes contextos nacionales en una serie de cuestiones centrales: por un lado, la forma en que se vincularon con los sindicatos; por otro, el grado de compromiso con que los socialistas intervenían en el desarrollo del estado de bienestar, y por último, el peso electoral, que les permitía definir su autonomía y permanencia en el gobierno.

La socialdemocracia alcanzó sus mayores éxitos electorales en Escandinavia, especialmente en Suecia. En Noruega y Dinamarca su primacía no fue tan definida, pero el socialismo fue en líneas generales la fuerza gobernante durante los años sesenta. En estos tres países los gobiernos de izquierda descartaron la nacionalización de las empresas y contaron en su haber, para incidir en el rumbo de la economía, con la fuerte cooperación entre el partido socialdemócrata y un movimiento sindical cohesionado y con alto grado de afiliación. El estado de bienestar escandinavo fue el que más avanzó en la desmercantilización de la fuerza laboral, ofreciendo coberturas que permitían, durante períodos, vivir sin depender del salario. Aunque el afianzamiento de los socialistas fue más tardío y la seguridad social menos consistente, muchos autores ubican a Finlandia en este grupo.

En el resto de los países del norte europeo –Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Suiza y Bélgica–, los socialistas tuvieron una participación más restringida en el gobierno y asumieron un menor compromiso con las políticas de pleno empleo y la prestación generalizada de servicios sociales de alta calidad. Alemania compartió con Italia el hecho de que la Democracia Cristiana fuese el principal partido gobernante, pero los democratacristianos alemanes, en contraste con los italianos, mantuvieron una fuerte cohesión interna, fueron mucho menos dependientes de las alianzas con otras fuerzas y en los años sesenta debieron abandonar el gobierno, derrotados por la socialdemocracia.

Los laboristas británicos fueron uno de los más decididos en instrumentar las nacionalizaciones y, en un principio, los conservadores no cuestionaron a fondo este rasgo de la economía. En contraste con la socialdemocracia, el laborismo tuvo un vínculo muy débil y cargado de tensiones con el movimiento sindical, y en el plano social se preocupó básicamente por atender las carencias de los más débiles, sin instrumentar políticas de pleno empleo ni garantizar una cobertura social con los niveles de calidad y extensión logrados por los escandinavos.

En Irlanda el socialismo nunca pasó de ser un socio menor muy débil, mientras que en Suiza, Holanda y Bélgica los socialistas o los laboristas fueron miembros de gobiernos de coalición en los que predominó el centroderecha (Suiza) o la democracia cristiana (Holanda y Bélgica).

De Gaulle dominó el escenario político en Francia durante la mayor parte de los años dorados. Los socialistas recién llegaron al gobierno a principios de la década de 1980, cuando la era de prosperidad había concluido, y debieron afrontar problemas que no habían afectado la gestión de sus pares del norte.

La situación en los países mediterráneos fue muy diferente. Portugal y España vivieron hasta la década de 1970 bajo regímenes dictatoriales instaurados en el período de entreguerras: el Estado Novo y el franquismo, respectivamente. En Grecia, después de la derrota militar de los comunistas en 1949, los conservadores controlaron el poder con un definido sesgo antiizquierda y antiliberal, y el apoyo de diferentes sectores del medio rural. Los militares tomaron el gobierno en 1967 y, junto con una intensa represión en el plano interno, intentaron anexionar Chipre y estuvieron al borde de entrar en guerra con Turquía. El fracaso en esta empresa obligó a la junta de coroneles a dejar el gobierno en 1974. Los socialistas llegaron al gobierno en estos tres países en los años ochenta, al concluir el ciclo de las dictaduras, y, en principio, sus críticas al capitalismo fueron más radicales que las de la socialdemocracia del norte.

El rápido e intenso crecimiento económico de los años dorados fue acompañado por un importante grado de estabilidad social que recién se quebró a fines de los años sesenta. En 1968, cuando la exitosa combinación de fordismo y keynesianismo se agrietaba, se produjo una extendida movilización que conjugó la crítica de los jóvenes universitarios a la sociedad de consumo y a la autoridad de sus mayores –la llamada contracultura– con la protesta obrera en pos de aumentos salariales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. El número de huelgas, huelguistas y cantidad de jornadas laborales perdidas aumentó considerablemente en Francia, Bélgica, Italia, el Reino Unido y Alemania Occidental entre 1968 y 1973. Los conflictos abiertos no fueron los únicos indicadores de la crisis en el mundo del trabajo, que también se manifestó de diversas maneras en la vida cotidiana de las empresas: ausentismo, rotación del personal, baja calidad del trabajo y casos de sabotaje. En estas protestas se conjugaron tres temas: el rechazo del trabajo por parte de los jóvenes, el repudio de los obreros no calificados hacia las jerarquías y las tareas rutinarias y segmentadas de la producción en serie, y la exigencia de autonomía y mayor participación en la organización del trabajo por parte de los técnicos y profesionales. No hubo una revolución, pero sí una crisis social profunda.

La Comunidad Económica Europea

La reconstrucción europea se combinó con el proceso de unificación de los países miembros de este continente. Durante siglos, Europa había sido escenario de guerras frecuentes, aunque hubo un largo período de paz entre 1815 y 1914. Al concluir la Segunda Guerra, en algunos círculos políticos e intelectuales prosperó la idea de una unidad europea que operara como valla para futuros conflictos armados. Entre diferentes grupos y personalidades se abrió paso un movimiento que impulsaba la creación de los Estados Unidos de Europa. La iniciativa contó a su favor con la experiencia de la resistencia antifascista, que vinculó a todos aquellos que, en los distintos países, rechazaron el nazifascismo.

La empresa de construir una entidad supranacional de carácter político estuvo signada por las rivalidades nacionales, especialmente entre Francia y Gran Bretaña, y las divergencias entre los grupos adherentes respecto de la naturaleza de la futura comunidad, su organización política y su desenvolvimiento económico. Finalmente, en mayo de 1949 los representantes de Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia aprobaron el estatuto de un Consejo de Europa –vigente hasta hoy–, al que luego se sumaron Grecia (1949), Turquía (1949), Islandia (1950), la República Federal de Alemania (1950), Austria (1956), Chipre (1961), Suiza (1963) y Malta (1965). Aunque resultó débil, este vínculo expresó el interés político por forjar un campo común entre los países que defendían el sistema democrático y el respeto de los derechos humanos.

Con la puesta en marcha del Plan Marshall, en 1948 se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea (OECE), con el mandato de manejar los fondos entregados por los Estados Unidos. La OECE contribuyó a la unidad vía la liberalización del comercio entre los estados miembros, alentando los acuerdos monetarios y propiciando la cooperación económica. Un paso clave para la integración fue la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). El impulso provino de la decisión norteamericana y británica de reconstruir la economía de Alemania Occidental, que provocó cierto escozor en Francia y los Estados del Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo). Estos países solicitaron imponer un control internacional sobre el desarrollo de la industria pesada alemana y que se asegurara el suministro de carbón del Ruhr a sus propias industrias. A través de la explotación mancomunada de esos recursos se pretendía aumentar la eficiencia para lograr un mayor grado de competitividad de la industria pesada europea respecto a la

norteamericana y la soviética, y así ganar mercados en el Tercer Mundo.

El paso decisivo se dio el 25 de marzo de 1957, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo, Francia y los Países Bajos firmaron los Tratados de Roma para la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Lo que se aprobó fue básicamente una unión aduanera, de ahí el nombre de Mercado Común asignado por la opinión pública. En Roma se acordó una transición de doce años para la total anulación de los aranceles entre los países miembros, pero el plazo se acortó ante el éxito económico asociado a la mayor fluidez de los intercambios comerciales. El 1º de julio de 1968 se suprimieron todas las barreras aduaneras internas y se impuso un arancel común para los productos procedentes de terceros países. Este mercado común estaba limitado a la libre circulación de bienes, ya que el movimiento de personas, capitales y servicios siguió sufriendo importantes restricciones.

La progresiva integración económica, según sus adalides, allanaría el camino hacia el objetivo final de la unión política. En este sentido, la CEE creó una serie de instituciones –la Comisión, el Consejo, la Asamblea Europea (posteriormente el Parlamento), el Tribunal de Justicia y el Comité Económico Social– cuyas competencias se fueron ampliando y complejizando en los diversos acuerdos que modificaron el tratado inicial de Roma.

En un principio, el Reino Unido se mantuvo al margen de la unidad con el continente porque le restaba libertad de acción internacional y subordinaba su política económica a organismos supranacionales. Cuando la buena marcha de la Comunidad indujo al gobierno británico a solicitar su ingreso, De Gaulle vetó en dos oportunidades su incorporación. El presidente francés, resuelto a construir una "Europa de las patrias" independiente de las dos superpotencias, observaba con recelo la estrecha vinculación británica con Washington. Pese a defender una Europa fuerte para frenar a Washington y Moscú, De Gaulle nunca creyó en una Europa unida políticamente; desde su perspectiva, la autonomía nacional francesa no era negociable. Finalmente, en 1973 nació la Europa de los Nueve cuando, sin De Gaulle en el gobierno, el Reino Unido se sumó a la Comunidad junto con Dinamarca e Irlanda.

El "milagro japonés"

Sobre la indefensa población civil de Japón cayeron dos bombas atómicas que tuvieron terribles y dolorosas consecuencias inmediatas y a largo plazo. La guerra dejó un tendal de millones de desocupados, la destrucción generalizada de viviendas y plantas industriales, una inflación creciente y un país ocupado por las fuerzas militares norteamericanas. Los japoneses recién recuperarían el control de su gobierno con la firma del Acuerdo de Paz de San Francisco, en 1952.

Bajo la ocupación estadounidense, la monarquía japonesa adoptó las normas formales de la democracia liberal, pero esto no modificó la cuestión de "quién tenía el derecho último a determinar la agenda del país". Las grandes burocracias conservaron su poder sin tener que rendir cuentas ni al emperador ni a la Dieta, y el poder judicial siguió siendo nominalmente independiente.

Sin embargo, dos cosas cambiaron. Por un lado, las burocracias anteriores –que controlaban el ejército y el Ministerio del Interior– quedaron fragmentadas, mientras que los ministerios de Finanzas y de Industria y Comercio Internacional se mantuvieron intactos. Por otro, los Estados Unidos asumieron dos funciones claves en nombre de Japón: proporcionar seguridad nacional y dirigir las relaciones exteriores. La superpotencia capitalista brindó un paraguas militar y de seguridad que volvió innecesaria la política exterior y los dispositivos de seguridad independientes. Pero también ofreció un paraguas económico que, entre otras cosas, aseguraba el acceso al mercado mundial de las mercancías japonesas con un tipo de cambio competitivo, es decir, subvalorado. Este vínculo ahorró a Japón gastos

militares, le permitió contar con las avanzadas tecnologías estadounidenses y le dio acceso al más importante mercado de consumo del mundo capitalista, el de los Estados Unidos. Este vínculo especial, en el marco de la Guerra Fría, se gestó a partir de la guerra de Corea.

Para comprender el "milagro japonés", es necesario recordar que la decisión de propiciar el desarrollo industrial y así evitar la pérdida de la soberanía estatal había arraigado en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda posguerra, el país ya contaba con un notable desarrollo tecnológico interno y con capacidades organizativas y sociales que le permitieron dar el gran salto hacia adelante a partir de 1950.

En el plano interno, los dos pilares centrales para alcanzar las ambiciosas metas económicas fueron el papel del estado como guía y garante de las inversiones destinadas a las grandes corporaciones y la trama de relaciones económicas y socioculturales que respaldó las normas de producción y de consumo. La producción masiva asociada al mercado de consumo, distintiva de la edad dorada, tuvo en Japón marcados contrastes respecto a los pactos fordistas y los estados de bienestar europeos.

El suministro estatal de capital de bajo costo a las principales corporaciones se materializó en los grandes oligopolios –Mitsubishi, Mitsui, Sumtono y Fuji– a cargo de la producción industrial. El control estatal del sistema bancario dio a las autoridades una inmensa influencia sobre la inversión. Entre las décadas de 1950 y 1970, los bancos pusieron a disposición de la industria, y a muy bajo costo, los ahorros de las familias, canalizados mediante la Caja de Ahorro Postal. Este organismo fue el principal sostén financiero del sistema japonés. Una densa red de oficinas postales distribuidas en todo el país permitía recoger las enormes sumas provenientes del ahorro familiar. Estas se transferían al Ministerio de Finanzas, que a su vez utilizaba el dinero para absorber los bonos del Tesoro, financiar los proyectos de los políticos del partido gobernante en los distintos distritos del país, y apoyar el dólar. La Caja de Ahorro Postal ofrecía tipos de interés ligeramente más altos, tenía más sucursales y su servicio era más amigable que el de los bancos, muchas veces distantes del domicilio de los ahorristas. Los jefes de las oficinas de correos, particularmente en las áreas rurales, eran importantes figuras locales, a menudo relacionadas con el Partido Liberal Democrático que ocupaba el gobierno. El estado también controló las divisas adquiridas vía las exportaciones y la ayuda estadounidense.

Cuando el Ministerio de Industria y Comercio Internacional afirmaba que determinadas industrias eran "estratégicas", los bancos no dudaban en proveerles el capital necesario. Los responsables del rumbo económico de Japón juzgaban su rendimiento según los criterios de la aptitud tecnológica y la potencia industrial del país. Si la actividad siderúrgica era un prerrequisito para conseguirlas, todos los esfuerzos se destinaban a producir acero, aunque los bancos tuvieran que prestar a empresas no rentables, a intereses subvencionados, y se violaran las normas del libre mercado. El Ministerio de Finanzas conducía el sector financiero privado como el motor de la locomotora. La posibilidad de que un banco grande pudiera quebrar estaba básicamente descartada. Este circuito suponía la interrelación de las elites políticas y económicas, íntimamente vinculadas a través de redes personales y acostumbradas a coordinar sus decisiones en conversaciones informales. El excedente obtenido por las principales corporaciones gracias al capital barato y a la protección proporcionada por el gobierno no se "malgastó" en dividendos o aumentos de salarios, sino que se acumuló y se usó para expandir la capacidad productiva.

Gran parte del capital invertido provino del elevado nivel de ahorro de la población, porque el estado de bienestar social –muy pobre desde la perspectiva europea– exigía ahorrar para la vejez y el acceso a la costosa vivienda. Los trabajadores también eran explotados fuera del ámbito laboral: percibían intereses muy bajos por sus ahorros y el precio de la vivienda era altísimo. Las mujeres fueron doblemente sojuzgadas debido a la discriminación laboral y a su papel protagónico en la atención de las necesidades básicas de ancianos, niños y hombres en el hogar.

Con las relaciones exteriores y la seguridad en manos extranjeras, y la reconstrucción convertida en prioridad, el debate político casi desapareció. Este vacío obstaculizó la aparición de una prensa independiente y limitó la formación de grupos políticos e intelectuales capacitados para gestionar políticas públicas al margen del crecimiento económico. Las fuerzas de derecha se unieron para formar el Partido Liberal Democrático, que prácticamente ha controlado el gobierno hasta nuestros días a pesar de la intensa fricción entre sus distintas facciones.

El partido gobernante proporcionó cobertura política a la burocracia durante mucho tiempo sin interferir en sus planes, a cambio de financiación para mantener sus bases de poder: el ámbito rural y el hipertrofiado sector de la construcción. Al mismo tiempo, la burocracia mantuvo los sólidos vínculos con el empresariado, que tienen su origen histórico en la época Meiji, cuando "las funciones de dirigente político, alto funcionario y empresario no se distinguían claramente". Y aunque luego evolucionaron, continúan siendo mucho más estrechos y orgánicos y menos conflictivos que en los países occidentales.

Producción en masa y sociedad de consumo

Los países centrales se vieron atravesados por significativas transformaciones. Simplificando un proceso de múltiples dimensiones, podemos distinguir cinco cuestiones básicas: los cambios en el mundo laboral tras el afianzamiento del fordismo asociado al consumo masivo, la extendida urbanización, el nuevo papel de la mujer, la creciente presencia de la cultura joven y, por último, la consolidación del estado de bienestar.

El estado de bienestar

Fue uno de los pilares fundamentales del contrato social de la posgue rra, que articuló tres intervenciones claves. Por un lado, el gasto público contribuyó al aumento de las tasas de beneficios privadas mediante la concesión de subvenciones, la nacionalización de sectores ineficientes y la creación de empresas públicas que, por su alta composición orgánica de capital, exigían elevadas inversiones. Por otro, la planificación indicativa racionalizó la asignación de recursos vía las directivas de la burocracia estatal y las intervenciones anticíclicas –evitar la recesión o frenar la inflación– a través de las políticas monetarias, fiscales y crediticias. Por último, los programas de seguridad social generaron condiciones favorables para la relativa desmercantilización de la fuerza laboral.

La desmercantilización se produce cuando el estado presta un servicio como un asunto de derecho y cuando una persona, durante un lapso de tiempo y por determinadas causas, puede sostener una vida digna sin depender del mercado. Sobre la base del grado de desmercantilización existe un destacado consenso que reconoce tres tipos principales de estado de bienestar: el liberal, que se limita a ayudar a los pobres; el conservador, que refuerza la familia a través de la asignación de servicios al trabajador como jefe del hogar, y el socialdemócrata, que impulsa el pleno empleo de hombres y mujeres y brinda servicios sociales de alta calidad al conjunto de la población.

Las tres décadas de crecimiento económico se basaron, principalmente, en la difusión de las técnicas de producción masiva, el bajo costo de la energía, la expansión de los mercados de consumo y la gestión keynesiana. Un requisito clave para que los incrementos de productividad no desembocaran en una crisis de superproducción como la de 1930 consistió en que los trabajadores fuesen también los consumidores de los bienes producidos industrialmente. En este sentido, el círculo virtuoso incluyó el contrato laboral con límites rígidos para los despidos y el crecimiento del salario, actualizado en relación con el incremento de la productividad. La demanda sostenida y ampliada, junto con el crecimiento de la productividad, aseguró tasas de ganancias atractivas y, por ende, nuevas inversiones.

En Japón, dada la escasez de obreros calificados y la estrechez del mercado interno, existió una versión propia del trabajo en serie: el toyotismo. Este sistema promovió la existencia de fábricas más flexibles, capaces de ofrecer distintos modelos de un mismo producto y en cantidades acordes a una demanda más reducida. En lugar del trabajadormasa subordinado al ritmo de la cinta transportadora, una parte importante de los obreros japoneses recibió formación permanente para integrar equipos de trabajo capacitados en organizar sus tareas y resolver problemas sobre la marcha. El toyotismo fomentó la producción justa en el momento preciso y la reducción de gastos de supervisión y de control de calidad. Los compromisos entre industriales y trabajadores se decidieron en torno a tres factores: un sindicalismo de empresa de carácter cooperativo antes que conflictivo, el empleo vitalicio y las bonificaciones a la productividad. Pero el sistema industrial japonés también incluía el mercado de trabajo segmentado: una gran compañía matriz a la cabeza y una red de pequeñas empresas supeditadas. Las condiciones laborales de las unidades periféricas eran precarias y los salarios, bajos.

La reconstrucción de la Europa de posguerra requirió abundante oferta de fuerza laboral y elevadas inversiones de capital. La provisión de mano de obra procedió en principio –excepto en los Países Bajos y el Reino Unido– del medio rural. Así, en 1950, más de la mitad de los trabajadores japoneses, casi la mitad de los italianos y más de la cuarta parte en el resto de Europa Occidental se desempeñaban en el sector agrícola. También se sumaron los inmigrantes procedentes de los países más pobres del sur europeo y, algo más tarde, la emigración de las ex colonias. Estos desplazamientos fueron funcionales a los países receptores y emisores. Los primeros contaron con una mano de obra más barata, dispuesta a realizar las labores más ingratas, y para los segundos constituyó una vía que permitía descomprimir las presiones sociales y recibir las divisas enviadas por los emigrantes a sus familias. Los gobiernos no diseñaron una política inmigratoria sino que toleraron la llegada de los inmigrantes como una solución coyuntural. Pero los trabajadores extranjeros, en lugar de entrar y salir de acuerdo con la marcha del ciclo económico, se insertaron de manera permanente en esos países. En Japón, sin el aporte de los inmigrantes, los estrangulamientos en el mercado laboral condujeron al traslado de capitales hacia los países de Asia Sudoriental.

Una vez alcanzada la reconstrucción en la década de 1950, la mayor parte de la población europea tuvo acceso a productos –automóviles, heladeras, televisores– que antes de la guerra sólo habían estado al alcance de las familias con altos ingresos. La expansión del crédito contribuyó a la ampliación y el sostenimiento de la demanda. Esta creció bajo el doble impulso de los mejores ingresos y las técnicas publicitarias que promovían la satisfacción de los deseos a través de la compra de bienes o del uso del tiempo libre en actividades ofrecidas por el mercado. Los gastos destinados a cubrir las necesidades básicas –alimentación, vestimenta– redujeron su peso debido al aumento de los ingresos, y la demanda se orientó hacia bienes no materiales con el afán de mejorar la calidad de vida. Un fenómeno novedoso fue la incorporación de los adolescentes al mercado de consumo. La "cultura joven" fue un sector cada vez más atractivo para las industrias de la indumentaria, la música y la publicidad.

El crecimiento industrial impulsó la expansión del sector de los servicios en relación con las actividades requeridas por las grandes

unidades productivas y la comercialización de los bienes de consumo. Las grandes plantas industriales integradas verticalmente comenzaron a tercerizar sus actividades y, en consecuencia, proliferaron las consultorías jurídicas, los centros de investigación y diseño, las compañías financieras, las inmobiliarias y los centros de arquitectura directamente vinculados con el sector productor de bienes. La expansión de los servicios también fue alentada por el afianzamiento del estado de bienestar y los cambios en las pautas de la vida familiar, en gran medida derivados del ingreso de la mujer al mundo del trabajo. Desde el momento en que las mujeres salieron a trabajar fuera del hogar fue necesario que otros atendieran las necesidades de la familia: las casas de comidas, las lavanderías, los centros maternales, los geriátricos. La vida doméstica pasó a depender cada vez más de la asistencia proporcionada por los trabajadores del sector de servicios, aunque parte de la ayuda también provenía de los artefactos domésticos.

En la edad dorada se produjo una notable aceleración del proceso de urbanización, derivado en buena medida de las migraciones del medio rural y alentado por las inversiones de los gobiernos en la reconstrucción y creación de ciudades. La población campesina fue en parte expulsada de la agricultura por la reorganización del sistema productivo vía las nuevas tecnologías y formas de inversión, y el surgimiento de otros agentes productivos. Pero también fue atraída a la ciudad por las posibilidades que esta ofrecía: trabajo, educación, consumo.

Muchos creyeron que el bienestar material era una conquista irrevocable y que la sociedad del ocio era factible. Sin embargo, a mediados de la década de 1960 se hizo evidente el malestar de ciertos sectores: en las bases del mundo obrero que cuestionaban los pactos corporativos, en los jóvenes que buscaban nuevas señales de identidad a través de la música, la ropa y la rebeldía, en los afronorteamericanos que presionaban por la igualdad de derechos. La epopeya de 1968 se gestó tanto al calor de las nuevas posibilidades abiertas por la prosperidad como de la toma de conciencia de aspiraciones frustradas en un momento de crecimiento económico y cambio social.

El espacio comunista

Poco después de la Segunda Guerra, el mundo comunista se amplió mediante la inclusión de los países de Europa del Este en el bloque soviético y el triunfo de Mao en China. Desde mediados de los años cincuenta, sucesivas crisis afectaron las relaciones entre la URSS y sus satélites europeos, y a partir de la década de 1960 Mao cuestionó la primacía de Moscú sobre el campo comunista. La marcha de los países socialistas tuvo un fuerte impacto sobre el marxismo, pero lo más decisivo fue que quebró la esperanza en torno a la factibilidad del socialismo como alternativa superadora del capitalismo.

Los últimos años de Stalin

El papel protagónico de la URSS en la derrota del nazismo significó una brutal pérdida de vidas entre combatientes y población civil y un alto costo económico. Al mismo tiempo, las sociedades del mundo occidental relegaron momentáneamente el miedo al comunismo para agradecer el sacrificio del pueblo ruso en la lucha contra el Eje.

¿Qué hizo posible el triunfo de los soviéticos? El sentimiento patriótico, básicamente el de los rusos, fue un elemento central para cohesionar la resistencia de la población a la agresión nazi. Pero Stalin recurrió también al más crudo terror, tanto en la retaguardia como en la línea de combate. Ordenó a los combatientes no dar un paso atrás –de lo contrario serían fusilados– y ante el avance alemán implementó la deportación hacia el este de distintas minorías nacionales –alemanes del Volga, chechenos, ingusetios, tártaros, entre otros– porque dudaba de su fidelidad.

Aunque la guerra fue una auténtica catástrofe para la Unión Soviética, la reconstrucción industrial fue relativamente rápida. En 1948 se alcanzó el nivel productivo de 1940, y en 1952 se habían duplicado las cifras de las producciones más importantes. El esfuerzo y las inversiones continuaron privilegiando a la industria pesada, opción reforzada por el rápido pasaje de la Gran Alianza a la Guerra Fría. La agricultura permaneció estancada después de la recuperación inicial, y la actitud hostil hacia los campesinos siguió siendo un sello distintivo de la política de Stalin.

El final del conflicto bélico no supuso la desaparición del terror. Prosiguieron los traslados de grupos nacionales y se impusieron duros castigos ante la menor manifestación de disidencia. Entre quienes fueron enviados a los campos de trabajo forzado se encontraba Alexander Solzhenitsyn, un oficial que había criticado el régimen en cartas privadas. Años después, en 1973, la publicación de su libro *Archipiélago GULAG*, que narra la tragedia de los campos de concentración soviéticos, tuvo un extendido y profundo impacto entre los intelectuales occidentales.

Archipiélago Gulag

Alexander Solzhenitsyn nació en Rusia en 1918. En 1941 empezó a servir en el ejército soviético. Fue detenido en febrero de 1945 en el frente de guerra y condenado a ocho años de trabajos forzados y a destierro perpetuo por emitir opiniones antiestalinistas. En el cautiverio escribió su primera novela, *Un día en la vida de Iván Denisovich,* basada en su dura experiencia. Liberado y rehabilitado en 1956, esta novela fue publicada en 1962 gracias al deshielo propiciado por los sucesores de Stalin. Siete años después fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos por denunciar la censura oficial. Al año siguiente fue reconocido y apoyado con el premio Nobel de Literatura, pero declinó ir a Estocolmo por temor a que las autoridades soviéticas no le permitieran regresar.

Para escribir *Archipiélago Gulag* entrevistó a cientos de sobrevivientes de los campos de trabajo soviéticos. El libro levantó una ola de críticas en los medios soviéticos y en 1974, acusado de traición, Solzhenitsyn fue expulsado de la URSS. Pudo regresar a su país en 1994.

Gulag es un acrónimo para denominar a la Dirección General de Campos de Trabajo. Con el tiempo ha pasado a denominar el sistema soviético de reclusión en todas sus formas y variedades: campos de trabajo, de castigo de criminales, de represión de políticos o de tránsito de niños.

La incertidumbre y el miedo siguieron atenazando a los integrantes de la cúpula del partido. Kruschev, el sucesor de Stalin, recordaría años más tarde que nunca podía saberse qué decisión tomaría el jefe máximo respecto al destino de sus colaboradores: si "la promoción personal, la detención o incluso el fusilamiento". Junto al autor de este testimonio, en ese pequeño grupo se encontraban Zhdánov, reconocido como el favorito, Viacheslav Mólotov, Lázar Kaganóvich, Georgi Malenkov y Lavrentii Beria. La suerte de cada uno no sólo dependía de la imprevisible voluntad de Stalin, ya que la competencia entre las camarillas también promovía la caída desde la cima del poder hacia la condena y la ejecución por traición. En enero de 1953 fueron detenidos nueve médicos, siete de ellos judíos, acusados de crímenes que se remontaban hasta la desaparición de Zhdánov. En marzo de 1953 se aproximaba una nueva purga, pero no llegó a concretarse porque Stalin murió tras un ataque de apoplejía.

Ante la desaparición del jefe máximo del comunismo, gran parte del pueblo soviético y de los intelectuales comunistas manifestaron su dolor y el temor al vacío de poder. La multitud que acudió a su funeral fue tan numerosa que muchas personas murieron a causa de la presión de la masa. Sus sucesores lo despidieron con todos los honores, pero decidieron acabar con un sistema en el que obtenían importantes privilegios a costa del riesgo de perder sus vidas.

La construcción del bloque soviético

Debido al avance del Ejército Rojo sobre los territorios ocupados por los nazis, la mayor parte de los países de Europa del Este quedaron subordinados a las directivas del estalinismo en el marco de la Guerra Fría. El territorio ubicado al este del río Elba, entre el norte de Grecia y el sur de Finlandia, no era una unidad política, ni social, ni cultural. En esa región coexistían naciones y grupos con trayectorias diferentes, tanto por su grado de organización y autonomía política como por sus rasgos culturales. Algunos grupos nacionales –como los checos, los eslovacos, los eslovenos y los croatas– habían formado parte de las minorías subordinadas a los centros de poder del imperio austro-húngaro. En el sur de los Balcanes, bajo la dominación del imperio otomano coexistieron, junto a otros grupos menores, los eslavos serbios y bosnios y los albanos. Ciertas poblaciones vivían con un nivel bastante elevado de cultura urbana –Bohemia, Polonia, el norte de Hungría- mientras que otras poseían estructuras sociales de carácter tribal, como Albania y algunas zonas de Yugoslavia.

También existían fuertes contrastes respecto a las relaciones con Moscú. Bulgaria, por ejemplo, había mantenido un vínculo estrecho con la Rusia histórica en un sentido religioso y político; en cambio, Polonia, había sido, primero, ferozmente sojuzgada por los zares, luego libró una guerra contra los bolcheviques y rechazó el comunismo desde su fuerte identidad católica. Mientras que en Yugoslavia, Checoslovaquia y Bulgaria los comunistas locales contaban con fuerzas propias, en el resto de los países ganaron posiciones gracias a la intervención del Ejército Rojo.

Durante la expansión del nazismo, los países de esta región atravesaron diferentes experiencias. Albania fue anexada por Mussolini al reino de Italia. La invasión nazi eliminó los estados nacionales de Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. En Rumania, Bulgaria y Hungría, los gobiernos autoritarios, pero no fascistas, decidieron alinearse con el Eje.

Tras la derrota del nazismo prevaleció el vacío de poder. La mayor parte de las dirigencias políticas tradicionales había colaborado con Hitler y era difícil encontrar alternativas a la abrumadora supremacía militar y política soviética en los países ocupados. ¿Qué se proponía Moscú?, ¿aprovechar la ocasión para expandir el comunismo?, ¿restaurar y ampliar las fronteras del antiguo imperio zarista?, ¿resarcir a la URSS de las pérdidas de la guerra vía la explotación de los vencidos? La extrema debilidad del régimen soviético permite suponer que la tercera opción fue central en la toma de decisiones. En relación con las fronteras, Stalin, privilegiando los intereses nacionales, buscó anular las pérdidas territoriales impuestas por los alemanes a los bolcheviques en 1918 y luego convalidadas en Versalles. Quería crear un cinturón de seguridad que tornara imposible una invasión de la Unión Soviética como la concretada por Hitler. Polonia, desgarrada por la ocupación nazi y la soviética, sería la principal afectada. La URSS anexó una porción de la parte oriental y Stalin impuso un gobierno encabezado por comunistas, sin dar cabida a los dirigentes polacos exiliados en Londres.

En el caso de Checoslovaquia, con el regreso del ex presidente Eduard Benes, exiliado en Londres después del pacto de Múnich, Praga firmó un tratado de amistad con Moscú y el fuerte Partido Comunista se sumó al gobierno de coalición encabezado por Benes. En Yugoslavia, el poder quedó en manos de Tito, el líder de la guerrilla comunista que había derrotado a los nazis. El resto de los países –Rumania, Bulgaria, Hungría y Alemania– conformaba el grupo de los vencidos. Los tres

primeros fueron ocupados por el Ejército Rojo. En Alemania, las tropas soviéticas sólo controlaron el sector oriental; el resto quedó en manos de los aliados. Cuando la Gran Alianza dio paso a la Guerra Fría y Alemania quedó dividida en dos, los comunistas subordinados al Kremlin se hicieron cargo del gobierno de la República Democrática Alemana en 1949.

Hasta 1948 Moscú aceptó que los comunistas compartieran el gobierno de estos países con los partidos no colaboracionistas anteriores a la ocupación nazi. Sin embargo, en el marco del agravamiento de las tensiones con el bloque occidental –la puesta en marcha del Plan Marshall y la creación del Kominform–, se liquidó la existencia de los frentes. Un hito clave en este giro fue la disolución de la coalición gobernante en Checoslovaquia. En febrero de 1948 varios ministros abandonaron el gobierno en repudio a las presiones comunistas. El presidente Benes aceptó nombrar un nuevo gabinete dominado por los comunistas y poco después renunció. Occidente vio en estos sucesos la confirmación del afán expansionista de Stalin. A partir de ese momento, los gobiernos comunistas europeos debieron seguir el ejemplo soviético: partido único, desarrollo industrial planificado y colectivización del agro –acompañada por la campaña contra los kulaks–. En Europa Oriental la reforma agraria fue mucho menos drástica que en la URSS: en Polonia y Yugoslavia se abandonó la colectivización y el campo volvió a dividirse en pequeñas explotaciones privadas.

Junto con este viraje, se produjo la expulsión de Belgrado del bloque soviético. Tras su victoria frente a los nazis y el control de una fuerza militar propia, el jefe del comunismo yugoslavo, Tito, alcanzó un grado de autonomía mucho mayor que sus pares de otros países. Una vez en el gobierno, resistió la injerencia del personal soviético en la administración y en las fuerzas de seguridad y desplegó una política exterior activa e independiente –desde la ayuda brindada a la guerrilla comunista griega hasta el afán de influir sobre Albania– poco grata a los ojos del Kremlin. Cuando Yugoslavia fue expulsada del Kominform, el mariscal Tito buscó y obtuvo el apoyo de los Estados Unidos: su gobierno recibió la ayuda del Plan Marshall e ingresó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin abandonar por ello su compromiso con el Movimiento de Países No Alineados.

Stalin, que no había pensado en exportar la revolución, se encontró frente a un espacio comunista extendido al que decidió organizar con el mismo grado de disciplinado acatamiento a sus órdenes imperante en la URSS. Para esto recurrió a los procedimientos ya utilizados en los años treinta. En el marco del enfrentamiento con Belgrado, la cúpula del comunismo volvió a poner en escena –entre 1949 y 1952– la ceremonia de los juicios para eliminar a los titoístas acusados de ser agentes del imperialismo. Las dos faltas principales en que se basaron los juicios fueron el nacionalismo y el cosmopolitismo. Se culpó de la primera traición a los dirigentes que alertaban sobre la necesidad de atender las peculiaridades de cada país en el camino hacia el socialismo, y en este grupo quedó incluido el comunista polaco Wladyslaw Gomulka. La mayor parte de los sancionados por su conducta cosmopolita había pertenecido a las Brigadas Internacionales en los años treinta o había militado en la Resistencia en los países europeos ocupados por los nazis, entre otros, el húngaro László Rajk y el checoslovaco Rudolf Slánsky. Los cosmopolitas, según Moscú, estaban interesados en abrir el diálogo con las democracias capitalistas.

La puesta en marcha de los juicios fue abonada por el enfrentamiento entre camarillas en la cima de los partidos europeos. Con las purgas se eliminó la competencia y se creyó asegurar el predominio de los más dispuestos a someterse a las directivas del Kremlin. Como había ocurrido en los años treinta, todos los acusados “confesaron” sus crímenes y los condenados fueron ejecutados o enviados a los campos de trabajo forzado. Hubo incluso quienes sobrevivieron al campo de concentración nazi para caer en el Gulag soviético.

La depuración de las cúpulas comunistas respondió a la naturaleza del régimen soviético, que exigía partidos monolíticos y subordinados a las directivas del Kremlin, una lógica que supeditaba la dinámica de

las transformaciones de cada país a los objetivos y necesidades del estado erigido en guardián de la revolución.

La desestalinización

Tras la muerte de Stalin, sus poderes pasaron a un grupo de dirigentes, que aprobaron una serie de medidas: los decretos de amnistía para los presos políticos, el reconocimiento de la inexistencia de la conjura de los médicos y la revisión de los planes económicos con el fin de asignar mayores recursos a la mejora de las condiciones de vida de la población. En sintonía con este giro interno, hubo señales en favor de encarar negociaciones con los países del bloque capitalista para resolver el tema de la división de Alemania y solucionar las diferencias con Tito. Los hombres que habían colaborado estrechamente con la política estalinista pretendieron actuar como un cuerpo colegiado, tomando distancia de su pasado, pero competían sordamente por el control del poder.

Hasta que Kruschev impuso su conducción en 1958, las pugnas entre camarillas determinaron sucesivos recambios en la cima del poder. En ese marco, hubo un cambio fundamental: la pérdida del cargo dejó de estar acompañada por la eliminación física del desplazado, excepto en el caso de Beria, jefe máximo de los servicios de seguridad, que fue detenido y fusilado en 1953.

Los dos principales temas del debate explícito entre los sucesores de Stalin fueron el rumbo de la política exterior y las prioridades de los planes económicos. Había además otra controversia encubierta en torno a los alcances del desmantelamiento de la maquinaria del terror. Kruschev asumió la posición más radicalizada. Su embate contra el estalinismo fue en gran medida una herramienta para ganar terreno sobre sus rivales, y en su avance hacia la toma del poder profundizó la desestalinización hasta el punto de denunciar públicamente los crímenes de Stalin.

En el XX Congreso del partido, celebrado a fines de febrero de 1956, Kruschev pronunció el discurso "secreto" que descorrió el velo sobre el Gulag y la "depuración" del partido en los años treinta, al mismo tiempo que atacó el culto a la personalidad de Stalin. No todo fue dicho, ni mucho menos se intentó ofrecer razones sobre lo ocurrido, ya que el discurso sólo se limitó a reconocer un responsable: el jefe máximo ausente. Con sus revelaciones atrevidas y parciales, Kruschev pretendía ganar el apoyo de la base partidaria y fortalecerse frente a sus competidores que retenían espacios de poder en la cúpula del partido y el gobierno. Pero su discurso fue también la expresión de un militante comunista convencido de que era posible renovar el régimen y recuperar los ideales del Octubre Rojo.

El informe secreto de 1956 se difundió rápidamente y agrietó las convicciones de los comunistas. Una parte importante de los militantes de los partidos comunistas occidentales abandonaron sus filas. A pesar de su carácter limitado, la revisión quebró las certidumbres y fue el primer paso hacia la apertura de un profundo debate. Muchos intelectuales comunistas no pudieron dejar de preguntarse qué había ocurrido "realmente" para que el estalinismo hubiera sido posible, y a partir de este interrogante no sólo se puso en cuestión la naturaleza del régimen soviético sino también la idea de la revolución como partera de un nuevo mundo, y la del marxismo como teoría que indicaba el camino a seguir.

Los comunistas pierden la fe

El año 56 fue para mí, como para tantos otros comunistas, el comienzo de la ruptura con una confortable y optimista representación del estado y las perspectivas de nuestro movimiento. Hasta entonces su pasado y presente –e incluso su futuro– no eran un problema. Marx y Engels,

Lenin y Stalin, los supergenios de la humanidad, habían despejado todas las incógnitas fundamentales. Cierto, el camino de la revolución resultaba más largo y espinoso de lo que supusimos en nuestra juventud y describía una gran curva –por los países atrasados– no prevista por Marx. [...] La victoria de la gran revolución china anunciaba el derrumbamiento de la “retaguardia colonial” del imperialismo. En el resto del planeta nosotros, los comunistas, gentes de un “temple especial”, constituíamos la única fuerza revolucionaria consciente y organizada. [...] Las revelaciones del “informe secreto” de Kruschev y las sublevaciones de los proletarios e intelectuales húngaros y polacos contra el sistema estaliniano destruyeron de golpe esa representación confortable y optimista. Y sobre sus ruinas se alzaron inquietantes signos de interrogación. Entre ellos, uno que englobaba todos los demás: ¿qué marxismo era el nuestro –en su doble vertiente teórica y práctica–, que en lugar de servirnos para descifrar la realidad nos la ocultaba y mistificaba?

Testimonio del ex comunista español Fernando Claudín, incluido en su libro *La crisis del movimiento comunista. I. De la Komintern a la Kominform,* Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978.

El nuevo rumbo adoptado por los desestalinizadores entrelazaba los cambios internos con el deshielo de la Guerra Fría: la Unión Soviética no podía seguir destinando recursos al aparato militar y descuidando las condiciones de vida de la población. Aunque no logró cambios significativos en la comunicación con Washington, Kruschev anunció su voluntad de dialogar y sostuvo que la superioridad del socialismo quedaría confirmada a través de su exitosa competencia económica con el capitalismo, de modo tal que, implícitamente, la vía revolucionaria dejaba de ser el único camino válido para llegar al comunismo. Este giro no fue meramente discursivo: se correspondía con el interés por reducir la tensión entre los dos bloques y habilitaba a los partidos comunistas occidentales a forjar alianzas con otras fuerzas políticas. En consonancia con este nuevo clima, en 1956 se aprobó la disolución del Kominform creado en 1947 en los inicios de la Guerra Fría. Mao rechazó de plano las críticas de Kruschev a Stalin. Su reprobación de los revisionistas “descalificó abiertamente los movimientos de 1956 en Polonia y Hungría” estaba vinculada a las fuertes divergencias que lo enfrentaban con la corriente moderada de su partido.

Mao enfrenta a Kruschev

Hablaré aquí de paso sobre los puntos en que diferimos de la Unión Soviética. En primer lugar, sobre el problema de Stalin tenemos contradicciones con Kruschev. Él ha desfigurado terriblemente a Stalin, y nosotros no estamos de acuerdo. ¡Es que lo ha afeado tanto! [...] Sea como fuere, los méritos de Stalin constituyen su aspecto principal y sus defectos y errores, el secundario.
Sobre el problema de la transición pacífica, también divergimos con Kruschev y sus semejantes. [...] Si la burguesía quiere pelea, si dispara el primer tiro, nos veremos obligados a pelear. Tomar el Poder por la fuerza de las armas es la consigna estratégica. Si tú insistes en la transición pacífica, no te diferenciarás en nada de los socialistas. [...]
Por otra parte, los camaradas soviéticos no comprenden

nuestra política de "Que se abran cien flores y que compitan cien escuelas". Esta a la que nos referimos es una política que sólo se aplica dentro del marco del socialismo y en el seno del pueblo y que no se extiende a los contrarrevolucionarios. [...]
Los derechistas, aunque desde un punto de vista formal todavía están dentro del pueblo, en realidad son enemigos. Declaramos abiertamente que lo son, que la contradicción que nos enfrenta a ellos es una contradicción entre nosotros y el enemigo, pues se oponen al socialismo, a la dirección del Partido Comunista y a la dictadura del proletariado. [...] Son hierbas venenosas. En todos los tiempos, es inevitable que en el seno del pueblo aparezcan unas cuantas hierbas venenosas.

Mao Tse-tung, "Ser promotores de la revolución", 9 de octubre de 1957. Disponible en: www.marx2mao.com.

En el plano político, Kruschev no pretendió reemplazar a los cuadros estalinistas sino reeducarlos y contener los excesos de un régimen fundado en la autoridad de una sola persona. En el orden industrial recortó los poderes de la burocracia central y favoreció a los gobiernos provinciales. En materia agrícola propuso conquistar las tierras vírgenes de Asia Central y Siberia, una experiencia inicialmente exitosa que acabó en fracaso al provocar la erosión de los suelos. En 1964, mientras Kruschev disfrutaba de sus vacaciones, el Presidium (ex Politburó) decidió reemplazarlo por Leonid Brézhnev en el cargo de primer secretario del partido y por Alexei Kosyguin en el de presidente del Consejo de Ministros.

Para sus camaradas, Kruschev había cometido errores graves en la dirección de la política económica y había sido demasiado impulsivo e incontrolable. Al destituirlo, se hicieron una promesa que no cumplirían: nunca unir en una misma persona los cargos de secretario general y primer ministro. Kruschev no fue perseguido, pero sí obligado a un relativo aislamiento "por motivos de salud" y, aunque vivió observado, escribió sus memorias, que llegaron a Occidente y fueron publicadas en 1970.



Reunión de Kruschev con Fidel Castro.

El revisionismo y las grietas del campo comunista

El término "revisionismo" fue acuñado por quienes rechazaban la desestalinización y pretendían descalificar este giro asociándolo con el que había dado la socialdemocracia europea a fines del siglo XIX. Si los revisionistas de ayer habían traicionado a la clase obrera al aceptar el reformismo y apoyar la Primera Guerra Mundial, los promotores de la

desestalinización se apartaban del campo revolucionario cuando criticaban abiertamente la obra de Stalin porque ponían en tela de juicio los resultados de lo actuado por la cúpula bolchevique y, de ese modo, debilitaban el campo revolucionario. Para muchos antirrevisionistas, este giro implicaba un cuestionamiento de su propia carrera política y el poder alcanzado.

El rumbo asumido por la dirección colegiada soviética en 1953 desestabilizó a los gobiernos de los países satélites al deslegitimar a quienes habían actuado como "pequeños Stalin". El nuevo escenario fue aún más complejo debido a las marchas y contramarchas de la dirigencia moscovita, derivadas en gran medida de la competencia entre las diferentes fracciones. Esta rivalidad en el centro, que se prolongó hasta el afianzamiento de Kruschev, abría el juego a la reaparición de las divergencias en el seno de los partidos comunistas europeos recientemente homogeneizados a través de las purgas.

Dado que la recepción de los cambios promovidos por el centro fue desigual entre los comunistas europeos, los países del bloque soviético siguieron diferentes trayectorias políticas. En Rumania y Albania, el rechazo al nuevo rumbo se combinó con la ausencia de presiones sociales y la cohesión de la cúpula partidaria. En ambos países la desestalinización alentó la desatelización respecto de Moscú, proceso favorecido por la oposición de Mao a las críticas al régimen. Albania se colocó bajo la protección de China y reivindicó abiertamente la figura de Stalin. Más cauta, Rumania no cuestionó públicamente el giro de Kruschev pero se opuso exitosamente a los planes de integración económica impulsados desde Moscú, que le asignaban el papel de proveedor de materias primas al mercado común soviético. El rechazo a la desestalinización se conjugó con la preservación del statu quo en el orden interno y con el cuestionamiento a la posición periférica ocupada por Rumania bajo el estalinismo.

El revisionismo, con diferente grado de consistencia según los países, fue principalmente un movimiento intelectual cuya base de acción se concentró en las revistas culturales o especializadas, los establecimientos de enseñanza superior –incluidos los del partido– y las asociaciones culturales y científicas. En el seno de los partidos gobernantes, los revisionistas suponían que su presión –unida a otros factores tales como la necesidad de reformas económicas y la conveniencia de la distensión en el plano internacional– conduciría a iniciativas liberalizadoras por parte de la dirección. Pero el deshielo no sólo resquebrajó la cohesión de los comunistas, también posibilitó que otros sectores de la sociedad se expresaran públicamente. Ambos procesos entrelazados alcanzaron su punto más alto en Polonia y Hungría, donde en octubre de 1956 hubo movilizaciones y se concretó un rechazo más radicalizado al orden existente.



Los tanques soviéticos ocupan Budapest en 1956.

Las dos protestas se resolvieron de diferente manera, aunque inicialmente Moscú empleó el mismo recurso: el ingreso al gobierno de comunistas desplazados durante las purgas estalinistas. El regreso de Gomulka al gobierno polaco calmó los ánimos gracias a las expectativas generadas por la rehabilitación de un ex disidente. En Budapest, la reincorporación de Imre Nagy no tuvo el mismo impacto

porque la resistencia de los conservadores fue más fuerte y la amenaza de las tropas soviéticas exacerbó las movilizaciones y profundizó los reclamos. Ante la posibilidad de que Hungría se retirara del Pacto de Varsovia, el movimiento húngaro fue silenciado mediante el ingreso de los tanques soviéticos.

La China de Mao

Para China, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1937 tras la invasión de Japón, que condujo a la alianza pragmática entre el Kuomintang y el Partido Comunista. A lo largo del conflicto, los comunistas extendieron y consolidaron su inserción en la sociedad china y, una vez asegurada la independencia nacional con la derrota de Japón, se reanudó la guerra civil. El Kuomintang salió muy debilitado de la guerra de liberación: sus dirigentes era considerados corruptos e incapaces de satisfacer el afán de justicia social. Los nacionalistas habían reprimido las revueltas rurales y las manifestaciones estudiantiles, y los intentos de Chiang de afianzar la autoridad del gobierno lo habían enfrentado a los jefes regionales. Desde 1946 Mao insistió en la redistribución radical de la tierra ocupada por sus fuerzas. Los equipos de trabajo comunistas alentaban a los campesinos pobres y medios a participar en "asambleas de lucha", en las que expresaban sus agravios y muchas veces ejercían violencia sobre los terratenientes. Con el triunfo de los comunistas en 1949, se proclamó la República Popular China, que rápidamente impuso su dominio sobre el Tíbet, región aislada durante la República.

Los nacionalistas se refugiaron en la isla de Formosa (Taiwán) bajo la protección de los Estados Unidos, y el asiento reservado a China en el Consejo de Seguridad de la ONU fue asignado al gobierno encabezado por Chiang Kai-chek. Simultáneamente, Mao se alineó con la Unión Soviética. En diciembre de 1949, el líder de la Larga Marcha viajó a Moscú para firmar un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua con Stalin. El Kremlin, más allá de vanagloriarse por contar dentro de su esfera de influencia a la nación más poblada del mundo, no parecía esperar demasiado de una China empobrecida por décadas de guerra civil y ávida de ayuda. Además, la relación de Mao con los soviéticos tenía un pasado borrascoso y los dos meses de su estada en Moscú estuvieron plagados de tensiones.

A fines de la década de 1920, cuando el líder chino se había retirado al campo para organizar un ejército compuesto fundamentalmente por campesinos, la Internacional había apoyado su destitución del Comité Central del partido. En 1948, Stalin, en su afán de no irritar a Washington y descartando el triunfo de Mao, propició el acuerdo de este con el Kuomintang y desaprobó la ofensiva general de los comunistas contra el ejército nacionalista. No obstante, el líder chino nunca enfrentó abiertamente a Moscú.

Apenas concluida la guerra civil, el gobierno chino envió sus hombres –más de dos millones– para ayudar a los comunistas coreanos que pretendían reunificar el país a través de la guerra. En China, la nueva acción bélica se asoció con la exaltación de la potencia del espíritu revolucionario, uno de los principios centrales del maoísmo, que recurrió reiteradamente a campañas de movilización masivas para promover cambios en base a la voluntad política y el esfuerzo compartido. La guerra de Corea también favoreció la propuesta de una pronta industrialización para dotar al país de los recursos que asegurasen su defensa frente a la amenaza exterior. Fue una posición similar a la de los estalinistas cuando, a fines de los años veinte, aprobaron el primer plan quinquenal y atacaron con brutal violencia al campesinado.

Una vez en el gobierno, los comunistas chinos enfrentaron desafíos similares a los de los bolcheviques cuando tomaron el poder: satisfacer las aspiraciones de una población abrumadoramente campesina, consolidar la clase obrera y erradicar el atraso para poder ingresar en el mundo moderno, eludiendo la ruta capitalista. En ambos países la burguesía era débil y los partidos comunistas, además de controlar los recursos del estado, podían exigir sacrificios a la población. A

diferencia de los bolcheviques, los maoístas tenían una fuerte inserción en el ámbito agrario y habían librado la guerra civil antes de llegar al gobierno. Al finalizar la guerra de Corea y con la ayuda de la Unión Soviética, el primer plan quinquenal (1953-1957) adoptó el modelo estalinista: la construcción de enormes plantas industriales, el creciente peso de los burócratas y profesionales capaces de dirigirlas, y el incremento de una producción agrícola que aportaba los recursos necesarios para la industrialización.

Sin embargo, los comunistas chinos, cuya principal base de sustentación eran los campesinos, no estaban tan dispuestos a explotarlos en beneficio de la industria pesada como habían hecho los soviéticos. Por el contrario, promovieron la creación de cooperativas rurales que alentaban el trabajo compartido sin eliminar la propiedad privada. Este sistema, no obstante, inquietaba a los comunistas porque reconocía a los campesinos como propietarios de sus parcelas e incluso les permitía disponer libremente de una parte de la producción. En 1955 se dio un giro a favor de la colectivización plena, pero sin la brutal campaña contra los kulaks que desplegó el estalinismo: los comunistas chinos combinaron persuasión con presiones en un mundo rural donde la presencia de los productores acomodados ya era reducida.

A mediados de la década de 1950, la dirigencia comunista creyó que la estabilidad y los logros económicos y sociales de los primeros años le permitirían contar con el apoyo de los intelectuales si aflojaba los controles y los alentaba a manifestar sus opiniones con sentido constructivo. No querían que en China sucediese algo parecido a los levantamientos de Europa Oriental entre 1953 y 1956. Se supuso que el partido, con su marcado sesgo hacia las diferencias jerárquicas y el autoritarismo, podía renovarse a través de un debate del que participarían los intelectuales ofreciendo nuevas alternativas. En 1956 Mao puso en marcha la breve campaña a favor de la libertad de pensamiento y expresión, el llamado movimiento de las Cien Flores, nombre tomado de un poema chino tradicional: *Que cien flores florezcan, que cien escuelas de pensamiento compitan entre sí*. Pero las críticas subieron de tono y llegaron a denunciar la colectivización y el monopolio del poder político por parte del partido. La reacción no se hizo esperar: los críticos del régimen fueron acusados de contrarrevolucionarios elitistas y castigados con la censura, la cárcel o los trabajos forzados.

El primer plan quinquenal fue relativamente exitoso, pero a ese ritmo la industrialización de China tardaría mucho tiempo porque los excedentes del agro eran muy reducidos. Para evitar las constricciones materiales se convocó a la población a dar el Gran Salto Adelante, cuyo principio básico era utilizar al máximo el único recurso abundante: la mano de obra campesina. Para aumentar la productividad, los maoístas apostaron a la transformación radical de las estructuras sociales agrarias mediante la movilización de la fuerza laboral rural y la reorganización de la familia campesina. En las fábricas se promovió la democracia igualitaria a través de las críticas de las bases a los directivos y especialistas: cualquiera estaba en condiciones de saber qué decisiones eran las adecuadas, ser “rojo” era más importante que ser un especialista. El ala moderada encabezada por Liu Shaoqi y Deng Xiaoping predicaba una reforma cauta y anteponía los criterios económicos y técnicos a la voluntad política. Para Mao, en cambio, la movilización de las masas podía superar todo obstáculo material. En su visión prevalecía la idea de la “revolución continua” como herramienta de progreso y transformación social.

El Gran Salto Adelante condujo a muchos hombres a dejar el campo para sumarse a la obra pública o ingresar a las fábricas. Las comunas populares, donde todas las tareas eran compartidas, reemplazaron a las cooperativas creadas unos años antes. Estas comunas –cuyas guarderías y comedores liberaban al ama de casa de las tareas domésticas– permitieron la plena incorporación de la mujer al trabajo intensivo en el medio rural. Este giro radical afectó el modo de vida tradicional de la familia campesina y fue un rotundo fracaso económico. El enorme tamaño de las comunas, en las que no se permitía ningún tipo de explotación privada, diluyó las responsabilidades y debilitó la motivación de los campesinos. A los

defectos constitutivos del sistema se sumó una serie de sequías e inundaciones que provocaron hambrunas en numerosos lugares. En diciembre de 1958 la dirigencia comunista canceló el proyecto para dar paso a un comunismo más tecnocrático y Mao debió dejar la jefatura del estado en manos de Liu Shaoqui, aunque conservó la dirección del partido.

La Revolución cultural proletaria

La nueva dirección colegiada abandonó las campañas por la democracia en las fábricas y volvió al salario por pieza, a la valoración del saber de los especialistas junto al restablecimiento de las viejas jerarquías en el medio rural. No quedó nada del igualitarismo defendido por Mao. Los mandos del partido reafirmaron su autoridad en el control de la economía y básicamente en definir la posición que ocupaba cada grupo en la sociedad. A partir de la Revolución la gente había sido clasificada en "rojos" –obreros, campesinos pobres y medios, cuadros, soldados y familiares de mártires revolucionarios– y "negros" –terratenientes, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, elementos antisociales y derechistas–. Este ordenamiento basado en criterios poco precisos generó una masa de resentidos entre distintos grupos excluidos de la elite roja: desde miembros de la antigua burguesía, pasando por jóvenes rebeldes, hasta trabajadores recién emigrados a las ciudades que carecían de los beneficios de los obreros más antiguos. De ahí que, cuando Mao lanzó la Revolución cultural, los alineamientos y enfrentamientos sociales adquirieron un alto grado de complejidad e intensidad.

A pesar de haber fracasado con el Salto Adelante, Mao y su círculo no aceptaron el rumbo cauto y economicista asumido por el partido después de esa experiencia y, a mediados de la década de 1960, pusieron en marcha, con apoyo del ejército, la Revolución cultural. Esta iniciativa, destinada a barrer al grupo comunista que detentaba el gobierno, volvió a reivindicar la primacía de la voluntad política por sobre las razones de los especialistas, para romper con el pasado y construir la nueva sociedad. Los burócratas, según los maoístas, enfriaban el ardor revolucionario y había que desplazarlos para que la movilización y el sacrificio militante de la población hicieran posible el salto hacia el comunismo igualitario, al margen de los obstáculos materiales. El líder chino temía, como le dijo al vietnamita Ho Chi Minh en 1966, que ellos fueran sucedidos "por Bernstein, Kautsky o Kruschev".

La Revolución cultural se puso en marcha con declaraciones críticas sobre los "representantes de la burguesía y la gente del estilo de Kruschev que todavía anidan entre nosotros", y de inmediato se multiplicaron los grupos de guardias rojos formados básicamente por estudiantes. La guardia roja debía combatir el "revisionismo" en el seno del partido y las "cuatro antiguallas" en el conjunto de la sociedad: las viejas costumbres, la vieja cultura, las viejas ideas y las viejas tradiciones de las clases explotadoras. La acción espontánea de las masas reordenaría a fondo la sociedad liquidando las diferencias de clase en sus diferentes expresiones, no sólo la económica, y anulando también la división entre trabajo intelectual y manual. En la cúspide sólo habrían de quedar los más virtuosos y comprometidos con la lucha de clases.

La movilización iniciada por los estudiantes fue seguida por la de los obreros contra quienes les imponían sus directivas y la de las poblaciones rurales contra los jefes políticos locales. En la fase más radical de la Revolución cultural, la guardia roja se dividió, ambiguamente, entre conservadores y radicales según la diversidad de grupos e intereses enfrentados que quedaron envueltos en la revolución convocada "desde arriba". La confusión derivó en una guerra civil, en la que ambos bandos proclamaban acatar la voluntad de Mao. A finales de 1967 el líder chino reconoció el peligro del caos y puso en marcha una nueva campaña encomendando al ejército, que antes había apoyado a los radicales, la restauración del orden, que sólo se logró con un altísimo grado de violencia.

Esta fue la última convocatoria a la movilización de las masas para sostener la "revolución permanente". Los sucesores de Mao privilegiarían el crecimiento económico al igualitarismo social bajo el liderazgo del jefe único.

La Revolución cultural proletaria



Afiche incitando a la movilización de las mujeres a favor de la nueva revolución maoísta.

Cuando se formó en nuestro colegio la primera ronda de Guardias Rojos –dirigida no contra los partidarios de la "vía capitalista" sino contra las "cinco castas negras"–, yo quedé afuera debido a mis orígenes familiares "no rojos". [...] Esta primera avalancha de Guardias Rojos pronto se vio rebasada por una oleada más amplia de jóvenes que respondían a la llamada de Mao a rebelarse y me metí rápidamente en un grupo disidente [...]. Hacia principios de 1967 se abrió una nueva fase, en la que se asistió a la fusión de distintos grupos más pequeños en dos grandes organizaciones contrarias de Guardias Rojos. Aquel fue el inicio de un conflicto que condujo a algunas de las batallas más sangrientas de la Revolución cultural.

Pronto Guangxi se hizo famosa en toda China por las violentas luchas entre diferentes facciones de sus Guardias Rojos. [...] Wei Guoqing (secretario provincial del partido) disfrutaba de excelentes relaciones con el partido vietnamita del otro lado de la frontera, de modo que Mao no quería verlo destituido. Nuestra facción luchó contra Wei en 1967 y 1968. [...] Nuestros seguidores eran habitantes pobres y marginados de la ciudad que no prestaban demasiada atención a nuestra retórica ideológica pero expresaban con increíble energía las quejas que tenían acumuladas contra los funcionarios del gobierno. [...] Entre ellos se encontraban los trabajadores portuarios y de los transbordadores del río Yong, a los que la facción encabezada por Wei acusaba de lumpen proletariado, más parecidos a una mafia que a una clase trabajadora industrial moderna. [...] La gente común tendía en estos conflictos a apoyar al bando más débil –a quien no estuviera en el poder–. [...]

El enfrentamiento final se produjo en el verano de 1968 [...]. Cuando volví, nuestra escuela secundaria, al igual que sucedía en todos los demás centros de trabajo y comités barriales de Nanning, consolidó la victoria del régimen con la creación de una nueva organización estudiantil bajo control oficial, que en los papeles conservaba todavía el

nombre de Guardias Rojos. [...]

Testimonio de Qin Hui, uno de los jóvenes que integró los cuerpos de los Guardias Rojos. Entrevista publicada en "Dividir el gran patrimonio familiar", *New Left Review*, nº 20, mayo junio 2003.

En el marco del desorden desatado por la Revolución cultural, las tensas relaciones entre Pekín y Moscú alcanzaron un punto crítico cuando las disputas fronterizas desembocaron en una serie de incidentes armados en 1969. Un sector de la dirigencia china, preocupado por la combinación de deterioro interno y amenaza exterior, y con el afán de romper el aislamiento de Pekín, propició el acercamiento a los Estados Unidos pensando también en debilitar a los soviéticos. Se suponía que "una pausa en las críticas contra el imperialismo bastaría para inquietar a los revisionistas del Kremlin". Mientras los Estados Unidos redoblaban su apuesta militar para liquidar el régimen comunista en Vietnam, Chou En-lai –dirigente clave en relaciones exteriores, excepto al inicio de la Revolución cultural– propició el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el ingreso de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, desplazando de su banca a la representación del gobierno chino con sede en Taiwán.

A fines de los años sesenta, aunque no fuera evidente para los contemporáneos, las experiencias comunistas parecían haber llegado a un callejón sin salida. Ni el revisionismo de Kruschev ni el radicalismo de Mao pudieron superar la dura disciplina de partidos únicos y las deficiencias de la economía central planificada que reproducía las desigualdades sociales y no satisfacía gran parte de las necesidades y los intereses de la población.

6. El Tercer Mundo

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muy rápidamente, los pueblos de Asia y África se liberaron del yugo colonial y sus dirigentes se abocaron a crear nuevos estados nacionales. En la inmediata posguerra, la situación de América Latina era muy diferente: hacía casi un siglo que había roto con la dominación colonial de las principales metrópolis, España y Portugal, aunque quedaban islas y zonas de América Central y el Caribe bajo control europeo y estadounidense. Sus estados nacionales, especialmente en los países mayores, contaban con las instituciones y procedimientos de un estado moderno. Gran parte de los gobiernos de América Latina y de las ex colonias propiciaron la industrialización sustitutiva de las importaciones basada en la expansión del mercado interno. Simultáneamente, los líderes de las luchas de liberación, una vez al frente de sus estados, buscaron unir sus países en un bloque de no alineados que acelerara el proceso de independencia en marcha e impidiera que quedaran subordinados al orden bipolar. En las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de las economías ex coloniales y latinoamericanas crecieron y sus sociedades se urbanizaron y alfabetizaron. Los estados desempeñaron un papel protagónico en esta tarea. En el escenario político, casi todas las experiencias democráticas fueron muy frágiles y el autoritarismo se combinó en muchos países con recurrentes golpes militares. En Asia Oriental, Corea del sur, Taiwán y Singapur –los llamados tigres asiáticos– siguieron un rumbo económico diferente y se vincularon al mercado mundial como exportadores de bienes industriales.

La industrialización y el estado interventor en el Tercer Mundo

Desde la crisis de 1930 hasta principios de la década de 1950, los

estados latinoamericanos y los pocos países independientes del mundo subdesarrollado estuvieron relativamente aislados de la economía mundial. Los sectores vinculados con la producción exportadora se estancaron, pero al mismo tiempo se crearon nuevas industrias para satisfacer la demanda local. En América Latina se abandonó la adhesión plena a la economía abierta para defender el nacionalismo económico, la autarquía. Cuando las colonias consiguieron su independencia, también adoptaron esta fórmula.

Los partidarios del nacionalismo económico salieron fortalecidos en los países latinoamericanos con la crisis de los años treinta y pasaron al primer plano después de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios sociales habían sido lo suficientemente profundos como para impedir una vuelta a la dependencia del mercado mundial. Pequeños y medianos empresarios, sindicalistas, profesionales, intelectuales nacionalistas, militares y obreros compartían el objetivo de la industrialización.

El estado asumió un papel clave para hacer más rentable la producción manufacturera local. En cierta medida, gran parte de los países latinoamericanos siguieron el mismo camino que tomaron Alemania, Japón, los Estados Unidos y Canadá a fines del siglo XIX para ponerse a la altura de Gran Bretaña. Los gobiernos latinoamericanos promovieron de varias formas el crecimiento industrial. Impusieron altas barreras arancelarias para elevar el precio de los bienes importados. Manipularon las monedas para que los tipos de cambio favorecieran a los fabricantes locales: un dólar caro para las importaciones que competían con los productos nacionales y un dólar barato para los insumos que necesitaban los industriales. Generaron demanda favoreciendo a los empresarios locales en los contratos gubernamentales. Crearon empresas estatales en industrias básicas que requerían altas inversiones –acerías, plantas químicas– y en el sector de infraestructura que permitiría abaratar costos: ferrocarriles, líneas de navegación, centrales eléctricas.

Dado que la expansión de la industria estaba ligada al crecimiento del consumo nacional, los mercados internos jugaron un papel primordial en estos procesos de industrialización. Simultáneamente, las exportaciones de los sectores primarios tradicionales financiaron en gran medida el desarrollo de la industria: compraban los bienes manufacturados a precios más altos que si hubiera existido el librecambio y vendían sus productos a los precios del mercado mundial, aunque los gobiernos les sustraían parte de sus ingresos por medio de impuestos.

Mediante la sustitución de importaciones –particularmente en México, la Argentina y Brasil, y en menor medida en Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Costa Rica–, hubo altas tasas de crecimiento industrial. Por ejemplo, entre 1945 y 1973 la producción industrial se cuadruplicó en México, y en Brasil se multiplicó por ocho. En 1973 las principales economías del continente habían alcanzado un significativo grado de industrialización y estaban altamente urbanizadas. Este proceso de modernización propició la intensificación de las expectativas de ascenso social vinculadas al crecimiento urbano y la extendida alfabetización.

No obstante, la industrialización latinoamericana tenía marcadas diferencias con la del mundo desarrollado: era grande pero poco eficiente, y sus costos superaban los niveles del mercado mundial. El ingreso per cápita era una tercera parte del de los países desarrollados y la pobreza crecía a pesar del auge industrial.

América Latina ofreció un camino a seguir, pero también una teoría que justificaba el nuevo rumbo y refutaba los principios del liberalismo clásico. Las nuevas ideas se gestaron en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas. En 1949 la CEPAL, dirigida por el economista argentino Raúl Prebisch, presentó el célebre *Informe económico de América Latina* que cuestionaba la teoría de las ventajas comparativas de la ortodoxia económica. A lo largo del tiempo, como pronosticaron los técnicos de CEPAL, los precios de los bienes primarios tendieron a bajar, y los de los manufacturados, a subir. Para propiciar el desarrollo económico era preciso proteger y subvencionar a la industria, y por eso los gobiernos debían intervenir en favor de la industrialización. Estas ideas se

impusieron frente a las críticas de quienes anunciaban el fracaso de las industrias protegidas, porque expresaban los intereses de las coaliciones sociales que tenían más peso político en los países latinoamericanos y el mundo poscolonial: los industriales, las clases medias y los trabajadores.

La sustitución de importaciones se convirtió en la modalidad dominante de la industrialización del Tercer Mundo. En Asia y Oriente Medio, y más tarde en África, las fuerzas sociales que habían impulsado las luchas por la liberación querían modificar la economía colonial que las hacía dependientes de las metrópolis. La industrialización promovida desde el estado y basada en la expansión del mercado interno impuso su sello tanto en la India como en Egipto, Marruecos e Irak, entre otros países. Este tipo de industrialización generó a la larga una nueva dependencia de la importación de insumos y maquinarias.

En algunas ex colonias se promovió la industrialización sustitutiva de importaciones como una variante local del socialismo. El socialismo indio, árabe o africano era una combinación de intervencionismo estatal, democracia social y construcción nacional. Las políticas más extremas sobre protección y subvenciones se concretaron en algunos de los países menos desarrollados de Asia y África. La distancia entre América Latina y el resto del Tercer Mundo era mayor que la existente entre América Latina y los países ricos. Las sociedades y las economías latinoamericanas eran más maduras, y sus estados tenían mayor consistencia que los nuevos países. Pero, más allá de las deficiencias del nuevo rumbo, en la década de 1960 el panorama del Tercer Mundo parecía promisorio: la economía crecía y el nivel de vida mejoraba.

No todas las naciones del Tercer Mundo siguieron esta vía. Los países donde la industria continuó desempeñando un papel marginal y la población agrícola mantuvo su peso aplastante se ubicaron entre los de menor desarrollo del mundo, entre ellos Nepal, Laos, Afganistán, Bangladesh, Burundi, Chad y Camerún. En estas economías, la explotación de ciertos productos agrícolas y materias primas fue relevante para vincularse con el mercado mundial pero, debido a su escasa articulación con el resto de las actividades internas, se transformaron en enclaves. En algunos países, la mayoría en el área árabe musulmana –Arabia Saudita, Irak, Irán, las monarquías árabes del Golfo– y algunos latinoamericanos, como México y Venezuela, la renta petrolera garantizó la afluencia de enormes cantidades de divisas. En ciertos casos, los fondos apropiados sin ningún control por la clase gobernante fueron puestos al servicio de la preservación del orden tradicional, como ocurrió en Arabia Saudita, y en otros, como en el reino de Irán, dieron paso a profundos y acelerados procesos de modernización.

Los escenarios políticos en América Latina

Los países latinoamericanos vivieron profundos cambios sociales, políticos y culturales al calor de la industrialización y en el marco de los nuevos alineamientos políticos e ideológicos que imponía la Guerra Fría. Junto con la consolidación de la burguesía industrial, también las clases obreras se hicieron más fuertes. En Chile o Uruguay, por ejemplo, los movimientos sindicales se vieron relativamente libres de la intervención estatal, en tanto que en la Argentina, México o Brasil los políticos reconocieron a las organizaciones laborales como un recurso político potencial y buscaron fortalecerlas y controlarlas. El apoyo combinado del movimiento obrero y los empresarios a los gobiernos fue esencial para el éxito de la sustitución de importaciones. Estas nuevas alianzas en favor de la industria desafiaron el predominio secular de los poderosos propietarios que controlaban la producción de bienes primarios destinados a la exportación.

Aunque gran parte de los analistas tendió a establecer un fuerte vínculo entre la sustitución de importaciones y el controvertido y ambiguo concepto de populismo, no hubo una única trayectoria. La diversidad de experiencias en el campo sociopolítico latinoamericano se debió a la combinación –específica en cada país– de factores como la

movilización de la clase obrera, el tipo de sistema de partidos políticos, la consistencia y estabilidad de las normas constitucionales, la posición y los recursos de las clases vinculadas con el modelo exportador, el peso de las clases medias y el rol político de los militares.

En algunos países, la competencia entre partidos políticos fue clave para dar cabida a las nuevas demandas e intereses, por ejemplo en Uruguay, Chile y, en menor medida, México. En Uruguay continuó el predominio de las fuerzas políticas ya afianzadas, los Blancos y Colorados. En Chile, en cambio, ganó terreno la Democracia Cristiana que, creada a fines de los cincuenta, llevó a Eduardo Frei Montalvo a la presidencia en 1964 con la consigna "Revolución en libertad", como alternativa al rumbo propuesto por la Revolución cubana. Frei anunció que quería reducir las desigualdades y modernizar la economía mediante una reforma agraria, el apoyo a la industria y el fomento de las exportaciones. La propuesta contó con el decidido apoyo de los Estados Unidos. Pero en poco tiempo fue objeto de múltiples resistencias: para la derecha y los grandes propietarios, las reformas iban demasiado lejos; para la izquierda y los sectores populares, en cambio, se quedaban a mitad de camino y no avanzaban lo suficientemente rápido. Las reformas de Frei, al movilizar el mundo rural, activaron el conflicto, que en 1970 era mucho mayor que en 1964. La creciente polarización política y el fracaso de esta apuesta reformista enmarcaron el giro radical de las reformas impulsadas por el gobierno socialista de Salvador Allende en los años setenta. Mientras tanto, en México, si bien hubo una periódica renovación del gobierno mediante elecciones, no se avanzó en la construcción de una democracia competitiva. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), con una política agresiva, no dejó casi ningún espacio para el desarrollo de otras fuerzas.

En Venezuela y Colombia prevalecieron los pactos entre los principales partidos. En 1945 se produjo en Caracas un movimiento cívico-militar en el que intervino la Acción Democrática encabezada por Rómulo Betancourt, que tomó el gobierno con la idea de promover un cambio de fondo en la economía nacional. Tres años después fue depuesto por los militares. Al cabo de diez años de la férrea dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocada en 1958, un Betancourt más cauto se avendría al acuerdo con una fuerza de centro para compartir el gobierno: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), uno de los grandes partidos democratacristianos de América Latina. Venezuela vivió treinta años de alternancia regular entre los dos partidos que compitieron en elecciones basadas en el sufragio universal efectivo y con alta participación electoral. La estabilidad política fue respaldada por los cuantiosos ingresos petroleros y las buenas relaciones con los Estados Unidos.

La panacea de la industrialización

Un sector de nuevos dirigentes latinoamericanos visualizó el desarrollo industrial como la vía para una profunda y positiva transformación social. En estos términos se pronunció el jefe político venezolano Rómulo Bentacourt cuando presentó públicamente, en setiembre de 1941, a la recién creada Acción Democrática:
"Imagino la escena, que sucederá dentro de cincuenta años, en una población agraria de los Andes, forjada al arrimo de una potente planta hidroeléctrica; en una población donde, en vez de los garajes para autos de lujo que se multiplican en Caracas, habrá garajes para tractores; o bien, en una ciudad industrial de la Gran Sabana, construida en la vecindad de las chimeneas de los altos hornos, donde obreros venezolanos estén transformando en materia prima para las fábricas venezolanas de máquinas esos mil millones de toneladas

de hierro que en sus entrañas guarda, hoy inexplotadas, la Sierra del Imataca. (*Clamorosa ovación.*) [...]
Y estimular y apoyar, resueltamente, a la industria nacional. Consumir lo que producimos y empeñarnos en producir cada vez más. Que tengamos orgullo en andar vestidos con la tela que fabricó la mano de obra nacional en la empresa textil de capital nacional; de curarnos con la medicina que elaboró, en los laboratorios nacionales, el técnico nacional; de construir nuestras casas con las maderas que aserraron, en las montañas venezolanas, los peones de Venezuela. (*Aplausos.*)"

Biblioteca Electrónica de Caracas, Venezuela. Disponible en: www.analitica.com.

La escena política colombiana continuó dominada por los liberales y los conservadores. Eliécer Gaitán encabezó el ala más radical del liberalismo y contaba con el apoyo de los sectores populares. Fue asesinado en 1948, y su muerte dio paso a las violentas jornadas conocidas como "el Bogotazo".



El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, dio paso a una oleada de protestas con saqueos e incendios, que exigían la renuncia del gobierno conservador.

La dictadura del general Rojas Pinilla impuso la pacificación e intentó crear una tercera fuerza política. Los dos partidos tradicionales, temiendo el afianzamiento del militar "populista", pusieron fin a sus diferencias y en 1957 acordaron alternarse en el ejercicio de la presidencia.

Este frente terminó con la violencia bipartidista pero cerró las puertas a otras opciones políticas, por lo que parte de los excluidos se inclinaron en favor de la lucha armada. Por un lado, el Ejército de Liberación Nacional, creado en 1964, que se definió como marxista-leninista y apoyó la Revolución cubana. Por otro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo origen remite a la formación de

grupos armados integrados por comunistas y liberales después del Bogotazo, y que con el tiempo controló amplias zonas rurales.

Un tercer tipo de experiencia fue la transitada por la Argentina y Brasil, donde los liderazgos de Juan Perón y Getúlio Vargas forjaron coaliciones multiclasistas a las que se identificó como la más acabada expresión de los llamados populismos.

Desde 1946, Perón forjó un estrecho vínculo con los trabajadores: reconoció sus demandas sindicales y sociales y fortaleció las organizaciones gremiales, aunque recortando su autonomía. Por otra parte, limitó la acción de los partidos opositores, que en 1955 apoyaron activamente un golpe militar, al que se sumó la iglesia católica, para derrocarlo. El peronismo fue proscrito, lo que privó de legitimidad a los gobiernos civiles de Arturo Frondizi (1958) y Arturo Illia (1963), derrocados por golpes militares. El peronismo, como ninguna otra de las alianzas multiclasistas surgidas en esta época, mantuvo su arraigo entre los trabajadores y los sectores populares, y desde los años sesenta vastos contingentes de los sectores medios se incorporaron a sus filas. En un clima de creciente inflación y conflictividad social, proveniente de las tensiones y limitaciones de la industrialización sustitutiva, la sociedad se polarizó entre quienes apoyaban la vía autoritaria, aun la de gobiernos militares, y un vasto movimiento de resistencia social, que incluyó la aparición de grupos armados.

En Brasil, el legado organizativo e ideológico del varguismo a la clase obrera fue mucho más frágil que el del peronismo en la Argentina. No obstante, cuando el presidente João Goulart, heredero de Vargas, intentó profundizar los cambios sociales mediante la reforma agraria, los militares, apoyados por los Estados Unidos, tomaron el gobierno en 1964, instauraron una feroz represión y permanecieron en el poder hasta 1985, cuando lo abandonaron ordenadamente.

En Bolivia, uno de los países más pobres de esta región, un grupo heterogéneo de intelectuales creó a principios de la década de 1940 el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en su manifiesto inaugural combinaba medidas de carácter social y declaraciones antiimperialistas con condenas al socialismo, la falsa democracia y el judaísmo. En 1952, el MNR lideró una insurrección popular que llevó al gobierno a Víctor Paz Estenssoro y luego a Hernán Siles Zuazo. La Revolución boliviana nacionalizó las minas de estaño, decretó la reforma agraria y estableció el voto universal.

En Paraguay, en cambio, el espacio de los partidos políticos continuó vedado. Apoyado por el partido Colorado y las fuerzas armadas, el general Alfredo Stroessner impuso desde 1954 una sangrienta dictadura que se prolongó hasta principios de 1989, cuando fue depuesto por un golpe de estado.

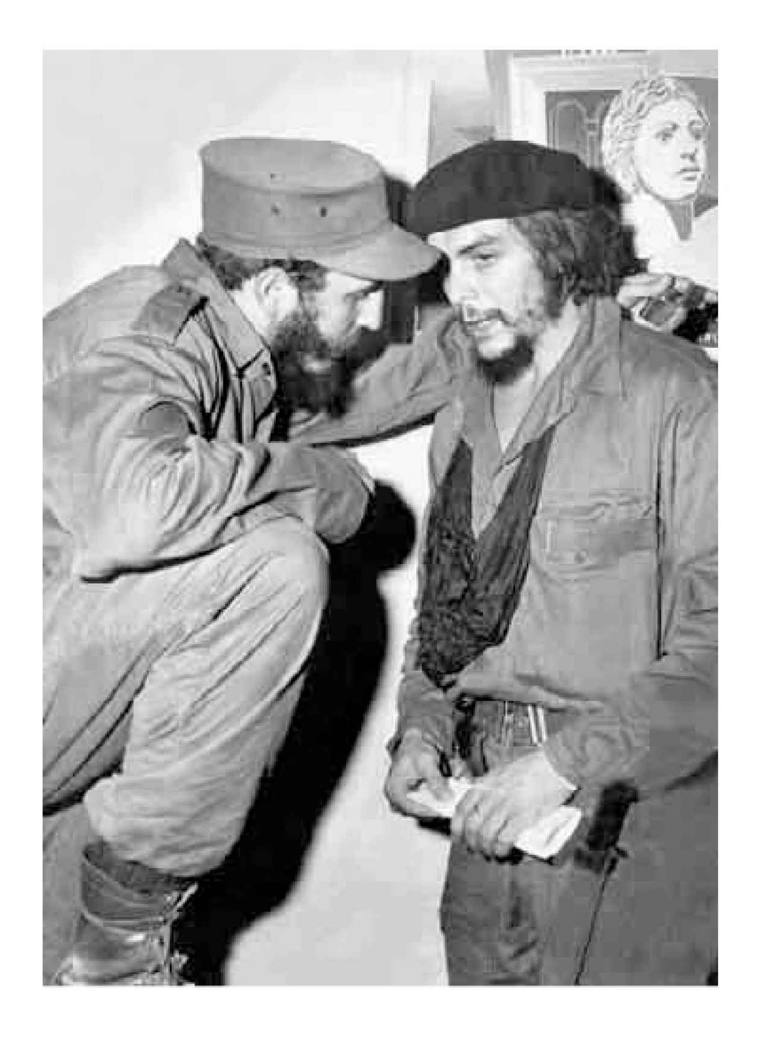
En América Central y las grandes islas del Caribe prevalecieron los caudillos autoritarios que conjugaban la represión política –siempre con el apoyo de los Estados Unidos– y las reformas limitadas para perpetuarse en el poder. Ante el menor atisbo de giro reformista –Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, por ejemplo–, los militares recurrían al golpe para frenar “el avance del comunismo”. Sólo Costa Rica eludió este destino. Luego de la guerra civil de 1948, se distinguió por su estabilidad institucional con un sistema bipartidista.

La Revolución cubana y la radicalización de la política latinoamericana

El subcontinente americano fue profundamente impactado por la Revolución en Cuba, la isla donde Fulgencio Batista hacía y deshacía gobiernos desde los años treinta. El 26 de julio de 1953 un grupo de estudiantes intentó tomar el Cuartel Moncada. El ataque fracasó, pero en el juicio posterior el jefe de la insurrección –Fidel Castro– se defendió con el alegato La Historia me absolverá, utilizando argumentos que serían esgrimidos por los jóvenes universitarios de los años sesenta dispuestos a dar la vida por el pueblo, con un sentimiento de culpa y una vocación de vanguardia similares a los de los populistas rusos.

Castro regresó clandestinamente de su exilio en México con un grupo de compañeros, entre ellos el argentino Ernesto Che Guevara, para hostigar con las armas al gobierno de Batista desde las montañas de Sierra Maestra.

Cuando a principios de 1957 el *New York Times* recogió testimonios de los combatientes, muchos se apasionaron con la imagen de los jóvenes que resistían a la dictadura. La guerrilla cubana reunía una serie de rasgos cautivantes: la lucha heroica en las montañas, el compromiso de los jóvenes de clases acomodadas con los pobres, y el espíritu de sacrificio personal en pos de la justicia y la libertad. El corrupto régimen de Batista perdió apoyos, entre ellos el de los Estados Unidos, que en 1958 suspendieron los suministros de armas a Cuba. El 1º de enero de 1959 los "guerrilleros barbudos" entraron en La Habana.



Fidel conversa con el Che Guevara dentro de un barracón, en enero de 1959.

Castro viajó a los Estados Unidos para tranquilizar al presidente Eisenhower respecto a las tibias relaciones de la Revolución cubana con los comunistas: estos no habían apoyado la lucha de la guerrilla y no tenían cargos en su gobierno. Pero la inmediata y radical reforma agraria provocó la reacción de Washington, que anuló la cuota de

azúcar que importaba de Cuba, y ante la oleada de nacionalizaciones aprobadas en 1960, Eisenhower decretó un embargo económico total. El nacionalismo de los revolucionarios fue rechazado de plano por la potencia que dominaba la economía de la isla. La Revolución cubana se alineó así definidamente en el mundo bipolar: se acercó a la Unión Soviética y rompió relaciones con la potencia hegemónica.

A mediados de 1960, Washington –en connivencia con los exiliados cubanos en Miami– resolvió derrocar al gobierno "comunista".

La invasión de la isla con tropas entrenadas en Guatemala por la CIA fue organizada durante la presidencia de Eisenhower y aprobada por Kennedy. Pero el desembarco de las tropas norteamericanas en la Bahía de Cochinos en 1961 acabó en un rotundo fracaso.

El gobierno de Kennedy siguió en parte la vía intervencionista de sus antecesores, pero también inauguró una nueva política hacia los países latinoamericanos mediante la creación de la Alianza para el Progreso, un organismo destinado a promover la transformación de las estructuras económicas y sociopolíticas de la región volviéndolas invulnerables a la tentación revolucionaria. Según Kennedy, "quienes hacen imposibles las revoluciones pacíficas convierten en inevitables las revoluciones violentas". En agosto de 1961 se firmó la Carta de Punta del Este, que aspiraba a la mejora de las condiciones de vida y la modernización de las estructuras políticas, pasando por el crecimiento económico. La insistencia en la importancia de las reformas agrarias otorgó al programa un carácter audaz, casi radical. Pero las realizaciones no justificaron las expectativas, y no tardó en hablarse del fracaso de la Alianza para el Progreso. Las reformas fiscal y agraria enfrentaron la oposición tenaz de las clases propietarias latinoamericanas, y los fondos que supuestamente aportarían los Estados Unidos fueron recortados antes de llegar a la región. El fracaso más espectacular de la Alianza fue de orden político. Su objetivo era alejar el espectro de la revolución por medio de la consolidación de la democracia, pero en los cinco primeros años del programa se registraron nueve golpes de estado contra presidentes civiles legalmente elegidos.

Al principio, la reacción de los Estados Unidos fue ambigua. Kennedy reconoció al gobierno militar que derrocó al presidente argentino Frondizi en 1962, pero se opuso a los militares peruanos que ese mismo año desconocieron la victoria electoral del APRA. Su sucesor Lyndon Johnson tuvo menos dudas. Apoyó en 1964 el golpe contra el presidente brasileño Goulart y envió a los marines a la República Dominicana en 1965 ante el posible regreso de Juan Bosch, el presidente derrocado dos años antes. La administración estadounidense relegó los cambios económico-sociales y priorizó acabar con el castro-comunismo antes que sostener la democracia. Kennedy confesó que prefería un gobierno democrático decente al régimen de Trujillo, sin embargo agregó que convenía no renunciar a esta segunda opción hasta estar seguros de evitar un régimen castrista.

Desde la perspectiva de Washington, hubo dos países –Chile con la Democracia Cristiana y Perú con el APRA– que estuvieron cerca de ejemplificar la filosofía reformista de la Alianza para el Progreso, pero el naufragio de la reforma en ambos casos reforzó la opción militar. Los militares latinoamericanos fueron los verdaderos beneficiarios de la clausura del camino reformista, asociada a la fobia hacia la nueva Cuba. La asistencia militar estadounidense progresó de manera considerable: de sesenta y cinco millones de dólares anuales entre 1953 y 1961 pasó a una media de ciento setenta millones durante los tres años de la administración Kennedy.

La doctrina de la seguridad nacional abrió el camino hacia "la guerra sucia". La nueva intimidad entre las fuerzas armadas latinoamericanas y las de la potencia hegemónica fue decisiva para acelerar la transición hacia nuevas funciones y prácticas, que incluían la tortura de los militantes políticos y el uso de la violencia contra las poblaciones civiles. La experiencia del ejército francés en Argelia fue una fuente de inspiración y de justificación ideológica. De los golpes militares preventivos, destinados a frenar el avance de las fuerzas contestatarias, se fue pasando a la intervención de las fuerzas armadas

como disciplinadoras de la sociedad por la vía del terrorismo de estado.

Las transformaciones de la iglesia católica tuvieron un fuerte impacto en América Latina. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1959, impulsó la renovación litúrgica y estimuló la participación del conjunto de los fieles, definiendo a la iglesia como el "pueblo de Dios". A la vez, revisó varias concepciones dogmáticas que chocaban con las ideas del mundo moderno. Fue muy importante el contacto entre los obispos de todo el mundo, ya que por primera vez se encontraron e intercambiaron ideas los de los nuevos países de Asia y África y los de América Latina. Pablo VI, en su encíclica *Populorum progressio*, de 1967, actualizó los contenidos sociales refiriéndolos a los problemas del Tercer Mundo. La encíclica incluyó una crítica al orden económico internacional: "Los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos". Ese mismo año se dio a conocer el Mensaje de los Obispos del Tercer Mundo. La mitad de los firmantes eran brasileños, había un colombiano y cuatro provenientes del mundo islámico. El documento propiciaba la reorganización de un orden mundial que atentaba contra los países más pobres. Mientras las naciones ricas seguían enriqueciéndose, las pobres tenían "el deber de exigir, por todos los medios legítimos a su alcance, la instauración de un gobierno mundial que sea capaz de exigir, incluso imponer, una repartición equitativa de los bienes, condición indispensable para la paz". En agosto de 1968, la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, donde participó un gran número de obispos de la región, fue más allá y postuló un compromiso militante de la iglesia con las luchas de los pueblos. El sacerdote colombiano Camilo Torres se unió a un grupo guerrillero, y su ejemplo fue imitado por otros.

La iglesia de Brasil ya había organizado distintos movimientos sociales, entre ellos, el de Natal en el nordeste, donde actuó Helder Cámara, impulsor del Mensaje de los Obispos del Tercer Mundo. En Chile, algunos sectores cristianos escindidos de la democracia cristiana formaron el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). En la Argentina, jóvenes militantes católicos se sumaron al peronismo, y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo asumió el compromiso con los pobres y la necesidad de la militancia social y política. Aunque conservaron su función sacerdotal, algunos de ellos se vincularon con la nueva organización guerrillera peronista Montoneros, cuya primera acción fue el asesinato, en 1970, del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los protagonistas del golpe de estado de 1955.

La construcción del socialismo motorizada por el heroísmo y la voluntad política exaltada por la Revolución cubana tuvo honda repercusión en América del Sur. Como contrapartida, la presencia de la Cuba socialista provocó el rechazo de cualquier intento de reforma en las clases propietarias. En el campo intelectual latinoamericano se propagó la teoría de la dependencia, esgrimida también por pensadores de izquierda estadounidenses y franceses. Sostenían que el débil crecimiento económico de los países del Tercer Mundo era consecuencia inevitable de su integración subordinada en el orden capitalista mundial, y proponían la ruptura ya fuera mediante una transformación radical de las relaciones entre las metrópolis y los países dependientes, o bien por la acción revolucionaria de los explotados contra las clases dominantes.

La inflexión ideológica se combinó con la movilización de distintos grupos sociales y con la presencia de fuerzas sociales políticas organizadas que impugnaban el orden existente: la protesta de los estudiantes en México, el Cordobazo en la Argentina, la victoria de la Unidad Popular en Chile, el surgimiento del Frente Amplio en Uruguay, el crecimiento del Partido Comunista dentro del sindicalismo brasileño. En un primer momento, cuando las políticas de sustitución de importaciones agotaban su potencial y se profundizaban los reclamos sociales, prevaleció la esperanza de que el cambio era posible e incluso cercano. Este sentimiento se correspondía con un clima de época: las luchas de liberación nacional en África y Asia, el fracaso de los Estados Unidos en Vietnam, el Mayo francés, la Revolución cultural china. En el ámbito latinoamericano se fueron entrelazando una creciente y heterogénea movilización social, la

presencia de una nueva izquierda favorable a la lucha armada y la decisión de los militares de asumir la represión de las demandas sociales y políticas hasta las últimas consecuencias.

El debate en torno a la lucha armada dividió a la izquierda. La diferencia entre revolucionarios y reformistas pasó a depender de que estuvieran a favor o en contra del empleo inmediato de la violencia. El triunfo del Movimiento 26 de Julio en Cuba fue interpretado por muchos como una prueba de la eficacia de las armas para concretar la revolución. Algunos sectores encontraron su fuente de inspiración en la China maoísta: así como las guerrillas campesinas de ese país habían sitiado las ciudades para liberar al pueblo, las revoluciones de los países periféricos cercarían a las grandes metrópolis para derrumbar el sistema mundial gestado por el imperialismo. Ambas experiencias ponían en cuestión la vía pacífica al socialismo impulsada por el régimen soviético y seguida por la mayoría de los partidos comunistas de América Latina. La izquierda revolucionaria estaba dispuesta a combinar la lucha armada con la lucha de masas, pero descartaba las posibilidades de la democracia.

En un primer momento, la vía armada dio lugar a la creación de organizaciones guerrilleras en el ámbito rural: en la Argentina, el Ejército Guerrillero del Pueblo de Jorge Masetti; en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional; en Guatemala, las Fuerzas Armadas Rebeldes dirigidas por Yon Soza y Turcios Lima; en Perú, el ex aprista Luis de la Puente Uceda organiza el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Héctor Béjar, el Ejército de Liberación Nacional; en Nicaragua, el Frente Sandinista dirigido por Carlos Fonseca; en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, al que ingresó el cura Camilo Torres, mientras Manuel Marulanda dirigía las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en México, Lucio Cabañas se dirigió al monte con su Partido de los Pobres; en Brasil, el ex comandante comunista Carlos Lamarca actuó en el Valle de Ribeira; y en Bolivia, el Ejército de Liberación Nacional, la simbólica guerrilla del Che.

Los jóvenes que partían hacia la montaña o la selva, dispuestos a dar la vida, lo hacían sin conocer previamente el terreno, sin un mínimo de apoyo social, convencidos de que las condiciones revolucionarias estaban dadas y sólo bastaba la chispa que ellos iban a encender para provocar el fuego. Estos intentos guerrilleros no llegaron a ser referentes de importancia en los conflictos sociales y fueron sobredimensionados por las fuerzas del orden para legitimar la supresión de las libertades públicas.

A fines de los años sesenta surgieron las experiencias guerrilleras urbanas: los Tupamaros, provenientes del antiguo Partido Socialista, en Uruguay; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, autodefinido como marxista leninista, en Chile; los Montoneros, tendencia del peronismo a la que se sumaron sectores de la izquierda marxista, y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo, en la Argentina, y la Acción Liberadora Nacional, del ex comunista Carlos Marighella, en Brasil. Su composición social era similar a la de las guerrillas rurales: jóvenes de los sectores medios urbanos con estudios universitarios.

Decididos a erradicar la subversión social y política, los militares –con la complicidad más o menos explícita de las clases propietarias y el aval de los Estados Unidos– optaron por tomar el poder: Ecuador en 1963, Brasil y Bolivia en 1964, la Argentina en 1966 y luego en 1976, y finalmente Uruguay y Chile en 1973. En cambio, los golpes de 1968 de los militares peruanos, con Velasco Alvarado a la cabeza, y el de Omar Torrijos en Panamá se definieron a favor de las reformas sociales y mantuvieron tensas relaciones con los Estados Unidos.

Escenarios políticos y conflictos en Asia

La experiencia más exitosa entre los nuevos estados nacionales asiáticos fue la de la India, con una notable estabilidad política –cerca de cuarenta años bajo el predominio casi indiscutible del Partido del Congreso–, posibilitada en cierta medida por el alto grado de fragmentación de la oposición.

Después de los sangrientos enfrentamientos que siguieron a la división de la ex colonia británica, el Partido del Congreso adoptó un sistema que fortalecía el gobierno y la burocracia estatal del centro, en poder de los hindúes, en un país signado por tajantes divisiones sociales, religiosas y económicas. La admirada democracia laica hindú logró perdurar en condiciones de extendida pobreza y en medio de una impresionante heterogeneidad cultural. Tras el asesinato de Gandhi, Nehru asumió la conducción del gobierno y el partido.

Durante su largo mandato (1948-1964), se forjó un importante consenso entre las elites urbanas y las oligarquías rurales que favoreció el éxito electoral del Congreso. La política proteccionista garantizó a los grupos urbanos el desarrollo de la industria nacional, apoyado por unos planes quinquenales de clara inspiración socialista que, no obstante, respetaban la propiedad privada. En cuanto a los grandes propietarios rurales, la incompleta reforma agraria les permitió preservar buena parte de sus privilegios. Esto, en el marco de una Constitución moderna de corte liberal, secular e igualitaria que expresaba las aspiraciones de una intelectualidad muy occidentalizada. Nehru creía que su país y los nuevos estados surgidos de la descolonización incidirían en el rumbo de las relaciones internacionales y por eso participó activamente en la construcción del grupo de no alineados.

El no alineamiento de Nehru

En el discurso pronunciado en la Conferencia Afroasiática realizada en Bandung, Indonesia, entre el 18 y el 24 de abril de 1955, el líder indio rechazó la subordinación a una u otra de las grandes potencias en los siguientes términos: "No acordamos con las enseñanzas comunistas, ni acordamos con las enseñanzas anticomunistas, porque ambas están basadas sobre principios erróneos. Yo nunca discutí el derecho de mi país a defenderse a sí mismo; tiene que hacerlo. Nos defenderemos nosotros mismos con todas las armas y fuerzas que tenemos, y si no tenemos armas nos defenderemos sin armas. [...]

Los errores de mi país y quizá los errores de otros países aquí presentes no tienen mucho peso; pero los errores de las grandes potencias tienen un gran peso para el mundo y pueden llevarlo a una catástrofe terrible. Hablo con el mayor de los respetos de estas grandes potencias porque ellas no son solamente grandes en poder militar sino también en desarrollo, en cultura, en civilización. Pero sostengo que la grandeza a veces trae valores muy falsos, falsos principios. Cuando ellos comienzan a pensar en términos de fuerza militar –quienquiera sea, el Reino Unido, la Unión Soviética, o los Estados Unidos–, entonces se están alejando del camino recto y el resultado de ellos será que el poder arrollador de un país conquistará el mundo. [...]

Muchos miembros presentes aquí obviamente no aceptan la ideología comunista, mientras otros sí lo hacen. Por mi parte yo no lo hago. Soy una persona positiva, no una persona "anti". Quiero un bien positivo para mi país y para el mundo. ¿En consecuencia, los países de Asia y África estamos privados de cualquier posición positiva excepto la de ser procomunistas o anticomunistas? ¿Se ha llegado a esto, a que los líderes del pensamiento que han dado religiones y toda clase de cosas al mundo tienen que estar clavados a este o aquel grupo y ser seguidores de este partido o el otro expresando sus deseos y ocasionalmente emitiendo una idea? Esto es lo más degradante y humillante para cualquier pueblo o nación con respeto por

sí mismo. Para mí es un pensamiento intolerable que los grandes países de Asia y África hayan pasado del cautiverio a la libertad sólo para degradarse o humillarse de esta manera [...]

G. M. Kahin, "The Asian-African Conference" (Cornell University Press, 1956), pp. 64-72. Traducción al castellano de Luis César Bou. Esta cita está tomada de Marxists Internet Archive, 9 de julio de 2007, disponible en: www.marxists.org.

Desde su independencia, la India mantuvo relaciones fluidas con la Unión Soviética y en respuesta a este vínculo, los Estados Unidos se mostraron generosos con los militares pakistaníes facilitándoles el armamento requerido para mantener una relación de fuerzas equilibrada en su disputa con la India por Cachemira.

Poco después de la muerte de Nehru, su única hija lo sucedió al frente del gobierno hasta 1984.



Indira Gandhi, primera ministra a partir de 1966, fue reelegida hasta 1977, cuando perdió las elecciones. Recuperó el gobierno en 1980 y cuatro años después fue asesinada por dos miembros de su guardia personal, vinculados a un grupo armado de la etnia sikh que respondía así a la represión del gobierno frente a sus violentos reclamos autonomistas.

La celebración de la India como "la democracia más grande del mundo" se ha basado, en cierto sentido, en una apreciación limitada de la democracia. Esta apreciación destaca la vigencia de procesos electorales competitivos, pero subestima la fuerte carga de injusticias sociales y de luchas armadas que han signado la trayectoria de la India independiente. Los conflictos de mayor envergadura articularon las demandas por la distribución de la tierra y las quejas de los agraviados

por la negación y represión de las identidades culturales diferentes de la hindú.

Desde la independencia, las dos principales manifestaciones de hondos problemas sociales han sido el naxalismo –guerrilla de inspiración maoísta– y las insurgencias étnicas en el noreste del país. Los naxalitas luchan por una distribución más justa de los recursos y han protagonizado numerosas revueltas desde 1968 en las regiones más atrasadas de la India rural. La región del noreste, donde conviven alrededor de doscientos grupos étnicos con lenguas y dialectos propios, fue bastante autónoma hasta la creación del estado nacional indio. Luego de la consolidación del poder central después de la independencia, las poblaciones de Nagaland y Manipur recriminaron a Nueva Delhi su tendencia a criminalizar la mera idea de la autodeterminación. A partir de la represión de la desobediencia civil de los naga en los años cincuenta, la región sufrió una creciente militarización. En la década de los setenta, el antagonismo entre la población local y el gobierno central se vio agravado por la colaboración pakistaní y china con los insurgentes.

El estado de Pakistán quedó integrado por cuatro provincias con marcadas desigualdades en el reparto del poder y el acceso a los bienes sociales y económicos. Los militares y la burocracia nacional de Punyab impusieron su dominación y –sin tener en cuenta que agraviaban a los sindies, baluchíes y pashtunes– alimentaron las reivindicaciones separatistas. Muhammad Ali Jinnaha, el líder de la Liga Musulmana, que aspiraba a crear una nación moderna inspirada en el modelo británico, quiso convertir a Pakistán en el estado de los musulmanes y no en un estado islámico.

La creación de Pakistán

El 11 de agosto de 1947, ante la Asamblea Constitucional de Pakistán, Muhammad Ali pronunció el siguiente discurso: “Sé que hay gente que no acuerda totalmente con la división de la India y la partición del Punyab y Bengala. [...] Pero la pregunta es, ¿hasta dónde era posible o practicable actuar de otra manera que en la que se lo hizo? [...] Ahora ¿qué haremos? Ahora, si queremos hacer feliz y próspero a este gran estado de Pakistán, debemos concentrarnos total y completamente en el bienestar del pueblo, y especialmente de las masas y de los pobres. [...]
Debemos comenzar a trabajar en tal espíritu y en el curso del tiempo todas estas diferencias de comunidades en mayoría y en minoría, comunidad hindú y comunidad musulmana, se desvanecerán; porque incluso respecto a los musulmanes ustedes tienen pathanes, punyabíes, chiitas, sunitas, etc., y entre los hindúes tienen brahmanes, vaishnavas, también bengalíes, madrasíes, etc. De hecho, si me lo preguntan diré que esta ha sido la mayor dificultad en el camino de la India para obtener la libertad e independencia, y si no fuera por esto hubiéramos sido libres hace mucho, mucho tiempo. [...]
Por lo tanto, debemos aprender de esto una lección. Ustedes son libres; son libres de ir a sus templos; son libres de ir a sus mezquitas o a cualquier otro lugar de culto en este estado de Pakistán. Ustedes pueden pertenecer a cualquier religión, casta o credo; eso no tiene nada que ver con las cuestiones del estado. [...] Los católicos romanos y los protestantes se perseguían mutuamente. Aún hoy existen algunos estados donde hay discriminaciones y prohibiciones impuestas contra una clase en particular. Gracias a Dios, no hemos comenzado en esos días. Hemos comenzado en los días en que no hay discriminación, no hay distinción entre una comunidad y otra, no hay

discriminación entre una casta o credo y otro. Hemos comenzado con este principio fundamental de que somos todos ciudadanos, ciudadanos iguales de un estado".

Traducción al castellano de Luis César Bou. Disponible en: www.marxists.org.

La Sociedad Islámica creada por Abu Ala Al-Mawdudi promovió en los años cuarenta un estado islámico a gran escala en toda la India, puesto que desde su perspectiva todos los nacionalismos eran impíos. Su planteo tuvo escasa acogida en el momento de la independencia, pero en los años setenta la Sociedad Islámica desempeñó un papel destacado en la islamización impulsada desde el gobierno central.

El movimiento islámico con mayor arraigo en la población fue el de los deobandis, surgido en la ciudad de Deoband en respuesta a la dominación británica que puso fin al imperio mogol (musulmán). Su objetivo era formar ulemas capacitados para emitir fatwas (opiniones jurídicas autorizadas), de modo tal que los musulmanes continuaran viviendo en una sociedad no islámica según sus normas básicas y sin caer en la impiedad. Cuando se creó Pakistán, los deobandis contaban con una red de escuelas religiosas que les posibilitó presionar al gobierno para obtener recursos y ganar espacios en la administración pública. Los ulemas deobandis sostenían un puritanismo riguroso muy cercano al wahabismo saudí. Las elites occidentalizadas que controlaban el gobierno tuvieron menos éxito que el líder egipcio Nasser en reducir la influencia de los movimientos religiosos. Sin el islam, la unión de los diversos pueblos que componían Pakistán era muy frágil.

El ejército fue un actor central en la edificación del estado pakistaní, en parte debido a la debilidad de la burguesía. A diferencia de la India, en Pakistán prevalecieron la inestabilidad institucional y los gobiernos militares. La escisión de Bangladesh en 1971, apoyada por la India, fue para Pakistán un desastre comparable a la derrota árabe en la Guerra de los Seis Días con Israel. Los fracasos en ambas guerras, combinados con las tensiones socioculturales y el agotamiento del desarrollo industrial por la vía de la sustitución de importaciones, debilitaron a las elites nacionalistas y seculares del mundo musulmán y ampliaron el margen de acción de los islamistas radicales.

Los países localizados en el Sudeste asiático albergan una población islámica similar a la de todo el mundo árabe. Además, la mayoría de ellos cuentan con minorías chinas con fuerte poder económico y en casi todos existen comunidades étnicas y/o religiosas minoritarias. En Malasia e Indonesia las minorías budistas, hindúes y cristianas coexisten con la mayoría musulmana; en Tailandia, Myanmar y Vietnam los musulmanes y cristianos son minoría frente a los budistas; en Filipinas la mayoría cristiana convive con minorías musulmanas; en la pequeña isla-ciudad-estado de Singapur la población malaya originaria constituye una minoría junto a la hindú y la cristiana, mientras que la población china es mayoritaria; en Camboya, junto a la mayoría budista existen diferentes grupos étnicos y religiosos. Sólo Laos, budista, y Brunéi, musulmán, son relativamente homogéneos en el terreno religioso. La enorme diversidad cultural y las hondas desigualdades sociales plantearon serios retos a la construcción de los nuevos estados nacionales.

A estas líneas divisorias se sumaron los distintos alineamientos ideológicos en el marco de la Guerra Fría. Mientras Myanmar y la antigua Indochina francesa se inclinaron hacia la órbita socialista, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia y Singapur fueron firmes aliados de las potencias capitalistas y en 1967 formaron la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Durante el conflicto de Indochina en su fase más aguda, los miembros fundadores buscaron reforzar su capacidad de enfrentar al comunismo. La ASEAN se autodefinió como Zona de Paz, Libertad y Neutralidad en el Sudeste Asiático, pero en realidad favoreció el predominio norteamericano para impedir la expansión del comunismo y recibir ayuda que estimulase el crecimiento económico.

Las dirigencias políticas que asumieron el gobierno después de la independencia promovieron la uniformidad cultural y la centralización política. Esta orientación se dio por igual en el bloque comunista y en el capitalista. Ambos sistemas reprobaban las lealtades grupales (clánicas, étnicas, parroquiales) porque obstaculizaban la constitución de lazos cívicos y el despliegue del mercado en el caso de las metrópolis capitalistas, o bien porque atentaban contra el colectivismo planificado del bloque comunista. La lógica de la Guerra Fría y la existencia de conflictos internos facilitaron la consolidación de regímenes autoritarios. En la esfera comunista: la vía birmana al socialismo, de corte autárquico después del golpe de estado de 1962; los de inspiración soviética en Vietnam y Laos al concluir la guerra con los Estados Unidos, y la sangrienta experiencia de los jemeres rojos con respaldo chino en Camboya. Por su parte, las democracias occidentales apoyaron el capitalismo corrupto y de mano dura de Mohamed Suharto en Indonesia, la dictadura de Ferdinando Marcos durante dos décadas en Filipinas, y los regímenes autoritarios en Tailandia, Singapur y Malasia.

Las estrategias de homogeneización, en muchos casos impuestas mediante el exterminio y el desplazamiento masivo de la población, estuvieron asociadas con grandes desigualdades en la distribución de los ingresos, el uso de los recursos naturales y las posibilidades de ganar espacios de poder. Los grupos agraviados formaron movimientos de resistencia cuyos reclamos iban desde la defensa de sus lenguas, religiones e historias propias hasta la obtención de una mayor autonomía y las demandas de independencia. En estos conflictos las organizaciones armadas, a diferencia de las de orientación comunista, no lucharon por la toma o la alternancia del poder ni por la reforma de la sociedad o del modelo político, sino por la autodeterminación de los grupos étnicos y religiosos avasallados por el poder central.

A fines de los años sesenta, en Filipinas ganaron terreno dos tipos de oposiciones armadas que perduran hasta el presente. Por un lado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés), brazo militar del Partido Comunista que llegó a controlar una porción significativa del territorio, especialmente en las áreas campesinas. Por otro, la resistencia de la minoría musulmana asentada en la isla de Mindanao, que ha desembocado en el conflicto más sangriento de este país. En Mindanao, pródiga en recursos minerales y agrícolas, siete de cada diez familias viven por debajo del umbral de pobreza y la renta per cápita es seis veces inferior a la media nacional. A fines de los años sesenta, se creó el Frente Moro de Liberación Nacional para enfrentar la colonización demográfica de la mayoría filipina y cristiana y exigir la autodeterminación del pueblo moro, un conjunto de grupos etnolingüísticos islamizados y organizados políticamente en sultanatos independientes desde el siglo XV. En la década de los setenta, las disputas internas multiplicaron los grupos armados en la resistencia musulmana.

En el sur de Tailandia, los malayos, mayoritariamente musulmanes, reivindicaron su autonomía frente a la mayoría del país, étnicamente tai y de confesión budista. En Myanmar, desde el inicio de la dictadura militar en 1962, las demandas de autodeterminación de las minorías étnicas se combinaron con las peticiones de democratización esgrimidas por la oposición política severamente reprimida. En Sri Lanka las diferencias entre la mayoría cingalesa y los tamiles, pobladores del sur de la India atraídos por la política colonial de Gran Bretaña, se intensificaron después de la independencia, cuando el cingalés fue instituido como lengua oficial clausurando de ese modo muchas puertas a la minoría tamil. Luego de sucesivos enfrentamientos, los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam encabezaron el movimiento rebelde, a partir de 1976.

La política expansionista y de sometimiento de las minorías instrumentada por el gobierno indonesio con asiento en Yakarta propició los reclamos de autonomía y las luchas por la liberación nacional. Los principales conflictos se desataron en el sultanato de Aceh, en Papúa Occidental, en Kalimantan, y en las provincias indonesias de Borneo y Timor Oriental. Las migraciones promovidas por el gobierno central alteraron la fisonomía de estas regiones,

especialmente en Papúa y Kalimantan. En ambas, las políticas de colonización del poder central provocaron violentos enfrentamientos entre la población originaria y los nuevos pobladores. En Kalimantan, junto con el apoyo al asentamiento de javeneses, Suharto modificó las leyes para permitir las actividades de compañías madereras vinculadas a sus intereses personales. Esta explotación no tuvo en cuenta los derechos del pueblo dayak y produjo un grave deterioro ambiental en Borneo. Ante la violenta reacción de los dayaks, que incluyó prácticas de canibalismo, la mayoría de los inmigrantes abandonaron la región.

En el marco de la resistencia a la explotación, entretejida con agravios sociales y culturales en la mayoría de los países de la región, los conflictos verticales –enfrentamientos entre los grupos armados de la oposición y los cuerpos de seguridad del estado– se entrecruzaron con los horizontales: las complejas luchas entre diferentes comunidades en las que se combinaron factores religiosos, étnicos, económicos y políticos.

En el caso de Indochina, la guerra contra Francia por la liberación nacional se entrelazó con la existencia de un fuerte liderazgo comunista en esta empresa y desembocó en la sangrienta guerra de gran parte del pueblo vietnamita, junto con sectores de Laos y Camboya, contra los Estados Unidos. Tras la derrota estadounidense, los conflictos armados se prolongaron en el tiempo, pero ahora entre los comunistas: la invasión de Camboya por los vietnamitas, que puso fin al régimen de los jemeres rojos en 1979 –aunque estos siguieron acosando al nuevo gobierno por medio de la guerra de guerrillas–, y el breve ingreso de China, ese mismo año, en el territorio de Vietnam en represalia a la destitución de sus aliados camboyanos.

La rivalidad entre China y Moscú por colocar a Vietnam bajo su esfera de influencia formó parte de las fricciones entre estos estados comunistas, que desembocaron en una división del comunismo con alcance mundial. Si bien la inmediata ayuda de Mao al líder vietnamita Ho Chi Minh contribuyó a su alianza con China, la superioridad militar de la Unión Soviética la convertía en un aliado indispensable para Hanói. Por otra parte, a medida que el gobierno chino tomaba distancia de la URSS y exploraba el acercamiento a los Estados Unidos, pretendió utilizar el conflicto vietnamita como carta de negociación con Washington. Al concluir la guerra de liberación de los vietnamitas, estos ya estaban alineados con la URSS y enfrentados con Pekín en torno al destino de Camboya.

Para los contemporáneos, la lucha del pueblo vietnamita contra la superpotencia capitalista ocupó el centro del escenario y casi todas las movilizaciones de los jóvenes estudiantes occidentales de fines de los años sesenta manifestaron su decidido apoyo a Vietnam. Esta guerra, junto con la resistencia de los argelinos y la Revolución cubana, fueron un hito en la construcción del imaginario tercermundista. Desde su perspectiva, el protagonismo de la clase obrera en la lucha contra la explotación capitalista quedaba desplazado por las luchas nacionales de liberación del Tercer Mundo, que pondrían fin a un sistema mundial dominado por las metrópolis capitalistas.

Los tigres asiáticos

Aunque la mayor parte de Asia Oriental no se convirtió en colonia de Occidente, el avance de las potencias imperialistas influyó fuertemente en toda el área. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, Tokio aprovechó la crisis china y la creciente fragilidad de Rusia para apoderarse de Corea, Taiwán y otras islas del Pacífico. En el período de entreguerras, Japón buscó la integración con estas regiones vecinas y encaró la inversión industrial en las colonias. La existencia de recursos naturales y de mano de obra barata en los países sometidos fueron elementos decisivos para que Tokio pudiera afrontar el esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial.

El milagro de los “tigres asiáticos”, evidente en los años setenta, fue resultado de la singular articulación entre procesos de larga data –como la anexión de Corea, Taiwán y otras islas del Pacífico por parte

de Japón–, la competencia entre las superpotencias durante la Guerra Fría, y el desafío de convertir a pequeños países sin sólidas bases de sustentación en estados nacionales viables. Con el triunfo de Mao en China, Asia Oriental pasó a ser una pieza de especial interés para los Estados Unidos, temerosos de que gran parte de ese continente cayese en manos de los comunistas. Entre 1948 y 1975, Corea recibió el equivalente de la ayuda asignada por los Estados Unidos a todos los países africanos. Se benefició –al igual que Taiwán– de los gastos militares ligados a la guerra de Vietnam, pero sobre todo de los contratos públicos en ese país, que dieron origen a grandes empresas coreanas como Hyundai y Daewoo. Washington no sólo suministró apoyo militar, asistencia técnica y ayuda financiera sino que abrió su mercado a los productos coreanos, más baratos gracias al bajo nivel de sus salarios en relación con el estadounidense.

Estos países se caracterizaron por tener regímenes políticos autoritarios, una oligarquía terrateniente quebrada o inexistente, una elevada tasa de alfabetización, burocracias estatales de largo arraigo, muy capacitadas y eficientes, y fuertes conexiones informales y flexibles con los grandes grupos empresariales, una combinación altamente exitosa para dar el salto hacia economías productivas aptas para competir en el mercado internacional.

Los tigres asiáticos siguieron el camino que había transitado el estado desarrollista en Japón y sus experiencias marcaron el rumbo que seguirían los llamados "gansos voladores": Tailandia, Malasia, Indonesia y, con menos fortuna, Filipinas. Entre las economías de estos países existen considerables diferencias, pero todas ellas prosperaron en un contexto regional común: un área fronteriza en la Guerra Fría, donde la exitosa experiencia japonesa ejercía una poderosa atracción. Tokio quiso consolidar su propio crecimiento a través de inversiones en la región y sus capitales contribuyeron a la extendida difusión del "milagro japonés".

En plena crisis de la industrialización centrada en el mercado interno, los organismos económicos internacionales y los centros de ideas estadounidenses subrayaron el acierto de las experiencias asiáticas: habían demostrado que podía superarse el subdesarrollo sometiéndose a las reglas de la competencia capitalista. Este discurso soslayó el papel protagónico de los estados en la industrialización sustitutiva de exportaciones de bienes primarios por productos manufacturados. Cuando a fines de los años noventa la crisis sacudió brutalmente a los tigres mayores y menores, los mismos centros de poder que otrora los habían mostrado como ejemplos a seguir acusaron a los estados "clientelistas" asiáticos de ser los principales responsables de la hecatombe. Según los neoliberales, para remontar el derrumbe era imprescindible que las burocracias corruptas e ineficientes abrieran paso a las leyes del mercado.

El heterogéneo mundo árabe y la resistencia palestina

En la inmediata posguerra se consolidó la idea de un mundo árabe unido en torno a una serie de factores. Por un lado, el surgimiento de estados nacionales cuyas poblaciones compartían una misma lengua y religión, costumbres similares y gran parte del pasado. Por otro lado, la creación de la Liga Árabe aprobada en marzo de 1945 por un conjunto significativo de países: Egipto, Irak, Jordania (en ese momento Transjordania), Líbano, Siria y Yemen del Norte, a los que, en los años cincuenta y sesenta, se sumaron Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait y Argelia. El proyecto tomó forma a través de la acción conjunta contra "un enemigo común": el estado de Israel. La creación de este estado en 1948, con la consiguiente división de Palestina, se consideró una agresión contra la totalidad del pueblo árabe. Estos factores concretos se combinaron en un discurso político que sostenía que la liberación de Palestina era el objetivo principal del mundo árabe y el elemento determinante de su unidad. Durante un largo tiempo las reivindicaciones de los palestinos fueron asumidas y defendidas con las armas por los gobiernos árabes, y sólo a fines de los

años sesenta quedó claramente definida la existencia de una organización palestina independiente.

En los hechos se dio un proceso de afianzamiento de diferentes estados con regímenes políticos heterogéneos y en ocasiones enfrentados, tanto por razones ideológicas o relacionadas con el alineamiento en el mundo bipolar como por la delimitación de sus fronteras y la posición asignada al territorio palestino.

En los años dorados se distinguen dos tendencias principales: por un lado, la preservación del orden conservador asociada con el alineamiento en el bloque occidental de la monarquía de Arabia Saudita y, por otro, el nacionalismo popular –autodenominado socialismo árabe y combinado con el apoyo activo a la construcción del Movimiento de Países No Alineados–, representado por el gobierno de Nasser en Egipto, el partido Baath en Siria e Irak, el Frente de Liberación Nacional argelino y, a partir de 1969, por el régimen de Muammar al-Gaddafi en Libia.

Arabia Saudita, cuna y centro espiritual del islam, forjó una duradera y consistente alianza con los Estados Unidos sin modificar su orden interno. Los Saud, la familia artífice de la unidad del reino en los años treinta, en estrecha colaboración con el clero wahabita, impusieron un férreo control sobre la vida social y cultural de la población. El monarca encabeza un sistema que incluye un conjunto de centros de poder –la elite principesca y la familia real, el Consejo de Altos Ulemas, los jefes de las tribus beduinas, los tecnócratas y los empresarios– y una serie de principios rígidos que deben ser asumidos y respetados: la Sharia interpretada por los ulemas y el derecho consuetudinario. El wahabismo contribuyó a la constitución de un estado conservador organizado como una monarquía absoluta y teocrática, y simultáneamente disciplinó a la sociedad. Esta quedó sometida a las prescripciones de la Sharia en una amplia gama de aspectos de la vida privada, sobre todo respecto al papel pasivo y sumiso reservado a la mujer y en relación con el derecho penal. Sólo en el terreno económico el wahabismo se mostró dispuesto a aceptar los criterios del capitalismo occidental.

La alianza estratégica con Washington se construyó en la inmediata posguerra. En febrero de 1945, después de Yalta, el presidente Roosevelt se reunió con el sultán y acordaron que los Estados Unidos reconocerían los intereses del reino y que Arabia Saudita tendría en cuenta los objetivos económicos de la superpotencia en la región. Las multinacionales estadounidenses, con la Standard Oil Company of California a la cabeza, quedaron a cargo de la explotación y la venta del petróleo descubierto pocos años atrás en la región. Luego, a través de un proceso pactado y por etapas, que arrancó en diciembre de 1972 y culminó en 1988 con la creación de la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), la industria del petróleo fue nacionalizada sin que Arabia Saudita dejara de ser el principal proveedor de crudo de los Estados Unidos.

Los Saud vigilaron con especial celo que la afluencia masiva de dinero procedente del petróleo, en una sociedad escasamente modernizada, no conllevara los principios culturales de Occidente ni sus ideas y prácticas políticas, como el parlamentarismo, los partidos políticos y el laicismo. Simultáneamente, la monarquía creó un generoso sistema de protección social que favoreció la estabilidad del régimen.

El llamado “socialismo árabe”, en cambio, se definió a favor de la renovación económica y buscó el apoyo de la frágil burguesía local y de los sectores populares, presentándose como una vía intermedia entre el capitalismo y el comunismo. Sus máximos exponentes, el nasserismo y el partido Baath sirio, culparon al colonialismo y a los regímenes prooccidentales y conservadores de los males que sufría el pueblo árabe. Una de sus primeras propuestas fue la reconstitución de la unidad, que les fuera negada por las potencias europeas, alegando que tenía raíces en una historia, una religión y un territorio compartidos. El primer paso en tal sentido fue la creación de la República Árabe Unida. No obstante, la coalición entre el nasserimo egipcio y el Baath sirio –afectado por los enfrentamientos entre distintas fracciones y la fuerte competencia entre la rama siria y la iraquí– fracasó debido, en parte, a las rivalidades entre los estados

nacionales que pugnaban por dirigir el rumbo de la región. La República Árabe Unida se disolvió en 1961.

El régimen nasserista fue visto como una amenaza por las potencias occidentales, debido a sus vínculos con el bloque comunista; por Israel, dado su afán por representar las reivindicaciones de los palestinos; y también por los regímenes árabes conservadores alineados con Occidente, que rechazaban las invocaciones al nacionalismo popular revolucionario. Sus opositores más acérrimos fueron las monarquías de Libia, Jordania, Marruecos y especialmente Arabia Saudita. La monarquía saudita denunció el socialismo laico del gobierno de Nasser y se atribuyó el liderazgo del islamismo, aspiración fundada en su papel de guardián de las ciudades santas y protector de la peregrinación a la Meca. En 1962 se creó la Liga Islámica Mundial, la primera institución sólida que pretendió "wahabizar" el islam. Además del *establishment* religioso saudí, en la empresa de revitalización del islam participaron los Hermanos Musulmanes de Egipto y los ulemas de Pakistán.

Los Hermanos Musulmanes, agrupación creada en Egipto en el período de entreguerras y extendida a varios países árabes, tenían un importante nivel de inserción entre los sectores populares a través de sus redes de asistencia social y centros de educación. En 1952 habían apoyado la acción de los Oficiales Libres contra la monarquía, pues compartían sus consignas de antiimperialismo, defensa de la unión árabe y rechazo al estado de Israel. Pero cuando Nasser defendió su autonomía política frente a la competencia de esta organización religiosa, pasaron a la oposición. Después de los intentos frustrados de asesinar a Nasser en 1954 y 1956, la Hermandad fue duramente reprimida mediante el encarcelamiento de miles de simpatizantes y la ejecución de dirigentes claves como Sayyid Qutb.

Aunque persiguió a los Hermanos que desafiaban su liderazgo, Nasser aceptó el componente islámico de la identidad árabe y buscó el apoyo de instituciones y líderes islámicos que no cuestionaran su poder. Nacionalizó la Universidad al-Azhar, la sede más antigua del saber islámico, y controló los sueldos y las subvenciones de las mezquitas y el personal religioso.

Irak se sumó a la corriente nacionalista a fines de la década de 1950, cuando el grupo de Oficiales Libres encabezó un golpe sangriento en el que perdieron la vida el rey, el regente y el primer ministro. La política iraquí dio un vuelco: de la sumisión a Occidente vía la participación en el pacto de Bagdad pasó a un nacionalismo radical e interesado en detentar una posición dominante en el mundo árabe. Las facciones rivales en el seno del Baath abrieron un período de inestabilidad política que se cerró en 1968, año en que tomó el poder la fracción a la que pertenecía Saddam Hussein, quien ocupó la vicepresidencia del Consejo de la Revolución.

El nuevo régimen promovió el desarrollo industrial a través del intervencionismo estatal: creó cooperativas agrícolas administradas por el estado y nacionalizó las compañías petroleras. Favorecido por los altos precios del petróleo, al viejo Irak agrario de las tribus se le superpuso un Irak urbano con una pujante clase media y un activo núcleo obrero. El partido gobernante procuró extender sus redes sobre el conjunto de la sociedad civil, y llegó a tener cerca de dos millones de afiliados. En el campo árabe ayudó activamente a la OLP y formó con Siria y Libia el Frente del Rechazo, que impugnó los acuerdos de Camp David firmados entre Egipto e Israel en 1979.

Líbano tuvo una trayectoria con rasgos singulares, derivada de su condición formal de estado secular contradictoriamente construido sobre una base confesional. De acuerdo con el pacto promovido por Francia antes de abandonar la región, a cada grupo religioso se le asignó una cuota en las instituciones gubernamentales, que abarcó tanto las fuerzas armadas como el acceso al empleo público. A esto se sumó el papel económico de Líbano como paraíso del liberalismo más desenfrenado. El sector de los servicios –finanzas, bancos, comercio y turismo– contribuía en 1970 con más del 70% al PIB nacional, uno de los más altos del mundo, razón por la cual el país fue reconocido como "la Suiza de Oriente Medio". La expansión económica favoreció principalmente a la dirigencia cristiana y se dio en el marco de la

ausencia de políticas de gobierno destinadas a la atención de los postergados, especialmente los vastos sectores de la comunidad chiita. Este sistema propició una marcada diferencia en el reparto de la riqueza y simultáneamente reforzó las diferencias confesionales. Otro factor que agregó complejidad al escenario libanés fue el creciente peso de los refugiados palestinos vinculados a organizaciones populares libanesas con demandas de cambio social, político y religioso.

Después de 1948, entre los palestinos prevaleció la dispersión y la aceptación del liderazgo de los países árabes para revertir su situación. En el clima de desaliento imperante a raíz de los resultados de la guerra de 1956, comenzaron a formarse diversas organizaciones en el campo palestino: entre ellas Al Fatah (Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina), encabezada por Yasser Arafat y en un principio rechazada por subversiva en Jordania, Siria y el Egipto nasserista.

A mediados de 1964, con el respaldo de la Liga Árabe, se creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), cuya Carta fundacional declaró ilegal el estado de Israel y consideró palestinos a todos los ciudadanos árabes residentes en Palestina hasta 1947, como asimismo a los nacidos de padre palestino después de esa fecha dentro o fuera del país. Arafat no asistió a la reunión, pues consideraba que la OLP era un instrumento de Nasser, cuyas ambiciones panarabistas lo llevaban a manipular a los palestinos en provecho propio.

A partir de 1967, la politización de la nueva generación de palestinos se expresó a través de la creación de nuevas organizaciones, como el Frente Popular de Liberación de Palestina, la Saika (1968), y dos grupos escindidos del primero en 1968 y 1969. Después de la derrota en la Guerra de los Seis Días, la OLP cambió de orientación: se alejó de Nasser, aprobó el ingreso de Al Fatah y del Frente Popular de Liberación de Palestina –organización de sesgo marxista– y revisó la Carta Nacional. El nuevo texto reconoció el carácter central de la lucha armada como “la única manera de liberar Palestina” y afirmó la identidad separada del pueblo palestino, sin dejar por ello de creer en la conveniencia de la unidad árabe para la liberación nacional. Al año siguiente, Arafat fue electo presidente del Consejo de la OLP.

La ocupación del Sinaí, el Golán, Gaza y Cisjordania por parte de Israel a partir de 1967, al tocar intereses nacionales particulares, abrió una grieta en la solidaridad árabe. Los países afectados relegaron la cuestión palestina. La acción militar coordinada de Egipto y Siria, en 1973, tuvo como objetivo recuperar la soberanía sobre los territorios perdidos.

Simultáneamente, el triunfo israelí y la subsiguiente ocupación de Gaza y Cisjordania incrementaron la presencia de los refugiados palestinos en los estados árabes vecinos, especialmente en Jordania y el Líbano. En Jordania, la intensa actividad política de la OLP bajo la hegemonía del Fatah agudizó las tensiones. La radicalización del movimiento palestino generó fricciones con el régimen conservador de Ammán, que temía el afianzamiento de un segundo poder. Entre los militares primaba el afán de deshacerse de tan incómodos huéspedes y en 1970, durante el llamado “Septiembre Negro”, expulsaron sangrientamente a los milicianos de la OLP. Por primera vez el ejército regular de un estado árabe lanzaba sus fuerzas contra la resistencia palestina y contra parte de la población desarmada. El nombre Septiembre Negro fue reivindicado por una organización terrorista cuya acción más notoria fue el secuestro y asesinato de once atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich.

El Reino Árabe Unido anunciado en 1972 por el rey hachemita, que suponía la reunificación de las dos riberas del Jordán en una monarquía federativa, fue rechazado tanto por la OLP como por la Liga Árabe. Las cumbres árabes de Argel (1973) y Rabat (1974) reconocieron a la OLP como la única representante del pueblo palestino y cancelaron definitivamente la pretensión del monarca jordano de ser el vocero legítimo de la causa palestina.

La Organización de las Naciones Unidas y el problema palestino

En noviembre de 1974, las resoluciones 3236 y 3237 avanzaron en el reconocimiento de la OLP por la ONU bajo la forma de invitación a los debates de la Asamblea General y de admisión en calidad de observador. También sostuvieron el derecho de los palestinos a la autodeterminación, la independencia y la soberanía nacional, y el de los refugiados al retorno a su patria de origen.

Al mes siguiente, Arafat se dirigió al plenario de la Asamblea –uniformado y habiendo dejado en la entrada su pistola– pronunciando el discurso más famoso de su carrera: “Vengo con el fusil del combatiente de la libertad en una mano y la rama de olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano. Repito: no dejen que la rama de olivo caiga de mi mano”. También pidió que no se calificara de terroristas a aquellos que “luchan por la liberación de su tierra de los invasores y los colonialistas”.



El líder palestino Arafat, en la ONU.

La presencia de las milicias palestinas también contribuyó a desestabilizar la situación en el Líbano, donde el conflicto fue más complejo y prolongado. A mediados de la década de 1970, el país fue diezmado por la guerra civil, la invasión israelí y las brutales matanzas de refugiados palestinos.

Hacia el este de los países árabes de Oriente Medio se encuentran Irán y Afganistán, los únicos estados musulmanes de la región que no cayeron bajo la dominación colonial, y si bien tuvieron trayectorias muy disímiles en los años dorados, sus crisis en los años setenta causaron un fuerte impacto en el espacio árabe.

La dinastía de los Pahlevi en Irán siguió un camino similar al de Atatürk en Turquía en los años veinte. La clase gobernante iraní buscó imponer un estado laico y desarrollado según el modelo de los países capitalistas centrales, contando con los recursos de la explotación

petrolera y su alineamiento con el bloque occidental. No obstante, en los años cincuenta, sectores nacionalistas opuestos al rumbo extranjerizante del sah y con peso entre la burguesía local y el clero chiita, condujeron al primer ministro Muhammad Mossadegh a decretar la nacionalización del petróleo. El golpe de 1953, con apoyo de la CIA, acabó con su gobierno. El sah recuperó el control del poder y restableció el vínculo dependiente con el capital extranjero, especialmente el estadounidense. Mossadegh carecía de las convicciones y la base de apoyo popular de Nasser, pero además la actitud de los Estados Unidos fue diferente, pues el apoyo de la Unión Soviética condujo a Washington a ser más cauteloso con Nasser.

El reino de Afganistán, relativamente unificado a mediados del siglo XVIII, era un mosaico de grupos donde imperaban los vínculos tribales: los pasthún –localizados también en el oeste de Pakistán–, los tayikos, los hazaras y los uzbekos, entre los más numerosos. La mayoría de los afganos adhería a la corriente musulmana sunita, pero también existía una importante comunidad de chiitas. Su último monarca, con cuarenta años en el poder, impulsó distintas reformas, como los sucesivos planes quinquenales y la adopción de un texto constitucional, no obstante apenas lograron modificar una economía precaria, que no garantizaba la alimentación de la población ni el control estatal de las redes tribales. En el plano internacional, Afganistán estrechó lazos con la URSS, que accedió a financiar proyectos económicos y aportó armamentos para fortalecer el reino en los conflictos fronterizos con Pakistán.

En 1973 se instauró una república autoritaria y filosoviética. Seis años después la URSS invadía el país para "solucionar" las complejas luchas internas, que incluían la división de los comunistas en diferentes facciones. A partir de 1979 Afganistán pasó a ocupar una posición central en la Segunda Guerra Fría y, después del 11 de septiembre de 2001, en "la guerra contra el terrorismo global" declarada por los Estados Unidos.

La fragilidad de los estados nacionales africanos

La trayectoria precolonial, el saqueo, la explotación esclavista y el reparto colonial condicionaron el futuro del continente africano. Cientos de grupos culturales fueron divididos arbitrariamente y miles de entidades políticas fueron amalgamadas en decenas de colonias europeas y protectorados. El gobierno directo de las metrópolis fue doblemente desafiado. En primer lugar, porque dividía a la sociedad entre una minoría extranjera que afirmaba ser civilizada y una mayoría nativa marginada, aduciendo que era atrasada y pertenecía a otra raza. En segundo lugar, porque parte de los nativos, en cierta medida incorporados al orden colonial –intelectuales y empresarios–, aspiraron a reemplazar al gobierno extranjero. Como respuesta a esta crisis, a través del gobierno indirecto, las metrópolis buscaron ganar aliados entre las elites tradicionales. El poder de los jefes rurales no sólo provino de su ascendencia sobre sus comunidades sino que quedó legalizado a través del reconocimiento de su autoridad por la administración colonial. Bajo el gobierno indirecto, los líderes tradicionales desempeñaron diversas funciones a nivel local: dictar leyes, recaudar impuestos, juzgar y controlar la seguridad. Se impuso así el despotismo descentralizado y la etnicidad cultural se transformó en etnicidad política desde el momento en que la autoridad y la ley identificaron, agruparon y dividieron a los grupos nativos a través de la apropiación de tradiciones culturales a las que impusieron sus fines políticos. África Subsahariana había heredado de los tiempos precoloniales y coloniales una configuración cultural y política que dejaba poco margen para la construcción de estados nacionales vigorosos. Los intentos de construirlos gozaron de una considerable adhesión entre los líderes de la independencia, tal como lo refleja la célebre frase de Samora Machel, primer presidente del Mozambique independiente: "Para que nazca la nación, la tribu debe morir". En aquel momento, el proyecto de los nacionalistas africanos incluía tres tareas básicas: desracializar la sociedad civil, destribalizar la autoridad nativa y desarrollar la economía. Si bien los regímenes nacionalistas

de todas las tendencias políticas lograron avances en la desracialización de la sociedad civil, hicieron poco o nada por destribalizar el poder rural. La tribu, la entidad étnica, persistió imperturbada.

En el marco de la oleada descolonizadora, en la mayor parte del mundo comenzó a pensarse que la independencia completa era una condición necesaria para el desarrollo económico, y se supuso que las sociedades emancipadas seguirían el ejemplo político y económico occidental. Pero en el territorio africano casi siempre ocurrió lo contrario. En la mayoría de las colonias subsaharianas las potencias coloniales habían actuado más como depredadoras que como agentes interesados en la promoción de actividades productivas. Los estados emergentes se encontraban entre las economías menos avanzadas del mundo; sin embargo, los problemas económicos fueron sólo una parte de los obstáculos que afectaron la consistencia de los nuevos países africanos. Los desafíos que debieron enfrentar las nuevas dirigencias políticas fueron resultado de una compleja combinación de factores. El círculo vicioso gestado por las desigualdades sociales, los desequilibrios y la dependencia económica, la militarización de la política y la politización de las identidades étnicas y religiosas impuso su sello a gran parte de los nuevos países. Los desafíos provinieron tanto del carácter artificial de las fronteras como de la persistencia de las autoridades tradicionales, especialmente en el ámbito rural, y de la desigual incorporación de las diferentes etnias a la nación, e incluyó también la fuerte dependencia de las economías centrales.

La mayoría de las veces, las bases políticas de los nuevos gobernantes eran más reducidas que la jurisdicción del país independizado. Los líderes de la independencia consideraban que cualquier reclamo sobre las fronteras heredadas del período colonial era un estímulo a la inestabilidad y el caos. Los nuevos estados se impusieron sobre grupos étnicos con trayectorias históricas diferentes, a veces enfrentados, y en ocasiones capaces de forjar vínculos entre sí. También ocurrió, como en el caso de los somalíes, que un mismo grupo lingüístico y religioso fuera dividido e incorporado a diferentes naciones. Además, la mayor parte de las sociedades estaban escindidas en términos políticos y sociales: por un lado, un espacio urbano intensamente signado por las actividades y las ideas de los ciudadanos-colonos que dominaron hasta la independencia y, por otro lado, un mundo rural atravesado por una pluralidad de derechos consuetudinarios que contribuía a confirmar el poder del jefe local.

A partir de la independencia se superpusieron dos lógicas políticas: una formal, basada en el modelo de la democracia occidental y apoyada en principio por los líderes anticolonialistas, y una lógica informal, que respondía a las tramas sociales y las lealtades políticas precoloniales legalizadas por las metrópolis. En gran medida, los estados africanos no pasaron de ser armazones relativamente vacíos. Si bien fueron útiles para posibilitar el control de una serie de recursos por parte de quienes ejercían el gobierno o integraban la administración pública, al mismo tiempo fueron débiles porque no estaban institucionalizados ni diferenciados funcionalmente de la sociedad.

Los gobernantes africanos, civiles o militares, dependían de los vínculos personales basados en un sistema de favores con otros jefes políticos o “grandes hombres”, que sostenían esa relación con los grupos étnicos que reconocían su liderazgo. El modo de representación era generalmente personal antes que electoral. Además, la extensión territorial de estos entramados de lealtades no abarcaba todo el país, por lo que parte de la población quedaba excluida y sin recursos para participar en el orden poscolonial.

En la mayoría de los países, la autoridad central resultó vulnerable a las normas particularistas de la sociedad multiétnica. A medida que los gobiernos incorporaban a los nativos, los intereses particulares y los lazos clientelares de los funcionarios fueron ganando terreno y las regulaciones administrativas se volvieron “negociables”. Desde el momento en que las burocracias se apoyaron en redes de favores recíprocos, se promovió la vigencia de deberes y derechos desiguales, y las instituciones quedaron condicionadas por el poder personalizado.

Este sistema era negativo para el desarrollo económico, en tanto las relaciones sociales y políticas informales imponían sus intereses y fines en desmedro de la promoción de un crecimiento económico a largo plazo. Dada la escasez de actividades productivas excedentarias, los gobiernos africanos buscaron otras fuentes de ingresos –la explotación de recursos naturales por empresas extranjeras, muchas veces concedida mediante soborno; la ayuda internacional de las superpotencias; los préstamos con gran endeudamiento– para solventar los gastos del estado y sostener sus redes de apoyo. Este tipo de recursos les permitió disponer de ellos en provecho propio, descuidando la provisión de bienes públicos. La mayor parte de los movimientos nacionalistas había creído que su control sobre los resortes del gobierno era el requisito necesario y casi suficiente para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. Pero, una vez en el gobierno, las condiciones sociales, culturales y políticas les presentaron obstáculos muy difíciles de desarmar a partir de las ideas, los recursos y los procedimientos, en gran medida basados en las experiencias occidentales, con que pretendieron concretar sus proyectos.

También la Guerra Fría contribuyó a la reproducción de estas condiciones y conductas en África. La contrapartida a las presiones de las superpotencias fue la capacidad de negociación de los jefes políticos. Muchos gobiernos africanos decidieron su alineamiento con uno u otro bloque según la ayuda económica recibida y el silencio o la complicidad de las superpotencias frente a la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos.

Después de la independencia, en la mayor parte de los países se buscó eliminar la competencia partidaria, que se asociaba con la ingobernabilidad. En algunos casos, los propios líderes de la independencia impusieron el sistema de partido único. En otros, la dictadura fue obra de militares golpistas. Muchos líderes de la lucha anticolonial devinieron luego en gobernantes autoritarios y alcanzaron un grado notable de permanencia en el poder: Felix Houphouët-Boigny, al frente del Partido Democrático, gobernó Costa de Marfil hasta su muerte en 1993; Leopold Sédar Senghor, el poeta que abandonó voluntariamente la presidencia de Senegal en 1981; Jomo Kenyatta, creador de la Unión Nacional Africana de Kenia, sucedido después de su muerte en 1978 por su vicepresidente, que gobernó hasta 2002; Julius Nyerere, jefe político de la Unión Nacional Africana de Tanganica, quien ocupó durante veinticuatro años la presidencia de Tanzania; Kenneth Kaunda, presidente de Zambia desde 1964 hasta 1991; Hastings Kamuzu Banda, que gobernó Malaui desde 1963 hasta 1994; Omar Bongo, al frente del gobierno de Gabón desde 1967 hasta 2009; Ahmed Sékou Touré, cabeza del Partido Democrático, presidente de Guinea de 1958 a 1984; Ould Dada, líder del Partido del Pueblo Mauritano, quien retuvo el poder desde 1960 hasta 1982.

Una gran parte de los movimientos anticolonialistas no logró retener el control del gobierno debido a que no estaban suficientemente arraigados en las lealtades de los africanos. Esta inserción limitada afectó incluso a fuerzas políticas que en un principio contaron con el apoyo popular, como el Partido de la Convención del Pueblo encabezado por Kwame Nkrumah en Ghana. Nkrumah fue uno de los líderes africanos más admirados e influyentes y su gobierno, alineado con la Unión Soviética, derivó hacia un sistema de partido único tras el referéndum de 1965. Pero en 1966 fue depuesto por un golpe militar y, tras un largo período de inestabilidad institucional, en 1981 el Consejo Provisional de Defensa Nacional prohibió los partidos políticos y clausuró las urnas hasta los años noventa.

En los países donde la dictadura fue de la mano de los gobiernos militares, el autoritarismo no logró un alto grado de estabilidad; en muchos casos, los militares rotaron en el poder mediante una sucesión de golpes de estado. En Benín, durante los doce años posteriores a la descolonización, hubo una seguidilla de destituciones presidenciales. Recién a partir de 1972 se puso fin a este ciclo y el coronel al frente del gobierno, que adoptó la fórmula del partido único, retuvo su cargo hasta las elecciones abiertas de 1991. Togo vivió situaciones similares a las de Benín. La brutal dictadura de Idi Amin (1971-1978) en Uganda

fue derrocada siete años después de que, como jefe de las fuerzas armadas, destituyera a su ex aliado en el golpe de 1966. También hubo golpes militares y dictaduras más o menos estables en Mali, Alto Volta, Burkina Faso, la República Centroafricana, Congo-Brazzaville y Nigeria. En la ex colonia belga del Congo (Zaire entre 1971 y 1997, y República Democrática del Congo desde entonces), la guerra civil desatada poco después de la independencia fue seguida por una de las dictaduras más prolongadas de la región, la del militar golpista Joseph Desiré Mobutu (1965-1997).

Liberia y Etiopía, los únicos países africanos donde el yugo colonial no se hizo sentir demasiado, tampoco quedaron al margen de esta trágica combinación de pobreza, autoritarismo, explotación depredadora por parte del gran capital y gobiernos locales que politizaban la etnicidad cultural.

El entrelazamiento de factores formales e informales que vincularon el estado con la sociedad favoreció el afianzamiento de la violencia. El uso de la fuerza asumió jerarquía de instrumento político en manos de quienes la consideraban la vía más eficaz para alcanzar sus metas políticas o económicas, al margen de sus terribles impactos sobre la población. Pero también los integrantes de las distintas etnias recurrieron a la violencia en defensa de la "causa justa" que defendía su grupo, al punto de participar activamente en la eliminación del "otro", con quien convivía en un mismo territorio sin que los uniera una ciudadanía compartida.

Guerras fratricidas en África

En Sudán, Chad, Nigeria, Ruanda-Burundi y el Cuerno de África hubo guerras civiles en el marco de la oleada descolonizadora, mientras que en África Austral se consolidó el régimen del *apartheid* y la dominación colonial de Portugal no claudicó.

Después de las accidentadas negociaciones entre Londres y El Cairo, Sudán consiguió su independencia en enero de 1956. Gran Bretaña dejó el control de las instituciones políticas y de la economía en manos de la elite árabe-musulmana del norte. La nueva clase gobernante, que definió la identidad nacional según la tradición cultural árabe, acaparó los ingresos procedentes de la explotación de los recursos naturales –gas, petróleo, minerales y maderas preciosas regionales– y los distribuyó desigualmente.

La primera insurgencia, en el sur de Sudán (1955-1972), ocurrió en el marco de la descolonización, ante la inminente llegada de los árabes a una zona donde habían tenido poca influencia. En un principio el movimiento rebelde constituyó una banda saqueadora, al margen de la ley, pero con el correr del tiempo llegó a convertirse en una fuerza política y militar capaz de hacer frente al ejército y negociar un tratado de paz en 1972, que proporcionó a Sudán del sur una autonomía regional limitada. En la lucha pereció medio millón de personas, y cientos de miles de los insurrectos del sur fueron desplazados dentro de la región o bien se refugiaron en otros países.

A lo largo de este período, el gobierno central fue muy inestable. Desde 1956 hasta 1958, los políticos gobernantes se dividieron en facciones enfrentadas. La junta militar que los desplazó en 1958 intentó liquidar el conflicto del sur a través de la islamización y la arabización obligatorias. Pero la impotencia del ejército ante los insurgentes condujo a la caída pacífica de los militares en 1964. Los políticos volvieron a quedar inmersos en conflictos facciosos y en 1969 hubo un nuevo golpe. La junta militar, liderada por Jaafar Nimeiri, negoció con los rebeldes del sur; acto seguido, impuso un sistema de partido único y anunció la creación de un estado socialista. En 1983 recomenzó la lucha armada en el sur y, dos años después, Nimeiri fue derrocado por otro golpe militar.

El gobierno de Chad impulsó un programa homogeneizador pero, a diferencia de Sudán, favoreció a la población autóctona e ignoró las demandas de los numerosos habitantes musulmanes del norte y el centro del país. Esto desató una serie de disturbios en la zona musulmana, agravados por la injerencia de Libia en el norte y de

Sudán en el este. El Frente de Liberación Nacional de Chad, creado en 1966, intentó agrupar a sectores de izquierda y musulmanes para resistir el autoritarismo del gobierno, pero fracasó. Recién en la década de 1990 se inició un frágil proceso de democratización basado en conferencias y pactos entre los numerosos grupos armados que durante décadas habían arrasado el país.

El conflicto que provocó el mayor derramamiento de sangre en los años dorados ocurrió en Nigeria, durante la secesión de Biafra (19671970). Este país era producto de los caprichosos montajes británicos, que habían reunido en una única colonia a varias regiones que tenían pocos elementos en común. El norte estaba principalmente poblado por los hausas y los fulanis, pueblos musulmanes a los que se sumaban poblaciones paganas muy diversas; en el oeste dominaban los yorubas y sus parientes, los binis, musulmanes y cristianos protestantes; los ibos, más occidentalizados, eran mayoría en el este. Esta comunidad contaba con una elite educada en universidades europeas y estadounidenses que, desde el dominio británico, había ido ocupando posiciones en la administración pública y las fuerzas de seguridad y ganando incidencia en el plano económico. A partir de la independencia los ibos se sintieron postergados y, en 1966, los miembros de esta comunidad posicionados en las fuerzas armadas encabezaron un golpe sangriento que fracasó. El gobierno respondió con una matanza masiva de ibos residentes en el norte y, en respuesta, los ibos del este proclamaron la República de Biafra, que a la sazón era la zona de Nigeria más rica en petróleo. Al cabo de tres años, en los que murieron más de dos millones de personas, el gobierno central recuperó el territorio. Sin embargo, la historia posterior de este país aparece signada por una perversa articulación entre los conflictos étnicos, los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, y la lucha por el control del petróleo. El 90% de las exportaciones del país se deben al oro negro, descubierto poco antes de la independencia. En la década de 1970 el gobierno aprobó un decreto que le otorgaba el derecho exclusivo sobre la riqueza del suelo en las zonas costeras, y firmó lucrativos contratos con algunas multinacionales, como Shell, Texaco o Chevron. Pero la alta renta petrolera no mejoró los niveles de vida de la población asentada en las tierras donde se perforaban los codiciados pozos.

La ex colonia alemana Ruanda-Burundi, bajo mandato belga desde la Primera Guerra Mundial, abarcaba tres grupos étnicos: los tutsis, los hutus y los twags. Los tutsis, aunque minoritarios, detentaban antes de la colonización una posición dominante que fue reforzada bajo la dominación de Bélgica. Cuando se declaró la independencia en 1962, la zona fue dividida en dos estados: la República de Ruanda, bajo el control de los hutus, y la monarquía de Burundi, donde los tutsis preservaron su condición de grupo gobernante. La región fue asolada por grupos armados de una y otra etnia.

Gran parte de los tutsis ruandeses, frente a la discriminación y la violencia ejercida por el nuevo régimen, buscaron refugio en los países vecinos –Burundi, Uganda, Tanzania– y desde allí atacaron a los hutus. Los exiliados, de corta edad en ese momento, crearon posteriormente el Frente Patriótico Ruandés, que ocuparía un lugar importante en la guerra de Ruanda, con alcances regionales, en la década de 1990.

Durante el reparto imperialista, la comunidad tradicional somalí quedó dividida en diferentes colonias: la Somalia británica (la zona noroeste del país, que corresponde a la actual Somalilandia), la Somalia francesa (actual Yibuti), la Somalia italiana (centro y sur del país), el Northern Frontier District (actualmente parte de Kenia, en aquella época también británica) y Ogadén (región etíope de Somalia Occidental). En el momento de la independencia en 1960, las ex colonias británica e italiana se unieron para formar la República de Somalia.



El asedio de las tropas nigerianas en torno a Biafra tuvo funestas consecuencias, y las imágenes de niños biafreños afectados por la hambruna dieron la vuelta al mundo. Un grupo de doctores liderado por Bernard Kouchner, testigo de los crímenes ejecutados en la guerra civil de Nigeria, creó la organización Médicos sin Fronteras para atender a las víctimas de los conflictos y denunciar las violaciones de los derechos humanos.

El escenario interno somalí fue muy complejo y dramático, debido a las rivalidades entre jefes políticos que exacerbaron las divisiones entre clanes. La sociedad somalí –étnica, religiosa (islam sunita) y lingüísticamente homogénea (somalí)– se divide en clanes y subclanes, al igual que la mitad oriental del continente africano. La mayoría de la población está distribuida en cinco clanes principales y el comportamiento de cada persona está definido de antemano por sus obligaciones hacia el clan y sus líderes.

Los primeros diez años posteriores a la independencia se caracterizaron por los intentos de establecer una democracia multipartidista que estuviera por encima de las relaciones clánicas, a las que la población daba una mayor importancia política y social. La polarización política y la incapacidad de acordar un sucesor tras el asesinato del presidente a fines de los años sesenta desembocaron en el golpe militar de Siad Barre. Este anunció la instauración del socialismo científico, basado en un régimen de partido único bajo su liderazgo y comprometido con la formación de la gran Somalia mediante la agrupación de las diferentes regiones somalíes controladas por los países vecinos y la supresión de los clanes. La oposición al nuevo régimen fue apoyada por los países vecinos, principalmente por Etiopía y Libia. Gracias a la ayuda soviética, el gobierno de Barre armó uno de los principales ejércitos del continente africano. El giro de Moscú, que en los años setenta pasó a sostener el nuevo régimen socialista etíope, y la derrota de Somalia en la guerra con Etiopía en 1978 debilitaron a Barre, quien fue derrocado en 1991. Después de su destitución, la proliferación de facciones en el campo opositor impidió la formación de un gobierno que impusiera su autoridad sobre el conjunto del territorio. Desde entonces, Somalia es una nación sin estado.

La dominación blanca en África Austral

A lo largo de los años dorados, en el sur africano se entrelazaron dos regímenes opresivos: la dominación de Portugal sobre Angola y Mozambique y el apartheid, que tuvo su principal sostén en Sudáfrica.

Con la llegada del Partido Nacional al gobierno en Pretoria en 1948, la minoría blanca aprobó una serie de duras leyes racistas que institucionalizaron la segregación racial en Sudáfrica. Esta política sólo pudo mantenerse gracias a la violencia extrema ejercida por el gobierno: un ejército de ciudadanos blancos con una fuerza potencial de doscientos cincuenta mil hombres, una fuerza escogida de cincuenta mil soldados con dedicación parcial, un aparato policial de veinte mil hombres y una reserva de policías de seis mil efectivos.

La instauración del apartheid fue un ajuste político antes que económico. El núcleo del programa nacionalista era la separación territorial y política de los africanos y tuvo dos principios claves: la reorganización del sistema de control de los nativos, tanto en las reservas como en las ciudades, y los traslados forzosos destinados a desplazar a la población nativa de las ciudades para concentrarla en zonas habitadas sólo por africanos. De 1940 a 1965, la resistencia en las reservas fue una práctica habitual y no un acontecimiento excepcional. En reiteradas ocasiones, en el transcurso de los levantamientos contra el apartheid, también fueron cuestionadas las autoridades nativas. Además, las divisiones étnicas no impusieron necesariamente su sello a los conflictos sociales, y la lucha de los campesinos en muchos casos asumió las dimensiones de una guerra civil dentro del grupo étnico.

Según lo prescripto por la Ley de Registro Poblacional, todos los sudafricanos fueron clasificados según tres categorías principales: blanco, negro y de color, que a su vez incluía una serie de subgrupos. La adscripción de cada individuo a una "raza" se basaba en la "apariencia, la aceptación social y la ascendencia". La legislación racial abarcó todos los aspectos de la vida social: la prohibición de matrimonios mixtos, las relaciones sexuales entre blancos y no blancos, la educación diferenciada y restringida para los niños de color y, en el terreno laboral, la distinción de algunos trabajos como "exclusivos para blancos" junto con la prohibición de crear sindicatos y realizar huelgas impuesta a los africanos.

La Ley de Autoridades Bantúes de 1951, con sucesivas enmiendas, estableció las bases para el gobierno separado de las reservas africanas, conocidas como homelands (tierra natal o tierra madre). Se esperaba que todos los africanos fuesen reubicados en estos "estados independientes" de acuerdo con su ficha de origen. Se pretendía volver a la institución del jefe tribal como base de la administración de la población. Todo acto político de los africanos quedó así restringido a la esfera del homeland al que se era asignado, perdiendo de este modo la ciudadanía sudafricana. Se crearon cinco de estos seudoestados y sus habitantes fueron obligados a portar el pass book, una suerte de documento de identidad que contenía su clasificación racial y su autorización –si la tenía– para acceder a determinadas áreas blancas, básicamente para trabajar. El africano se convirtió en un intruso en las ciudades y su permanencia en ellas quedó sujeta a tener un contrato de trabajo. En virtud de los bajos salarios y de la necesidad de enviar dinero a sus familias, los migrantes sobrevivían malamente confinados en albergues.

El sistema racista no sufrió sanciones efectivas por parte de las democracias occidentales. Los grandes capitales se mostraron interesados en radicarse en la región, atraídos por la productividad de su economía. Las inversiones extranjeras, especialmente las norteamericanas, quintuplicaron su valor entre 1958 y 1967. Simultáneamente, la política comercial proteccionista de los afrikáneres contribuyó a la expansión de la infraestructura necesaria para la instalación de grandes industrias, creando un polo capaz de abastecer a toda el África Austral. Ni los Estados Unidos ni Gran Bretaña se comprometieron con las medidas de presión sobre el gobierno sudafricano impulsadas por las Naciones Unidas especialmente a partir de la matanza de Sharpeville en 1960.

El "clima de paz" sostenido por la represión sistemática posterior a Sharpeville estuvo asociado con un relevante crecimiento industrial liderado por algunas grandes empresas. Este salto fue acompañado por el crecimiento de la clase obrera industrial y su capacitación a través de la expansión de la educación posprimaria para satisfacer la demanda de los centros fabriles. Simultáneamente, la prosperidad económica propició la movilización de la mano de obra migratoria urbana y de la juventud educada de las poblaciones; sus protestas cerraron el ciclo de calma de los años sesenta.

En los primeros tiempos, los líderes del Congreso Nacional Africano creado en 1912 –egresados de escuelas dirigidas por misioneros y graduados en universidades norteamericanas y europeas– creyeron que podrían convencer a los afrikáneres de la injusticia de las leyes de segregación racial y que los liberales anglófilos admitirían la

participación de los negros en la política. La Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano, creada en 1944 y de la que Nelson Mandela fue elegido secretario tres años después, fue la primera organización en radicalizarse.

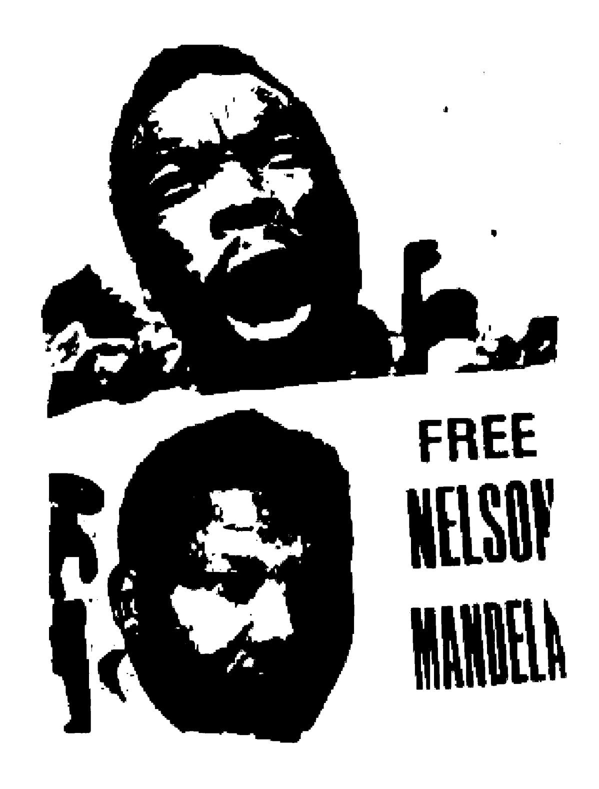
Frente a la institucionalización del apartheid a fines de la década de 1940, la dirigencia del Congreso recogió sus propuestas pasando de la denuncia de la injusticia en el marco de la ley a la protesta. El nuevo rumbo, inspirado en los métodos de lucha política de la minoría india y las estrategias de reclamo sindical de los mineros negros, contemplaba el llamamiento a la huelga general, la desobediencia civil, la no cooperación y otros instrumentos de resistencia pacífica. En 1952, el partido puso en marcha en todo el país la Campaña de Desafío a las Leyes Injustas. Al mismo tiempo, Mandela y su círculo impulsaron la formación de un frente multirracial en torno a la Carta de la Libertad suscripta por los movimientos de indios, mulatos, liberales y socialistas. Los más intransigentes rechazaron esta apertura hacia otras etnias y abandonaron el movimiento para crear el Congreso Panafricano. A fines de 1961, un sector de la dirigencia del Congreso, Mandela entre ellos, convencido de la inutilidad de la lucha pacífica, decidió la creación de un cuerpo armado, Escudo de la Nación, que comenzó a atacar las instalaciones del gobierno y los destacamentos policiales.

En respuesta a la movilización de Sharpeville contra la ley que limitaba la circulación de los trabajadores negros en áreas reservadas a los blancos, el gobierno nacionalista declaró el estado de emergencia en todo el país, ilegalizó las organizaciones del movimiento africano y detuvo a sus dirigentes. Nelson Mandela, que ya había sido encarcelado y procesado en varias ocasiones, sufrió su condena definitiva en 1964.

El juicio a Mandela

En su último arresto, a principios de los años sesenta, Mandela fue acusado de alta traición, y cabía la posibilidad de que fuera condenado a la pena de muerte. A fines de abril de 1964, en el juicio de Rivonia, al concluir su alegato de cinco horas, no dudó en desafiar a la corte: “Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que he vivido. Es un ideal por el que espero vivir, y si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”.

Según el testimonio de su abogado, cuando terminó el discurso se quitó los lentes y, mirando al juez a los ojos, repitió la frase: “Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”. Luego se sentó calmadamente y hubo un silencio intenso en la sala. Durante un minuto, no se escuchó un solo sonido en aquella corte. Fue entonces cuando algunas mujeres en los palcos reservados al público se echaron a llorar.



Movilización a favor de la liberación de Nelson Mandela.

BBC Mundo.com, *Mandela en tres actos*. Disponible en: www.bbc.co.uk.

Con el Congreso duramente golpeado y sus líderes encarcelados, entre los activistas en el exilio ganó fuerza la convicción de que la lucha armada de los oprimidos era la única vía para enfrentar el terror instrumentado desde el estado. La experiencia de Vietnam, y luego las de Angola y Mozambique, reforzaron esta idea. Pero no fue esta estrategia la que condujo a la crisis del apartheid. En los años setenta la dominación de los blancos se resquebrajó al calor de las luchas obreras y del activismo de los jóvenes estudiantes: las huelgas de Durban en 1973 y el levantamiento de Soweto en 1976 fueron los dos acontecimientos simbólicos de esta escalada de movilizaciones sociales.

A lo largo de este período, el régimen del apartheid también prevaleció en Rodesia del Sur, la ex colonia británica, y en África del Sudoeste bajo el dominio de Sudáfrica, que desconoció las resoluciones de la ONU que declaraban ilegal su ocupación de la ex colonia alemana. En esta "colonia", en los años sesenta, ganó consistencia la Organización Popular de África del Sudoeste, liderada por Sam Nujoma, que reivindicó su alcance nacional, libre de connotaciones tribales, y se mostró dispuesta a encarar la lucha armada pidiendo apoyo a los países comunistas. Nujoma siempre enfatizó el carácter eminentemente anticolonial de su lucha, tratando de no quedar alineado con el bloque soviético. La guerra no declarada persistió hasta fines de la década de 1980.

En Rodesia del Sur, los colonos blancos no aceptaron negociar con Londres la integración de la población nativa a la vida política una vez reconocida la independencia. La población blanca, bajo la conducción de Ian Smith, declaró, unilateralmente, rotos sus lazos con Londres en noviembre de 1965, y el gobierno británico impuso sanciones económicas al nuevo país suponiendo que su gobierno revisaría el sistema de *apartheid*. Sin embargo, la minoría blanca contó con el apoyo de Sudáfrica y de la colonia portuguesa de Mozambique y, al mismo tiempo, el boicot económico fue escasamente respetado por las potencias occidentales. Por otra parte, la resistencia africana se dividió entre la Unión Popular Africana de Zimbabue y la Unión Nacional de Zimbabue, más intransigente que la primera. La minoría blanca no se avino a negociar sino hasta los años ochenta, después de la caída del imperio portugués y luego de que Sudáfrica redujera su ayuda.

7. Fin de una época

Los tres órdenes que habían coexistido en la edad dorada fueron radicalmente cuestionados entre las décadas de 1970 y 1980 por una crisis profunda que se desplegó en etapas distintas y a través de procesos particulares, pero con significativas interrelaciones. En el capitalismo central, la caída de la producción y el aumento de los precios –la estanflación de los años setenta– anunció el fin de los años dorados. La crisis se hizo evidente en el Tercer Mundo con la agobiante deuda externa en la década de 1980. Y a fines de esa década, el derrumbe de la economía central planificada, la liquidación del bloque soviético y la desintegración de la URSS marcaron el fin de una época. En la década de 1990, por poco tiempo, se creyó que el capitalismo globalizado y la democracia homogeneizarían el mundo en torno a sus principios básicos. Sin embargo, ni la economía mundial retomó el alto crecimiento sostenido de los gloriosos años dorados, ni las oleadas "democratizadoras" en los dos espacios más golpeados por la crisis –el del heterogéneo Tercer Mundo y el del ex bloque soviético– avanzaron hacia sociedades más justas ni tampoco hacia la construcción de estados comprometidos con el bien público.

A partir de la implosión del régimen soviético, los Estados Unidos –única superpotencia en un mundo multipolar– creyeron posible imponerse en un escenario mundial cada vez más complejo e incierto a fin de consolidar un orden capitalista de alcance global. Las sucesivas y extendidas crisis económicas, el deterioro de las condiciones de vida y la proliferación de guerras con un profundo impacto sobre las poblaciones civiles, básicamente en el Tercer Mundo, dejaron a la vista la inconsistencia de ese propósito.

El principio del fin

A fines de los años sesenta, una oleada de movilizaciones atravesó los "tres mundos" de entonces: las sociedades capitalistas centrales, las sociedades comunistas y las sociedades del Tercer Mundo. Fueron muy dispares: casi revoluciones en algunos casos, protestas en otros. En los países capitalistas desarrollados, la mejora de los niveles de vida, el creciente consumismo, la generalización de los sistemas educativos –con la consiguiente masificación de la universidad– y la incorporación de las mujeres al mundo laboral transformaron los valores y las formas de vida, particularmente entre las jóvenes generaciones nacidas después de la guerra y educadas en el contexto de las sociedades opulentas.

Los motines universitarios, principalmente en el mundo no comunista, ocuparon el centro de la escena revelando el debilitamiento de la autoridad de los profesores y de los adultos en general, y el deterioro de las instituciones educativas. Las formas de agitación universitaria fueron muy distintas según los países. Los acontecimientos del Mayo francés pueden compararse con los movimientos de estudiantes en Alemania Federal, Italia o los Estados Unidos –es decir, con los de países económicamente desarrollados y democráticos– pero no con los del Tercer Mundo ni con los del campo comunista. En los últimos, casi como regla general, el pluralismo político era inexistente, y en los periféricos hubiera sido impensable afirmar, como hicieron los estudiantes franceses, que se rechazaba "un mundo en el que la seguridad de no morir de hambre ha sido sustituida por el riesgo de morir de aburrimiento".

Desde el mismo momento en que los jóvenes universitarios hicieron sentadas en las calles, pintaron las paredes y removieron los adoquines anunciando que estaba "prohibido prohibir", sus mayores reaccionaron de manera muy diferente.

En un publicitado diálogo entre el líder de la protesta francesa CohnBendit y Jean-Paul Sartre, el viejo escritor exhortó a los jóvenes a seguir imaginando "la expansión del campo de lo posible". Simultáneamente, el historiador inglés Arnold Toynbee, en la revista

Life, calificaba a los *hippies* de "buscavidas poscapitalistas, empachados de golosinas y sin ganas de trabajar".

"La imaginación al poder", frase acuñada en el Mayo francés, fue la expresión que mejor representó a quienes desde mediados de 1960 impulsaron la crítica cultural, la llamada contracultura, la oleada de movilizaciones en torno a la que más se ha escrito y que mayor debate ha suscitado.



Manifestaciones de los estudiantes franceses en mayo de 1968, apoyando la lucha del pueblo vietnamita contra los Estados Unidos.

Críticos de la contracultura

En su artículo de 1969 "Las contradicciones culturales del capitalismo" (un texto clásico incluido luego en un libro con el mismo título), el sociólogo norteamericano Daniel Bell argumentó que el estado de bienestar producía fuerzas que socavaban el orden capitalista desconectando a los individuos de las limitaciones materiales y psicológicas de su posición económica: "La expansión de la educación superior y la ampliación de una atmósfera social permisiva ha extendido el ámbito del comportamiento social discrecional". Según el autor, los jóvenes de origen relativamente modesto se sentían libres de las restricciones de clase y creían que también para ellos la vida podría ser un terreno de participación y posibilidades ilimitadas. Para Bell, era preciso restaurar la racionalidad del mercado en el ciclo vital de cada individuo eliminando la dimensión social de la gestión keynesiana, la oferta de servicios sociales y la redistribución. En 1975, el informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia (*The Crisis of Democracy*) fue un hito en la identificación de los problemas que afrontaba el orden dominante durante aquel período. Sus autores –Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki– partían del argumento de Bell de que la riqueza relativa había creado un problemático "síndrome de valores". Entre las recomendaciones del informe se destacaba la idea de que era necesario reducir la "carga" de las demandas democráticas apartando las aspiraciones niveladoras del abanico de cuestiones encaradas por los gobiernos.

La mayoría de los jóvenes del mundo desarrollado que adherían a la contracultura rechazaba la sociedad industrial sin pretender por ello una revolución. En gran medida, según el testimonio de Cohn Bendit, la extendida revuelta contra la moral puritana puso fin al "mito

revolucionario". No obstante, estos jóvenes se posicionaron como parte de la izquierda, pero de una "nueva izquierda", con marcados contrastes respecto de la marxista del período de entreguerras. La "vieja izquierda" adhería a la revolución bolchevique, era antifascista, conocía al Marx de *El capital*, creía en el carácter revolucionario de la clase obrera y apoyaba la planificación estatal. La nueva izquierda desconfiaba de la experiencia bolchevique, era antiburocrática, reivindicaba al joven Marx que reflexionaba sobre la alienación, y había reemplazado las contradicciones del capitalismo por la crítica al imperialismo para afirmar la posibilidad de un mundo diferente.

La reivindicación de la lucha del pueblo vietnamita estuvo presente en casi todas las movilizaciones del mundo no comunista, dado que reunía dos condiciones que se correspondían con el ideario de quienes proponían un nuevo mundo y un "hombre nuevo": la superpotencia capitalista había sido humillada, y la resistencia del pueblo unido confirmaba la primacía del deseo liberador sobre la contundencia del poder material.

Desde 1964 los universitarios estadounidenses se vincularon con el movimiento sureño de defensa de los derechos civiles y políticos de los afronorteamericanos. Esa militancia se enlazó con la de oposición a la guerra de Vietnam, catalizadora de muchas propuestas radicales. El 17 de abril de 1965 tuvo lugar en Washington la primera protesta masiva contra la guerra organizada por el Students for a Democratic Society. En octubre, más de cien mil estudiantes norteamericanos participaron en el Vietnam-Day. Esta crítica política se conjugó con la de los *hippies*, centrada en la promoción de una contracultura que rechazaba toda clase de autoridad y proponía nuevas formas de vida al margen de la sociedad de consumo. La rebeldía de los jóvenes se expresó a través de su vestimenta, sus ídolos cinematográficos y especialmente sus grupos y ritmos musicales, a tal punto que los recitales se transformaron en los espacios de identificación colectiva por excelencia. Durante tres días de agosto de 1969, enormes multitudes pernoctaron a cielo abierto para compartir el festival de Woodstock bajo el lema "Amor y Paz".

Los estudiantes estadounidenses movilizados contra la guerra de Vietnam intentaron acompañar, sin demasiado éxito, al movimiento negro. Si bien la situación legal de los afronorteamericanos había mejorado tras la aprobación de la Ley sobre Derechos Civiles (1964), los avances en la igualdad legal hicieron más evidente y agraviante la desigualdad real. En la década de 1960 ganaron presencia algunos grupos que cuestionaban los métodos no violentos de Martin Luther King y las posibles alianzas con los blancos, entre otros, los Musulmanes Negros, en el que descollaría Malcolm X, y las Panteras Negras, encabezado por el caribeño Stokely Carmichael. Para Malcolm X, la marcha a Washington en 1963 encabezada por Luther King había sido una farsa; estaba convencido de que el pacifismo carecía de sentido y que era necesario alcanzar la completa independencia de los afronorteamericanos y vincular la protesta radical de los negros con las luchas de liberación de las naciones del Tercer Mundo. En 1964, un año antes de ser asesinado, dio un giro de ciento ochenta grados: rompió con la Nación del Islam y manifestó su interés por trabajar con otros líderes de derechos civiles. Tres años después de su muerte fue asesinado Luther King ,y en 1969 Carmichael se autoexilió en Guinea Conakry con su esposa, la cantante y activista Miriam Makeba.

El Mayo francés alcanzó impacto mundial debido a que la radicalización estudiantil tuvo gran resonancia política y, sobre todo, a la confluencia entre la protesta de los universitarios y la mayor huelga obrera de la historia francesa. Sin embargo, cuando el presidente De Gaulle convocó a "la mayoría silenciosa", una impresionante multitud acudió el 29 de mayo de 1968 a los Campos Elíseos. Y a fines del mes siguiente la lista de diputados del partido gobernante se impuso sobre los candidatos de la izquierda. Los acuerdos de Grenelle –firmados por las entidades sindicales, los empresarios y el gobierno, reconociendo aumentos salariales y algunos derechos sindicales en las empresas– pusieron fin a la oleada de huelgas, aunque hubo expresiones de rechazo en muchas asambleas de trabajadores.

En el resto de los países del Primer Mundo, excepto Italia, no hubo

acciones obreras que permitieran imaginar un encuentro entre el movimiento obrero y el estudiantil. En el caso italiano, la protesta obrera –"el otoño caliente" de 1969– se combinó con el debate en el campo izquierdista sobre las condiciones que posibilitarían la creación de un poder obrero capaz de quebrar la hegemonía del capital en la fábrica, pero no se discutió sobre la toma del gobierno por el partido revolucionario.

En el campo comunista, mientras en la URSS se consolidaba el neoestalinismo de Brézhnev, en otros países –Checoslovaquia en 1968 y China durante la Revolución cultural de 1966– se cuestionaba el modelo soviético. Y, aunque lo hicieran desde razones y procesos muy diferentes, los jóvenes que se rebelaban en Occidente unificaron estas protestas como expresiones de un mismo movimiento contra la dominación y la explotación de la burocracia comunista.

En Checoslovaquia, el cambio llegó desde arriba: las movilizaciones se pusieron en marcha acompañando y luego rebasando las decisiones de un sector de la cúpula comunista. La elección de Alexander Dubcek, en enero de 1968, como secretario del Partido Comunista significó el triunfo de los sectores dispuestos a incluir los mecanismos del mercado y relajar los controles del partido sobre la sociedad. Los dirigentes de Europa Oriental, sobre todo en Polonia y la República Democrática Alemana, temieron el contagio de los aires de libertad que recorrían el país vecino, donde empezaban a fundarse clubes, asociaciones civiles y nuevos periódicos. Brézhnev, de visita en Praga en febrero de 1968, presionó a Dubcek para que cambiara el rumbo de su gestión. No obstante, la dirigencia checoslovaca aprobó el Programa de Acción que daría paso al llamado "socialismo de rostro humano". Moscú temió que Praga abandonase el Pacto de Varsovia y, la noche del 21 de agosto, las tropas del Pacto de Varsovia ocuparon el país. La resistencia popular fue vencida rápidamente por los tanques soviéticos, que clausuraron en forma sangrienta la "Primavera de Praga".

La movilización de los estudiantes en América Latina, en contraste con las del Primer Mundo, se combinó más decisivamente con los conflictos políticos y sociales, y que en algunos países de la región desembocaron en una crisis profunda y multidimensional.

A diferencia de lo ocurrido en Europa, las protestas de los estudiantes latinoamericanos fueron reprimidas de manera sangrienta, como ocurrió en México en la plaza de Tlatelolco. En la mañana del 2 de octubre de 1968, la policía secreta mexicana y los "halcones" del llamado Batallón Olimpia tomaron las azoteas y departamentos de los edificios que rodeaban la Plaza de las Tres Culturas y desde allí, apoyados por tanques de guerra, masacraron a los jóvenes que protestaban contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Diez días después, el presidente mexicano inauguraba las Olimpíadas en un estadio repleto que parecía haber olvidado que aún se desconocía el número de víctimas del ataque a la plaza. En la ceremonia de entrega de premios, los atletas afronorteamericanos Tommie Smith y John Carlos levantaron el puño, símbolo del "poder negro".



Tanques del ejército mexicano controlan la movilización de los estudiantes en septiembre de 1968.

En la Argentina, estudiantes y obreros confluyeron en 1969 en el Cordobazo, que desató la crisis de la dictadura militar. Cuatro años después, los militares debieron aceptar el retorno del peronismo al gobierno tras las primeras elecciones presidenciales sin su proscripción desde 1955. En 1970, el socialista Salvador Allende llegaba a la presidencia en Chile y el movimiento minero en Bolivia lograba la creación de la Asamblea Popular, desde la que pretendería disputarles el poder a las clases dominantes. En la década de 1970, el terror instrumentado desde el estado clausuró el ciclo de protesta social y política latinoamericana.

En el campo intelectual musulmán, desde fines de los sesenta se fue conformando un ideario basado en los principios del islam, que ofrecía un diagnóstico crítico sobre los países musulmanes y proponía la reforma radical del orden existente. Sus principales artífices fueron el periodista paquistaní Abul Ala al-Mawdudi –que había rechazado el sesgo estatal no religioso de la Liga Musulmana–, el dirigente egipcio de la Hermandad Musulmana Sayyid al-Qutb y el ayatolá Jomeini en Irán. Cada uno desde su ámbito avanzó hacia la construcción de un islamismo militante, o sea, una vía en que la religión era el elemento clave para la lucha política, pero sólo Jomeini encabezaría una revolución triunfante.

Algunos intelectuales iraníes denunciaron la "occidentoxicación": el pueblo había sido contaminado por el materialismo occidental y había que forjar una identidad iraní basada en la apropiación revolucionaria del chiismo. Alí Shariati, doctorado en Letras en la Sorbona y portavoz de un islam militante que había ganado la adhesión de laicistas e izquierdistas, buscó articular la relectura del credo islámico con el tercermundismo revolucionario de Fanon, el intelectual comprometido con la revolución argelina. Shariati culpaba a los ulemas de muchos de los males que agobiaban al pueblo: la jerarquía religiosa, al poner la religión al servicio de la monarquía, había despojado al chiismo de su mensaje revolucionario. Sus ideas tuvieron acogida entre sectores de la burguesía y el clero iraní que rechazaban la política secular y prooccidental del sah y reivindicaban el gobierno nacionalista de los años cincuenta, derrocado con el apoyo de la CIA.

En la ciudad santa de Qom, desde 1963, el ayatolá Jomeini venía pronunciándose contra el laicismo prooccidental y la política social de la monarquía. Los servicios de seguridad reprimieron con brutalidad las reuniones en las madrasas, donde se presentaba Jomeini, y, después de su deportación en 1964, el ayatolá se estableció en la ciudad sagrada chiita de Nayaf, en Irak. Jomeini se convirtió desde entonces en el símbolo de la oposición a la dinastía reinante, en medio de la generalizada represión a los sectores disidentes, que el sah inició en 1978.

Crisis y reorganización del mundo capitalista

El fin de la edad dorada fue producto de dos giros decisivos: el agotamiento del círculo virtuoso entre inversiones, productividad y consumo, y el declive de la hegemonía de los Estados Unidos. Los beneficios del capital cayeron por el desgaste de los principios tayloristas en que se había basado el incremento de la productividad y por las huelgas masivas de 1968 y 1969, que desembocaron en una explosión salarial. La protesta obrera se produjo en el marco del pleno empleo y la significativa reducción de las reservas de mano de obra aportadas por las migraciones interiores, y fue protagonizada por una nueva generación de trabajadores, que, a diferencia de sus padres, no habían sufrido los tiempos duros de entreguerras.

La crisis de rentabilidad se combinó con la crisis de legitimación. Las políticas para el despegue y el mantenimiento de la expansión mundial durante las décadas de 1950 y 1960 no reflejaban las nuevas tramas sociales y eran ineficaces para remontar la crisis. En un primer momento, los gobiernos siguieron recurriendo a las medidas keynesianas, pero la crisis ya no residía en la debilidad de la demanda, como en los treinta, sino en el descenso de la tasa de ganancia. La

demanda sostenida por los gastos gubernamentales y el incremento salarial dio paso a una inflación galopante sin reactivación de la inversión. El neoliberalismo se impuso a fines de la década de 1970, cuando el keynesianismo ya no pudo responder al nuevo fenómeno de la estanflación.

La primacía de los Estados Unidos en el escenario mundial se erosionó en un doble sentido: como principal potencia industrial y como poder militar, debido a la creciente ingobernabilidad del Tercer Mundo. Algunos analistas vienen anunciando desde los años ochenta el fin de la hegemonía estadounidense; otros, en cambio, se muestran cautelosos respecto a los alcances de la crisis y prefieren destacar el papel protagónico de Washington en el afianzamiento del capitalismo global.

El declive de los Estados Unidos remite, en parte, a la recuperación de las economías de Japón y Europa Occidental, y a la reactivación de las finanzas internacionales, que desafiaron al patrón oro-dólar adoptado en Bretton Woods. En virtud de la exitosa recuperación de Alemania y Japón, en los años dorados se pasó de la complementariedad entre las economías centrales hacia una competencia cada vez más dura que afectó la solidez del dólar. La guerra en Vietnam, financiada mediante la emisión de dólares, acentuó el debilitamiento del patrón oro-dólar, que fue cuestionado por el capital financiero internacional. El creciente volumen del capital líquido, al margen de los controles estatales, comenzó a incidir sobre los tipos de cambio entre las distintas monedas, y el sobrevaluado dólar fue el primero en sufrir la presión de los mercados, que apostaron a su devaluación.

En 1971 el presidente Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar y en 1973 se puso fin a Bretton Woods, pasando del cambio fijo al flotante. El gobierno estadounidense acompañó la devaluación del dólar con la aprobación de medidas proteccionistas, reclamadas ahora por los sectores industriales.

Desde la perspectiva de Washington, la devaluación y las restricciones a las importaciones, al tiempo que daban un respiro a los industriales, permitían adoptar una política monetaria laxa para atender los crecientes gastos militares que acumulaba el gobierno debido a la inestabilidad en el Tercer Mundo, y especialmente por la costosa guerra en Vietnam. Ante el desafío del dólar barato, europeos y japoneses aceptaron la disminución de las tasas de beneficio a cambio de no perder posiciones en los mercados. Pero, para los principales centros capitalistas, quedaba pendiente el problema fundamental: cómo aumentar la productividad y las tasas de ganancias para atraer inversiones.

Visto desde la economía capitalista en su conjunto, el colapso del régimen de tipos de cambio fijos, al aumentar los riesgos de las inversiones productivas, impulsó el avance del capital financiero. Ya fuera para protegerse frente a las incertidumbres o para explorar nuevos espacios y formas de inversión, las multinacionales tendieron a incrementar su liquidez y favorecieron la expansión de los mercados monetarios extraterritoriales, como Bahamas, Singapur y otros, donde la libertad de acción era mayor.

Frente a la devaluación del dólar y como medio de presión para debilitar el apoyo a Israel en la guerra de 1973, los países árabes productores de petróleo reunidos en la OPEP cuadruplicaron el precio del crudo en pocos meses. El shock del petróleo, en las postrimerías de la explosión salarial, agravó el malestar económico. Entre 1974 y 1975, la mayoría de los países industriales padeció una aguda crisis que se caracterizó por elevadas tasas de inflación, retroceso de la producción y desempleo creciente. Por primera vez, desde el fin de la Segunda Guerra, cayó la producción industrial y se disparó el desempleo.

Los petrodólares acumulados por los países de la OPEP comenzaron a afluir hacia los mercados financieros internacionales, donde los bajos intereses permitieron una ampliación sin precedentes del volumen internacional del crédito. Estos capitales ayudaron a superar la recesión en los principales centros industriales y alentaron el endeudamiento de los países en vías de desarrollo y los que integraban el bloque soviético. Antes de este fenómeno todos los países, con la

única excepción de los Estados Unidos, debían "ganar" el dinero que decidían gastar en el exterior. Ahora podían pedirlo prestado.

Mientras los gobiernos impulsaban el consumo y lidiaban con la inflación, las empresas encaraban reestructuraciones para alejarse de las "rigideces del fordismo". Se exploraron dos vías que admitían diferentes combinaciones entre sí. Por un lado, se avanzó hacia nuevos tipos de relaciones laborales, entre ellas el trabajo temporal o de tiempo parcial, que liberaba a las empresas de las cargas y restricciones impuestas por los pactos corporativos en los años dorados. Por otro lado, se exploraron nuevas formas de uso de la fuerza laboral para incrementar la productividad desbloqueando las trabas asociadas a la cadena de montaje. Se buscó recuperar la capacidad creativa del obrero abandonando los principios tayloristas para propiciar la recomposición de las tareas y la recalificación de los trabajadores. Frente a la "rigidez" del fordismo, se alentaba la "flexibilidad" del toyotismo.

El núcleo clave de la crisis residía en los decrecientes aumentos de la productividad y en la consiguiente retracción de la inversión productiva. La gestión keynesiana había sido eficaz para sostener la demanda, pero era impotente para revertir el descenso de la tasa de ganancia. Este desafío despejó el camino para la "contrarrevolución monetarista" de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

En 1979 el precio del petróleo en dólares se triplicó. Por un lado, en virtud del impacto de la revolución iraní; por otro, debido al interés de los países de la OPEP de contrarrestar la reducción de sus ingresos a causa del dólar y sus elevados gastos en importaciones. Frente a esta nueva sacudida, el presidente demócrata Jimmy Carter y el jefe de la Reserva Federal, Paul Volcker, dieron el primer paso hacia el monetarismo. Así lograron frenar la inflación y mantenerla por debajo del 4% durante veinte años, pero a costa de aumentar los tipos de interés, lo que dio paso a la recesión: gran parte de las industrias quebraron, creció el desempleo y el ingreso medio familiar disminuyó. Inicialmente, el control de la inflación ganó adhesiones entre los trabajadores y los sectores de clase media, que no imaginaron el alto precio que habrían de pagar.

Cuando el republicano Ronald Reagan sucedió a Carter, combinó el recorte de los gastos estatales propuesto por el monetarismo –aunque sólo en el plano de la seguridad social– con la reducción de los gravámenes a las empresas. Su objetivo era atraer las inversiones sin dejar por ello de aumentar los gastos militares "para frenar la expansión del comunismo". En consecuencia, propició un fabuloso crecimiento del déficit presupuestario sin preocuparse por el desencanto de los monetaristas ortodoxos.

El nuevo rumbo seguido por los Estados Unidos obligó a los demás países a abandonar la gestión socialdemócrata de la crisis, debido a la escasez y el alto costo del crédito. Ante la atracción que ejercían los bonos estadounidenses, seguros y con altos intereses, los otros países decidieron brindar condiciones de colocación tan atractivas como las que Washington ofrecía al capital internacional. De lo contrario, los capitales emigraban, como ocurrió en Francia en 1980 bajo la presidencia del socialista François Mitterrand. Los socialistas franceses abandonaron de inmediato el programa keynesiano con el que habían ganado las elecciones y aprobaron una política de ajuste en los gastos públicos.

La mayoría de los gobiernos retomaron las propuestas del liberalismo económico: las leyes del mercado premiarían a las empresas eficientes y barrerían de un plumazo a aquellas que subsistían gracias a la protección de los gobiernos. La recesión era el precio a pagar para alcanzar una economía futura eficiente. En la década de 1980 el neoliberalismo tomó el timón y, aunque su objetivo explícito era "menos estado y más sociedad", tuvo que aplicar una contundente intervención estatal para concretarlo rebajando los impuestos a los más ricos, recortando los gastos sociales, privatizando las empresas y los servicios públicos y generando condiciones favorables para la explotación de los trabajadores. Todo esto se resumió en la exaltación de las bondades de la flexibilización, una aspiración que iría de la mano de la liberación de los poderes del

capital financiero. Este pasó a ser el agente capaz de crear nuevas actividades para la inversión de capitales, relocalizar las plantas fabriles y sustraer al estado la provisión de bienes básicos –agua, educación, salud– para que fueran comprados en el mercado.

Aunque las medidas propiciadas por el programa neoliberal –disciplina antiinflacionista, liberalización y expansión de los mercados– eran económicas, el neoliberalismo era esencialmente una estrategia política destinada a modificar las relaciones de fuerza entre las clases. Las reformas logradas por las clases subalternas durante la década de 1960 mediante presiones democráticas se presentaban ahora como obstáculos para el crecimiento. Según el discurso dominante, antes de repartir era imprescindible incrementar la productividad sin negociar las condiciones de trabajo.

Estos principios coincidían con el neoliberalismo de Friedrich Hayek y Milton Friedman. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los liberales se refugiaron en la Mont Pèlerin Society para combatir lo que Hayek identificaba como "la ruta hacia la servidumbre", impuesta desde el estado. La red Mont Pèlerin sobrevivió marginada de la vida pública durante casi tres décadas en los Departamentos de Economía de las universidades de elite de Occidente, como la de Chicago y la London School of Economics, pero resurgió durante la crisis del keynesianismo a principios de la década de 1970, y sus representantes pasaron a ser los asesores de los gobiernos conservadores de los años ochenta.

Nuevo Bretton Woods informal

El gobierno de Reagan no se ató a los preceptos de la ortodoxia monetarista, entre otras razones por sus objetivos de política exterior. La derrota en Vietnam y la revolución iraní habían erosionado la posición de los Estados Unidos en el mundo, y el equipo gobernante, decidido a restablecer su predominio internacional, se embarcó en "la guerra de las galaxias" y disparó el déficit presupuestario.

Esto fue posible porque el giro de la Reserva Federal, que acabó con la inflación y favoreció a la comunidad financiera, fue acompañado por el fortalecimiento del dólar. La suba de los intereses provocó una reorientación masiva de los flujos de capital globales hacia los Estados Unidos y el dólar. La superpotencia norteamericana, que había sido la principal fuente de liquidez mundial e inversión directa extranjera durante las décadas de 1950 y 1960, se convirtió en el país más endeudado del mundo y en el principal succionador de liquidez desde la década de 1980 hasta la actualidad.

Si la superpotencia pudo convertirse en el mayor deudor mientras el dólar continuaba operando como moneda de intercambio mundial fue porque, en los hechos, la crisis de Bretton Woods dio origen a un Bretton Woods informal. En un principio, los países de la OPEP, encabezados por Arabia Saudita, se abocaron a apuntalar un orden internacional centrado en el dólar: sus inflados ingresos eran depositados en Londres para ser reciclados por los principales bancos comerciales en forma de créditos. Pero Japón acabó asumiendo el papel central en las operaciones de apoyo al dólar: Tokio se convirtió en el principal acreedor extranjero del gobierno estadounidense e indispensable sostén de su déficit, ya fuera directamente, gracias a sus grandes compras de títulos de deuda pública, o indirectamente, mediante la buena disposición del país a contabilizar la mayoría de sus títulos sobre el exterior en dólares y no en yenes.

Desde los años noventa, China se ha unido a Japón como pilar de este Bretton Woods informal. En el nuevo régimen, el gobierno estadounidense es el único que expande la demanda sin preocuparse por el valor de su moneda, debido a que el dólar queda respaldado por aquellos países, sobre todo los de Asia Oriental, que encontraron en el mercado estadounidense un motor clave para preservar su dinamismo productivo. Dado el estancamiento de los mercados domésticos de masas y la negativa a reactivarlos mediante el gasto público, el crecimiento en la mayor parte del mundo capitalista avanzado pasó a

depender cada vez más del aumento de las exportaciones. En este escenario, el colosal aumento de la deuda de los Estados Unidos, combinado con el alza del dólar, posibilitó que el gigantesco mercado de consumo estadounidense se erigiese en principal motor de la economía mundial.

El giro de la Reserva Federal reforzó al capital financiero, pero fue catastrófico para grandes segmentos del sector industrial norteamericano. La fuerte reacción del Congreso y de muchos sectores empresariales indujo a Reagan a presionar a los gobiernos aliados y, en septiembre de 1985, las principales potencias se comprometieron a adoptar medidas conjuntas destinadas a reducir el tipo de cambio del dólar. El Acuerdo del Plaza –celebrado por el Grupo de los 8 en el Hotel Plaza de Nueva York– inauguró un decenio de devaluación más o menos continuada del dólar frente al yen y el marco alemán. Al mismo tiempo, Washington denunció las prácticas comerciales desleales de otros países y puso en marcha una nueva legislación destinada a bloquear el mercado estadounidense a los competidores extranjeros, sobre todo a los de Asia Oriental. La devaluación y el proteccionismo, acompañados por la caída de los salarios reales, abrieron paso a la recuperación competitiva de la industria estadounidense, que se plasmaría en casi todos los indicadores económicos durante los años noventa. Sin embargo, esta recuperación fue efímera y desembocó en una burbuja financiera a fines de esa década.

La Unión Europea

La crisis del modelo de desarrollo bajo el liderazgo norteamericano impactó la integración económica europea. El nuevo escenario incorporó nuevos objetivos: la Comunidad debía ser un medio para conservar la competitividad de Europa Occidental en un capitalismo cada vez más transnacional. Los principales centros capitalistas europeos buscaron brindar condiciones favorables para la acumulación de capital vía la flexibilización de la producción y del comercio.

Simultáneamente, la Comunidad abrió sus puertas a nuevos países: tras la caída de las dictaduras militares en el sur, aceptó la incorporación de Grecia en 1981 y la de España y Portugal en 1986. En 1995 ingresaron Austria, Finlandia y Suecia. La Comunidad dejó de ser el ámbito de integración de un grupo relativamente pequeño de estados modernos e industrializados, asociados en virtud de intereses económicos comunes, e incluyó a países con características económicas diferentes.

Ante el desorden monetario, en la década de los setenta la Comunidad estableció la llamada “serpiente europea”: la vinculación de las distintas monedas en torno a la media establecida por la moneda más fuerte, con un margen de oscilación del 2,25%. En los años ochenta, el Plan Delors propuso la creación de un Banco Central Europeo, para definir una política monetaria común y establecer reglas obligatorias sobre los déficits presupuestarios. Su puesta en marcha implicaba la creación de una moneda común y la transferencia del poder de decisión de las autoridades nacionales a las burocracias de la Comunidad. El proyecto, aprobado en 1991 en Maastricht, reconoció además la ciudadanía europea a todos los ciudadanos de los estados miembros y se pronunció a favor de una política exterior y de seguridad común.

La construcción de la UE fue parte de un proceso de ampliación de los espacios económicos nacionales, cuyo propósito era sumarse al capitalismo global a través de la formación de bloques regionales. Pero sus objetivos y procedimientos abarcaban también dimensiones políticas y culturales, entre ellas, la construcción de una ciudadanía europea y la redacción de un texto constitucional común. La política económica favoreció la lógica del capital: la integración privilegió el libre movimiento de capitales, servicios y mercancías, el avance de las grandes empresas y la imposición de la ortodoxia económica a las políticas nacionales.

El “déficit democrático” de la Comunidad se hizo cada vez más

evidente desde el momento en que importantes competencias económicas y financieras –la moneda única o la creación de un Banco Central integrado por miembros independientes e inamovibles– pasaron de las instituciones nacionales a manos de organismos europeos con escaso o nulo aval electoral. Tanto el Consejo de Ministros como la Comisión, integrados por funcionarios designados por los gobiernos de los países, cuentan con amplias facultades. En cambio, el Parlamento, cuyos miembros son elegidos cada cinco años por sufragio universal desde 1979, carece de poder real. Para el europeo común, se trata de oficinas, burocracias lejanas, donde no pueden hacerse escuchar.

La profundización de la integración económica condujo a la politización del proceso en marcha. Las nuevas medidas debían ser confirmadas por los estados nacionales a través de los Parlamentos o de plebiscitos que ratificaran la creación de órganos supranacionales, depositarios de parte de la soberanía nacional. Dos temas claves ocuparon el centro de la discusión. En primer lugar, la primacía del enfoque neoliberal: sus defensores consideraban que la Comunidad era un mercado que debía adecuarse a los principios flexibles y competitivos del capital; sus variados detractores propiciaban una Europa menos volcada al mercado, ya sea en defensa de un nacionalismo xenófobo o bien en pos de políticas más comprometidas con el bienestar y los derechos sociales del conjunto de la población. El segundo tema remitía a quiénes y cómo tomarían las decisiones en este ámbito supranacional. Para esto se creó una comisión encargada de redactar una Constitución, teniendo también en cuenta la inclusión de los países de Europa del Este, ya que en mayo de 2004 se incorporaron Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa.

La aprobación del texto constitucional dividió la opinión en partidarios de la Comunidad y escépticos, reclutados indistintamente en las derechas o las izquierdas. En 2005 los franceses rechazaron el proyecto de Constitución europea. Los analistas coincidieron en que el futuro de Europa era incierto. Hubo tres grupos que consideraron el resultado de la votación en Francia como una victoria propia: los neoconservadores estadounidenses, las franjas antiglobalizadoras de la izquierda francesa y los "euroescépticos" derechistas. Para los primeros, el "no" francés y holandés había derrotado a las elites europeas, arrogantes y antinorteamericanas: era "un momento de esperanza para las perspectivas de una Europa fuerte, pronorteamericana, defensora de la libertad". Para los segundos, el "no" representó en gran medida todo lo contrario: un rechazo al programa neoliberal sostenido por la Comisión Europea. Para los últimos, el resultado había golpeado a la burocracia de Bruselas, que pretendía subordinar a los estados nacionales. Los socialistas y los verdes, aunque con reservas, habían apoyado la aprobación del texto constitucional.

Dos años después, la Unión Europea se ampliaba con la inclusión de Bulgaria y Rumania.

Niza o la Constitución: hay que elegir

Para Alain Lipietz, diputado francés en el Parlamento europeo y miembro del Grupo Verde, la Constitución adolecía de muchas omisiones, pero era mejor aprobarla que quedarse con las normas vigentes. Así lo expresaba: "Fue hace doce años [1992]. Jacques Delors volaba en auxilio del Tratado de Maastricht ante el Consejo Nacional de los Verdes. 'Este Tratado –decía–, que unifica a la Europa económica como un gran mercado con una moneda única, es peligroso si no se completa con una Europa política, que fije reglas sociales comunes. Pero incluso así, vótenlo, pues la Europa política pronto vendrá. Si no es así, se lo garantizo, los pueblos de Europa no lo soportarán'. [...] Hay que reconocer que la primera parte de la profecía de

Delors se ha cumplido: la Europa económica sin la Europa política ha visto cómo se han desarrollado las desigualdades y el paro. [...] No solamente la independencia del Banco Central no ha sido atemperada por un compromiso de responsabilidad, sino que la política presupuestaria restrictiva de Maastricht se encuentra grabada sobre el mármol del Tratado de Ámsterdam. [...] Librecambio, más parálisis de lo político: Niza es la Constitución ideal para el liberalismo económico.
Sobre este escenario debemos juzgar las inflexiones aportadas por el Tratado Constitucional que se nos propone. Hay que decirlo honestamente: es la primera vez, después de Maastricht, en que se abre la esperanza de introducir, frente al gran poder del mercado, la voz de los ciudadanos en una Europa política. Nueva definición de los objetivos de la Unión (art. I-3), aumento de las competencias del Parlamento Europeo elegido por sufragio universal, derecho de iniciativa legislativa por petición de los ciudadanos, simplificación y ampliación de la regla de la mayoría en el Consejo, reconocimiento de un derecho específico de los servicios públicos (art. III-122), Carta de los derechos fundamentales, opción de alianza por fuera de la OTAN... Estos avances esenciales permiten, por ellos mismos, decir que Europa, con el texto que se nos propone, será más democrática, más soberana y, por lo tanto, potencialmente más social y ecologista, que si nos mantenemos en los tratados actuales de Maastricht-Ámsterdam-Niza. [...]
La Constitución es un 90% de lo que hoy tenemos (Maastricht-Niza) y que no nos gusta, y un 10% de reformas que aprobamos. [...] Hay que responder Sí ('tomamos el 90% que criticamos y el 10% de mejoras') o No ('nos quedamos con el 90% que criticamos')".

Texto incluido en *Iniciativa Socialista*, España, invierno de 2004-2005.

Las fuerzas políticas en Europa y los Estados Unidos

El comienzo del largo declive de la economía mundial en los años setenta apareció asociado con la incertidumbre en los partidos políticos tradicionales. Surgieron partidos y movimientos centrados en demandas específicas. Las nuevas agrupaciones –los movimientos ecologistas, feministas y pacifistas– se destacaron por su magnitud y su prolongada gravitación. La proliferación de estos grupos afectó principalmente a los partidos de izquierda tradicional, que perdieron a buena parte de sus votantes.

La mayoría de los gobiernos de centroizquierda continuaron atados a las fórmulas del keynesianismo, sin lograr revertir la perversa combinación de recesión con inflación, pero a fines de esa década Carter en los Estados Unidos y Callaghan en Gran Bretaña ya habían cambiado el rumbo hacia la ortodoxia monetarista. En los años ochenta hubo un giro del electorado, y los partidos de la derecha alcanzaron el gobierno en todo el ámbito noratlántico: los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania Occidental, el Benelux y Escandinavia. Los gobiernos más decididos a combinar las propuestas neoliberales en el plano económico y los valores neoconservadores en el ámbito de la cultura y las formas de vida fueron el de Thatcher y el de Reagan. Ambos encararon una profunda reorganización destinada a modificar la relación de fuerzas entre capital y trabajo a través de la desregulación, la reducción impositiva, la privatización y el quiebre del movimiento sindical. La doctrina del libre mercado fue

acompañada, a la hora de sumar votantes, con la reafirmación nacional: una fuerza movilizadora mucho más poderosa que la consigna del laissez faire. Reagan dio batalla contra el comunismo soviético, Thatcher contra el militarismo argentino en las Islas Malvinas, y ambos afianzaron así su capacidad de convocatoria.

Aunque con menos entusiasmo, fueron imitados por los gobiernos de Europa Septentrional, incluidas las zonas tradicionales de dominio socialdemócrata en Escandinavia. Ya no había dudas: el neoliberalismo había desplazado al keynesianismo y pretendía desmontar el estado de bienestar. Sumado a las derrotas electorales del laborismo británico y de los socialdemócratas alemanes, se fortaleció la hipótesis de la crisis de la socialdemocracia.

La socialdemocracia quedó enfrentada a un doble desafío: el de una economía cada vez más internacionalizada, que le impedía recurrir a las viejas recetas para frenar el fuerte incremento del desempleo, y el de una base social cada vez más reducida, en parte porque la promesa de mayor igualdad social no expresaba los intereses y las aspiraciones de la heterogénea clase media ni los de los obreros bien posicionados en el nuevo mundo laboral flexible y segmentado. Frente a la movilidad del capital financiero, la creciente competencia en el mercado mundial y las directivas de instituciones claves del capitalismo –como el FMI–, los socialistas europeos desembocaron en algo parecido al Partido Demócrata estadounidense, aunque más atados a la preservación de los bienes sociales creados por el estado de bienestar europeo, mucho más consistente que el de la superpotencia capitalista.

Mientras la socialdemocracia del norte perdía apoyo electoral en el marco de la crisis, en el campo de la izquierda europea meridional avanzaban los socialistas y los comunistas declinaban.

En Europa del Sur la industrialización fue más tardía, la clase obrera generó tradiciones más combativas, forjó un fuerte vínculo con los comunistas y, al mismo tiempo, fue más débil en la confrontación con el capital. En los años cincuenta y sesenta estas sociedades fueron modificadas por los avances en la industrialización, la expansión de la clase media y la secularización de las formas de vida. Los comunistas se vieron afectados por estos cambios y, especialmente, por el desgaste del régimen soviético. A principios de los años setenta, a través del eurocomunismo, los partidos comunistas francés, italiano y español revisaron su identidad distanciándose de la experiencia bolchevique.

El eurocomunismo fue una reacción a la consolidación de la gerontocracia de la URSS encabezada por Brézhnev, que desde mediados de la década de 1960 venía enterrando las inquietudes revisionistas promovidas por la desestalinización. Si el punto de partida del eurocomunismo fue la invasión a Checoslovaquia en 1968, el golpe de 1973 que derrocó al gobierno socialista de Allende en Chile marcó su aparición pública. La propuesta eurocomunista fue formulada inicialmente por el Partido Comunista Italiano a través de los artículos de su máximo dirigente, Enrico Berlinguer, sobre el golpe militar chileno. Berlinguer descartó la vía revolucionaria en los países desarrollados de Occidente: la transición al socialismo debía apoyarse en la democracia en lugar de imponer la dictadura del proletariado. La alternativa eurocomunista insistía en que el socialismo debía preservar el abanico de libertades civiles de la democracia capitalista. El nuevo orden político defendería los derechos de las personas, la pluralidad de los partidos y las instituciones parlamentarias, y evitaría la expropiación violenta de la propiedad privada de los medios de producción.

Un factor clave para el surgimiento de esta propuesta fue la situación política del sur europeo. A mediados de los años setenta abundaban los signos a favor del cambio: el descrédito de la derecha en Francia, el agotamiento de la Democracia Cristiana en Italia y el fin de las dictaduras: en España con la muerte de Franco en 1975, en Portugal con la Revolución de los Claveles en 1974, y en Grecia con el retiro de la junta militar en 1974. En estos países, los partidos comunistas, arraigados en la clase obrera, anunciaban democracias sociales más igualitarias que el capitalismo de bienestar gestionado por la socialdemocracia del norte. Sin embargo, el eurocomunismo no llegó a plasmar una alternativa propia, y sus propuestas remitían en gran

medida al keynesianismo desgastado por la crisis. El giro democrático del eurocomunismo, que se parecía cada vez más a la socialdemocracia, resultó escasamente creíble a la luz de su estrecha y prolongada vinculación con el régimen soviético. Al distanciarse de la Revolución de Octubre y reivindicar la opción democrática, las señales de identidad de los comunistas se tornaron ambiguas y sus decisiones políticas fueron erráticas.

El Partido Comunista Francés formó parte de la Unión de Izquierdas que llevó al socialista Mitterrand a la presidencia, luego rompió la alianza y terminó reingresando al gobierno en una posición subordinada. En Italia, se desgastó buscando una alianza con la Democracia Cristiana, sin obtener la porción de poder que esperaba. En ambos países fueron los socialistas quienes ganaron posiciones en el gobierno. En Francia, la confluencia de diferentes agrupaciones de izquierda posibilitó que Mitterrand ganara las elecciones presidenciales de 1981 y conservara el cargo hasta 1995. En Italia, la coalición con la Democracia Cristiana llevó al socialista Bettino Craxi a ocupar el cargo de primer ministro entre 1983 y 1987.

En España, Grecia y Portugal la transición hacia la democracia estuvo signada por severos desafíos: una economía poco competitiva, profundas desigualdades sociales, un estado con fuerte peso de los organismos represivos y un escenario político precario debido a la represión anteriormente ejercida por los gobiernos autoritarios. En los dos primeros países, los socialistas llegaron al gobierno en la década del ochenta. El Partido Socialista Español (PSOE) ganó las elecciones en 1982 y su máximo dirigente, Felipe González, estuvo al frente del gobierno hasta 1996. Los socialistas griegos, encabezados por Andreas Papandreu, condujeron el gobierno entre 1981 y 1989 y volvieron a desplazar a las fuerzas de centroderecha en 1993. En Portugal, después del fracaso del gobierno de izquierda encabezado por un sector de los militares que había derrocado la dictadura, los socialistas o bien compartieron el gobierno con el centroderechista Partido Social Demócrata o bien estuvieron en la oposición. Recién en 1995 obtuvieron la mayoría absoluta en la Asamblea.

Las gestiones de los socialistas –con prolongado predominio en los gobiernos de España, Grecia y Francia– tendieron a aceptar las condiciones impuestas por la reorganización del capitalismo y relegaron sus objetivos de reforma social. Los indicadores de crecimiento económico de estos países tuvieron una curva ascendente, pero las tasas de desempleo se mantuvieron altas y el estado de bienestar no alcanzó la extensión ni la calidad de la socialdemocracia del norte. El debate en torno a este resultado, muy alejado de las promesas del socialismo, sigue abierto: todavía falta determinar cuánto peso corresponde a los contextos en que debieron actuar sus gobiernos y cuánta responsabilidad cabe a las decisiones de sus dirigentes.

En los años noventa, en la mayor parte de los países centrales, el fiel de la balanza política se inclinó a favor de la nueva socialdemocracia neoliberalizada. A fines de esa década, los partidos de centroizquierda detentaban el gobierno en los Estados Unidos, Canadá y doce de los quince países de la Unión Europea: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Portugal y Grecia. Los gobiernos del demócrata Bill Clinton en los Estados Unidos y del laborista Tony Blair en Gran Bretaña marcaron la tónica y la dirección del nuevo período.

La formación política estadounidense siempre ha diferido de sus equivalentes europeos. La mitad de la población, integrada por los sectores menos pudientes, casi nunca vota, y el conjunto del espectro político se sitúa más hacia la derecha que en Europa: cabe recordar que en los Estados Unidos no ha habido nunca un partido socialista con sólido arraigo entre el electorado. En este contexto, Reagan obtuvo un consenso mucho más amplio para su línea conservadora que Thatcher para la suya.

Durante el New Deal hubo una gran diferencia entre los programas políticos demócrata y republicano. En las últimas décadas del siglo XX, debido al giro hacia el neoliberalismo de la socialdemocracia europea y al desprendimiento de los ex demócratas sureños, el Partido Demócrata estadounidense se asemejó a las coaliciones

socialdemócratas europeas mientras que los republicanos se acercaron más a los conservadores. Las diferencias programáticas entre ambos se redujeron a medida que las desigualdades sociales se intensificaban. Sin embargo, los dos partidos expresan diferencias. Los demócratas siguen inclinados a conceder beneficios sociales a los pobres y los republicanos propenden a ofrecer un liberalismo económico más coherente a los ricos.

El Partido Demócrata llegó al gobierno en 1992 y Clinton reeditó su victoria cuatro años después. Presidió el país durante la expansión económica más prolongada desde los años setenta, gracias a la reducción de las tasas de desempleo, el boom del consumo y un mercado de valores floreciente. La desregulación, tanto del mercado financiero como del mercado laboral, estuvo acompañada por gestos de conciliación social: redistribución fiscal, creación de empleo, reforma educativa. Clinton y su equipo presentaron estos cambios como el fruto de una nueva política económica: la "tercera vía" entre "los que decían que el gobierno era el enemigo y los que decían que era la solución". Desde esta perspectiva, un buen gobierno era aquel que propiciaba un desarrollo favorable a "la era de la información", generaba nuevas ideas y reorganizaba el estado en un sentido menos burocrático y más disciplinado en los gastos.

La tercera vía, entendida como alternativa entre el neoliberalismo y la socialdemocracia tradicional, fue también asumida por otros gobiernos: desde Blair en Gran Bretaña hasta Fernando Cardoso en Brasil recurrieron al mismo lema, cuyo principal teórico fue el sociólogo británico Anthony Giddens. Desde esta perspectiva, los nuevos gobiernos de centro-izquierda evitaron todo extremismo ideológico.

Mientras la socialdemocracia tradicional insistía en la justicia social –aun a costa de recortar la libertad de los dueños del capital–, los defensores de la tercera vía enfatizaban las oportunidades que ofrecía la libertad para desarrollar la iniciativa individual y las posibilidades que brindaban las nuevas tecnologías y la educación para aumentar el bienestar, siempre y cuando las personas aprendiesen a lidiar con los riesgos e incertidumbres de la posmodernidad. La mejor prueba presentada sobre sus bondades fue el balance práctico de la economía estadounidense.

Mientras los políticos argumentaban en favor de la tercera vía, el ámbito académico y periodístico anglosajón acuñó el concepto de "nueva economía" para designar el proceso de acumulación de capital que vivía la economía norteamericana. El despegue económico tuvo entre sus pilares la exitosa proliferación de las empresas vinculadas con la informática, las "punto com". Aunque el aumento de la productividad siguió siendo lento, el crecimiento del PIB fue sostenido y el desempleo y la inflación disminuyeron simultáneamente. Durante la gestión de Clinton no se produjo ninguna recesión, en parte debido a la reestructuración previa de la industria –recuérdese que las restricciones crediticias impuestas a comienzos de la década de 1980 habían eliminado a las empresas y los bancos menos eficientes– y en parte gracias a las tendencias impulsadas por el acuerdo del Plaza en 1985, que al desvalorizar el dólar confirió a los Estados Unidos cierta ventaja competitiva sobre Alemania y Japón. Pero el gobierno de Clinton también profundizó la desregulación bancaria abriendo paso a los "supermercados financieros integrados", que podían combinar, con gran aumento de sus beneficios, las tareas –hasta entonces separadas– de la banca comercial, la banca de inversiones y los seguros. Todas las tendencias económicas y políticas importantes de la década de los noventa jugaban a favor de las finanzas, aunque en ese momento quedaran veladas por la euforia en torno a las actividades vinculadas con la informática y las telecomunicaciones.

Mientras la posición de la economía norteamericana se deterioró desde mediados de los sesenta para recuperarse en los años noventa, la de Japón conoció un significativo avance hasta 1990 y un pronunciado estancamiento a partir de entonces. La economía europea osciló como la japonesa, pero creció menos en la primera etapa y conoció un estancamiento menos pronunciado en los años noventa. Desde la perspectiva estadounidense, el estancamiento europeo se debía a que los trabajadores, empleadores e instituciones

carecían de la flexibilidad lograda por sus homólogos en los Estados Unidos. Como contrapartida, para gran parte de los europeos, los Estados Unidos tenían demasiados problemas: la insaciable búsqueda de riqueza y el consumo desmedido de su población eran estéticamente desagradables y ecológicamente catastróficos, mientras que las diferencias sociales eran cada vez más profundas. Aunque el índice de desempleo estadounidense era inferior al de muchos países europeos, las brechas en los ingresos eran mayores. En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XXI, una minoría privilegiada tenía acceso a los mejores tratamientos médicos del mundo, pero había cuarenta y cinco millones de estadounidenses sin ninguna clase de cobertura médica.

La crisis de la socialdemocracia y el ascenso de la derecha radical

El repunte de la socialdemocracia fue efímero. Una semana después de que los primeros ministros de Gran Bretaña y Alemania, el laborista Anthony Blair y el socialdemócrata Gerhard Schröder, firmaran un documento donde sostenían que "la socialdemocracia había encontrado nueva aceptación", el resultado de las elecciones europeas del 10 y el 13 de junio de 1999 contradijo esa afirmación. En ocho países obtuvieron el 20% de los votos, o menos, y en otros cuatro rondaron el 33%. Sólo en España y Portugal conservaron índices de alrededor del 40% y apenas en cuatro la socialdemocracia fue el partido más votado.

Varias razones explican el debilitamiento de los socialdemócratas a principios del siglo XXI. En primer lugar, la erosión del medio social en el que había prosperado la socialdemocracia: los obreros calificados, articulados por una red de organizaciones –el partido, los sindicatos, las asociaciones culturales y recreativas– que conferían identidad a la clase obrera. Su cohesión dependió también del ideal compartido de una sociedad futura más justa. Los cambios en el mundo laboral bajo el doble impacto de la crisis y la globalización impulsaron trayectorias y condiciones laborales diferentes, y se diversificaron las formas de vida. El individualismo ganó terreno y se debilitó la percepción de un "nosotros". En segundo lugar, debido a las reglas económicas de la Comunidad Europea, quedó cada vez menos margen para las diferencias entre las gestiones de los socialdemócratas europeos y sus rivales conservadores y democristianos. Por último, la crisis del socialismo estatista del bloque soviético arrasó con la ilusión, que muchos conservaban, de sociedades más igualitarias y justas que las capitalistas y deslegitimó la intervención del estado en la vida social y económica.

El ocaso de la socialdemocracia no supuso el ascenso de sus opositores históricos: tanto los democristianos como los conservadores perdieron elecciones y cargos gubernamentales. Paralelamente, los partidos verdes crecieron y los liberales tuvieron una etapa de renacimiento. Pero ante todo ganó peso la derecha radical que impulsaba el "nacionalismo social", es decir, la reivindicación de una identidad nacional homogénea que alentaba la expulsión de los habitantes procedentes de otros países. En los primeros años del siglo XXI, esta opción incrementó su caudal electoral en Bélgica con el Vlaams Block, en Portugal vía el Partido Nacional de Derecha, en Dinamarca con el Partido Nacional, en Noruega con el Partido Progresista, en Austria con Jörg Haider a la cabeza del Partido de la Libertad, en Italia con la Liga del Norte, de Umberto Bossi, fuertemente xenófoba, y que integra la victoriosa coalición de centroderecha encabezada por Silvio Berlusconi, mientras en las presidenciales de Francia los socialistas obtenían menos votos que el Frente Nacional, liderado por Jean-Marie Le Pen. Únicamente en Alemania los partidos de la nueva derecha no cosecharon éxitos en el ámbito nacional y sólo lograron resultados significativos en algunos parlamentos regionales.

La derecha radical europea

Es posible advertir algunos principios básicos de este sector de la escena política a través de las opiniones de Filip Dewinter, secretario general del Vlaams Blok, partido ultranacionalista de Flandes, en la entrevista que concedió, en 1995, al diario español *El Mundo*:

"Pregunta: ¿A qué clase social pertenecen los simpatizantes de su partido?

Respuesta: Es un partido popular. Las clases obreras, los trabajadores, muchos jóvenes y quizá también parados. Esta es la clase dominante, pero tenemos gente de todos los estratos sociales. [...]

P: ¿Definiría su partido como conservador y de extrema derecha?

R: No, de derecha nacional. Somos un partido nacionalista que no es racista ni fascista. Ni es un partido conservador, porque eso suele querer decir liberal y capitalista. Somos la cuarta fuerza política del país. Representamos entre el 13% y el 15% del electorado. Eso quiere decir que no somos extremistas. Sólo tendríamos entonces un 2% de los votos. Somos un partido democrático, apoyado por mucha gente.

P: ¿Expulsaría a todos los inmigrantes?

R: No a todos. Los ilegales, los que están en paro y los criminales deben volver a su país de origen. No las otras categorías. Pero decimos que debemos dar trabajo y prestaciones sociales primero a nuestro propio pueblo. Eso es normal.

P: ¿Aspiran a un Flandes independiente y fuera de la Unión Europea? R: Sí a la independencia, pero no a dejar la UE. Pero no queremos la Europa de Maastricht ni la de Schengen. Maastricht no respeta la soberanía de los estados. Y hay que resguardarla, y hay que resguardar también las fronteras porque hay inmigrantes, droga y criminalidad que pueden entrar. [...]

P: ¿Cuáles son sus socios en el exterior?

R: El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia. En España no tenemos aliados, porque el Frente Nacional es demasiado franquista, está demasiado vinculado al pasado y no mira la política actual. En cuanto al País Vasco, estamos en contra de la violencia. No tengo simpatía ni por ETA ni por Herri Batasuna. Pero sí por la lucha del pueblo vasco, que es justa. Hay que comprender que los vascos quieran más autonomía. En Flandes también la queremos, y creemos que la podemos conseguir democrática y pacíficamente.

P: ¿Acabará con el cobro vitalicio de paro?

R: Los parados de larga data tienen la obligación de trabajar y el estado debe organizar empleos en hospitales u otros servicios para ellos."

Diario *El Mundo*, Madrid, 21 de mayo de 1995.

La actual derecha radical maneja hábilmente los miedos que suscita un mundo incierto e identifica "enemigos" para explicar los males que aquejan a los "perdedores" en el capitalismo global: asocia el desempleo a la inmigración, adjudica el terrorismo a los musulmanes, vincula la criminalidad y el vandalismo a un exceso de extranjeros, denuncia la corrupción como rasgo distintivo de la clase política, y atribuye las peores condiciones de vida a las decisiones de los tecnócratas, sobre todo aquellos que están "arriba", en la lejana Bruselas. Esgrime su nacionalismo xenófobo como una salida viable a la crisis social y de valores que es producto, según ella, de la

globalización y la Unión Europea. No es la expresión política de una determinada clase o sector social porque su propuesta encuentra eco en diferentes estratos de la sociedad, incluidos los obreros. El ascenso de estas fuerzas de derecha radical se basa en la aceptación, por importantes sectores de la sociedad europea, de la exclusión y la represión de quienes no son de origen europeo.

Sin embargo, los "otros" no sólo son rechazados por el francés Le Pen o el flamenco Dewinter, sino que el conjunto de la dirigencia política europea, acompañando y promoviendo los sentimientos de gran parte de la población de sus países, ha decidido impedir que los hombres, mujeres y niños de sus ex colonias ingresen al Primer Mundo. A mediados de 2008 los ministros del Interior de los estados miembros de la Unión Europea aprobaron la polémica ley que determina los procedimientos para expulsar a inmigrantes sin papeles. A través de esta sanción se institucionaliza el encierro de los extranjeros por vía administrativa hasta un máximo de dieciocho meses en los cerca de ciento setenta centros de retención para inmigrantes. El mismo destino les espera a los menores que no estén acompañados por adultos. Dentro de ese período, los detenidos son deportados a sus países de origen.

Asia: milagros económicos, crisis y globalización

En los últimos decenios se produjeron espectaculares expansiones económicas en Asia: Japón, desde la década de 1960; los tigres asiáticos –Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur– en los años ochenta; China en los noventa y la India a principios del siglo XXI. Estos países, con índices de crecimiento superiores al 8% durante décadas, han logrado en pocos años lo que Europa y los Estados Unidos alcanzaron en un siglo de crecimiento material. Pero también existe otra Asia, la de los países pobres y en muchos casos desgarrados por guerras internas: desde Nepal, Bután, Camboya, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Myanmar, Sri Lanka y Timor Oriental en el sur y el sudeste, pasando por Corea del Norte, hasta los nuevos estados de Asia Central: Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán.

En la última década del siglo XX el escenario asiático sufrió el impacto acumulado de una serie de hechos: el fin de la Guerra Fría, que eliminó las líneas de separación ideológica que dividían al continente; la globalización, la crisis financiera de 1997-1998, el ascenso de China y el más reciente ascenso de la India, y la profundización de la integración económica. Aunque la mayoría de los analistas reconocen el advenimiento de un nuevo orden mundial, el significado y las repercusiones de los cambios en curso en esta parte del planeta son motivo de debate.

¿Está en marcha una globalización asiática que acabará con la hegemonía estadounidense? Si hubiese una globalización asiática, ¿en qué medida y en cuáles sentidos podría significar un proyecto contrapuesto a la globalización occidental? ¿La creciente interdependencia económica de los países asiáticos supone la efectiva construcción de un polo con intereses compartidos? ¿Qué peso tienen la competencia económica y las rivalidades entre los principales estados –sobre todo, aunque no exclusivamente, en el caso de China y Japón–, cuyo pasado está atravesado por prolongados y sangrientos enfrentamientos?

Japón: de la euforia al estancamiento prolongado

Durante un breve período, entre fines de la década de 1980 y principios de los años noventa, Japón pareció haber superado a los Estados Unidos en todos los índices significativos de la economía. Sus empresas dominaban en ramas industriales importantes y sus bancos superaban con creces a sus rivales extranjeros. Tokio no sólo había sorprendido al mundo por su capacidad para recuperarse después de

la Segunda Guerra Mundial, sino también por haber impulsado la prosperidad del este y el sudeste de Asia. En estas zonas surgieron nuevas economías industrializadas capaces de competir en el mercado mundial: primero los “tigres” y, siguiendo sus pasos, Malasia, Tailandia e Indonesia.

En el espectacular crecimiento de la región también intervinieron los empresarios de la diáspora china. La población étnicamente china residente fuera de su tierra ancestral alcanzaba los treinta y cuatro millones de personas, de los cuales más del 82% se encontraba en Asia, y la mayoría en el sudeste del continente. Excepto en Tailandia y Filipinas, donde contraen matrimonio con la población local y se integran, en el resto de los países los chinos son “los forasteros por excelencia”: capitalistas vinculados al comercio y las finanzas que conectan esas economías con el mercado mundial.

A mediados de los años ochenta, imposiciones procedentes de los Estados Unidos dieron lugar, sin que fuera un objetivo esperado, al creciente vínculo económico entre Japón y el Este y Sudeste asiático.

En 1985 el gobierno de Reagan presionó a las autoridades japonesas para que aceptaran la revaluación del yen. Se esperaba que la desvalorización del dólar, a partir de la firma del acuerdo del Plaza, mejorara el déficit comercial de los Estados Unidos y que Tokio simultáneamente incrementara sus importaciones.

Pero Japón no se convirtió en un gran importador y las empresas exportadoras siguieron expandiéndose mediante la transferencia de la producción a los países asiáticos vecinos. Como las monedas de estos países estaban en su mayor parte vinculadas al dólar, su devaluación aumentó la capacidad competitiva de las exportaciones asiáticas frente a Japón. En consecuencia, las empresas japonesas se vieron impulsadas a trasladar una parte cada vez mayor de sus operaciones productivas a los países asiáticos de la región. En un primer momento, esas inversiones sólo tuvieron en cuenta el mercado asiático para el ensamblaje de los productos finales aprovechando la mano de obra barata y abundante. Con el paso del tiempo, esos puntos se convirtieron en bases de una cadena interregional de fabricación con altos niveles de tecnología y productividad.

El alza del yen fue acompañada por la expansión del crédito. Las autoridades no intervinieron cuando los bancos empezaron a distribuir generosamente préstamos a agentes inmobiliarios de menor calidad y a especuladores bursátiles. Esta conducta creó las condiciones propicias para la formación en torno de los valores inmobiliarios de una enorme burbuja financiera. Según las leyes del mercado, debía sobrevenir una crisis: el colapso de las empresas sobreendeudadas y de los bancos en riesgo, acompañado por fusiones. Sin embargo, en un principio el gobierno japonés se negó a retirar la garantía que brindaba a las empresas financieras. Así fue creciendo la nube de la incertidumbre, con quiebras de los más chicos hasta la caída, en 1997, de Yamaichi Securities, la cuarta firma de valores de Japón. Esto fue totalmente novedoso: también en Japón, a pesar de que la burocracia estatal había resguardado su destino, las grandes empresas podían entrar en bancarrota.

El problema de Tokio era más grave, ya que conllevaba la pérdida de su liderazgo tecnológico. En los años noventa el optimismo de la elite japonesa se transformó en hondo pesimismo cuando las cifras indicaron que su país, la segunda economía y el primer acreedor neto del mundo, era víctima de un grave estancamiento. El declive fue resultado del repunte económico de los Estados Unidos, pero, además, se combinó con la brutal caída de las economías del Sudeste asiático y Corea del Sur tras la revisión del acuerdo del Plaza en 1995.

Frente a las nuevas empresas estadounidenses –Apple Computer, Microsoft, Intel, Sun Microsystems, Advanced Micro Devices– líderes en casi todas las tecnologías de la información en la década de 1990, Japón pasó a ocupar una posición de segunda categoría tras dos gloriosas décadas de liderazgo tecnológico. El éxito norteamericano en Internet y en las industrias de *software* se había gestado en la cultura empresarial con amplio margen para la iniciativa individual de Silicon Valley. Allí jóvenes científicos, con el apoyo de mercados de capital altamente desarrollados y decididos a afrontar la incertidumbre de las

nuevas inversiones, inauguraron negocios de miles de millones de dólares. Nada de aquello era posible, ni siquiera concebible, en el marco del dirigismo burocrático de Tokio. Los burócratas japoneses no estaban dispuestos a admitir que algo tan corrosivo para el orden establecido como el ethos liberal de Silicon Valley echara raíces en su país.

La reactivación estadounidense se había producido, en parte, a expensas de sus rivales en Japón y Europa Occidental. Diez años después del acuerdo del Plaza, el dólar seguía subvaluado en un 40% respecto al yen. En abril de 1995 se alcanzó un tipo de cambio récord de 79 yenes por dólar, lo que afectaba seriamente la producción exportable japonesa. Tokio presionó a los Estados Unidos subrayando que ese yen sobrevaluado agotaría la capacidad de Japón para sostener el déficit por cuenta corriente de Washington, lo que provocaría en los Estados Unidos déficit y recesión. Clinton, atento a las cercanas elecciones presidenciales, acordó con las principales potencias el llamado "acuerdo del Plaza inverso" para forzar el aumento del dólar. Entre mediados de 1995 y fines de 1997 el dólar subió de 79 a más de 130 yenes y Japón tuvo un respiro.

Pero en una economía global, cada decisión que afecta a uno de sus eslabones repercute inmediatamente sobre toda la cadena. La devaluación del yen afectó a los países asiáticos vecinos porque redujo la capacidad competitiva de sus exportaciones; sin embargo, sus gobiernos, inmersos en la euforia del momento, continuaron expandiendo el crédito. En el marco de esta política, los capitales especulativos que ingresaron en las economías emergentes de Asia alentaron el crecimiento de la burbuja en el sector inmobiliario y financiero. La creciente distancia entre los movimientos de capital que conducían al endeudamiento y las posibilidades cada vez más escasas de colocar productos en el mercado impidió que el valor de las monedas locales continuara sujeto al dólar. Si bien el primer ministro de Malasia acusó al empresario y financista norteamericano George Soros de haber provocado la crisis monetaria al retirar grandes volúmenes de capital de Asia Sudoriental por motivos políticos, la teoría de que la crisis fue producto de una conjura no tiene demasiado asidero. La especulación no creó los problemas económicos que condujeron a la debacle monetaria, antes bien, dejó al descubierto que las expectativas sobre el futuro económico de la región eran exageradas y dio lugar a nuevas expectativas de signo negativo. Lo que sí hizo la especulación fue intensificar dramáticamente las circunstancias críticas y agravar sus costos sociales.

La crisis asiática estalló en Tailandia con la caída del baht a fines de junio de 1997. Cuando se hizo evidente que las deudas superaban ampliamente la capacidad de pago, el gobierno retiró la garantía estatal para los bancos y empresas excesivamente endeudados. La fuga masiva de capitales fue acompañada por una serie de devaluaciones: al baht le siguieron el peso filipino, el ringgit malayo y la rupia indonesia. El valor de las deudas externas se disparó, muchas empresas quebraron y creció el desempleo. Las experiencias exitosas, cuyo ejemplo supuestamente debía seguir el resto de los países periféricos según los neoliberales, desembocaron en el derrumbe económico y la crisis social.

En contraste con el patrón de bancarrotas del Tercer Mundo, la crisis asiática no se debió a un gasto gubernamental irresponsable sino a la sobreinversión irresponsable del sector privado. A lo largo del boom, según el Banco Mundial, los gobiernos de Asia Oriental se comportaron en forma ejemplar: siguieron una política monetaria y fiscal orientada a la estabilización, fomentaron las exportaciones en lugar de sustituir las importaciones, y crearon condiciones favorables para la inversión privada. A causa de este diagnóstico previo, era difícil atribuir la responsabilidad del desastre a una clase gobernante corrupta y populista, como se hacía en América Latina. No obstante, el influyente semanario londinense *The Economist* acuñó el concepto de "capitalismo de campo de golf". Las redes flexibles de cooperación informal entre los políticos, la burocracia y las elites económicas –hasta entonces vistas como instrumentos para promover consensos– pasaron a ser consideradas semilleros del clientelismo y el nepotismo.

Con el derrumbe de sus vecinos, Japón perdió un mercado clave para

sus exportaciones. La crisis financiera de los países asiáticos se tragó cientos de miles de millones de dólares en inversiones directa o indirectamente financiadas a través del sistema bancario japonés, asestando un nuevo golpe a un conjunto de instituciones que ya tambaleaba a causa de las dificultades internas. Desde fines de 1997, el crédito empezó a escasear en Japón, especialmente para las empresas pequeñas y medianas, y se generalizó un círculo vicioso de retracción de créditos, quiebra de empresas y más restricción crediticia. El enfermo sistema bancario japonés parecía ser el ojo del huracán, pero en realidad era el síntoma de una crisis estructural más profunda: décadas de inversión sin atender a la rentabilidad habían cargado a Japón con una sobrecapacidad productiva mayúscula. Además, había quedado rezagado en el nuevo escenario capitalista, donde la pujanza económica se trasladó de los sectores que fabricaban objetos a los que suministraban complejas series de servicios.

Para los economistas ortodoxos de gran parte del mundo, con Washington a la cabeza, los problemas japoneses se solucionarían adoptando las instituciones del capitalismo liberal: depuración de grandes fabricantes y bancos no rentables, eliminación de acuerdos corporativos entre empresas y trabajadores, desmantelamiento de cárteles, libre comercio y fijación de precios por los mercados y no por los burócratas. Pero esta fórmula significaba la pérdida de puestos de trabajo y la quiebra de empresas. Implicaba reconocer que los depósitos que habían financiado gran parte de la capacidad productiva a través del sistema bancario no valían lo que la gente creía. Si todo esto salía a la luz, la crisis económica tendría un correlato de ira social y pérdida de credibilidad para la elite gobernante. Los dirigentes japoneses no podían aceptar la fórmula estadounidense. Lo que el resto del mundo interpretaba como un problema principalmente económico conllevaba en el fondo un desafío político: hasta qué punto y cómo el régimen japonés debía reconfigurarse frente a un capitalismo global que arrasaba con los pactos de los años dorados a través del movimiento incontrolado del capital financiero.

En este contexto, el ascenso de China fue decisivo para la recuperación de Japón. La avidez china de bienes de capital permitió a los productores japoneses elevar la tasa de utilización de la capacidad existente, hasta el punto de volver a ganar produciendo bienes. Las empresas japonesas comenzaron a invertir seriamente en China desde principios de los años noventa, tendencia que se vio fortalecida desde finales de esa misma década debido a la crisis asiática. Del sólido vínculo forjado con los Estados Unidos durante la Guerra fría, Japón pasó a una relación triangular cargada de ambigüedades y desafíos.

La incorporación de China comunista al capitalismo global

En los primeros años del siglo XXI, cerca del 20% del crecimiento de la economía internacional dependió del empuje de China. Con su espectacular demanda de cemento, carbón, acero, aluminio, níquel, petróleo y soja fue una verdadera "locomotora" que arrastraba a la economía mundial. ¿Qué había ocurrido en este país, al que la "revolución permanente" de Mao había conducido a costosas encrucijadas?

En 1978 el Comité Central del Partido Comunista Chino había aprobado las reformas propuestas por Deng Xiaoping: el apodado "Pequeño Timonel" introdujo medidas encaminadas a desmantelar la ingeniería social de la era de Mao, el "Gran Timonel". Dos años antes, la muerte de Mao había dado paso a un breve período de incertidumbre en cuanto a la sucesión del poder. Por un lado estaba la llamada Banda de los Cuatro, encabezada por la viuda de Mao. Sus integrantes, comprometidos con la Revolución cultural, se presentaban como continuadores de la línea maoísta. La Banda de los Viejos, liderada por Deng Xiaoping, una de las víctimas de la Revolución cultural, se interesaba por las experiencias económicas de Corea del Sur y Taiwán, donde las reglas del mercado asociadas a la intervención estatal habían derivado en un notable crecimiento económico. Este grupo acabó tomando el control del partido.

A fines de 1978 el Comité Central aprobó el programa de las Cuatro Modernizaciones –agricultura, industria, defensa e investigación científica–, propuesto por Deng Xiaoping, y dos años después Deng designó a dos de sus hombres, Hu Yaobang y Zhao Ziyang –mucho más comprometidos con las reformas que él mismo–, como secretario general del partido y primer ministro, respectivamente. El nuevo rumbo incluía la gradual apertura de la economía china al exterior, la disminución de las regulaciones del estado, la creación de un mercado laboral y de capitales, y la fijación de precios a través del mercado, empezando por el sector agrícola. Este giro redujo notablemente la dependencia de la población respecto del estado para su subsistencia. En 1980 China ingresó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

En un primer momento, el reemplazo de las comunas agrarias por un sistema de "responsabilidad familiar" que permitía la comercialización privada de los excedentes no vendidos al estado derivó en el aumento de la productividad y posibilitó el enriquecimiento de los campesinos en un medio cada vez más desigual. Pero las cosas cambiaron desde mediados de los años ochenta. El mundo agrario quedó marginado del proceso de desarrollo cuando los incentivos, la infraestructura y la inversión extranjera se concentraron en las zonas costeras. Al mismo tiempo, el gobierno decidió subsidiar los consumos urbanos mediante la rebaja de los precios reales de los alimentos. En la década de 1990, la población campesina excedía la superficie de tierra disponible y la modernización impulsada por los comunistas había subordinado el mundo rural al crecimiento industrial.

En el plano industrial se otorgó mayor autonomía a las empresas estatales y se establecieron zonas económicas especiales: espacios donde se autorizaba el ingreso de empresas extranjeras que producían en condiciones fiscales privilegiadas disponiendo de trabajadores con ínfimos salarios. La radicación de capitales foráneos en estos territorios pretendía ingresar nuevas tecnologías, capacitar mano de obra y avanzar hacia la producción de bienes exportables. En 1980 se abrieron cuatro zonas económicas especiales, todavía bajo observación central, y una década y media después llegaban casi a diez mil.

Las empresas estatales fueron incorporando los criterios del mercado, entre ellos, la competitividad como principio orientador de las decisiones de sus directivos, desplazando las normas de la burocracia planificadora. El crecimiento económico basado en el patrón de la competitividad tuvo costos sociales diferentes de los del plan estatal: entre otros, el cierre masivo de fábricas y el consiguiente desempleo. El progresivo desmantelamiento de la regulación pública de los precios fue acompañado por el encarecimiento de los bienes de consumo.

La reforma económica se combinó con un aumento notable de la movilidad social, ocupacional y residencial, y también con el surgimiento de una nueva elite económica, el afianzamiento de una pequeña clase media urbana y una mejora palpable en el nivel de vida de la cuarta parte de la población china. Asimismo, dio lugar a la profundización de las desigualdades, ya que la lógica del mercado agrandó la brecha social entre el mundo urbano y el rural y entre las provincias costeras y las del interior. En 2005 el promedio de ingresos del 10% del segmento de la población más rica era ocho veces superior al promedio de ingresos del 10% con el nivel de renta más bajo. El estado se ha desentendido de sus antiguos compromisos, empujando a las personas hacia el emprendimiento privado, el autoempleo o la migración interna más o menos ilegal.

El movimiento migratorio campo-ciudad produjo un crecimiento acelerado y a gran escala de las ciudades, con grandes contingentes de población flotante. Si el campo no se ha vuelto ingobernable es, en gran medida, por las remesas de dinero que los hijos y hermanos residentes en las ciudades de la costa envían a sus familias. Sin embargo, el principio de que todo habitante está obligado a residir en su lugar de nacimiento (hukou) se ha mantenido esencialmente inalterado, aunque haya incorporado la figura del residente temporal. La mayoría de los trabajadores de la construcción y gran parte de los de la industria son jóvenes campesinos que gozan de permisos

temporales o bien residentes ilegales a quienes los ciudadanos consideran “gente de afuera”. No hay cifras fiables y concretas sobre este segmento de migración ilegal, pero las estimaciones calculan que son de entre treinta y cincuenta millones de personas. En la última década, el rechazo a la invasión del “bárbaro rural” ha crecido en las grandes ciudades. La “gente de afuera” se asocia con la prostitución, la enfermedad y la delincuencia: es “el otro”, que exorciza los temores e incertidumbres generados por los drásticos cambios sociales.

A partir de la reforma, las ideas y símbolos distintivos del maoísmo quedaron relegados a meras ceremonias rituales. Si bajo Mao la legitimación de las decisiones del partido remitía al compromiso ideológico con la igualdad social a través de la lucha de clases, ahora los comunistas asignan una orientación pragmática a sus acciones. Para demostrar que son capaces de mejorar las condiciones de vida de la gente, decidieron acelerar el crecimiento económico, aceptando la desigualdad social como un costo ineludible para sacar al país de su retraso. El nuevo rumbo se ha perpetuado en el tiempo, en gran medida debido al innegable éxito económico de vastos sectores beneficiados que conviven con innumerables perdedores.

La reforma china tuvo su gran crisis en 1989. Cuando una moderada liberalización en el plano cultural posibilitó que las voces disidentes se hicieran escuchar en el espacio público, especialmente las de los jóvenes y los intelectuales, la represión instrumentada para silenciarlos desembocó en la masacre de Tiananmen. Tras la muerte del ex secretario del partido, un dirigente abierto a los planteos liberalizadores del campo intelectual, los universitarios salieron a las calles con pancartas y banderas rojas y entonando marchas, entre ellas la Internacional, y finalmente ocuparon la plaza de Tiananmen.

No era la primera vez que los estudiantes asumían un papel central en la historia del país. Habían gestado el Movimiento del 4 de mayo de 1919 cuando, indignados por el trato que se le había dado a China en la conferencia de Versalles, organizaron revueltas y manifestaciones en Pekín, que luego se propagaron a otras ciudades.

A fines de mayo de 1989 el gobierno proclamó la ley marcial en ocho distritos de Pekín, pero los jóvenes siguieron controlando la plaza, donde colocaron la estatua de la diosa de la democracia enfrentando el retrato de Mao. En la madrugada del 4 de junio, los tanques y la infantería ingresaron a Tiananmen y arrasaron a los manifestantes.

La dirigencia comunista confirmó sangrientamente que la apertura económica seguiría afirmándose bajo su férreo control político y cultural. Deng encontró en Jiang Zemin al nuevo dirigente partidario que deslindaría la liberalización económica de la apertura política hasta principios del siglo XXI.



La plaza de Tiananmen ocupada por los estudiantes en mayo de 1989.

La economía de mercado y la apertura al exterior han recortado el control exclusivo del partido gobernante sobre la esfera pública. La liberalización económica posibilitó la aparición de nuevos canales de información y el debate de ideas en forma más abierta. La modernización requirió una mayor profesionalización de la burocracia, por lo que se priorizó la calificación frente a las razones ideológicas para los nombramientos y promociones. Además, se favoreció el recambio de las elites mediante la supresión del rango vitalicio asociado a los altos cargos, el establecimiento de una edad oficial de retiro y el reconocimiento de límites temporales al ejercicio de cargos directivos. No obstante, no debe confundirse el proceso de

liberalización con uno de democratización. Dentro de esta línea continuista, los comunistas mantienen el principio organizativo tradicional de los partidos leninistas: un centralismo democrático que no deja espacio a las minorías. Pero los posmaoístas quieren evitar la restauración de un jefe máximo: desde Mao a Jiang, la autoridad de los principales dirigentes deriva cada vez más de su posición institucional y cada vez menos de sus habilidades personales. El precedente que sentó Deng Xiaoping con su alejamiento voluntario de los cargos dirigentes fue institucionalizado cuando el XIV Congreso del Partido Comunista limitó a dos mandatos el ejercicio de poderes desde los más altos puestos del partido y el estado.

Una de las preguntas más reiteradas sobre el actual régimen chino remite a esa extraña coexistencia, vista desde Occidente, de una economía cada vez más abierta –que supone y alienta una creciente heterogeneidad social– junto a un escenario político y cultural supervisado por un partido único que detenta el control de los organismos estatales. ¿Es factible que esta situación se prolongue a largo plazo? ¿O los cambios económicos y sociales necesariamente traerán aparejado un cierto grado de apertura política que afectará el poder de los comunistas? Cabe destacar que su legitimidad deriva en gran medida de ideas y experiencias de larga data, que apuntalan el derecho automático a gobernar de la clase educada y reconocen la autoridad de los gobernantes según los resultados de sus decisiones: la prosperidad y el orden los legitiman; la pobreza y el desorden habilitan que sean derrocados.



Las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos, Beijing 2008.

Luces y sombras de la integración asiática

El avance del capitalismo global en Asia está asociado al afianzamiento de los espacios regionales, un proceso cargado de incertidumbres y desafíos debido a las rivalidades interestatales, a los cambios en el papel desempeñado por los Estados Unidos en la región y a un pasado de guerras que, a diferencia de lo ocurrido en el continente europeo, no obligó a rendir cuentas a sus responsables.

A los países fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en 1967 –Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia– se sumaron Brunéi (1983), Vietnam (1995), Laos y Myanmar (1997) y Camboya (1999). Timor Oriental, independizado a principios del siglo XXI, es un posible miembro futuro.

La ampliación de este espacio y la reformulación de sus objetivos en los años noventa se conjugaron con la crisis económica y la creciente fuerza arrolladora de China.

Cuando la ASEAN se disponía a celebrar su trigésimo aniversario, el derrumbe económico tuvo un fuerte impacto social y político. Los gobiernos del Sudeste asiático, que habían pretendido legitimar sus regímenes autoritarios con el fuerte crecimiento económico de las dos

últimas décadas, se debilitaron profundamente. En Tailandia los militares fueron obligados a iniciar un proceso de reforma constitucional a fines de 1997; en Malasia el movimiento de la Reformasi condicionó la actuación del ministro Mahathir, y la prolongada dictadura del general Suharto en Indonesia cayó arrastrada por las movilizaciones masivas contra la corrupción y el autoritarismo.

La crisis económica y financiera puso de manifiesto la dependencia del Sudeste asiático respecto de las grandes potencias. Los miembros de la ASEAN consideraron entonces que una relación formal con las consolidadas economías de Japón y Corea del Sur y con el dinámico mercado emergente chino aseguraría su crecimiento y los fortalecería frente a una posible crisis futura. Los líderes de China, Japón y Corea del Sur coincidieron con la propuesta, teniendo en cuenta que la integración reforzaría la competitividad y evitaría el aislamiento de Asia frente a los bloques regionales en ciernes: el de la ampliada Unión Europea y el proyecto de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas impulsado por los Estados Unidos.

Así surgió la ASEAN+3, cuyos objetivos son reforzar la capacidad negociadora de las naciones asiáticas respecto de los Estados Unidos y la Unión Europea, minimizar el papel del FMI, y mejorar su competitividad para atraer el comercio y las inversiones de los países occidentales sin someterse a las fórmulas del neoliberalismo. La formación de este bloque regional no cuestiona la globalización sino que es más bien una forma de incorporarse, en mejores condiciones y con mayores recursos, al nuevo orden capitalista. La mayor parte de las naciones de la región no puede prescindir del comercio, las inversiones y la tecnología de Occidente. A pesar de esta interdependencia económica, se apunta a la construcción de una comunidad asiática que condicione el protagonismo de los Estados Unidos. Los actores locales comienzan a crear foros de diálogo y cooperación en los que Washington no está presente.

China parece ser el país con mejores posibilidades para asumir un papel dominante en la región. Desde 2004 ha superado a los Estados Unidos como primer socio comercial de las otras tres economías mayores de la zona: Japón, Corea del Sur y Taiwán. Después de mucho tiempo de haber actuado como intermediaria entre el capitalismo occidental y las economías locales, la diáspora china desempeña ahora un papel indispensable a favor del capitalismo chino, profundizando sus compromisos con el Sudeste asiático. Pero dado que China aún carece de la fuerza económica y la capacidad militar necesarias para ejercer una verdadera influencia global, deberá consolidar sus relaciones con los otros estados asiáticos –sobre todo con Japón– para alcanzar un equilibrio estratégico con los Estados Unidos.

Hasta la renovación Meiji de 1868, era considerada la mayor potencia continental, pero el giro modernizador impuesto por la dirigencia japonesa hizo que Japón ocupara la posición dominante en Asia. Durante medio siglo, después de la guerra chino-japonesa de 1895, la política exterior de Japón se orientó a impedir el ascenso de una potencia china independiente. El deseo de equipararse con las grandes metrópolis europeas indujo a Tokio a adoptar una política agresiva hacia Corea, Rusia y la propia China, antes de lanzarse a la confrontación directa con los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los resultados fueron catastróficos para sus vecinos y para el propio pueblo japonés. Sin embargo, al concluir el conflicto mundial, Japón mantuvo su predominio. Su inserción en las estructuras de seguridad occidentales y su espectacular “milagro” económico, combinados con la azarosa trayectoria seguida por China bajo Mao, contribuyeron a conseguir pacíficamente lo que el Japón militarista no había podido obtener con las armas. Esta situación duró casi cuarenta años, pero desde fines de la década de 1980 Japón entró en un período de estancamiento y China comenzó a despegar gracias a las reformas internas y la inversión extranjera. Pese a la reciente y todavía incierta recuperación nipona, Tokio está obligado a convivir con un poderoso vecino al cual se encuentra ligado por importantes lazos económicos.

Un factor clave en los recelos que provoca Japón entre sus vecinos, especialmente en China, proviene de la negativa japonesa a reconocer sus crímenes de guerra: gesto que han agravado las recurrentes visitas

de dirigentes japoneses, entre ellos los dos últimos primeros ministros, al templo sintoísta de Yasukuni, donde yacen los restos de reconocidos criminales de guerra. Yasukuni aparece como la expresión más visible de un estado escasamente reformado, y su condición de símbolo amenazante deriva de su inscripción en el marco de una cultura política que todavía no tiene mecanismos institucionales que impongan la rendición de cuentas.

Hasta el momento, Japón ha optado por reforzar sus vínculos de seguridad con los Estados Unidos. La principal iniciativa en este sentido ha sido la firma, en mayo de 2006, de un acuerdo que establece la creación de un centro de mando militar integrado, con sede al oeste de Tokio. Después del 11 de septiembre, el Partido Democrático Liberal envió tropas a Irak a pesar de que la mayoría de los japoneses estaba en contra. En esta misma tendencia, en febrero de 2005 Japón y los Estados Unidos afirmaron que la seguridad de Taiwán concernía a ambas naciones, lo que provocó una airada respuesta de Pekín.

Corea del Sur también está definiendo su posición en el nuevo escenario mundial, tendiente a la conciliación con Corea del Norte y al diálogo con Pekín. Sin embargo, como teme quedar subordinada a esta potencia, mantiene su relación con los Estados Unidos –país al que la unen importantes intereses económicos– y busca estrechar vínculos con la India, el otro país asiático con aspiraciones de asumir un papel protagónico en el rumbo del bloque.

Si bien los Estados Unidos siguen siendo una potencia clave en la región, han dejado de ser el socio indispensable que fueron para Japón y los países del Sudeste asiático durante la Guerra Fría. Los logros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) –integrado por los seis países de la ASEAN más Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, China, Canadá, México, Papúa-Nueva Guinea y Chile– han sido muy modestos. El APEC aparece concentrado básicamente en la apertura, tan rápida como sea posible, de los mercados asiáticos.

El colapso del bloque soviético

La economía central planificada –con su rígida subordinación de los trabajadores y su devastación de los recursos naturales– posibilitó la industrialización del bloque soviético pero no logró avanzar al mismo ritmo que las potencias capitalistas. Independientemente del alto costo de la carrera armamentista con los Estados Unidos, el gran escollo de la economía planificada residió en que su propia dinámica generaba barreras casi insalvables para el desarrollo científico y tecnológico y para una mayor productividad. En virtud de estos obstáculos, las condiciones de vida de la población –que habían dado un salto casi increíble desde aquella sociedad agraria con arados de madera y analfabeta– se estancaron en niveles de consumo muy mediocres. El desplazamiento de Kruschev y la invasión a Checoslovaquia en 1968 congelaron las iniciativas reformistas dando paso a la consolidación de una gerontocracia inmovilista en el plano interno, pero embarcada en riesgosas aventuras en el exterior, difíciles de explicar sólo a partir de su rivalidad con los Estados Unidos.

El hundimiento del comunismo como alternativa al capitalismo no fue el resultado inevitable de un proceso de decadencia económica. De hecho, tuvo una peculiaridad paradójica: tanto en la Unión Soviética como en China el principio del fin estuvo dado por una oleada de reformas internas radicales e inesperadas. En la Unión Soviética, los cambios económicos impulsados desde 1985 terminaron por abarcar las dimensiones política, cultural e ideológica, y, en un breve período, el Partido Comunista perdió la conducción del estado, y ese complejo entramado de naciones que era la URSS se fracturó en numerosos países nuevos. En China, en cambio, el giro de los comunistas a fines de los años setenta trastocó de raíz la política económica del maoísmo, pero manteniendo el respetuoso reconocimiento del Gran Timonel y sin que el Partido Comunista perdiera el control del poder a pesar de las profundas transformaciones sociales asociadas al avance del mercado.

El principio del fin: la perestroika

En marzo de 1970, tres prestigiosos intelectuales soviéticos –los físicos Andrei Sajarov y Valentín Turchin y el historiador Roy Medvedev– dirigieron una carta-programa a Brézhnev reclamando la "democratización de toda la vida social" y advirtiendo que, si la dirigencia no emprendía este camino, el país se transformaría en una potencia provincial de segundo orden y simultáneamente se agravarían todos los problemas nacionales, "ya que la aspiración a la democratización tiene inevitablemente un carácter nacionalista".

A partir de 1985, el secretario general del Partido Comunista, Mijaíl Gorbachov –que coincidía en parte con el anterior diagnóstico y pensaba que el partido reformado podría liderar el cambio–, puso en marcha una modesta reforma económica. Pero la explosiva combinación de la relativa democratización, el ineficaz desempeño de la economía y las divisiones facciosas o programáticas entre los principales dirigentes comunistas condujeron a la bancarrota del llamado socialismo real.

Cuando Gorbachov ocupó la secretaría general del partido en marzo de 1985, el Politburó que lo eligió estaba compuesto en más de un 80% por hombres del círculo de Brézhnev y la mitad de los altos dirigentes había iniciado su carrera con Stalin. El primer paso del nuevo secretario fue renovar el personal de máximo nivel. Al año siguiente, el 60% de los miembros del Politburó y del secretariado del Comité Central había sido nombrado por Gorbachov.

Las medidas impulsadas entre 1985 y 1987 y las campañas contra el alcoholismo y la corrupción apuntaron a modificar las conductas sociales sin cuestionar las bases de la economía central planificada ni las del orden jurídico y político vigente. El discurso del equipo reformista se centró en la necesidad de modificar las actitudes negativas para dar un nuevo empuje a la vida social e incrementar la productividad industrial en el campo económico. Pero casi todo siguió igual.

A partir de 1987 se encaró una reestructuración económica (la perestroika) que consistía en preservar la economía planificada aceptando la incorporación de elementos capitalistas en dosis menores y controladas. De acuerdo con este sistema, determinadas empresas podrían elaborar sus propios planes según los pedidos estatales y de otras empresas y la demanda del consumidor. Estas unidades productivas comprarían sus insumos en los departamentos de comercio mayorista administrados por el estado y podrían asociarse con empresas extranjeras. Con la descentralización, las empresas que se independizaban debían responsabilizarse por sus decisiones y asumir la posibilidad de que sus fracasos las condujeran a la quiebra. El afán principal de la perestroika era ganar eficiencia y superar la brecha tecnológica que separaba al bloque soviético de los países capitalistas. Las nuevas atribuciones de las empresas incluyeron cambios en la situación de los trabajadores: la búsqueda de mayor productividad tuvo como correlato la diferenciación de los salarios según el desempeño de los trabajadores y las ganancias obtenidas por la empresa, erosionando la inamovilidad del puesto de trabajo y el salario garantizado, y haciendo que la posición de los trabajadores dependiese cada vez más de la suerte de la unidad productiva.

Las prácticas del mercado en los márgenes del plan exacerbaron los elementos más negativos de cada uno y profundizaron la crisis social y económica. La puesta en tela de juicio de la eficiencia de la planificación, unida al recorte de las atribuciones de los organismos centrales y el desprestigio de su personal, dio lugar a la indisciplina laboral, el descenso de la producción, la escasez de bienes de consumo y el incremento de los precios. Frente al resquebrajamiento de los controles, las empresas y las autoridades de las distintas regiones se apoyaron en las redes informales de la economía en negro –fortalecidas durante el largo y corrupto gobierno de Brézhnev– para abastecerse de los productos que necesitaban. Así, para la mayor parte de la población, la perestroika quedó asociada al incremento de los precios, las largas colas para conseguir alimentos de primera necesidad y la inseguridad laboral.

Para entender la encrucijada de la perestroika, es necesario analizar

el escenario político gestado al calor de la glasnost (la apertura y transparencia), el segundo principio del cambio encabezado por Gorbachov. Lo más significativo en este terreno fue que el enfrentamiento entre los reformistas encabezados por Gorbachov y los conservadores reacios al nuevo rumbo se complicó tras la división del grupo impulsor de la perestroika. A partir de 1989, se hizo evidente el avance hacia el poder del carismático Boris Yeltsin, quien cuestionaba el estilo moderado del gobierno de Gorbachov.

A estos factores se sumaron las reivindicaciones de las minorías nacionales, una dimensión muy compleja debido a la heterogénea composición del campo nacionalista y el entrecruzamiento de diferentes demandas. La bandera del nacionalismo fue sostenida tanto por los grupos oprimidos como por los jefes políticos regionales, que, amenazados por la depuración de Gorbachov al inicio de su gestión, decidieron encabezar las resistencias contra el centro. También muchos de los jefes políticos otrora leales a Moscú pasaron a ser dirigentes nacionales de los países en vías de constitución cuando las reivindicaciones nacionalistas ganaron creciente peso en el marco de la glasnost.

Pero los reclamos no sólo fueron dirigidos desde las poblaciones locales hacia Moscú: los enfrentamientos entre comunidades que compartían un mismo territorio ocuparon el centro del escenario desde un primer momento. Estos conflictos fueron especialmente intensos en la zona del Cáucaso. En los países bálticos fue donde las reivindicaciones autonomistas se plantearon más clara y decididamente como un conflicto con el poder del Kremlin.

Glasnost y democratización

La resistencia de la nomenklatura a las reformas indujo a Gorbachov y su círculo a dirigirse directamente a la sociedad para transformar la osificada estructura soviética. Según los reformistas, la mayor eficiencia económica requeriría el compromiso activo de los trabajadores para incrementar la productividad y la participación del conjunto de la población para erradicar las prácticas corruptas. Con el propósito de alcanzar una apreciación más realista de las cosas, decidieron animar a los ciudadanos a que hablasen y se involucraran personalmente en la reforma. Se decidió avanzar hacia la glasnost. En cierta medida, el momento decisivo de esta apertura fue un resultado indirecto del accidente en la central nuclear de Chernobil, ocurrido en 1986, que aceleró la liberalización de los medios de comunicación y alentó la confrontación política.

Entre los objetivos de la glasnost se incluyó el fortalecimiento de los organismos gubernamentales desvinculándolos de su sujeción al partido. En 1989 Gorbachov llamó a elecciones para crear el Congreso de los Diputados del Pueblo. La principal función del nuevo organismo era designar a los miembros del Sóviet Supremo, que dejaría de ser un organismo honorífico para actuar como un parlamento en funciones durante todo el año. La reforma pretendía deslindar las competencias del partido de las del gobierno, avanzar hacia la división de poderes e imponer un marco jurídico a los poderes del estado. Todo esto sin abrir las puertas al multipartidismo: el PCUS mantendría su condición de único partido reconocido y además, para que los cambios fuesen aprobados por sus miembros, Gorbachov asoció las reformas a una serie de recaudos que limitaban los alcances de la consulta electoral. Sólo dos terceras partes de los miembros del Congreso serían elegidas por sufragio universal, el resto sería designado por el Partido Comunista y las organizaciones públicas que dependían de él. Más allá de estas restricciones, los comicios de marzo de 1989 propiciaron el resurgimiento de la vida política a través de la competencia entre distintos candidatos en algunos distritos, el derecho a la libertad de palabra y la posibilidad de acceder a los medios de información.

Con la apertura de las sesiones del Congreso y sus debates televisados, cobró consistencia el sector dispuesto a radicalizar los planteos de Gorbachov. El Grupo Interregional de Diputados –entre cuyos miembros se encontraban Yeltsin, el dirigente de Moscú Gavril

Popov, y el premio Nobel de la Paz y veterano disidente Andréi Sájarov– demandó la descentralización económica y el pluralismo político. La división inicial entre conservadores y reformistas dio lugar a un escenario tripartito en el que Gorbachov, ubicado en el centro, fue quedando cada vez más aislado.

La caída del Muro

El nuevo giro de Moscú tuvo una repercusión inmediata y desestabilizadora sobre los estados satélites de Europa del Este. La reforma puesta en marcha incluía la desactivación de la Guerra Fría y la no injerencia del Kremlin en la suerte que pudieran correr las democracias populares europeas. Aunque en un principio Gorbachov creyó que los gobiernos comunistas europeos aplicarían su propia perestroika y que el Pacto de Varsovia se mantendría en pie, la ilusión se desvaneció poco después. Cuando las presiones sociales, más o menos consistentes según los países, se combinaron con la división de las cúpulas gobernantes, y se hizo evidente que Moscú no intervendría, los gobiernos de Europa del Este se desplomaron y la mayoría de las dirigencias comunistas viraron hacia la socialdemocracia. En el caso de Alemania, el estado comunista desapareció y su territorio fue anexado por la República Federal Alemana.

La transición del socialismo real al capitalismo y la democracia sorprendió a todos: nadie había pensado jamás en esa posibilidad, y mucho menos en cómo llevar a cabo la transición del comunismo al capitalismo.

Si el giro de Moscú fue clave para estas “revoluciones” sin teoría previa, el otro factor decisivo para la caída de los gobiernos soviéticos en 1989 fue la presencia de fuerzas sociales y políticas dispuestas a abandonar el bloque soviético. En relación con este factor, aun a costa de simplificar un escenario más complejo, pueden deslindarse dos ámbitos: el de los países de Europa Centrooriental y el de los Balcanes. En el primer caso, Polonia, Checoslovaquia y Hungría compartían un pasado de repudio activo contra el orden soviético: los hechos de 1956 en Varsovia y Budapest, y de 1968 en Praga. En 1989 ya existían fuerzas disidentes con cierta experiencia política, y en la dirigencia comunista había grupos dispuestos a abrir el juego político e interesados en utilizar sus recursos y relaciones para aprovechar las posibilidades de hacer negocios que ofrecía la economía de mercado. En estos tres países, la caída del comunismo fue negociada, en última instancia.

A fines de los años ochenta Polonia contaba con una sólida oposición organizada en torno al sindicato Solidaridad, que mantenía fuertes lazos con la iglesia católica y recibía el apoyo de los intelectuales comunistas que habían roto con el partido a mediados de los años sesenta. A lo largo de toda la década este bloque había jaqueado al gobierno, que, encabezado por un general comunista, pretendía frenar la protesta del movimiento obrero y al mismo tiempo tranquilizar a Moscú para impedir que los tanques soviéticos entraran en Varsovia. A principios de 1989 se iniciaron las negociaciones de la Mesa Redonda, que culminaron con el reconocimiento legal del sindicato y la celebración de elecciones semicompetitivas para un nuevo Parlamento.

En Hungría, los sectores reformistas del Partido Comunista ya habían puesto en marcha algunos cambios significativos. Después de la dura represión de octubre de 1956, el gobierno húngaro dio paso a una economía mixta y concedió un mayor grado de libertad al mundo académico e intelectual. En la primavera de 1989 el equipo gobernante reconoció el multipartidismo, y el Partido Socialista Obrero Húngaro se convirtió en el Partido Socialista Húngaro. A treinta y tres años del ingreso de los tanques soviéticos, la República Popular Húngara se convirtió en la República Húngara. Esta revolución fue la única en la que el pasaje del régimen comunista al sistema multipartidista se hizo desde adentro.

El giro en Hungría tuvo una inmediata repercusión sobre Alemania.

Cuando las autoridades de Budapest abrieron la frontera con Austria, en septiembre de 1989, miles de habitantes de la República Democrática atravesaron esa brecha en la “cortina de hierro” rumbo a Occidente. Todas las declaraciones de la dirigencia del Kremlin dejaron en claro que no defenderían el Muro. El 9 de noviembre los comunistas alemanes autorizaron los viajes al exterior y, sin previo aviso, abrieron el paso. A continuación se aprobó el multipartidismo y parte de la dirigencia comunista organizó el nuevo Partido Socialista Democrático y convocó a una mesa redonda al Nuevo Foro, el grupo opositor más visible. En este caso, la caída del comunismo significó el fin del estado alemán del este.

El derrumbe de la República Democrática de Alemania decidió al canciller alemán occidental Helmut Kohl a embarcarse en una reunificación lo más rápida posible, en parte para detener el flujo demográfico hacia Occidente. Los alemanes orientales favorables a la unificación fueron la primera minoría (48%) en las elecciones de marzo de 1990. La decisión de unificar las dos Alemanias necesitaba contar con el visto bueno de los cuatro países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Las conversaciones llamadas 4 + 2 culminaron, en septiembre de 1990, con un documento firmado en Moscú que reconoció como fronteras de la futura Alemania unificada las de los estados alemanes existentes y puso fin a la división de Berlín. La reunificación fue un proceso complejo y cargado de desafíos, tanto por los fuertes contrastes económicos y sociales entre las dos Alemanias como por las diferentes memorias, olvidos y expectativas con que ambas sociedades ingresaban al estado común.

La caída del Muro de Berlín precipitó los acontecimientos en Checoslovaquia. En contraste con los casos anteriores, “la revolución de terciopelo” en Praga fue repentina y tomó desprevenida a la mayor parte de la nomenklatura. En gran medida, el impacto de lo que sucedía en los países vecinos llevó a la gente a ocupar las calles sin exigencias concretas, sólo para romper la pasividad y el silencio. A fines de noviembre, pequeños grupos opositores y algunos intelectuales –entre quienes se destacó Václav Havel, varias veces preso y promotor de Carta 77– formaron el Foro Cívico, una red informal que, a falta de partidos políticos, canalizó el proceso contestatario. El gobierno comunista, que en principio había aceptado la formación de un gabinete de transición con los disidentes, cayó en pocas semanas. El dramaturgo Havel ocupó la presidencia a fines de diciembre de 1989.

Cuando en 1990 se iniciaron los procesos electorales, las coaliciones que otrora habían enfrentado a los gobiernos comunistas –Solidaridad en Polonia y el Foro Cívico en Checoslovaquia– dieron paso a los nuevos partidos de centroderecha. Simultáneamente, se formaron partidos socialdemócratas integrados, aunque no de manera exclusiva, por ex miembros de los partidos comunistas. El Partido Socialdemócrata Checo, a diferencia de sus pares afines en Polonia y Hungría, no fue resultado de la reconversión del Partido Comunista, que siguió en pie. Los dirigentes socialdemócratas reivindicaron una tradición propia, la del Partido Socialista que existiera hasta la instauración del régimen comunista en 1948.

En los tres países, el cargo de primer ministro rotó entre la nueva socialdemocracia y el principal partido de centroderecha; casi siempre, en su condición de primeras minorías, debieron formar gobiernos de coalición dado que la gran fragmentación de los partidos hacía muy difícil obtener quórum propio.

Los políticos, los medios de comunicación y el grueso de los intelectuales occidentales aprobaron la reconversión de los antiguos miembros de la nomenklatura y del aparato burocrático de la economía central planificada en dinámicos empresarios y dirigentes de fuerzas políticas capaces de atraer a buena parte de los nuevos ciudadanos. Sin embargo, el electorado socialdemócrata era paradójico: algunos apoyaban a la socialdemocracia porque creían que frenaba el alcance y la profundización de las reformas en favor del mercado, y otros la respaldaban precisamente por lo contrario. Los inversores de capital no temían a la socialdemocracia porque estaban convencidos de que, bajo su conducción, las reformas de mercado no serían menoscabadas. Todos los líderes de la nueva dirigencia ex

comunista europea –desde Gyula Horn en Hungría hasta Milos Zeman en la República Checa y Aleksander Kwasniewski en Polonia– favorecieron la inclusión de sus países en las estructuras euroatlánticas, políticas (Unión Europea) y de seguridad (OTAN). El retorno de las viejas elites políticas, vía los triunfos de la socialdemocracia en los comicios, no supuso una vuelta al pasado, ya que los socialdemócratas sólo pretendieron moderar el impacto social negativo de las reformas neoliberales sin negar la primacía de los mercados.

La transición hacia la economía de mercado requería la intervención política, y quienes estaban mejor posicionados para concretar esa tarea eran los directivos de las empresas y los gestores estatales de la economía planificada. A través de la "privatización espontánea" y de la inversión de capital extranjero, los antiguos miembros de la nomenklatura llegaron a conformar un importante sector de la burguesía en ascenso.

En un primer momento, ante la emblemática caída del Muro, muchos celebraron "las gloriosas revoluciones de 1989". Sin embargo, el término "revolución" perdió consistencia poco tiempo después frente a ciertos interrogantes claves aún sin respuesta. ¿Quiénes protagonizaron esas revoluciones? ¿A quién o a qué grupos habían beneficiado? ¿Cuáles eran los procedimientos y los resultados de las profundas transformaciones en marcha?

Los estados del sur –Rumania, Yugoslavia, Albania y Bulgaria– llegaron a 1989 sin una experiencia contestataria previa y prácticamente sin actores sociales preparados para la transición. Los tres primeros ya habían cuestionado su subordinación al Kremlin a través de gobiernos que defendían un comunismo nacional. Mientras Bucarest sólo se había distanciado del hermano mayor, Belgrado y Tirana habían roto con Moscú: Tito enfrentándose con Stalin, los albanos aliándose con China contra la desestalinización. Sin embargo, el grado de consistencia de los estados nacionales balcánicos era disímil y todos siguieron trayectorias diferentes a partir de la crisis del bloque soviético.

Albania –cuya sociedad se caracterizaba por la persistencia de la cultura agraria tradicional y las redes de poder familiares o clánicas– era el país más aislado del área soviética europea. Después de la muerte de Mao había roto el vínculo con China, su único aliado desde la desestalinización. En principio, Tirana siguió la senda del continuismo sin poder frenar el deterioro económico y social, que llevó al estado albano al borde del derrumbe, con gran parte de su población lanzándose al mar en condiciones precarias para llegar a Italia.

Bulgaria fue el único país balcánico donde la caída del comunismo resultó tan pacífica como en los países del centro europeo: los comunistas reformistas dieron un "golpe" para apartar a la cúpula del partido gobernante, crearon el Partido Socialista Búlgaro y aprobaron el multipartidismo. Pero Occidente desconfiaba de esta reconversión y pensaba que los socialistas búlgaros se parecían más a los comunistas ortodoxos de Rusia o de la República Checa que a los socialistas de Hungría o de Polonia. En Bulgaria, el europeísmo, el pro atlantismo y el acelerado avance hacia una economía de mercado fueron sostenidos por el campo opositor, la Unión de Fuerzas Democráticas, inicialmente una amalgama de numerosos partidos y diferentes organizaciones.

Las jornadas de 1989 fueron violentas en Bucarest, pero sin giros drásticos tras la caída de la dictadura. En diciembre, el Conducator Nicolae Ceaucescu fue abucheado durante una manifestación que supuestamente iba a cantar sus loas. Inmediatamente estalló una insurrección en la que participaron sectores del Partido Comunista, el ejército y el pueblo. La Securitate, la temida policía secreta del régimen, no pudo controlar la situación y Ceaucescu y su esposa Elena fueron detenidos cuando intentaban huir, juzgados sumariamente y ejecutados el 25 de diciembre. Las jornadas revolucionarias son objeto de debate en relación con el papel asumido por los diferentes actores que, siendo integrantes del régimen, aparecieron encabezando o bien consintiendo el derrocamiento de la pareja gobernante.

El Frente de Salvación Nacional se desintegró y, bajo la jefatura de los ex comunistas, se creó el Partido Demócrata Socialista Rumano. La

transición a la economía de mercado fue mucho más gradual que en los países del centro europeo, ya que el nuevo gobierno no compartía los afanes procomunitarios y proatlantistas de sus homólogos polacos, húngaros o checos. También aquí, como en Bulgaria, a mediados de la década de 1990 la socialdemocracia perdió terreno y la oposición organizada en la Convención Democrática Rumana emprendió el rumbo hacia la integración en las estructuras euroatlánticas.

El desmantelamiento de la economía central planificada requería agentes vinculados con la economía de mercado, una especie casi inexistente en Rumania y Bulgaria. La ausencia de una clase empresarial y el escaso atractivo para los inversores extranjeros constituían severas limitaciones para la reestructuración del sistema económico. En principio, ambos países conformaron una periferia atrasada proveedora de productos agrarios o artículos industriales estandarizados a los mercados occidentales y con un volumen moderado de inversiones extranjeras directas.

La caída del comunismo en la Federación Yugoslava fue la más dramática y acabó con la desintegración del estado.

La República Federal Yugoslava

Estaba integrada por seis repúblicas: Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro, junto con las provincias autónomas de Kosovo y Voivodina, incluidas en la república de Serbia. En todas ellas convivían poblaciones con credos e identidades étnicas diferentes, aunque con distintos grados de heterogeneidad. A partir de mediados de 1991 los distintos gobiernos aprobaron declaraciones de independencia que las desvinculaban de Yugoslavia:

-En junio de 1991 lo hicieron Croacia y Eslovenia.

-En septiembre del mismo año lo hizo Macedonia.

-En marzo de 1992 se aprobó en Bosnia-Herzegovina.

-En abril de 1992, Serbia y Montenegro crearon la Federación de Yugoslavia (no reconocida por la comunidad internacional).

La crisis económica y los fuertes contrastes entre las más prósperas repúblicas del norte (Eslovenia y Croacia) y las más pobres del sur, junto a la división de la Liga Comunista Yugoslava en fracciones con distintos proyectos, se combinaron con la irrupción del nacionalismo en clave étnica y religiosa. Las guerras que asolaron Yugoslavia no derivaron de odios ancestrales entre diferentes grupos que compartían un mismo territorio. En el marco de una crisis económica, ideológica y política, parte de los nuevos dirigentes –el serbio Slobodan Milosevic y el croata Franco Tudjman, entre otros– recurrieron al patriotismo xenófobo para afirmarse en el poder. La separación como estados independientes de Eslovenia primero y de Croacia y Bosnia poco después –reconocidos precipitadamente como tales por las potencias occidentales– desembocó en una espiral de violencia. En el campo de batalla se entrecruzaron diferentes enfrentamientos. Hubo guerras entre los gobiernos de las repúblicas que abandonaban la Federación y el gobierno de Serbia, que intentaba impedir la fragmentación de la que concebía como la nación yugoslava sujeta a su predominio. Hubo feroces luchas civiles entre serbios, croatas y bosnios a raíz de los miedos y las incertidumbres generados por la creación de los nuevos estados y su manipulación por parte de dirigentes políticos y grupos paramilitares que alentaban la apropiación de territorios con propósitos homogeneizadores, o sea a través de la sangrienta “limpieza étnica”. Una vez puesta en marcha la confrontación, muchos se dejaron arrastrar y otros se encolumnaron decididamente en una escalada de odio y venganza. De este modo,

cada vez hubo menos espacio para reconocer en el enemigo de hoy al vecino de ayer. Y esto ocurría tanto entre quienes pertenecían a distintos grupos nacionales o religiosos como en el seno de una misma etnia o confesión. En situaciones extremas, todo aquel que rechaza el nacionalismo xenófobo se convierte en un antipatria para sus pares.

Primero fue el ataque yugoslavo a Eslovenia, que sólo duró unas semanas, hasta que el nuevo estado concretó su separación. Después vino la sangrienta contienda entre Croacia y las milicias serbias, que proclamaron –contando con el apoyo del gobierno de Serbia– la República de Krajina en una zona croata donde eran mayoría. Después de que los croatas y los bosnios votaran la independencia de Bosnia-Herzegovina, la más heterogénea de las repúblicas federadas, los serbios que allí residían se levantaron contra el nuevo estado y decidieron fundar la República Srpska, nuevamente con apoyo del ejército nacional. En paralelo con estas luchas, en enero de 1993 los croatas, apoyados por el gobierno de Croacia, se lanzaron contra los bosnios para crear el miniestado de Herzegovina, donde eran mayoría.



La guerra civil yugoslava provocó un altísimo número de muertes entre la población.

En Bosnia la guerra arrasó con todas las “minorías” que residían en los territorios conquistados por las “mayorías”, aunque sin lugar a dudas los bosnios musulmanes fueron las principales víctimas. Gran parte de los medios de comunicación polarizó a los bandos beligerantes entre el agresor serbio por un lado y todas las demás fuerzas por el otro, una versión que soslayaba los episodios de cooperación entre Serbia y Croacia para el desmembramiento planificado de Bosnia-Herzegovina. Los serbios Radovan Karadzic y Ratko Mladic y el croata Mate Boban, identificados como promotores claves de las más brutales y masivas prácticas de depuración étnica en Bosnia, fueron acusados por el Tribunal Internacional como responsables de crímenes de lesa humanidad.

La limpieza étnica en Bosnia

Juan Goytisolo, escritor español y corresponsal en Bosnia del diario *El País*, denunció la posición de las democracias occidentales frente a la tragedia de la política etnicista y reconoció su impacto en la radicalización del mundo islámico:

“En las semanas precedentes a mi tercera y última visita a Sarajevo durante sus cuarenta meses de asedio, la ofensiva croata en la Krajina, con la consiguiente expulsión o huida de la minoría serbia, había precipitado la respuesta de los ultranacionalistas de Karadzic y Mladic: el asalto y conquista de los últimos enclaves bosnio-musulmanes teóricamente protegidos por la ONU. Se intentaba así poner al día, conforme a las nuevas realidades creadas por la fuerza de las armas, el acuerdo pragmático entre

Milosevic y Tudjman en lo tocante al reparto de Bosnia-Herzegovina a costa del gobierno legítimo de Sarajevo. [...] Como dice la antropóloga belga Christiane Stallaert, 'desde el convencimiento de que el propio pueblo es el que mejor responde a la imagen de Dios sobre la tierra, los responsables de la política etnicista se sienten investidos de una misión mesiánica de alcance universal que los induce a imponer su propio orden étnico al mundo entero'. La retórica esencialista e identitaria lleva consigo, en efecto, el desbordamiento sangriento de la limpieza étnica o ideológica por parte de los supuestos héroes o caudillos: las diferencias étnicas, religiosas o lingüísticas, una vez convertidas en un muro insalvable, transforman al compatriota diferente en un cuerpo extraño. Los españoles rojos no eran españoles rojos, sino rojos a secas; los musulmanes bosnios, deseslavizados de un plumazo, pasaron a formar parte del aborrecido invasor turco de 1389. [...].

No quiero terminar esta evocación del genocidio de la población musulmana de Bosnia sin referirme a sus previsibles consecuencias. Imaginar que la cobardía, complicidad e impotencia de los países occidentales que gestionaron el asedio de Sarajevo y de los demás enclaves supuestamente protegidos no iban a pasarles factura es vivir fuera de la realidad. [...] Conversé con algunos en Split y Sarajevo, y advertí su creciente radicalismo religioso y convicciones yihadistas. Fueron ellos, junto a los combatientes árabes de Chechenia, la punta de lanza de un proyecto estratégico global que fraguaría en Afganistán y culminaría con la creación de Al Qaeda y los monstruosos atentados del 11-S y el 11-M. Como escribí en aquellas fechas al denunciar la pasividad de las democracias occidentales y su indiferencia a cuanto ocurre en zonas ajenas a sus intereses económicos y estratégicos, sus secuelas iban a salpicarnos a todos. Una vez abierta la caja de Pandora, ¿quién alcanzaría a cerrarla?"

Texto publicado en *El País*, 3 de julio de 2005.

Cuando los bombardeos de la OTAN y las negociaciones políticas en Dayton pusieron fin a la bárbara contienda en Bosnia a fines de 1995, Kosovo pasó al primer plano. En el momento en que la Asamblea de Serbia, marzo de 1989, aprobó una drástica reducción de la autonomía de esta república, estallaron violentos disturbios, y en julio de 1990 los diputados albaneses declararon "la independencia de Kosovo dentro de la Federación Yugoslava". Mientras los serbios rechazaron de plano esta posibilidad, algunos líderes kosovares –tanto los de partidos radicales como los coaligados al gobierno moderado– comenzaron a hablar de separación total por todos los medios posibles, e incluso anunciaron una "Gran Albania", que incluiría a los albaneses de Macedonia y Montenegro. A lo largo de la década de 1990 los enfrentamientos armados crecieron en intensidad y nivel de brutalidad. En 1997 el hasta entonces nebuloso Ejército de Liberación de Kosovo se dio a conocer públicamente, llamando a la población a abandonar la resistencia pasiva sostenida por el presidente Ibrahim Rugova y alzarse en armas. Al año siguiente, este grupo anunció la "lucha armada por la unificación con Albania" y las fuerzas serbo-yugoslavas lanzaron una ofensiva militar destinada a "restaurar la seguridad".

Para gran parte de los albano-kosovares, que conforman la mayoría de la población en Kosovo, el predominio de los serbios significaba marginación social, económica y política; ellos no eran eslavos del sur y su memoria histórica era distinta de la de los serbios. Para los serbios en general, no sólo para el grupo que compartía el mismo

territorio con los albanos, Kosovo constituía un símbolo central en la construcción de su identidad nacional. Si bien el factor religioso-cultural tiene un peso destacado en la elección de un camino político, no por ello lo determina; otro componente importante es el entramado de acontecimientos y períodos que, a través de procesos donde los intelectuales desempeñan un papel relevante, los pueblos reconocen como hitos de su conciencia nacional. Y esta conciencia condiciona las acciones que se llevan a cabo en el presente. A mediados de 1989, Milosevic recordaba ante una multitud de serbios que "en este lugar, en el corazón de Serbia, en el campo de Kosovo, hace seis siglos, hace seiscientos años exactos, tuvo lugar una de las mayores batallas de la época (contra el imperio otomano). El Kosovo heroico ha alimentado nuestro orgullo y nuestra creatividad durante seiscientos años, y nos impide olvidar que hace tiempo Serbia era una nación grande, valiente y orgullosa, que permaneció imbatida aun en la derrota".

La conferencia celebrada a principios de 1999 en Rambouillet, cerca de París, fracasó: Serbia, apoyada por Rusia, no aceptó que la seguridad del territorio quedase a cargo de una fuerza militar de la OTAN, ni la guerrilla albano-kosovar estaba dispuesta a postergar la declaración de la independencia. Desde marzo hasta junio de ese año, la OTAN lanzó un intenso bombardeo sobre Serbia, sin autorización expresa de la ONU, que destruyó puentes, fábricas, centrales eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones y golpeó duramente a la población. Según los gobiernos de los principales países occidentales, este era el medio más eficaz para poner fin a los crímenes de Milosevic. No obstante, algunos observadores denunciaron estas acciones, que agredían injustamente al pueblo serbio y violaban las leyes internacionales. Después de la rendición de Serbia, la ONU autorizó el despliegue de una fuerza militar terrestre integrada por la OTAN y Rusia para mantener el orden y la paz en Kosovo. Los albaneses desplazados durante la guerra regresaron a sus hogares y la mayor parte de los serbo-kosovares abandonó la provincia en virtud de las acciones de venganza.

Milosevic fue acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de "haber planificado, instigado, ordenado y efectuado una campaña de terror, violencia y limpieza étnica sistemática, efectuada por las fuerzas yugoslavas en Kosovo". Fue arrestado en 2001 tras ser derrotado en las elecciones presidenciales y murió en prisión cinco años después. Faltaban apenas cincuenta días para que el Tribunal pronunciara su fallo. A principios de 2008, el gobierno provisional de Kosovo declaró unilateralmente su independencia.

El carácter heterogéneo de los procesos de transformación ocurridos a partir de la crisis de los regímenes soviéticos europeos impide caracterizar la transición como un fenómeno único. No obstante, a fines de los años noventa se reconocía una coincidencia: una parte importante de la nomenklatura había ingresado en las nuevas elites, tanto en los países de Europa Central, donde las reformas capitalistas avanzaron más, como en los de Europa Oriental, que tenían una economía más estancada. Mientras en los primeros surgían nuevas clases dominantes asociadas a la configuración de un orden capitalista, en los segundos las elites aparecían asociadas a mafias que pugnaban por consolidar sus privilegiadas posiciones.

Caos económico y fractura de los reformistas en la URSS

En la segunda mitad de 1989, en la URSS los indicadores económicos no dejaban lugar a dudas: la perestroika se encontraba en estado de emergencia. En este contexto ganaron terreno los argumentos que ensalzaban las virtudes del mercado presentándolo como la panacea que permitiría superar el caos económico. Según este enfoque, sólo se requería la voluntad política de liberar los precios y suprimir los controles burocráticos. Gorbachov rechazó este giro y siguió apoyando un rumbo cauteloso, que, en medio de la crisis, tuvo escaso eco en la población. Yeltsin, por su parte, optó por el cambio radical y simultáneamente afianzó su poder en la Federación Rusa, la república

que tenía el 72% del territorio y el 52% de la población total de la URSS. En el plano económico se declaró a favor de la liberación de los precios y la propiedad privada, y en el político hizo campaña para recortar las atribuciones del PCUS e impulsar el multipartidismo.

En marzo de 1990 el Congreso de Diputados del Pueblo aprobó una nueva Constitución cargada de ambigüedades: creó el cargo de presidente para fortalecer a Gorbachov, avanzó hacia el reconocimiento de la propiedad privada y propuso limitar el monopolio del PCUS sin aceptar el pluralismo político. Tras esta medida siguieron las elecciones de los sóviets locales y supremos de las repúblicas, que significaron una dura prueba para los candidatos del partido gobernante.

Aunque los partidos políticos seguían ausentes, estos comicios asumieron un sesgo más democrático debido a la presentación de listas de candidatos con programas y plataformas ideológicas dispares. Y a esto se sumó el hecho de que, a diferencia de las elecciones del Congreso, no hubo escaños reservados para la votación indirecta. En siete repúblicas el poder pasó a manos de fuerzas de distinto signo que compitieron con las listas comunistas. En la Federación Rusa, los candidatos de Rusia Democrática –otrora el Grupo Interregional en el Congreso del Pueblo– ganaron en las grandes ciudades. Yeltsin fue electo diputado por Sverdlovsk, su región natal, con el 84,4% de los votos. A fines de mayo, por escaso margen de votos, alcanzó la presidencia del Sóviet Supremo de Rusia. Su triunfo fue clave debido a su decisión de imponer la soberanía de las autoridades rusas sobre el gobierno de la URSS encabezado por Gorbachov. En junio de 1990 el Sóviet Supremo ruso declaró que las leyes de esta república tenían prioridad sobre las soviéticas.

Los comunistas de la vieja guardia resolvieron frenar el ascenso de Yeltsin reconstituyendo el Partido Comunista de la Federación Rusa, disuelto por Stalin en 1925, e incorporando a sus militantes al PCUS. A partir de esta medida, Rusia pasó a ser la única república soviética sin una organización partidaria propia. En 1990, el Partido Comunista Ruso salió en defensa del unipartidismo y se opuso a la despolitización de las fuerzas armadas impulsada por Yeltsin.

En el 28º Congreso del partido, celebrado a mediados de 1990, Gorbachov quedó entre dos fuegos cruzados: los conservadores lo criticaron con dureza y expulsaron del Comité Central a uno de sus colaboradores, y el grupo encabezado por Yeltsin le pidió que abandonara el partido, y, ante su negativa, se retiró del recinto. Los reformistas radicales dejaron de ser una fracción rival en el seno del partido gobernante para convertirse en una fuerza política opositora, y Yeltsin comenzó a rivalizar abiertamente con Gorbachov por el control del poder. El gobierno de Rusia entró en una guerra de decretos con el gobierno de la URSS, reclamando el control de las reservas bancarias, los diamantes, el oro y otros minerales estratégicos en su territorio. Gorbachov recurrió al veto presidencial para evitar que las maniobras rusas lo convirtieran en jefe de un estado soviético nominal.

En septiembre de 1990 los dos dirigentes acordaron una tregua para consensuar medidas de emergencia frente al caos económico. El “Plan Shatalin de los quinientos días” contemplaba la privatización de las empresas estatales y las granjas colectivas, la liberalización de los precios, la reforma del sistema bancario para la creación de líneas de crédito privado y la conversión del rublo. Como los revolucionarios de principios del siglo XX, volvieron a caer en la utopía de que la voluntad política era condición necesaria y suficiente para salvar la brecha entre los datos del mundo material y las metas propuestas. Los novatos economistas soviéticos que apostaban a la panacea del libre mercado fueron alentados y asesorados por los neoliberales de Occidente, que a fin de cuentas eran economistas expertos pero tan fundamentalistas como sus pares soviéticos.

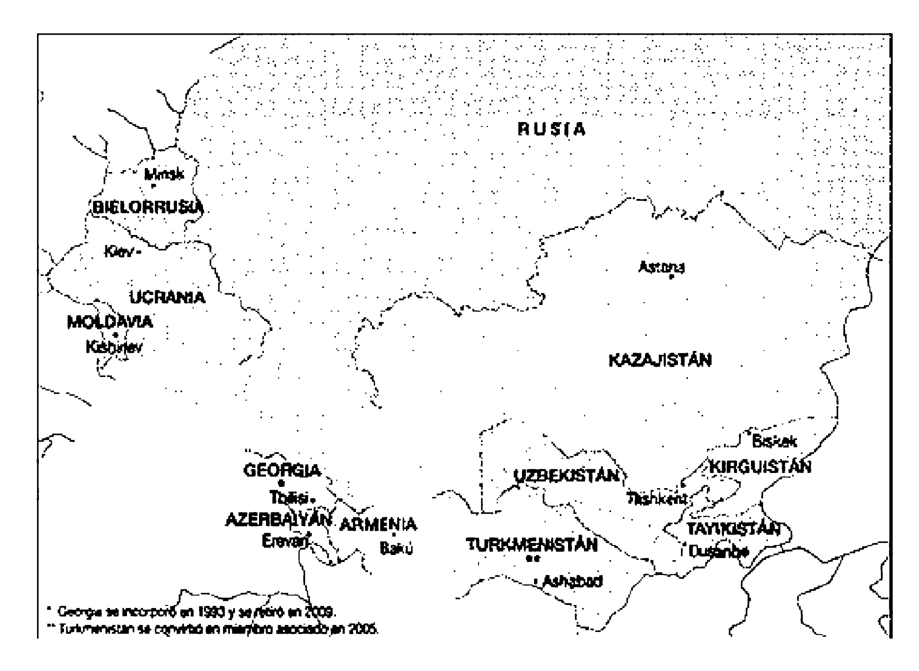
Gorbachov descartó el Plan Shatalin y optó por una alternativa centralista que no fijaba plazos concretos para las reformas y sustituía la liberación de los precios por un incremento aprobado por el gobierno, descartando asimismo la privatización acelerada. Este proyecto fue aprobado por el Sóviet Supremo de la URSS en octubre de

1990, mientras las autoridades rusas ponían en marcha el “Plan de los quinientos días”.

La desintegración de la URSS

La liquidación de la URSS y los enfrentamientos armados en la Federación Rusa, básicamente en la zona del Cáucaso, no fueron consecuencia lineal del “despertar de las nacionalidades” en el marco de la glasnost.

Comunidad de Estados Independientes



Esta comunidad inicialmente estaba integrada por Armenia, Azerbaiyán Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania y Rusia. Georgia se incorporó en 1993 y se retiró en 2009. Turkmenistán se convirtió en miembro asociado en 2005. Al inicio de la perestroika, la URSS estaba integrada por quince repúblicas: las tres eslavas –Ucrania, Bielorrusia y la Federación Rusa–, las tres del Transcáucaso –Azerbaiyán, Armenia, Georgia–, las cinco de Asia Central –Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán– y, por último, las creadas en la Segunda Guerra Mundial: Moldavia y las tres bálticas –Lituania, Letonia y Estonia–. Casi todas englobaban unidades políticas y administrativas menores, parte de las cuales se correspondían con una nacionalidad reconocida como dominante. El caso extremo, en este sentido, era el de la Federación Rusa, un estado multinacional integrado por ochenta y nueve entidades con diferentes estatus: veintiún repúblicas, seis territorios (*krai*), cuarenta y nueve regiones (*oblast*), una región autónoma, diez territorios autónomos (*okrug*) y dos ciudades federales, Moscú y Leningrado.

“Divisiones administrativas de la Federación Rusa”, en *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, nº 59, 2002. Disponible en: www.cidob.org.

Es indudable que los grupos nacionales reprimidos por Stalin en la Segunda Guerra Mundial y subordinados política y culturalmente bajo el régimen soviético encontraron en el nuevo clima de apertura un escenario propicio para expresar sus reclamos. Pero la crisis del centralizado y multinacional estado soviético fue producto de una

compleja combinación de factores, en la que desempeñó un papel decisivo la desintegración del Partido Comunista: organización y agente que, en forma cada vez menos eficiente, articulaba las diferentes piezas de ese rompecabezas que era la URSS.

Las reformas introducidas por Gorbachov dieron lugar a una caótica situación económica, que a su vez fue acompañada por la aparición de grupos y facciones que alentaron y promovieron demandas conflictivas que socavaron las bases del estado multinacional. La decisión de los reformistas a favor de la liberalización política, asociada con el cuestionamiento a los dirigentes de las repúblicas consolidados al calor de la estabilidad de los cuadros sostenida por Brezhnev, hizo posible que los gobernantes comunistas de las repúblicas y las figuras del campo disidente se lanzaran a la arena política esgrimiendo las consignas del multipartidismo y el nacionalismo. Pero el resquebrajamiento del entramado soviético también dio paso a la explosión de conflictos horizontales, es decir, entre los diferentes grupos étnicos y lingüísticos que, mezclados en una misma república, reivindicaban la creación de nuevas unidades políticas fundadas en el principio de las poblaciones homogéneas. Esta aspiración desembocaría luego en feroces combates armados y en el desplazamiento de cientos de miles de familias de sus hogares.

En el marco de la perestroika los movimientos nacionalistas periféricos asumieron diferentes fisonomías, dado que no había un conjunto de pueblos que compartiesen homogéneamente la subordinación a un centro dominante arbitrario. El entramado de la URSS era más complejo. Las repúblicas que la componían tenían diferentes niveles de desarrollo económico, distintos grados de cohesión interna y sus poblaciones habían transitado disímiles trayectorias. Por ejemplo, si los bálticos recordaban que desde Versalles hasta el pacto Ribbentrop-Mólotov habían contado con estados soberanos, los kirguises y los turkmenos carecían de un pasado como nación. Si la URSS se desmoronó fue porque entre las reivindicaciones nacionalistas se destacó la de la Federación Rusa, esgrimida por Yeltsin para derrocar a Gorbachov; porque en el marco del caos económico los gobiernos locales pudieron y tuvieron que encarar la gestión de sus propios recursos; y porque, frente a la decisión de Gorbachov de reformular la relación entre el centro y las repúblicas en un sentido federativo, los comunistas de la vieja guardia resolvieron dar el golpe del 19 de agosto.

En el proceso de desintegración de la URSS coexistieron diferentes trayectorias. Por un lado, la de las repúblicas del ámbito occidental –las tres del Báltico y las dos eslavas, Ucrania y Bielorrusia–, donde la reformulación del vínculo con el centro a través de la guerra de leyes primero y con las declaraciones de independencia poco después no fue atravesada por conflictos internos. No obstante hubo marcados contrastes entre el curso de las repúblicas bálticas y el de las eslavas. Estonia, Lituania y Letonia encabezaron la oleada nacionalista, y las decisiones separatistas de sus dirigentes –incluidas algunas figuras del Partido Comunista como Algirdas Brazauskas, primer secretario del Comité Central lituano– fueron un factor decisivo para el desgaste del gobierno de Gorbachov. El nacionalismo ucraniano, en cambio, surgió un año después que los del Báltico y Armenia, posiblemente porque el parentesco con lo ruso complicaba la afirmación de una nacionalidad diferente. El movimiento nacionalista más fuerte se dio en Ucrania occidental, incorporada recién durante la Segunda Guerra Mundial, y fue un caso complicado, dado que los fuertes sentimientos antisoviéticos convergían con la falta de una tradición estatal autónoma y con un significativo vínculo nacional con el resto de Ucrania. La tragedia de Chernobyl fue un factor determinante de la activación de los disidentes y en 1989 hizo su aparición el Movimiento Popular Ucraniano por la Perestroika (Ruj), fundado por comunistas y nacionalistas que reivindicaban una mayor autonomía económica y política. Bielorrusia aprovechó la descentralización inducida por la perestroika, pero la sociedad no se movilizó en torno a reivindicaciones nacionalistas. En Ucrania y Bielorrusia, los comunistas locales que ganaron las elecciones de marzo de 1990 se sumaron a la ola de cuestionamiento al poder central. A mediados de 1990 el Sóviet Ucraniano proclamó la soberanía de la República:

tendría derecho a poseer su propio ejército y sus leyes prevalecerían sobre las del gobierno central. Los comunistas de Bielorrusia siguieron el mismo camino.

En el Cáucaso, en cambio, las reivindicaciones de mayor autonomía desataron una compleja y sangrienta escalada de conflictos, que entrelazaron los reclamos contra Moscú con las protestas que condujeron a la lucha armada entre comunidades que disputaban el control de un mismo territorio. Un proceso similar se desencadenó en Moldavia.

El Cáucaso y Moldavia

El Cáucaso es un territorio de algo menos de medio millón de kilómetros cuadrados, ocupado por un abigarrado mosaico de pueblos, donde se entrelazaron las guerras civiles desatadas en las repúblicas del Transcáucaso no ruso con los conflictos armados de la zona norte dividida en distintas repúblicas (Chechenia, Daguestán, Osetia del Norte, Ingusetia, Karachayevo-Cherkesia, Adigea y Kabardino-Balkaria) integradas a la Federación Rusa.

En la Transcaucasia, entre las comunidades más numerosas –georgianos, armenios y azerbaiyanos– se distinguen fuertes diferencias en términos económicos y sociales, destacados contrastes culturales, distintos lazos con Moscú, y fronteras variables y artificiales impuestas por esta. Cuando existía la URSS, Tiflis, la capital de Georgia, tenía más población armenia que ninguna otra ciudad, y el desarrollo de la burguesía de esta nacionalidad había cargado al nacionalismo georgiano de un profundo sentimiento antiarmenio. Gran parte de los azerbaiyanos, que adherían al islam, se sentían más próximos a los turcos que a los cristianos, con quienes compartían el territorio. Las rivalidades entre estos "vecinos" tenían mayor visibilidad que el rechazo a un poder central que los rusos ejercían a la distancia.

Esta región fue escenario del primer enfrentamiento nacional en el territorio de la URSS, el que se desencadenó entre armenios y azeríes a partir de las movilizaciones de los primeros en febrero de 1988, para que la provincia autónoma de Alto Karabaj, incluida en la república de Azerbaiyán, fuera parte de Armenia. Durante años, una guerra civil singular, en la que se enfrentaron quienes habían convivido en un mismo territorio pero reivindicaban dos estados diferentes, asoló a esta zona.

En Georgia, después del triunfo electoral de los nacionalistas, se declaró la independencia en abril de 1991 e inmediatamente los osetios y los abjazios, temiendo quedar como minorías en el nuevo estado nacional, exigieron mayor autonomía.

La república de Moldavia fue creada en 1947 vía la fusión de la Besarabia rumana –anexionada en 1940 por la URSS en virtud del pacto Mólotov-Ribbentrop– con las tierras situadas al este del río Dniéster, el llamado Transdniéster. Mientras la población de la antigua Besarabia debate su identidad nacional entre la especificidad moldava y el regreso a Rumania, la que ocupa la estrecha franja del Transdniéster –la zona más industrial y próspera– es predominantemente eslava (rusos y ucranianos) y nunca formó parte de Rumania.

Cuando, al iniciarse la perestroika, el nacionalismo prorrumano se convirtió en la tendencia dominante en detrimento de la diversidad histórica y cultural de sus

habitantes, se puso en marcha un proceso secesionista. Las autoridades rusófonas del Transdniéster proclamaron su independencia luego de que la República Moldava abandonase la URSS días después del golpe del 19 de agosto.
En junio de 1992, los habitantes del Transdniéster recibieron a tiros a los tanques moldavos que querían someterlos. Hubo centenares de muertos, hasta que intervino el ejército ruso. Desde entonces el conflicto está congelado. Mientras Chisinau reclama el retiro de los militares rusos, la República Moldava del Transdniéster espera que Rusia, con la que carece de fronteras, sea la locomotora de su desarrollo.

Por último, en las cinco repúblicas de Asia Central la secesión fue consecuencia directa de la caída del gobierno de Gorbachov. Sin embargo, en el marco de la perestroika hubo estallidos de violencia que afectaron, básicamente, a los grupos caucasianos desplazados a esta región durante el período estalinista.

Las declaraciones de soberanía aprobadas por las dirigencias republicanas entre 1989 y 1990 intensificaron el caos económico y cuestionaron la existencia de la URSS al transferir el control de los recursos básicos de Moscú a los gobiernos republicanos. Las dirigencias republicanas tomaron medidas para apuntalar la identidad nacional, entre ellas la recuperación de las lenguas maternas, que habían quedado postergadas por el ruso. Pero la construcción identitaria nacional asumió un fuerte tono xenófobo, no necesariamente antirruso: en muchos casos, el principal enemigo pasó a ser el "vecino". Este fue el caso, entre otros, de los osetios y los abjazios, que defendieron a punta de pistola y con ayuda rusa su decisión de separarse de la república de Georgia cuando los nacionalistas georgianos rompieron el vínculo con Moscú.

Para frenar la descomposición del estado multinacional, Gorbachov propuso renegociar las relaciones entre el poder central y los republicanos. Convocó a un referéndum en marzo de 1991 para preguntarle a la población si consideraba necesario mantener la URSS. El 80% del electorado asistió a la votación y el 58% de los inscriptos se pronunció a favor. Pero la consulta fue boicoteada por los gobiernos de las tres repúblicas bálticas, Georgia, Armenia y Moldavia. Al mes siguiente, el presidente soviético se reunió en Novo Ogarevo con los gobernantes de las nueve repúblicas que habían llevado a cabo el referéndum para acordar las pautas de un nuevo régimen más federalista. En principio se resolvió detener la "guerra de leyes" y Gorbachov se mostró dispuesto a conceder una fuerte reducción de las competencias del Kremlin en la recaudación impositiva, el uso de los recursos naturales y el control de las fuerzas de seguridad.

Mientras los conservadores del PCUS calificaban como "acta de defunción de la URSS" el documento suscripto en Novo Ogarevo, Yeltsin –presidente de la Federación Rusa desde junio de 1991– ampliaba sus competencias en desmedro de Gorbachov y eliminaba la injerencia del Partido Comunista sobre el aparato administrativo y las empresas. La plana mayor del PCUS decidió recurrir a la fuerza para frenar este proceso.

Mientras Gorbachov pasaba sus vacaciones en Crimea, las cúpulas del poder ejecutivo, el ejército y la KGB –con el respaldo tácito del Politburó y el Sóviet Supremo– declararon el estado de emergencia en todo el territorio de la URSS y crearon un Comité Estatal que asumió plenos poderes "en virtud de que el estado de salud de Mijaíl Gorbachov le impedía cumplir con sus funciones". El vicepresidente ocupó el sillón presidencial para "evitar el caos y la anarquía" que amenazaban la seguridad de los ciudadanos y la "integridad territorial" de la URSS, "salvar la economía de la ruina y evitar la escalada del peligro de un amplio conflicto civil". El golpe del 19 de agosto de 1991 precipitó la desintegración del estado soviético.

Yeltsin reaccionó inmediatamente. Denunció el cambio de autoridades como un golpe de estado y exigió tener acceso a Gorbachov para comprobar su estado de salud. De todas las repúblicas soviéticas, sólo Rusia y las tres bálticas condenaron el golpe. El asalto de la Casa Blanca por las tropas especiales de la KGB, que parecía inminente en la noche del martes 20, no se produjo. El presidente ruso tomó el timón de los acontecimientos, despojando de todos sus poderes al Partido Comunista, y el vendaval anticomunista iniciado en Rusia estimuló similares medidas en toda la URSS. Gorbachov dimitió como secretario general del PCUS, reprodujo los decretos anticomunistas de Yeltsin y ordenó la disolución del Comité Central del partido.

A comienzos de diciembre de 1991, Rusia, Ucrania y Bielorrusia –sin atenerse a la ley vigente que regulaba las condiciones para que una república abandonase la URSS, pero invocando su condición de firmantes del tratado constitutivo de la Unión Soviética en 1922– declararon que la URSS había dejado de existir "como sujeto de derecho internacional y como realidad geopolítica". Sin nación que gobernar, Gorbachov le entregó a Yeltsin el maletín que contenía los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares, y la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin a fines de diciembre.

El espacio postsoviético

El gobierno encabezado por Yeltsin no dudó en arrastrar a la sociedad rusa a un drástico salto hacia el capitalismo. La economía quedó librada a las reglas de juego del mercado a través de las intervenciones estatales a favor de los grupos económicos que se enriquecían y apoyaban al nuevo jefe político. Los efectos del "capitalismo salvaje" sumieron en la pobreza a millones de habitantes, la inflación se disparó, los sueldos cayeron, los ahorros se esfumaron, y el mercado negro y los sobornos pasaron a formar parte de la economía cotidiana.

La privatización de la economía rusa favoreció a la llamada "oligarquía" rusa, que a su vez la fomentó, con Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky y Borisovich Khodorkovsky a la cabeza. Su gran poder económico fue reforzado mediante la entrega de la propiedad de los medios de comunicación a los partidarios del gobierno: así se creó un "círculo virtuoso", para la minoría beneficiada, entre gobierno, poder económico y medios de información. El puñado de oligarcas favorecidos por el Kremlin consiguió el control de los grandes polos financieros, industriales y mediáticos y se sumó a la especulación internacional en desmedro del desarrollo de una base productiva que fuera más allá de los sectores tradicionalmente predominantes de los cuales procedían (hidrocarburos, complejo militar-industrial, metalurgia). En medio de los profundos cambios surgió un gran número de empresas más modestas, cuya privatización fue controlada por las autoridades regionales. También en este ámbito gravitaron el favoritismo y los lazos poco transparentes entre políticos locales e industriales, pero la lógica del funcionamiento empresarial en el plano regional fue mucho más sensible a los problemas y las presiones de la población.

Yeltsin tuvo su peor enfrentamiento político en el otoño de 1993 cuando la Duma, todavía heredera de las últimas elecciones soviéticas de 1990, desafió abiertamente las medidas de la presidencia. La principal fuerza opositora era el cada vez más nacionalista Partido Comunista, dirigido por Gennady Zyuganov. El choque culminó con la sangrienta toma del edificio de la Duma por los militares, que produjo un alto número de muertos sin perjudicar por ello la figura de Yeltsin.

El presidente contó con el apoyo internacional y, en el plano interno, ganó el referéndum de reforma de la Constitución en diciembre de ese mismo año. Aunque Yeltsin retuvo la presidencia hasta 1999, su liderazgo se deterioró de manera drástica. En su primera elección como presidente de Rusia en junio de 1991, cuando todavía existía la URSS, había obtenido más del 50% de los votos compitiendo con varios candidatos comunistas. Cinco años más tarde, con una sociedad rusa inmersa en la crisis y el desencanto, fue necesario convocar una

segunda vuelta, en la que Yeltsin obtuvo el 53,8% de los votos, mientras que su principal rival, el comunista Zyuganov, recogió el 40,3%.

En el transcurso de los años siguientes la figura de Yeltsin quedó cada vez más asociada a la corrupción, la incapacidad y el autoritarismo. En diciembre de 1999 presentó como su sucesor a Vladimir Putin, quien en los comicios de marzo de 2000 se impuso cómodamente con el 52,9% al nuevamente opositor Zyuganov, que obtuvo menos del 30% de los votos.

Los principales desafíos a Moscú en el seno del estado multinacional ruso provinieron del Cáucaso norte. En esta zona, los chechenos asumieron las reivindicaciones independentistas más radicales y las defendieron con las armas en dos cruentas guerras: la de 1994-1996, cuando los rusos fracasaron en subordinar la región, y la iniciada en 1999, cuya etapa de combates activos finalizó en 2002 con la derrota de los chechenos. No obstante, Moscú mantuvo hasta abril de 2009 el estado de guerra con el pretexto de combatir la "amenaza del terrorismo".

La nueva Rusia ingresó en las organizaciones internacionales a las que la URSS otrora se había opuesto: en abril de 1992 se sumó al Fondo Monetario Internacional, que empezó a concederle créditos; en junio de 1994 pasó a integrar la Asociación por la Paz, impulsada por la OTAN; y un mes más tarde fue admitida en las reuniones de carácter político del G-7, dando paso al G-8.

En el momento de la disolución de la URSS, en diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia dispusieron la creación de un organismo que siguiera coordinando las actividades fundamentales del estado que estaba a punto de desaparecer. Al proyecto de creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se unió rápidamente el resto de las repúblicas, a excepción de las bálticas y de Georgia, que se integraría más tarde. Sin embargo, la CEI tuvo serias dificultades para consolidarse. Por una parte, los nuevos estados se mostraban más interesados en reforzar sus propias instituciones que en mantener las comunes preexistentes. Por otra parte Rusia, la principal interesada en mantener la cohesión del conjunto, vivía una crisis que la incapacitaba para atraer a las otras repúblicas hacia su esfera de influencia.

La perspectiva acariciada por Yeltsin de colocarse al frente de una comunidad organizada como un espacio económico integrado y asumir el control centralizado del poderoso arsenal militar no pudo materializarse. Una expresión clave del enrarecido clima que enmarcaba las relaciones entre los nuevos estados fue la rivalidad entre Rusia y Ucrania. El gobierno ucraniano decidió contar con fuerzas armadas propias y quedarse con parte de la flota del mar Negro, que, según Moscú, constituía una fuerza estratégica y por lo tanto debía mantenerse bajo el mando conjunto de la CEI. Estas tensiones, sumadas al separatismo de las autoridades rusófonas de Crimea, alejaron significativamente a los dos países que habrían podido motorizar una entente eslava en el seno de la CEI.

La consecuencia inmediata de la desintegración de la URSS fue la aceleración del desplome económico. En todas partes se levantaron barreras arancelarias y algunas repúblicas acuñaron moneda propia, provocando de ese modo la desarticulación de los sectores productivos y los mercados internos. En casi todos los nuevos países el hundimiento de los viejos gigantes industriales de propiedad pública, combinado con la ausencia de instituciones y códigos reguladores, posibilitó la aparición de compañías privadas, gestadas, en gran medida, por los miembros de la elite soviética que habían logrado acumular fabulosas ganancias apropiándose a bajos costos de los bienes estatales y también gracias a la proliferación de actividades ilícitas, en algunos casos criminales.

Simultáneamente, los conflictos nacionales desatados al calor de la perestroika se prolongaron en el tiempo y la intervención militar rusa desempeñó un papel protagónico en la mayoría de ellos. Rusia ha pretendido, y en parte conseguido, mantener su influencia en lo que fuera el espacio soviético. También ha querido preservar una posición privilegiada en la esfera internacional, en un nivel parecido al de la antigua URSS. Tras la disolución de la Unión Soviética, Moscú ocupa el

puesto permanente de la URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU con la aquiescencia de los países de la CEI.

A pesar del vendaval que arrasó con los pilares del orden soviético, en las cúpulas dirigentes de la mayoría de los nuevos estados prevaleció la continuidad de los funcionarios y el marcado sesgo autoritario de sus gobiernos. En casi todas partes, el pregonado advenimiento de la democracia desembocó en la anarquía, y en algunos países "los señores de la guerra" llegaron al poder. En la mayoría de los casos hubo un fuerte reclamo pidiendo orden y la reacción contra el caos condujo al fortalecimiento del poder presidencial. Los presidentes, elegidos por sufragio popular, se distanciaron de la democracia asociada al desorden sin negarla discursivamente; por el contrario, conservaron sus formas mientras la vaciaban de contenido. Con la excepción de los estados bálticos, las "democracias de imitación" se propagaron por casi todo el territorio postsoviético. En casi todos los países hubo intentos de manipular el proceso electoral, apelando para ello tanto a la inhabilitación de los partidos "peligrosos" como al fraude liso y llano. A todo esto se sumaron las reiteradas reformas constitucionales destinadas a limitar las prerrogativas del poder legislativo. Además, casi todos los presidentes enfrentaron violentamente al Parlamento o bien lo relegaron a un segundo plano, recurriendo a las consultas populares para legitimar el giro hacia el presidencialismo. A lo largo y a lo ancho del espacio postsoviético hubo una oleada de conflictos entre presidentes y parlamentos –muchos de ellos elegidos por sufragio popular antes del colapso soviético– que no desembocaron en el uso de la fuerza armada, como ocurriera en Moscú.

En Azerbaiyán y Georgia hubo un momento inicial de gobiernos encabezados por antiguos disidentes, seguido por un largo período en el que el poder político ha sido ejercido por figuras provenientes del régimen soviético. Los nacionalistas azerbaiyanos que derrocaron al gobierno prorruso en mayo de 1992 fueron desalojados en septiembre de 1993, y el viejo nomenklaturista miembro de la KGB Heydar Aliev –cuestionado por Gorbachov en 1985– ocupó la presidencia hasta su muerte en 2003 y fue sucedido por su hijo Ilham.

El dirigente georgiano Shevardnadze, canciller de Gorbachov hasta 1990, ocupó la presidencia de su país tras el golpe que derrocó al líder nacionalista y anticomunista Zviad Gamsajurdia en 1992. Shevardnadze renunció a fines de 2003, presionado por las movilizaciones de la oposición, la llamada "revolución de terciopelo", frente a unas elecciones legislativas calificadas como fraudulentas.

Armenia, en cambio, se destaca como un país relativamente estable y seguro pese a la guerra de 1992-1994 en torno al Alto Karabaj. Su economía ha mantenido un crecimiento sostenido gracias al ingreso de capitales privados atraídos por la desnacionalización de las empresas. También en este país, la perestroika dio lugar a la creación en 1989 de la primera organización política de oposición, el Movimiento Nacional Panarmenio, que se centró en reivindicar la anexión del Alto Karabaj sin cuestionar a Moscú. En el plano internacional, Armenia cuenta con apoyos amplios y variados: aunque debido al conflicto latente en el Alto Karabaj sufre el bloqueo decretado por Azerbaiyán y Turquía, no obstante recibe el apoyo de Rusia y de los Estados Unidos y mantiene muy buenas relaciones con Irán.

En Ucrania los dirigentes comunistas, entre ellos el primer secretario del partido Leonid Kravchuk, muy tempranamente se mostraron dispuestos al diálogo con el movimiento nacionalista. La nomenklatura ucraniana dio pasos pragmáticos para adecuarse al nuevo clima y Kravchuk fue el primer presidente del nuevo estado nacional ucraniano. Aunque intentó gobernar un segundo período, en 1994 fue derrotado por su ex primer ministro, Leonid Kuchma.

En contraste con el sesgo cada vez más europeísta de Kuchma, el gobierno del comunista Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia se alineó decididamente con Moscú. Su larga y autoritaria permanencia en la presidencia contó con el aval de dos plebiscitos –cuestionados en el plano internacional– que extendieron los plazos de su mandato. Desde la campaña presidencial en 1994 Lukashenko se definió a favor de la

vuelta a los métodos de control administrativo sobre la economía, la desaceleración de las privatizaciones, la imposición de controles sobre los precios y los salarios, y el establecimiento de una unión aduanera y económica en el seno de la CEI.

En Asia Central se produjeron las continuidades más consistentes y prolongadas, con la excepción de Tayikistán. En este país, la destitución del presidente comunista por un bloque de fuerzas opositoras con acentuado predominio musulmán condujo a una larga guerra civil, desde 1992 a 1997. No obstante, tras el ingreso del ejército ruso "para mantener el orden", el nuevo jefe de gobierno provino del aparato comunista –aunque de una fracción diferente de la de su antecesor–. En el resto de las repúblicas, los secretarios generales del PCUS pasaron a ser los nuevos presidentes: Nursultán Nazárbayev en Kazajistán, Saparmurad Niyasov en Turkmenistán, Askar Akáyev en Kirguistán e Islam Karímov en Uzbekistán. Aunque confirmados en sus cargos mediante elecciones, estas fueron calificadas como muy irregulares en Occidente. Casi todos se han convertido en "presidentes vitalicios": el único que perdió su puesto a raíz de una corta revuelta en marzo de 2005 fue el kirguiso Akáyev.

El derrumbe de la economía central planificada fortaleció al neoliberalismo en casi todo el mundo. En los años noventa, el cuestionamiento al libre mercado fue descalificado como generador de falsas ilusiones en torno a la capacidad de la voluntad política para incidir positivamente en el rumbo de la economía. La crisis del partido monolítico que encabezó las reformas en la URSS condujo a la desintegración del único imperio multinacional del siglo XIX que había prolongado su existencia durante el XX. La desaparición del bloque soviético puso fin a la Guerra Fría, pero en lugar de la esperada paz, las luchas armadas en los países del Tercer Mundo y las guerras entre algunos de ellos y la única superpotencia sobreviviente pasaron a ocupar el primer plano del escenario internacional.

8. Crisis y desintegración del Tercer Mundo

La industrialización vía la sustitución de importaciones apoyada por alianzas multiclasistas tuvo recorridos diferentes: algunos promisorios, como en Brasil y la India, otros escasamente satisfactorios, como en Pakistán, o bien signados por intensas fluctuaciones, como en la Argentina. Al margen de sus diferentes logros, en la década de 1970 la fórmula mercado-internista había entrado en un callejón sin salida, y en los años ochenta se le sumó el peso abrumador de una deuda externa imposible de pagar. La combinación de ambos factores y los posteriores ajustes neoliberales desembocaron en la profundización de las desigualdades sociales.

A partir de los años ochenta se adoptaron las elecciones competitivas como principio legitimador de los gobiernos, sin que esto conllevase necesariamente la consolidación de regímenes democráticos. La *oleada democratizadora*, que alcanzó a la mayor parte de América Latina y numerosos países de África y Asia, tuvo sin embargo como rasgo común la paradójica asociación entre la aspiración a la democracia y el aumento de la pobreza. En el marco de la posguerra fría, gran parte de los países africanos y asiáticos fueron escenario de sangrientas y prolongadas luchas armadas. Asia, por su parte, ha sido y continúa siendo un campo de batalla entre algunos de sus países y las superpotencias. La primera guerra de este tipo se produjo en el marco de la Segunda Guerra Fría, cuando la URSS invadió Afganistán. La segunda, en la inmediata posguerra fría, fue un ataque encabezado por los Estados Unidos para impedir que Irak anexara el reino de Kuwait. Por último, cabe mencionar las invasiones norteamericanas a Afganistán e Irak después del 11 de septiembre de 2001. En Oriente Medio continúa la lucha entre Israel y los palestinos de los territorios ocupados, un conflicto con fuerte repercusión en el mundo musulmán y especialmente en los países árabes.

La crisis económica

En el marco de la industrialización sustitutiva de las importaciones, la producción de bienes de inversión alcanzó un desarrollo medio. Dado que una gran cantidad de recursos básicos debían adquirirse en el exterior, cualquier disminución de la capacidad importadora repercutía automáticamente sobre la actividad interna. En consecuencia, el crecimiento económico continuó dependiendo del sector primario-exportador, que a su vez contaba con pocos incentivos para sumarse a este tipo de desarrollo. Pese al relativo crecimiento de las exportaciones manufactureras más complejas alcanzado en los años sesenta, en estos países no se logró constituir una estructura industrial articulada y capaz de competir internacionalmente, y el peso de fábricas dependientes de las barreras proteccionistas y los subsidios estatales siguió siendo muy fuerte. Por otra parte, dado que la industria local no fue capaz de absorber la totalidad de la fuerza laboral excedente de los sectores tradicionales, hubo un alto nivel de subempleo, y gran parte de la mano de obra quedó concentrada en actividades informales de baja productividad. Esta estructura ocupacional no favorecía el crecimiento del mercado interno, del que a su vez dependía la profundización del proceso industrializador. Para resolver el problema de los mercados limitados se formaron asociaciones comerciales regionales, algo semejante a un mercado común. Las tentativas más exitosas en este sentido fueron las asiáticas, que contaron con un marco regional favorable; por el contrario, no prosperaron en África ni tampoco en América Latina. Las dificultades mencionadas se agudizaron con la evolución negativa de los términos de intercambio en el mercado mundial. Los precios de las principales exportaciones del Tercer Mundo sufrieron un descenso sostenido: por la misma cantidad de productos primarios se podían comprar cada vez menos bienes manufacturados.

Sin embargo, estos cuellos de botella no impidieron que en los años setenta se prolongara el relativo crecimiento de los países periféricos. Tampoco la crisis de los países centrales se trasladó inmediatamente al Tercer Mundo. En gran medida, la actividad de las economías menos desarrolladas dependió de las brechas abiertas por la crisis en las economías centrales. En primer lugar, se beneficiaron los países exportadores de petróleo, que en 1979 lograron aumentar los precios de un producto clave para el Primer Mundo. Las naciones más avanzadas de la periferia asiática privilegiaron las exportaciones manufactureras hacia el mundo industrializado, especialmente las producidas por una fuerza de trabajo barata. Los enormes beneficios que llegaron a manos de los potentados de Oriente Próximo fueron depositados en bancos internacionales, que a su vez resolvieron poner ese dinero en circulación a muy bajo interés y sin exigir mayores garantías. Así comenzó un ciclo frenético de préstamos.

Entre 1970 y 1980 América Latina incrementó su deuda externa de veintisiete mil millones de dólares a doscientos treinta y un mil millones, con pagos de servicios anuales de dieciocho mil millones. En el caso de los principales deudores latinoamericanos –la Argentina, Brasil y México–, los intereses representaban el 5% de su producto interno bruto. Algunos países endeudados utilizaron los créditos para la adquisición de bienes de equipo y la construcción de obras de infraestructura; otros, en cambio, los dilapidaron.

En los años ochenta la crisis en los países del Tercer Mundo se puso de manifiesto por la imposibilidad de seguir pagando los créditos a causa de la nueva política financiera de los Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal estadounidense decidió aumentar la tasa de interés para captar los flujos de capital financiero circulante, los países menos desarrollados se encontraron con abultadísimos montos a pagar y sin recursos para cumplir sus obligaciones. Tuvieron que seguir endeudándose, pero ahora los préstamos iban acompañados por durísimas condiciones impuestas por el gobierno estadounidense y especialmente por el FMI. Los gobiernos sólo podían aspirar a la renegociación de la deuda externa si emprendían reformas económicas profundas. Algunas de estas reformas, de acuerdo con el llamado Consenso de Washington, eran la apertura del mercado interno a los bienes y flujos de capital procedentes del exterior, la

reducción del papel del estado en el área económica y social, la flexibilización del contrato laboral, la privatización de las empresas estatales, productivas o de servicios públicos, y la adopción de medidas antiinflacionarias sin considerar su impacto negativo sobre las condiciones de vida de la población.

En el contexto de las reformas estructurales favorables a la globalización del capitalismo, el comportamiento económico del Tercer Mundo fue muy desigual. Los contrastes más evidentes se dieron entre la mayor parte de África Subsahariana y los países del Este asiático. La creciente brecha entre sus trayectorias fue producto, en gran medida, de los factores internos. Entre ellos, la existencia, en Asia Oriental, de una fuerza laboral capacitada, un estrato empresarial nativo capaz de movilizar esa oferta de trabajo para acumular capital y expandir su capacidad productiva en el mercado mundial, y la previa construcción de economías nacionales viables y estados nacionales consistentes. Pero otros factores del escenario internacional jugaron un papel decisivo en el relativo éxito de la periferia asiática: el hecho de que Japón favoreciera el crecimiento de los países del Este y el Sudeste asiático; la ayuda y el trato especial concedidos por los Estados Unidos a esta región debido a su importancia estratégica en el marco de la Guerra Fría, y, por último, el impacto del crecimiento económico de China a partir de la década de 1990. Ni África ni América Latina recibieron de los Estados Unidos la misma ayuda y atención que la prestada a los países vecinos de China. Los Estados Unidos tampoco se vincularon con los países latinoamericanos ubicados en su área de influencia directa, como lo hiciera Japón con sus vecinos.

Las distintas herencias, recursos y posiciones en el ámbito internacional no se manifestaron con tanta fuerza como cuando, durante las décadas de 1980 y 1990, la competencia por ganar un lugar en el mercado mundial pasó a ser un factor clave para el desarrollo de las economías nacionales. La crisis y los desafíos de la globalización tuvieron diferentes impactos y fueron encarados de maneras desiguales en las distintas regiones del Tercer Mundo, un espacio cada vez más heterogéneo.

Diferentes escenarios

El colapso del estado intervencionista y los esfuerzos para reemplazarlo por una estructura de libre mercado repercutieron sobre la trama social y la política. El fin de la Guerra Fría también aportó lo suyo en este proceso. Con la crisis del bloque soviético, los regímenes autoritarios perdieron el apoyo incondicional como bastiones del anticomunismo y los gobernantes dejaron de contar con una fuerza capaz de contrapesar las presiones de las potencias capitalistas. La democracia liberal reivindicada por los estados occidentales se impuso como el único modelo posible de legitimidad política. A los condicionamientos económicos planteados por los donantes occidentales en los años ochenta comenzó a añadirse, en la década de 1990, una más ambigua condicionalidad política que incluía la legitimación de los gobiernos por la vía electoral.

África Subsahariana

La desarticulación económica africana fue la más alarmante de todas. Entre 1960 y finales de 1980 la producción alimentaria per cápita cayó en un 20% en la región subsahariana. La ayuda externa se convirtió en la principal fuente de inversiones, y en algunos casos llegó a solventar hasta el 90% del gasto público. En 1980, el índice del volumen de exportaciones bajó un 17% en relación con el de 1970, mientras que el índice de importaciones creció un 90% en ese mismo lapso. En 1986 el 46% de la ayuda alimentaria de emergencia del Programa Mundial de Alimentos fue destinado a África Subsahariana, ayuda que en 1990 ascendió al 80%. En los años noventa había cinco millones de refugiados en esta región y nueve millones de personas desplazadas por las guerras civiles, las intervenciones extranjeras y el hambre. La deuda externa africana, comparada con su PIB, es la más alta del mundo, pero, al mismo tiempo, su monto no amenaza al capitalismo global. En el hipotético caso de que todos los países de África

Subsahariana decidieran dejar de pagar el servicio de sus deudas de repente y en forma colectiva, el sistema financiero mundial seguiría rodando.

Frente a la crisis de una economía desde hacía mucho tiempo signada por graves problemas, tanto por su inserción marginal en el mercado mundial como por las fracturas que afectaban el vínculo entre los estados y sus sociedades, los gobiernos africanos se sometieron a los dictados del neoliberalismo. Casi todos los países pusieron en marcha planes de ajuste estructurales, alentados abiertamente por el FMI y el Banco Mundial, que profundizaron su fragilidad. De un desmesurado peso de lo estatal sobre la economía, asociado en muchos países a un discurso favorable al socialismo africano, se pasó al desmantelamiento del sector público. La liberalización económica acabó con las empresas existentes sin reemplazarlas, por lo menos a corto plazo, por una iniciativa privada autóctona, todavía ausente. La agenda de reformas antiestado no sólo afectó su capacidad de actuar en el terreno económico sino que básicamente lo deslegitimó para gestionar la heterogeneidad étnica politizada, y su decadencia repercutió en todas las esferas de la vida social.

En el marco de estos cambios, las sociedades africanas se movieron en diferentes direcciones: así se llegó al fin del régimen de apartheid sostenido por Sudáfrica, a una seguidilla de movilizaciones favorables a la democratización y a la proliferación de las guerras internas.

Desde la década de 1970 hasta los primeros años del siglo XXI, África Austral fue escenario de conflictos violentos. En un principio, las luchas contra el colonialismo portugués se combinaron con la resistencia al régimen de apartheid, y más tarde, en 1975, las independencias de Angola y Mozambique desembocaron en dos guerras civiles que desestabilizaron al conjunto de la región.

En Angola, recientemente independizada de Portugal, combatieron, por un lado, el gobierno controlado por el Movimiento para la Liberación de Angola de José Eduardo Dos Santos –que fue apoyado por la Unión Soviética y Cuba– y, por otro lado, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, liderada por Jonas Savimbi y respaldada por los Estados Unidos y por el régimen racista sudafricano. Esa división ideológica se entrelazaba con las diferencias culturales y sociales entre ambos bandos y con un enfrentamiento personal entre Dos Santos y Savimbi, que se mantuvo hasta la muerte del segundo, en febrero de 2002. Con el fin de la Guerra Fría y el consiguiente retiro de las dos superpotencias, el conflicto pasó a ser financiado principalmente mediante la explotación y la venta de los recursos naturales. La Unión Nacional, cuya principal base de apoyo se encontraba en las tierras altas del interior, recurrió a la explotación de diamantes. El gobierno de Dos Santos, instalado en Luanda y teniendo en su poder el control de las tierras costeras, contó con los crecientes ingresos del petróleo, en cuya explotación participaban algunas transnacionales del petróleo, como Chevron, Elf Aquitaine, BP o Exxon Mobile. En el caso de los diamantes, parte de los millones de dólares facturados por la empresa sudafricana De Beers provenían de zonas asoladas por la guerra, y en el año 2000 un grupo de expertos de las Naciones Unidas determinó que el 20% del comercio total de diamantes era de carácter ilícito. Los llamados “diamantes sangrientos” atrajeron la atención de la comunidad internacional a finales de los años noventa, cuando se comprobó el papel decisivo que tenían en la financiación de numerosos conflictos armados. A través de una serie de reuniones –el llamado Proceso de Kimberley–, se intentó controlar la procedencia de las gemas para evitar que se comercializaran aquellas que provenían de zonas en conflicto, pero la iniciativa no conllevó acciones concretas. A la muerte de Savimbi se firmaron los acuerdos de paz. El gobierno de Dos Santos giró hacia el neoliberalismo, aunque preservando un férreo control sobre la dinámica política del país.

También Mozambique, a partir de la independencia, quedó envuelto en una guerra civil entre el gobierno –a cargo del Frente de Liberación Mozambiqueño– y la oposición –encabezada por la Resistencia Nacional de Mozambique–, aunque de menor duración que la angoleña. El apoyo del Frente de Liberación a las sanciones internacionales impuestas a Rodesia del Sur y su ayuda al movimiento

antiapartheid en Sudáfrica condujeron a los gobiernos de ambos países a colaborar con la lucha armada opositora. Al mismo tiempo, ciertas medidas económicas del gobierno –como la nacionalización de la industria y la abolición de la propiedad privada de la tierra– le granjearon el apoyo de la Unión Soviética. Desde la firma de la paz en 1992, en todos los comicios triunfó el gobierno en manos del Frente de Liberación. En las terceras elecciones, realizadas en diciembre de 2004, el caudal de votantes bajó al 36% contra el 90% alcanzado en las primeras, en 1994.

El gobierno blanco de Rodesia del Sur, ante el hundimiento del imperio portugués y la escasa ayuda de Sudáfrica, aceptó las elecciones por sufragio universal en febrero de 1980. El líder del Frente Patriótico, Robert Mugabe, ocupó la presidencia y el país pasó a llamarse Zimbabue. Sudáfrica, en cambio, continuó ignorando las presiones internacionales y mantuvo su dominación sobre África del Sudoeste hasta 1989, cuando, debido a la crisis del régimen de apartheid, aceptó la convocatoria a elecciones libres y el líder del movimiento de liberación Sam Nujoma asumió la presidencia del nuevo estado, que recibió el nombre de Namibia.

En Sudáfrica, desde fines de la década de 1970, aunque en forma muy cauta y sin abandonar la resistencia armada contra el apartheid, algunos sectores del Partido del Congreso Nacional Africano advirtieron la creciente gravitación de la lucha política y sindical. En 1989 fue elegido presidente William de Klerk, un reformista que, reconociendo la gravedad de la crisis social y política, comenzó a buscar una salida del régimen de apartheid. Como señal contundente, en febrero de 1990 concedió la libertad a Mandela, quien, junto con la conducción del Partido del Congreso, decidió explorar la estrategia de la negociación renunciando a la lucha armada.

Diferentes momentos en la lucha por la liberación del pueblo sudafricano

El año 1949 marcó un viraje de los métodos constitucionalistas a los populares, y de la petición y la representación al boicot y las manifestaciones en la agitación nacionalista. Sharpeville (1960) cortó en flor este cambio. [...] La idea del exiliado como revolucionario profesional llegó a suplantar la idea de la resistencia como una actividad popular de masas.

[...]. Cuando se hizo (la crítica a esta vía) fue más en forma de una iniciativa práctica que de una desviación teórica consciente. [...]

Durban 1973 y Soweto 1977 fueron los dos acontecimientos que simbolizaron, pusieron en escena y concretaron este cambio de perspectiva en la resistencia, porque a pesar de sus obvias diferencias –los huelguistas de Durban eran en su mayoría trabajadores migratorios, en tanto que en los militantes del levantamiento de Soweto eran un grupo más amorfo, en el que destacaba la juventud estudiantil– había algunas similitudes básicas. [...] Ambos reubicaban el *locus* de la lucha trasladándolo desde afuera (exilio) hacia adentro (el país); la puesta en práctica de la lucha de los revolucionarios profesionales a los estratos populares, y el método de la lucha de una violencia armada a una agitación no violenta. Juntos, estos tres aspectos significaban un giro fundamental en la concepción misma de la lucha.

Mahmood Mamdani, *Ciudadano y súbdito. África contemporánea y el legado del colonialismo tardío*, México, Siglo XXI, 1998.



Represión de la protesta estudiantil en Soweto.

Los grupos más radicalizados de ambos campos rechazaron esta alternativa y siguieron recurriendo a la violencia. Además, el Congreso no representaba al conjunto de los africanos nativos y también se produjeron enfrentamientos entre los xosas, mayoritariamente identificados con dicho partido, y los zulúes, representados por el Partido de la Libertad Inkatha, encabezado por el primer ministro del bantustán de Kwazulu en Natal.

En junio de 1991, el Parlamento sudafricano terminó con todas las leyes segregacionistas a través de una reforma de la Constitución, y tres años más tarde el Partido del Congreso ganó las primeras elecciones generales libres celebradas en el país. La Asamblea eligió presidente a Mandela y desde ese momento entró en vigor la Constitución provisional que supuso la abolición de los diez bantustanes con estatus autónomo o independiente y, por ende, la incorporación de sus territorios a la división provincial. Al año de haber sido elegido, el presidente Mandela creó una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, para sacar a la luz las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas durante el *apartheid*. El resultado de sus investigaciones fue publicado en octubre de 1998: el estado racista blanco fue identificado como responsable de la mayoría de las atrocidades, pero se señaló que también el movimiento de liberación negro había cometido violaciones de los derechos humanos. El informe provocó una honda agitación en el partido gobernante; Mandela, por su parte, expresó un apoyo incondicional al trabajo de la Comisión.

En muchos países africanos la década de los noventa comenzó con protestas callejeras y presiones populares, que en muchos casos culminaron en esfuerzos concertados para reformar las instituciones y los procedimientos de la política. Los planes de ajuste contribuyeron a la explosión de las demandas democratizadoras debido a sus efectos perversos sobre la calidad de vida de los africanos. Además, las nuevas elites educadas, sin las oportunidades características de los primeros

años de las independencias y marginadas de las redes del poder, se inclinaron a favor del multipartidismo y el lenguaje democrático para abrirse camino hacia el gobierno. Algunos observadores hablaron de un "resurgimiento de la sociedad civil".

Como parte de esta movilización fueron convocadas las Conferencias Nacionales: foros de negociación entre el poder y la sociedad civil que buscaron cambiar las normas constitucionales y las leyes electorales, y al mismo tiempo establecieron mecanismos para la celebración de elecciones libres que garantizaran el pluralismo, la protección de los derechos humanos y las libertades públicas. La primera Conferencia Nacional, que se celebró en Benín en febrero de 1990, se declaró soberana al modo de los Estados Generales de la Revolución francesa, y sus decisiones tuvieron fuerza de ley. En gran medida como consecuencia de lo anterior, los gobiernos africanos comenzaron a asumir el discurso democratizador y en muchos países se dio paso a la reforma constitucional, el establecimiento de sistemas formalmente multipartidistas y la celebración de elecciones generales. Más de una treintena de países africanos inmersos en la ola democratizadora se sumaron a los únicos regímenes democráticos en pie en el continente en 1989: Botsuana, las Islas Mauricio y Gambia.

Al calor de estos acontecimientos, los afrooptimistas concentraron su atención en las posibilidades gestadas por la apertura política; incluso algunos hablaron de una "segunda liberación". Los afropesimistas, en cambio, destacaron las falencias del proceso y los severos problemas que condicionaban su concreción. Estas "transiciones democráticas", tanto en África como en la mayor parte de los países del Tercer Mundo, se ponían en marcha en un entorno económico escasamente propicio y en muchos casos no eran más que democracias virtuales. Los antiguos dictadores –o los vencedores de conflictos civiles– utilizaron los procesos electorales en varios países como un modo de relegitimar su gobierno –o su victoria– y de seguir recibiendo recursos de la ayuda internacional.

La celebración de elecciones no significó que se pusiera en marcha un proceso democratizador integral. Desde su independencia, en gran parte del continente africano se ha desarrollado una peculiar pugna entre la promoción de las identidades nacionales y la pervivencia, profusión y mixtura de otras identidades, especialmente la así llamada "étnica", que prevalece en el ámbito rural y ha sido incorporada al escenario político vía el reconocimiento de la autoridad tradicional. Algunos autores consideran que la democratización de África debe pasar, sobre todo, por la democratización del medio rural y el desmantelamiento de las formas indirectas de control social gestadas durante el colonialismo y reproducidas en el período poscolonial.

La política en África sigue siendo un espacio de lucha por recursos que son escasos, librada entre identidades culturales politizadas a través de un proceso que ha obturado la creación de una comunidad política basada en el reconocimiento de derechos y deberes compartidos. Esta explosiva combinación traba la alternancia pacífica en el gobierno, porque hay demasiadas cosas en juego.

En este contexto, el derrumbe del modelo desarrollista y los condicionamientos impuestos por el nuevo orden global gestaron un terreno fértil para la proliferación de las guerras, generalmente civiles. Estos conflictos armados conjugaron las demandas de los grupos agraviados con la codicia de quienes aprovecharon las oportunidades que ofrecía el orden global para hacer negocios con la guerra. Se distinguen tres grandes zonas en las que, desde 1990 hasta 2005, se desarrollaron más de doce guerras civiles: África Occidental y la zona del río Mano, la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África.

Entre las principales luchas armadas en África Occidental se destacan las de Nigeria y Costa de Marfil. En Nigeria coexistieron dos contextos bélicos diferenciados: el de la región del Delta del Níger (sur) y el que tuvo lugar en el norte del país. En el Delta del Níger, donde se concentra el 60% de la producción de petróleo –Nigeria es el primer productor de crudo de la región subsahariana–, a partir de 2003 varias milicias armadas pertenecientes a diferentes grupos étnicos se enfrentaron entre ellas y contra las fuerzas de seguridad estatales por el control del poder y los beneficios del petróleo. En esta contienda

también participaron ejércitos privados contratados por las empresas petroleras para defender sus intereses. En el norte del país, las luchas han sido protagonizadas por milicias de la mayoría musulmana y de la minoría cristiana en disputa por el control de los recursos naturales, y por la negativa del segundo grupo a aceptar la ley islámica impuesta desde 2001 en los doce estados que conforman la región. Costa de Marfil fue escenario en 2002 del levantamiento de grupos armados en el norte, que lograron dividir el país esgrimiendo la exclusión política y social de numerosos sectores de la población. Desde entonces se ha librado una batalla irregular entre estas fuerzas y las del gobierno, respaldado por milicias de jóvenes simpatizantes. A pesar de los acuerdos de paz de Ouaga, en 2007, los grupos enfrentados retuvieron sus armas.

En la llamada región del río Mano, que engloba a Guinea, Liberia y Sierra Leona, los conflictos armados aparecen asociados a los llamados "diamantes sangrientos", o sea, a la competencia por la explotación de este recurso entre las distintas redes integradas por bandas y jefes ejecutores directos de la violencia y, en forma menos visible, por poderes políticos y grandes empresas, todos los cuales se benefician con la guerra que arrasa a las comunidades de esta zona.

En la región de los Grandes Lagos, en un principio se entrelazaron la violencia interétnica de Burundi (1993) y el genocidio de Ruanda (1994) para luego combinarse con la lucha armada que tenía lugar en la República Democrática del Congo (1996-1998) contra la dictadura de Mobutu. En esta compleja trama de intereses económicos y políticos en competencia y de estremecedores baños de sangre entre hutus y tutsis, se desencadenó la primera guerra civil africana (1998-2003). Fue en parte una guerra civil para dirimir la continuidad o no en el gobierno del dirigente congoleño Laurent Kabila, que había combatido contra Mobutu. Pero fue también una guerra internacional en torno al poder y el control de los recursos regionales. Mientras Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue apoyaron al presidente Kabila, Ruanda y Uganda lucharon contra esta múltiple alianza y, en el año 2000, también entre sí.

En el Cuerno de África se distinguen cuatro países signados por luchas violentas: Somalia, Sudán y, en guerra entre sí, Etiopía y Eritrea. En Somalia, tras la caída de Siad Barre en 1991, los enfrentamientos entre quienes derrocaron al dictador impidieron la instauración de un gobierno nacional y derivaron en la fragmentación del territorio. El Gobierno Federal de Transición, una lábil coalición de señores de la guerra, pese a contar con el reconocimiento de la ONU y de la comunidad internacional, no pudo radicarse en la capital, Mogadiscio, ni extender su control más allá de la ciudad Baidoa, donde se instaló. Aunque desde 1991 Somalia es una nación sin estado, algunas de sus regiones, como Somalilandia y Putland, han logrado un relativo grado de paz y estabilidad.

Los enfrentamientos internos que derivaron en el colapso del estado somalí se entrelazaron y potenciaron con la intervención de los Estados Unidos poco después del derrocamiento de Siad y de la injerencia de Etiopía a mediados de 1990 en apoyo al Gobierno Federal de Transición.

A fines de 1992, el presidente George Bush aprobó el envío de cerca de 1800 marines para suministrar "asistencia humanitaria" a Somalia. La Operación Restaurar la Esperanza (Restore Hope), concebida como una sencilla operación militar destinada a separar a los contendientes, acabó en una experiencia traumática. Cuando en 1993 un comando estadounidense intentó capturar a un señor de la guerra en Mogadiscio, fue atacado por milicias somalíes que dieron muerte a varios soldados. La imagen de los cuerpos de los marines golpeados y arrastrados por las calles de la capital forzó a los Estados Unidos a una retirada desordenada y humillante del país africano.

Países como Somalia y la República Democrática del Congo son comúnmente descriptos como ejemplos extremos de una batalla hobbesiana de todos contra todos. En contraposición a esta imagen simplificada, los somalíes están procesando diferentes experiencias.

En el caso de Somalilandia –independiente de facto desde 1991, aunque no reconocida internacionalmente–, se construyó una organización política basada en normas tradicionales y con arraigo en

el sistema de clanes. Es una de las pocas experiencias indígenas que funciona, pero la presión internacional sobre el nuevo estado es muy intensa ya que, en este caso, no se acepta la modificación de las fronteras de la Somalia creada a partir del fin de los imperios coloniales. El informe de Human Rights Watch, Rehenes de la paz (2009), reconoce, con reservas, que el gobierno de Somalilandia ha ayudado a crear "cierto grado de estabilidad y gobernabilidad democrática", mientras el estado de Somalia, avalado internacionalmente, permanece sumido en conflictos armados.

La experiencia de la Unión de Tribunales Islámicos también muestra la compleja gama de intereses internos e internacionales que traban la construcción de la paz y la seguridad en África. Desde mediados de los años noventa, los Tribunales Islámicos avanzaron hacia la instauración, en zonas de Somalia, de un orden basado en la interpretación estricta de la ley islámica, al que la población y algunos círculos económicos fueron confiriendo cada vez más legitimidad. Después de los numerosos abusos cometidos por los señores de la guerra, el progresivo clima de estabilidad y el funcionamiento de los servicios básicos impuestos por la Unión de Tribunales Islámicos les permitieron ganar un importante consenso, aunque también sus medidas suscitaron recelos debido al fuerte recorte de libertades que supuso someter al conjunto de la población a la ortodoxia musulmana. Esta experiencia fue rechazada por los Estados Unidos y Etiopía. Ambos países coincidieron en que el afianzamiento de la Unión de Tribunales abriría la puerta en el continente africano al grupo Al-Qaeda. Durante los primeros meses de 2006 se desataron graves enfrentamientos entre la Unión Islámica y la Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo, una coalición de señores de la guerra financiada por los Estados Unidos. A fines de 2006, los Tribunales perdieron casi todo el territorio bajo su dominio y las tropas etíopes colocaron en el poder al Gobierno Federal de Transición.

Junto con la dictadura de Siad, en 1991 cayó la de Mengistu Mariam en Etiopía. El nuevo gobierno reconoció la independencia de Eritrea, lo que permitió poner fin a una guerra de treinta años. En virtud de los reclamos territoriales encontrados, entre 1998 y 2000 ambos países volvieron a tomar las armas. Los etíopes conquistaron rápidamente numerosos pueblos y aldeas y estaban en condiciones de avanzar sobre Asmara para derrocar al gobierno, pero no lo hicieron porque temían la reprobación de la comunidad internacional. Con el inicio del conflicto, en Etiopía se detuvo y expulsó a todo individuo de ascendencia parcial o totalmente eritrea. A mediados de 2000, una fuerza de la ONU asumió el control de la franja en disputa.

En Sudán, el grupo armado Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés) enfrentó durante veinte años (1983-2002) al gobierno islamista en pos de la independencia del sur del país, de mayoría cristiana y animista. A principios de 2005 se logró un compromiso de paz. Dos años antes había comenzado otra guerra irregular en la región de Darfur. Los grupos armados de la oposición –el Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (JEM)– tomaron las armas contra grupos paramilitares sostenidos por el gobierno de Omar al-Bashir: las llamadas milicias Janjaweed. Los rebeldes denunciaban la marginalidad política, económica y social de la población negra de esta zona. Las fuerzas progubernamentales aplicaron la estrategia de tierra quemada y forzaron el desplazamiento de más de dos millones de personas, lo que provocó en pocos meses, según las Naciones Unidas, una de las peores crisis humanitarias del nuevo milenio.

La mayoría de las luchas armadas de la posguerra fría se han desplegado en África y en Asia, y son básicamente internas. De los ciento dieciocho conflictos ocurridos en la década de 1990, sólo diez pueden definirse estrictamente como interestatales. Cabe destacar que, por lo menos desde 1945, los conflictos civiles o internos ya eran mucho más comunes que los internacionales o interestatales. No obstante, su importancia sólo fue reconocida ampliamente a partir del fin de la Guerra Fría, porque la investigación sobre la dinámica del conflicto armado, antes de 1990, se centraba en la rivalidad abierta o encubierta entre las dos superpotencias.

Aunque en principio se presentan como guerras civiles, en la mayoría de los casos cuentan con una importante dimensión e influencia regional o internacional en virtud de una combinación de factores que van desde los flujos de personas refugiadas, pasando por el comercio de armas, hasta los intereses económicos o políticos que los países vecinos tienen en el conflicto. Otro dato de peso procede de las conexiones entre grupos armados de diferentes estados debido, en parte, a la localización de una misma etnia en diferentes países: los hutus y los tutsis en Burundi y Ruanda, los somalíes en distintas zonas del Cuerno de África, los tuareg en Níger y Nigeria, entre otros. Pero también en virtud de los vínculos entre los integrantes de los ejércitos irregulares, ya sea por razones religiosas o por haber compartido estrategias de lucha o bien luchas previas –el caso de la generación de los afganos–.

Generalmente, las zonas de combate suelen estar circunscriptas a una región del país. A raíz de ello, muchas veces se visita la capital de un estado en guerra sin tomar conciencia de esta situación, aunque persista como una tortura lenta para las poblaciones de la zona en que se combate. Cuando algún acontecimiento dramático las hace visibles, las luchas sangrientas parecen haber surgido de la nada: el caso más notorio fue el asombro inicial de la opinión mundial ante las masacres de Ruanda en 1994. En relación con la variada gama de grupos e intereses en juego, en un mismo país puede confluir más de una disputa, en la que participan distintos actores con objetivos también diferenciados, como ha ocurrido, por ejemplo, en Sudán o en Nigeria.

En estos escenarios, el estado ha perdido el monopolio de la fuerza porque otros actores imponen su autoridad a través del uso de las armas, desde mercenarios extranjeros y señores de la guerra, hasta agrupaciones de ciudadanos que intentan defenderse o ejércitos privados al servicio de empresas. La proliferación de armas livianas ha jugado un papel importante en la privatización de la seguridad, al mismo tiempo que las ganancias que provee su tráfico se entrelazan con los beneficios de la explotación de una gama de recursos vía las guerras. Se forja así un círculo perverso en el que, mientras muchos son víctimas, algunos se enriquecen y obtienen poder al promover en forma explícita o encubierta la onda expansiva de la violencia.

Un rasgo característico de estas luchas es su persistencia. Son de muy difícil solución, en parte porque son funcionales para actores poderosos, pero en parte también porque las guerras involucran a vastos sectores de la población que, alineándose con uno u otro grupo, creen en la razón y la justicia de su causa. Una vez puesta en marcha, la espiral de masacres, odio y revancha se retroalimenta en el seno de poblaciones donde la divisoria entre víctimas y victimarios se torna difusa.

Gran parte de los textos sobre el tema ha pretendido elaborar explicaciones amplias sobre las guerras de la posguerra fría, englobando una diversidad de luchas armadas bajo rótulos genéricos y subrayando las condiciones que las hacen posibles. Muchos estudios ponen el acento en el agravamiento de la crisis económica a causa de las políticas neoliberales; desde esta lectura, la violencia derivaría de la pobreza creciente y el aumento de la exclusión social. Otros sostienen que la debilidad de los estados, intensificada en el marco de la globalización, es el factor central que conduce al conflicto armado. Suponen una estrecha conexión entre lucha armada y "estados fallidos", en los que ven un terreno propicio para el afianzamiento del terrorismo global. Por su parte, los medios de comunicación y también algunos analistas suelen colocar en el centro de los conflictos las rivalidades étnicas, presentando la identidad étnica como un dato casi natural, como un núcleo esencial de las creencias y los valores que en los pueblos más atrasados y "de sangre caliente" no admiten el debate e impulsan las limpiezas étnicas. Más recientemente se ha difundido la versión de las "nuevas guerras", que privilegia los objetivos económicos de diferentes actores como causa central de los conflictos. Este enfoque subraya la conexión entre la explotación y el comercio ilegal, ya sea de los diamantes, el petróleo, el oro o el coltán, y el enriquecimiento de los señores de la guerra, de los gobernantes corruptos y de las grandes compañías transnacionales, particularmente en los persistentes conflictos africanos. En este caso,

“la sorda fuerza de la avaricia”, y no “el agravio”, sería el motor de estas guerras.

Parece importante evitar la simplificación, y en lugar de remitir a una causa principal y de subrayar el peso de las condiciones dadas, es conveniente combinar en la explicación la injerencia de distintos factores e incluir la relación entre las razones estructurales, las decisiones de los sujetos y los hechos inmediatos que encienden la mecha. En última instancia, las guerras ocurren porque en coyunturas específicas existen personas dispuestas a tomar las armas, lo que hace indispensable analizar el proceso político singular de cada lucha armada.



Museo del genocidio en Ruanda.

América Latina

El ciclo de movilizaciones de fines de la década de 1960 –protestas sociales y acciones armadas de grupos que, en nombre de la revolución, recurrieron al terrorismo– fue brutalmente cerrado por las dictaduras militares de nuevo signo. Entre 1973 y 1982, en parte de los países más desarrollados del continente –Chile, la Argentina, Uruguay y Brasil– se impusieron regímenes dictatoriales que no dudaron en avanzar hacia la construcción de un estado al margen de la ley para instrumentar una represión brutal –que incluyó la tortura, la desaparición y el asesinato– contra vastos sectores de la sociedad. Todo esto en nombre de la defensa de los valores nacionales, contra la amenaza del terrorismo y el comunismo.

Aunque en el pasado latinoamericano los militares habían asumido reiterada y prolongadamente el ejercicio del gobierno, las dictaduras de este período representaron algo nuevo. Su principal objetivo fue erradicar de raíz la posibilidad de la protesta social, mediante el terror extremo. No se propusieron solamente aniquilar a las izquierdas sino producir cambios profundos para que finalmente arraigara un orden capitalista estable, sin fuerzas sociales y políticas que lo cuestionaran. Respecto del orden político, tuvieron posiciones diferentes. Los militares brasileños, que tomaron el poder en 1964, proclamaron desde un comienzo la restauración democrática como su objetivo final. Los generales uruguayos, en cambio, fueron más confusos e inciertos en su orientación, aunque tampoco se apartaron de la meta de un orden constitucional controlado. Las juntas militares argentinas fueron las más renuentes al establecimiento de cualquier tipo de orden en manos de civiles y políticos. Sólo después de la derrota militar en Malvinas aceptaron abandonar el gobierno. En Chile, Pinochet preparó cuidadosamente su retiro y el regreso de los políticos al gobierno.

También varió la combinación de violencia y cambio de las reglas económicas. El régimen argentino desplegó al máximo el terror y dejó una economía en bancarrota. Los generales brasileños recurrieron mucho menos al terror e impulsaron una transformación económica más eficiente. La experiencia uruguaya tuvo características más o

menos intermedias entre ambos regímenes. En el caso chileno, la drástica represión fue acompañada por la puesta en marcha de un programa de crecimiento económico con profundas desigualdades sociales.

En Bolivia el gobierno quedó en manos de los militares entre 1964 y 1982, pero la cohesión del aparato militar fue mucho más débil y hubo experiencias de signo diverso. El breve gobierno del general Juan José Torres, basado en un levantamiento popular en 1970, fue seguido por la participación en el Plan Cóndor, un operativo de represión de las izquierdas instrumentado junto con las dictaduras militares de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los gobiernos militares de Ecuador y Perú no formaron parte de esta cruzada de terrorismo de estado. En Lima, en 1968, el general Juan Velasco Alvarado puso en marcha una serie de reformas económicas y sociales profundas. A fines de la década de 1970, los militares de ambos países fueron los primeros en replegarse para dejar el gobierno en manos de los partidos políticos. Tanto Venezuela como Colombia quedaron al margen de esta oleada de dictaduras militares y mantuvieron sus frágiles democracias.

La década de 1980 estuvo signada por la celebrada vuelta a la democracia y, a la vez, por la descomposición social derivada de una crisis económica producto del agotamiento del proyecto desarrollista y el peso de la altísima deuda externa. En la primera mitad de los años ochenta, el tema de debate fue la "transición a la democracia". Dejó de hablarse de "modelos de desarrollo" para insistirse en las políticas de estabilización y en la construcción de una "cultura democrática" que, a través de los consensos y de una mayor calidad institucional, sustentara a las nuevas democracias. Muchos se entusiasmaron con las experiencias del Sudeste asiático y ganó terreno la convicción de que era posible encontrar una salida al subdesarrollo sin romper con el orden económico internacional. Había que sumarse al proceso de globalización en marcha, y casi todos los gobiernos emprendieron los ajustes propiciados por el neoliberalismo.

El programa aplicado inicialmente por la extrema derecha en el Chile de Pinochet ganó la adhesión de un amplio espectro de fuerzas políticas. Fue asumido tanto por la derecha peruana durante el gobierno de Alberto Fujimori como por los partidos que habían encabezado las alianzas multiclasistas en pos de la industrialización nacional: el PRI en México, el peronismo de Carlos Menem en la Argentina y el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia. También lo apoyaron sectores de la socialdemocracia como el Partido Socialista chileno y la Acción Democrática venezolana.

La fórmula que proponía la primacía del mercado quedó plasmada en el Consenso de Washington, según el cual sólo habría crecimiento económico cuando los gobiernos aceptasen la reforma del estado para asegurar la disciplina fiscal, la liberalización financiera y comercial, la apertura total de la economía a las inversiones privadas, la flexibilización de los contratos laborales y la protección de los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales.

Pero este orden liberal recién había comenzado a establecerse cuando se hizo evidente que el libre mercado no aseguraba el crecimiento y que su dinámica podía arrasar con los delicados y necesarios equilibrios sociales. Una a una, las economías latinoamericanas más grandes –México (1994), Brasil (1999) y la Argentina (2001)– fueron escenario de crisis espectaculares, y entre 1998 y 2003 los niveles de ingreso y los estándares de bienestar retrocedieron significativamente. Si los años ochenta fueron rotulados la "década perdida", la CEPAL bautizó a este período como "la media década perdida". Hacia finales de los años noventa, las movilizaciones sociales y las crisis políticas –sin cuestionar en ningún caso la democracia– impusieron su sello en gran parte de los países latinoamericanos.

Si bien esta región no es la más pobre del mundo globalizado, cerca de la mitad de los latinoamericanos no alcanza el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Y sí es una de las regiones más desiguales del planeta. Desde la década de los setenta hasta el fin del siglo XX, según el Banco Mundial, la desigualdad en América Latina y el Caribe fue superior a la de Asia y Europa Oriental.

Desde el retorno de los partidos políticos en la década de 1980, los militares han dejado de asumir el protagonismo que tuvieron en el pasado. No obstante, desde los años noventa, más de diez presidentes no concluyeron su mandato. Esto sucedió en la Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Haití y Honduras. En algunos casos –los del presidente argentino Fernando de la Rúa (2001) y los bolivianos Gonzalo Sánchez Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005)–, fueron forzados a renunciar por movilizaciones de protesta. En otros, fueron destituidos por los congresos a través de juicios políticos; así, entre 1992 y 2004 seis presidentes debieron afrontar esta investigación: algunos, como el venezolano Carlos Andres Pérez o el brasileño Fernando Collor de Mello, fueron depuestos; otros, como el peruano Fujimori, que huyó a Japón, abandonaron el cargo. Si bien las crisis institucionales ya no aparecen asociadas a golpes militares, la inestabilidad política combinada con la degradación de las condiciones sociales sigue planteando interrogantes sobre la naturaleza y el rumbo de la democracia latinoamericana.

En la primera década del nuevo siglo se produjo un giro rotundo en la postura asumida por una nueva camada de presidentes. Se conformó a partir de la asunción de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 y fue seguida por Luiz Inácio "Lula" da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en la Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Fernando Lugo en Paraguay y Mauricio Funes en El Salvador. Tan diferentes entre ellos como las realidades de sus respectivos países, todos reaccionaron contra el Consenso de Washington. Sus gobiernos han dado lugar a un intenso debate acerca de su caracterización: ¿neopopulismo o centroizquierdismo?, y el objetivo de sus gestiones: ¿redistribución del ingreso y superación de la pobreza o, por el contrario, acumulación de poder vía la demagogia y el autoritarismo?

Hasta el momento, sin dejar de lado los significativos contrastes entre unos y otros, y a pesar de la enorme importancia del giro contra el ajuste neoliberal, todos siguen intentando afrontar los desafíos del capitalismo global sin que, como en el resto del mundo, parezca posible imaginar una democracia social al margen de la lógica del capital.



Los presidentes (de izquierda a derecha) Evo Morales, de Bolivia, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Hugo Chávez, de Venezuela, entre los mandatarios representativos de la nueva oleada de gobernantes latinoamericanos críticos del neoliberalismo, en ocasión de la asunción de Ortega, en enero de 2007.

Asia del Sur

Aunque más silencioso y un poco más lento que el de China, el boom económico de la India la ubica entre los ejemplos exitosos de la economía global. Con una población de más de mil millones de habitantes, en la que se destaca una consistente clase media con un alto número de profesionales capacitados en las nuevas tecnologías, un crecimiento económico constante del 6-7% anual y una fuerza

militar atómica, Nueva Delhi también está modificando el escenario industrial y comercial del área de su directa influencia, así como el mundial. Algunos informes pronostican que hacia 2017 la economía de este país alcanzará a las de Italia, Francia y el Reino Unido. Sin lugar a dudas, a la India le cabe un papel protagónico en la determinación del equilibrio de poder en Asia.

Entre los factores que han contribuido a este crecimiento económico suelen mencionarse su notable elite científica, su segmento de población anglohablante y los bajos salarios en términos comparativos que perciben sus trabajadores. Estos elementos le permiten posicionarse en el orden global, entre otros aspectos, como destino de numerosas deslocalizaciones en el sector de servicios desde el resto de los países de habla inglesa. Junto con estos drásticos cambios, un enorme segmento de la sociedad continúa viviendo en un sistema de castas desvinculado de toda globalidad.

A partir del fuerte impacto negativo de la crisis económica, el Partido del Congreso de la India asumió cada vez más decididamente el programa neoliberal, mientras su indiscutido predominio político se resquebrajaba. Los primeros tanteos hacia el neoliberalismo se dieron en 1985 y tomaron consistencia en los años noventa, cuando se liberalizó el comercio exterior, se eliminaron muchos de los controles a la inversión extranjera y el gobierno decidió seguir un enfoque orientado a las fuerzas del mercado y la integración en la economía mundial. El debilitamiento del partido gobernante no fue consecuencia directa del giro de la política económica, ya que en parte resultó del desgaste provocado por su prolongado ejercicio del gobierno, y también de los cambios sociales producidos al calor de los años dorados.

A partir de los años setenta, los primeros efectos de la revolución verde crearon una nueva clase rural: los capitalistas del arado, medianos propietarios que empezaron a acumular un pequeño capital gracias a los excedentes logrados por la introducción de fertilizantes e insecticidas y por las mejoras en los sistemas de regadío. El aumento del nivel de vida se asoció con la sensibilización política y aparecieron partidos políticos regionales que representaban los intereses concretos de diversas comunidades, integradas por castas medias que se sentían desfavorecidas y sostenían demandas de inspiración regionalista. Poco a poco estos partidos, por definición de alcance local, redujeron el caudal electoral del Congreso.

Otro factor que afectó la centralidad del partido líder de la independencia fue la división interna emergente a finales de los años sesenta tras la creación del grupo Janta Dal, formado por políticos del Congreso que criticaban el fracaso de las políticas sociales, la corrupción y el autoritarismo del gobierno encabezado por Indira Gandhi. El Janta Dal consiguió el poder en 1977 aglutinando todo tipo de partidos, sólo unidos por su oposición a Indira. Esta heterogénea alianza cayó muy pronto, y en 1980 la hija de Nehru volvió a encabezar el gobierno. Todas las coaliciones formadas en torno al Janta Dal (1989-1990 y 1996-1998) fueron efímeras a causa de las diferencias internas.

La configuración de una fuerza política efectivamente alternativa al Congreso en el ámbito nacional se concretó a mediados de los años ochenta mediante la ascensión del Partido del Pueblo Indio, una agrupación de derecha que exaltaba un nacionalismo hindú xenófobo. Este auge nacionalista dio paso a un creciente avance de la violencia, que desde finales de los años ochenta se manifestó en una serie de pogromos contra los musulmanes. En 1999 el Partido del Pueblo se hizo cargo del gobierno, pero su fulgurante ascenso se vio frenado, para sorpresa de todos, en las elecciones de 2004, cuando triunfó la coalición encabezada por el Congreso con Sonia Gandhi –nacida en Italia y esposa del asesinado hijo de Indira– como su dirigente máxima.

Los principales conflictos presentes desde la creación del estado nacional son la guerrilla maoísta, las reivindicaciones autonomistas y de justicia social de diferentes etnias, y la violencia en Cachemira.

Cachemira

En un principio Nehru aceptó un alto grado de autonomía para la región, a tal punto que Jammu y Cachemira se convirtieron en el único estado indio con Constitución propia. A la muerte de Nehru en 1964, tanto Indira como su hijo y sucesor Rajiv Gandhi insistieron en la centralización de la autoridad y eliminaron sistemáticamente el poder de las diferentes regiones, reduciendo a los gobernantes de los respectivos estados a la categoría de honorables vasallos.

El Frente de Liberación de Jammu y Cachemira inició una espiral de violencia en julio de 1988 con la explosión de tres bombas en edificios del gobierno indio en Srinagar. La gravitación cada vez mayor de las armas se relaciona con el retroceso en la autonomía de la región y la creciente conciencia nacionalista de los cachemires, impulsada por la alfabetización, los progresos en la economía y también por el endurecimiento de la identidad islámica ante la intensificación del nacionalismo hindú, que reclamaba la incorporación plena de la región en la Unión India.

Pakistán se involucró en el conflicto proporcionando santuarios, entrenamiento y armas a los islamistas de Cachemira. El resultado fue una islamización de la violencia que se vio reflejada en los ataques a la comunidad hindú cachemir a comienzos de los años noventa. La India respondió con el despliegue de una poderosa fuerza militar en Cachemira y la violación sistemática de los derechos humanos entre 1990 y 1996.

Mientras los habitantes de Cachemira sufren al ejército indio como una fuerza de ocupación y lo acusan de limpieza étnica, la India denuncia los campos de refugiados hindúes en Jammu y Nueva Delhi, como asimismo la discriminación y opresión de la minoría hindú en Cachemira. Con el incremento del nacionalismo hindú que desplaza al secularismo, y el mayor cariz islámico del terrorismo cachemir a través del apoyo paquistaní y la intervención de numerosos combatientes procedentes de Afganistán, la identidad religiosa de los contendientes se ha impuesto como una dimensión clave del conflicto.

Casi todos estos conflictos han estado cada vez más interconectados con otras luchas en la región o en zonas más remotas. Al mismo tiempo, se destaca la intensificación de las acciones terroristas encaradas por grupos islámicos. El discurso oficial y de buena parte de los medios de comunicación las vincula con las ambiciones de expansión de Pakistán o bien con el peso de los islamistas radicales en el fallido estado pakistaní. Desde esta perspectiva, la India se ubica con los Estados Unidos, el Reino Unido o España como víctima del eje yihadista global. Otros analistas subrayan, en cambio, las tensiones internas: por un lado, un estado que ha fracasado sistemáticamente en contener la agresividad del nacionalismo hindú y que en los últimos años la ha estimulado; por otro, la manifiesta radicalización de la población musulmana en virtud de su condición marginal.

A partir de su independencia, Pakistán sufrió permanentes crisis políticas, y desde 1958 hasta 1972 se sucedieron los golpes y los gobiernos militares. En el marco del trauma ocasionado por la pérdida de Bangladesh, los militares abandonaron el gobierno y Zulfikar Ali Bhutto, líder del Partido Popular Pakistaní, con una propuesta a favor de la mejora de las condiciones sociales de los más postergados, ocupó la presidencia en 1972. Un nuevo golpe lo destituyó en 1977 para encarcelarlo y ejecutarlo después.

El general Zia-ul Haq promovió la islamización en todas las esferas de la vida política y social a lo largo de su dictadura, que se prolongó hasta 1988, cuando murió en un presunto accidente aéreo. En contraste con el régimen islámico iraní, Zia se convirtió en el principal apoyo de los Estados Unidos en la región. Fue el enlace por el que pasó la ayuda decisiva de Washington a la yihad de los afganos contra los soviéticos. Mientras Jomeini movilizaba a la juventud urbana pobre para eliminar a las elites dirigentes de la época del sah, en Pakistán los intelectuales islamistas fueron incorporados a un régimen que logró contener los conflictos sociales y en el que las elites dirigentes mantuvieron sus privilegios. La dictadura fue apoyada por la burguesía, beneficiaria de la prosperidad propiciada por la ayuda estadounidense y saudí y por el tráfico legal e ilegal de mercancías entre Afganistán y Pakistán. En cambio, los profesionales e intelectuales afectados por la islamización de las leyes se mantuvieron distantes del régimen.

Al calor de la guerra en Afganistán, el grupo musulmán deobandi ganó terreno en la provincia de la frontera noroeste y en Baluchistán vía el establecimiento de cientos de escuelas. En ellas, jóvenes pakistaníes y refugiados afganos recibieron educación gratuita, alimento, vivienda y entrenamiento militar, tareas para las que contaron con fondos sauditas. En los años noventa, los deobandis apoyaron a los talibanes en Afganistán y se sumaron a las acciones de represalia contra los chiitas de Pakistán.

Después de la muerte de Zia, el gobierno volvió a manos de los políticos, alternándose en su ejercicio el Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana. En 1999 el general Pervaiz Musharraf dio un nuevo golpe: cerró el Parlamento, suspendió la Constitución y se autodesignó jefe ejecutivo del país. Controló el gobierno hasta 2008, cuando, a raíz del asesinato de Benazir Bhutto, decidió retirarse y aceptar la vuelta de los políticos.

Desde el atentado del 11 de septiembre, el margen de acción concedido por el gobierno militar a los islamistas pakistaníes, especialmente en Cachemira, se vio reducido. La invasión de Afganistán encabezada por los Estados Unidos en represalia por el ataque a las Torres Gemelas fue un mensaje contundente: ningún gobierno podía amparar las acciones de los islamistas radicales. Aunque parte de los pakistaníes simpatizaba con el régimen de los talibanes, el general Musharraf decidió unirse a Washington en su cruzada antiterrorista y purgó la jerarquía de las fuerzas armadas de simpatizantes protalibanes. Al mismo tiempo que consolidaba su vínculo con la principal potencia mundial, el general enfrentó manifestaciones cada vez más violentas, que cuestionaban su posición prooccidental. El presidente Bush le brindó una generosa ayuda económica para asegurar su condición de aliado clave en la región. Simultáneamente, la India apeló a los Estados Unidos para que extendiesen a Cachemira su lucha contra el terrorismo y acusó a Pakistán de financiar a los grupos terroristas que seguían operando en la zona.

En el Sudeste asiático, la crisis del bloque soviético debilitó a los grupos comunistas armados en Tailandia, Malasia y Myanmar, provocó cambios socioeconómicos en Vietnam y Laos –que mantuvieron los regímenes comunistas de partido único– y cerró el ciclo de la ocupación vietnamita en Camboya (1979-1989). Este país enfrenta el doble desafío de una aguda pobreza y la prolongación de un régimen controlado por los ex comunistas, signado por las luchas facciosas y con escaso margen para las actividades de la oposición política. En gran medida, las tensiones políticas remiten a la traumática experiencia del régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979). Parte de los actuales funcionarios de alto rango integraron dicho grupo, que fue responsabilizado del asesinato de más de un millón de personas. La falta de una decidida voluntad política de impartir justicia permitió que los principales dirigentes murieran sin ser juzgados. Este fue, de hecho, el caso de Pol Pot, el “Hermano número uno”, que falleció en 1998.

Desde comienzos del nuevo siglo, el contraste entre la República Socialista de Vietnam y sus vecinos ha sido llamativo. Su empuje económico se asemeja al de los países del Sudeste asiático a principios

de la década de 1990: talleres que funcionan las veinticuatro horas, intenso crecimiento urbano y un sector inmobiliario impulsado por la especulación desenfrenada. En Hanói, como en China, los comunistas intentan conciliar el régimen de partido único con una economía de mercado basada en el ingreso de inversiones extranjeras. En su afán por integrarse al mundo globalizado –Vietnam es miembro de la OMC desde 2007–, Hanói ofrece una serie de "ventajas": bajos salarios, recursos humanos capacitados y una burocracia autocrática pero eficiente y comprometida con los cambios en curso.

El impacto de las políticas económicas neoliberales y el fin de la Guerra Fría incidieron en la caída de las dictaduras de Ferdinando Marcos en Filipinas (1986) y de Mohamed Suharto en Indonesia (1998). El período posdictatorial filipino aparece signado por la inestabilidad política y las denuncias de corrupción contra los sucesivos gobiernos. El ejército continúa siendo un factor de poder clave y sus acciones represivas se justifican en nombre de la lucha contra el terrorismo global, encarnado en este país por el grupo extremista musulmán Abu Sayyaf.

El general Suharto dirigió Indonesia durante treinta y dos años (1965-1998) con mano de hierro: fue instigador de violentas represiones contra todos los ciudadanos calificados de comunistas y contra todos los reclamos autonomistas. En el plano económico, el proyecto desarrollista logró resultados alentadores en los primeros años, a pesar del altísimo grado de corrupción de familiares y allegados del dictador. Suharto dimitió en 1998, en el marco de la crisis económica y financiera asiática (1997-1999) y bajo la presión de movilizaciones populares, pero no fue investigado por sus actos y su muerte fue llorada por decenas de miles de simpatizantes.

El quiebre del régimen debilitó la autoridad del gobierno central indonesio y los militares se vieron obligados a reducir su papel dominante en la política interna. La caída de la dictadura fue acompañada por una gran convulsión social –protestas estudiantiles, ataques contra las comunidades chinas– y por la exacerbación tanto de los conflictos entre diferentes comunidades (Sulawesi, Kalimantan, Molucas) como de los de carácter secesionista (Aceh, Papúa Occidental, Timor Oriental). Al mismo tiempo, las organizaciones islámicas ganaron creciente peso político: Abdurrahman Wahid, presidente elegido democráticamente (1999-2001), había dirigido antes el Nahdlatul Ulama, una organización musulmana con decenas de millones de miembros, de índole moderada y tradicional. Bajo el régimen de Suharto, como en otros países musulmanes con regímenes autoritarios, el islam constituyó un refugio y una opción para la acción social. Durante décadas la vinculación de los indonesios con el mundo árabe fue menor que la de los musulmanes de otros países. Sin embargo, muchos ulemas indonesios estudian ahora en Egipto y otros países árabes, donde han entrado en contacto con una versión más radical del islam político.

En Timor-Leste, anexada por Indonesia en 1975 al calor del derrumbe del imperio portugués, el referéndum de 1999 fue favorable a la independencia. Pero el rechazo de sectores nacionalistas y de las fuerzas armadas indonesias a este resultado desató un período de violencia extrema. Milicias proindonesias equipadas y entrenadas por el ejército arrasaron el país operando desde Timor Occidental, y una cuarta parte de la población huyó a las montañas. Se desconoce el número exacto de personas asesinadas por estos ataques, que se extendieron hasta el año 2000 y llegaron incluso a los campos de refugiados. Debido a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas negó la creación de un Tribunal Internacional, fue el propio sistema judicial indonesio el encargado de juzgar los crímenes, que fueron parcialmente investigados.

Timor logró su independencia en mayo de 2002 sin alcanzar un clima de paz consistente, y las tensiones internas desembocaron en un grave estallido de violencia en 2006.

El nuevo orden global y el fin de la Guerra Fría no modificaron el escenario político en Myanmar. El gobierno siguió en manos de la represiva junta militar instalada en la década de 1960. Aunque las fuerzas opositoras lideradas por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, obtuvieron más de un 80% de los escaños legislativos en las

elecciones de 1990, el gobierno desconoció este resultado y mantuvo el arresto domiciliario de la dirigente. Las reivindicaciones de las organizaciones a favor de la democracia coexisten con las de varios grupos armados de matriz étnica que, desde los años cuarenta, luchan por la independencia o la autonomía de las regiones periféricas del país, donde reside la mayoría de los numerosos grupos étnicos no birmanos.

En el reino de Tailandia los gobiernos de sesgo democrático no lograron subordinar las fuerzas armadas al orden constitucional. En septiembre de 2006, los militares dieron un nuevo golpe, el decimonoveno desde 1932. La destitución del líder de la agrupación Tailandeses que aman Tailandia, creada en 1999 y triunfante en las elecciones de 2001 y 2005, fue presentada como el necesario fin de un gobierno corrupto e incapaz de controlar la espiral de violencia. En las tres provincias meridionales limítrofes con Malasia, con mayoría de población malaya y musulmana, desde 2004 los grupos secesionistas incrementaron sus acciones armadas para obtener la autonomía.

En contraste con los casos anteriores, Malasia ha sido una sociedad multirracial relativamente armoniosa. De una economía agraria pasó a tener un importante crecimiento industrial y urbano en un escenario político estable, bajo la conducción de la coalición Frente Nacional, cuyo principal pilar es la Organización Nacional para la Unidad Malaya. En los últimos tiempos, las relaciones interétnicas se han deteriorado. Para recuperar a un electorado atraído por el Partido Islamista de Malasia, la Organización Nacional para la Unidad Malaya se orienta hacia iniciativas promusulmanas que la alejan de la coalición forjada con otras fuerzas políticas.

En casi todos los países de esta región, en el marco de la descolonización o poco después, se formaron grupos armados que cuestionaron la legitimidad del nuevo estado. En algunos casos –por ejemplo el Nuevo Ejército del Pueblo en Filipinas–, porque proponían un nuevo tipo de régimen; en otros, porque esgrimían los agravios de grupos que no se sentían reconocidos en la fórmula identitaria impuesta desde el poder –como los grupos Moros en el sur de Filipinas, el caso de Aceh y Papúa Occidental en Indonesia, los malayos en Tailandia o los tamiles en Sri Lanka–. La condición de minoría sojuzgada restringió las posibilidades de intervención política y cultural de estas comunidades y afectó negativamente sus condiciones de vida material.

La existencia de gobiernos autoritarios fue un factor clave en la radicalización de los conflictos armados. Las políticas de represión militar y discriminación económica y política favorecieron el fortalecimiento de los grupos armados de oposición, a cuyas filas se sumaron miles de personas. Por otra parte, en las estructuras del estado prevaleció una visión centralista y excluyente, junto con prácticas violentas y al margen de la ley por parte de los cuerpos de seguridad. En Indonesia las fuerzas armadas se erigieron en garantes de la integridad del estado a través de la brutal represión de cualquier foco autonomista y, simultáneamente, aprovecharon su presencia en buena parte del territorio para tejer una enorme red de actividades económicas, la mayoría ilícitas, que permitió solventar sus costos de equipamiento y alentó el enriquecimiento personal de sus integrantes.

Los grupos islámicos que han operado durante decenios en sus propios países, principalmente en Indonesia, Filipinas y Tailandia, fueron relativamente débiles durante décadas. En la posguerra fría el islamismo militante ha ganado terreno, en parte como opción que encauza la protesta social, pero también debido a la frustración y la ira generadas por regímenes autoritarios y corruptos que han exacerbado las diferencias étnicas y religiosas a través del manejo discrecional de los recursos estatales. A estos factores se suma la experiencia de la yihad afgana, ya que gran parte de los líderes de los grupos islamistas militarizados de la región participaron o fueron entrenados en esta guerra contra los soviéticos. Los grupos militarizados proponen la vigorización del islam en los estados con orientación secular, como es el caso de Indonesia, o intentan crear estados islámicos independientes en las áreas de mayoría musulmana incluidas en países con otro credo oficial, como son los casos de Filipinas y Tailandia. Los menos –por ejemplo, la Jemaah Islamiya (Grupo Islámico o Comunidad

Islámica), supuestamente vinculada con Al Qaeda– pretenden establecer un nuevo estado islámico de alcance regional que incluya a Indonesia, Malasia y el sur de Filipinas. Esta organización es la presunta responsable de los atentados de Bali (Indonesia) en octubre de 2002. El grupo musulmán militante más grande y organizado de Indonesia, Laskar Jihad (Combatientes de la Guerra), fue fundado en 2000 y su creador estudió durante varios años en Pakistán y luchó junto con los muyahidines en Afganistán. Concentra sus fuerzas en librar una guerra santa contra los cristianos en las islas indonesias de Molucas y Sulawesi. Algunos analistas sostienen que para estas acciones cuenta con el apoyo de miembros de las fuerzas militares y policiales indonesias.

En Filipinas, la organización Abu Sayyaf, nombre de un combatiente muyahidín de Afganistán, es la más reciente de la larga lucha por la autonomía de Mindanao. Rechaza cualquier tipo de acuerdo con la mayoría cristiana y cree que la violencia es la única vía para conseguir sus objetivos. Los expertos en terrorismo le adjudican una fuerte impronta mafiosa. El estado filipino también es cuestionado con las armas por el Nuevo Ejército del Pueblo, el ala militar del Partido Comunista de Filipinas, que se ha propuesto transformar el régimen mediante una prolongada guerra de guerrillas. Aunque posee una base eminentemente rural, también cuenta con apoyos urbanos activos en la concreción de actos terroristas.

En Malasia opera Kumpulan Muyahidín Malasia, con el propósito de poner fin al orden multiétnico e instaurar un estado islámico con potestad sobre Malasia, Indonesia y el sur de Filipinas. Fundado en 1995, muchos de sus miembros se han formado en los campamentos de Afganistán.

En los últimos años, el Sudeste asiático se ha erigido en uno de los escenarios calientes de la llamada "lucha global contra el terrorismo". A ello han contribuido los nuevos atentados de gran calibre y la creciente certidumbre de que algunas organizaciones armadas han ganado apoyos en escenarios con prolongados conflictos armados o bien con tensiones entre diferentes comunidades. La injerencia de estas organizaciones en conflictos políticos o comunitarios se ha evidenciado con mayor claridad en Sulawesi, Molucas y Mindanao y parece avanzar en el sur de Tailandia.

La inclusión del Sudeste asiático en el mapa de la lucha antiterrorista tiene funestas consecuencias para la resolución de los conflictos armados de la región. En primer lugar, la extendida calificación de "terrorista" utilizada por los gobiernos dificulta el diálogo con los grupos que expresan reivindicaciones políticas y sociales. La ausencia de canales de participación y el hecho de que las demandas políticas y sociales de la población sean esgrimidas por las organizaciones armadas incrementa la radicalización de los conflictos, la polarización de las sociedades, la petrificación de las identidades y los alcances de la violencia. En segundo lugar, el rótulo "terrorista" engloba reclamos e identidades diferentes e instala la lógica amigo/enemigo que clausura la vía política y favorece la agudización de la violencia.

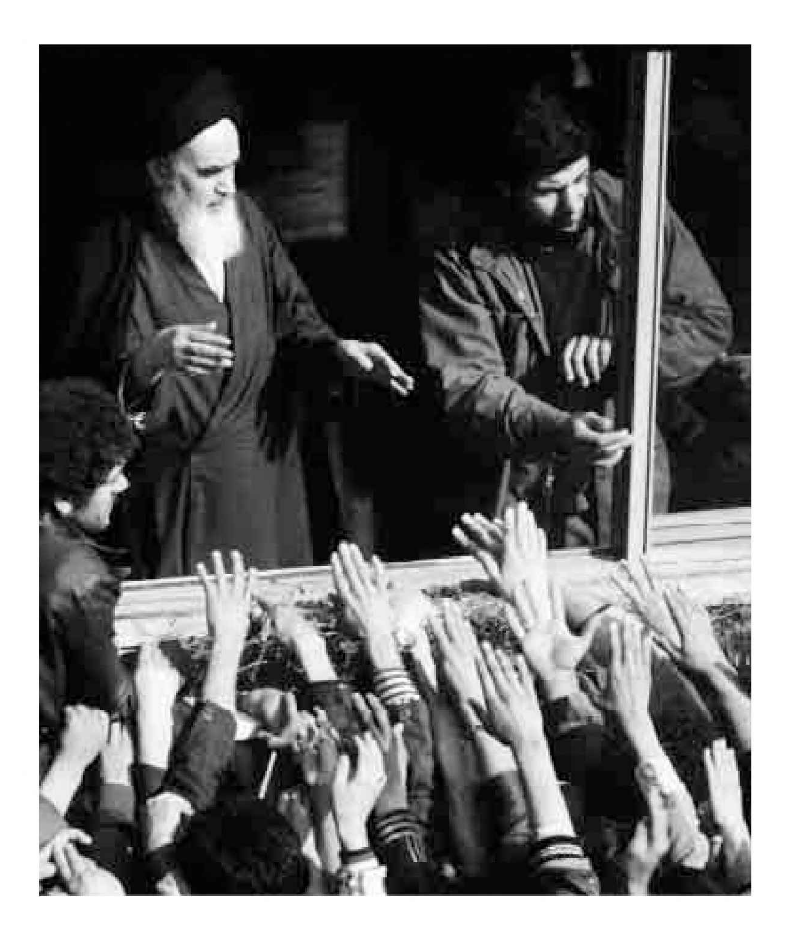
La crisis en Asia Occidental y el islamismo radicalizado

A fines de los años setenta, el área musulmana localizada en Asia Occidental –Oriente Medio, Irán y Afganistán– fue atravesada por hondas convulsiones. El alto grado de conflictividad resultó de la combinación de dos procesos claves en la gestación de la Segunda Guerra Fría: la revolución liderada por Jomeini en Irán y la resistencia de los muyahidines –apoyados por los Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán– a la invasión soviética de Afganistán. A estos hechos se sumaron los cambios significativos operados en el mundo árabe, especialmente en Egipto, Irak, el Líbano y los territorios palestinos. Las interrelaciones entre estos procesos tuvieron profundas y prolongadas repercusiones en todo el mundo musulmán y en el escenario internacional de la posguerra fría.

En Irán, el chiismo protagonizó la única revolución exitosa impulsada por el islamismo militante. En la protesta contra la

monarquía secular decididamente modernizadora y prooccidental, participaron tres grandes grupos: los intelectuales liberales y socialdemócratas emparentados con la herencia de Mossadeq, la izquierda del Partido Comunista y de grupos más radicales, y los religiosos chiitas. Algunos intelectuales occidentales la juzgaron como una revolución social de izquierda. Con la renuncia del sah Reza Pahlevi se instauró una república islámica que reconoció la Sharia como el principio rector del nuevo régimen y en la que a Jomeini, su guía espiritual, se le concedió un poder vitalicio por encima de todas las instituciones del estado. El clero chiita, con un significativo apoyo popular, se impuso como el grupo dominante. Los otros actores que habían contribuido a la caída de la monarquía no aceptaron la impronta decididamente religiosa del nuevo orden, y tanto liberales como comunistas fueron reprimidos.

La revolución islámica iraní fue un acontecimiento desconcertante. La llevó a cabo un sector del clero que rechazaba los supuestos de todas las revoluciones posteriores a 1789, que apelaba a la imposición de unos principios y de un modelo político que se remontaban al siglo VII, y que impugnaba las preocupaciones materiales. En principio, la revolución se presentó como una ruptura espectacular a favor del fundamentalismo contrapuesto a la modernidad. Sin embargo, el proceso estaba atravesado por fines y rasgos contrarios a esta preceptiva. La presión de las masas jugó un papel determinante en la caída del régimen monárquico, y las razones que impulsaron la protesta social incluían varios factores de tipo más o menos laico e incluso material: el desarrollo de una situación explosiva en las ciudades impactadas por las migraciones masivas, el alto grado de corrupción de la monarquía, el deterioro del nivel de vida debido a la inflación, y la clausura de todas las otras opciones políticas opositoras, como los nacionalistas y comunistas. El éxito de Jomeini fue posible porque amalgamó ese conjunto de problemas en una propuesta concentrada en metas sencillas y de amplio consenso: la expulsión del sah y la liquidación de la influencia occidental en el país, especialmente la norteamericana. La revolución se gestó en el seno de las clases medias y pobres de las ciudades, y aunque recurrió a la violencia, alcanzó sus objetivos básicamente por medios políticos y a través de la adhesión de distintos grupos sociales. La paradoja de la revolución iraní es haber sido una revolución social tradicional y a la vez moderna. Más allá de su impronta religiosa, la terminología y las medidas políticas enunciadas por Jomeini resultan muy familiares a la luz de los movimientos populares del Tercer Mundo en la inmediata posguerra. Los principales lemas políticos del líder chiita –revolución, independencia, autosuficiencia económica– fueron las metas convencionales del nacionalismo tercermundista.



Jomeini es saludado por sus seguidores al regresar a Irán en febrero de 1979, después de haberse exilado en Irak entre 1964 y 1978 a raíz de la persecución del gobierno del sah. Hasta su muerte, en 1989, se reservó la jefatura de estado con la denominación de Líder Supremo de Irán.

La mayor parte de los intelectuales occidentales rechazó el movimiento chiita iraní por considerarlo una expresión del fanatismo religioso. Entre quienes se entusiasmaron con “la movilización de las masas contra un estado corrupto” estuvo el filósofo francés Michel Foucault, quien después de haber visitado el país la definió como “la primera revolución posmoderna de la historia”.

Aunque Jomeini empezó renunciando al patriotismo y a la identidad iraní en nombre del islam, recurrió a ambos en cuanto se inició la invasión iraquí de 1980. La guerra con Irak (1980-1988) restó recursos y debilitó la capacidad de acción del gobierno, aunque también favoreció la cohesión de la población en torno al nuevo régimen.

Sin tener en cuenta el carácter secular del gobierno iraquí encabezado por Saddam Hussein, las monarquías petroleras –que veían una amenaza en los planteos republicanos y en la extendida movilización social del régimen chiita– lo apoyaron en la guerra emprendida para rediseñar las fronteras con Irán. El presidente iraquí esgrimió los valores del arabismo, cuna del islam, y recordó las exitosas empresas militares de los árabes contra los persas en el siglo VII. Irán lo denunció por haber erradicado los principios del islam de la sociedad iraquí. Si bien Hussein contó con mayor respaldo de los países occidentales, ambos contendientes recibieron armas vía Washington y la guerra fue vista, desde los centros de poder, como el mejor medio para que los dos estados menos confiables de la región se debilitaran entre sí.

El caso Irán-Contra

La administración Reagan, con el argumento de que el nuevo gobierno sandinista de Nicaragua se proponía exportar la revolución marxista a toda América Central, se involucró decididamente en acciones destinadas a derribarlo.

A fines de 1981 Washington autorizó a la CIA a invertir una alta suma de dólares para crear la Contra, una fuerza paramilitar de opositores básicamente integrada por antiguos miembros de la guardia nacional de la dictadura militar derrocada por los sandinistas. Pero, al año siguiente, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda que limitaba la ayuda a esta organización. A fin de resolver esta restricción, el personal del Consejo de Seguridad Nacional, una institución asesora de la Casa Blanca, montó una operación para obtener financiación secreta de fuentes privadas norteamericanas.

En 1985, varios de estos funcionarios se involucraron en un plan para vender secretamente misiles a Irán, a cambio de la liberación de los siete ciudadanos norteamericanos retenidos por musulmanes proiraníes en el Líbano.

Israel actuó en principio como intermediario de los envíos de armas. Parte de los beneficios de la venta fueron desviados a la Contra nicaragüense. En su testimonio ante el comité a cargo de la investigación de estos delitos, uno de los acusados reconoció como muy buena “la idea de utilizar el dinero del ayatolá Jomeini para apoyar a los guerreros de la libertad nicaragüense”.

La revolución iraní no tuvo la expansión temida por los regímenes conservadores. Su carácter chiita y el hecho de haberse gestado en el

único país musulmán no árabe de Oriente Próximo obstaculizaron su influencia sobre el resto de los países islámicos de la región. No obstante, en la década de 1980 surgieron nuevos grupos islamistas radicalizados que enarbolaban la bandera del islam para canalizar las demandas de independencia y justicia social esgrimidas, básicamente, por los jóvenes alfabetizados y urbanizados pero marginados. En Palestina, en el marco de la "revuelta de las piedras" de 1987 (la Intifada), se afianzó Hamas, quien desafió la hegemonía de la OLP.

El Movimiento de Resistencia Islámica

Hamas (en árabe, "coraje, ardor") surgió de una rama de los Hermanos Musulmanes dedicada al trabajo religioso, social y educativo en Gaza, donde viven hacinados casi dos millones de palestinos en condiciones inferiores a las de sus pares en Cisjordania.

Según la Carta fundacional de esta organización, Palestina es una tierra islámica "consagrada a futuras generaciones musulmanas, hasta el día del Juicio Final", y ningún dirigente árabe tiene derecho a ceder parte de ese territorio. En consecuencia, Hamas negó la existencia del estado de Israel. En los años noventa combinó su labor social con ataques suicidas contra los israelíes. El primer atentado masivo consistió en la explosión de un coche bomba junto a una parada de ómnibus en el norte de Israel, en 1994.



La primera Intifada comenzó en un campo de refugiados en Gaza a principios de noviembre de 1987. Miles de personas, en duelo por la muerte de cuatro trabajadores árabes en un choque con un camión israelí, iniciaron una marcha hacia un campo del ejército israelí, convencidos de que el accidente había sido deliberado. Las tropas israelíes dispararon sobre los manifestantes, algunos palestinos murieron y la Franja de Gaza estalló en una lluvia de piedras, cócteles Molotov y neumáticos incendiados.

La segunda Intifada estalló en 2000 a raíz de la llegada del ex ministro de defensa israelí Ariel Sharon al recinto sagrado musulmán de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, el 28 de septiembre de ese año.

En el caso de Argelia, las movilizaciones de 1988 marcaron el fin de la

legitimidad revolucionaria del Frente de Liberación Nacional que había encabezado la resistencia contra Francia y gobernaba el país desde su independencia en 1962. Se aceptó la convocatoria a elecciones competitivas que consagraron al Frente Islámico de Salvación como la mayor fuerza política del país. Pero la interrupción de las elecciones por parte del ejército desencadenó una lucha sangrienta.

También el Líbano, a mediados de la década de los setenta, ingresó en una pesadilla de muerte y destrucción en la que se combinaron la guerra civil y las invasiones de Israel. En este contexto, emergió y se fortaleció el nuevo Partido de Dios (Hezbolá).

Los conflictos armados en el Líbano

Con el crecimiento demográfico de los musulmanes, el pacto suscripto al concluir la dominación francesa para repartir las *cuotas de poder* ya no se correspondía con el peso de las distintas poblaciones. Las reivindicaciones de los musulmanes chiitas, la comunidad más postergada, fueron canalizadas inicialmente por el Movimiento de los Desposeídos, liderado por Musa Sadr, nacido en Irán y educado en Najaf (Irak), un importante centro del saber islámico chiita.

A la guerra civil de 1975-1976, resultado de la exacerbación de las demandas encontradas entre los diferentes grupos sociales y religiosos –drusos, maronitas chiitas y cristianos–, se sumó el enfrentamiento en el sur del país entre las fuerzas de la OLP y los comandos israelíes, que contaron con la colaboración de las falanges cristianas libanesas. Tel Aviv avaló las aspiraciones separatistas de los sectores cristianos apoyando la formación de un Estado del Líbano Libre en el sur del país.

En junio de 1982 Israel puso en marcha la operación Paz de Galilea y la ciudad de Beirut, donde se encontraban Arafat, la cúpula militar de la OLP y los milicianos libaneses de diversas filiaciones, quedó enteramente rodeada. Al cabo de más de dos meses de bombardeos que prácticamente destruyeron la ciudad, llegó una Fuerza Multinacional formada por soldados estadounidenses, franceses e italianos con la misión de proteger la evacuación de quienes resistían en la ciudad. Arafat se trasladó a Túnez. Unos meses después, el atentado que costó la vida al dirigente maronita Bashir Gemayel, recién elegido presidente del Líbano, desencadenó la matanza de palestinos y libaneses en los campos de refugiados de Sabra y Shatila (16 de septiembre de 1982) por falangistas cristianos, con la complicidad de Tel Aviv. En virtud de esta acción criminal, Sharon, el ministro de Defensa israelí, fue obligado a renunciar en febrero de 1983. Al calor de estas luchas surgió Hezbolá (el Partido de Dios), una organización islámica mucho más radical que la creada por Sadr y apoyada por el régimen chiita de Irán, que reemplazó a la organización palestina en la lucha contra la ocupación del sur por el ejército israelí. La retirada de este recién se produjo en el año 2000. Hezbolá, que había debutado en el Líbano como un ejército irregular, decidió la creación de una rama política para intervenir en las elecciones, pero sin abandonar las armas y asumiendo un activo compromiso con la lucha de Hamas contra la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania. Los Estados Unidos incluyeron a este movimiento en la lista de organizaciones terroristas; sin embargo, Hezbolá logró

ingresar en el Parlamento libanés gracias a la adhesión de los musulmanes chiitas.

Sobre las matanzas en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, el israelí Ari Folman filmó la película animada *Vals con Bashir*.



En julio de 2006, Israel puso en marcha la Operación Recompensa Justa y volvió a bombardear el Líbano en respuesta a la captura de dos soldados israelíes por Hezbolá.

Entre las señales de identidad de todos estos grupos figuró la reivindicación del islam, pero cada uno de ellos –y los conflictivos procesos en que desplegaron sus prácticas– presentó rasgos y dinámicas singulares y, en varios aspectos, fuertes contrastes entre sí.

En el marco de la Segunda Guerra Fría, fue en gran medida el temor a la expansión desestabilizadora de la revolución iraní el que indujo a la conservadora monarquía saudita a comprometerse con la lucha de los afganos contra los soviéticos, y a dar apoyo al secular gobierno iraquí en la guerra contra Irán. Sin embargo, en poco tiempo Hussein perdió a los aliados circunstanciales que anhelaban la caída de Jomeini.

El 2 de agosto de 1990 el gobierno de Irak invadió Kuwait, aduciendo que era un estado artificial creado por el colonialismo británico. Con esta anexión, según Hussein, Irak recuperaba una de sus provincias y se comprometía a colocar los beneficios obtenidos del petróleo al servicio de los más humildes. La tentativa alarmó a los Estados Unidos y los países árabes productores de petróleo: si Bagdad tenía éxito, se convertiría en el principal productor de oro negro y alcanzaría un inmenso poder militar.

El gobierno norteamericano organizó una vasta coalición internacional con el respaldo de la ONU, a la que se sumó Arabia Saudita. Con el argumento de una posible invasión iraquí, la monarquía saudita permitió el desembarco de las tropas norteamericanas en la tierra de Mahoma. Desde la expulsión de los turcos al final de la Primera Guerra Mundial, la conservadora sociedad saudí no había conocido un ejército de ocupación. Para Bin Laden, esto fue tan grave como la invasión soviética de Afganistán, y esta posición le permitió erigirse en portavoz de muchos saudíes que consideraron humillante y sacrílega la masiva presencia militar. Bin Laden, que había sido emisario de la familia real saudita en Afganistán, llevó a sus últimos extremos la lógica wahabí que prohíbe la presencia de cristianos y judíos en los lugares santos musulmanes.

A principios de agosto de 1990 fueron enviadas las primeras tropas estadounidenses a Arabia Saudita como parte de la operación Escudo del Desierto, y en enero del año siguiente se puso en marcha el plan Tormenta del Desierto con el ataque a Irak. La guerra permitió a los Estados Unidos instalar bases militares en Arabia Saudita y en el Golfo Pérsico y establecer un protectorado en Kurdistán. El ejército iraquí fue completamente derrotado, pero el gobierno de Hussein se mantuvo en pie. Inicialmente, los Estados Unidos estimularon la insurrección de los chiitas iraquíes, sometidos a una dura represión política y cultural por parte del gobierno de su país, pero finalmente los dejó librados a su suerte. El presidente Bush privilegió la alianza

con los gobiernos de los países árabes, que preferían que los norteamericanos no derribasen a uno de los suyos y que además rechazaban la presencia de un Irak bajo el dominio de la mayoría chiita, seguramente apoyada por Irán.

La guerra desgarró al régimen iraquí. La clase media quedó reducida y pauperizada; más de un millón de trabajadores, profesionales y técnicos emigraron; y la burguesía, debilitada, se reintegró en parte a los viejos clanes que emergieron como instrumentos esenciales de la cohesión social. La desintegración social desarticuló el sistema de poder que la burguesía iraquí y el partido Baath habían organizado durante varias décadas: este proceso se manifestó en el desgaste del viejo imaginario patriótico laico teñido por trazos religiosos y, sobre todo, en el quiebre del ejército y la crisis del partido gobernante, cuya militancia cayó abruptamente, al mismo tiempo que se fracturaba el círculo gobernante.

Las condiciones impuestas por los vencedores fueron durísimas: un bloqueo casi total que impedía exportar petróleo e importar productos, no sólo los necesarios para el funcionamiento de la economía sino también para satisfacer necesidades perentorias de alimentación y salud, lo que provocó un altísimo número de muertes. La actividad industrial se derrumbó y el ingreso per cápita se redujo de 4219 dólares en 1982 a 485 en 1993. La soberanía iraquí mermó considerablemente. Los Estados Unidos establecieron dos zonas de exclusión aérea sobre las regiones de mayoría kurda y chiita, al norte y al sur respectivamente, que sus aviones sobrevolaban permanentemente.

Frente al avance estadounidense en la región, Hussein y Bin Laden, aunque desde posiciones diferentes, recurrieron a las mismas apelaciones: la guerra santa contra el infiel, la solidaridad con el pueblo palestino y la destrucción de Israel para movilizar a las masas contra los Estados Unidos, el enemigo común. Esta apelación radical resquebrajó el consenso islamista que había construido el sistema saudí. Cuando todos los organismos internacionales –que en el pasado habían servido para oponerse al nasserismo y para contener el empuje ideológico iraní– fueron movilizados contra Saddam, algunos de los aliados se mostraron reticentes. En enero de 1991 la Conferencia Popular Islámica sesionó en dos sedes: en Bagdad se aprobó el llamamiento a la yihad contra Occidente, y en La Meca se condenó a los ulemas que apoyaban a Saddam. Sin embargo, los gobiernos árabes y la alta jerarquía religiosa optaron por la moderación. Tanto la fatwa del Alto Consejo de los Ulemas de Arabia Saudita como las declaraciones del máximo líder religioso en Egipto denunciaron la agresión iraquí. En virtud de su oposición abierta al gobierno, en 1991 Bin Laden debió abandonar su país y dos años después perdió la ciudadanía saudita. Cuando declaró la yihad contra Occidente, encontró sus mayores apoyos en Sudán y Afganistán, con gobiernos radicales sunitas, pero ni el régimen chiita de Irán ni el secular de Irak se sumaron a su campaña.

Durante la Guerra del Golfo, Arafat apoyó a Saddam y esta decisión condujo al desvío de la ayuda de las petromonarquías desde la OLP hacia el movimiento islamista Hamas, más radicalizado.

Una vez derrotado Hussein, el gobierno de Bush puso en marcha el denominado Nuevo Orden Regional para Oriente Medio con la convocatoria en Madrid de la Conferencia de Paz Árabe-Israelí, inaugurada en octubre de 1991. Participaron los delegados del Líbano, Siria, Israel y Egipto, y el representante palestino fue incluido en el grupo jordano. En lugar de la Conferencia Internacional de Paz promovida y auspiciada por las Naciones Unidas, se impulsó un proceso diseñado y supervisado unilateralmente por los Estados Unidos. Después de los duros golpes recibidos en el Líbano, la OLP había dado un importante giro al aceptar dos resoluciones de las Naciones Unidas (242 y 338) por las que tácitamente reconocía el derecho a la existencia de Israel. En adelante, se concentró en reclamar la edificación de dos estados separados en los territorios palestinos: el de Israel, ya existente, y el de Palestina, en las zonas ocupadas de Gaza y Cisjordania.

Bush se apoyó en la victoria en Kuwait para forzar a los debilitados Arafat e Isaac Shamir a buscar una salida al callejón político y militar

nacido de la primera Intifada. El líder de la OLP se había desacreditado al apoyar la acción de Hussein y el primer ministro israelí sufría el desgaste ocasionado por la brutal represión de la Intifada. Sin la presencia de la Unión Soviética, Washington creyó que había llegado el momento de conciliar sus principales objetivos en Oriente Medio: confirmar la existencia del estado de Israel y avanzar hacia una distensión que asegurase el acceso a los hidrocarburos de la región.

El auténtico inicio del diálogo tuvo lugar en 1992, cuando el gobierno laborista israelí, encabezado por Isaac Rabin y Simon Peres, aceptó entablar negociaciones secretas con los palestinos en Oslo. El 13 de septiembre de 1993, Arafat y Rabin firmaron en Washington la Declaración de Principios para el Autogobierno Palestino (Oslo I). El acuerdo estableció una autonomía transitoria en Gaza y Cisjordania, que daría paso a una solución definitiva al cabo de cinco años. En ese lapso, Israel traspasaría algunas competencias en zonas de Cisjordania y de Gaza a una autoridad palestina autónoma elegida democráticamente. La negociación del acuerdo permanente que pondría fin a la ocupación militar israelí comenzaría en 1996 y concluiría en mayo de 1999.

En julio de 1994, Arafat regresó a Gaza como presidente de la Autoridad Palestina. El acuerdo sobre la Franja de Gaza y Jericó de ese año sólo asignó a los mandatarios palestinos competencias administrativas muy limitadas, sin reconocerles facultades en el campo de las relaciones internacionales. La posición de la OLP, y en menor medida la de Arafat, se tornó cada vez más débil, tanto en virtud de los escasos resultados de las negociaciones con Israel como del carácter autoritario y el alto grado de corrupción de las nuevas autoridades. En la sociedad palestina ganó creciente peso Hamas, con su amplia y eficaz red de asistencia social y un definido radicalismo que incluía ataques suicidas dirigidos contra los civiles de Israel, la reivindicación de la religión musulmana en contraste con el laicismo de la OLP, y el rechazo del estado de Israel. Arafat vio en Hamas un rival de cuidado con el que buscó negociar para eludir una guerra civil palestina, pero al que también reprimió duramente.

Clinton se involucró más decididamente que Bush en el proceso de paz. En julio de 2000 reunió a Arafat y al ministro laborista israelí Ehud Barak en la cumbre de Camp David para destrabar las cuestiones más controvertidas del estatuto final del nuevo estado palestino: la condición de la ciudad de Jerusalén, las colonias judías en los territorios palestinos y el futuro de los refugiados. Respecto a la ciudad de Jerusalén, a la que ambos pueblos reclaman como su "capital irrenunciable" y que desde la guerra de 1967 está ocupada en su totalidad por Israel, los palestinos pedían recuperar el control de los barrios árabes y los lugares santos musulmanes y cristianos. En relación con los asentamientos de colonos judíos levantados en los últimos treinta años en Cisjordania y Gaza, los sectores más duros israelíes pretendían anexionarlos como parte de su país, mientras que los palestinos planteaban su total desmantelamiento. En Camp David, Barak ofreció la entrega del 97% de los territorios de Cisjordania y Gaza –donde se crearía el estado palestino– y la cesión de los barrios árabes de Jerusalén. Arafat no cedió, había que desmantelar todos los asentamientos judíos en territorio palestino. Pero el punto central del desacuerdo fue su exigencia sobre el retorno de los refugiados palestinos a su patria, que Barak rechazó de plano, a cambio de proporcionar ayuda económica a los exiliados.

El futuro de los refugiados era el asunto más delicado, ya que afectaba a cerca de cuatro millones de palestinos que se habían visto forzados al exilio tras las guerras de 1948 y 1967, la mayoría viviendo en Cisjordania, Gaza, Jordania, el Líbano y Siria. Mientras Arafat invocaba el derecho de los expulsados a regresar a sus hogares, los Estados Unidos e Israel defendieron como mejor opción su naturalización en los países de acogida y la reparación económica mediante la creación de un fondo internacional que se distribuiría entre ellos. Aunque no se dijera explícitamente, el ingreso masivo de palestinos amenazaba el carácter judío del estado israelí. Una y otra vez, tanto Barak como Arafat reiteraron que existían límites que no sobrepasarían jamás por muchas presiones que recibiesen. Para ambos, el acuerdo final debía respetar un mínimo elemental que

satisficiese a las opiniones públicas de las comunidades a las que representaban.

En medio de la incertidumbre, a fines de septiembre de 2000 estalló la segunda Intifada. El desencadenante fue la provocativa visita del líder del partido nacionalista Likud y ex ministro de Defensa Sharon al recinto sagrado musulmán de la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén. La nueva “guerra de las piedras” tuvo raíces más profundas. Entre la firma del Acuerdo de Oslo en 1993 y septiembre de 2000 la situación de los palestinos había empeorado notablemente. Las ciudades se habían transformado en pequeñas islas rodeadas de asentamientos de colonos israelíes y de carreteras de circunvalación controladas. Jerusalén era una ciudad aislada de su entorno. La tasa de desempleo había alcanzado índices alarmantes, más de un 30%, el PIB había sufrido un retroceso del 20% según el Banco Mundial, y el 65% de la población vivía por debajo del nivel de pobreza.

Las movilizaciones fueron menos espontáneas y más violentas que las de 1987. El líder de Hamas, el jeque Yassín, hizo un llamamiento a Arafat para que suspendiese las conversaciones y declarase la guerra a Israel. Algunos autores sostienen que Arafat pretendió fortalecer su posición en la mesa de negociaciones vía la presión de las masas en la calle, pero el movimiento se le habría escapado de las manos a raíz de la intervención de Hamas. Israel volvió a ocupar algunos de los territorios autónomos y reprimió duramente las protestas. Del lado palestino, cada vez fueron más frecuentes las bombas humanas: jóvenes cargados de explosivos que los hacían estallar en lugares públicos de Israel (ómnibus, restaurantes, discotecas) y provocaban numerosas víctimas civiles entre los judíos.

Ante la crisis, Barak convocó a elecciones anticipadas para contar con el respaldo de la sociedad israelí a su política, pero el 6 de febrero de 2001 los israelíes se pronunciaron a favor de Sharon. Su triunfo significó el inicio de una nueva etapa. Había sido elegido porque prometió la seguridad absoluta, y la sociedad israelí esperaba ser salvada del miedo y de los ataques suicidas sin objetar los medios.

Para acabar con la resistencia palestina, el ejército israelí reforzó los controles en las carreteras, el acceso a Jerusalén quedó prohibido a los palestinos no residentes en la ciudad, y se prosiguió con la construcción de asentamientos para colonos israelíes, para lo cual miles de casas palestinas fueron demolidas y sus olivares arrasados. Con el fin declarado de neutralizar a los terroristas y a los que colaboraban con ellos, los territorios bajo control de la Autoridad Palestina fueron ocupados parcialmente.

A partir del brutal atentado del 11 de septiembre de 2001, Sharon tuvo la posibilidad de maximizar el uso de la fuerza y presentar sus acciones contra la resistencia palestina como parte de la campaña internacional contra el terrorismo global encabezada por los Estados Unidos. A mediados de 2002 puso en marcha la operación Muro Defensivo, concebida durante el gobierno de Barak.

El islamismo militarizado, los neoconservadores y el 11 de septiembre

El islamismo, como corriente política que tiene por objetivo establecer un estado y una sociedad basados en principios religiosos, se remonta a la década de 1920 con la fundación de la Hermandad Musulmana en Egipto, al papel desempeñado por esa organización y el liderazgo musulmán en la rebelión palestina de 1936-1939, y al movimiento en la India británica que desembocó en la creación del estado islámico de Pakistán en 1948. El islamismo militante se fue gestando como alternativa a los desafíos que agrietaban el orden musulmán al calor del impacto occidental: la dominación colonial, el surgimiento de partidos de masas seculares, ya fueran nacionalistas o comunistas, y los drásticos cambios impulsados por los estados modernizadores –los casos de Turquía e Irán– para imponer un orden laico en el plano jurídico, político, educativo y en las formas de vida. En el período posterior a 1945, las organizaciones religiosas pasaron a un segundo plano y los movimientos nacionalistas seculares –ya fuera el

encabezado por Sukarno en Indonesia o el liderado por Nasser en Egipto, entre otros– ocuparon el centro del escenario en los países surgidos de la descolonización. Ante la crisis del proyecto nacionalista a fines de 1960, la revolución iraní de 1979 dio un nuevo impulso al islamismo político. Los grupos radicalizados se extendieron desde el norte de África, principalmente Argelia, pasando por Bosnia, Oriente Medio y el Sur y el Sudeste asiático, y llegaron hasta la zona del Cáucaso. La mayoría recurrió cada vez más a la vía armada para lograr las reivindicaciones nacionales y sociales de los sectores en cuyo nombre actuaban.

En Afganistán, los militantes islámicos vivieron una experiencia bélica exitosa y a lo largo de esa lucha se produjo la fusión de movimientos radicados en el mundo árabe –como el wahabita– con otros influidos por el islamismo del sur de Asia –como la corriente deobandi–. Los deobandis crecieron en Afganistán de la mano de las organizaciones paquistaníes y llegaron a tener una influencia significativa sobre la juventud afgana, especialmente entre los habitantes de los campos de refugiados. La atmósfera de fundamentalismo militante entre estos jóvenes varones que vivían en escuelas religiosas desde edad temprana, sin contacto con su familia ni con mujeres, forjó la identidad de quienes constituirían el movimiento talibán. Cuando el gobierno comunista cayó en Kabul en 1992, la guerra civil prosiguió alimentada por las rivalidades entre los principales jefes políticos que habían encabezado la yihad y por las tensiones entre las distintas comunidades afganas: los pashtun, grupo mayoritario asentado básicamente en el sur y el este, y las minorías del norte: turkmenos, tadzhikas, uzbekos y hazaras. En este escenario ganó protagonismo, a partir de 1994, el movimiento de los talibanes. Su rígida disciplina y su inserción en el medio pashtun les otorgaron, primero, el control sobre los muyahidines del sur y, en 1996, la victoria sobre los grupos que luchaban en Kabul. Cuando Osama Bin Laden fue expulsado de Arabia Saudita, contó con la protección del gobierno talibán, que a su vez contaba con apoyos en Pakistán y entre sectores sauditas. En la década de los noventa los islamistas radicalizados que habían compartido la victoria sobre los soviéticos combinaron las acciones armadas contra los gobiernos musulmanes –rechazados por conservadores, prooccidentales e impíos– con atentados terroristas cuyo blanco eran los poderes occidentales, especialmente los Estados Unidos, a los que acusaron de sostener dichos gobiernos y de volcar su potencial militar a favor de Israel.

Cuando Clinton llegó al gobierno, declaró que su política exterior se basaría en una "firme postura multilateral", una promesa que fue cumplida según algunos analistas, y una afirmación antes retórica que real según otros. Los neoconservadores, los "halcones" de la era Reagan, no dudaron en oponerse a la gestión del presidente demócrata en el plano internacional. Con el ingreso de Clinton a la Casa Blanca, este grupo perdió peso en las esferas gubernamentales y concentró sus actividades en las universidades y grandes corporaciones. Su reaparición en la escena pública en 1997 coincidió con la publicación de *El gran tablero mundial*, escrito por Zbigniew Brzezinski, el consejero de Seguridad Nacional del ex presidente Carter. El diagnóstico de Brzezinski, coincidente con el de los halcones, alertaba sobre los peligros que amenazaban a los Estados Unidos: quedar reducidos a la categoría de "futuro satélite de los grandes poderes euroasiáticos" debido al posible acuerdo entre una Unión Europea en vías de ampliación y una Rusia estabilizada, y en virtud también de que China se acercaba al rango de gran potencia.

Los neoconservadores lanzaron una campaña crítica desde la prensa contra el apaciguamiento de la administración demócrata y presionaron a favor del aumento en los gastos militares: "Mientras Norteamérica se volvía más próspera, el presupuesto en Defensa se situaba por debajo del 3% del PIB". En junio de 1997 dieron a conocer el Proyecto para el Nuevo Siglo Norteamericano, suscripto, entre otros, por Dick Cheney, Francis Fukuyama –el divulgador del "fin de la historia"–, Lewis Libby, Paul Wolfowitz y Donald Rumsfeld, la mayoría de los cuales integraría el equipo de George Bush (hijo), el sucesor de Clinton.

A lo largo de la década de 1990 hubo una serie de atentados

anónimos de gran impacto que fueron atribuidos a la organización Al Qaeda. En agosto de 1996 Bin Laden dio a luz la Declaración de Yihad contra los norteamericanos que ocupan el país de los santos lugares, y convocó a los Hermanos musulmanes de todo el mundo a apoyar la lucha de los sauditas y de Palestina, haciendo "todo el daño posible". En febrero de 1998 anunció la creación del Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los judíos y los cruzados, del que participaron dirigentes de grupos armados de Egipto, Pakistán y Bangladesh. Era la primera vez que estas organizaciones se ponían de acuerdo para alcanzar los mismos objetivos. Siete meses después explotaron dos bombas en las embajadas de los Estados Unidos en Kenia y Tanzania. El FBI emitió órdenes de arresto contra Osama y otras cuatro personas, y Clinton ordenó el lanzamiento de misiles sobre los supuestos campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán y sobre una planta química en Sudán. Esta decisión inauguró un nuevo tipo de ataque: un estado, el de mayor potencia militar a nivel mundial, descargaba su fuerza contra un individuo y su organización, en lugar de actuar contra otro estado.

Bush llegó a la Casa Blanca después de unos comicios teñidos por las denuncias de fraude. A lo largo de su campaña había condenado el despliegue de "intervenciones humanitarias" y prometido una política exterior más "humilde". Durante sus primeros meses de gobierno, tomó distancia de los problemas mundiales que requerían acciones conjuntas de los estados nacionales: rechazó el Protocolo de Kyoto sobre el calentamiento global, consideró la posibilidad de retirarse del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM) con Rusia, y descartó involucrar a las tropas estadounidenses en nuevas operaciones de paz.

Antes del 11 de septiembre de 2001 el tono dominante de la gestión de Bush era favorable a una política unilateral y de sesgo aislacionista, pero a partir de la caída de las Torres Gemelas los neoconservadores regresaron al centro del escenario decididos a preservar la hegemonía indiscutida de su país. No tenían dudas de que, en principio, debían concentrarse en la creación de un "nuevo orden" en Oriente Medio y que el derrocamiento de Hussein sería el primer paso en este sentido.

Los neoconservadores estadounidenses piden la invasión a Irak

"Es posible que el gobierno iraquí suministrara algún tipo de asistencia al reciente ataque sufrido por los Estados Unidos. Pero aun si las pruebas no acabaran vinculando directamente a Irak con el ataque, toda estrategia tendiente a la erradicación del terrorismo y de sus patrocinadores tiene que incluir un resuelto esfuerzo por derrocar a Saddam Hussein en Irak. Fracasar en ese esfuerzo significaría una temprana y tal vez decisiva rendición en la Guerra contra el terrorismo internacional. Por eso los Estados Unidos deben proporcionar pleno apoyo militar y financiero a la oposición iraquí. La fuerza militar norteamericana debería usarse para lograr una 'zona segura' en Irak, una zona desde la que la oposición pudiera operar. Y las fuerzas norteamericanas deben estar preparadas para respaldar nuestro compromiso con la oposición iraquí con todos los medios necesarios. [...]"
Esta carta, enviada al presidente Bush el 20 de septiembre de 2001 por los integrantes del Proyecto para el Nuevo Siglo Norteamericano, fue firmada, entre otros, por William Kristol, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Charles Krauthammer, Norman Podhoretz, Jeane Kirkpatrick y Richard Perle.

Texto citado en Proyecto para el Nuevo Siglo Norteamericano.

Los integrantes del Proyecto para el Nuevo Siglo Norteamericano no dudaron en adjudicar la autoría del bárbaro ataque del 11 de septiembre a la red terrorista Al Qaeda y vieron en ese ataque un segundo Pearl Harbor que los habilitaba a imponer un drástico cambio de la situación en Oriente Medio. En un primer momento, Bin Laden se desvinculó del atentado, pero lo celebró como "una reacción legítima de los pueblos oprimidos contra el poderío norteamericano".

Las agresiones del 11 de septiembre fueron la expresión de un proceso frío y racional que llevó al islamismo militarizado a dirigir el terrorismo al corazón de los Estados Unidos para obtener un beneficio político. Con la caída de la Torres Gemelas del World Trade Center, que llevó a la muerte a cerca de tres mil personas, se buscó demostrar la vulnerabilidad de la superpotencia mundial. Mientras el islamismo militarizado convocaba abiertamente a "la yihad contra el enemigo lejano", el gobierno de los Estados Unidos ponía en marcha "la guerra global contra el terrorismo".

El 16 de septiembre de 2001, Washington exigió al gobierno afgano la entrega de Bin Laden y pidió a Pakistán el cierre de las fronteras con el país vecino. Aunque la dirigencia talibán condenó los ataques, afirmó que no tenía evidencias y ni siquiera sospechas de la relación de Bin Laden con los atentados y rechazó el pedido estadounidense. Tres semanas después comenzaron los bombardeos aéreos contra Afganistán en el marco de la operación inicialmente denominada Justicia Infinita y luego Libertad Duradera. La coalición contra Afganistán contó con la participación directa de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá y con el apoyo de la UE, la OTAN (incluida Turquía), China, Rusia, Israel, la India, Arabia Saudita y Pakistán. En cambio, Irán e Irak condenaron la acción militar. En el plano interno, la Alianza Nacional, una heterogénea coalición de jefes políticos armados que resistían a los talibanes, dio la bienvenida a la intervención militar occidental, ya que les facilitaría la destrucción del régimen y su acceso al gobierno. Al cabo de un castigo aéreo que duró varias semanas, la Alianza Nacional entró en Kabul a mediados de noviembre. Esta rápida y en gran medida efímera victoria estadounidense fue seguida por la invasión de Irak, en marzo de 2003.

No existían pruebas que relacionaran al régimen iraquí con los ataques al World Trade Center y al Pentágono, y además era bien conocido el viejo antagonismo entre Saddam y los representantes del islamismo radical. Sin embargo, la demonización del líder iraquí esgrimida por los neoconservadores desde su invasión a Kuwait surtió efecto. Muchos estadounidenses aprobaron la invasión de Irak como parte de la "guerra contra el terrorismo".

El ejército iraquí fue rápidamente derrotado, Hussein fue detenido en un sótano el 13 de diciembre de 2003, juzgado y condenado por un Alto Tribunal Penal iraquí, por haber cometido crímenes contra la humanidad. Fue ejecutado en la horca el 30 de diciembre de 2006. La sociedad iraquí se desintegró e ingresó en una trágica espiral de violencia, en la que se entrelazaron los enfrentamientos entre quienes rechazaban a los ocupantes estadounidenses, y las luchas entre sunitas y chiitas, divididos a su vez entre quienes colaboraban y quienes se oponían a las fuerzas norteamericanas.

Irak bajo la ocupación estadounidense

En realidad, la base del régimen de Saddam –y esto era también cierto en el caso de sus predecesores inmediatos– estaba en el campo sunita, y no entre los sunitas de la ciudad, que habían apoyado la monarquía. [...] la resistencia ha provenido sobre todo, de nuevo, de los sunitas del campo. Hacia el final del régimen, estos empezaron a desligarse cada vez más de Saddam, porque los beneficios de su gobierno se restringían, con demasiada exclusividad, al estrecho círculo que lo rodeaba. Pero

cuando Saddam y los tikritis quedaron destruidos, un segundo escalafón de baazistas, que es posible que ni siquiera tuviera mucha admiración por Saddam, pasó a primer plano y parece haber sido la base de la insurrección desde una fase bastante temprana. Su resistencia se ha visto fortalecida por las lealtades tribales y recibió un gran impulso con la disolución por parte de Bremer del ejército y del Partido Baaz [...]. Una de las cosas que Estados Unidos subestimó en este país fue la fuerza de las lealtades tradicionales. [...]

El clero chiita parece haber decidido lo que iba a hacer bastante pronto, mucho antes de la guerra [...] decidieron tomar la palabra a los estadounidenses y prometieron no apoyar ninguna resistencia armada a la Ocupación mientras los ocupantes hicieran lo que decían que iban a hacer, es decir, celebrar unas elecciones que los chiitas ganarían con toda seguridad. [...] Antes de la guerra, muchos chiitas temían que los estadounidenses pudieran no llegar a invadir el país, sino limitarse a fomentar un cambio en la cúpula del régimen, dejando a los chiitas ante la continuación del dominio sunita, dirigido por un general proestadounidense. [...] Su prioridad siempre ha sido echar a los sunitas del poder. [...]

Dado el arrollador predominio numérico de los chiitas, parece claro que el mejor rumbo hubiera sido el contrario del que se ha seguido: tender una mano generosa a la comunidad sunita desde el principio, en una resistencia común contra la Ocupación. Esto era lo que un ala de la opinión chiita quería –cooperar con los compatriotas, no con los extranjeros–, pero quedó invalidada por un pacto furtivo entre Sistani y los estadounidenses. Los odios que este tipo de colaboracionismo genera, como sabemos bien a partir de la historia europea, no se olvidan rápidamente.

Entrevista a Patrick Cockburn, periodista inglés colaborador del diario *The Independent* ("El abismo de Irak"), *New Left Review*, nº 36, enero-febrero de 2006.

Al margen de las convicciones de los fundamentalistas norteamericanos, la fisonomía y la trayectoria de Al Qaeda aparecen cargadas de interrogantes. Si bien Bin Laden encontró apoyo entre los talibanes, su gravitación en el escenario político musulmán es incierta dado que la mayor parte de los movimientos islámicos del mundo árabe embarcados en conflictos nacionales –los Hermanos Musulmanes, Hezbolá, Hamas– no se han sumado a su empresa.

En relación con los atentados terroristas, resulta difícil averiguar si Bin Laden ha estado detrás de todos los ataques con los que se lo vincula desde 1992, aunque es bastante plausible que conozca a sus autores, bien porque fueron compañeros de armas o bien porque han pasado por sus centros de entrenamiento. Su discurso sobre casi todos los grandes atentados es ambivalente. Por un lado, los elogia como si fueran acciones de su organización o como si él mismo los hubiera promovido, pero por otro lado niega su relación con los hechos y se limita a alabar a quienes los realizaron. Los medios de comunicación y los organismos de inteligencia pueden atribuir cualquier atentado a Al Qaeda y cualquier grupo puede formar parte de esa organización. La red de Bin Laden no ha derivado en un movimiento de masas en ningún país árabe. Su yihad contra Occidente está supeditada al objetivo principal de derrocar a los "regímenes corruptos" de Oriente Próximo y "restablecer el Estado del Islam".

Al Qaeda no es una organización tradicional jerárquica que se pueda destruir eliminando a sus líderes o atacando sus bases: es un movimiento más difuso, que actúa tanto mediante la inspiración y los lazos informales como por medio del control formal. Se beneficia del

apoyo estatal cuando puede obtenerlo –como ocurrió cuando los talibanes gobernaron Afganistán–, pero ese respaldo no es vital: sus militantes y los simpatizantes de la organización suelen actuar de forma independiente y crear vínculos, como en Pakistán o en Europa Occidental, por medio de lazos de parentesco y amistad. Algunos analistas aseguran que es "la red de redes" que entrelaza los movimientos islámicos de diferentes partes del mundo. Otros niegan que Al Qaeda exista como organización operativa estructurada y la definen como una "corriente influenciada por Bin Laden".

La guerra en Afganistán fue considerada por muchos en el mundo musulmán como un ataque contra ellos. La guerra en Irak, las revelaciones sobre torturas generalizadas a manos de las fuerzas invasoras y la continuación de los combates en Palestina han contribuido a la persistencia de posiciones radicalizadas y violentas entre sectores del mundo musulmán. Por esta razón, algunos analistas estadounidenses prefieren no hablar de una guerra "contra el terrorismo" sino de una "rebelión transnacional" que muy posiblemente se prolongará en el tiempo.

Epílogo

Entre lo que se derrumba y lo que emerge

Desde hace tres años, el espectro de una tercera depresión profunda del capitalismo ha sobrevolado el escenario mundial. La primera fue la Larga Depresión de 1870 y luego la más grave, la Gran Depresión de 1929. El detonante más visible e inmediato de un derrumbe semejante al de los años de entreguerras se produjo a mediados de 2007, cuando explotó la crisis hipotecaria en los Estados Unidos y los mercados financieros internacionales comenzaron a deteriorarse rápidamente. A fines de 2008 la economía mundial estaba al borde del abismo. Los mercados de valores se hundían, los circuitos de crédito estaban paralizados y los bancos quebraban como consecuencia de un contagio masivo que se extendía desde los Estados Unidos hasta Europa, y que amenazaba con arrasar el resto del mundo. La gran burbuja inmobiliaria había crecido al calor del desproporcionado aumento de los precios de las viviendas y los inmuebles comerciales en algunas zonas de Europa y en los Estados Unidos. Entre 1997 y 2007, el precio de la vivienda subió un 175% en los Estados Unidos, un 180% en España, un 210% en el Reino Unido y un 240% en Irlanda. ¿Por qué subieron tanto y en tantos sitios diferentes? Básicamente, en virtud de la superabundancia mundial de ahorros, aunque también contribuyeron la política de tipos de interés bajos de la Reserva Federal norteamericana después de la recesión de 2001, derivada del estallido de la burbuja de Internet, y las innovaciones financieras que disfrazaban el riesgo. Los neoliberales estadounidenses optaron por denunciar al gobierno de Clinton, que habría promovido irresponsablemente la concesión de préstamos a los pobres a través de

las llamadas hipotecas subprime, con un alto riesgo de quedar impagas.

Durante el peor momento de la crisis, los Estados Unidos perdían setecientos mil puestos de trabajo al mes y el comercio mundial se reducía más deprisa de lo que lo había hecho durante el primer año de la Gran Depresión. La economía mundial parecía acercarse a una catástrofe total. Los gobiernos de los principales países capitalistas se apresuraron a evitar ese final. Durante meses los bancos centrales y los organismos gubernamentales rescataron a las instituciones financieras a expensas de los contribuyentes, y utilizaron los fondos públicos para nacionalizar bancos, subvencionar industrias e inyectar liquidez. Había que evitar a cualquier precio que la crisis financiera de 2007 derivara en una depresión económica como la experimentada en los años treinta.

Estas medidas consiguieron controlar el pánico y, a mediados de 2009, la mayoría de los índices de estrés financiero habían vuelto a valores relativamente normales. Sin embargo, la restauración de la confianza en la banca no trajo una renovación del crecimiento económico sólido. Los consumidores, cargados con enormes deudas, no se animaban a comprar, las empresas no se atrevían a invertir y los bancos restringían el crédito. El huracán financiero inicial derivó en tormenta económica y crisis social tras el incremento del desempleo.

Según el informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Trabajo para la conferencia que celebraron en Oslo en septiembre de 2010, la cifra actual de desempleo en el mundo llega a los doscientos diez millones de desocupados, treinta millones más que al inicio de la crisis. Las economías desarrolladas explican las tres cuartas partes de trabajadores que quedaron desempleados en el período 2007-2009 y, entre ellas, España y los Estados Unidos suman dos tercios del total. La tasa de desempleo global de los jóvenes creció en 2009 hasta el 13%, con ochenta y un millones de parados. El grupo etario entre 15 y 24 años representa un cuarto del total de la fuerza laboral del mundo, con seiscientos diecinueve millones de trabajadores. El documento recuerda además que la precariedad del empleo sigue vigente y que el 80% de la población mundial no tiene acceso a protección social.

La OIT estima que el 40% de la fuerza de trabajo del mundo –alrededor de mil doscientos millones de hombres y mujeres– "aún no ganaba en 2008 un salario suficiente para poder superar, junto con sus familias, el umbral de pobreza de dos dólares estadounidenses diarios". El director del FMI, Dominique Strauss-Khan, reconoció que "la recesión ha creado un penoso legado de desempleo que amenaza la subsistencia, la seguridad y la dignidad de millones de personas en todo el mundo". Algunos estudiosos del mundo contemporáneo –los casos de Eric Hobsbawm y Giovanni Arrighi– destacaron que la crisis de las bolsas había provocado empobrecimiento, pero, al mismo tiempo, en 2008 se había quebrado el fundamentalismo de mercado anglonorteamericano, y la hegemonía americana en la economía mundial parecía llegar a su fin. Alentaban la esperanza de que los problemas del mundo actual fuesen considerados en términos más realistas. Al mismo tiempo, Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, no deja de alentar a los políticos y a los organismos con poder económico a presentar planes que fomenten el crecimiento y la creación de empleo. El máximo exponente de los neokeynesianos cree que el gobierno de Barack Obama rema en la buena dirección pero está siendo "demasiado prudente dada la dimensión de la crisis. El plan de estímulo tenía que haber sido, al menos, un 30% mayor, y no quieren adoptar ninguna medida dramática sobre los bancos".

Al momento de concluir este libro, el panorama es muy incierto. Casi todos los gobiernos europeos han decidido reducir los déficits fiscales y que el trabajo cargue con los costos de unos niveles de deuda pública que en dos años, para salvar la crisis financiera, han registrado incrementos fabulosos. El ajuste, que puede parecer una locura porque agiganta las posibilidades depresivas, tiene una racionalidad de fondo: dejar caer a los sectores capitalistas débiles para facilitar la recuperación de los capitales más concentrados y vigorosos. Esta vía se apoya en el principio de la "destrucción creativa": eliminar a los competidores para contrarrestar la caída de la ganancia y reiniciar el

ciclo de inversiones. Sin embargo, desde el fin de los años dorados las oleadas destructivas se han sucedido unas a otras provocando significativos retrocesos en la calidad de vida de millones de seres humanos y, aunque el mundo es mucho más rico que en aquel período, los momentos creativos han sido breves y el desorden mundial por momentos roza el caos.

La crisis actual remite, en varios sentidos, al fin de los años dorados. Por un lado, el crecimiento económico engendró cambios tecnológicos que posibilitaron tanto una expansión territorial del capital como una revisión de su modo de intervención en el tejido productivo, con el consiguiente impacto sobre la organización del mundo del trabajo. Sin embargo, los contratos sociales del período de expansión del estado de bienestar y los pactos corporativos entre capital y trabajo obstaculizaron la mencionada reestructuración. Por otro lado, las regulaciones existentes eran en gran medida cuestionadas desde sociedades más complejas y heterogéneas que las existentes en la inmediata posguerra. Las nuevas tensiones se hicieron evidentes a través, por ejemplo, de la proliferación de movimientos sociales en los años setenta, cuyas reivindicaciones no tenían cabida en los acuerdos corporativos, o bien desde las demandas de la contracultura planteadas al calor de la explosión social de 1968 a favor de la creatividad y libertad individual y en contra de la homogeneización. Los cambios sociales gestados en los años dorados y los derivados del impacto de la crisis a partir de la década de 1970 restaron consistencia al estado de bienestar al quebrarse las coaliciones que lo sostenían. Muchos trabajadores pasaron a ser desocupados permanentes, otros quedaron sometidos a un trabajo basura en los servicios en expansión, pero también proliferaron los asalariados cuyos conocimientos los ubicaron en escalones más altos de la pirámide social, tanto en relación con el tipo y la modalidad de trabajo como con las nuevas posibilidades cuantitativas y cualitativas de consumo. En el plano discursivo, el estado de bienestar sufrió el embate de la derecha liberal que defendía la primacía del mercado, de la izquierda que subrayaba su condición de estratagema capitalista para seguir explotando con menos conflicto social, y de la nueva izquierda contraria a las regulaciones burocráticas y al ordenamiento jerárquico. Por último, los acuerdos de Bretton Woods que regulaban las relaciones entre los estados nacionales en el mercado mundial dejaron de ser viables a partir del declive económico de los Estados Unidos y el consiguiente debilitamiento del dólar.

A fines de 1960, el capitalismo, en su modalidad distributiva y bajo la hegemonía de los Estados Unidos, había entrado en crisis. La construcción de una nueva vía capitalista fue quedando en manos de las fuerzas sociales, de los centros de poder y de los ideólogos que defendían la generación de condiciones que ofrecieran a los capitalistas la más amplia libertad para obtener ganancias. Los Estados Unidos se colocaron a la cabeza de este giro.

La década de 1970 estuvo cargada de incertidumbre; la mayor parte de los gobiernos siguió recurriendo al keynesianismo, que, en lugar de reactivar las inversiones, dio paso a la estanflación porque, a diferencia de los años treinta, el principal obstáculo para la reproducción del capitalismo no provenía del subconsumo sino de la ausencia de ganancias suficientemente atractivas. Los intelectuales críticos del movimiento de contracultura y los principales países metropolitanos, reunidos en la Comisión Trilateral, comenzaron a alertar contra la ingobernabilidad de la democracia: era preciso que el mercado disciplinara los deseos individuales de mayor bienestar. Cada ser humano debía consumir y alimentar expectativas según su desempeño en el mercado.

En los años ochenta los neoconservadores anglosajones, con el apoyo del electorado, avanzaron decididamente hacia la flexibilización de todos los contratos, la privatización de los bienes públicos y la generación de condiciones favorables al capital financiero. Los Estados Unidos lograron preservar su predominio vía su inmenso poder militar, al que asignaron crecientes partidas presupuestarias, y debido a su capacidad para atraer el capital financiero mediante altas tasas de interés. Los gobiernos europeos tuvieron cada vez menos margen de maniobra para mantener políticas de intervención estatal en el rumbo

de la economía. La mayor parte del Tercer Mundo sufrió el brutal incremento de los montos de su deuda externa, imposibles de pagar.

En 1990 el ideal socialista se derrumbó arrastrado por la disolución del bloque soviético, la desintegración de la URSS y el gigantesco salto hacia adelante logrado por los comunistas chinos a partir del reconocimiento de las leyes del mercado.

El fin de la economía central planificada fortaleció al neoliberalismo. Simultáneamente, otras dos experiencias también contribuyeron a su momento de gloria. Por un lado, el crecimiento de los tigres asiáticos, que habían apostado por integrarse al mercado mundial, una de las máximas del neoliberalismo, en lugar de centrarse en el fortalecimiento del mercado interno, como hizo la mayor parte de los países del Tercer Mundo. En segundo lugar, el repunte de la economía estadounidense bajo el gobierno de Clinton al calor del auge de las inversiones en informática. Hasta principios del siglo XXI, en que estalló la burbuja de Internet, se creyó que, por fin, se había encontrado el nuevo motor del capitalismo: las empresas punto.com desempeñarían en el capitalismo global y postindustrial el papel que habían tenido las fábricas automotrices en el capitalismo industrial. En la década de 1990 el mundo fue casi acabadamente capitalista mientras el capitalismo era cada vez más global.

Los rasgos más evidentes de esta modalidad capitalista fueron las mercancías y el dinero, moviéndose por todo el mundo más rápidamente y en mayores cantidades que nunca, pero estos fenómenos ya se habían dado en la era imperialista. ¿Qué era lo verdaderamente nuevo? La transnacionalización de la producción, un resultado en muchos sentidos, creo, irreversible, pero conducido por fuerzas y en un contexto histórico factibles de ser modificados.

La globalización económica en marcha es un fenómeno complejo en que se combinan múltiples determinaciones. La revolución informática, de las comunicaciones y del conocimiento, posibilitando profundas transformaciones en el mundo del trabajo y dando paso a la transnacionalización de la producción, se articuló con el predominio del neoliberalismo. Este favoreció tanto la consolidación de un sistema financiero muy gobalizado y autonomizado de la producción, como el pasaje del estado de bienestar hacia el estado-mercado. Todo esto en el marco de sociedades con vastos sectores excluidos de la posibilidad de tener una vida digna, en las que, al mismo tiempo, los ricos son cada vez más ricos y en las que se distingue un fuerte sesgo hacia el hiperindividualismo consumista.

El neoliberalismo no es sólo una receta económica según la cual las finanzas, la producción y las redes de comercio deben encontrarse más y más integradas globalmente. Es básicamente una ideología, una forma de ver el mundo que canaliza los intereses, objetivos y valores de una gama de fuerzas sociales, al mismo tiempo que arrasa con las de otros actores sociales. La primacía del neoliberalismo para remover los obstáculos a la acumulación del capital no es una derivación lineal de la globalización económica, sino que remite a las nuevas tramas de relaciones políticas, sociales y culturales que se gestaron en los años dorados y se potenciaron en el marco de la doble crisis: la del capitalismo redistributivo y la del socialismo. En este contexto, el neoliberalismo recogió quejas e insatisfacciones variadas respecto del ordenamiento de los años dorados y, expresando los intereses de quienes apostaban por un capitalismo liberado de la sociedad, presentó como inexorables y positivas tanto la apropiación de los bienes públicos por parte del capital más concentrado, junto con el desmontaje del estado de bienestar, como la reorganización del trabajo en un sentido que generaba el desempleo pero también conllevaba la recalificación ascendente y un mayor grado de autonomía para muchos asalariados.

En la doble tarea de acabar con el ordenamiento gestado en la posguerra y permitir la emergencia de lo nuevo, el capital financiero tuvo un papel clave, simultáneamente creativo y destructivo en términos de la lógica del capitalismo. La financiarización de la economía resulta de lograr la acumulación de capital manteniendo un alto volumen de capital líquido y por eso factible de ser ubicado en una amplia gama de actividades: la inversión productiva, el consumo, los créditos a los gobiernos y la especulación, teniendo como principio

rector el de obtener ganancia sin que esta quede atada ni a la suerte de la producción real ni a los objetivos de las políticas gubernamentales. La inversión productiva se subordina a esta lógica porque los propios empresarios optan por mantener parte de su capital como capital líquido. Desde la década de 1970, el capital financiero ha intensificado las presiones en pos del cierre de negocios no rentables, junto con la explosión de fusiones, y de esta forma ha ampliado la capacidad del capital para escapar de la crisis. Estas intervenciones han provocado la pérdida de puestos de trabajo y la ruina de comunidades enteras. Al mismo tiempo, por medio de los créditos, el sistema financiero sostuvo el consumo y evitó una crisis estructural. También la conversión de los bienes no vendidos y de la capacidad productiva no utilizada en otro tipo de inversiones que posibiliten la acumulación de capital depende decisivamente del papel mediador de las instituciones financieras. Tomo las palabras del geógrafo David Harvey para ilustrar esta idea:

> [...] el capital excedente en camisas y zapatos no se puede convertir directamente en un aeropuerto o en un instituto de investigación. Pero las instituciones estatales y financieras tienen la capacidad de generar crédito, proporcional al capital excedente dedicado a la producción de camisas y zapatos, y de ofrecerlo a los agentes que desean invertirlo en aeropuertos, institutos de investigación o cualesquiera otras formas de inversión estructural relacionadas con la producción de nuevo espacio.

En el mundo real del capitalismo, la función constructiva de las finanzas está entrelazada con burbujas y quiebras especulativas en los mercados inmobiliarios, los bursátiles y en la deuda pública. Por costosos que resulten para muchos capitalistas y por dañinos que sean para los trabajadores, los movimientos del capital financiero son fundamentales para la reproducción ampliada del capital.

Cuando el sistema de Bretton Woods se derrumbó, el creciente poder del capital financiero ocupó su lugar en la construcción de un nuevo régimen global, pero esto no significó que los estados quedaran excluidos. Si bien la política ha cedido espacio al mercado y a los grandes agentes económicos globales, existe en la actualidad una estrecha vinculación entre los recursos del estado y los sectores que detentan el poder en el mercado mundial. La creación de mercados verdaderamente a salvo de la intromisión estatal supone altísimos niveles de intervención gubernamental. El balance que subraya la debilidad del estado soslaya la dependencia del capital con respecto a muchos estados y margina el papel protagónico de los Estados Unidos en la construcción del capitalismo global neoliberal.

Este país ya no es el gigante mundial de la industria y, aunque su economía es grande, representa una porción en constante disminución de la economía global. El centro económico del mundo se está desplazando rápidamente al Extremo Oriente. Los Estados Unidos han dejado de ser un exportador neto de capital y su poder financiero se basa en la continua disponibilidad que muestran otros países, la mayoría de ellos asiáticos, para mantener un déficit fiscal que de otro modo se haría intolerable. Pero aún cuentan con una gama de recursos que les permiten posicionarse como una potencia dominante: su poder militar sin rivales basado en su capacidad de innovación tecnológica; su influencia decisiva sobre las agencias mundiales, tales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, el Grupo de los 8 (G-8), el FMI, el BIRF y la OMC; la categoría de moneda internacional que mantiene el dólar; el peso de su industria cultural, muy evidente en el cine y las series, y mantenido a través de una enorme infraestructura al servicio de su comercialización, pero además con innegable atractivo entre los consumidores del mundo; la ascendencia de un régimen legal en transacciones comerciales internacionales dominado por las firmas y las concepciones angloamericanas. La hegemonía de los Estados Unidos no es análoga a la ejercida por otras metrópolis en las fases anteriores, y la diferencia no es meramente cuantitativa, sino que, por el contrario, se basa en la expansión, con un carácter dominante, de relaciones de producción y consumo características del capitalismo monopolista norteamericano en el interior de las otras metrópolis. De ahí, para algunos analistas, el importante grado de

consentimiento con que son aceptadas por las otras potencias capitalistas las imposiciones de la metrópoli dominante, a pesar de su declive económico y de que, desde la caída del Muro, ya no las une la existencia de un enemigo común.

En el marco del capitalismo global neoliberal, el mundo es más rico de lo que nunca ha sido, pero es más desigual, y la distancia que separa a los que están más arriba de los que están en los últimos escalones se va agrandando. No hay una única causa que explique este aumento de la desigualdad, pero sin lugar a dudas la política económica neoliberal –disminución de impuestos a los ricos, reducciones de gasto social, privatización de los servicios sociales, flexibilización de los controles a los empresarios y a las instituciones financieras– lo ha favorecido.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo ha removido, en gran medida, los obstáculos que frenaban la obtención de ganancias atractivas. Las privatizaciones del sector público y el ajuste presupuestario han supuesto enormes transferencias de capital a los sectores privados. Las deslocalizaciones, apoyadas en las nuevas redes de comunicación y transporte, han permitido no sólo un abaratamiento de costos y la ampliación de los mercados de consumo, sino también una importante contención de los salarios en el centro y en la periferia del sistema. Sin embargo, la globalización neoliberal atenta contra la reproducción de las sociedades y parece próxima a desencadenar el caos, a tal punto que comenzó a preocupar a los promotores de la globalización económica. Por ejemplo, a fines de los años noventa, el financiero cosmopolita de origen húngaro George Soros manifestaba abiertamente su temor a "la irrefrenable intensificación del capitalismo de laissez-faire [...] la extensión de los valores de mercado a todas las esferas de la vida están poniendo en peligro nuestra sociedad abierta y democrática. El principal enemigo de la sociedad abierta ya no es la amenaza comunista sino el capitalismo".

El cambio de rumbo no provendrá del crecimiento económico, ya que requiere la intervención política y esta no se reduce a promover un papel más activo del estado (que nunca dejó de tener un papel protagónico). Necesita la intervención aunada de colectivos sociales y de los recursos estatales en pos de la recreación de un espacio social basado en la equilibrada combinación de igualdad y libertad. Una tarea difícil de imaginar en las condiciones dadas. Por un lado, tramas sociales escasamente propicias para reunir voluntades en torno a una definición y a un sentimiento compartido sobre la significación del bien común. Por otro, una enorme concentración de poder en manos de quienes controlan los recursos económicos, políticos, culturales, sin tener que rendir cuentas de sus decisiones a los millones de hombres y mujeres cuyas vidas se ven afectadas por ellas. A la luz de la trayectoria histórica occidental, la lógica del capitalismo global guiado por el neoliberalismo provoca hondas incertidumbres porque hasta el momento no se vislumbra quiénes y cómo serán capaces de subvertir el predominio de los actores que sostienen un sistema depredador y antisocial.

Al poner punto final a este trabajo, las dos regiones del mundo más alejadas del neoliberalismo, aunque de diferente modo, son China y América Latina. La primera alcanzó un impresionante crecimiento económico con altísimos costos humanos bajo la dirección de los comunistas apoyados por los privilegiados del nuevo orden, pero lo hizo a través del dirigismo estatal ya puesto en marcha por las "economías tigre" en Asia Oriental.

En la década de 1990, los países de América Central y el Sur fueron, junto con los africanos, los que más sufrieron el impacto negativo de los ajustes impuestos por el Consenso de Washington. Al mismo tiempo, fue la única zona del ex Tercer Mundo casi sin conflictos armados. En el nuevo siglo se produjo un viraje radical en las políticas instrumentadas desde la mayoría de sus estados y este cambio de rumbo dio paso a más definidas confrontaciones ideológicas. Los actores que protagonizaron el giro han sido objeto de diferentes calificaciones: líderes neopopulistas según algunos, gobiernos cercanos a una versión del capitalismo de bienestar sui géneris, según otros. Respecto de los resultados de su gestión, el debate es álgido. Para algunos el panorama es desolador: pérdida de los principios republicanos, depreciación de la institucionalidad con el uso de los

recursos del estado al servicio de las lógicas facciosas y los intereses personales; el clientelismo de la mano del autoritarismo. Para otros, entre quienes me incluyo, el panorama es alentador: la reparación parcial de las injusticias sociales sufridas por los más desprotegidos, la recuperación del papel del estado en un sentido que lo aleja de la lógica del mercado para incluir los intereses sociales, las decididas intervenciones conjuntas de los presidentes en defensa de la democracia ante las amenazas de golpes de estado, el afán de ocupar un lugar en el mundo articulando a los países como una región.

La historia realmente acontecida siempre ha sido resultado de condiciones dadas de las que sólo vislumbramos algunas aristas, de lo que decidimos y hacemos y de eso que llamamos azar (y que seguramente estaba pero no supimos o no quisimos ver).

Anexo

Los imperios coloniales en Asia

Sur de Asia

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
República India	Gran Bretaña	1947
Republica Islámica de Pakistán/India	Gran Bretaña	1947
Reino del Nepal	Gran Bretaña (control parcial de territorios)	
Reino de Bután	Gran Bretaña (protectorado)	1971 (asume relaciones exteriores retenidas por la India)
República Popular de Bangladesh/India	Gran Bretaña	1971 (se separa de Pakistán)
República Socialista de Sri Lanka/Ceilán	Gran Bretaña	1948
República de Maldivas	Gran Bretaña	1965

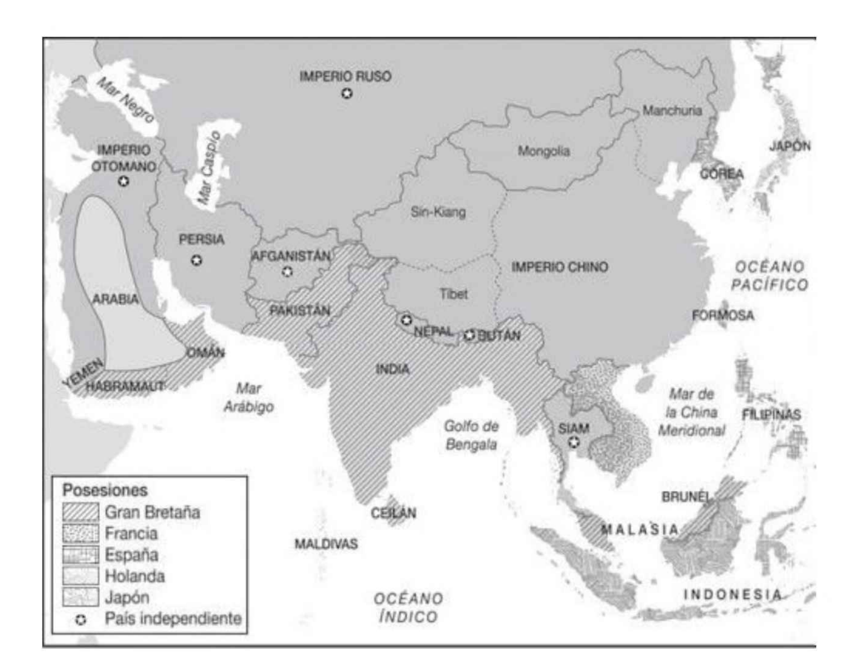
Sudeste de Asia

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
Federación de Malasia	Gran Bretaña	1957
Myanmar/Birmania	Gran Bretaña	1948
República Socialista de Vietnam	Francia	1954
República de Singapur	Gran Bretaña	1965
República Democrática Popular de Laos	Francia	1949
Sultanato de Brunéi	Gran Bretaña	1983
Reino de Camboya	Francia	1953
República Democrática de Timor Oriental	Portugal	Ocupada por Indonesia entre 1975 y 1999
Reino de Tailandia/Siam		
República de las Filipinas	España y Estados Unidos	1898 y 1946
República de Indonesia	Holanda	1949

Asia Oriental

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
Región administrativa de Hong Kong de la República Popular de China1	Gran Bretaña	(Véase la nota 1)
República de China (Taiwán) 2	Japón	1945
República Popular Democrática de Corea	Japón	1945
República de Corea (sur)	Japón	1945

1. Ocupada por el Reino Unido al final de la primera guerra del opio y cedida formalmente por China por el tratado de Nankín. Según el acuerdo firmado por la República Popular de China y Gran Bretaña en 1984, Hong Kong se convirtió en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China a partir de julio de 1997. El gobierno chino se comprometió a respetar la fórmula *un país, dos sistemas*, o sea que en la isla se mantendría el capitalismo. Hong Kong retiene un alto grado de autonomía en todas las materias, a excepción de las relaciones exteriores y la defensa.
2. El triunfo de los comunistas en China llevó al partido nacionalista chino, Kuomintang, a instalarse en la isla de Taiwán. Este fue el estado reconocido en el escenario internacional hasta 1971. Ese año la República de China dejó de ser miembro de las Naciones Unidas. Los países miembros votaron a favor de que la República Popular ocupara el asiento correspondiente a China en la organización. En la actualidad, Taiwán es reconocido como la República de China sólo por una minoría de países.



Imperialismo en Asia.

El reparto de África África del Norte

Cuerno de África

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
República de Yibuti	Francia	1977
Eritrea	1885 Italia hasta la caída del fascismo. Segunda posguerra bajo control de Gran Bretaña	1952 Acuerdo federal con Etiopía Separación de Etiopía, mayo de 1993
República Democrática Federal de Etiopía	Italia, 1935-1941	
República de Somalia	Dividida entre Italia y Gran Bretaña	1960 República de Somalia; fusión de ambas colonias
República de Sudán	Gran Bretaña	1956

Oeste de África

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
República de Benín	Francia	1960
Burkina Faso/Alto Volta	Francia	1960
República de Cabo Verde	Portugal	1975
República de Chad	Francia	1960
República de Costa de Marfil	Francia	1960
República de Gambia	Gran Bretaña	1965
República de Ghana/ Costa de Oro	Gran Bretaña	1957
República de Guinea	Francia	1958
República de GuineaBissau	Portugal	1973 Guinea-Bissau fue la primera colonia portuguesa de África que obtuvo la independencia
Liberia		
República de Malí	Francia	1960
República Islámica de Mauritania	Francia	1960
República de Níger	Francia	1960
República Federal de Nigeria	Gran Bretaña	1960
República de Senegal	Francia	1960
República de Sierra Leona	Gran Bretaña	1961
República Togolesa	Alemania. En Versalles pasó a Francia	1960

Este de África

País actual	Colonia de	Independencia
República de Burundi	Parte de África Oriental alemana. En Versalles pasó a Bélgica	1962
República de Kenia	Gran Bretaña	1963
República de Ruanda	Parte de África Oriental alemana. En Versalles pasó a Bélgica	1962
República Unida de Tanzania	Zanzíbar (isla), siglo XVI, ocupada por Portugal 1896 Gran Bretaña Tanganica, parte de África Oriental alemana. En Versalles pasó a Gran Bretaña	1961 Unión Africana Nacional de Tanganica 1963 Zanzíbar 1964 Unión de ambas
República de Uganda	Gran Bretaña	1962

África Central

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
República de Camerún	Alemania. En Versalles, el norte pasó a Francia y el sur a Gran Bretaña	1960 el Camerún francés 1961 el Camerún británico. La parte sur se unió al anterior y la parte norte a Nigeria
República del Congo	Francia	1960
República Democrática del Congo	Bélgica	1960
República Gabonesa	Francia	1960
República de Guinea Ecuatorial/Guinea española	España	1968
República Centroafricana	Francia	1960
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe	Portugal	1975

África Austral

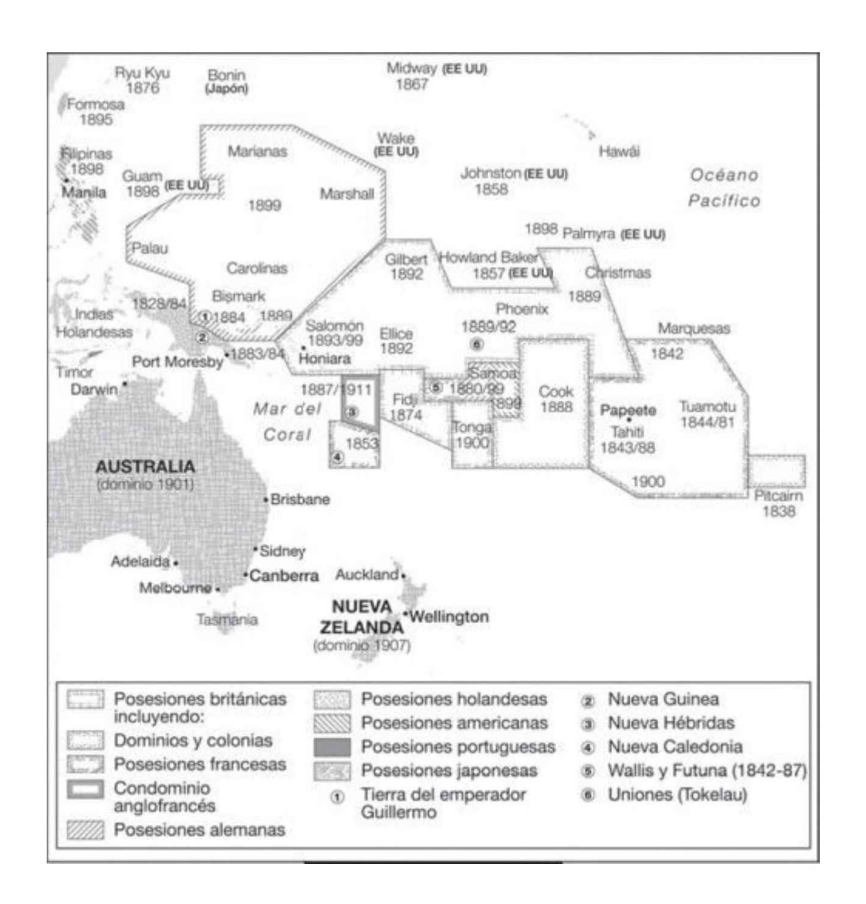
País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
República de Angola	Portugal	1975
República de Botsuana	Gran Bretaña	1966
Reino de Lesotho	Gran Bretaña	1966
República de Malaui/Nyasalandia	Gran Bretaña	1964
República de Mozambique	Portugal	1975
República de Namibia/África del Sudoeste	Alemania. En Versalles pasó a Sudáfrica	1990
Reino de Suazilandia	Gran Bretaña	1968
República de Sudáfrica	Gran Bretaña	1910
República de Zambia/Rodesia del Norte	Gran Bretaña	1964
República de Zimbabue/Rodesia del Sur	Gran Bretaña	1965

Océano Índico

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
Unión del Comores	Francia	1975
República de Madagascar	Francia	1960
República de Mauricio	Holanda, Francia, Gran Bretaña	1968
Reunión	Francia	
Mayotte	Francia	
República de las Seychelles	Disputadas por Francia y Gran Bretaña, que se impone en 1914	1976



África colonial.



El reparto de Oceanía.

Micronesia

Es en esta región, situada en el hemisferio norte y compuesta de pequeñas islas, donde la influencia de Washington ha sido más notable.

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
Isla de Guam	España; pasó a Estados Unidos en 1898 junto con Filipinas	
Mancomunidad de Marianas del Norte	España hasta 1899, cedidas a Alemania Japón entre las dos guerras Fideicomiso de Estados Unidos en 1947 Estado Libre Asociado de los Estados Unidos en 1975	
Islas Palaos o Palau	España hasta 1899, compradas por Alemania Japón a partir de la Primera Guerra Mundial Bajo administración estadounidense a partir de la Segunda Guerra Mundial	Octubre de 1994
República de las Islas Marshall	Protectorado de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial Estado Libre Asociado desde 1986	
República de Naurú	Fideicomiso de Australia al finalizar la Primera Guerra Mundial Parte del imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial Dominio australiano en la posguerra	Enero de 1968
República de las Islas Kiribati/Islas Gilbert	Protectorado británico en 1892 Colonia de las Islas Gilbert y Ellice en 1915	Julio de 1979

Melanesia

Región en el Pacífico Sudoccidental

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
Islas Vanuatu/Nuevas Hébridas	Francia y Gran Bretaña	Julio de 1980
Nueva Caledonia	Francia, territorio de ultramar	
Papúa-Nueva Guinea	Segunda mitad del siglo XIX: holandeses, alemanes y británicos 1904 Inglaterra cedió su parte a Australia En la primera posguerra, Australia tomó la zona alemana La región occidental holandesa anexada por Indonesia en 1969, provincia de Irian Jaya	1975
Islas Salomón	Gran Bretaña en la primera posguerra mundial Después de la Segunda Guerra Mundial, la parte oriental bajo administración australiana e incorporada a Papúa Nueva Guinea	Julio de 1978
República de las Islas Fiyi	Gran Bretaña	Octubre de 1970

Polinesia

Vasta superficie con islas pequeñas extendida en una especie de triángulo entre las islas Hawái, la isla de Pascua y Nueva Zelanda.

País actual/Colonia	Colonia de	Independencia
Samoa Occidental	Alemania. Adjudicada en fideicomiso a Nueva Zelanda en la primera posguerra	Enero de 1962
Samoa Oriental	Administrada por Estados Unidos desde 1899	
Reino de Tonga	Protectorado británico en 1890	Junio de 1970
República de Tuvalu/Islas Ellice	Protectorado británico	Octubre de 1978
República de las Islas Cook	Protectorado británico en 1888 Anexadas por Nueva Zelanda en 1901 Acuerdo de Libre Asociación con Nueva Zelanda en 1965	
Polinesia Francesa	Colonia, territorio de ultramar y actualmente país de ultramar	
Islas Wallis y Futuna	Protectorado francés en 1888. Territorio francés de ultramar desde 1959	
Isla Pitcairn	Gran Bretaña desde 1838	
Tokelau	Gran Bretaña. En 1925 se transfirió su control a Nueva Zelanda	
Isla de Pascua	Anexada por Chile en 1888	



Asia descolonizada.



África descolonizada.

Bibliografía

La bibliografía propuesta ha sido pensada con el propósito de ofrecer al lector los trabajos que considero más fructíferos y accesibles para profundizar los temas tratados en este libro. Ha sido organizada alrededor de las ideas eje de cada capítulo. He privilegiado estimular la búsqueda de los textos a través de una lista acotada, en lugar de proponer una bibliografía que remita a todas las cuestiones revisadas en este trabajo.

También en el caso de las películas he buscado que la lista opere como un estímulo para ver los otros muchos filmes no incluidos aquí.

Obras generales

Anderson, Benedict (1983), *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo,* México, FCE, 1993.

Barraclough, Geoffrey, *Introducción a la historia contemporánea*, Madrid, Gredos, 1965.

Bobbio, Norberto (1966), *Liberalismo y democracia*, México, FCE, 1992.

Braudel, Fernand, *Las civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social*, Madrid, Tecnos, 1978.

Bulmer-Thomas, Víctor (1994), *La historia económica de América Latina desde la independencia*, México, FCE, 1998.

Cipolla, Carlo (comp.), *Historia económica de Europa*, Barcelona,

Ariel, 1979, vols. 5 y 6.

Frieden, Jeffry, *Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX,* Barcelona, Crítica, 2007.

Halperin Donghi, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina*, Madrid, Alianza, 1998.

Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX,* Barcelona, Crítica, 1995.
—, *Naciones y nacionalismo desde 1780*, Barcelona, Crítica, 1991.

Macry, Paolo, *La sociedad contemporánea. Una introducción histórica*, Barcelona, Ariel, 1997.

Romero, José L., *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976.

Rosanvallon, Pierre (1979), *El capitalismo utópico*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2006.

Carpetas docentes de historia. Historia del mundo contemporáneo. Publicación electrónica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo de un equipo docente dirigido por la profesora María Dolores Béjar, disponible en www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar. Sitio en construcción que organiza la historia mundial contemporánea en cinco períodos desde fines del siglo XIX hasta el presente. Cada período (carpeta) está subdividido en temas que incluyen un relato histórico principal, notas complementarias, mapas digitales, fuentes, videos y bibliografía. Además, cada período cuenta con ventanas que brindan información y materiales sobre cine, literatura y arte de ese momento histórico. Este sitio ofrece un listado mucho más exhaustivo de textos y otros materiales que el incluido en este libro.

Sitios de mapas

Cartografía de *Le Monde diplomatique*: www.monde-diplomatique.fr

Atlas-Historique: www.atlas-historique.net

1. La era del imperialismo

Hacia una economía global y los escenarios políticos

Arrighi, Giovanni, *El largo siglo XX*, Madrid, Akal, 1999, cap. III: “Industria, imperio y acumulación ‘interminable’ de capital”.

Geoff, Eley, *Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000*, Barcelona, Crítica, 2003, primera parte: “Socializando la democracia, preparando el futuro”.

Hobsbawm, Eric, *La era del imperio (1875-1914),* Barcelona, Labor, 1989.

Mommsen, J. W., *La época del imperialismo. Europa, 1885-1918*, Madrid, Siglo XXI, 1973.

Morishima, Michio, *Por qué ha triunfado el Japón*, Barcelona, Crítica, 1983, cap. 2: “La revolución Meiji”.

Mosse, George, *La cultura europea del siglo XX,* Barcelona, Ariel, 1997, cap. 1: “El cambio en el espíritu público de la sociedad europea”, y cap. 5: “Las certezas se disuelven”.

Fritzsche, Peter, *Berlín 1900: Prensa, lectores y vida moderna*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

Zweig, Stefan, *El mundo de ayer. Memorias de un europeo,* Barcelona, El Acantilado, 2001, pp. 9-274.

La crisis de los antiguos imperios

Bailey, Paul J., *China en el siglo XX*, Barcelona, Ariel, 2002, cap. 1: "El fin de la monarquía imperial".

Bastenier, Miguel Ángel, *La guerra de siempre. Pasado, presente y futuro del conflicto árabe-israelí*, Barcelona, Ediciones Península, 1999, cap. 1: "Sionismo y sentimiento nacional árabe en Oriente Próximo", y cap. 2: "El fin del imperio otomano".

La expansión imperialista

Carrére D'Encausse, Helene y Schram, Stuart, *El marxismo y Asia*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974, cap. I: "Los marxistas frente a los problemas del mundo no europeo hasta la revolución de Octubre".

Coquery-Vidrovitch, C. y Moniot, H., *África negra de 1800 a nuestros días*, Barcelona, Labor, 1976, cap. II: "De la exploración a la conquista", y cap. V: "Los africanos y la colonización".

Fieldhouse, David (1973), *Economía e imperio. La expansión de Europa (1830-1914),* Madrid, Siglo XXI, 1977, tercera parte: "Estudios de casos en la expansión europea, 1880-1914".

Newsinger, John, "Elgin en China", en *New Left Review*, nº 15, julioagosto de 2002.

Said, Edward, *Cultura e imperialismo*, Barcelona, Anagrama, 1996, introd. y cap. III: "Resistencia y oposición".

Wolf, Eric R., *Europa y la gente sin historia,* México, FCE, 1987.

Películas sugeridas

Pasaje a la India, David Lean, Inglaterra, 1984. *Lawrence de Arabia*, David Lean, Inglaterra, 1962. *Prisionero del honor,* Ken Russel, Inglaterra, 1991.

Rosa Luxemburgo, Margarethe Von Trotta, Alemania, 1986.

Ragtime, Milos Forman, Estados Unidos, 1981.

2. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa La Primera Guerra Mundial

Ferro, Marc (1969), *La Gran Guerra (1914-1918)*, Madrid, Alianza Universidad, 1988.

Parker, R. A., *El siglo XX. Europa 1919-1945*, Historia Universal Siglo XXI, México, Siglo XXI, 1978, cap. 1: "La paz con Alemania"; cap. 2: "La paz con Austria, Hungría y Bulgaria", y cap. 3: "La paz con Turquía".

Romero, José Luis (1948), *El ciclo de la revolución contemporánea*, Buenos Aires, FCE, 1997, cap. V: "La conciencia de una posguerra", y cap. VI: "La encrucijada y las salidas".

Zweig, Stefan, *El mundo de ayer. Memorias de un europeo,* Barcelona, El Acantilado, 2001, pp. 275-410.

La Revolución rusa y la oleada revolucionaria

Deutscher, Isaac (1954), *Trotsky. El profeta armado*, México, Era, 1984, cap. VIII: "La guerra y la Internacional"; cap. XI: "El drama de Brest-Litovsk", y cap. XIII: "Revolución y conquista".

Figes, Orlando, *La revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo*, Barcelona, Edhasa, 2001, segunda parte: "La crisis de

autoridad (1891-1917)”, y tercera parte: “Rusia bajo la revolución (febrero de 1917-marzo de 1918)”.

Geoff, Eley, *Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000*, Barcelona, Crítica, 2003, cap. 7: “La ruptura de la Guerra. Crisis y reconstrucción de la izquierda, 1914-1917”; cap. 9: “Rompiendo el molde del socialismo. Comunismo de izquierda, 1917-1924”, y cap. 11: “Remodelando la militancia. La fundación de partidos comunistas”.

Serge, Víctor (1951), *Memorias de mundos desaparecidos (19011941),* México, Siglo XXI, 2002, cap. 2: “Una razón para vivir: vencer (1912-1919)”.

Películas sugeridas

Gallipoli, Peter Weir, Australia, 1979.

El acorazado Potemkin, Sergei Eisenstein, Unión Soviética, 1925. *Sin novedad en el frente*, Lewis Milestone, Estados Unidos, 1930. *Por la patria*, Joseph Losey, Gran Bretaña, 1964.

3. El período de entreguerras

La crisis económica y los escenarios políticos en el mundo capitalista

Baines, Dudley, “Los Estados Unidos entre las dos guerras, 19191941”, en Adams, W. P., *Los Estados Unidos de América*, Madrid, Siglo XXI, 1974.

Cabrera, M. y otros, *Europa en crisis, 1919-1939*, Madrid, Pablo Iglesias, 1991.

Fritzsche, Peter, *De alemanes a nazis*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

Galbrait, John K., *Un viaje por la economía de nuestro tiempo*, Buenos Aires, Ariel, 1995, cap. 7: “La crisis económica”, y cap. 8: “La gran depresión”.

Gentile, Emilio, *La vía italiana al totalitarismo. Partido y estado en el régimen fascista*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Kershaw, Ian, *Hitler, 1889-1936*, Barcelona, Península, t. I, 1999.

Leckachman, Robert, *La era de Keynes*, Madrid, Alianza, 1970, cap. 5: “New Deal”.

Luebbert, G. (1991), *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, cap. 6: “Guerra, crisis y estabilización del orden liberal”; cap. 7: “Las opciones iliberales se reducen: fracaso final del liberalismo e inaplicabilidad de la dictadura tradicional”, y cap. 8: “Socialdemocracia y fascismo”.

Maier, Charles S. (1975), *La refundación de la Europa burguesa. Estabilización en Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la I Guerra Mundial*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

Malefakis, Edward (ed.), *La Guerra de España, 1936-1939*, Madrid, Taurus, 1996.

Paxton, Robert, *Anatomía del fascismo*, Barcelona, Península, 2004.

Tasca, Angelo, *El nacimiento del fascismo*, Barcelona, Ariel, 1969. Tuñón de Lara, Manuel, *La II República*, Madrid, Siglo XXI, 1976.

La experiencia soviética

Deutscher, Isaac, *Stalin. Biografía política*, México, Era, 1965.

Fitzpatrick, Sheila, *La revolución rusa*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Getty, Arch y Naumov, Oleg, *La lógica del terror. Stalin y la autodestrucción de los bolcheviques,* Barcelona, Crítica, 2001.

El mundo colonial y dependiente

Bailey, Paul, *China en el siglo XX*, Barcelona, Ariel, 2002, cap. 2: “La primera república”, y cap. 3: “El auge del Guomindang y el Partido Comunista Chino”.

Bethell, Leslie (ed.), *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1997, vol. 11: *Economía y sociedad desde 1930*, cap. 1: “Las economías latinoamericanas, 1929-1939”.

Bianco, Lucien (comp.), *Asia contemporánea*, México, Siglo XXI, 1982, A: “El despertar de los nacionalismos”.

Priestland, David, *Bandera roja*, Barcelona, Crítica, 2010, cap. 6: “El Oriente es rojo”.

Películas sugeridas

Asaltar los cielos, Javier Rioyo y López Linares, España, 1996. *El triunfo de la voluntad,* Leni Riefenstahl, Alemania, 1935. *Viñas de ira*, John Ford, Estados Unidos, 1940.

El último emperador, Bernardo Bertolucci, 1987.

Novecento, Bernardo Bertolucci, Italia, 1976.

Conspiración, Frank Pierson, Estados Unidos-Gran Bretaña, 2001.

La caída de los dioses, Luchino Visconti, coproducción Italia-Alemania-Suiza, 1969.

Morir en Madrid, Frédéric Rossif, Francia, 1962.

Inflation, Hans Richter, Alemania, 1928, en www.dailymotion.com

4. De la Segunda Guerra Mundial a la caída del Muro

La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría

Aron, Raymond (1984), *Los últimos años del siglo*, Buenos Aires, Planeta, 1994.

Calvocoressi, Peter, *Historia política del mundo contemporáneo. Desde 1945,* Madrid, Akal Universitaria, 1987, primera parte: “El gran poder”.

Fritzsche, Peter, *Vida y muerte en el Tercer Reich*, Barcelona, Crítica, 2008, cap. 3: “El imperio de la destrucción”.

Halliday, Fred, “Los finales de la guerra fría”, en Blackburn, Robin, *Después de la caída. El fracaso del comunismo y el futuro del socialismo*, Barcelona, Crítica, 1993.
—, *Génesis de la Segunda Guerra Fría*, México, FCE, 1989. Kershaw, Ian, *Hitler, 1936-1945*, Barcelona, Península, 2000, t. II.

Parker, R. A. C., *Historia de la Segunda Guerra Mundial*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998.

Wolfang, Benz y Graml, Hermann, *El siglo XX. III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder*, México, Siglo XXI, 1982.

El fin de los imperios coloniales y el bloque de No Alineados

Grimal, Henri, *Historia de las descolonizaciones del siglo XX*, Madrid, Iepala, 1985.

Moita, Luis, *El movimiento de los No Alineados. Historia y doctrina*, Madrid, Revolución, 1983.

Películas sugeridas

La batalla de Argel, Gillo Pontecorvo, 1965.

Gandhi, Richard Attenborough, 1982.

Un especialista, Eyal Sivan, Francia, 1999.

Cartas desde Iwo Jima, Clint Eastwood, Estados Unidos, 2006.

Noche y niebla, Alain Resnais, Francia, 1956.

El tercer hombre, Carol Reed, Gran Bretaña, 1949.

El juicio de Núremberg, Stanley Kramer, Estados Unidos, 1961.

5. Los años dorados

El ámbito capitalista

Bell, Daniel, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Madrid, Alianza, 1989.

Cabrera, Mercedes (comp.), *Europa, 1945-1990*, Madrid, Pablo Iglesias, 1992.

Coriat, Benjamin, *Pensar al revés. Trabajo y organización de la empresa japonesa*, México, Siglo XXI, 1992.

Esping-Andersen, Gosta, *Los tres mundos del estado del bienestar*, Valencia, Alfons El Magnànim, 1993.

Merkel, Wolfang, *¿Final de la socialdemocracia? Recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa Occidental*, Valencia, Alfons El Magnànim, 1995.

Wynn, Neil, “De la guerra mundial a la sociedad de la abundancia, 1941-1961” y “La década de 1960”, en Adams, W. P., *Los Estados Unidos de América*, Madrid, Siglo XXI, 1974.

El espacio comunista

Claudín, Fernando, *La oposición en el socialismo real*, Madrid, Siglo XXI, 1981.

Fetjo, François, *Historia de las democracias populares, 1953-1970*, 2 tomos, Barcelona, Martínez Roca, 1971.

Furet, François, *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX*, México, FCE, 1995, cap. XII: “El principio del fin”.

Jian, Chen, *La China de Mao y la Guerra Fría*, Barcelona, Paidós, 2005, cap. 3: “La revolución permanente de Mao y el auge y decadencia de la alianza chino-soviética�.

MacFarquhar, Roderick y Schoenhals, Michael, *La revolución cultural china*, Barcelona, Crítica, 2009.

Películas sugeridas

Uno, dos, tres, Billy Wilder, Estados Unidos, 1961.

Moscú no cree en lágrimas, Vladimir Menshov, Rusia, 1979.

La clase obrera va al Paraíso, Elio Petri, Italia, 1971.

El hombre de mármol, Andrei Wajda, Polonia, 1977. *Apocalipsis Now*, Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 1979. *Roma, ciudad abierta*, Roberto Rossellini, Italia, 1945.

Con ánimo de amar, Wong Kar-wai, Hong Kong, 2000.

6. El Tercer Mundo

Los diferentes escenarios

Bethell, Leslie (ed.), *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1997, vol. 11: �Economía y sociedad desde 1930".

Bianco, Lucien (comp.), *Asia contemporánea*, México, Siglo XXI, 1982, B: "La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias".

Calvocoressi, Peter, *Historia política del mundo contemporáneo. Desde 1945,* Madrid, Akal Universitaria, 1987, tercera parte: "Oriente Medio"; cuarta parte: "Asia", y quinta parte: �África�.

Priestland, David, *Bandera roja*, Barcelona, Crítica, 2010, cap. 9: "Guerrilleros", y cap. 11: "Marea alta".

Kapuscinski, Ryszard, *Ébano*, Barcelona, Anagrama, 2000.
—, *El Emperador,* Barcelona, Anagrama, 1989.

Zeraoui, Zidane, *Islam y política. Los procesos políticos árabes contemporáneos*, México, Trillas, 2004.

Películas sugeridas

Memorias del subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1968.

Rojo amanecer, Jorge Fons, México, 1989.

La canción del camino, Pather Panchali, India, 1955.

Shunko, Lautaro Murúa, Argentina, 1960.

Vidas secas, Nelson Pereira Do Santos, Brasil, 1962.

7. Fin de una época

1968. El principio del fin

Boltanski, Luc y Chiapello, Eve, *El nuevo espíritu del capitalismo*, Madrid, Akal, 2002, segunda parte, III: "1968. Crisis y renovación del capitalismo".

Crouch, Colin y Pizzorno, A. (comps.), *El surgimiento del conflicto de clases en Europa occidental a partir de 1968. I*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.

Kurlansky, Mark, *1968: El año que conmocionó al mundo*, Barcelona, Destino, 2004.

Roszak, Theodore, *El nacimiento de una contracultura*, Barcelona, Kairós, 1984.

La crisis y los cambios en el ámbito capitalista

Beck, Ulrico y Grande, Edgard, *La Europa cosmopolita. Sociedad y política en la segunda modernidad*, Barcelona, Paidós, 2006.

Boix, Carles, *Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*,

Madrid, Alianza, 1996.

Castel, Robert, *Las metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

Castells, Manuel, *La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 3: Fin de milenio*, Madrid, Alianza, 1998, cap. 4: "¿Hacia la era del Pacífico? El fundamento multicultural de la interdependencia económica".

Crozier, Michel; Huntington Samuel y Watanuki, Joji, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*, New York University Press, 1975.

Domenach, Jean Luc, *¿Adónde va China?,* Barcelona, Paidós, 2006.

Esping-Andersen, Gosta, "Después de la Edad de Oro: el futuro del Estado benefactor en el nuevo orden mundial", en *Desarrollo Económico,* nº 142, Buenos Aires, IDES, 1996.

Merkel, Wolfang (ed.), *Entre la modernidad y el postmaterialismo. La socialdemocracia a finales del siglo XX,* Madrid, Siglo XXI, 1994.

Picó, Joseph, *Los límites de la socialdemocracia europea*, Madrid, Siglo XXI, 1992.

Piore, Michael y Sabel, Charles, *La segunda ruptura industrial*, Buenos Aires, Alianza, 1993.

Taggart Murphy, R., "La crisis económica de Japón", en *New Left Review,* n° 2, Madrid, Akal, 2000.

El derrumbe del bloque soviético

Heller, Agnes y Feher, Ferenc, *De Yalta a la "Glasnost"*, Madrid, Pablo Iglesias, 1992.

Nove, Alec, "La reforma socioeconómica soviética: progresos y frustraciones", en *La perestroika ... ¿Adónde va la Unión Soviética?*, Madrid, Pablo Iglesias, 1989.

Papeles del Este: publicación electrónica editada por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, vol. 0, 2000, a vol. 17, 2008, en revistas.ucm.es

Patula, Jan, *Europa del Este: del stalinismo a la democracia*, México, Siglo XXI, 1993.

Poch-De-Feliu, Rafael, *La gran transición. Rusia, 1985-2002*, Barcelona, Crítica, 2003.

Priestland, David, *Bandera roja*, Barcelona, Crítica, 2010, cap. 12: "Revoluciones gemelas".

Películas sugeridas

Recursos humanos, Laurent Cantet, Francia, 1999. *Good bye Lenin,* Wolfgang Becker, Alemania, 2003. *Todo o nada*, Peter Cattaneo, Inglaterra, 1997.

Los lunes al sol, Fernando León de Aranoa, España, 2002.

El odio, Mathieu Kassovitz, Francia, 1995.

Escondido, Michael Haneke, Francia, 2005.

Antes de la lluvia, Milcho Manchevski, Macedonia-Francia-Reino Unido, 1994.

Bucarest 12:08, Cristian Porumboiu, Rumania, 2005.

Cargo 200, Alexander Balabanov, Rusia, 2007.

8. Crisis y desintegración del Tercer Mundo

Crisis y fragmentación del Tercer Mundo

Alberdi, Jokin y otros*, África en el horizonte. Introducción a la realidad socioeconómica del África Subsahariana,* Madrid, De la Catarata, 2006.

Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB), *Anuario Asia-Pacífico* del 2004 al 2009, en www.anuarioasiapacifico.es

Mahmood, Mamdani, *Ciudadano y súbdito. África contemporánea y el legado del colonialismo tardío*, México, Siglo XXI, 1998.

Ominami, Carlos, *El Tercer Mundo en la crisis,* Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1987.

Przeworski, Adam, *Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del este y América Latina*, Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1995.

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloDirección Regional para América Latina y el Caribe (PNUDDRALC), *La democracia de ciudadanía. Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina*, noviembre de 2009, en www.gobernabilidaddemocratica-pnud.org

Torre, Juan Carlos, *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

El escenario internacional

AA.VV., *Imperio, estados e instituciones. La política internacional en los comienzos del siglo XXI*, Buenos Aires, Altamira, 2004.

Anuario CIP, *Guerras en el sistema mundial*, Barcelona, CIPFUHEM-Icaria, 1999.

—, *Escenarios de conflicto. Irak y el desorden mundial*, Barcelona, CIP-FUHEM-Icaria, 2004.

Espósito, John, *Guerras profanas,* Barcelona, Paidós, 2003.

Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI), *Relaciones Internacionales,* revista académica cuatrimestral de publicación electrónica, nº 6: "Nuevas conflictividades en el mundo global", Universidad Autónoma de Madrid, España, 2007, en www.relacionesinternacionales.info.

Hobsbawm, Eric, *Guerra y paz en el siglo XXI*, Barcelona, Crítica, 2007.

Kepel, Gilles, *La yihad. Expansión y declive del islamismo,* Barcelona, Península, 2000.

—, *Fitna. Guerra en el corazón del Islam*, Barcelona, Paidós, 2004.

Mann, Michael, *El imperio incoherente*, Barcelona, Paidós, 2003.

Películas sugeridas

La novia siria, Eran Riklis, Francia-Israel, 2004.

El Paraíso ahora, Hany Abu-Assad, Francia-Alemania-HolandaIsrael, 2005.

Ruta 181, fragmentos de un viaje Palestina-Israel, Eyal Sivan y Michel Khleifi, Israel, 2003.

Pizza, birra, faso, Juan Bautista Stagnaro y Adrián Caetano, Argentina, 1998.

Persepolis, Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, Francia, 2007.

Epílogo

Anderson, Perry, “Fuerza y consentimiento”, en *New Left Review*, nº 17, noviembre-diciembre de 2002.

Fitoussi, Jean Paul y Rosanvallon, Pierre, *La nueva era de las desigualdades*, Buenos Aires, Manantial, 1997.

Harvey, David, *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007.

Held, David y McGrew, Anthony, *Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial*, Barcelona, Paidós, 2003.

Películas sugeridas

Mondovino, Jonathan Nossiter, Francia-Estados Unidos, 2005.